Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia



CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ CALDERÓN
(EDITOR)

Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia

Carlos Enrique Álvarez Calderón
(Editor)



CR. (RA) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
Carlos Enrique Álvarez Calderón
CR. (RA) Darío Ruiz Tinoco
Néstor Alfonso Rosanía Miño
CF. Juan Carlos Gómez Martínez
Daniela Patricia Sánchez Duque
CC. Jaime Andrés Zambrano Gómez
Gustavo Andrés Cañas Peña
CC. Javier Enrique Gómez Torres
Óscar Felipe Barrera Herrera
MY. Felipe Gomes Nunes
Pedro Aníbal Buitrago Rincón
MY. Ángel Antonio Riveros Cruz
Andrés Felipe Cardona Orozco
MY. Javier Ospina Rubiano
Alejandro Moreno Romero
MY. Carlos Andrés Camargo Ruiz
Carlos Andrés Rodríguez Beltrán
MY. Jaime Correa Jaramillo
Juan Carlos Bolívar Sandoval
MY Iván Eduardo Sánchez Lozano
Gabriel Andrés Jiménez Almeira
MY. José Antonio Mojica Amaya
Gabriela López Guahuña

2017
Libro Resultado de Investigación

© Escuela Superior de Guerra
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales
ESDEG-SIIA
Carrera 11 No. 102-50
Bogotá, D.C., Colombia
ISBN: 978-958-56528-3-5

© Carlos Enrique Álvarez Calderón
(Editor)
© CR. (RA) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
Carlos Enrique Álvarez Calderón
CR. (RA) Darío Ruiz Tinoco
Néstor Alfonso Rosanía Miño
CF. Juan Carlos Gómez Martínez
Daniela Patricia Sánchez Duque
CC. Jaime Andrés Zambrano Gómez
Gustavo Andrés Cañas Peña
CC. Javier Enrique Gómez Torres
Óscar Felipe Barrera Herrera
MY. Felipe Gómez Nunes
Pedro Aníbal Buitrago Rincón
MY. Ángel Antonio Riveros Cruz
Andrés Felipe Cardona Orozco
MY. Juan David Ospina Rubiano
Alejandro Moreno Romero
MY. Carlos Andrés Camargo Ruiz
Carlos Andrés Rodríguez Beltrán
MY. Jaime Correa Jaramillo
Juan Carlos Bolívar Sandoval
Gabriel Andrés Jiménez Almeira
MY. Iván Eduardo Sánchez Lozano
Gabriela López Guahuña
MY. José Antonio Mojica Amaya
(Autores)

Proceso de arbitraje:

1er. concepto
Evaluación:
24 de noviembre de 2017

2do. concepto
Evaluación:
08 de diciembre de 2017

Impreso en Colombia
Printed in Colombia.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, foto-químico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

El contenido de este libro corresponde exclusivamente al pensamiento de los autores y es de su absoluta responsabilidad. Las posturas y aseveraciones aquí presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representa la posición oficial ni institucional de la Escuela Superior de Guerra, de las Fuerzas Militares o del Estado Colombiano.

Tabla de Contenido

Prólogo – Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci 11

Presentación de la obra - Coronel (R) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza 19

Autores 21

Parte 1
Aproximaciones Teóricas y Conceptuales

Capítulo I
Seguridad y Defensa: Conceptos en Constante Transformación

Carlos Enrique Álvarez Calderón
Néstor Rosanía Miño
Daniela Sánchez Duque
Gabriel Andrés Jiménez Almeira 29

Capítulo II
Rupturas y Continuidades de la Seguridad y Defensa en Colombia:
De la Seguridad Nacional a la Seguridad Multidimensional

Néstor Rosanía Miño
Daniela Sánchez Duque
Gabriela López Guahuña 85

Capítulo III
Metamorphosis Bellum: ¿Mutando a Guerras de Quinta Generación?

Carlos Enrique Álvarez Calderón
Mayor José Fernando Santafé García
Mayor Óscar Javier Urbano Morales 145

Capítulo IV
Globalización Desviada: Plataforma de Convergencia Criminal

Carlos Enrique Álvarez Calderón
Capitán de Corbeta Jaime Andrés Zambrano 249

Parte 2
Escenarios y Desafíos Tradicionales de la seguridad y defensa en Colombia

Capítulo V
Ocupación de los Espacios Vacíos: Una Condición *Sine Qua Non* para la Seguridad Multidimensional en Colombia

Carlos Enrique Álvarez Calderón..... 307

Capítulo VI
Réspice Aqua Vitae: Hacia una Hidropolítica Nacional

Carlos Enrique Álvarez Calderón
Alejandro Moreno Romero
Capitán de Fragata Juan Carlos Gómez Martínez 387

Capítulo VII
Seguridad y Defensa de las Fronteras: Dos Casos de Estudio

Carlos Enrique Álvarez Calderón
Coronel (RA) Darío Ruiz Tinoco
CCESP. Javier Enrique Gómez Torres
Mayor Felipe Gomes Nunes 479

Parte 3
Nuevos Escenarios y Desafíos de la seguridad y defensa en Colombia

Capítulo VIII
Consolidación Multidimensional del Territorio, Hacia un Concepto de Seguridad para el Pos Acuerdo

Coronel (RA) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
Juan Carlos Bolívar Sandoval 555

Capítulo IX
Convergencia de la Seguridad en Colombia: Terrorismo y Delincuencia Organizada

Felipe Barrera Herrera
Mayor Ángel Riveros Cruz
Mayor Javier David Ospina Rubiano..... 591

Capítulo X
FARC y Al Qaeda: Los Elementos de Convergencia entre el Terrorismo y Narcotráfico

Andrés Felipe Cardona Orozco
Mayor Carlos Andrés Camargo
Mayor Jaime Correa Jaramillo..... 643

Capítulo XI
Del Terrorismo al Ciberterrorismo

Pedro Aníbal Buitrago Rincón,
Mayor Iván Sánchez Lozano
Mayor José Antonio Mojica Amaya..... 677

Capítulo XII
Seguridad ciudadana y Código de Policía de Colombia

Gustavo Cañas Peña
Carlos Andrés Rodríguez Beltrán..... 721

Bibliografía..... 751

Prólogo

Los últimos treinta años han sido un período histórico de dramáticos cambios en el escenario de la Seguridad y la Defensa en Colombia y en el mundo, aceleradas por cuenta del final de la Guerra Fría y el avance significativo del proceso de globalización. Y si bien dichos cambios han generado nuevas oportunidades, también han presentado nuevos desafíos, que en un contexto de mayor interdependencia política, económica y cultural entre las naciones, ha obligado a una redefinición del concepto de soberanía y al reconocimiento que la relación entre seguridad internacional y seguridad nacional de los Estados es cada vez más estrecha.

En consecuencia, ante nuevas oportunidades, desafíos y dinámicas propiciadas por la globalización, ha devenido la necesidad de una mayor amplitud en el concepto de la seguridad, que le permita ajustarse a las particularidades que presenta el siglo XXI, en el cual ya no se contemplan tan solo las amenazas tradicionales a los Estados, sino también aquellas nuevas amenazas que enfrentan los Estados, individuos, grupos sociales y otros actores.

En este orden de ideas, el libro "Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia", producto del esfuerzo en materia de investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", busca dar respuesta a varias de las preocupaciones e inquietudes de la comunidad académica nacional, así como a miembros de organizaciones del sector público y privado, de los retos que enfrentaría Colombia y el mundo en un escenario complejo y dinámico que entremezcla nuevas y tradicionales amenazas a la Seguridad y la Defensa.

Este producto de investigación, que me complace presentar ante ustedes, argumenta que el concepto de Seguridad Multidimensional puede ofrecer una útil perspectiva para evaluar las prioridades político-estratégicas para una mejor garantía de la provisión de Seguridad y Defensa para Colombia. Para tal propósito, en el libro se logra la combinación de la teoría y el análisis, lo que lo convierte en un insumo trascendental para la comunidad académica, tomadores de decisiones, miembros de las Fuerzas Militares, y en general, para todos aquellos interesados en comprender que la seguridad de las fronteras nacionales, la ocupación racional del territorio, el calentamiento global, la actividad criminal transnacional, la pobreza multidimensional, el terrorismo, las ciberamenazas, la seguridad ciudadana, entre otros, son escenarios y desafíos a considerar bajo el prisma de la Seguridad Multidimensional del presente y el futuro próximo.

La estructura del libro le permite al lector hacer un recorrido por diversos temas que se relacionan entre sí. Para lograr este propósito, la edición estuvo a cargo del doctor Carlos Enrique Álvarez Calderón, Docente Investigador y Coordinador de Investigaciones de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, el cual gracias a su amplia trayectoria y experiencia, logró del libro "Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia", un documento de fácil entendimiento con rigurosidad académica.

La obra está dividida en tres partes, y cuenta con un total de doce capítulos construidos por veinticuatro autores. La Primera Parte del libro, el cual consta de cuatro capítulos, establece unas bases conceptuales y teóricas necesarias para el estudio de la Seguridad y la Defensa.

En el Capítulo I, titulado "Seguridad y Defensa: Conceptos en Constante Transformación", los autores hacen un recorrido por los diferentes conceptos que

se tienen sobre Seguridad y Defensa, enfocándose en la dimensión filosófica y en la esencia de las mismas. En el capítulo se logra hacer un análisis interesante de la conceptualización clásica de la Seguridad a partir de las teorías más importantes en Relaciones Internacionales (Realismo Clásico, Neorrealismo, Idealismo y Liberalismo, Constructivismo, Interdependencia Compleja, Institucionalismo), lo que permite tener mayor aproximación a los conceptos de Seguridad y Defensa desde una perspectiva holística, las cuales permiten evidenciar el cambio y la evolución de dichos conceptos. Más adelante en el capítulo, el recorrido hecho por la evolución y la clasificación de las diferentes categorías de Seguridad (Seguridad Colectiva, Seguridad Nacional, Seguridad Hemisférica, Seguridad Regional, Seguridad Humana, Seguridad Multidimensional, Seguridad Integral, CiberSeguridad), le permite tener al lector un insumo suficiente sobre las diferentes conceptualizaciones de Seguridad.

En el Capítulo II, titulado "Rupturas y Continuidades de la Seguridad y Defensa en Colombia: De la Seguridad Nacional a la Seguridad Multidimensional", los autores buscan generar comprensión de las dinámicas de Seguridad y Defensa de los Estados, analizando los diferentes actores y fenómenos que influyen en la consolidación del enfoque de Seguridad. Con el fin de comprender las nociones de Seguridad y Defensa a lo largo de la historia reciente de Colombia, el capítulo estudia ochos periodos y/o fenómenos que trasformarían la concepción de la Seguridad y la Defensa en Colombia (La Constitución Política de 1886, La Hegemonía Conservadora, La República Liberal, El Gobierno de Rojas Pinilla, El Frente Nacional, Periodo de Contrainsurgencia, Constitución de 1991, Siglo XXI), evidenciando las continuidades y fracturas en las dinámicas de Seguridad y Defensa en el país.

En el Capítulo III, titulado "*Metamorphosis Bellum*: ¿Mutando A Guerras De Quinta Generación?", los autores hacen un importante y completo recorrido

por las teorías de la guerra, partiendo de las diferentes definiciones que existen sobre la misma y, las implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas de la guerra. Más adelante en el capítulo, son relacionadas las diferentes tipologías de guerra, desembocando en la clasificación de las Generaciones de la Guerra (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Generación). Conceptualmente, el análisis realizado en este capítulo sobre las Generaciones de la Guerra es quizás el más completo realizado por la academia colombiana hasta el momento, soportado en hechos históricos y el uso del análisis de ciertas variables que dan cuenta de la transformación de la guerra hasta el presente. En efecto, el análisis de la Guerra de Quinta Generación es uno de los aspectos más interesantes del capítulo, puesto que es escrito por uno de los académicos colombianos pioneros en el estudio de este tipo generacional de la guerra.

En el Capítulo IV, titulado "Globalización Desviada: Plataforma de Convergencia Criminal", se realizó un estudio sistemático de cómo la globalización o la interdependencia económica, cultural, legal, social, psicológica, tecnológica, y, por lo tanto, política, hizo del mundo un escenario interdependiente y complejo, que si bien ha traído prosperidad para los pueblos, también propició la configuración de nuevas dinámicas criminales como el fenómeno de convergencia entre terrorismo, insurgencia y delincuencia organizada transnacional, configurando una auténtica desviación del proceso globalizador.

A continuación , la Segunda Parte del libro, que consta de tres capítulos, aborda algunas de las amenazas tradicionales no resueltas, de naturaleza geopolítica, a la Seguridad y Defensa de Colombia.

El Capítulo V, titulado "Ocupación de Espacios Vacíos: Una Condición *Sine Qua Non* de la Seguridad Multidimensional en Colombia" se hace referencia a los grandes desafíos de Colombia en los próximos años, como

el evitar los fracasos que han experimentado, en otras partes del mundo, las actividades de consolidación de paz y reconstrucción de Estado. Los autores señalan que muchos de los fracasos en materia de procesos de paz, han estado ligados a la falta de comprensión y sensibilidad hacia las especificidades culturales, históricas y geográficas de las sociedades afectadas por la guerra. En consecuencia, los "espacios vacíos" en Colombia se podrían llegar a configurar como el principal problema geopolítico del Estado colombiano, generando todo tipo de afectaciones a la Seguridad Multidimensional del país.

En el Capítulo VI, titulado "*Respice Aqua Vitae*: Hacia una Hidropolítica Nacional", los autores realizan un llamado de atención sobre la importancia geoestratégica que revisten las redes fluviales y uso del agua dulce como activo estratégico del Estado. Uno de los elementos más interesantes del documento es la propuesta de avanzar hacia la hidropolítica nacional, teniendo como base un concepto nuevo, nunca antes tratado, y que se conoce por primera vez como "Réspice Aqua Vitae".

En el Capítulo VII, titulado "Seguridad y Defensa de las Fronteras: Dos Casos de Estudio", la premisa fundamental es que si bien las fronteras de un Estado podrían llegar a representar una ventaja aprovechable desde el punto de vista estratégico, pueden constituirse al mismo tiempo en una vulnerabilidad para la Seguridad Nacional y la propia soberanía de los Estados. El capítulo aborda el caso de las fronteras permeables e inseguras en Colombia, producto de la ausencia de una política de Estado sostenible, permanente y de alcance estratégico. Dos casos de estudio finalizan el análisis, uno de frontera marítima y otro terrestre.

En la tercera parte de la obra, que consta de cinco capítulos, se analizan algunas de las nuevas amenazas a la Seguridad y Defensa de Colombia.

En el Capítulo VIII, titulado "Consolidación Multidimensional del Territorio: Hacia un Concepto de Seguridad para el Posacuerdo", son analizadas las Políticas de Seguridad de Colombia de los períodos de Gobierno 2006-2010 "Política de Consolidación de la Seguridad Democrática", 2010-2014 "Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad", y 2014-2018 "Política de Defensa y Seguridad, Todos por un nuevo país"; buscando evidenciar la concepción estratégica de las políticas mencionadas desde el enfoque de la Seguridad Multidimensional, especialmente en el ámbito socio-político. Adicionalmente, este capítulo hace énfasis en el aspecto económico de la Seguridad Multidimensional, abordando la distinción de la pobreza multidimensional, una variable que sin lugar a dudas, ha perpetuado los factores de inestabilidad en Colombia.

El Capítulo IX, titulado "Convergencia de la Seguridad en Colombia: Terrorismo y Delincuencia Organizada", aborda el fenómeno de Convergencia en Colombia y la dificultad que se presenta al identificarla (en especial en aquellas aéreas remotas con escasa presencia del Estado). El énfasis del análisis se concentra en las alianzas económicas entre grupos terroristas y organizaciones criminales, que desde el punto de vista operacional, se denota como uno de los mayores desafíos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la actualidad. Entre lo destacable del documento es la serie de propuestas que se someten a discusión para intentar combatir los efectos negativos de los fenómenos mencionados, como el terrorismo y el crimen organizado.

El Capítulo X, titulado "FARC y Al Qaeda: Los Elementos de Convergencia Entre el Terrorismo y Narcotráfico", también realiza un análisis desde el fenómeno de Convergencia, mediante un ejercicio de comparación entre dos organizaciones, geográficamente lejanas pero con intereses convergentes, como las FARC y Al Qaeda. El capítulo demuestra que en ambos casos, la

conformación de redes es un elemento central que permite el funcionamiento y sostenimiento de las actividades criminales de dichas organizaciones.

El Capítulo XI, titulado "Del Terrorismo al Ciberterrorismo", se enfoca en el fenómeno del ciberterrorismo y pretende ofrecer una visión integral en cuanto a su conceptualización y el análisis de la política pública internacional y local respecto al tema, para luego continuar con la identificación de los aspectos generales que los identifican, determinando si son fines o medios de una y más amplia estrategia de actores del terrorismo internacional. Es interesante el análisis realizado por los autores, puesto que en la materia no son muchos los textos publicados en Colombia.

En el Capítulo XII, titulado "Seguridad Ciudadana y Código de Policía en Colombia", los autores realizaron un muy interesante estudio sobre como la evolución del concepto de Seguridad ha desembocado en un concepto de gran valía como lo es la Seguridad Ciudadana, enriquecido con una serie de elementos teóricos. Hacen principal énfasis en el denominado "síndrome de la ventana rota" y generan análisis de las implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas que son tenidas en cuenta en materia de Seguridad Ciudadana. En esta parte del libro hay un apartado especial para el Código de Policía de Colombia, analizando las fortalezas y debilidades del mismo en su aplicación y alcances.

En conclusión, la obra "Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia", reúne varios de los temas más importantes que en materia de Seguridad están siendo tratados en los diferentes tanques de pensamiento en el mundo, consolidando a la Escuela Superior de la Guerra, y en particular a la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, en un referente obligado de los estudios de Seguridad y Defensa en Colombia y la región.

Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci
Director de la Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"

Presentación de la Obra

La presente obra es resultado del proyecto de investigación "Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".

Es también producto del trabajo de investigación multidisciplinario de profesores, investigadores y alumnos, tanto militares como civiles, que han cursado los estudios de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Por lo tanto, es una obra que condensa una parte sustancial del pensamiento académico del programa de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, así como de otros programas de la Escuela Superior de Guerra y de la Red Especializada de Conocimiento en Seguridad y Defensa –RECSEDE-, por cuanto existen numerosas referencias bibliográficas contenidas en los capítulos del presente libro, que dan cuenta de los muy valiosos aportes de otros autores cercanos al campo disciplinar de los estudios en Seguridad y Defensa.

Quisiera agradecer el apoyo irrestricto del Director de la Escuela Superior de Guerra, el señor Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci y del Subdirector de la Escuela Superior de Guerra, el señor Brigadier General de Infantería de Marina Óscar Eduardo Hernández Durán, ya que sin sus colaboraciones este producto académico no hubiese sido posible. También dar las gracias al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa (CEESEDEN) de la Escuela Superior de Guerra, por su asesoría y dirección.

Asimismo, reconocer la labor de estructuración, dirección, recopilación y edición de la presente obra, llevada a cabo por el Doctor Carlos Enrique Álvarez Calderón, jefe de línea de investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales.

Por último, agradecer al señor Coronel David Barrero y al Doctor Mauricio Pryor por las correcciones y observaciones a la obra, así como a todos los autores de los capítulos por las infatigables horas de investigación y escritura de este libro.

Coronel (RA)Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
Director Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales
Escuela Superior de Guerra
Bogotá, 6 de diciembre de 2017

Autores

CR. (RA) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza

Coronel del Ejército de Colombia, Profesional en Ciencias Militares y Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales, Magíster en Seguridad y Defensa del Colegio Interamericano de Seguridad y Defensa. Profesor de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Escuela de Logística del Ejército y de la Universidad Militar Nueva Granada. Director de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Carlos Enrique Álvarez Calderón

Politólogo con Maestrías en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y Coaching Ontológico Empresarial en la Universidad San Sebastián de Santiago de Chile (Chile). Becario Center for Hemispheric Defense Studies "William Perry" en Washington. Profesor Investigador de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Colombiano, Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana y Escuela de Administración de Negocios. Coordinador de Investigaciones de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Editor de la Revista "Ensayos sobre Defensa y Seguridad" de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

CR. (RA) Darío Ruiz Tinoco

Coronel del Ejército de Colombia, Licenciado en Derecho Internacional y Diplomacia Universidad Jorge Tadeo Lozano, Profesor de la Academia Diplomática "Augusto Ramírez Ocampo" del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Santo Tomás.

Néstor Alfonso Rosanía Miño

Abogado, Especialista en Gerencia de la Defensa Nacional de la Universidad Militar Nueva Granada; Magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra y Magíster en Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Naval, Argentina; Director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.

CF. Juan Carlos Gómez Martínez

Capitán de Fragata de la Armada Nacional de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Daniela Patricia Sánchez Duque

Internacionalista Universidad del Rosario, Magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra, Profesora en Seguridad y Defensa en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

CC. Jaime Andrés Zambrano Gómez

Capitán de Corbeta de la Armada Nacional de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Gustavo Andrés Cañas Peña

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Becario Center for Hemispheric Defense Studies “William Perry” en Washington. Coordinador Académico y Administrativo de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

CC. Javier Enrique Gómez Torres

Capitán de Corbeta de la Armada Nacional de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Óscar Felipe Barrera Herrera

Politólogo de la Universidad del Rosario, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, Investigador de la Escuela Superior de Guerra, Coordinador de Proyección Institucional de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

MY. Felipe Gomes Nunes

Oficial del Ejército de la República Federativa de Brasil, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Pedro Aníbal Buitrago Rincón

Abogado de la Universidad Santo Tomas, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Investigador de la Escuela Superior de Guerra, Coordinador de Programas Complementarios de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

MY. Ángel Antonio Riveros Cruz

Mayor del Ejército de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Andrés Felipe Cardona Orozco

Politólogo de la Universidad Javeriana, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, asesor asuntos internacionales en la Jefatura de Inteligencia y C/I Comando General FF.MM., docente Escuela Superior de Guerra.

MY. Javier David Ospina Rubiano

Mayor del Ejército de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Alejandro Moreno Romero

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

MY. Carlos Andrés Camargo Ruiz

Mayor del Ejército de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Carlos Andrés Rodríguez Beltrán

Profesional en Relaciones internacionales y Estudios Políticos, joven investigador Escuela Superior de Guerra en la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales en el proyecto "Desafíos y nuevos escenarios de la seguridad multidimensional en el contexto nacional, regional y hemisférico del decenio 2015-2025", Joven Investigador de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada en el proyecto " Crisis en Libia: Factores de Riesgo en la Región del Sahel"

MY. Jaime Correa Jaramillo

Mayor del Ejército de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Juan Carlos Bolívar Sandoval

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Investigador del Centro de Memoria Histórica del Conflicto, candidato a Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales.

Gabriel Andrés Jiménez Almeira

Internacionalista de la Universidad del Rosario, Miembro del Observatorio de Investigación en Economía Política Internacional (EPI).

MY. Iván Eduardo Sánchez Lozano

Mayor del Ejército de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Gabriela López Guahuña

Estudiante de último semestre de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.

MY. José Antonio Mojica Amaya

Mayor del Ejército de Colombia, Especialista en Estado Mayor y Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.

Parte 1
Aproximaciones Teóricas y Conceptuales

Capítulo I
Seguridad y Defensa: Conceptos en Constante Transformación[1]

Carlos Enrique Álvarez Calderón
Néstor Rosanía Miño
Daniela Sánchez Duque
Gabriel Andrés Jiménez Almeira

1. Introducción

Preguntarse qué significa la seguridad plantearía cuestiones sobre la filosofía del conocimiento, especialmente las relativas a la epistemología (¿cómo sabemos las cosas?), la ontología (¿qué fenómenos creemos conforman el mundo social?), y el método (¿cómo debemos estudiar el mundo social?). Si se aceptara la noción de que la seguridad es un concepto esencialmente controvertido, entonces, por definición, tales debates no podrían resolverse definitivamente en abstracto; por lo tanto, la seguridad se asociaría más comúnmente con el alivio de las amenazas a los valores preciados; especialmente aquellos que, si no se controlan, amenazarían la supervivencia de un particular objeto referente en el futuro cercano. Es decir, aunque la seguridad y la supervivencia a menudo estarían relacionadas, no son necesariamente sinónimos; mientras que la supervivencia sería una condición existencial, la seguridad implicaría la capacidad de perseguir ambiciones políticas y sociales requeridas (Williams, 2008).

En términos generales, sería posible identificar dos filosofías de seguridad prevalentes, cada una de las cuales surgiría de puntos de partida

1. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

fundamentalmente diferentes. La primera filosofía consideraría que la seguridad es prácticamente sinónimo de acumulación de poder; desde esta perspectiva, la seguridad se entendería como una mercancía (es decir, para estar seguros, los actores deberían poseer ciertos bienes materiales, como propiedad, dinero, armas, ejércitos, etc.). En particular, se creería que el poder es el camino hacia la seguridad: cuantos más poder puedan acumular los actores (especialmente el poder militar), más seguros estarán.

La segunda filosofía desafía la idea de que la seguridad fluye del poder; por el contrario, consideraría que la seguridad se basa en la emancipación; es decir, una preocupación por la justicia y la provisión de los Derechos Humanos. Bajo esta perspectiva, la seguridad se entendería como una relación entre diferentes actores, en lugar de una mercancía; estas relaciones se podrían entender en términos negativos (es decir, la seguridad se trata de la ausencia de amenazas), o en términos positivos (es decir, que implican fenómenos que permiten y posibilitan cosas)[2].

Entendida en un sentido relacional, la seguridad implicaría ganar un grado de confianza sobre las relaciones que surgen al compartir ciertos compromisos, lo que a su vez proporciona un grado de seguridad y previsibilidad. Este punto de vista argumentaría que no son los productos básicos (como aviones de combate), los que son el factor crucial para comprender la ecuación de seguridad-inseguridad, sino la relación entre los actores involucrados. Por ejemplo, si bien los responsables de la toma de decisiones en Colombia considerarían que la posesión de cazas de superioridad aérea Sukhoi Su-30 por parte de Venezuela, sería una fuente de considerable inseguridad, es posible que no sentirían lo mismo respecto de la flotilla de aviones de combate que poseen Chile o Perú. En consecuencia, en la segunda filosofía, la seguridad "verdadera" o estable

2. Esta distinción se reflejaría comúnmente en las ideas de "libertad de" y "libertad para".

no provendría de la capacidad de ejercer poder sobre los demás; más bien, provendría de la cooperación para lograr la seguridad sin privar a otros de ella.

Por lo tanto, los conceptos de Seguridad y Defensa han evolucionado respondiendo a la existencia de nuevos paradigmas en el contexto mundial, los cuales han ampliado y profundizado[3] la definición de los términos, abarcando actores externos a los Estados y postulando temas diferentes a los tradicionales como referentes de la seguridad y defensa. La evolución de dichos conceptos, se podría ver reflejada dentro del estudio de las Relaciones Internacionales, que pretende ser un área de estudio que abarca diferentes disciplinas, escuelas de pensamiento, teorías, postulados y paradigmas para explicar las diferentes dinámicas y fenómenos que afectan el Sistema Internacional, de manera que, es pertinente analizar los conceptos desde la visión de las Relaciones Internacionales.

2. Los Conceptos de Seguridad y Defensa desde las Teorías de las Relaciones Internacionales

La concepción clásica de la Seguridad, ubicaría al Estado como el actor referente del Sistema Internacional, entendiéndolo como un actor racional y unitario cuyo objetivo radica en la seguridad nacional, y por tanto en la supervivencia del Estado ante amenazas de carácter militar (Barbé, 2007), siendo necesario por tanto, defender militarmente la soberanía, independencia y territorialidad del Estado frente a posibles agresores. De esta manera, "el Estado busca su propia seguridad incrementado su poder a través de su capacidad militar" (Font & Ortega, 2012, p.162). Desde esta perspectiva, las amenazas provendrían de otros Estados, y, por lo tanto, estos deberían garantizar su propia seguridad y supervivencia *(self help)*, en un mundo anárquico[4].

3. Se entiende por profundización, la inclusión de nuevos objetos referentes. Mientras que, por ampliación, la consideración de otros temas de carácter no militar como intervinientes en la agenda de seguridad.
4. La comprensión del Sistema Internacional como anárquico desde la perspectiva realista clásica supone: i) La ausencia de una comunidad internacional. ii) Una lógica internacional en la que se prioriza la supervivencia de los Estado. iii) Ausencia de proceso de reconciliación de intereses. iv) Inexistencia de armonía en los intereses de los Estados.

Así mismo, el paradigma del Estado de Naturaleza, mediante el cual se construiría el sistema internacional, parece haber estado subsidiado a la proclamación del poder y el interés nacional en pro de la seguridad nacional. "El Príncipe" de Maquiavelo ubicaba la seguridad del Estado en el centro de sus preocupaciones, haciendo de estas su piedra angular para la protección de sus ciudadanos (Machiavelli, 1995). A su vez, Thomas Hobbes al desarrollar una visión del Estado de naturaleza marcada por la guerra de "todos contra todos", consideraba indispensable la imposición del orden a través de una entidad superior, mostrando así, una visión de seguridad propiciada por una supremacía o hegemonía (Hobbes, 1985).

En efecto, Hobbes asistiría a un escenario político e histórico plagado de guerras civiles y religiosas en la Inglaterra del siglo XVII. Esta situación de inestabilidad política y económica no sólo suponía un estado de constante riesgo para la vida de los hombres, sino un profundo deterioro en la economía inglesa, colocando a la isla en una situación de debilidad frente a las demás potencias europeas; por lo tanto, Hobbes (1985) argumentaba que si se deseaba asegurar la vida, la libertad y la propiedad, era primordial establecer un punto final a las hostilidades entre los grupos internos, asegurando la paz en el Reino. Para Hobbes, la guerra tenía su origen en la naturaleza egoísta del ser humano, entendiendo por "egoísmo" la tendencia natural del hombre a la autoconservación. En este sentido, el egoísmo era una cuestión que excedía todo criterio racional o valorativo, por lo que lo único que podía hacerse era crear unas determinadas condiciones políticas que permitieran que la "maldad ingénita" del hombre pudiese al menos ser controlada y encauzada por el poder del Estado[5].

5. Por lo tanto, para Hobbes el poder es el elemento por medio del cual se pueden obtener aquellas condiciones que garanticen la prosecución de los bienes que el hombre considera buenos o deseables. Hobbes comprende (en un sentido muy semejante al de Maquiavelo), que el poder consiste en la reunión de fuerzas y considera que a mayor unidad, mayor poder. La unidad del poder se encuentra siempre amenazada en el estado de naturaleza ya que el hombre tiene derecho ilimitado a la autoconservación, colocando a los hombres en un estado permanente de guerra de todos contra todos.

Sin embargo, la comprensión de la Seguridad como un problema estatocéntrico empezaría a ser cuestionado en las décadas de los setentas y ochentas, con el surgimiento de enfoques críticos a esta concepción, los cuales señalaban la importancia de incluir a la sociedad en el centro del problema, al igual que otras fuentes de seguridad no derivadas de lo militar, como factores domésticos, económicos o medioambientales (Maghroori & Ramberg, 1982).

Otro factor determinante en el replanteamiento del concepto de seguridad sería el fenómeno de la globalización, el cual dejaría en evidencia la interdependencia entre los Estados, así como la existencia de otros actores en el Sistema Internacional. Es en este contexto en que la teoría de la interdependencia compleja de Keohane & Nye (2011), construiría un útil marco teórico para explicar las dinámicas mundiales, al destacar la existencia de múltiples canales que conectan las sociedades y la ausencia de una jerarquía frente a los temas interestatales, ‘‘lo que significa entre otras cosas que la seguridad militar no domina constantemente la agenda’’ (Keohane & Nye, 2011, p. 41).

Por otro lado, con el fin de la Guerra Fría, los cambios en el concepto de Seguridad se acentuarían, como consecuencia de la distinción político-militar, dando paso a una aproximación multidimensional. Esta orientación reconocería la existencia de amenazas transfronterizas provenientes desde distintos ámbitos (Battaglino, 2008), dejando en evidencia las limitaciones de las estrategias militares tradicionales.

Como resultado del debate de Seguridad, además del desarrollo paralelo de las teorías de las Relaciones Internacionales, surgieron diferentes enfoques, teniendo como resultado un nuevo direccionamiento en la comprensión de la seguridad. Ello conllevaría al replanteamiento del concepto de amenaza, entendiéndolo como una serie de situaciones que pueden llegar a vulnerar la calidad de vida de una determinada población, así como la afectación que pueden

tener los fenómenos internacionales sobre los gobiernos, las instituciones estatales y las entidades privadas dentro de un Estado (Ávila, 2010).

Ahora bien, con el objetivo de tener una mayor aproximación a los conceptos de seguridad y defensa desde una perspectiva holística, en la primera sección de este capítulo se realiza un análisis desde cinco teorías de las Relaciones Internacionales, las cuales permiten evidenciar el cambio y la evolución de dichos conceptos.

2.1 Realismo Clásico y Neorrealismo

La teoría realista de las Relaciones Internacionales, al priorizar el Estado como actor central del Sistema Internacional, centra su enfoque en la seguridad nacional. Para comprender dicha aproximación, es menester señalar que el realismo comprende el Sistema Internacional como un escenario en el que se da una proyección continua de amenazas reales y potenciales, lo cual conllevaría a que el uso de la fuerza militar sea la principal herramienta para sobrevivir en el sistema, siendo un mecanismo de los Estados para generar poder y lograr alcanzar sus intereses nacionales.

En este sentido, desde la óptica realista, la noción de poder estaría relacionada con la capacidad de un Estado de influir mediante el uso de la fuerza militar sobre el comportamiento de un tercero, con el fin de lograr los intereses deseados; "Así mismo, el realismo clásico considera a la diplomacia como el instrumento que complementa al uso de la fuerza en la influencia y autoridad, para obtener la conducta deseada de otros actores" (Griffiths, 2011, p.32).

El Realismo también contemplaría la inexistencia de un orden central dentro del Sistema Internacional, generando un escenario de anarquía en el cual los Estados se encontrarían en constante conflicto (Wolfers, 1962), dada la inexistencia de un contrato social a nivel interestatal que garantice la seguridad

del Sistema. Consecuente con lo anterior, los Estados deberían garantizar su propia Seguridad, dándose un juego de poderes que impone la voluntad del más fuerte, y rechazando la idea de comunidad. Contrario a ello, se presenta la imagen de ''una mesa en la que el espacio está abierto y en que las bolas [Estados] no se ajustan en sus movimientos a normas establecidas'' (Barbe, 2007, p.62).

De esta manera, los planteamientos realistas han servido para estudiar el comportamiento de los actores del Sistema Internacional en contextos históricos caracterizados por la competencia estratégica entre los Estados, como por ejemplo, la Guerra Fría. Además, se evidencia como las capacidades militares (uso de la fuerza) serían el factor material más importante del poder político de los Estados en el contexto mundial. No obstante, desde la perspectiva de Vásquez (1983), los postulados realistas como marco de referencia para la comprensión de las dinámicas internacionales empezarían a ser insuficientes para explicar el mundo de la distensión, debido a la priorización de los asuntos económicos y su vinculación en la agenda de seguridad. Así mismo, con el advenimiento de los ochentas, temas de carácter medioambiental impactaron igualmente en la agenda de seguridad de los Estados. De modo que, se dan procesos de securitización con respecto a temas que anteriormente no habían sido considerados como prioritarios para la Seguridad, impulsándolos a la agenda internacional.

Por su parte, el Neorrealismo o Realismo Estructural que emergió en 1979 según los postulados de Waltz (1979), plantearía que si bien los Estados son los principales actores del Sistema Internacional, era importante considerar otros actores que pudiesen influir en su comportamiento. Waltz (1979) manifestaría que los Estados se sitúan de manera diferente en la jerarquía internacional de los Estados, dependiendo de la capacidad de desempeñarse en múltiples roles que superan el ámbito militar, por lo que su rol en el contexto mundial dependería

de su capacidad para atender múltiples escenarios en los que las amenazas no provienen necesariamente de factores militares.

Si bien el realismo clásico definía el concepto de la seguridad en términos externos[6], la aplicación de esta definición de seguridad al análisis de las situaciones del Tercer Mundo generaría problemas conceptuales e intelectuales, ya que las tres características principales del concepto de la seguridad del Estado desarrollados en la literatura occidental (es decir, su orientación externa, su fuerte vínculo con la seguridad sistémica y su relación con la seguridad de las alianzas de los dos principales bloques durante la era de la Guerra Fría), habían sido tan diluidas que el poder explicativo del término se debilitaba cuando se aplicaba a los contextos del Tercer Mundo.

En consecuencia, Ayoob (1995) propondría una definición de seguridad de carácter estatocéntrica, haciendo hincapié en la connotación eminentemente política del término y en la empresa en la que los países del Tercer Mundo[7] se habían comprometido desde el periodo de descolonización: la construcción del Estado. Como lo señalaría Ayoob (1995), este énfasis en la primacía de lo político en la definición de seguridad no significaba que la esfera política pudiese ser totalmente aislada de los otros campos de la actividad humana o social, cuando se tratara de lidiar con los problemas de seguridad; a pesar de que mantendría su primacía en la definición de la seguridad, la esfera política debía basarse en estas otras áreas de la actividad humana.

6. El concepto de Seguridad Nacional está tradicionalmente relacionado con la situación en la que la existencia de la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Estado están bajo ataque externo por parte de otro Estado. Esto implica una agresión física al territorio, la población y las propiedades del Estado. El concepto de Defensa Nacional, por su parte, es la política de gobierno que abarca una serie de medidas e instrumentos para garantizar la seguridad nacional.
7. Ayoob (1995) afirma que los Estados pertenecientes al Tercer Mundo reúnen unas características básicas: la más importante es la falta de cohesión interna, tanto en términos de disparidades económicas y sociales, así como profundas fisuras étnicas y regionales; la falta de legitimidad incondicional de fronteras e instituciones estatales, y de elites gubernamentales; susceptibilidad a conflictos estatales internos y externos; desarrollo económico y social distorsionado y dependiente; marginalización, especialmente con relación a la dominante seguridad y preocupaciones económicas internacionales; y fácil permeabilidad a los actores externos, a los Estados más desarrollados, las instituciones internacionales o las corporaciones transnacionales.

La influencia de los otros ámbitos sobre los asuntos que afectan a la seguridad debería ser filtrada a través de la esfera política, y debería estar directamente relacionado con ese ámbito. En otras palabras, cuando los desarrollos en los otros ámbitos (que van desde aspectos económicos a los aspectos ecológicos), amenazaran con tener consecuencias políticas inmediatas o tuviesen la capacidad de amenazar las fronteras estatales, las instituciones políticas deberían tomar en consideración estas otras variables como parte del cálculo de la seguridad del Estado.

El concepto de seguridad propuesto por Ayoob (1995) sería utilizado de manera restrictiva a la seguridad del propio Estado (en términos de su territorio y sus instituciones), y a la seguridad de aquellos que representan territorial e institucionalmente al Estado. Es decir, la seguridad e inseguridad serían definidas con relación a las vulnerabilidades internas y externas, que amenacen o tengan el potencial de derribar o debilitar las estructuras estatales, tanto territoriales como institucionales, así como sus regímenes gubernamentales. No obstante, para que la definición del concepto de seguridad tuviese un adecuado poder explicativo en el contexto del Tercer Mundo, debería cumplir con dos criterios. Primero, debía ir más allá de la definición tradicional de la seguridad y superar la orientación externa (el origen o causa de la inseguridad), así como el sesgo militar; Segundo, debía permanecer firmemente basado en el ámbito político, pero sensitivo a variables de otros ámbitos de la actividad societaria que pudieran tener impacto sobre el ámbito político.

Lo anterior se debe a que, como lo afirma Cepeda (2013), la política mundial y las dinámicas del mercado se configuran a partir de los intereses de los diferentes actores para garantizar su supervivencia en el Sistema Internacional, entendiendo entonces que la Seguridad en gran medida subordina las diferentes dinámicas políticas y económicas, así como los fenómenos sociales y

medioambientales del escenario mundial. Es decir, que el Neorrealismo, como lo afirma Cancelado (2010), tiene sus comienzos a partir de:

> Unas concepciones menos pesimistas de las relaciones internacionales y le atribuyen una bondad cronológica y antropológica del ser humano a los actores internacionales; sin embargo, el elemento de la fuerza se sigue manteniendo como un elemento de disuasión dentro de las Relaciones Internacionales. Los Estados van a la guerra por tener una deficiente organización social, y es por esta precariedad social que el Sistema Internacional es denominado anárquico (p.6).

Esto conduciría a toda la corriente Neorrealista a sostener la perspectiva de la seguridad en términos de poder y capacidad disuasiva, desde el enfoque de la seguridad nacional, entendiendo que "la guerra no es algo que dependa de una circunstancia específica, sino que es propia de la lucha por el poder que caracteriza a las Relaciones Internacionales" (Orozco, 2016, p. 344). Así mismo, según el Neorrealismo, la anarquía internacional conlleva a generar una incertidumbre que enmarca "el incremento de los aparatos de defensa y a la exacerbación del discurso de securitización por parte de los Estados cuando se ven amenazados" (Cancelado, 2010, p.7). A diferencia del Realismo, el Neorrealismo se caracterizaría no por la búsqueda del poder que motiva la conducta del Estado en el escenario internacional, sino por el interés de maximizar su seguridad estatal.

En consecuencia, se deduciría que para estas dos escuelas el objeto primordial de la seguridad tendría que ver principalmente con la integridad territorial y soberanía estatal, siendo elementos determinantes para su subsistencia; también se basaría en la capacidad de disponer de medios indispensables, así como de recursos que permitan ejercer soberanía, "pues con ello se logrará mantener la

integridad y librar de las amenazas a aquellos intereses prioritarios del Estado" (Orozco, 2005, p.166).

Finalmente, en contraposición de los postulados del Realismo y el Neorrealismo, existen otras escuelas que buscarían darle explicación a las dinámicas y fenómenos que se presentan en el Sistema Internacional. De modo que, a continuación, se estudian otros paradigmas y debates enmarcados en la comprensión de la evolución que han tenido los conceptos de Seguridad y Defensa.

2.2 Idealismo y Liberalismo

La escuela de pensamiento Idealista se fundamentaría en el deseo de prevenir todo conflicto armado en el Sistema Internacional. El período de mayor esplendor de esta corriente se expresaría a inicios del siglo XX, y su postulado principal se basaría en la posibilidad de construir un orden internacional de paz y estabilidad que previniese e impidiese el surgimiento de conflictos de diversa índole entres los actores del sistema.

Por ende, la teoría idealista entendería la paz, no como una condición natural, sino como un estadio que debía ser construido de manera mancomunada (Griffiths, 2011, p.44). Según Wilson (1917), convenía estimar la seguridad como una condición que reflejaba la ausencia de conflictos violentos; dicha seguridad debía estar regulada por una organización internacional (Liga de Naciones), y no dejada en manos de los acuerdos diplomáticos establecidos en función de los equilibrios de poder. Es de considerar que la teoría idealista (incluyendo una gran parte del "movimiento" sobre la investigación de la paz), planteaba que el individuo es la base y la prioridad de cualquier análisis de seguridad, asumiendo por lo tanto que el concepto incluía la preservación, bienestar y desarrollo de los ciudadanos, siendo el Estado un medio para ello y no un fin per se (Møller, 1996).

De modo que, la escuela idealista buscaría acabar con las causas de la guerra, mediante un orden internacional justo y solidario que imposibilitara las acciones armadas o de violencia contra otros Estados con la construcción de mecanismos que entrelazaran a los Estados, para que de esta manera se pudiera consolidar un sistema mediador y solucionador de conflictos, el cual sustituiría el orden internacional de Poder y uso de la fuerza (Orozco, 2005). En consonancia, Kegley & Wittkopf (2002) plantean la importancia de la organización adecuada de la "sociedad internacional", como herramienta para eliminar la anarquía, siendo esta última, una condición facilitadora para los conflictos y por tanto para la guerra. Adicionalmente, los idealistas propenden por la adopción de un Sistema Internacional que se base en la seguridad colectiva, más que en la política del balance de poder. En este contexto, estrategias como "la reducción del poderío militar de los Estados al más bajo nivel posible, y el establecimiento de una capacidad militar conjunta por parte de la comunidad internacional, garantizaría la seguridad contra la agresión armada de cualquiera de sus miembros" (Tomassini, 1988, p.65).

Los idealistas compartían una visión del mundo basada en ciertos juicios: Primero, que los individuos son "buenos" por naturaleza, y su interés en el bienestar colectivo estimularía el desarrollo económico y social a través de la cooperación posible y las ayudas institucionales y personales; Segundo, que la naturaleza anárquica del sistema internacional no es inmutable ni permanente, y podría llegar a ser modificada o extinguida con el establecimiento de las organizaciones internacionales y el derecho internacional; Tercero, que los Estados democráticos no buscarían la expansión militar y territorial; Cuarto, que la guerra podría llegar a ser evitada, siempre y cuando se eliminasen aquellas instituciones que la promuevan, en favor de aquellas que adelanten la paz.

Por ende, es posible afirmar que el liberalismo es una corriente de análisis que centra su estudio en la cooperación entre Estados como una interrelación de

dependencia, la cual, mediante la integración y cooperación interestatal, busca potencializar el progreso y desarrollo de los Estados desde un nuevo enfoque de las Relaciones Internacionales. De manera que, el liberalismo resaltaría el ideal de un progreso general de los Estados, basando la explicación de los fenómenos que se dan en las Relaciones Internacionales, a partir de las variaciones en las preferencias de los Estados y no del interés nacional, ni la distribución de capacidades materiales que son dadas a partir del lugar que ocupa cada Estado en el Sistema Internacional (Pauselli, 2013).

Cabe resaltar que para los liberales, los Estados democráticos difícilmente se involucrarían en un conflicto bélico; en consecuencia, la promoción de Estados democráticos estimularía la creación y sustentaría la continuación de organizaciones y leyes internacionales, lo que por su parte, facilitaría la expansión de la democracia en el ámbito internacional, resultando así un conveniente círculo virtuoso. El liberalismo económico crearía lazos de amistad y entendimiento entre pueblos y países, a través de la cooperación y el comercio internacional, contribuyendo así a la reducción del poder bélico, y llevando el mismo hasta los límites de la autodefensa; el beneficio mutuo promovería la cooperación entre las partes, especialmente cuando los Estados y los Gobiernos pudiesen obtener ganancias políticas o económicas simultáneamente a través de más de un agente.

A partir de lo anterior, se infiere que la teoría liberal buscaría la creación de un contexto de seguridad y paz, en el cual la cooperación y la democracia son herramientas determinantes para dicho objetivo, por lo que el desarrollo es una característica de la política exterior de los Estados liberales y democráticos que buscan generar cooperación y democracia en el Sistema Internacional, en orden de crear un mundo más seguro y pacífico (Pauselli, 2013). De igual manera, el liberalismo se basaría en un pacto entre los Estados del Sistema Internacional, buscando a partir de dicho contrato anular y disuadir la posibilidad de la

emergencia de conflictos violentos interestatales; en síntesis, el liberalismo concebiría como elemento clave la idea de un orden basado en la cooperación y en la construcción de un Sistema Internacional pacífico, enfatizando la importancia del derecho internacional y de las organizaciones internacionales, así como los aspectos morales (Derechos Humanos), en su esperanza de maximizar la cooperación entre los diversos Estados.

2.3 Constructivismo

El constructivismo como teoría de Relaciones Internacionales, tiene como centro de análisis a los actores y sus ideas, considerando que el rol de estos es decisivo en la construcción del Sistema Internacional. Según Mercer (1995), el análisis de la identidad de cada actor (como elemento del sistema), es favorable para la construcción de un mecanismo de seguridad colectiva que garantice los intereses de los diferentes actores del Sistema Internacional. En efecto, de acuerdo a Wendt (1994), "la seguridad de cada Estado dependerá de ahondar los lazos de identidad que permitan una mayor cooperación" (p.391).

El Constructivismo se ha concentrado en la influencia que las ideas y normas poseen en el comportamiento de los Estados y del sistema internacional. Por "ideas", los constructivistas se refieren a los objetivos, amenazas, temores, identidades, y otros elementos de la realidad percibida que influencian a los Estados y a los actores no estatales dentro del sistema internacional. Asimismo, las identidades estatales determinan quién es cada Estado y quiénes son los otros, además de afectar los intereses de los mismos. El constructivismo propone la identidad colectiva en las relaciones entre Estados, en la cual el interés propio y el interés colectivo son efectos de un proceso de identificación con el otro; también considera que las normas sociales modelan y hacen variar la política exterior a lo largo del tiempo de modo más efectivo que la seguridad. En síntesis, los temas de estudio del constructivismo son las estructuras sociales, las identidades y los intereses de los actores.

En este contexto, el interés nacional sería la expresión de identidad de la sociedad, la cual genera las relaciones dentro las unidades del sistema. De esta manera, Orozco (2005) afirma que el Constructivismo entiende la dinámica del Sistema Internacional, como el resultado del comportamiento de los actores, es decir, la identidad que define sus intereses y su posición en el sistema, así como la interacción de identidades con otros actores del sistema.

Por lo anterior, esta teoría asumiría que las identidades de los Estados son variables, dependiendo del contexto histórico, cultural, político, económico y social; es así como se empezaría a entender el Sistema Internacional no como una realidad inmutable, sino dinámica, producto del accionar de cada actor y un escenario en constante transformación, donde sus miembros interactúan, crean y definen posiciones que muestran sus diferentes objetivos. En este orden de ideas, para el Constructivismo la seguridad dependería del esfuerzo que tengan los Estados para crear lazos de identidad, los cuales facilitan una mayor cooperación institucional, eficaz en el momento de solucionar los conflictos. Además, las relaciones de identidad conllevarían a que se generen lazos inquebrantables, aptos para mecanismos de Seguridad que determinan el papel y la posición de cada actor en el sistema.

En consecuencia, el Constructivismo asume cuestiones que no se explican desde las concepciones clásicas de la seguridad, llamando la atención sobre aquellos otros sectores que no son objeto de la aproximación tradicional a la seguridad, y que sin embargo, se ven amenazados por distintos fenómenos que ponen en peligro su subsistencia en el Sistema Internacional. En este sentido, esta teoría enfocaría el análisis hacia la construcción social de las identidades, más que en la fijación del interés nacional por parte de los Estados. Ello representa una evolución, pues, desde el punto de vista sociológico, la seguridad es concebida como una cuestión construida por las identidades sociales y la

formación de prácticas narrativas sobre percepción de amenazas, en vez de pensarse desde el interés nacional asentado en la estructura del aparato estatal y del poder político.

Por ende, el Constructivismo ha ofrecido su propia forma de ver el escenario mundial desde una perspectiva innovadora. En primer lugar, esta teoría plantea un esquema que explica el proceso de constitución de identidades, así como la construcción de lazos de identidades como mecanismos de seguridad. En segundo lugar, esta corriente asume cuestiones que no son explicadas desde las concepciones clásicas de la seguridad, llamando así la atención sobre aspectos que no han sido considerados, pero que tienen implicaciones en cuanto a la Seguridad refiere. Las amenazas entonces surgen de la percepción de los individuos, dejando de ser estáticas y afectando ámbitos que trasgreden el aparato estatal (Orozco, 2016).

En consecuencia, el Constructivismo generaría una visión más amplia de la seguridad, la cual se centra en la identidad de los actores y sus intereses, para crear comunidades de seguridad, que posibilitan acciones y reacciones conjuntas en pro de sus intereses nacionales; en este sentido, la teoría permite ampliar el análisis hacia nuevos ámbitos que se ven amenazados y que son objeto central de la seguridad. En concordancia con ello, ‘‘el sistema internacional es el resultado de proceso intersubjetivo’’ (Barbé, 2006, p.92), cuyas normas son consecuencia de un acuerdo social entre los actores. En el enfoque constructivista, los discursos sobre el tipo de amenazas a contrarrestar son constitutivos del objeto que debería ser asegurado, basado en las identidades de los Estados, las sociedades y los individuos, en donde los actores constituyen una identidad de la Seguridad a partir de sus prácticas adquiridas. Así mismo, su percepción de las diferentes amenazas siempre estaría sujeta a la evolución, dependiendo del entorno y las nuevas prácticas, configurando así nuevas unidades de seguridad.

Finalmente, es posible afirmar según Medina (2014), que en la escuela constructivista la seguridad tiene como columna vertebral a la identidad de los actores del Sistema Internacional, teniendo en cuenta la existencia de herramientas como las armas, los recursos económicos, el territorio, los cuales empiezan a tomar un sentido dentro de las relaciones sociales y su significado intersubjetivo. Por lo tanto, es una corriente de pensamiento que concibe la seguridad desde el estudio de otros elementos, diferentes a los analizados en las anteriores escuelas de pensamiento en Relaciones Internacionales.

2.4 Interdependencia Compleja

Keohane & Nye (2011) desarrollarían a finales del siglo XX, la teoría de la Interdependencia Compleja, como respuesta a las dinámicas de la época y ante la idea de explicarlas desde una nueva perspectiva. Los autores definen la interdependencia en términos de la interacción entre los actores, la cual tendría efectos recíprocos en las partes. Para comprender desde esta corriente el concepto de Poder, es preciso referir los conceptos de sensibilidad y vulnerabilidad, entendiendo por el primero el grado de afectación de los actores ante un cambio y/o amenaza, mientras que la vulnerabilidad guardaría relación con la capacidad de un actor para soportar los costos impuestos de los acontecimientos externos (Vieira, 2008). En este contexto, desde la Interdependencia Compleja el poder de un actor radicaría en su capacidad de resiliencia y acción en situaciones de vulnerabilidad y sensibilidad.

Desde una perspectiva macro, tal como lo afirma Ayala (2014), los gobiernos subnacionales deberían ser considerados al analizar las dinámicas del Sistema Internacional, por tres razones: En primer lugar, se afirma que estos no serían ajenos a las dinámicas internacionales, siendo, por tanto, nuevos actores del Sistema; un segundo argumento versa sobre la importancia de entender el accionar de los gobiernos subnacionales y el desarrollo de su cooperación como un complemento de la política exterior nacional; por otro lado, se debería

comprender que los gobiernos subnacionales poseen un rol en la integración regional, lo cual, repercute en la existencia de una cooperación descentralizada del gobierno central.

Con base en lo anterior, Keohane & Nye (2011) sostienen que la interdependencia compleja ostenta tres características principales: Primero, los múltiples canales que entrelazan a las sociedades, que son relaciones interestatales y transnacionales, considerando que se toman del supuesto que los Estados son las únicas unidades del Sistema Internacional; Segundo, la agenda de las Relaciones Internacionales, que incluye diversos aspectos para analizar, por lo que se considera que la seguridad militar no sería exclusiva en la agenda internacional ya que se involucran fenómenos económicos, sociales y medioambientales; Tercero, se entiende que la fuerza militar no se debería emplear contra otros Estados, debido a que se tiene una Interdependencia Compleja en la que la afectación de los conflictos tiene costos recíprocos para ambas partes; sin embargo, en la interdependencia regional los recursos militares garantizan mayor poder en las existentes alianzas regionales (Keohane & Nye, 2011).

Lo anterior propende por un Sistema Internacional en donde existiría una armonía, la cual no sería necesariamente resultado de procesos de cooperación, sino de la existencia de intereses interconectados y comunes a diferentes actores. Además, la cooperación tendría que ver con políticas coordinadas para cumplir los objetivos comunes, mientras que los escenarios de conflicto no serían exclusivamente militares (Ayala, 2014). Así pues, el Sistema Internacional es más complejo, las amenazas provendrían de múltiples esferas, las cuales impactan en la Seguridad y configuran una nueva noción del concepto. La Interdependencia Compleja no ha rechazado de plano el paradigma realista, pero ha buscado refinarlo y ampliarlo, estableciendo como premisa que las relaciones entre los gobiernos nacionales son tan solo un hilo de la gran red que

constituyen las interacciones humanas. Por lo tanto, percibe un conjunto más complejo de relaciones no solo entre gobiernos nacionales, sino también entre actores no estatales involucrados en aquellos asuntos de la guerra y de la paz, y en temas tales como el bienestar económico social.

2.5 Institucionalismo

La teoría Liberal-Institucionalista tuvo su primera aparición en la década de 1980, aceptando el supuesto realista de un Sistema Internacional anárquico, pero rechazando algunas cuestiones de fondo de esta corriente. Por lo tanto, esta teoría destacaría la cooperación, la cual se sostendría a través de mecanismos iterativos en los que la amenaza de replicación junto con la facilitación de flujos de información y mecanismos de monitoreo, detendrían los peligros; las instituciones serían puntos focales para la cooperación, proveerían tareas de monitoreo e información, generando ganancias distribucionales (Vargas, 2008).

Esta teoría prioriza la distinción entre dos tipos de poder, siendo estos el hard power o poder duro, y el soft power o poder blando. El reconocimiento de dos tipos de poder, supone que este ya no esté ligado o provenga de una sola fuente, es decir de la fuerza militar. A diferencia del enfoque realista, donde la seguridad se relaciona directamente con el empleo de la fuerza militar, para los liberales institucionalistas la seguridad es un concepto que debe ser analizado de manera más amplia, teniendo en cuenta tanto los aspectos militares como los no militares. Esto, "ha significado el auge de los estudios de seguridad y su distanciamiento de los estudios estratégicos al modificarse el objeto de estudio" (Griffiths, 2011, p.47). Por su parte, el institucionalismo neoliberal buscaría explicar la formación de instituciones como resultado de la interacción entre las unidades dentro del Sistema Internacional, por lo que se pretende afirmar que las relaciones de cooperación entre Estados, aún en un escenario de anarquía, son viables y que las instituciones configuran una herramienta en pro de la reciprocidad, la seguridad compartida, y la cooperación (Orozco, 2005).

Para una comprensión más profunda de la teoría del neoliberalismo institucional, se hace necesario conocer la tesis central de esta escuela de pensamiento; así pues, Keohane & Nye (2011) sostienen que las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercerían un efecto significativo en el comportamiento de los gobiernos, lo cual se traduce en una mayor capacidad de cooperación y en la reciprocidad de acciones de los agentes del sistema. Con lo anterior, se deduce que las relaciones entre los Estados, ya sean cooperativas o no, son entendibles solo a partir de la contextualización de las instituciones, pues son precisamente estas las que ayudarían a determinar la racionalidad y la envergadura de la actuación estatal. En congruencia, sería posible entender la cooperación y la discordia en el ámbito que respecta a las instituciones, las cuales definen el sentido y la importancia de la acción del Estado. En consecuencia, el neoliberalismo considera que la seguridad en realidad es la consecuencia de las relaciones de cooperación entre las instituciones, las cuales generan una serie de normas de comportamiento que direccionan su accionar dentro del Sistema Internacional.

Para el desarrollo de la anterior premisa, es necesario comprender conceptos como el de los regímenes internacionales, siendo estos un "conjunto explícito o implícito de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión, alrededor de los cuales convergen las expectativas de los actores respecto a un área determinada de las Relaciones Internacionales" (Krasner, 1993, p.186). Según Jervis (1999) "los regímenes internacionales no sólo implican normas que facilitan la cooperación y reciprocidad, sino también implican una forma de cooperación que va más allá del interés mutuo" (p.45); también podrían ser mecanismos en los cuales los Estados garanticen su supervivencia dentro del Sistema Internacional. Los regímenes internacionales sólo podrían entrar en funcionalidad cuando se sustentan en un poder real, ya sea instaurado por instituciones internacionales legitimadas por la Sociedad Internacional o mediante iniciativas implementadas por las grandes potencias del Sistema.

Así pues, cobra especial valor que en este punto la confianza entre los actores del Sistema Internacional está enmarcada en acuerdos y tratados internacionales, a través de intereses comunes que buscan generar relaciones estables y pacíficas entre los mismos; en este aspecto la seguridad posee un rol fundamental, en la medida que debe comprender las diferentes dinámicas del sistema y por lo tanto seguir unas pautas comunes para el mantenimiento de un comportamiento pacífico entre los actores. Es precisamente, de esta manera que:

> Los regímenes internacionales impulsarían procesos de integración, los cuales, a través de la cooperación tecnológica, económica y de otros ámbitos, generarían mecanismos de difusión en las altas esferas de la política, repercutiendo, directamente, en el sentido de unidad y de seguridad de los Estados; con esto se crea una lógica de difusión o propagación sobre la percepción de la seguridad en los miembros del sistema (Orozco, 2016, p.350).

La principal función de los regímenes se basaría en facilitar la formulación y desarrollo de acuerdos sobre temas de interés y gran importancia; a partir de esto, las expectativas de los actores serían conscientes y buscarían un beneficio mutuo, el cual sería imposible trabajar de manera individual, por lo que se propende siempre por la acción conjunta para obtener resultados. Se debe destacar que el rol de la seguridad se constituiría como un elemento central, especialmente en lo que respecta a los aspectos de integración, específicamente los económicos, los cuales, a partir de sus parámetros de confianza, imposibilitaría una acción armada entre Estados inmersos en esos aspectos de integración económica (Orozco, 2016).

Según este paradigma, el poder se relacionaría con elementos materiales, como las capacidades económicas, la población, la proyección estatal, la estabilidad política, así como la importancia de las Fuerzas Militares; "en

síntesis, el poder más que estar basado en el uso o la amenaza del uso de la fuerza, se basa en la capacidad de generar prestigio y atracción a las políticas de un Estado" (Griffiths, 2011, p. 49-50), siendo entonces los parámetros de confianza desde cualquier aspecto de interés de cooperación, los que impedirían este tipo de amenazas de agresión entre Estados.

3. Categorías o Clasificaciones de la Seguridad

Como se mencionó anteriormente, la conceptualización clásica de la seguridad estaría basada en el concepto de seguridad nacional y las amenazas tradicionales, las cuales tenían como objetivo la prevención o rechazo de las amenazas militares provenientes de otros Estados y, por tanto, la defensa militar de la soberanía, la independencia y la territorialidad del Estado frente a posibles adversarios estatales. En consecuencia, el Estado garantizaría su propia seguridad incrementando su poder a través de las capacidades militares. Sin embargo, eventualmente surgirían enfoques críticos a dicha concepción de la seguridad y la defensa, ya que esta tan solo se refería a la seguridad estatal, al tiempo que planteaba amenazas militares desde el exterior, sin considerar otras fuentes de inseguridad, tanto globales como internas, económicas o medioambientales.

Una de estas visiones alternativas surgiría con el avance del proceso globalizador, que acentuaba la idea de que el Estado ya no era el único actor internacional, a causa de la existencia de nuevos riesgos y amenazas (económicas, medioambientales, etc.), las cuales revestían una naturaleza transfronteriza, por lo que sus soluciones ya no podían derivarse del esfuerzo individual de un Estado, sino de la cooperación internacional entre actores estatales y no estatales. Una segunda aproximación se enfocaría en cuestionar el concepto de desarrollo o subdesarrollo, enfatizando las causas estructurales del mismo. De acuerdo a Font & Ortega (2012), "esta visión pretendía romper

con la idea de que la seguridad de las personas era equivalente a la seguridad del país, es decir, si el Estado está seguro, las personas están seguras. Pero entonces, la seguridad nacional no era otra cosa que la seguridad de las élites que ostentaban el poder" (p.162). A partir de estas nuevas orientaciones al concepto de seguridad, emergería una perspectiva multidimensional en la que se asume que además de las amenazas militares, existen otras amenazas transfronterizas (económicas, medioambientales, poblaciones, culturales, etc.), que no pueden atenderse tan solo desde un enfoque militar, sino también diplomático, civil, policial, entre otras.

3.1 Seguridad Colectiva

Se podría llegar a considerar que el concepto tradicional de la seguridad nace de la Carta del Atlántico de 1941, la cual serviría como base a la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas. En el punto 8 de dicha Carta se establecía que:

> Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas terrestres, navales o aéreas continúan siendo empleadas por las naciones que la amenazan, o son susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran que, en espera de poder establecer un sistema de seguridad general, amplio y permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente ayudarán y fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los armamentos que abruma a los pueblos pacíficos (Carta del Atlántico, 1941).

Posteriormente, la Carta de las Naciones Unidas firmada al término de la Conferencia de San Francisco en 1945, referiría insistentemente el concepto de seguridad, incluso desde el preámbulo, en el que se expresaba "la determinación de unir nuestras fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacional" (Carta de las Naciones Unidas, 1945). En consecuencia, la idea de la seguridad se

materializaría con el establecimiento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya responsabilidad fundamental sería, hasta la actualidad, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. En este orden de ideas, la ONU (2012) define la seguridad como "la condición en la que considera que los Estados o los individuos están expuestos en pequeña medida al peligro de un ataque militar, a penurias económicas, presión política e injusticia social" (p.12). Según Obrador (1992):

> Las posibilidades de reunir varias estructuras de seguridad que satisfagan las necesidades de cobertura percibidas por una voluntad política colectiva, determinan la agrupación de los recursos de varios países que se hallan en el mismo caso, para establecer de común acuerdo una estructura que cumpla las necesidades de una seguridad común (p.32).

Esto determina el comienzo del proceso de la seguridad colectiva. Por ejemplo, el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 1949, manifestaba en su preámbulo la resolución de todos los gobiernos de unir sus esfuerzos en la defensa colectiva y en la conservación de la paz y la seguridad; el Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) de defensa colectiva de 1954, reflejaba en su preámbulo el compromiso de los países miembros de coordinar sus esfuerzos en la defensa colectiva para preservar la paz y la seguridad internacional; el Pacto de Varsovia de 1955 se refería también en su articulado a la paz y a la seguridad internacional, así como a la creación de un sistema de defensa colectivo; mientras que el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (TIAR) de 1948, establecía en su preámbulo lo siguiente:

> En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, animados por el deseo de

> consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad y buena vecindad y, Considerando: Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la ciudad de México, recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América. Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que tienen celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que sean susceptibles de acción regional (…); Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los principios y propósitos de una política de paz; que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y de la seguridad (OEA, 1947, p.1).

El proceso de seguridad colectiva afecta a los países miembros de una alianza o coalición y cuando afecta a todos los países en general, se amplía a seguridad internacional, en cuyo desarrollo pacífico y armonioso deberían cooperar todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, existe en los tratados anteriormente mencionados, una misma

interpretación sobre el concepto de seguridad internacional asociado a la idea de la paz, que se inspira en la Carta de San Francisco.

Ahora bien, mientras que el proceso de seguridad de una alianza o coalición daría lugar a la seguridad colectiva, el proceso de seguridad de un Estado-Nación se denominaría seguridad nacional.

3.2 Seguridad Nacional

El tradicional concepto de Seguridad Nacional sería aquella cuya unidad de análisis es el Estado. Desde esta perspectiva realista, la seguridad buscaría ‘‘la supervivencia del Estado en un medio hostil, en el que las amenazas son constantes y militares’’ (Barbé, 2007, p.62). Desde este ámbito, existiría una visión del mundo de conflicto permanente, donde la principal amenaza a la seguridad la constituyen aquellos Estados con intención y capacidad de cambiar el statu quo del Sistema Internacional.

Se entiende el concepto de Seguridad Nacional como un enfoque tradicional, ya que además de corresponder al paradigma realista de las relaciones internacionales, fue el primer concepto desarrollado con la aparición del Estado-nación. Desde esta perspectiva, se concebiría la seguridad como “una situación de normalidad política, económica y social del Estado, derivada de la realización de sus fines esenciales, los cuales están ligados a la supervivencia y soberanía del mismo” (Santos, 2010, p. 217). En este orden de ideas, sería primordial entender que el concepto de Seguridad Nacional implica una acción del Estado en cuatro frentes: interno, diplomático, económico y militar; sin embargo, el frente militar es priorizado, bajo la comprensión que es el principal medio a través del cual otros Estados pueden amenazar la Seguridad Nacional (Santos, 2010).

Ullman (1983) plantea la siguiente definición para explicar el tipo de amenazas ligadas a la Seguridad Nacional:

> […] una amenaza a la seguridad nacional es una acción o una secuencia de eventos que (1) amenazan drásticamente y sobre un lapso de tiempo relativamente breve de degradar la calidad de vida para los habitantes del Estado, o (2) amenazan de manera significativa de reducir el rango de opciones políticas disponibles para el gobierno del Estado o para entidades privadas, no gubernamentales (personas, grupos, corporaciones) dentro del Estado. Dentro de esta primera categoría podría venir un espectro de disrupciones y trastornos que van desde guerras externas a rebeliones internas, desde bloqueos y boicots hasta escasez de materia prima y desastres "naturales" devastadores como epidemias, inundaciones catastróficas, o sequias masivas y generalizadas (p.133).

Esencialmente, la Seguridad Nacional es aquella que da preponderancia al Estado como actor referente de la seguridad y del Sistema Internacional, buscando evitar la irrupción de un actor externo que logre afectar sus fines esenciales. No obstante, es importante considerar los planteamientos de Buzan (1983), quien establecería que la seguridad no puede considerarse como un elemento autónomo y desarticulado de las diferentes esferas del Estado. Asimismo, Buzan expone que el concepto de Seguridad incluiría varios factores que van más allá de la Seguridad Nacional en su acepción tradicional, desde los individuos, el Estado, hasta incluso el Sistema Internacional; en efecto, "tratar el concepto de seguridad en cualquier nivel individual invita a serias distorsiones de la perspectiva de la misma" (Buzan, 1983, p.245).

En síntesis, el concepto clásico de Seguridad Nacional ubica al Estado como actor referente, teniendo por objetivo ''prevenir o rechazar amenazas militares

y, por tanto, defender militarmente la soberanía, independencia y territorialidad del Estado frente a posibles agresores. De esta manera, el Estado busca su propia seguridad incrementado su poder a través de su capacidad militar'' (Ortega & Font, 2012, p.1).

3.3 Seguridad Hemisférica

Es posible rastrear los orígenes de la Seguridad Hemisférica en modelos propios de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, donde las alianzas y la cooperación llevaron a la creación de mecanismos de seguridad de orden cooperativo, y en algunos casos, fundamentados en la noción geográfica de hemisferio. En efecto, las alianzas militares en América se forjarían mediante la creación de la Junta Interamericana de Defensa (JID) en 1942, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)[8] en 1947, y la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948.

Esta arquitectura de seguridad se complementaría con un sinnúmero de acuerdos bilaterales y subregionales, varios de los cuales, si bien fueron firmados durante la Guerra Fría, se han actualizado en el presente. Sin embargo, otros ya no serían aplicables dificultando la capacidad de respuesta a las crisis de seguridad que afrontarían los países del hemisferio, posterior a la disolución de la Unión Soviética; en efecto, la decadencia del modelo hemisférico de defensa continental plasmado en los instrumentos del sistema interamericano, en los que se instalaría la hegemonía estadounidense desde la Guerra fría, sería uno de los estímulos más disientes para la reestructuración de los mecanismos multilaterales de seguridad regional.

Por ende, para superar la crisis de seguridad en la región, durante la década de los noventa se reviviría la OEA como institución y se ampliaría su membresía;

8. El TIAR demarcaría el espacio estratégico continental en torno al cual se modelaron las percepciones de amenazas extra continentales durante la Guerra Fría. Aun cuando mantiene su vigencia formal, no constituiría actualmente un instrumento efectivo de cooperación regional.

asimismo, "el mismo período vio una reactivación de la "diplomacia de la cumbre". En las áreas de seguridad y defensa, las cumbres presidenciales se completaron con el trabajo llevado a cabo en las conferencias de los ministros de defensa y los comandantes de los ejércitos" (Benítez, 2004, p.10). Sin embargo, no fue sino hasta el 2003, en el marco de la "Declaración sobre Seguridad en las Américas" de la OEA, que se daría una institucionalización del concepto de Seguridad Hemisférica, al exponer que:

> [La] nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional" (OEA, 2003, art.2).

En este sentido, la OEA es la organización precursora del concepto de Seguridad Hemisférica, buscando la consolidación de prácticas comunes entre los miembros de la organización, así como de una visión de seguridad común enfocada principalmente en la protección de los individuos y en un concepto de seguridad ampliado. No obstante, la seguridad hemisférica tiene ciertas limitaciones por el hecho de que la soberanía sigue primando en temas de seguridad y de relaciones interestatales. En la "Declaración Sobre Seguridad en las Américas" de la OEA, el primer punto reconoce el poder soberano de los Estados y su derecho a identificar sus propias prioridades de seguridad y definir las estrategias que optara para defenderse ante las amenazas a su seguridad (OEA, 2003, Artículo 2-4).

Ahora bien, aunque la soberanía es un elemento esencial para los Estados en el Sistema Internacional, este aspecto crearía ciertas limitaciones para la seguridad hemisférica, dado que los Estados usualmente colocarían por encima sus propios intereses, tal como lo estipula la visión realista de las relaciones internacionales. Lo anterior, no significa que no se pueda establecer una agenda hemisférica en términos de seguridad, ni que los Estados miembros de la OEA no puedan cooperar entre sí para fortalecer el hemisferio y buscar las mejores opciones y mecanismos para protegerlo, pues si bien hay una definición común de amenazas, cada Estado es soberano en la configuración de su agenda de seguridad.

La "Declaración sobre Seguridad en las Américas" establece amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada, la pobreza extrema, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, entre otras. La lista es bastante larga, y es claro que no todos los problemas de seguridad que se plantean ahí afectan a todos los países miembros por igual. Esto significaría que al retener el poder soberano de los Estados y su capacidad de determinar sus prioridades de seguridad, no necesariamente se lograría un esfuerzo colectivo para hacer frente a todos estos problemas. Adicionalmente, en el contexto de la OEA, algunos académicos consideran que Estados Unidos tendría un gran margen de maniobra y podría seguir promoviendo su visión antiterrorista, creando dinámicas en el hemisferio que no serían del todo beneficioso para América Latina:

> Las deficiencias del nuevo concepto de seguridad adoptado por la OEA crean las condiciones para justificar, como nunca antes, el uso de las fuerzas armadas de los países de la región en misiones que tradicional y formalmente no les corresponden. Esta tendencia regional hacia la securitización es además reforzada por la propensión en la política exterior actual de Estados Unidos de ver todo a través del lente del terrorismo. Este escenario obstaculiza

> el largo y trabajoso camino de consolidación de las democracias regionales y el fortalecimiento de las instituciones civiles. Además, parece ser una manera ineficaz e inapropiada de resolver la amplia gama de problemas, de origen social, económico, político, ambiental y demás, comunes en la región (Chillier & Freeman, 2005, p.11).

Con base en lo anterior, hay quienes argumentan que la Declaración de Seguridad de las Américas de 2003 establecería un modelo de seguridad hemisférica que lo único que haría sería reemplazar un orden mundial y unas alianzas de seguridad similares a las de la época de la Guerra Fría.

3.4 Seguridad Regional

Atendiendo a las dinámicas regionales en América Latina, el concepto de Seguridad Regional ha surgido como un modelo que enfatiza la comprensión de la seguridad como un fenómeno colectivo, y que por lo tanto, prioriza la integración regional en su atención. En este sentido, este modelo destaca la importancia de la formulación conjunta de estrategias de seguridad entre los Estados, siendo necesario el desarrollo de la cooperación y la construcción de escenarios que permitan, desde el ámbito regional, contener múltiples amenazas[9]. Por ejemplo, en Suramérica desde hace unos años tiene lugar un proceso de reconfiguración de los espacios de cooperación multilateral en seguridad y defensa, desde la tradicional adscripción a la defensa hemisférica (enmarcada en el imaginario geopolítico del hemisferio occidental durante la Guerra Fría), hacia perspectivas renovadas de seguridad y defensa, configuradas en espacios regionales y subregionales (Celi, 2014). Este desplazamiento, desde una dimensión de defensa hemisférica hacia una de seguridad subregional, obedecería a la reconfiguración geopolítica iniciada en el hemisferio luego de la finalización de la Guerra Fría.

9. Si bien la Seguridad Regional considera múltiples amenazas, en el actual escenario de América Latina este modelo ha priorizado las amenazas trasnacionales, tales como el Crimen Organizado Trasnacional en sus diferentes manifestaciones (tráfico ilegal de armas, trata de personas, tráfico de narcóticos, piratería, tráfico de especies, entre otras).

En este contexto, la construcción de un modelo de Seguridad Regional tendría como punto de partida, una comprensión común de aquello que representa una amenaza, así como una definición conjunta de intereses, siendo lo anterior determinante en la dirección de esfuerzos en pro de la seguridad regional. Sin embargo, desde la esfera académica, los autores presentan diferentes planteamientos frente al modelo y en especial respecto de sus componentes; pese a ello, es posible señalar una tendencia en la que los autores establecen como determinante en la construcción de un modelo de Seguridad Regional, la existencia de un alto grado de comunicación entre los Estados de la región, una agenda de seguridad con intereses comunes y una comprensión similar de aquello que representaría una amenaza. En este sentido, Abreu (2006) expone que:

> En realidad, lo que realmente importa en términos de [seguridad y] defensa regional es que todas las acciones se orienten hacia una política moderna que permita a los países cooperar en el combate de aquellos problemas que –como el narcotráfico, el terrorismo y el medioambiente– constituyen una amenaza que trasciende a cada Estado. En otras palabras, que recursos destinados a la compra de armamentos deban responder a un compromiso social respecto de la calidad de vida y de la preservación de valores que vinculados a la paz hacen a la libertad, a la democracia representativa, a la justicia social y a la seguridad tanto nacional como internacional (pp.51-52).

En este sentido, la Seguridad Regional sería un modelo propio de un mundo globalizado e interdependiente donde las amenazas no responderían a fronteras de carácter político, sino que por el contrario, se caracterizan por su condición transfronteriza que les permite expandirse entre los diferentes Estados, convirtiéndose así en amenazas de carácter regional, hemisférico e

incluso global. No obstante, "en América Latina coexisten matices ideológicos y visiones políticas muy distintas a propósito del modelo de desarrollo económico y las alianzas internacionales, así como percepciones poco coincidentes sobre las amenazas y los riesgos para la seguridad" (Sánchez de Rojas, 2015, p.16).

A pesar de las muchas características que comparten, las amenazas de seguridad que enfrentarían los países de América Latina son muy diversas; y ello no tanto porque los factores de inseguridad sean fundamentalmente distintos, sino por las condiciones geoestratégicas y las diferencias profundas que sus estructuras político administrativas tienen para atender esos desafíos. En el caso de América Latina, el Crimen Transnacional Organizado ha logrado constituirse como una amenaza de primer orden a la Seguridad Regional, debido en parte, a la posible incapacidad estatal de contenerle, permitiendo así su difusión a lo largo de la región. Ejemplo de lo anterior, son casos como el de Colombia y México, en los que, situaciones de orden interno como la existencia de grupos guerrilleros y carteles han desbordado las fronteras nacionales, haciendo así uso de la región como una plataforma para el desarrollo de actividades criminales que afectan la Seguridad Nacional de cada uno de los Estados, así como la Seguridad Regional. Si bien dicha afectación no sería la misma a todos los Estados, lo cierto es que todos se verían impactados, por lo cual es necesario el desarrollo de una cooperación que permita contener de manera conjunta este tipo de amenazas (Sánchez, 2015).

De acuerdo a Celi (2014), "con el impulso de un enfoque regional con identidad suramericana, el desplazamiento del eje estratégico de la dimensión hemisférica de defensa continental hacia la seguridad de corte subregional con autonomía estratégica, cobra forma política e institucional en el Consejo de Defensa Suramericano (CDS)" (p.1). En efecto, el CDS[10] ha sido la principal

10. Es una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa, creado por mandato por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado o de Gobierno de la organización UNASUR, conforme a lo establecido en el Tratado Constitutivo de la UNASUR, en sus artículos 1ª 5ª específicamente, la cual se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2008, durante la reunión realizada en Santiago de Chile, República de Chile (UNASUR, 2009).

institución del hemisferio enfocada en la creación de un modelo de Seguridad Regional, que incorpore diferentes mecanismos para la cooperación y diseño de políticas comunes tendientes a contener amenazas que afecten la seguridad regional. Sin embargo, el CDS no tiene competencia operativa, ya que su carácter es principalmente político y consultivo.

A partir de lo anterior, existirían entonces acciones para generar un impacto a partir de políticas de Seguridad y Defensa a la Seguridad Regional de Suramérica; en este aspecto se caracterizan herramientas como: la creación de una red de información sobre políticas de defensa; la realización de seminarios para los diferentes Ministerios de Defensa; la identificación de enfoques conceptuales de defensa, amenazas en la región y de riesgos que afecten a la paz regional; propuestas de confianza mutua e intercambio de información en todos los aspectos posibles, incluyendo gastos en defensa; el incremento de la cooperación hemisférica en cuanto al tema de las amenazas con relación en los desastres naturales; y la necesidad de generar un mecanismo de consulta y evaluación inmediata ante cualquier riesgo de amenaza en la región (Crisóstomo, 2009).

En síntesis, bajo la óptica de Krasner (1993), el modelo de Seguridad Regional podría estar asociado a la construcción de un régimen internacional, como se definió anteriormente en el apartado del neoinstitucionalismo; en este caso se crearía un conjunto de principios, normas y procedimientos para la Seguridad Regional suramericana, donde se tomarían una serie de decisiones a partir de las expectativas de los actores en un área determinada de las Relaciones Internacionales como lo es la Defensa y la Seguridad, y en este caso específico, en la Seguridad Regional.

3.5 Seguridad Humana

Desde el enfoque tradicional de la seguridad, el objeto referente por excelencia ha sido el Estado; por lo tanto, ver acompañado el concepto de seguridad del término "humana" podría parecer inapropiado. Sin embargo, términos tales como la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la defensa de los derechos infantiles, entre otras disposiciones, denotan que el concepto de seguridad ha ido mutando paulatinamente, respondiendo a nuevas consideraciones, incluyendo al ser humano.

Es así como el modelo de la Seguridad Humana coloca al individuo en el centro de la visión de seguridad, reorientando "la atención de los Estados y de la comunidad internacional hacia la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas como la base para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano" (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 2015, pág. 4). En efecto, bajo el concepto de Seguridad Humana, la seguridad quedaría inexorablemente unida al bienestar de los seres humanos, implicando que todas las personas tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas en un entorno medioambiental seguro.

El concepto de Seguridad Humana surgiría en 1994, en el marco del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), al establecer la Seguridad Humana como un modelo que prioriza la protección del individuo ante posibles amenazas crónicas y diarias, considerando así una amplia gama de situaciones relacionadas a la supervivencia y a la dignidad de las personas (PNUD, 2010). En esta misma línea, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos atiende a los postulados de la Comisión Sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas (CHS), estableciendo que la Seguridad Humana:

> Significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y

> omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad (PNUD, 2010).

Bajo esta perspectiva, si bien el actor referente a las problemáticas de seguridad sería el individuo, el Estado continuaría teniendo un rol esencial, ya que tendría la obligación de proteger a sus ciudadanos y garantizarle derechos que han sido vulnerados por los nuevos escenarios de conflicto que, a su vez, no lo exime de la estrecha línea de ser un actor involucrado en un contexto de opresión. En este orden de ideas, se entendería como amenazas a la Seguridad Humana las violaciones de Derechos Humanos, trata de personas, acciones dirigidas a impedir el desarrollo sostenible de comunidades frágiles y afectadas por conflictos, fenómenos ambientales adversos, violencia urbana, pobreza, marginalización de sectores sociales, problemas sanitarios, entre otros (United Nations Trust Fund for Human Security, s.f).

En este aspecto, existen en la actualidad varias instituciones y organizaciones internacionales como la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas y la Human Security Network, enfocadas en promover este tipo de seguridad y en apoyar a los Estados en el desarrollo de estrategias dirigidas a atacar las amenazas a la seguridad humana de sus países. De igual manera, durante los últimos años, en cabeza del PNUD (2009), se han adelantado varias actividades para enfatizar la importancia de la Seguridad Humana en las estrategias de Seguridad Ciudadana en los países latinoamericanos, haciendo especial énfasis en la generación de estrategias para la erradicación de la pobreza, el aumento del empleo formal, el desarrollo humano, el acceso

a servicios básicos, a derechos fundamentales como la educación, así como el papel del Estado en la provisión de una seguridad a los bienes y los servicios de la población.

En consecuencia, dentro del enfoque de Seguridad Humana se concebiría como fenómeno a securitizar, las necesidades del individuo, sus derechos, sus servicios, la protección de sus bienes; las cuales deben ser proveídas por el accionar estatal, donde se concibe que a partir de estas estrategias se disminuye la amenaza de la delincuencia común, criminalidad y violencia, al tener satisfechas las necesidades básicas del individuo (Serrano, 2015).

3.6 Seguridad Multidimensional

El concepto de Seguridad Multidimensional se desarrolla en un mundo globalizado, en el cual las amenazas dejan de ser las tradicionales, y las Fuerzas Militares e instituciones encargadas de lidiar con temas de seguridad, deben innovar para responder a situaciones diversas y cambiantes en nuevos escenarios. Situación similar acontece con el concepto de Seguridad Humana, el cual representa un cambio de paradigma respecto a la noción tradicional de seguridad (Lince, 2017, p.3).

El surgimiento de la Seguridad Multidimensional como concepto y modelo, ha cambiado sustancialmente desde los años setenta, pues como lo plantea Barbé (2007), el fenómeno de la distención como resultado de la reducción de tensiones político-militares en un Sistema Internacional predominantemente bipolar, reduce la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Estados, puntualmente entre superpotencias, lo cual sumado a nuevas realidades como la descolonización, migración, crecimiento industrial, desarrollo económico, entre otros, permitió evidenciar nuevos problemas o reformular aquellos ya existentes.

En este escenario se presentan cambios en el ordenamiento mundial, siendo uno de ellos, la incursión de nuevos actores internacionales, los cuales transforman la agenda de seguridad, a la vez que, modifican las dinámicas tradicionales del conflicto, dando lugar a escenarios asimétricos en los cuales el Estado se enfrenta con otros actores con capacidades disimiles; ‘‘la suma de todos estos elementos, da lugar a una serie de preguntas para las que el paradigma realista [y el enfoque de seguridad nacional] (centrado en la dimensión político -militar del Estado) no tiene respuesta’’ (Barbe, 2007, p.65). En consecuencia, desde la óptica teórica de relaciones internacionales, las conceptualizaciones e imágenes del mundo tradicionales no responden a la realidad del Sistema Internacional, ‘‘en otras palabras, la teoría ha sido desbordada por la práctica. Mientras los teóricos seguían con la vista fija en cuestiones de alta política, los decisores políticos ya tenían sus agendas dominadas por los temas de baja política’’ (Barbe, 2007, p.64).

Igualmente, existen desafíos sobre terminología que si logran resolverse ayudarán a enfocar de una manera más eficiente la solución a las nuevas amenazas a la seguridad, pues como lo argumenta Rivera (2008), tomar en cuenta esta diversidad de enfoques sobre seguridad implica a su vez plantearse la posibilidad de trabajar algunos retos en las futuras agendas de investigación. El primero sería superar los tradicionales enfoques de la seguridad como poder o interés nacional, independientemente de que en la actualidad tenga vientos favorables o se presenten como un realismo remozado por sectores académicos cooptados por el *stablishment.* El segundo sería cuestionar la poca frecuencia con la cual las investigaciones sobre temas relevantes en seguridad dejan de interrogarse respecto a ¿quién define una amenaza? y principalmente ¿qué se concibe como una amenaza?; preguntas que de ser respondidas con claridad, ubicarían a los principales actores estatales responsables de los impactos negativos y la vulnerabilidad que sufren los Derechos Humanos en Latinoamérica.

Ortega & Font (2012) exponen la Seguridad Multidimensional como aquella en la que las amenazas no provienen exclusivamente del ámbito militar; por el contrario, proceden de otros ámbitos, tales como el político, económico, ambiental, social, etc. Dichas amenazas propias de un mundo globalizado se caracterizan por su naturaleza trasnacional, pues "vivimos en un mundo interdependiente y (…), por tanto, las estrategias para abordar esa nueva realidad no pueden ser las estrictamente militares, ya que se necesita introducir estrategias diplomáticas, civiles, policiales y de cooperación al desarrollo, entre otras" (p.162).

De esta manera, la Seguridad Multidimensional enfatiza en la realidad de un mundo cambiante donde coexisten amenazas de naturaleza disímil, siendo necesaria la evolución de las doctrinas de seguridad de los Estados para poder responder de manera adecuada a los nuevos problemas interestatales, transnacionales e intraestatales. Por otro lado, bajo el concepto de Seguridad Multidimensional, las Fuerzas Militares deberían adoptar un nuevo rol, ya que el uso de la fuerza militar no sería la única respuesta ante los diversos problemas que amenazan al Estado y a los individuos. Por ejemplo, el Ejército de Colombia ha venido diseñando una transformación tendiente a preparar a las Fuerzas para nuevos escenarios estratégicos y ambientes operacionales; ‘‘estos desafíos atienden a las nuevas realidades materiales y políticas que se consolidan en el Estado y que determinan una revisión de la forma como las Fuerzas Militares (…) conciben y cumplen con su finalidad constitucional" (Gómez & Correa, 2014, p.49).

Lo anterior evidencia un cambio en el objeto referente de la seguridad, pues las amenazas escapan al Estado como único doliente, empezando a recaer ‘‘también sobre las etnias, los grupos humanos, los individuos, las instituciones, la naturaleza, etc., [manifestándose] por varios medios, como el militar, el económico, el político, el social, el medio ambiental, etc., [dando lugar así a] lo

que se llamó Seguridad Multidimensional. Esta ampliación conceptual proyectó cierta sombra, sobre todo en los aspectos organizativos y operativos de la fuerza (Saint-Piere, 2008, p. 60).

Atendiendo a lo anterior, Blackwell (2015) explica que la solución del problema de inseguridad no tiene que ver con el aumento de pie de fuerza tanto policial como militar, o con el endurecimiento de la legislación anticriminalidad, sino por el contrario, del establecimiento de una seguridad más eficiente a través del fortalecimiento de las instituciones (proceso interagencial), generando una cultura de respeto por el Estado de derecho, así como el establecimiento de responsabilidades y derechos de la ciudadanía como parte del mismo.

Para alcanzar los anteriores objetivos, se deben establecer mecanismos para el desarrollo de una reforma de la seguridad, impulsada por las instituciones estatales con el apoyo de la ciudadanía, que permita adaptarse a las "necesidades y capacidades específicas de cada sistema de seguridad nacional, y que sea sostenible en el corto y largo plazo. Así mismo, se debe enfatizar la comunicación interinstitucional efectiva y la cooperación a nivel regional e internacional" (Blackwell, 2015, p.2). Continuando con esta línea, Stein (2009) agrega que existen en la actualidad, múltiples y diversos desafíos que deben ser enfrentados urgentemente si se desea poner freno a la violencia y criminalidad. Para ello, es preciso hacerlo de un modo sistémico a fin de encontrar soluciones integrales (Stein, 2009, p.37), entendiendo la seguridad como un estado en el cual convergen los diferentes campos del poder nacional. De esta manera, desde el concepto de la Seguridad Multidimensional, los Estados deberían utilizar diferentes instrumentos para combatir las amenazas tradicionales y nuevas, materializando nuevas doctrinas o reformas de seguridad, dado que se necesitarían nuevas perspectivas y mecanismos para combatir dichas amenazas, que requeriría para su resolución y/control, un trabajo cooperativo entre las

diferentes entidades del Estado en la provisión de estrategias de seguridad más efectivas.

En el caso de América Latina, la OEA ha empezado a forjar una estrategia regional para la Seguridad Multidimensional. De esta manera la concepción de seguridad en el hemisferio:

> Es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional (OEA, 2003, Artículo II:2, p.2).

Esta nueva concepción de la seguridad ha sido materializada con la creación de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), la cual coordina la cooperación política, técnica y práctica entre los miembros de la OEA y entre otras organizaciones interamericanas e internacionales; ello con el fin de analizar y contener amenazas nacionales, regionales e individuales. El propósito de esta Secretaría es reunir diferentes modelos y estrategias de seguridad, con el objetivo de proteger a la comunidad hemisférica; hay que señalar que dentro de la estructura organizacional de la SSM, existen cuatro secretarías y departamentos que se encargan de abordar los diferentes retos que están presentes en el concepto de Seguridad Multidimensional; estas dependencias son: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), Departamento de Seguridad Pública (DSP),

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT). (OEA, 2016).

Si bien el SSM es un ejemplo importante de la ampliación y materialización del concepto de seguridad, sus dependencias pueden resultar limitadas, al desconocer entre otros, fenómenos como el de las migraciones. Como lo propone Bravo (2015), para la comprensión de las migraciones como fenómeno que afecta la seguridad, debe entenderse las nuevas condiciones que le han fomentado, pues son justamente estas las que han servido de ‘‘argumento para construir un discurso que considera a las migraciones como un riesgo, una amenaza a la seguridad, y aspecto esencial en la agenda de la estrategia de seguridad de los países, tanto en el plano nacional como internacional’’ (p.140).

Actualmente, América Latina se enfrenta a diferentes amenazas a su seguridad regional y nacional, las cuales provienen en su mayoría de diferentes tipologías del Crimen Organizado Trasnacional, tales como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego, la trata de personas, el ciberdelito, entre otras. Muchos de estos delitos no se pueden combatir exclusivamente de manera policial o militar; por lo tanto, es en este vacío de la conceptualización tradicional de la seguridad, en el cual el concepto de Seguridad Multidimensional se presenta útil e idóneo para la renovación del enfoque de la seguridad tendiente a enfrentar las amenazas en el mundo contemporáneo.

En consecuencia, los procesos de integración y cooperación en seguridad serían cada vez más necesarios, en orden de atender los desafíos que presenta la criminalidad transfronteriza; prueba de ello es el Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM), iniciativa del Secretariado de Seguridad Multidimensional para reducir la violencia por armas de fuego, el cual daría como resultado la destrucción de más de 35.000 armas de fuego. En otras áreas, como el ciberdelito y el narcotráfico, el Secretariado ha creado

programas enfocados en mejorar la cooperación y las estrategias regionales para lidiar con este tipo de problemáticas.

En cuanto a la incorporación del concepto en el subcontinente americano, no se puede dejar de lado la importancia que adquieren sucesos como la Declaración de Seguridad sobre las Américas, celebrada en México en el año 2003, la cual aprobada por la totalidad de miembros de la OEA, obtiene ''un valor jurídico superior al de cualquier otro documento sobre temas de defensa y seguridad generado en cualquier otro ámbito multilateral" (Blackwell, 2015, p. 172). Esta declaración, deja en evidencia la expansión del concepto de seguridad y de amenazas, al involucrar problemáticas que abarcan desde lo medioambiental hasta la seguridad humana, y que instauran lógicas de seguridad hemisférica, donde se alinean todas las lógicas de defensa.

Como lo señala Stein (2009), la declaración identifica nuevas amenazas a la seguridad tales como:

> 1) El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos. 2) La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. [y se acepta que] la pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados. 3) Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, 4) Otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente. 5) La trata de personas. 6) Los ataques a la seguridad cibernética. 7) La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos. 8)

> La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva y sus medios vectores por parte de terroristas (OEA, 2003).

Hay que resaltar que la consideración de esta clase de amenazas resulta de suma utilidad en la medida que obedece a un contexto regional en zonas como Centro América y América del Sur, las cuales no se caracterizan por la presencia de conflictos de orden interestatal; sus dinámicas de seguridad se definen por la existencia de problemáticas transnacionales, así como de carácter doméstico, reafirmando por tanto la seguridad como un estado que involucra otros actores más allá del Estado y del dominio militar. De esta manera, en el contexto regional, se reconocen problemas derivados de las sustancias psicoactivas ilícitas, siendo esta una amenaza que impacta desde la salud pública, el control territorial, la economía, el bienestar social, la seguridad ciudadana, entre otros. No obstante,

> El tema del narcotráfico es el que condensa la mayor parte de las problemáticas y estudios sobre seguridad en América Latina, porque su tratamiento específico se encuentra entrelazado con una amplísima gama de asuntos locales, nacionales e internacionales. En efecto, sería imposible separar la estrategia regional de seguridad desplegada por los gobiernos estadounidenses en las últimas décadas sin dejar de asociarla con los efectos punitivos que se han establecido en las legislaciones de países andinos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia; o, resultaría irrisorio minimizar las presiones que se ejercen en materia de política exterior para obtener reducciones de superficies dedicadas a cultivos considerados ilícitos. (Velez, S.F, p. 22).

En este sentido, la adopción del concepto de Seguridad Multidimensional en el hemisferio americano permite abarcar nuevos escenarios que obedecen a

lógicas locales (como el conflicto armado colombiano y los carteles mexicanos), pero que tienen fuertes impactos en lo regional y en lo global. Adicionalmente, el enfoque de prevención sugerido por algunos autores como Stein (2009), permiten dejar de lado posiciones orientadas a emplear medidas de represión, que a largo plazo facilitan el desbordamiento de las dinámicas que afectan la protección de las variables consideradas desde la Seguridad Multidimensional. El planteamiento de un trabajo de prevención se desarrolla en tres niveles, donde exista una prevención:

> 1) Primaria: dirigida a la población en general, a fin de reducir la probabilidad de que la misma incurra en hechos de violencia o criminales.2) Secundaria: dirigida a población considerada de alto riesgo. 3) Terciaria: orientada a atender a las víctimas al mismo tiempo que a los responsables de los hechos violentos. (STEIN, 2009, p. 35).

De allí, que en un continente donde convergen las grandes problemáticas de un mundo globalizado, como lo es el hemisferio americano, la adopción de concepciones como las constituidas por el concepto de Seguridad Multidimensional permite el avance hacia una doctrina mejor estructurada de la seguridad. No en vano, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, al momento de la creación de la SSM en el año 2005, señalaba que ''nuevos retos y desafíos requieren nuevas aproximaciones si se espera lograr nuevos resultados'' (Blackwell, 2015).

3.7 Seguridad Integral

Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo del concepto de seguridad ha tenido grandes cambios durante los últimos diez años, debido a las nuevas vertientes de actores influyentes en el Sistema Internacional. Estos han convertido los conflictos en procesos asimétricos y globalizados, que han traído

como resultado, nuevas formas de combatir las problemáticas mundiales. Sin embargo, al mismo tiempo que estos conflictos se han reproducido en la arena internacional, la concepción de seguridad e interés nacional ha trasformado la dinámica del Estado. Por un lado, las instancias internacionales, en donde recaen las amenazas de carácter global, habrían puesto en evidencia la importancia de fortalecer el institucionalismo regional para la solución de conflictos.

Por otro lado, la Seguridad Nacional ha tenido que promulgar, mediante la imposición de una nueva agenda, los conflictos multidimensionales. Es decir, una seguridad ampliada donde los problemas que se internacionalizan, no solo son aquellos que tienen que ver con el conflicto bélico entre fuerzas armadas, sino que han encarado circunstancias humanas, como las necesidades básicas que amenazan a las sociedades. Es por eso, que a raíz de las nuevas nociones de seguridad, el concepto de Seguridad Integral elaborada por Bonett (2008), hace referencia a la visión constructivista del concepto; pues dicho concepto, en su visión moderna, constaría de dos ámbitos.

Primero, sería en esencia multidimensional, ya que sobrepasa "los espacios geográficos, políticos, económicos, sociales y militares donde se desarrolla la seguridad y que en su mayor parte se refieren al campo global de la misma. Incluye a las organizaciones internacionales, tratados, convenios, asociaciones, federaciones y demás agremiaciones de carácter mundial" (Bonett, 2008, p.35). Segundo, sería inherente al sistema internacional mediante la comunidad internacional; es decir, han existido procesos per se que se han involucrado en el institucionalismo de las Organizaciones Internacionales. Por ejemplo, cuando entidades como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Organización de Estados Americanos, entre otras, llegan a confluir bajo los intereses de los Estados, las dinámicas de seguridad se encuentran influenciadas o en algunos casos vigilados por estas organizaciones. Por lo tanto, pensar que

este ámbito es estato-céntrico sería un error, ya que la pluralidad de actores configura los nuevos contextos de Seguridad Multidimensional. (Bonett, 2009).

En el ámbito multifuncional, la seguridad traspasaría las características clásicas del concepto. Por lo que las nuevas actividades estarían cada vez más integradas a las nuevas nociones de seguridad de carácter social, económico, político, humana, ambiental, alimentaria, sanitaria y ciudadana. Es por ello, que se observaría en la actualidad un rol diferencial en las fuerzas armadas, involucradas cada vez más en procesos humanos y sociales. Por ejemplo, las fuerzas armadas integran componentes como la infraestructura en momento de catástrofes, pasando también por situaciones de salud pública donde su papel es indispensable para la seguridad de la población. Más que un nuevo rol, se han vuelto una herramienta esencial del Estado para garantizar tanto la seguridad, como la defensa.

Sin embargo, los Estados que aún no tienen una política pública de seguridad integral, tenderían a lidiar con los problemas de forma descentralizada y poco efectiva. En ese sentido, y teniendo en cuenta el concepto de Seguridad Integral, los Estados deberían profesar por un sistema integrado de seguridad que permita mejorar la calidad de los habitantes, y a su vez, garantizar mediante las fuerzas armadas, los fines esenciales del Estado. De este modo, la ampliación del concepto de seguridad, recaería en las fuerzas que empiezan a tener un nuevo rol bajo las nuevas nociones, las cuales los ubican en un espectro fundamental para el desarrollo de la seguridad, siendo los gobiernos, el punto de partida de la conglomeración de intereses definidos en la agenda para el avance de la seguridad integral.

3.8 Ciberseguridad

En primer lugar, para entender la ciberseguridad, sería necesario establecer que todo el fenómeno cibernético empieza a concebirse desde la revolución

de las tecnologías y de la información. De esta manera, a partir de la década de los sesenta con la sociedad de la información, se empezaría a priorizar el conocimiento y, por lo tanto, a generar mayores innovaciones tecnológicas que significarían el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones (Mattelart, 2010). A partir de lo anterior, se eliminarían distintas barreras que impedían a los individuos conocer lo que sucedía en el mundo y al acceso de productos comerciales, generando una era sin restricciones geográficas, en tiempo real y de manera libre (Vásquez, 2000). Estos cambios significarían entonces, el desarrollo de diferentes herramientas tecnológicas que facilitarían las comunicaciones a nivel mundial, generando ventajas comparativas en aspectos económicos, políticos, sociales, etc.

En este sentido, la tecnología también permearía el aspecto de la seguridad y la defensa, entendiendo entonces que la Ciberseguridad empezaría a concebirse a partir de estos cambios tecnológicos y de la comunicación, agravadas por la incertidumbre de la era de la ciberguerra y el ciberdelito, obligando a la concepción de una seguridad desde una perspectiva diferente a la acostumbrada. En consecuencia, la ciberguerra empezaría a definirse como las acciones cibernéticas del adversario, con el fin de alterar los sistemas de información de su oponente, buscando proteger los sistemas de información propios (Coleman, 2008); esto con el fin de despistar al enemigo y tener una ventaja contundente en el escenario de la guerra. En este orden de ideas la ciberguerra podría ser entendida como:

> Una agresión promovida por un Estado y dirigida a dañar gravemente las capacidades de otro para imponerle la aceptación de un objetivo propio o, simplemente, para sustraer información, cortar o destruir sus sistemas de comunicación, alterar sus bases de datos, es decir, lo que habitualmente hemos entendido como guerra, pero con la diferencia de que el medio empleado no sería la violencia física

> sino un ataque informático que va desde la infiltración en los sistemas informáticos enemigos para obtener información hasta el control de proyectiles mediante computadores, pasando por la planificación de las operaciones, la gestión del abastecimiento, etc. (Sánchez, 2009, p.216).

Otra característica de la ciberguerra tendría que ver con las guerras de Quinta Generación y las amenazas asimétricas, pues estas no son usadas exclusivamente por los Estados-Nación, sino también por actores no estatales como organizaciones delincuenciales, terroristas y grupos guerrilleros, que han desarrollado estos mecanismos de ataque no solo en contra de los Estados (Gaitán, 2011), sino también como forma de desestabilización del orden económico, político y social. Como resultado, la influencia directa en la esfera de la información ha terminado en procesos de ciberdelincuencia, fenómeno que ha traído consecuencias problemáticas a la Seguridad Multidimensional de los Estados nacionales. Por lo tanto, la ciberguerra es asimétrica, con una multiplicidad de actores que pueden tener la injerencia, influencia y capacidad de hacer daño en los territorios nacionales, con el fin de la desestabilización estatal. (Aguilar, 2010).

Es a partir de este tipo de amenazas que se empezaría a construir el concepto de Ciberseguridad, el cual se caracterizaría por la aplicación de un proceso minucioso de análisis y gestión de los riesgos relacionados con el uso de la tecnología y la era de la información; para ello, se debería conocer el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información, así como los sistemas usados bajo estándares internacionalmente aceptados, bajo la legalidad por parte de los diferentes Estados; por tanto es esencial para estos "disponer de estructuras organizativas nacionales, regionales e internacionales, para fortalecer su ciberseguridad y luchar contra la ciberdelincuencia" (Sánchez, 2009, pág. 218).

Finalmente, debería concebirse entonces, a partir del enfoque de la Ciberseguridad, que quien domina sus medios y las redes de información (teniendo la capacidad de prevenir posibles ciberataques a sus redes provenientes de cualquier actor), puede jugar un papel preponderante en el escenario internacional (Crooston, 2012). Así mismo, se entendería el escenario de la guerra cibernética de una manera asimétrica, buscando generar mecanismos de integración y cooperación estatal con el fin de contrarrestar estas amenazas, apartándose entonces de la concepción de seguridad tradicional, desde la escuela realista, para enfocarse en una noción basada en el neoinstitucionalismo de las Relaciones Internacionales, que permita mejorar sus capacidades para contrarrestar las amenazas a la seguridad en la actualidad.

4. Conclusiones

En resumen, las diferentes teorías de las Relaciones Internacionales facilitan el análisis de la evolución que han tenido los conceptos de Seguridad y Defensa en la historia. Estas corrientes de pensamiento, estudian desde diferentes elementos y fenómenos, las dinámicas que tiene el Sistema Internacional y como se puede tener un orden mundial en el que coexistan los diferentes actores sin que estos entren en conflictividad. Por lo tanto, se evidencia como el concepto de seguridad, ha sido entendido desde diferentes perspectivas teóricas. Por ejemplo, la teoría Realista postula que el Estado es el actor central del Sistema Internacional, por lo que la Seguridad es un aspecto de interés nacional, en donde la fuerza militar es el recurso utilizado contra las amenazas que puedan llegar a afectar al Estado. Así mismo, el Neorrealismo, surge como una concepción innovadora del Realismo, en la que no solo se considera que los Estados son los únicos actores del sistema, sino que existen otros actores que pueden influir en su comportamiento. Entonces los Estados tienen una posición en el sistema dependiendo de la capacidad para desempeñarse en diversos roles, en los que las amenazas no provienen únicamente de factores militares.

Sin embargo, existen otras escuelas de pensamiento como el Idealismo, que considera que no debería existir ningún tipo de conflicto entre los actores del sistema Internacional; ello podría lograrse mediante la creación de una Organización Internacional, capaz de equilibrar los poderes mediante acuerdos diplomáticos, los organismos multilaterales, y sobre todo, bajo la regulación de la conducta de los Estados, contemplada en el Derecho Internacional. En un escenario similar, la teoría del Liberalismo, busca un equilibrio de poder dentro del Sistema Internacional, en el que es evidente la interrelación y la dependencia de los Estados, por lo que estos tienden a cooperar entre sí, para conseguir un progreso y desarrollo mutuo, que facilite la creación de un escenario de seguridad y paz, en donde prevalezca la cooperación y la democracia como mecanismos para minimizar los conflictos del sistema. En este orden de ideas, el institucionalismo brindaría ganancias absolutas y no relativas, por lo cual un escenario de este tipo, permitiría tener una ausencia del conflicto.

Por otro lado, la teoría del Constructivismo es un paradigma que involucra la identidad de cada actor como un elemento más que permite estudiar las dinámicas del Sistema Internacional. Es un factor indispensable para la construcción de lazos entre Estados, que faciliten la identificación de intereses en común y la cooperación al desarrollo mutuo. Así mismo, esta teoría analiza la Seguridad desde la construcción de identidad, en donde los lazos identitarios fortalecen las amistades entre los Estados, desembocando en un mecanismo inquebrantable de Seguridad, al construir una visión conjunta de las amenazas existentes en el Sistema Internacional.

Por su parte, la teoría de la Interdependencia Compleja retoma los postulados que el Estado no es el único actor del sistema; por lo tanto, estos tienen relaciones dependientes con las otras unidades, considerando que la afectación de los acontecimientos tiene repercusiones similares en las partes, de modo que se genera una interdependencia entre los actores. De igual

manera, el Sistema Internacional es complejo, porque la agenda internacional tiene diversos aspectos para analizar, como los factores económicos, sociales, medioambientales, etc. Entonces, la Seguridad en esta corriente de pensamiento no comprende las amenazas desde los factores militares, sino de múltiples variables que intervienen en el sistema.

Finalmente, es evidente que las diferentes teorías de las Relaciones Internacionales ayudan a analizar cómo ha evolucionado del concepto de Seguridad, teniendo en cuenta que cada una de las teorías ha proporcionado diferentes elementos de estudio que agrupan las diferentes ideas que tiene la definición de Seguridad. Así mismo, los elementos tomados de cada una de las escuelas de pensamiento, permitiría consolidar el amplio concepto que se tiene en la actualidad de la Seguridad, así como las diferentes subdivisiones del concepto. Además, con las diferentes categorías de la seguridad, se pudo analizar que estas están estrechamente ligadas con los cambios y concepciones de las escuelas de Relaciones Internacionales. En este sentido, se desarrolló un análisis sobre la concepción de la seguridad y su respectiva importancia, respondiendo en casi todas las ocasiones a un fenómeno temporal del Sistema Internacional, y que hoy en día han ayudado a construir y comprender el concepto de Seguridad desde una percepción multidimensional.

En cuanto a las categorías de seguridad que generan un importante énfasis en la integración y cooperación entre los Estados, se encuentran la Seguridad Colectiva, Hemisférica y Regional, las cuales podrían concebirse como regímenes internacionales desde la escuela del Neoinstitucionalismo, pues buscarían generar a partir de las instituciones, procesos de integración y cooperación que permitan contrarrestar y generar estrategias en contra de las amenazas actuales. Por su parte, se puede establecer que la Seguridad Nacional ha sido desarrollada por excelencia, a partir de la escuela del Realismo, donde se conciben las amenazas entre los Estados a nivel militar y policial, entendiendo la

importancia de los conceptos de Soberanía y Defensa Nacional. Sin embargo, a pesar de la importancia de la misma en cuanto a las bases para la concepción de la seguridad de los Estados, si se muestra la necesidad de entender el concepto de manera más amplia, integrando al espectro de la seguridad otras dimensiones de análisis.

Dentro de estas categorías de seguridad más amplias, se encuentran la Seguridad Multidimensional, la Seguridad Integral y la Seguridad Humana. En la primera, se concibe que las amenazas son multidimensionales, capaces de generar inestabilidades económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales, etc., que afectan la seguridad del Estado. La segunda, resalta no solo el carácter multidimensional de las amenazas, sino la respuesta integral a dichas amenazas por parte de todos los actores del Estado, tanto militares, policiales y civiles. La tercera concibe el individuo como tema a securitizar, pero no a partir del ejercicio legítimo de la fuerza por parte del Estado, sino desde la noción social y las necesidades del ser humano para vivir en sociedad; es decir, la garantía de una serie de bienes y servicios que significaran el bienestar de la población dentro del territorio nacional. La última categoría de análisis se basa en la importancia de entender la seguridad a partir de los cambios actuales que se generan en el mundo, como por ejemplo, la era de la información y la tecnología, donde la seguridad debe ser entendida de forma distinta, fuera del dominio físico hacia el espectro del ciberespacio, desde el cual diferentes actores pueden llegar a desestabilizar el orden estatal.

Cabe destacar que con el final de la Guerra Fría, el nivel regional de la seguridad ha sido más autónomo en la política internacional. Dicha autonomía relativa de la seguridad regional constituye un modelo de seguridad en las relaciones internacionales radicalmente diferente de la estructura rígida de la bipolaridad que definió el periodo de competencia estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. De acuerdo a Obrador (1992), los ámbitos

geopolíticos determinarían en gran medida las estructuras de seguridad, por lo que se podría afirmar que los cambios geopolíticos y de poder de un ámbito producirían modificaciones en sus estructuras de seguridad tanto nacional como colectiva. Ello se debe a que estos cambios suelen alterar los equilibrios existentes; es en este contexto en el que surgiría el concepto de los Complejos Regionales de Seguridad (CRS); en este orden de ideas, Buzan & Waever (2003) establecen que los CRS son "un conjunto de unidades cuyos procesos principales de securitización, desecuritización o ambos, están tan interrelacionados que sus problemas de seguridad no pueden razonablemente ser analizados o resueltos separados unos de otros" (p.44).

La idea central de los CRS es que, dado que la mayoría de las amenazas viajan más fácilmente a través de cortas distancias que sobre largas distancias, la interdependencia de seguridad normalmente se modeló en grupos de base regional como los complejos de seguridad; por ende, los CRS serían una unidad diferenciable, debido a que su nivel de análisis no se encuentra en el plano global o estatal, sino que aborda las problemáticas regionales en materia de seguridad. En consecuencia, para esta teoría el aspecto geográfico juega un papel fundamental para poder analizar y securitizar los temas de interés regional (Flemmes, 2005). Por lo tanto, los CRS enfatizan su accionar en procesos de securitización, donde a nivel regional se comparten espacios geográficos que son amenazados por diferentes fenómenos; así mismo, se caracterizan por ser estructuras anarquistas que generan ciertas relaciones de poder para contrarrestar las amenazas que les compete (Otálvaro, 2004).

En resumen, el carácter particular de los CRS se ven a menudo afectados por factores históricos como enemistades de larga data (griegos y turcos, árabes y persas) o identidad cultural común de un área de civilización (árabes, europeos, asiáticos del sur, noreste asiático, sudamericanos). Además, la formación de un CRS se deriva de la interacción entre la estructura anárquica

y sus consecuencias en la balanza de poder, así como por las presiones de la proximidad geográfica local; incluso, el impacto de la proximidad geográfica en la interacción de la seguridad es más fuerte y más evidente en los sectores ambiental, militar, político y social (Buzan & Waever, 2003).

Todos los Estados en el Sistema Internacional están en cierta medida inmersos en una red mundial de interdependencia en temas de seguridad. Sin embargo, debido a que la inseguridad se asocia a menudo con la proximidad, esta interdependencia estaría lejos de ser uniforme.

Capítulo II

Rupturas y Continuidades de la Seguridad y Defensa en Colombia: De la Seguridad Nacional a la Seguridad Multidimensional[11]

Néstor Rosanía
Daniela Sánchez
Gabriela López Guahuña

La comprensión de las dinámicas de Seguridad y Defensa de un Estado no puede realizarse sin atender diferentes factores que intervienen e incluso les definen; por lo tanto, es necesario conocer los diferentes actores y fenómenos que convergen en la consolidación de un enfoque de seguridad.

En este orden de ideas, y con el fin de comprender las nociones de Seguridad y Defensa a lo largo de la historia reciente de Colombia, el presente capítulo analiza desde ochos periodos, la trasformación de las dinámicas referentes a la Seguridad y Defensa en el país. De esta manera, el presente capítulo se estructura de la siguiente manera: 1) La Constitución Política de 1886; 2) La hegemonía Conservadora; 3) La República Liberal; 4) El gobierno de Rojas Pinilla; 5) El Frente Nacional; 6) Periodo de Contrainsurgencia; 7) Constitución de 1991; 8) Siglo XXI. Se espera que al cierre del presente texto, se comprendan las dinámicas de Seguridad y Defensa en Colombia y el actual enfoque de Seguridad Multidimensional.

11. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

1. La Regeneración-Constitución de 1886: Hacia un Cambio Estrucural

Para comprender la Regeneración y su impacto en la construcción de la República de Colombia, es necesario entenderle como un proyecto con fuertes intereses ideológicos, políticos y sociales cuyo fin último era lograr establecer un cambio en la estructura del país, ello bajo la consideración del fracaso del modelo liberal, el cual llegó a su fin en la penúltima década de siglo XIX. En este sentido, factores como los ‘‘excesos de las administraciones liberales en relación con la Iglesia, el federalismo a ultranza (que debilitó el orden público), y las crecientes dudas a propósito de las políticas económicas liberales’’ (Bushnell, 2007, p.205), determinaron el proyecto regenerador, constituyendo los cimientos del mismo al punto de llegar a ser utilizado por el Partido Nacional como la insignia de ‘‘Regeneración o Catástrofe’’, señalando la necesidad imperante de derrocar el modelo liberal y su proyecto federalista sustentado en la Constitución de 1863 (Monroy, 2012).

El lema en mención evidencia la pretensión de cambiar el país estructuralmente, así como de transformar la concepción de sociedad, buscando una nueva construcción de Estado en el cual desde un modelo centralista se lograría el reconocimiento de toda la población y territorio como una sola nación. En este sentido, la Regeneración no puede ser comprendida únicamente como un modelo netamente político, pues de fondo pretendía transformar la psiquis de la población en términos morales y culturales bajo la influencia de la religión católica, lo cual se traduce en términos de estructuración del Estado en una fuerte interacción entre la Iglesia y la institucionalidad nacional.

> Desde esta perspectiva, la Regeneración no puede comprenderse sin considerar como elemento central a la población, pues es justamente para esta que se propone un nuevo modelo de nación:

> Bajo unos principios de autoritarismo, cristiandad y obediencia, aunque en esa idea de expansión e inclusión se puede ver que también se terminó por excluir a esa misma población que quería recuperar el modelo de ciudadano y los llevó a desprenderse de sus raíces, de su esencia, de sus costumbres, creencias y de todo aquello que fuera en contra de los ideales políticos del proyecto de la Regeneración. (Monroy, 2012, p. 223).

Es importante considerar que si bien la Regeneración tuvo un posible efecto adverso frente a su objetivo de unidad nacional, el acuerdo sobre las bases o principios de la nueva organización de nación ''fue sometido a la ratificación del pueblo por intermedio de los municipios que deberían emitir su opinión. El resultado fue favorable'' (Martínez Delgado, 1970, p. 169).

Con el fin de comprender los efectos de la Regeneración, es necesario caracterizar brevemente el modelo federalista, el cual versaba principalmente sobre la separación entre Iglesia y Estado, y la descentralización tanto política como económica del país en un sistema federal. Lo anterior, se encuentra sustentado en la Constitución de Rionegro (1863), la cual une a los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, los cuales se confederaban ''a perpetuidad consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, [para formar] una nación libre, soberana e independiente bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia'' (Cámara de Representantes Estados Unidos de Colombia, 1863).

Al respecto de lo instaurado por dicha Constitución se debe señalar que además de organizar administrativamente el país en nueve Estados soberanos, se otorgó a estos su propia constitución, código penal y civil, ejército e institucionalidad. Lo anterior es un elemento central en el análisis de la mutación

de las dinámicas de seguridad y defensa tanto previas como posteriores a la Regeneración, pues sin lugar a dudas el modelo de Estado bien sea federal o centralista definía aquello que se comprendiese por seguridad, con enfasis en cuáles serán las herramientas para su consecución. Conviene subrayar en este punto que, aunque modelo de Estado impacta en las dinámicas asociadas a la seguridad y defensa, es fin último de todo Estado lograr su supervivencia y velar por su soberanía.

Se entiende entonces la Constitución de 1886 como un elemento clave en la trasformación del modelo de Estado, toda vez que está propugnaba por una organización que permitiese controlar el territorio ante las disputas partidistas que generaban una desestabilización estatal en la pugna por el poder. En este orden de ideas, bajo el nombre de la República de Colombia, la Constitución Política de 1886 se caracterizaría por un centralismo exacerbado, concediéndole amplias facultades al poder ejecutivo; además, se estableció que, en caso de guerra, el Presidente estaría facultado para declarar crisis del orden público y el estado de sitio en toda la República o una parte de ella.

De esta manera, ‘‘los Estados pasaron a llamarse departamentos, retuvieron asambleas elegidas con poderes regionales limitados, pero sus gobernadores que a su vez nombrarían los alcaldes serían designados por el presidente’’ (Bushnell, 2007, p. 208). Se debe señalar que las reformas propias de la Constitución no resultaban ajenas a la historia política nacional, pues estas guardaban cierta similitud con el sistema de la Nueva Granada, empero, el sistema bipartidista de esta ralentizó su materialización.

Un elemento más a considerar, pero no menos importante, refiere a la creación del Ejército Nacional como órgano permanente, por lo que solo el Estado central quedó facultado para importar armas y municiones al territorio (Parra & Guevara, 2008). Más no se trata solo de la facultad otorgada al Ejército

Nacional, pues si bien este es un hecho considerable, debe ser visto desde una perspectiva más amplia, como lo sería justamente la monopolización de los medios militares al poder central; ''lo mismo sucedería con la facultad de recaudar impuestos sobre la propiedad o sobre los ingresos de los individuos, que se concentraría en manos del poder central. (Casillas Herrera, 2012, p. 1). En efecto, y en atención a los postulados de Weber (1974) sólo con la cooptación de este monopolio de forma permanente por parte del poder central es viable la consolidación de los Estados, siendo posible pensar que es justamente con la Constitución de 1886 que Colombia se constituye por primera vez como Estado, al menos desde una perspectiva moderna del mismo.

De esta manera, con la Constitución Política de 1886 se buscaría consolidar:

> Los principios de Soberanía Nacional, república unitaria, competencias militar y legislativa en cabeza de la nación, instrucción pública oficial, gratuita pero no obligatoria, libertad religiosa, libertad de cultos que no sean contrarios a la moral cristiana, prensa libre en tiempos de paz pero responsable, libertades individuales con razonables limitaciones, periodo presidencial de seis años, facultad presidencial para objetar los proyectos de ley, libre nombramiento y remoción de los agentes del poder ejecutivo por parte del Presidente, Poder judicial independiente, poder electoral organizado como independiente (Arango, 2002, p.133).

Es posible entonces reconoce la Constitución como uno de los cimientos para la denominada época de la Regeneración en Colombia, donde Rafael Núñez consolidó un proyecto político sustentando en un discurso político que tenía por objeto homogenizar el cuerpo de la sociedad, la cual había estado fragmentada entre otros factores, debido al desconocimiento de valores esenciales dentro del Estado, como lo eran el orden, la autoridad, la religión y la justicia (Melgarejo, 2010).

Por lo tanto, la Regeneración se caracterizó por generar cambios sobre el cuerpo social mediante instituciones políticas modernas para recuperar la falta de autoridad (Múnera, 2011). Bajo esta noción de institucionalismo moderno, inició el proceso de consolidación de las Fuerzas Armadas, ya que antes de la Constitución de 1886, estas se caracterizaban por su debilidad institucional, una notable precariedad de recursos y una deficiente presencia nacional, ello debido a que estas respondían a fuerzas políticas territoriales, más que a un proceso de orden nacional. De esta manera con la Constitución de 1886:

> Se dejaban atrás todas las formas de ejército o milicias que pudiesen existir al servicio y bajo el mando de los antiguos Estados soberanos, ahora departamentos, perdiendo así la autonomía que habían obtenido de poseer fuerza armada a su servicio en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 (Rey, 2007, p.153).

En la época de la Regeneración, las Fuerzas Armadas de Colombia comenzarían a tener un campo de acción autónomo aunque supeditado al poder central, en lo referente al orden público interno; así mismo, empezarían a tomar mayor importancia ante la labor estatal, concentrando asuntos propios de Seguridad y Defensa. En consecuencia, "el resto del Estado y la sociedad renunciaron a participar en la definición de las políticas de Seguridad y Defensa, lo cual ha sido contraproducente en el largo plazo" (Andrade, 2012, p.151), ya que al subordinarse tan solo al ámbito militar, limitaría la posibilidad que la Política de Seguridad y Defensa fuese diseñada de manera integral, por parte de todos los poderes del Estado.

Desde esta perspectiva, es posible comprender tanto en la Constitución de 1886 como en la Regeneración las nociones de Seguridad asociadas a la Escuela Realista de las Relaciones Internacionales, en donde las Fuerzas

Armadas son el actor preponderante, y cuya misión versa en el mantenimiento de la soberanía. Sin embargo, pese a este enfoque realista y a la importancia de las Fuerzas Armadas durante la época, el institucionalismo propio de este siguió apoyándose en fuerzas que respondían a un poder políticamente conservador, lo cual impactó en que parte de su estructuración estuviese fuertemente asociada al conservadurismo colombiano (Rey, 2007), lo que más adelante durante la hegemonía liberal, significó problemas de legitimidad de las mismas, ya que se combinó la política con el servicio a la nación.

En síntesis, la importancia de la Constitución de 1886 y de la Regeneración radica en que más que consolidar unas Fuerzas Armadas profesionales y al servicio de la nación, generó un cambio de doctrina en cuanto a la importancia de las mismas, reconociendo su rol en la estructuración de un Estado. Así pues, las Fuerzas Armadas se empezaron a considerar instituciones estatales y no políticas, o cuyo accionar se debiera a estados federados, toda vez que su operación se enmarcó por primera vez desde un marco constitucional.

En consecuencia, desde esta época se reconoce la necesidad de consolidar las Fuerzas Armadas de Colombia para servicio del Estado, que, si bien tuvo grandes problemas ante la influencia partidista de la época, sentó bases para la evolución de las mismas, al generar cierta independencia delegando a estas los asuntos propios de Seguridad y Defensa. Igualmente, podría afirmarse que con la Constitución de 1886, se optó por un modelo centralista, materializandose en la creación de una institucionalidad con alcance nacional, reconociendo por primera vez la noción de interés nacional, pues hay una percepción conjunta como nación en términos culturales y sociales, como Estado desde una perspectiva política e incluso de aquello que se opone o amenaza la consolidación del proyecto político determinado en la Carta Magna, siendo ejemplo de ello las intenciones independentistas de los antiguos Estados, posibles invasiones extranjeras, la fragmentación territorial, la primacía de los poderes locales sobre

el gobierno central, la posible irrupción del orden nacional por un actor político reaccionario, entre otros.

2. Hegemonía Conservadora

Si bien la Constitución de 1886 permitió la estructuración de una República centralista en la que se exaltaba el rol del poder presidencial, en la búsqueda de lograr la cohesión nacional se limitaron los derechos individuales, a la vez que se otorgó un papel dominante de la iglesia católica, pues como expresa la Carta Magna es deber ser de los poderes públicos protegerle, así como hacer respetar la religión Católica, Apostólica, Romana como propia de la nación y como esencial elemento del orden social (Cámara de Representantes Estados Unidos de Colombia, 1863). Igualmente, se dio una concentración del poder en la clase dirigente conservadora, lo cual se traduce en el predominio de las ideas del partido Conservador en la Constitución (Melo, 1996).

Como resultado de lo anterior, la época posterior a la Constitución de 1886 presentó importantes brotes de violencia, debido en parte a la Hegemonía Conservadora, la cual que se extendió hasta 1939, limitando la participación política liberal, a la vez que agudizaba la conflictividad bipartidista. De manera que, entre los años 1887 y 1939, el conservadurismo asumió todas las esferas del poder, lo cual supuso un trabajo continuo por parte de los liberales para acabar con su hegemonía, situación que derivó en una serie de conflictos armados entre los dos partidos, uno por conservar el *statu quo,* y otro por reformarle y obtener espacio en el escenario político e institucional nacional. Así pues, cuando el liberalismo ‘‘vio una vez más cerradas las puertas legales que garantizaran sus derechos, […] se inclinó en favor de las vías de hecho’’ (Martínez, 1970, p. 111).

En este contexto se desataron una serie de guerras en diferentes departamentos del país, las cuales terminaron siendo contenidas por el Ejército.

En este contexto se activó una de las competencias de la Fuerza Pública, siendo esta aquella referida a la manutención del orden público nacional, dejando en evidencia la importancia de estas en la estabilidad nacional.

Es menester resaltar que en ese momento de la historia del país, no existía un Ejército consolidado el cual fuera de carácter nacional; al contrario, eran unas Fuerzas Militares descentralizadas que respondían a las necesidades de cada departamento, es decir, cada departamento contaba con un Ejército el cual solo respondía a los mandatos locales. Sin embargo, fue en éste mismo periodo que se empezaron a consolidar unas Fuerzas Militares y de policía de carácter nacional, (Di Marco, 2015).

Por lo tanto, dicho contexto nacional impulsó la construcción de un Sistema preliminar de Seguridad y Defensa Nacional, en el cual las Fuerzas Militares y la Policía Nacional empezaron a tomar relevancia para el mantenimiento de la soberanía estatal y la protección del territorio nacional. No obstante, y en atención a la predominancia de los diferentes conflictos armados que se presentaron en algunos departamentos del país, se priorizó un enfoque doméstico de la seguridad, enfatizando la garantía de la estabilidad interna del país y limitando el desarrollo de una política exterior que buscará tanto proteger el territorio nacional de amenazas externas, en el Sistema Internacional.

Para comprender aún más el desarrollo del concepto de seguridad en esta época de la historia del país, es necesario hacer énfasis en la Guerra de los Mil Días, siendo este uno de los picos de violencia de la Hegemonía Conservadora. Esta Guerra fue un conflicto de orden civil entre los partidos liberal y conservador, los cuales se enfrentaron en su búsqueda de hacerse al poder gubernamental en Colombia. Esta guerra fue disputada por el Ejército gubernamental en cabeza de los conservadores, contra diferentes guerrillas liberales que se extendían por todo el territorio nacional. Al concluir el conflicto, el partido conservador resultó

victorioso, el Estado quedó devastado económicamente y hubo alrededor de cien mil muertos entre ambas partes (Duque, 2010).

Pese a ser derrotados en la Guerra de los Mil Días ‘‘el liberalismo había demostrado que Colombia no podía ser gobernada en paz cuando uno de los dos partidos era totalmente excluido del poder y estaba sujeto al acoso intermitente’’ (Bushnell, 2007, p.228). Lo anterior, era también considerado por los conservadores históricos, quienes encontraron tanto en la Guerra de los Mil Días como en la pérdida de Panamá argumentos para optar por la reconciliación nacional.

En consecuencia, es posible pensar la Guerra de los Mil Días como un conflicto preponderantemente asimétrico, dada la disparidad en la naturaleza de los beligerantes, siendo uno de estos un actor estatal en confrontación con una entidad no estatal (Ejército Nacional defendiendo el régimen contra una serie de guerrillas liberales las cuales buscaban romper con el orden establecido por los conservadores). Esta Guerra ratifica un modelo en el que la seguridad está asociada predominantemente al ámbito doméstico, donde se buscaba mantener el orden estatal existente en la época y evitar la emergencia de actores y/o situaciones que se opusiesen a este. Así la seguridad y defensa nacionales fueron enmarcados en el enfoque realista, donde mediante el empleo de la fuerza a partir de los recursos militares, el Estado colombiano buscó defender el interés nacional de mantener la soberanía y legitimidad estatal.

Lo anterior conllevó a que el Estado colombiano dejara de lado el contexto internacional, priorizando el conflicto interno nacional sin abogar así por vincularse en las dinámicas internacionales, e incluso desconociendo las amenazas provenientes de este. Sirva de ejemplo la no concepción de una estrategia nacional lo verdaderamente fuerte que limitará el proceso independista del entonces departamento de Panamá, facilítado por Estados Unidos, que a

diferencia de Colombia, veía esa región como un punto estratégico para el tránsito desde el Océano Pacífico hacia el Mar Caribe y posteriormente con salida hacia el Océano Atlántico (Fischer, 1998). Por lo tanto, la debilidad estatal que dejó la Guerra de los Mil Días, tal como lo afirma Hinestrosa (2004), fue aprovechada por Estados Unidos para impulsar una revuelta desde la clase dirigente Panameña, la cual terminó en la declaración de la independencia de Panamá en 1903.

En suma, se evidencia que la separación de Panamá es resultado del enfoque de seguridad y defensa de la época, en la que los intereses nacionales (de existir) se limitaban a garantizar el orden interno, sin considerar actores externos como una amenaza a la seguridad nacional. En este sentido, se evidencia una desarticulación entre los diferentes campos del poder nacional (social, económico, militar, político y asuntos exteriores), pues no se logra articularles bajo la comprensión de la seguridad como una construcción que implica el relacionamiento de estos campos, pues con dificultad se consolidaba paulatinamente la institucionalidad nacional.

No obstante, el periodo correspondiente a la Hegemonía Conservadora supuso algunos logros para la seguridad y defensa Nacionales, pues se ratificó la importancia de las Fuerzas Armadas como actores centrales tanto en la construcción de un nuevo modelo estatal como en su preservación. Igualmente, dejó en evidencia la necesidad de articular los diferentes campos del poder nacional, y la imposibilidad de que estos contribuyan a los intereses nacionales sino se conectan o desarrollan de manera interdependiente. Se debe agregar que el hecho de la no priorización para entonces del escenario internacional y el no reconocimiento de amenazas de orden externo no debe ser considerado desde una perspectiva negativa, ya que el ambiente doméstico era predominante, por lo que, todos los medios del poder nacional estaban encaminados a su protección.

3. La República Liberal

A diferencia del escenario latinoamericano previo a 1930 caracterizado por la preponderancia del liberalismo, en Colombia se vivió una hegemonía conservadora por cerca de cincuenta años, concluyendo ésta en 1930 con la irrupción por la vía política del orden establecido por el partido conservador. De esta manera, Colombia se configuró como uno de los pocos Estados latinoamericanos que no sufrieron un cambio abrupto de gobierno en el marco de la depresión mundial, empero, la caída del gobierno conservador en elecciones libres supuso un cuestionamiento respecto a su hegemonía, así como frente a la conducción nacional a lo largo de esta, particularmente ante la premisa de preservación del poder estatal más que de los intereses sociales y nacionales *per se* (Pécaut, 2001).

Uno de los factores a considerar en la promoción del liberalismo sería la división conservadora en términos electorales entre dos candidatos, posibilitando la victoria del liberal Enrique Olaya Herrera por mayoría simple, pues a diferencia de escenarios previos en los que los conservadores habían optado por este modelo, el arzobispo de Bogotá no respaldó de manera contundente a alguno de los candidatos. Igualmente, se debe mencionar la crisis económica de 1929, la cual propició el incremento de las funciones estatales en la economía, teniendo como una de sus consecuencias el desarrollo de un proceso de industrialización con grandes limitaciones estructurales (Herrera, 1993). Lo anterior, así como la huelga bananera de 1928, son situaciones que en sumatoria debilitaron la imagen del partido conservador ante el electorado, a la vez que ofrecieron argumentos a quienes se oponían a su modelo.

Cabe señalar que la llegada al poder del partido liberal coincidió con una crisis agraria, concentrándose la economía en sectores urbanos industriales, comerciantes, exportadores. En este contexto el partido liberal focalizó parte de

su estrategia electoral en el apoyo de los sectores más populares, adoptando un lenguaje afín con el discurso proletario.

Ahora bien, como lo afirma Pizarro (1987), la Masacre de las Bananeras configuró uno de los escenarios desde los cuales los liberales intentaron deslegitimar las Fuerzas Militares, adjudicando que estas en su condición de actores estatales confluyeron parcialmente y en seguimiento de una fuerte presión política en tal acontecimiento. De modo que la estrategia liberal en pro de desprestigiar al régimen conservador se sirvió entre otras, de desprestigiar a las Fuerzas Militares.

Lo expuesto son factores claves para comprender el nacimiento de la denominada República Liberal, periodo comprendido desde 1930 hasta 1946, en el cual se dio una secuencialidad en el poder de los liberales, bajo ''un proyecto de modernización de las estructuras políticas y económicas del país. Este regreso se anunciaba como un esperado giro hacia una política de índole más social y con visos más democráticos'' (Martínez. , 2013, p. 339).

Por otro lado, se debe expresar que con la llegada del liberalismo al poder se da cabida a movimientos sindicales que gestaron políticas a favor de intereses proletarios, apoyándose en esto para ejecutar reformas de modernización y laicidad dentro del Estado. Estas reformas significaron un nuevo discurso, el cual si bien se había extendido en el siglo XIX en toda América Latina, en Colombia se consolidó hasta el siglo XX, estableciendo un discurso opuesto al conservatismo, buscando la institucionalización laboral y agraria como una garantía de poder y legitimidad ante la deficiencia económica generada en los periodos de la hegemonía conservadora; así mismo, el reclamo por un modelo de Estado secular significó otro foco de apoyo ante la deslegitimidad de la Iglesia Católica (Mejía, 1978).

No obstante, y en seguimiento a los postulados de Pécaut (2001) el gobierno de Olaya Herrera no logró gestar un verdadero cambio, no siendo sus políticas causantes de la reforma política Colombiana, pues será sólo hasta 1934, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el programa de la revolución en marcha que se empiezan a dar trasformaciones sociales y políticas acordes a las posturas liberales cimentadas en el modelo keynesiano americano, el cual exalta un modelo de Estado que garantiza condiciones sociales mininas de bienestar para la mayor parte de la población, tanto en las zonas rurales como urbanas, procurando por la democratización de la economía sustentada en la regulación y protección del Estado (Martínez O. , 2013).

Es importante mencionar que López, en la búsqueda de materializar sus postulados realizó una serie de reformas constitucionales en 1936, las cuales involucraron tres puntos, siendo el primero de estos el aumento explícito de los poderes del Estado en asuntos económicos; el segundo punto refiere a la reforma constitucional que eliminó el artículo que asociaba la educación a la religión católica, mientras que el tercer punto fue la apertura del sufragio a la población analfabeta. (Bushnell, 2007).

La medidas anteriores son elementos centrales del presente análisis, puesto que el apoyo popular se convirtió en el bastión de la República Liberal, ello en la búsqueda de consolidar políticas sociales. Por tanto, se priorizó el campo del poder nacional referente a lo social, dejando el campo militar y puntualmente el rol de las Fuerzas Armadas, como uno de los temas de segundo orden de la agenda nacional. Siendo así, es menester reconocer que fue otra la visión que se le dio a la seguridad y defensa durante el periodo de la República Liberal, pues se logra vislumbrar un cambio en el objeto referente de la seguridad, siendo en este sentido no sólo la soberanía y cohesión territorial una prioridad, sino tambien la sociedad civil como el objeto a securitizar. Dicha ampliación del espectro de seguridad no implica de ninguna manera que se desconozcan los

asuntos tradicionales de seguridad estatal, empero, se podría pensar que se eleva en la agenda la cohesión social, y en especial su alineación política con el gobierno como un tema de seguridad nacional.

Llegado este punto, y frente a la conducción de las Fuerzas Militares en la República Liberal, se debe decir que el poder legislativo expidió normas de prohibición para la participación de militares en la política, a la vez que creó un nuevo código castrense para otorgarle la calidad de oficiales a los líderes liberales de la Guerra de los Mil Días y así vincularles en la cadena de mando de las Fuerzas Militares. Además, se configuraron nuevos campos de acción para las Fuerzas Militares, acercándoles a la población rural en jornadas de alfabetización, así como mediante la construcción de obras públicas en el campo. Al respecto se debe señalar que esta medida si bien permitió acercar a las Fuerzas Militares a las zonas rurales de Colombia, respondió en parte a la intención de ''alejar a los militares en forma efectiva (…) de la órbita central y urbana de la nación'' (Atehortúa, 2014, p. 145).

Otro rasgo por destacar refiere al rol de las Fuerzas Militares en el ámbito político, pues si bien estas no se vincularon directamente en él, al fungir como garantes de la Constitución y de la institucionalidad nacional, aportaron en la consolidación de un ambiente político favorable para el liberalismo. Así, escenarios como la recuperación del Ministerio de Guerra por parte del liberalismo, permitió fortalecer el relacionamiento entre el gobierno y las Fuerzas, y de esta manera neutralizar alzamientos provenientes del conservadurismo. De igual modo, los recursos militares si bien continuaron usándose en parte para ejercer control territorial y velar por la soberanía, también se destinaron en la financiación de nuevas labores de las Fuerzas Militares en el campo social, ayudando a estas a constituirse como un actor central en las dinámicas nacionales, a la vez que contribuyó a legitimar el régimen de corte liberal por más de una década, en el periodo conocido como la República Liberal.

Finalmente, es evidente que las Fuerzas Militares experimentaron un proceso de transición de la hegemonía conservadora a la República Liberal, en donde los dos partidos consideraban de igual importancia tener el control sobre los recursos militares, para así garantizar su legitimidad. Sin embargo, durante el periodo de los gobiernos liberales, las Fuerzas Militares tuvieron una serie de nuevos roles de carácter social, debido al desarrollo de políticas que enfatizaban este ámbito, lo cual no significa que éstas hayan relejado su rol tradicional en pro de la garantía de la seguridad en términos tradicionales, particularmente frente a posibles escenarios de desestabilización interna provenientes de vertientes armadas de conservadurismo.

Si bien para este momento histórico se desconocía el desarrollo teórico y político de aproximaciones a la seguridad como la seguridad humana y multidimensional, siendo conscientes del momento histórico, se podría pensar en un primer acercamiento a estas dimensiones de la seguridad en el escenario colombiano, pues si bien el objeto referente continúa siendo el Estado, se empoderan otros temas en la agenda de seguridad. Vale la pena considerar en este punto el argumento de Martínez (2013), pues en efecto como resultado de la República Liberal, el Estado asumió ‘‘algunas responsabilidades regulativas en el desarrollo de la sociedad’’ (p. 341). Lo anterior, se expresa por ejemplo en las reformas constitucionales de 1936, las cuales, entre otros, terminaron por postular el ámbito económico como un factor determinante de cara a los intereses nacionales.

4. Del Desbordamiento del Conflicto Bipartidista al Gobierno de Rojas Pinilla.

Tras el proyecto de la Revolución en Marcha iniciada por López Pumarejo, el liberal moderado Eduardo Santos Montejo resultó electo como presidente en 1938. Si bien, se esperaba continuidad frente a las políticas centrales de

la Revolución en Marcha, el nuevo presidente no continuó soportando y dirigiendo la política nacional en la línea de su antecesor, lo cual derivó en descontento popular. Consecuencia de lo anterior, López Pumarejo fue reelecto en 1942 dando continuidad a su proyecto político, no obstante, para entonces se vislumbraban fragmentaciones al interior del liberalismo, ello entre las corrientes radicales y moderadas, las cuales pese a confluir en un mismo partido vislumbran un proyecto político diferente.

En suma, se configuró un contexto político con altos grados de inestabilidad tanto al interior del liberalismo como en el escenario político nacional, pues como señala Pécaut (2001) se evidencia una profunda inestabilidad social que termina afectando la legitimidad tanto del gobierno, a la vez que se cuestiona el proyecto de país.

Se empezó por tanto a gestar un ambiente político que desembocaría en el fin la República Liberal, en medio de un notorio deterioro del orden público en la mayor parte del país. En 1946 se posesionó el conservador Mariano Ospina Pérez como presidente, acontecimiento que estuvo acompañado de brotes de violencia provenientes en parte del conservadurismo, quienes después de varios años sometidos al poder liberal encontraron un escenario oportuno para reivindicarse.

De manera simultánea Jorge Eliécer Gaitán empezó a aglutinar un importante sector del liberalismo, no obstante, ante la desconfianza de éste por los líderes tanto de su propio partido como del partido conservador, terminó por retirar al liberalismo de la coalición con Ospina. Así y en el marco de la Conferencia Panamericana de abril de 1948 los brotes de violencia escalaron a tal nivel que tuvo lugar el "bogotazo". Al respecto y en seguimiento a los planteamientos de Bushnell (2007), el acontecimiento a considerar no es el Bogotazo, entendido este como los acontecimientos ocurridos en la ciudad capital, si no el estallido

de violencia que abarcó casi todo el territorio nacional, tanto en lo rural como en lo urbano.

En este contexto, se puede establecer el inicio de la Violencia, pues si bien para algunos historiadores este periodo ya había iniciado en 1946, para los fines del presente documento se estipula como inicio de esta los acontecimientos del 9 de abril. De manera que, en este panorama de violencia, miedo y tensión, las amenazas a la Seguridad Nacional devienen de la inestabilidad domestica propia de una guerra civil resultante de una rivalidad partidista entre liberales y conservadores, así como a la incapacidad Estatal de contenerle.

El 9 de abril, a la vez que fue un punto de inflexión en la vida política nacional, también lo fue para las instituciones militares, pues desde este momento ‘‘se constituyen como un actor político, con el cual debe contar todo gobierno dada su capacidad de incidir en la elaboración [y ejecución] de las decisiones estatales, particularmente en aquellas relacionadas con el orden público interno’’ (Pizarro, 1987, p.8).

En este escenario, Gustavo Rojas Pinilla se desempeñaba como comandante de la Tercer Brigada de Cali, rol que le permitió en el contexto de revuelta popular asumir la dirección del gobierno departamental, limitando los brotes de violencia y recuperando el orden local. Lo anterior no debe ser considerado un hecho de carácter puramente anecdótico, pues sus logros merecieron reconocimientos por parte del gobierno central así como su proyección en el escenario regional del Valle, al punto que en medio de un parlamento fuertemente divido se le otorga el grado de General de Brigada, siendo este el punto de inicio que le llevaría en 1950 a ser promovido como jefe de Estado Mayor Conjunto, y en 1951 como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (PIZARRO, 1987).

Al regreso al país tras estar dos años por fuera, fue un momento crucial para el posterior asenso del General Rojas Pinilla a la Presidencia de la República,

pues a su retorno visitó extensamente el territorio nacional, lo que le lleva a plantear con determinación la necesidad de una salida política a la situación de crisis nacional, postura que se encontraba dentro de la línea de amplios sectores liberales como del conservadurismo de Mariano Ospina.

En medio de esta situación y por cuestiones de salud, en el año de 1951 se dio el retiro temporal del presidente Laureano Gómez, quedando designado para este cargo Roberto Urdaneta Arbeláez, conservador que hasta el momento se había desempeñado bajo el cargo de ministro de Guerra. Urdaneta en seguimiento de uno de los principales proyectos políticos de su predecesor ''sancionó el acto legislativo que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para 1953'' (Villamizar, 2017, p. 160). Si bien la Asamblea no logró su objetivo central de revisión de la Constitución de 1886, si constituyó un escenario que contribuyó a la legalidad de Rojas Pinilla en el poder, ratificándole como presidente para el nuevo periodo.

De esta manera se abrió la opción de un régimen militar bajo tutoría civil[12], por primera vez en la historia republicana del país. En principio, el nuevo régimen ''sirvió como una solución temporal a la grave crisis política y social por la que atravesaba el país, [a la vez que] ofreció la paz a los alzados en armas y anunció un plan de rehabilitación para las zonas afectadas por la Violencia'' (Villamizar, 2017, p.161).

Se debe considerar igualmente la suspensión en días posteriores a la Asamblea de las acciones militares en zonas con altos grados de violencia, a la vez que se enviaban volantes alusivos a la paz, lo cual se tradujo entre otros, en expresiones de las filas guerrilleras reconociendo la labor del mandatorio, al punto incluso de suspenderse hostilidades en algunas zonas del país.

12. El término régimen militar bajo tutoría civil se considera una noción apropiada para caracterizar el modelo político durante el gobierno de Rojas Pinilla. Este concepto es propio de Carlos H. Urán en su libro *Rojas o la manipulación del poder.* Igualmente, esta comprensión es avalada por Eduardo Pizarro (1987).

Se debe agregar que un mes después de la Asamblea se selló la paz con los grupos guerrilleros ubicados en los llanos del país, dándose un proceso de desmovilización y entrega de armas como resultado de negociaciones directas por enviados del gobierno.

Empero los tempranos logros del gobierno de Rojas, varios factores terminaron por afectar su gestión, siendo algunos de estos ‘‘la naturaleza cada vez más fuerte del régimen, al creciente oposición de los dos partidos, la revelación por parte de Rojas de su programa de reforma social y económica y recrudecimiento de la Violencia’’ (Bushnell, 2007, p. 307)

Pese a sus logros y detracciones, el gobierno de Rojas Pinilla desarrolló primordialmente una visión de seguridad en la cual el objeto referente continúa siendo el Estado, entendiéndose como amenaza todo aquello que se opusiese a su supervivencia; en este sentido, se configuran como amenazas la pugna partidista, los intentos de levantamiento social y el no reconocimiento de la legitimidad de su gobierno. En esta misma línea es posible vislumbrar que uno de los intereses nacionales sería cohesión nacional, entendiendolo como requisito *sin e qua non* la consecución de la paz, o al menos la pacificación del territorio nacional.

Es importante mencionar que el propio contexto internacional de la primera etapa de la Guerra Fría terminó influyendo en el ámbito de la Seguridad y Defensa del gobierno de Rojas, pues con el fin de contener el avance del comunismo, así como de consolidar su presencia en la región, Estados Unidos inició un proceso de ‘‘sometimiento de nuestras Fuerzas Armadas a los designios de su política exterior’’ (Pizarro, 1987, p.25). Es ejemplo de lo anterior, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como el Pacto de Estandarización de los Ejércitos Latinoamericanos. Éste Tratado bajo el precepto de solidaridad continental en la contención tanto del comunismo como

de la presencia un actor extra regional como la Unión Soviética, impactó a las Fuerzas Militares colombianas, las cuales adoptaron el modelo norteamericano en lo referente a técnicas de combate, así como frente al uso de armamento.

Por tanto, la Doctrina de Seguridad y Defensa estadounidense postuló al comunismo como principal amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad regional, siendo para ello necesario una defensa tanto conjunta de la región, como contar con Fuerzas Militares dispuestas a contener cualquier amenaza derivada del comunismo. Al respecto, se debe señalar que la garantía de la seguridad pasa por la defensa de objetivos nacionales que se es posible agrupar dentro de las siguientes categorías: "[defensa] un legado de valores morales y espirituales; (…) elementos que construyen la idiosincrasia o características nacionales; y la última, atributos de la soberanía en su sentido clásico" (Jiménez, 2009, pp.79-80).

Habría que decir también que por primera vez se percibe en el caso colombiano la influencia de un actor externo en las dinámicas de seguridad y defensa nacionales, ello desde varias perspectivas, tales como la definición de un patrón de enemistad frente a un sistema de valores (comunismo), lo cual a su vez supone la caracterización de Colombia dentro de uno de los bloques del Sistema Internacional bipolar. Son entonces los valores norteamericanos los que terminan por definir aquello que se comprende como amenaza en el campo de poder de asuntos exteriores, lo cual no debe ser considerado como un elemento del todo negativo, pues responde a las dinámicas del Sistema Internacional e incluso puede ser leído como favorable en la medida que inserta a Colombia en el escenario internacional, vinculado la política exterior con los asuntos en seguridad.

Frente al desarrollo de la seguridad en términos de política exterior vale la pena mencionar disputas por la protección territorial, como las de Colombia y

Venezuela por el archipiélago de Los Monjes y el Golfo de Venezuela (Rodríguez, 2011). Estas disputas territoriales causaron tensiones entre Estados, lo cual explica porque mantener un equilibrio de poder bélico con Venezuela fue uno de los principales enfoques del gobierno. Así mismo, el General Rojas Pinilla invirtió algunos recursos del Estado en aumentar las capacidades militares, con el fin de proteger los intereses nacionales, el territorio y la Seguridad Nacional, no obstante, a el aumento en el gasto de las Fuerzas Militares afectaría algunos aspectos sociales, como lo afirma Murgueitio (2005):

> En 1955 se incrementó el gasto militar hasta dejarlo en cerca del 20% del presupuesto público anual, por encima de los rubros de agricultura, educación y salud. Según las cifras manejadas por Szvic, en 1956, cerca de 2.5 millones de dólares fueron gastados en el ejército, mientras los precios del café descendían, limitando el número de reservas en divisas y el pago de los préstamos (p. 21).

Al aumentar el gasto militar, el General Rojas Pinilla priorizó la seguridad nacional en términos de soberanía territorial. Sin embargo, hubo falencias en otras áreas de la seguridad humana y multidimensional, pues el aumento del gasto militar supuso la reducción del presupuesto en otros campos como el social y económico. Lo anterior, no debe ser tomado con ligereza, pues conllevó al incumplimiento de la promesa que sustentó el ascenso al poder del General Rojas: vencer la Violencia.

En este escenario, vale la pena mencionar que el gobierno del General Rojas Pinilla se fundó con base en la opinión popular, por lo que mantenerla y controlarla era de gran importancia, pues parte del discurso estaba cimentado en la defensa de las masas populares. Lo anterior, ha merecido una discusión sobre si el modelo del General Rojas Pinilla puede ser considerado populista o no; sin embargo, no es objeto del presente análisis estudiar si su mandato podría

estar definido bajo este modelo, empero, sí se debe considerar sus políticas socioeconómicas enfocadas en las masas populares, las cuales si bien fueron planteadas como prioritarias no alcanzaron a establecerse en la agenda nacional como un tema prioritario.

En este orden de ideas, se evidencia un corto circuito entre los postulados que priorizaban el bienestar social y que ubicaban por asociación a la sociedad como el objeto referente de la seguridad, pues como se expuso con anterioridad, en atención a la situación doméstica de inestabilidad y al reconocimiento de amenazas provenientes de actores estatales, se priorizó un enfoque de Seguridad Nacional.

Para concluir es menester subrayar la evolución de las Fuerzas Armadas en este periodo, las cuales además de verse fortalecidas técnica y presupuestalmente, se convirtieron en una institución central para el ejercicio del poder, al punto de fungir como el único actor con capacidad de ''arbitrar un conflicto que había desbordado las élites bipartidistas,[pues] el enfrentamiento entre estás había alcanzado tal dimensión que resultaba imposible un acuerdo inmediato entre los partidos para superar la crisis, como había sido tradición a lo largo del siglo'' (Pizarro, 1987, p.38). Igualmente, su rol, continuó siendo central en términos de la Seguridad Nacional, pues fungieron como actores centrales en el abordaje y garantía de esta.

5. La búsqueda de un Proyecto de Estado Verdaderamente Nacional: Frente Nacional.

La crisis característica de los últimos meses de gobierno de Rojas Pinilla abrió paso a la consideración de medidas que permitieran sortear el desequilibrio generalizado que atravesaba el país. En este sentido, el Frente Nacional instaurado en 1958 surge como una alternativa político-institucional concertada entre los

partidos políticos dominantes de la época que, considerando la pretensión del General Rojas Pinilla de gobernar sin la tutela bipartidista, convienen la adopción de un modelo de alternancia gubernamental y el subsecuente fin del régimen militar. Las determinaciones resultantes de la Declaración de Benidorm de 1956[13], constituirán la base de la transformación de la concepción de seguridad en el país, pues la exclusión pactada de los otros movimientos políticos que existían en ese momento histórico en Colombia servirá como escenario de formación de grupos armados avivando el problema de la insurgencia guerrillera de izquierda. Los rezagos de la época de la Violencia entre los partidos, las dificultades supuestas por el modelo de gobierno del General Rojas Pinilla y la Doctrina de Seguridad Nacional, posibilitarían entonces la reevaluación de los elementos que hasta entonces eran propios de la agenda seguridad en el país e impactaran en la formulación de la misma en las décadas posteriores.

A este respecto es importante resaltar que el legado estadounidense de la lucha anticomunista previsto en la Doctrina de Seguridad Nacional, donde el concepto de Seguridad Nacional había desplazado en importancia la noción tradicional de Defensa Nacional [que no implicaba la consideración de las insurgencias] (Leal, 2011, p. 5), jugó un papel importante en la definición de la agenda de seguridad de la época. Si bien es cierto que como "doctrina y práctica, el apelativo de contrainsurgencia se utiliza desde la década de 1950 por parte de militares franceses, [el concepto] es reciclado por los Estados Unidos durante la presidencia de John F. Kennedy, en 1962, cuando se convierte en doctrina oficial de esa potencia" (Vega, 2015, p. 4) y logra contribuir a la orientación de seguridad colombiana.

Ahora bien, el entendimiento cabal del concepto de seguridad nacional en el periodo de tiempo que comprende el Frente Nacional no puede ignorar la

13. Firmada el 24 de julio de 1956 en Benidorm, España. Fue resultado de las conversaciones entre Alberto Lleras Camargo, jefe único del liberalismo, y Laureano Gómez líder del partido conservador.

naturaleza de las relaciones de Colombia con Estados Unidos. La existencia de mecanismos como el TIAR y un apoyo bilateral continuo, permitieron al país norteamericano difundir una visión anticomunista por toda América Latina, buscando unificar el continente y a los aliados de Estados Unidos bajo una visión que se lanzaba en contra de los grupos armados comunistas y el logro de la consolidación de una política de Seguridad Hemisférica.

En este sentido, después de la desintegración de la Junta Militar que gobernó desde 1957 hasta 1958, el gobierno colombiano inició acciones orientadas a combatir el comunismo y con esto mismo validar la propuesta de seguridad estadounidense. Lo anterior tiene como consecuencia que, como lo indica Vega (2015), Alberto Lleras Camargo (primer presidente del Frente Nacional) gestionara bajo la tutela estadounidense la formación de unidades contra-guerrilleras, ignorando los cuestionamientos políticos internos que pudieran surgir de la utilización de asistencia militar de tal naturaleza y argumentando que toda clase de "restricciones [debían] ser levantadas en virtud de la experiencia cubana y la […] amenaza que los grupos guerrilleros colombianos –sin que hubiera en ese momento ninguno consolidado– [representaban] para la estabilidad del gobierno y del hemisferio"(Vega, 2015, p. 17).

En atención de lo anterior, hay que señalar que para ese momento la formulación de las premisas base de seguridad durante el Frente Nacional atendieron a preocupaciones de carácter interno y a las lógicas anticomunistas instaladas en el hemisferio. De un lado, como se ilustró con anterioridad, existía un temor latente por la eminente entrada del comunismo a la región con la recién ocurrida Revolución Cubana. Y, por otra parte, dentro del nivel doméstico se percibía que las amenazas provenían de la posibilidad de que se gestara un nuevo levantamiento por parte de las Fuerzas Militares y se diera continuidad a la violencia entre partidos.

Respecto a este último tema, es también durante el mandato de Alberto Lleras Camargo que se da el diseño e implementación de la Doctrina Lleras cuyo propósito era lograr que las Fuerzas Militares se mantuvieran neutrales ante los partidos políticos, sin que se vincularan en los temas políticos del Estado a cambio de otorgarles cierto grado de independencia en cuanto a sus reglamentos, disciplina, técnicas y personal (Trejos, 2011).

La confusión suscitada durante este periodo de tiempo acerca del tipo de rol que deberían tener los militares derivó de forma inevitable durante el segundo cuatrienio del Frente Nacional en que las Fuerzas Militares asumieran diferentes papeles respecto al mantenimiento del orden público, dándose así un proceso de militarización en el país. En este contexto, el "estado de sitio" se convirtió en un fenómeno recurrente pese a haber sido pensado originalmente como una excepcionalidad constitucional empleada únicamente para solucionar problemas sociales derivados de la violencia política (González, 2014). La constante excepcionalidad tuvo como consecuencia la deslegitimación de la Constitución, así como al juzgamiento de civiles en tribunales militares, el entrenamiento de autodefensas civiles en zonas rurales y al establecimiento de "zonas de orden público" que a mediano plazo presentaban una amenaza de Seguridad Interna (Leal, 2011).

Por otro lado, se presumía que el comunismo internacional había infiltrado varias regiones del país como Marquetalia, El Pato, Río Chiquito, Guayabero, Sumapaz y la región del Río Ariari en los Departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima, al punto que durante el gobierno de Guillermo León Valencia "en 1961, el Senador Álvaro Gómez Hurtado difundió la idea que en Colombia existían otros Estados, llamados por él "repúblicas independientes", en los cuales los guerrilleros imponían su autoridad, delinquían sin castigo alguno y escapaban a la soberanía nacional" (Ramírez, 2012, p. 315) logrando

desestabilizar la seguridad nacional y hemisférica al constituirse como núcleos comunistas dentro del país y la región (Hurtado, 2006).

> Entre mayo y agosto de 1962, después de conocer las recomendaciones del equipo del General Yarborough, los asesores militares, la Embajada de Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Kennedy, desarrollan un Plan de Defensa Interno Colombiano, el cual es presentado al presidente Valencia y al ministerio de guerra, sentando las bases para un amplio programa de intervención contra-insurgente. (Vega, 2015, p. 29)

Las operaciones llevadas a cabo en los territorios más problemáticos acarrearían un gran desplazamiento de campesinos y civiles, lo que a su vez generó un mayor volumen de adeptos a las células comunistas en territorio colombiano y tuvo grandes repercusiones para la Seguridad Nacional, al dar carta abierta a la creación de grupos con ideales comunistas o socialistas en contra del Estado, amenazando los intereses nacionales y la estabilidad del orden político. Estos grupos se convertirían a largo plazo en una de las amenazas más grandes en términos de Seguridad Nacional, Seguridad Humana y Seguridad Regional, y terminarían por acaparar gran parte de la atención del Estado en las décadas siguientes en lo que a materia de Seguridad se refiere.

Hay que resaltar que durante el mandato de Guillermo León Valencia se generó todo un proceso de actualización de las guerrillas de izquierda caracterizado y coincidente con el debate internacional que propendía por definir la naturaleza de la revolución y el instrumento para llevarla a cabo. De allí que la formación de grupos de vocación castro-guevarista (como el ELN), o influenciados por la revolución china y Mao Tse Tung (como el EPL) cuestionaran el modelo de gobierno sugerido por el Frente Nacional, colocándo en tela de juicio las limitadas e insuficientes preocupaciones de seguridad a las

que respondía. Adicionalmente, durante el mandato de León Valencia hay que tener en cuenta que la crisis económica avivó la respuesta sindical y permitió el posicionamiento de nuevas inquietudes de cara al bienestar de la población y el rol que debía cumplir el Estado frente a estas temáticas, sirviendo de patente de corso para el inicio de la ampliación de la agenda de seguridad en el país.

Ya para 1966, con el ascenso de Carlos Lleras Restrepo al mandato, la crisis advenida desde varios flancos de la esfera nacional había agotado el Frente Nacional en sus aspectos básicos, y abonó el camino para que la reforma de constitucional de 1968 tuviera lugar. Bajo dicha modificación se pretendió reajustar los estatutos convencionales que reglamentaban y regían el país en términos económicos, políticos y administrativos, y se esperaba superar la crisis heredada del mandato de Valencia.

> En desarrollo de la modernización del Estado y como producto de las crecientes tensiones sociales, las actividades de la institución castrense se orientaron hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional; su acción se centró en la ya conocida lucha ideológica contra un comunismo que se veía aún como amenaza. […y…] también se enfatizó en la conquista de la población urbana y rural mediante programas radiales, el apoyo a la colonización y a la reforma agraria, así como el desarrollo de la acción cívico-militar. (Ramírez, 2012, p. 326).

A lo anterior hay que sumar la consideración incipiente de temas como la explotación del subsuelo, a partir de lo cual se iniciaron procesos que "reglamentaba el régimen de propiedad de la nación y los particulares en relación con minas y yacimientos de hidrocarburos" (Ramírez, 2012, p. 325), abordando un aspecto que será de fundamental importancia en la adopción de

una perspectiva más amplia del concepto de Seguridad Multidimensional en su faceta ambiental. En este mismo sentido, la reforma agraría (retomada en otros momentos de la vida política colombiana y, prioritariamente en el Acuerdo Final firmado entre las FARC y el gobierno nacional), permite inferir que desde este momento se empiezan a dar nuevos abordajes en seguridad que extienden el espectro de entendimiento de los temas incluídos en la compresión de lo que corresponde al Estado en temas de Seguridad.

De otra parte, durante el último gobierno del Frente Nacional, encabezado por Misael Pastrana Borrero, el estado de sitio casi permanente en el país vio el surgimiento del Movimiento 19 de abril (M-19) ''con la consigna con el pueblo, con las armas al poder" (Ramírez, 2012, p. 336); además de ello, es durante este periodo que se aprueba el protocolo de reformas al TIAR.

Si bien es cierto que durante el periodo que comprende el Frente Nacional, es decir de 1958 hasta 1978, es evidente la existencia de una mayor preocupación por temas que serán considerados posteriormente en la noción de Seguridad Multidimensional, la violencia eminente del contexto político colombiano durante la época pareció imposibilitar la incorporación de otros temas que contribuían al bienestar de la población y que caen en el espectro referencial de acción política del Estado.

Se puede establecer entonces que, obedeciendo a las demandas de los contexto político durante los años del Frente Nacional, la Seguridad Nacional (en su acepción más tradicional) se posicionó como enfoque principal y prioritario; en efecto en 1960 se da creación al Consejo Superior de Defensa Nacional que será una de las herramientas del Estado para velar por la estabilidad del orden público. El Consejo Superior de Defensa Nacional, tenía como propósito colaborar en el estudio y preparación de las medidas necesarias para garantizar

la Seguridad y Defensa de la Nación, mediante la coordinación de actividades militares y civiles; la evaluación de la inteligencia estratégica relativa a la defensa nacional; la presentación de recomendaciones sobre Defensa Nacional y la elaboración de informes sobre la materia; supervigilar el cumplimiento de las medidas dictadas por el Gobierno, relativas a la Defensa Nacional; y, dictar su propio reglamento (Ministerio de Defensa, 1965).

En suma, el Frente Nacional constituye un periodo histórico en el cual la seguridad será formulada atendiendo a las diferentes coyunturas tanto nacionales como internacionales (esto último bajo el entendido de que la lucha anticomunista fue una temática preponderante y determinante durante la época), en el cual además se puede divisar la preocupación incipiente por otras temáticas cuyo abordaje será imperativo en otros momentos históricos del país para lograr una consideración integral de las causas estructurales del conflicto armado. Indudablemente, la importancia de este periodo histórico también está suscitada por la aparición de los grupos al margen de la ley de mayor vigencia en el Estado Colombiano (que terminan por obstaculizar la admisión de una doctrina amplia de seguridad), y la necesidad manifiesta de incorporar mecanismos democráticos que tomen en consideración las fuentes primarias de conflicto (no únicamente en términos político-institucionales) para evitar derramamientos de sangre en el país.

6. La Contrainsurgencia como Rectora de la Seguridad y Defensa Nacional

En el contexto latinoamericano, la revolución cubana y su triunfo de 1959 fue determinante tanto para el desarrollo de la insurgencia en la región, como para la COIN estadounidense, ya que evitar la expansión del modelo cubano en su área de influencia era un objetivo implícito. Para lograr dicho objetivo, el modelo de la COIN estadounidense fue exportado a la región latinoamericana,

a través de la Escuela de las Américas y otros centros de entrenamiento militar, en los cuales se entrenaba a Fuerzas Armadas locales bajo los preceptos de la COIN estadounidense. Es importante señalar que la contrainsurgencia que sobrevive y se acentúa con el fin del Frente Nacional es la heredera de largos procesos de contrainsurgencia ya arraigados en el contexto político colombiano.

En este orden, se puede observar que los preceptos de la Escuela Estadounidense de COIN no fueron del todo efectivos a juzgar por las experiencias de Afganistán e Irak, e incluso en el caso latinoamericano, donde pese a la fuerte influencia de esta escuela se dio la persistencia de grupos insurgentes que viraron en grupos guerrilleros y que aún permanecen presentes en la región. Ejemplo de ello es la perpetuación de grupos guerrilleros en Colombia por más de cincuenta años, fenómeno que determinado el conflicto interno colombiano, y por lo tanto a sus Fuerzas Armadas, las cuales han priorizado tácticas de COIN respondiendo a la naturaleza del enemigo.

En este sentido, si bien las lecciones de las diferentes Escuelas de COIN han estado presentes en el accionar de las Fuerzas Armadas y así mismo en el conflicto armado, el modelo de COIN colombiano tiene ciertas características propias. En concordancia con el planteamiento del General Ospina, este modelo tiene tres elementos definitorios en el nivel político estratégico. (Ospina 2009). El primero de ellos refiere el hecho de que en el caso colombiano la COIN va más allá de un enfrentamiento contra un grupo insurgente, ya que además de ello se procura por la recuperación del ‘‘orden democrático a través de la seguridad para todo el pueblo colombiano" (Ospina, 2009). Lo anterior, responde a lo que se asume como centro de gravedad, que no se limita a la población en sí y se define ‘‘por la relación entre el insurgente y la población civil’’ (Ospina, 2009). En correspondencia con lo anterior, la tendencia de la COIN además de derrocar militarmente al insurgente, busca legitimar al Estado, ello mediante la aceptación voluntaria de la población de las medidas adoptadas por este.

Un segundo elemento a tener en cuenta en la caracterización de la COIN es el concepto de seguridad, ya que como se expuso en el párrafo anterior el centro de gravedad se ubica en la relación cívico- estatal, por lo cual el concepto de seguridad no puede limitarse a su acepción clásica, y por el contrario contempla una visión ampliada, en el que las Fuerzas Militares no enfocan su accionar únicamente en ser guardianes de las fronteras, pues su principal función está relacionada con el mantenimiento del orden público (Colombia nunca más, 2008). Así, al concebirse como centro de gravedad la relación entre el Estado y la población civil se aproxima a los postulados desarrollistas de la escuela estadounidense, buscando brindar condiciones óptimas a la población para legitimar al Estado y así mantenerle alejado de los insurgentes.

El tercer elemento de la COIN versa en la forma en la que se construyen la relaciones cívico-estatales; aunque se considera la idea de mentes y corazones de la Escuela británica, esta es revaluada proveyendo ‘‘acciones de mayor trascendencia basadas en la acción interagencial, que más que, repartir ayudas temporales, institucionaliza en diferentes aspectos’’ (Ospina, 2009), fortaleciendo la relación del Estado con la población y así limitando la capacidad de la insurgencia de hacerse con la población. Este enfoque además de considerar programas a largo plazo, desarrolla programas de choque que permiten atender y solucionar las necesidades de carácter inmediato de la población, como lo sería eventualmente, la doctrina de acción integral de las Fuerzas Militares colombianas planteada desde el año 2001, la cual ha guiado parte importante de su accionar y estrategia.

La estrategia de COIN de las Fuerzas Armadas colombianas ha cambiado a lo largo del tiempo respondiendo a las condiciones circunstanciales y a la naturaleza de la insurgencia. Al comienzo de la década de los sesenta en medio de una fuerte violencia sectaria, las Fuerzas Militares iniciaron acciones dirigidas a ‘‘ganar la adhesión y afecto de los campesinos’’ (Valencia Tovar, 2011),

surgiendo así la acción cívico militar, la cual apoyada en la acción psicológica '' trataba de ganar la mente y el corazón de los pobladores campesinos hasta lograr su colaboración en un esfuerzo mancomunado para erradicar el bandolerismo rural y toda manifestación de conductas violentas'' (Valencia, 2011).

Otro escenario de la COIN refiere el Plan Laso, que tiene lugar durante el periodo de gobierno de Guillermo León Valencia, en el cual el Comando del Ejército trazó un plan basado en las ''i) experiencias derivadas de una nueva actitud militar ante el problema, ii) las técnicas de combate irregular dentro de un conflicto armado regular (…) rápidamente asimiladas por los mando del Ejército y iii) la gestión de la Misión Militar de Estados Unidos en Colombia y cooperación entre los dos Estados'' (Valencia, 2011). El Plan Laso tiene sus cimientos en la Escuela estadounidense, al priorizar la acción integral como mecanismo para atacar el centro de gravedad de los insurgentes mediante la suma de esfuerzos estatales para poner fin a la violencia y a la insurgencia. Con un enfoque similar al anterior Plan, fueron concebidos el Plan Perla y Andes (durante el gobierno de Lleras Restrepo), los cuales buscaban mediante un enfoque integral poner fin a las insurgencias de diversos matices que avanzaban debido al equívoco tratamiento de estas mediante una confrontación armada. Ejemplo de lo anterior, fue la directriz desde el Comando del Ejército de ordenar a las brigadas urgencias de carácter no militar, ello bajo un enfoque de seguridad y acción integral.

> En 1978 se aprueba un Estatuto de Seguridad de clara factura contrainsurgente que imita la doctrina de seguridad nacional de las dictaduras del Cono Sur. Dicho Estatuto impone medidas que combinan una normatividad de carácter preventivo junto con acciones represivas contra las organizaciones populares legales, campesinas, sindicales y estudiantiles, hasta el punto

> que se generaliza la aplicación de la tortura a los prisioneros políticos y los activistas sociales, como parte de la lógica contrainsurgente de combatir al «enemigo interno». Además, ese estatuto se legaliza la Justicia Penal Militar y los Consejos Verbales de Guerra, con lo cual se generaliza la impunidad (Vega, 2017, p. 33).

Ahora bien, el temor al comunismo y la amenaza que esta ideología presentaba a la Seguridad Nacional de Estados Unidos fue algo que Colombiano adoptó por extensión, y siendo ello un argumento adicional para ubicar a los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN como una amenaza a la seguridad nacional. En este sentido, la COIN en el contexto colombiano se adopta como:

> Una doctrina de guerra total, que involucra la guerra psicológica, el entrenamiento de fuerzas locales para enfrentar a los insurgentes nativos, la creación de grupos paramilitares, el impulso de acciones terroristas, la realización de acciones encubiertas por la CIA y otras agencias secretas de Estados Unidos la sofisticación en operaciones de espionaje y el fomento de la delación por parte de los pobladores locales, el apoyo a sindicatos y organizaciones proclives al «mundo libre», el impulso a la acción cívico-militar para sacar el ejército de los cuarteles e insertarlo en la vida cotidiana, la ayuda económica de tipo militar, el fomento de publicaciones sobre contrainsurgencia por los ejércitos locales (Vega, 2015, p.27-28).

Es importante señalar que esta táctica militar tiene una característica especial y es que no sigue los lineamientos de una guerra regular, la cual usualmente es entre dos Estados y además sigue ciertos parámetros en términos de que es permitido y que no. En este tipo de guerra (guerra de guerrillas) y además utilizando la contrainsurgencia, las reglas de juego son más maleables y no

acatan precisamente el Derecho Internacional Humanitario como lo estipulado en las Convenciones de Ginebra, y realmente tampoco tienen en cuenta los Derechos Humanos ni las demás normas internacionales (Vega, 2015).[14]

Esta táctica, aunque eficiente en lograr derrotar al enemigo, terminó siendo un arma de doble filo en el momento que las autodefensas aplicaran las mismas tácticas y desbordando las capacidades del Estado y de las Fuerzas Militares. De cierta manera, la contrainsurgencia se convirtió en un modelo en el cual los militares y la policía terminaron por apoyarse en la población civil para contrarrestar la difusión del comunismo y mantener la armonía con la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Moncayo, s.f.).

7. La Seguridad bajo la Comprensión de Colombia como un Estado Social de Derecho: La Constitución Política de 1991

La Constitución Colombiana de 1991, constituye un punto fundamental para la instauración de una nueva concepción en materia de seguridad y defensa en el país. De hecho, se puede decir que la creación de la Constitución de 1991 fue la máxima expresión de los cambios sociales y la reformulación de las dinámicas políticas que tenían lugar en Colombia en aquel momento; por consiguiente, para un mejor entendimiento de la relevancia de este hito histórico en lo que a materia de seguridad y defensa se refiere, se hace imperante reconocer el contexto en el que dicha iniciativa se estableció.

En este sentido, cabe aclarar que Colombia a finales de los ochentas enfrentaba grandes cambios y retos, como, por ejemplo, los problemas económicos causados por el agotamiento del sistema de industrialización por sustitución de importaciones, así como los grandes índices de violencia política que escalaron significativamente, pues, mientras que en 1980 se registraron 177 muertes por

14. La COIN como estrategia desconoce parcialmente la moral y ética internacional en el sentido de Richard Betts como limitantes.

razones políticas, en 1988 la cifra alcanzó un tope de 4.304 (Hurtado, 2006). El punto diferencial entre la violencia de esta época y la que tuvo lugar en los años anteriores radicaba en que "no se trataba de enfrentamientos bipartidistas, sino que se [proviene] de un conflicto armado donde distintas guerrillas comunistas desafiaban al Estado" (Hurtado, 2006, p. 98). Fue precisamente como resultado del surgimiento de dichas guerrillas que los grandes latifundistas de la época decidieron tomar la seguridad en sus manos y ser los patrocinadores de grupos paramilitares que velarían por sus intereses particulares.

En dicho escenario surgen otros actores que impactaron en los problemas de seguridad del país, como lo fueron grupos criminales dedicados al narcotráfico, los cuales desarrollaron actividades económicas al margen de la ley que ayudaron a incrementar los problemas de seguridad, incluso llevando la inseguridad a los centros urbanos, una escalada del conflicto no evidenciada mediante las actividades guerrilleras y paramilitares que se mantenían en las zonas rurales.

Por otro lado, se debe considerar que durante la presidencia de Virgilio Barco surgió una guerra no oficial denominada "la guerra sucia", que tuvo "como principales víctimas a militantes de izquierda y representantes de movimientos sociales -sindicatos, campesinos y profesores-. Tres candidatos presidenciales fueron asesinados en menos de un año y los miembros de terceras fuerzas como la UP fueron prácticamente aniquilados" (Chernick, 1999, p.177).

Así mismo, a partir del legado del Frente Nacional, los partidos políticos se desenvolvieron como "maquinarias clientelistas que no representaban adecuadamente a la nación, a la vez que cerró la posibilidad a terceras fuerzas de acceder efectivamente al poder" (Hurtado, 2006, p. 98). El anterior panorama, que puso en jaque la paz y la estabilidad nacional, da cuenta de la razón por la cual los esfuerzos de la República de Colombia se concentraron en la lucha contra dichas amenazas internas, pues estas no solo ponían en peligro

la integridad de los individuos, sino que suponían un gran reto a la economía y a los procesos políticos nacionales, por lo cual propendían a un desequilibrio de toda la estructura nacional.

Es así como la Constitución de 1991 surgió como una alternativa para contrarrestar dicho panorama, pues esta proponía un pacto político más abierto (integrando incluso a ex combatientes de guerrillas como el M19). No obstante, la pregunta que se debe hacer en este punto es: ¿Realmente hubo un cambio en las dinámicas de Seguridad y Defensa nacionales con la creación de la nueva constitución?

Aunque la constituyente buscó legitimar dinámicas de poder donde se respetaran los derechos de los individuos y se optara por una política diversa, capaz de articularse apropiadamente a nivel nacional –para alcanzar la tan añorada paz que le daría solución a los problemas de seguridad interna del país, y así finalmente pasar a concentrarse en amenazas más amplias-, se puede decir que esta tuvo alcances limitados, pues si bien labró el campo para el accionar del país de una forma más integral, algunas de sus asunciones no se materializaron a cabalidad.

En primera instancia cabe rescatar el marco jurídico del que goza la Constitución de 1991, en el cual se desarrolla una política de seguridad humana más amplia y concisa, pues precisamente enmarca la importancia del respeto por los individuos y reconoce todos sus derechos fundamentales, no en vano se le considera la constitución de los Derechos Humanos. Esta nueva concepción donde se prioriza las garantías a los individuos se halla muy de la mano de la noción de seguridad humana, considerando que esta última supone un énfasis novedoso sobre "la necesidad y los derechos de las personas, entendidos como prioridad básica y superior a los intereses de índole estatal y más relacionado

con la promoción de políticas de desarrollo que con el empleo de herramientas militares y policiales" (Jaime et al, 2014, p. 5).

Si bien la Constitución de 1991 suscita una nueva oportunidad para afianzar una estrategia en materia de seguridad humana, distintas presunciones se han quedado en el papel, tal es la preponderancia de los Derechos Humanos sobre los intereses estatales, pues no es un secreto el basto número de ocasiones en el que los derechos individuales fueron vulnerados por parte no solo de los actores al margen de la ley como las guerrillas, sino por parte del mismo Estado.

En este punto se resalta principalmente la responsabilidad del Estado colombiano, pues si bien no es quien violenta la integridad de los sujetos, es sobre él que recae mayor responsabilidad al ser actor que ostenta el monopolio legítimo de la fuerza dentro del país. De hecho, el artículo 217 establece que "la nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea" (Const., 1991. Art 217), razón por la cual, son precisamente estos actores quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos.

En congruencia con lo anterior, se debe reconocer el funcionamiento institucional del país en materia de seguridad y defensa, en lo que a esto respecta. La Constitución de 1991, señala que: "las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional" (Const., 1991, Art. 217), y por su parte la Policía Nacional tiene como "fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (Const., 1991, Art. 218). Siendo así, se encuentra que esta Constitución establece un "esquema informal de subordinación civil en el sector de la defensa

y la seguridad nacional, esquema que no quedó establecido formalmente, pero que rápidamente se constituyó en norma no escrita de la política colombiana" (Flórez, 2012, p. 36).

Siendo así, se puede establecer que efectivamente pese a los cambios que se pretendieron realizar con la Constitución de 1991, el Estado colombiano permaneció inmerso en sus luchas nacionales que propendían por mayor estabilidad dentro del territorio y obtener mayor legitimidad, especialmente en aquellos sectores rurales donde otros actores habían asumido las labores del Estado y obtenido reconocimiento por parte de la población.

Pese a centrarse casi en su totalidad en una agenda de seguridad nacional, se puede decir que mediante la Constitución de 1991 se estableció el marco legal para con el tiempo ir instaurando una democracia más participativa, labrando así el camino, para una agenda de seguridad más abierta, humana y multidimensional, la cual se constituye como pieza fundamental para la ampliación de una perspectiva en materia de defensa. No obstante, parece imperante una resolución de los conflictos internos en la República de Colombia para proceder a aventurarse en una percepción de seguridad más amplia, capaz de integrar nuevas amenazas a la seguridad que no necesariamente se relacionen con el ejercicio de la fuerza.

8. Siglo XXI; ¿Un Viraje Hacia la Seguridad Multidimensional?

La llegada del nuevo siglo y en particular de las dinámicas propias de éste asociadas el fenómeno de la globalización impactan sin lugar a duda la política de Seguridad y Defensa de Colombia, pues si bien en atención al contexto nacional las amenazas de orden interno siguen siendo preponderantes, se reconocen nuevas amenazas propias de un Sistema Internacional altamente

interdependiente, frente a las cuales Colombia podría llegar a ser tanto sensible como vulnerable[15].

Para una mejor comprensión de las directrices y fenómenos que han impactado en la noción de seguridad y defensa en Colombia a lo largo siglo XXI, se debe partir de la premisa de la ausencia de una política realmente estatal de seguridad y defensa, lo cual se expresa en rupturas entre los periodos de gobierno, así como en la fractura de procesos y la predominancia de visiones de gobierno y no de Estado. En consideración de lo anterior, este apartado propone un abordaje por periodos presidenciales del Siglo XXI, ello con el fin de identificar patrones de fractura y continuidad, aquellos temas que predominan en la agenda de seguridad, así como los objetos referentes de esta, ello con el fin de comprender si en efecto en Colombia la seguridad enmarca en una perspectiva multidimensional.

8.1 El Fracaso de la Zona de Distensión y el Plan Colombia: Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Durante el gobierno de Andrés Pastrana la agenda de seguridad priorizó la lucha contra el narcotráfico y la existencia de los grupos guerrilleros como las principales amenazas a la seguridad nacional; de hecho, Pastrana mantuvo una política cuyo fin último era lograr la paz, objetivo por el cual ‘‘se jugó su prestigio y capital político a favor de este anhelo nacional , e incluso bautizó su Plan de Desarrollo Cambio para construir la Paz’’ (Pizarro, 2017, p.276).

Con motivo de esto, y en de sus primeras actuaciones como presidente, Pastrana se reunió con Manuel Marulanda y el Mono Jojoy, confirmando su

15. Los conceptos de vulnerabilidad y sensibilidad se encuentran enmarcados en la obra *Power and Indepedence* (1989) de Robert Keohane y Joseph Nye. De esta manera se entiende por vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad de un actor de adaptarse a fenómenos externos o acciones de terceros (¿Qué capacidad de respuesta tengo como Estado frente a X suceso? ¿Implica X una modificación considerable de mi estructura?). Por otro lado, la sensibilidad está asociada al concepto de poder, puesto que implica los grados de respuesta que tiene un actor frente al impacto de situaciones externas que pueden afectarlo. En este sentido, un actor puede ser sensible ante X, pero no necesariamente vulnerable.

compromiso electoral de decretar ''el despeje de cinco municipios e iniciar diálogos y negociaciones en la búsqueda de la paz'' (Villamizar, 2017). Así, el 14 de octubre, Pastrana se dirigió en cadena nacional a los colombianos manifestando lo siguiente

> Colombianos: Apoyado en la Constitución y la Ley, que juré cumplir como Presidente de Colombia y con la confianza irrestricta en la capacidad de reconciliación de los colombianos, he tomado la decisión de ordenar el despeje por parte de la Fuerza Pública en los municipios de Uribe, Mesetas, Macarena y Vista Hermosa, del departamento del Meta, y de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Esta medida estará vigente durante 90 días y tiene como finalidad facilitar los diálogos entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puedan coincidir a un proceso de paz consolidado y firme (Pastrana, 1998).

En este punto, es importante señalar que dichos acercamientos se desarrollaban en medio del conflicto, es decir no se acordó para entonces un cese al fuego, factor a considerar toda vez que en este contexto tuvo lugar una de las acciones de mayor importancia a lo largo de la historia de las FARC: la toma de Mitú. Esta operación fue ejecutada por cerca de 1.500 guerrilleros del Bloque Oriental de las FARC bajo la dirección del Mono Jojoy, teniendo como resultado la toma de la ciudad capital del departamento del Vaupés durante 72 horas y la muerte de miembros de la Policía Nacional.

La toma de Mitú debe ser leída desde una perspectiva más amplia, pues representa el crecimiento de las FARC, quienes para entonces habrían logrado contar con el mayor número de guerrilleros desde su creación, ampliado sus

áreas de influencia, mejorado su armamento, adquiriendo mayor capacidad económica producto del secuestro y extorsión, así como de su participación de diferentes eslabones del narcotráfico.

Pese a la toma de Mitú y a la incertidumbre, frente a las verdaderas intenciones de las FARC, y tras la desmilitarización de la zona de distención, el 7 de enero de 1999 iniciaron las negociaciones de paz de San Vicente del Caguán. Al respecto, cabe señalar la ausencia de Manuel Marulanda Vélez, dando lugar a la escena de la silla vacía, lo cual sin duda impactó las negociaciones, más no impidió su inicio, ello bajo la idea que ‘‘la ausencia de Manuel Marulanda Vélez no [podría] ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa de diálogo para acordar una agenda de conversaciones que deben conducir a la paz’’ (Pastrana, 1999).

Es igualmente importante aludir para los fines del presente documento la mención del presidente a las Fuerzas Armadas en su discurso en la mesa de instalación, ubicando a estas como un actor determinante en la protección de la Constitución y el orden nacional, pues ello permite comprender que, pese a la desmilitarización de una extensa zona, las Fuerzas Armadas respaldaban el proyecto político de Pastrana. En este sentido, aunque no fuese bajo un rol ofensivo, las Fuerzas Armadas continuaban siendo un actor clave en la protección de la soberanía estatal desde una perspectiva de seguridad tradicional.

Ahora bien, abordando otra arista del periodo presidencial de Andrés Pastrana, es importante considerar que se estrecharon lazos con Estados Unidos mediante programas como el Plan Colombia, cuyo objetivo era “poner fin al conflicto armado, eliminar el tráfico de drogas y promover el desarrollo económico y social” (Veillette, 2005, p.2); iniciativa con la cual Pastrana pretendía “construir un esfuerzo de paz en tres componentes: conversaciones

de paz con la guerrilla; Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad; y asistencia internacional para financiar programas económicos, políticos, sociales y militares" (Ramsey III, 2009, p. 56).

Resulta relevante aclarar que en este periodo se fortalecieron lazos entre Colombia y Estados Unidos, bajo un modelo de seguridad cooperativa, en el cual los dos actores confluían pese a que sus intereses fuesen diferentes. Así, por un lado, Colombia buscaba acabar con su conflicto interno, mientras que Estados Unidos se interesaba en contener las guerrillas de izquierda y el narcotráfico.

Al respecto, es importante señalar que en este modelo de seguridad cooperativa tuvo lugar una situación parcial de dependencia, o al menos de cooperación asimétrica, puesto que Colombia se convirtió en el mayor receptor de ayuda militar norteamericana del continente, hecho que influyó en la política exterior colombiana, la cual priorizó a Estados Unidos limitando en gran medida el relacionamiento de Colombia con otras regiones.

Cabe mencionar que dicha conducta respondió al enfoque tradicional de Política Exterior que ha tenido la República de Colombia, noción que se ha guiado por un modelo de Réspice Polum o "mirar hacia el norte", el cual obedeció en primer momento a la lógica de la postguerra, donde Colombia en su carácter de Estado en vías de desarrollo encontró en los países victoriosos aliados estratégicos, pues ya para ese entonces se tenía "plena conciencia del cambio de balance mundial de poder a favor de Estados Unidos" (Pardo & Tokatlian , 2010, p.. 219).

Ahora bien, más allá de las dinámicas internas de la República de Colombia, se debe considerar el gran cambio que significó el siglo XXI en agenda de seguridad internacional, ya que los acontecimientos del 9/11 que tuvieron lugar en Estados Unidos, fueron un hito histórico sin precedente desde el cual se reformuló la comprensión de seguridad al reconocer nuevas amenazas como

el terrorismo, las cuales no involucraban directamente el enfrentamiento entre Estados, pues estas podrían terminar afectando no sólo al Estado *per se* como actor, sino también a su población.

En este orden de ideas, el aliado estratégico y principal benefactor de Colombia, Estados Unidos, comenzó la "guerra contra el terror" donde el foco de cooperación en materia de Seguridad y Defensa pasó a ser inmediatamente Medio Oriente, por lo que Colombia tuvo que reformular el discurso nacional, contemplando que la estrategia de Estados Unidos era "la participación en guerras de elección para modelar el entorno internacional" (Piella, 2014, p. 270), por lo que en el 2002 aún bajo el gobierno de Pastrana, las FARC dejaron de ser catalogadas como guerrilla para pasar a ser caracterizada como grupo terrorista por parte de la comunidad internacional, lo que recobraría la atención de Estados Unidos en Colombia, a la vez que obligaría a un cambio en el relacionamiento del Estado con éste grupo.

Siendo así, se puede observar que al menos en lo que a este mandato presidencial se refiere, si bien en el Sistema Internacional ya había empezado a asumir una agenda de Seguridad Multidimensional más consistente, con el fin de hacerle frente a las nuevas amenazas, Colombia continuaba priorizando tanto el ámbito doméstico como las amenazas tradicionales, limitando su estrategia en términos de seguridad nacional.

En definitiva, se considera que el periodo presidencial de Pastrana en términos de seguridad debe ser leído bajo la interrelación de dos variables: las negociaciones con las FARC y la relación con Estados Unidos, toda vez que este último se convirtió en un ''socio clave para recomponer el orden público interno, seriamente deteriorado en la última década. La mayor expresión de esta nueva línea de acción sería el diseño e implementación del Plan Colombia'' (Pizarro, 2017, p. 277).

Finalmente, y puntualizando en las negociaciones de paz, se podría pensar que parte de los factores que impidieron que estas cumplieran sus objetivos (más allá de la falta de voluntad política de las FARC) devienen de la incapacidad del Estado de disponer de los diferentes campos del poder nacional en pro de un objetivo nacional, de esta manera, se priorizó en el poderío militar y enfatizó en las amenazas de orden tradicional, dejando de lado la importancia por ejemplo del campo social, el cual como resultado de su desatención se ahondó la desconfianza frente al accionar del gobierno. Pese a dichas dificultades, lo cierto es que en el periodo presidencial de Pastrana se lograron fortalecer y modernizar las Fuerzas Armadas, limitando así el accionar de las FARC tras su salida de la zona de distención.

8.2 En la Búsqueda de la Recuperación de la Soberanía Nacional en Términos Tradicionales: Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)

De otra parte, el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez constituye un punto de inflexión en el diseño de la agenda de seguridad del país. Si bien es cierto que desde la finalización del Frente Nacional la preocupación por la existencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio nacional representaba un tema prioritario, es durante el ascenso del ex mandatario que se genera un cambio retórico y de tratamiento a los grupos insurgentes en el país.

Bajo la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, sostenida durante sus dos periodos de gobierno, se establece que el pluralismo y democratización de la seguridad constituye un elemento imperativo para el logro del bienestar de los colombianos y se caracteriza y asocia a los grupos armados insurgentes como terroristas. Incluso el documento de Política de Defensa y Seguridad Democrática, expedido por el gobierno colombiano en el año 2003, establece que:

> La antípoda de la política democrática es el terrorismo que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros al costo de la vida de miles de civiles. Es lo que hemos visto en los atentados del club El Nogal en Bogotá y de Neiva. Es lo que hemos visto en Fortul, Arauca, donde terroristas engañaron a un niño con una bicicleta bomba que luego activaron, acabando con su vida. Frente al terrorismo sólo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal, soportarán todo el peso de la ley. (Ministerio de defensa, 2003, p. 6)

A este respecto no se debe ignorar que, tal como se habrá podido evidenciar a lo largo del presente capítulo, la agenda de seguridad colombiana se ha visto comúnmente moldeada por las dinámicas propias de la coyuntura internacional (principalmente las lógicas retóricas de seguridad estadounidense), y es en este sentido que la política de seguridad colombiana se encuentra alineada durante esta época con la misma blandida por el gobierno de Bush.

Bajo que este presupuesto, se encuentra entonces que la política de seguridad democrática se adscribió a "la guerra contra el terrorismo posterior al 11–S y profundizó la denominada norteamericanización de la lucha" (Páez, 2009, p. 22); de hecho, Estados Unidos consideró que tal formulación de la seguridad trabajaba en concordancia con sus "intereses en materia de seguridad nacional e internacional, afirmando que era necesario impulsar la seguridad hemisférica, incluyendo el combate contra el terrorismo y un programa emprendedor pero equilibrado contra los narcóticos" (Páez, 2009, p. 22).

Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez una vez más se hizo evidente la priorización de la agenda de seguridad nacional. Esta vez, el uso de estrategias armadas se consolidó como punto clave en la lucha contra las amenazas internas y fue bajo esta misma lógica que Uribe "inició una serie de acciones militares ofensivas que condujeron a la recuperación gradual, sistemática y sostenida

del control territorial [y] lanzó una extensa campaña de interdicción contra el narcotráfico" (Pinzón, s.f., p. 4).

La seguridad democrática "reflejó la visión especifica de lo que el gobierno comprende por seguridad, la forma de llegar a ella y sobre todo, cuáles son los obstáculos hacia su consolidación" (Páez, 2009, p. 8) y tuvo como objetivo principal dar respuesta al ambiente de inseguridad interno de la época. Siendo así, se encuentra que:

> Dentro de ella [refiriéndose a la política de Seguridad Democrática] se establecen como amenazas las acciones producidas por los grupos guerrilleros, autodefensas y en general los grupos al margen de la ley y de delincuencia común como el terrorismo, el narcotráfico, tráfico de armas y municiones de todo tipo, secuestro, homicidio y extorsión. Además, se establecen como propósitos fundamentales: la consolidación territorial, el mantenimiento de la capacidad disuasiva, el fortalecimiento por parte de las Fuerzas Militares, la protección a la población, y la eliminación del narcotráfico (Ministerio de Defensa Nacional, 2003).

Atendiendo a lo anterior se puede establecer de forma adicional que las dinámicas durante el gobierno de Uribe Vélez estuvieron dirigidas a la militarización del Estado y la recuperación del territorio; la visión en materia de seguridad y defensa estuvo ampliamente relacionada con los preceptos del realismo, y en este sentido, la lucha armamentista se mantuvo como estrategia fundamental. De hecho, durante esta época el gasto en este sector aumentó llegando a un promedio de 3.8% del PIB; "además se aprobaron 7.5 billones por impuesto al patrimonio (2007-2010) con el fin de ampliar las capacidades de lucha de la Fuerza Pública, especialmente el tema de movilidad y operaciones especiales" (Valencia, 2012, p. 7).

En este mismo sentido, siendo la seguridad democrática el punto cardinal del gobierno de Uribe, la severidad del pie de fuerza y el fortalecimiento del mismo se constituían como desarrollos primordiales. No es de extrañar que dentro de los logros obtenidos en el marco de este periodo presidencial se estime que "de 20.776 hombres en armas en el 2002 [las FARC] pasaron en el 2009 a 8.248 y a 8.000 aproximadamente hasta Junio de 2010; y el ELN en el mismo periodo disminuyeron de 4.700 sus efectivos en armas a 1.500" (IEGAP, 2010, p. 8). Indudablemente, el énfasis dado a la lucha contra los grupos insurgentes obtuvo un impacto significativo observado a tenor de la disminución del número de efectivos, y posibilita a su vez inferir que gran parte del esfuerzo estatal se encontraba destinado a los esfuerzos orientados a respaldar una perspectiva de seguridad que poco o nada incluye la diversidad temática de la Seguridad Multidimensional.

Es importante resaltar, que atendiendo a lo anterior, la descomposición del Estado, y la delincuencia organizada obstaculiza la atribución de mayor relevancia a otras amenazas como los problemas medioambientales, el cibercrimen, las migraciones. De hecho, fueron numerosas las violaciones a los Derechos Humanos que se vivieron durante esta época, tal y lo representarían los casos de falsos positivos y las 26 masacres identificadas por el Centro de Memoria Histórica (2013) durante este gobierno, las perjudiciales reformas al modelo de salud, las fallas en los modelos de desarrollo de las zonas rurales (esto ejemplificado por escándalos como agroingreso seguro), entre otros.

Ahora bien, respecto a la política exterior en el ámbito regional no se puede ignorar que durante la presidencia de Uribe Vélez las relaciones diplomáticas con los países vecinos estuvieron caracterizadas por las tensiones constantes.

Por otra parte, y concordancia con el planteamiento inicial acerca de la alineación de la agenda de seguridad nacional con la misma del gobierno

estadounidense, es de fundamental importancia señalar que en este periodo la lucha antinarcóticos se posiciona como una problemática imperante en la definición de las nociones y las acciones propias de la seguridad de este periodo de gobierno. En este sentido, pese a que la lucha toma particular fuerza con la llegada de Uribe al poder, ésta es una temática cuyo abordaje había sido motivado desde gobiernos precedentes, siguiendo una lógica en la cual:

> Al reflejar sobre las prioridades básicas de la política antinarcóticos de los Estados Unidos bajo Clinton, el país sigue esencialmente las mismas [estrategias]… metas que han caracterizado la política estadounidense desde Reagan… con las cuales se pretende ayudar a las naciones de oferta y tránsito a 1) destruir las organizaciones principales de narcotráfico a través del arresto, convicción y encarcelamiento de sus líderes y la incautación de sus drogas y bienes, entre otros; 2) reducir la oferta de narcóticos a través de la erradicación, la reducción del cultivo de las plantas y otros esfuerzos de enforcement; 3) aumentar la voluntad y capacidad política de las instituciones nacionales para luchar contra las actividades de narcotráfico; y 4) hacer mayor uso de las organizaciones multilaterales para compartir las cargas y los costos de los esfuerzos internacionales de control de drogas (Bagley, 1998, p. 108).

Además de ello, hay que resaltar que se pone de relieve esta problemática durante el gobierno de Uribe Vélez, pues la estrecha relación existente entre la cuestión de las drogas ilícitas y las dinámicas del conflicto interno permite la sincronización de las temáticas y sus diferentes abordajes.

En síntesis, el gobierno de Uribe Vélez priorizó elementos tradicionales de la seguridad, extendiendo la presencia del Estado mediante sus Fuerzas

Armadas en el territorio nacional, incluso en aquellas partes en donde estas no habían tenido presencia. Bajo este objetivo se buscó ‘‘combatir bloqueos y otros actos subversivos que amenazaban el tránsito aún por carreteras principales y bajar la tasa mundial más alta de secuestros’’ (Bushnell, 2007, p.414). De esta manera y entendiendo la soberanía nacional como condición *sine qua non* para la seguridad nacional, el Estado logró recuperar el monopolio de la violencia y el dominio territorial en lugares donde se había gestado un fenómeno de sustitución adversa, en el que grupos al margen de la ley habrían logrado construirse como actores dominando, supliendo las funciones del Estado.

Si se quisiera sintetizar la visión de seguridad en el periodo en estudio en un solo término este deber ser el de amenaza terrorista, pues es justamente bajo este que se sustenta la política de seguridad y defensa a la vez que se fortalece el relacionamiento con Estados Unidos, particularmente con el gobierno de Geore W. Bush quien había iniciado una campaña internacional para enfrentarle. Esta comprensión de la violencia interna como producto de la amenaza terrorista no sólo impactó en el ámbito doméstico, pues también determinó la política exterior, e incluso supuso un distanciamiento en las relaciones con Naciones Unidas a la vez que agudizó las tensiones con Estados de la región que no caracterizaban a las FARC de esta manera.

8.3 Una Agenda de Seguridad Mixta: Juan Manuel Santos Calderón (2010- 2017)

Con la llegada al poder de Santos se evidenció un cambio trascendental en la política del país; si bien aún se priorizan temas propios de seguridad nacional, se recurre también a otro tipo de estrategias no bélicas, razón por la cual, en 2012 se comenzaron los diálogos de paz con las FARC, teniendo en la agenda de cinco puntos rectores: reforma agraria, participación política, tráfico de drogas, derechos de las víctimas y el fin del conflicto armado interno (Olave, 2013).

Con motivo de una agenda de seguridad basada en preceptos más neorrealistas(desde la perspectiva teórica de las Relaciones Internacionales) el presidente Santos se dispuso a realizar una gira mundial para recaudar fondos para el posacuerdo; de esta manera, se evidencia como la agenda de seguridad de Colombia se encontró más abierta a recibir cooperación de distintas fuentes, lo que ayudaría a mejor las relaciones no solo con países de la región, trascendiendo la concepción donde el foco principal de política exterior era los Estados unidos, intentando responder a una política exterior con un enfoque más amplio, como lo sería el Réspice Similia o "mirar a los vecinos"; sino también, el estrechar lazos con países de todo el mundo- (Réspice Omnia).

Dicho comportamiento tomó como punto de inicio la consolidación y presentación formal de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. En este documento se reconoce en primera instancia los avances que se han logrado en materia de seguridad en la última década, a la vez que se resalta la importancia de abrirse a nuevas formas de adoptar la seguridad. Así mismo, expresa que los nuevos objetivos si bien albergan retos tradicionales, deben ampliarse con el fin de: 1. Llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos; 2. Desarticular los Grupos Armados Organizados; 3. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana; 4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable; 5. Contribuir a la atención oportuna a desastres naturales y catástrofes; 6.Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional. (Ministerio de Defensa Nacional, 2011)

Es especialmente en el cuarto objetivo que se empieza a vislumbrar la reivindicación que se le da a la seguridad trasfronteriza, pues precisamente en esta sección en la que se habla de la necesidad de diseñar e implementar un Sistema Integrado de Defensa, para lo que se busca incrementar la cooperación de Colombia, tanto a nivel regional como internacional, entendiendo que:

> Colombia ha desarrollado una gran capacidad para enfrentar desafíos que hoy afligen a otras naciones, pero la seguridad de Colombia depende de la seguridad regional y ésta, a su vez, de la seguridad hemisférica. Por tanto, los esfuerzos contra el crimen transnacional requieren de la cooperación y de acciones regionales y hemisféricas articuladas y complementarias. El MDN promoverá una estrategia de diplomacia para la seguridad mediante cooperación con base en experiencias exitosas y negociación de acuerdos para el desarrollo de estrategias coordinadas de seguridad (Ministerio de Defensa Nacional, 2011, p. 36).

Así mismo, este objetivo incluye una Estrategia sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa, reforzando la visión multidimensional de la seguridad que se intenta incorporar en atención a la ampliación de los temas propios de esta. Cabe resaltar que en dicho documento se toma como pilares fundamentales, entre otros, el respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para lo cual se impulsa la "implementación integral de la política sectorial y sus componentes: instrucción, disciplina, defensa jurídica, atención, cooperación, y promoción" (Ministerio de Defensa Nacional, 2011, p.41).

Como es posible inferir se da una ampliación y profundización frente a aquello que implica la seguridad, dando lugar a la posibilidad de establecer una agenda cooperativa y colectiva mediada a través del conflicto interno; es decir, esta vez no se partió de la concepción de que los problemas de estabilidad internos eran un limitante para optar por concepciones de seguridad más amplias, sino por el contrario, se empezó a ver en estas alternativas una solución a las diferentes amenazas.

Retomando el ámbito doméstico, sin lugar a duda el punto central del gobierno Santos versa sobre el Acuerdo para la terminación del conflicto con

la guerrilla de las FARC, cuya idoneidad no es objeto del presente documento. No obstante, es determinante considerarle, pues supone una lógica en la que se reconoce la existencia de un conflicto civil en Colombia, ya que de lo contrario no hubiese sido posible conllevar el proceso de negociación de mantener el *statu* de las FARC como terroristas.

Al respecto se debe mencionar que para Santos el fin del conflicto con las FARC se concibe como un requisito para la construcción de una paz estable y duradera, entendiéndose esta como el interés nacional primordial hacia el cual deben encaminarse todos los esfuerzos nacionales, lo cual supone una construcción conjunta de la seguridad en la que toda la institucionalidad, los campos del poder y la sociedad civil participen. Ejemplo de lo anterior, es el nombre del Plan Nacional de Desarrollo del año 2012 Prosperidad para todos, el cual presenta de fondo un interés por lograr la cohesión nacional, así como la garantía para todos los sectores sociales de alcanzar situaciones tendientes a la prosperidad.

Ahora bien, bajo la premisa del conflicto armado interno como una situación que se opone al desarrollo y al bienestar social, podría considerarse que en efecto se elevan los preceptos de la seguridad humana en la agenda nacional, toda vez que se asume que la reconciliación, la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son esenciales en la garantía del bienestar de las personas y de las comunidades en un escenario de posacuerdo. Así la seguridad jurídica es un punto a considerar en el actual contexto nacional, pues esta se asocia a la capacidad y deber del Estado de propugnar por condiciones de dignidad como base para alcanzar la paz.

Al respecto y bajo esta comprensión, es uno de los retos más grandes para el Estado garantizar la protección de los Derechos Humanos, pues su

violación además de oponerse directamente a los preceptos de la seguridad humana, impacta en la reconstrucción de una nueva Colombia cimentada en la reconciliación nacional.

En conclusión, durante el siglo XXI en la República de Colombia la Seguridad y Defensa han estado fuertemente influenciadas por el contexto domestico propio de un conflicto armado. No obstante, la transformación de la realidad nacional, así como las dinámicas propias de un Sistema Internacional altamente interdependiente y la condición trasnacional de las amenazas, ha conllevado a una paulatina trasformación de la agenda de seguridad en Colombia.

Este nuevo enfoque poco a poco reivindica una seguridad humana y multidimensional, reconociendo el rol los individuos, así como de diferentes campos en la construcción de la seguridad. Es por tanto posible leer los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos desde una perspectiva neorrealista, ya que si bien el Estado sigue siendo el objeto referente principal de la seguridad, se reconocen otros actores que intervienen en ella, y que a la vez pueden ser objetos referentes.

Siendo así, se considera que Colombia ha iniciado un proceso de transformación de la agenda de seguridad bajo una perspectiva multidimensional, en el cual se ha dado una ampliación y profundización del concepto de seguridad, a la vez se ha dado un proceso de securitización frente a nuevos temas y actores. Como se expone en el siguiente apartado la materialización de este nuevo enfoque requiere la adaptación de la institucionalidad nacional en pro de la consecución de un nuevo modelo de Estado y en especial de la articulación de la realidad territorial con la agenda nacional.

9. El sistema de Seguridad y Defensa en un escenario de post acuerdo

Si bien a nivel global y regional los nuevos conceptos de seguridad han tomado fuerza, en el caso colombiano su evolución no ha sido la misma, ello se explica por el contexto nacional, en el cual el sistema de seguridad y defensa ha destinado parte importante de sus esfuerzos a contrarrestar un enemigo interno. En este sentido, ''la lucha contrainsurgente ha condicionado la política de consolidación institucional del Estado colombiano, las misiones, la doctrina y los diseños institucionales de la Fuerza Pública'' (García Pinzón, 2014, p. 1).

Considerando lo anterior, y frente al Acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC, el sistema de seguridad y defensa debe reorientarse para responder no sólo a los desafíos que devienen de tal acuerdo, sino también a otro tipo de amenazas que hasta el momento no han sido consideradas. Por lo tanto, tal como lo plantea Paul Zagorsky el sistema de seguridad y defensa entendido como parte del Estado debe virar para responder a la redefinición de relaciones en la sociedad, dándose así ''no sólo un cambio doctrinal, sino la interiorización de nuevos valores y normas consonantes con el contexto democrático" (Vela, 2002, p. 3).

Por consiguiente, es imprescindible que desde las instituciones del sistema de seguridad y defensa realicen una lectura correcta de los acontecimientos contemporáneos y generar estrategias y planes de acción acordes al contexto nacional. Sin embargo, ello no es suficiente, pues no basta con la identificación de las amenazas; el sistema debe tener la capacidad de jerarquizarles y así definir ''cuáles son los peligros que el país no podría tolerar para asignarles la primera prioridad'' (Bonett, 2009, p. 49).

Es importante manifestar que el fin del conflicto con las FARC no es equivalente a la inexistencia de amenazas de orden interno que deban ser

combatidas mediante mecanismos militares, ello debido a la existencia de otros grupos insurgentes armados como el ELN y el EPL y a la posible mutación de facciones desmovilizadas en grupos criminales.

En síntesis, el sistema de seguridad y defensa en un escenario de postacuerdo debe consolidarse sobre el concepto de Seguridad Multidimensional ‘‘esto significa que su contenido y extensión debe incluir (…) [seis] pilares básicos que son la defensa nacional, la seguridad ambiental, la política institucional, la seguridad humana’’ (Bonett, 2009, p. 54), la seguridad ciudadana y la seguridad económica.

Pese a que en la región el concepto de Seguridad Multilateral ha sido adoptado por los Estados y así mismo por las Fuerzas Militares, la realidad colombiana ha imposibilitado dicha trasformación, ya que la lectura predominante de las amenazas ha estado ligada al conflicto armado, y por ello a las lógicas de la insurgencia/contrainsurgencia (García, 2014).

La firma del Acuerdo de terminación del conflicto enfrentará a las Fuerzas Militares a un nuevo escenario debido a la mutación de la amenaza interna proveniente de grupos guerrilleros, generando un espacio para que éstas extiendan su capacidad de acción a entornos que no caben dentro del concepto de seguridad tradicional, lo cual implica una ‘‘transformación en las percepciones que las Fuerzas [Militares] poseen sobre sus funciones, misión, interacción con la sociedad, etc., así como en su estructura organizativa” (García, 2014, p. 3).

Teniendo como cimiento de su accionar el concepto de Seguridad Multidimensional, la institución militar puede apoyar al Estado en su gestión estatal en sectores que hasta el momento no han participado, contribuyendo así a enfrentar ‘‘carencias estructurales e insuficiencia de recursos institucionales frente a problemas emergentes en áreas críticas: control de violencia urbana,

asistencia en desastres, extensión de delitos complejos ligados al narcotráfico o al crimen organizado, e incluso requerimientos derivados de la implementación de modelos de desarrollo''(Palma, 2015, p. 256).

Conforme a los procesos de ampliación del marco misional de las FF.MM. atendiendo a la evolución del concepto de seguridad imperante, se han desplegado importantes esfuerzos institucionales en aras de modernizar a la Fuerza Pública y en consecuencia reorientar los esfuerzos de planeación y planificación hacia los posibles escenarios de post acuerdo, en los que se apreciarán en mayor medida las capacidades alternativas en atención a frentes no convencionales, como en efecto puede evidenciarse al contrastar los objetivos de la Política de Defensa y seguridad 2015 – 2018, al plantear como principales metas el "coadyuvar a la terminación del conflicto, la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana" (Ministerio de Defensa Nacional, 2015, p. 4).

Hay que mencionar, además las disposiciones consignadas en desarrollo del Plan Estratégico Militar 20130 -PEM- del Comando General de las Fuerzas Militares y la Guía de Aplicación 2015-2018 -GAPEM-, en donde se estipulan los elementos que deben integrarse al momento de acometer cualquier proceso de reforma o modificación que tenga como finalidad el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el cual implica que se deben "romper paradigmas, revisar la historia, evaluar técnicas, tácticas y procedimientos y actualizar la doctrina para así construir conceptos que estructuren de forma sólida el camino al 2030" (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015, p. 12).

Las FF.MM. tienen dos grandes tareas en la actualidad; por un lado deberán asumir nuevos roles que les permitan posicionarse de manera importante en

los entornos cambiantes que serían generados con ocasión de la firma de un posible acuerdo de paz y por consiguiente afrontar de manera seria cualquier necesidad de transformación en su vocación, y en segundo lugar debe generar los procesos de sensibilización e interiorización correspondientes al carácter determinante que ostentan como un medio que "contribuirá a alcanzar la visión del país que se ha trazado el alto gobierno, es decir el objetivo nacional de hacer de Colombia un país en paz, con equidad y con el mayor nivel de educación de la región" (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015, p. 4).

En consonancia con los objetivos planteados desde las altas esferas del Gobierno Nacional, es imperativo que se generen las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la población colombiana, lo que requiere que desde las esferas de planificación de las FF.MM. se apliquen de manera estricta los criterios de Planeación Estratégica por Capacidades. Bajo esta nueva perspectiva es necesario que los arquitectos de la Política de Seguridad y Defensa, al momento de diseñar una capacidad, hagan una ponderación exacta entre los diferentes medios y modos, para lo cual se requiere la integración de cinco variables a considerar: i. doctrina; ii. Organización; iii. Material y equipo; iv. Personal; y v. Infraestructura.

Por otra parte, y como mecanismo para desarrollar de una manera más eficaz la planificación por capacidades, fueron concebidos once Sistemas de Capacidades, los cuales marcan de manera transversal la manera en cómo deben ser atendidas las ocho áreas misionales, según las posibilidades y capacidades propias de cada fuerza. Los sistemas de capacidades son: "1. Mando y control, 2. Inteligencia, 3. Ciberdefensa, 4. Guerra electrónica, 5. Movilidad estratégica y táctica, 6. Atención de desastres, 7. Soporte, 8. Control del espacio terrestre, 9. Control del espacio marítimo y fluvial, 10. Fuerzas especiales" (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015, p. 6).

Lo anterior, debe ser entendido como un mecanismo para potencializar las capacidades propias de las Fuerzas Militares, siendo ellas un recurso con el que el Estado colombiano cuenta para extender su presencia en el territorio nacional, incluso en áreas en las que esté de manera previa el conflicto armado había dejado relevados al vacío, evitando así el asentamiento de ''amenazas transfronterizas o factores de riesgo multidimensionales que afectan a la seguridad en un sentido amplio'' (Palma, 2015, p. 257).

Para lograr que el modelo propuesto sea eficaz, es determinante el desarrollo de operaciones de naturaleza conjunta, coordinada e interagencial, buscando así un trabajo mancomunado entre el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, apoyo a la Policía Nacional y el desarrollo constante de procesos de carácter interagencial tanto a nivel doméstico como internacional. (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015). En concordancia con el planteamiento del Comando General de las Fuerzas Militares y de la hipótesis del presente documento proceso de trasformación de la institución militar debe versar sobre tres pilares: fortalecimiento del capital humano, sostenibilidad y eficiencia del gasto y planeación por capacidades.

Igualmente es vital una determinación adecuada de áreas misionales, las cuales deben ser coherentes con el concepto de Seguridad Multidimensional, siendo estas la defensa nacional, seguridad pública, convivencia y seguridad ciudadana, gestión del riesgo, protección de los recursos y el medio ambiente, contribución al desarrollo del país y gestión, apoyo y desarrollo proyectivo (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015).

Para lograr lo hasta aquí propuesto, las Fuerzas Militares de Colombia necesitarán más tecnología, extender su cobertura a los espacios fronterizos especialmente en zonas vitales; inteligencia técnica, capacitación en misiones

internacionales; seguridad jurídica y también darle a su componente humano más oportunidades de aumentar su capacitación (…) en el campo humanístico y profesional para que durante su servicio activo y retiro tengan las herramientas necesarias para incorporarse al desarrollo nacional de la seguridad (Bonett, 2009, p. 54).

En un escenario de post acuerdo el sector Seguridad y Defensa debe tener como centro de su trasformación la ampliación del concepto de seguridad hacia una visión multidimensional, en concordancia con la realidad global y con la trasformación del escenario nacional. En este contexto, el rol de las Fuerzas Militares debe estar orientado a la construcción de condiciones que eviten el retorno a una confrontación armada, velando por el mejoramiento de las condiciones estructurales de la sociedad y el desarrollo de condiciones aptas para el mantenimiento de la paz.

Capítulo III

Metamorphosis Bellum: ¿Mutando a Guerras de Quinta Generación?[16]

Carlos Enrique Álvarez Calderón
MY. José Fernando Santafé García
MY. Óscar Javier Urbano Morales

1. Introducción

Desde el final de la Guerra Fría, la literatura enfocada en las teorías de la guerra ha puesto de manifiesto una multiplicidad de cambios que afectan a la guerra, en un contexto aparente de tránsito a una era posmoderna; incluso se rumora la posibilidad que los cambios transformacionales dentro del sistema internacional, han alterado la naturaleza misma de la guerra. El argumento por parte de algunos de que el Estado, hasta ahora el actor central en las relaciones internacionales, está en declive, ha estimulado las afirmaciones de que la guerra en el siglo XXI está sufriendo cambios importantes (Álvarez, 2017c).

Un cosmopolitismo creciente y una sensación de que la interdependencia económica restringe las acciones de los Estados en el presente, ha conllevado a que muchos analistas aseguren que la guerra entre los Estados es ya una "cuestión del pasado". A finales de la década de 1990, comentaristas como Mandelbaum (1998) afirmaban que la tendencia hacia la obsolescencia de la guerra entre Estados se había acelerado, incluso sugiriendo que "el aumento de los costos de la guerra y las expectativas decrecientes de los beneficios de la victoria, han transformado su estatus" (p. 23).

16. Este Capítulo de Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

La guerra ha sido vista de manera distinta por varios grupos de personas, tanto al interior de la opinión pública, como dentro de la comunidad de investigadores que estudian la guerra. Algunos la ven como un elemento desafortunado pero aun persistente de la experiencia humana, mientras que otros como un fenómeno en constante transformación, el cual está experimentando cambios en los orígenes y en las formas en las cuales es llevada a cabo. Por lo tanto, pareciera que la guerra ha dejado de ser una empresa política y racional, por lo que se requieren nuevas formas de comprenderla en la dinámica moderna para hacer frente a la transformación política, cultural y tecnológica.

Una observación común en el campo de los estudios en seguridad y defensa, así como de las relaciones internacionales, es que el final del siglo XX estuvo marcado por el relativo descenso de guerras interestatales y el correspondiente aumento de guerras intraestatales. Varios académicos (Gray, 1997; Holsti, 1996; Kaldor, 1999; Rice, 1988; Lind, 1989), han visto en estos acontecimientos a los precursores de una alteración estructural en las prácticas y la incidencia de la guerra, en las cuales estarían surgiendo nuevos tipos de guerra. Muchas de las teorías que proponen la existencia de cambios importantes en la guerra, derivan sus exámenes solamente de dos tipos de guerra, generalmente interestatales o intraestatales. En consecuencia, algunos académicos han propuesto el desarrollo de una innovadora tipología de guerra para describir otras "nuevas guerras", incluidas las guerras étnicas, las guerras de los pueblos, las guerras posmodernas y las "guerras del tercer tipo", entre otras.

Quizás el más común de los reclamos de un nuevo tipo de guerra es el argumento de que la etnicidad es una de las fuerzas más poderosas en las relaciones internacionales contemporáneas y que el actual sistema internacional se caracteriza por una proliferación de guerras étnicas no presentes en los conflictos del pasado. Esta perspectiva fue popularizada por Huntington (1993),

quien argumentó que el conflicto ideológico de la Guerra Fría llegaría a ser reemplazado por conflictos étnicos a lo largo de líneas de división históricas, o "choque de civilizaciones". En este sentido, se ha vuelto común argumentar que el nacionalismo, la etnicidad y la religión, son las fallas de las relaciones internacionales contemporáneas en el mundo post-bipolar.

Holsti (1996) afirma que "la guerra en la actualidad no es el mismo fenómeno que fue en el siglo XVIII, y ni siquiera a principios del siglo XX. Tiene fuentes y adquiere características significativamente diferentes" (p.xi). En este sentido, Holsti (1996) define las guerras contemporáneas como guerras de un "tercer tipo", que contrasta con la guerra institucionalizada y la guerra total, ya que el objetivo de las guerras del "tercer tipo" es crear un Estado, pero a partir de un proceso que no es semejante al de la formación de los Estados-nación del universo westfaliano. Por ejemplo, las características de estas guerras del "tercer tipo" son: sin frentes, sin campañas, sin estrategias, con el uso del terror, con un elevado número de víctimas (especialmente víctimas civiles), y poca distinción entre las fuerzas armadas y la población civil.

Del mismo modo, Kaldor (1999) destacó nuevos tipos de guerras basadas en el conflicto económico y las actividades de los actores paramilitares; en consecuencia, las nuevas guerras, "pueden contrastarse con las guerras anteriores en términos de sus objetivos, los métodos de guerra y cómo se financian" (p.6). Por su parte, Gray (1997) sostiene que las guerras "posmodernas" se caracterizan por el uso de tecnologías de armas asistidas por computador, entre uno o más de los beligerantes; es decir, que estarían marcadas por el creciente papel de la "tecnociencia". Afirma, a su vez, que se han aplicado muchas etiquetas a esta nueva clase de guerra, desde la guerra "permanente", "techno-guerra", guerra "cibernética", guerra "hiperrealista", guerra de "información", guerra "neocortical", hasta la guerra de la "tercera ola".

En resumen, a pesar de algunos críticos (Henderson & Singer, 2002; Echevarría, 2005; Thornton, 2005; Junio, 2009), existen varios argumentos que sugieren que la guerra evoluciona hacia "nuevos" tipos que no son explicables a la luz de modelos y teorías existentes, porque sus correlatos y etiologías son diferentes de las "viejas" guerras. Bajo este argumento, este documento establece que la guerra ya ha "mutado" a Guerras de Quinta Generación (G5G), las cuales, caracterizadas por sus medios, actores, fines y naturaleza, se presentan como el mayor desafío, actual y futuro, a la Seguridad Multidimensional de los Estados.

2. Definiendo la Guerra

Existen variadas definiciones sobre la guerra, por lo cual el definirla se convierte en un primer obstáculo filosófico a la hora de abordar científicamente el estudio de su naturaleza y evolución. No existe un consenso acerca de una sola definición, por lo que el término es usualmente empleado para describir diversas actividades; en consecuencia, se habla de guerra "total" y guerras "limitadas", guerras "regionales" y guerras mundiales", guerras "convencionales" y guerras "nucleares", guerras de "alta y baja tecnología", guerras "sucias", guerras corporativas", guerras "interestatales" y guerras "intraestatales", guerras "civiles", guerras "religiosas" y "étnicas", guerras "insurgentes", etc. Por ende, ante tantas distinciones bien podría ignorarse, dejando la definición de la guerra sujeta a reinterpretaciones políticas y de "moda". Sin embargo, las ideas son importantes, y las ideas se basan en las definiciones, por lo que para evitar vaguedades epistemológicas o lingüísticas, es pertinente dar una definición de estudio.

La raíz etimológica de la palabra castellana "guerra", proviene del germánico *werra* y del verbo *werran* (confundir); es el mismo del cual se derivan los términos *war* (guerra) en inglés, *wirren* (disturbios) en alemán y *guerre* (guerra) en francés. Así mismo, la raíz latina de *bellum* (guerra) es la raíz

etimológica de bélico y beligerante, y *duellem,* una forma arcaica de *bellum*, es de la que se deriva palabras como "duelo" en español o *duel* en inglés. La raíz griega de la guerra es *polemos*, del que deviene el término "polémica", lo que implicaría una controversia agresiva.

Entre las muchas definiciones cualitativas sobre la guerra se encuentran la de Clausewitz (2003), quien definió la guerra como un acto de violencia destinado a obligar a los adversarios a cumplir con la propia voluntad. Sun Tzu (2012), quien le proporcionó una relación con el arte, definió la guerra como "un asunto de vital importancia para el Estado; la provincia de la vida o de la muerte; el camino de la supervivencia o de la ruina" (p.102). Para el autor el concepto de guerra utiliza cinco factores fundamentales y necesarios.

> El primer factor es la influencia moral: aquello que hace a un pueblo estar en armonía con sus líderes: el segundo, el clima: la interacción de las fuerzas naturales: el tercero, el terreno: las distancias: el cuarto, el mando: las cualidades que tiene un general: sabiduría, sinceridad, humanidad, valor y severidad: el quinto, la doctrina: organización, control, regulación de rutas de abastecimiento y provisión de los principales artículos usados por el ejército (Tzu, 2012, pp.102-105).

Montesquieu (1906) mencionaba que "el objeto de la guerra es la victoria; el de la victoria, la conquista; el de la conquista, la conservación" (p.17), mientras que Hobbes (1992) afirmaba que la "guerra no consiste solamente en batallar sino en la disposición manifiesta a ello durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario". (p.102). Sorel (1912), definió la guerra como un "acto político mediante el cual los Estados, incapaces de ajustar una disputa sobre sus obligaciones, derechos o intereses, recurren a la fuerza armada para decidir cuál es la más fuerte y por lo tanto pueden imponer su voluntad a la otra" (p.38).

Por su parte, Kallen (1939) parece favorecer una definición política de la guerra cuando afirmaba que "si la guerra puede ser definida como una contienda armada entre dos o más instituciones soberanas que emplean fuerzas militares organizadas en la búsqueda de fines específicos, el término significativo en la definición sería organizado" (p.373), mientras que Johnson (1935) definía la guerra como un "conflicto armado entre grupos de población concebidos como unidades orgánicas, razas o tribus, estados o unidades geográficas menores, partidos religiosos o políticos, clases económicas" (p.465).

Por último, Crew (1952) define la guerra como "un conflicto organizado y específico en el que se esgrime la fuerza y la coerción" (p. 71); Wallace (1957) considera que la guerra es "el uso sancionado de armas letales por miembros de una sociedad contra miembros de otra. Es llevado a cabo por personas capacitadas que trabajan en equipos que son dirigidos por un grupo político independiente y apoyados de diversas maneras por la población no combatiente" (p. 18); Beer (1974), como "la presencia de la violencia internacional directa" (p.159); y Hoffman (2007), que incorpora un abanico de distintas formas de guerra, incluyendo "capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas que comprenden coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal" (p.14).

Para un estudio científico de la guerra, además de las definiciones cualitativas, también se presentan enfoques cuantitativos. El surgimiento de los análisis científicos y cuantitativos de la guerra comenzaría en la década de 1930 con el trabajo de Wright (1960) y Richardson (1960), quienes desarrollaron amplias listas cuantitativas de guerras. Las definiciones cuantitativas de la guerra requieren que el número de muertes directas o indirectas causadas por enfrentamientos violentos cruce un cierto umbral.

El enfoque más conocido e influyente fue el desarrollado por Singer & Small (1989), en el marco del proyecto de la Universidad de Michigan, denominada "Correlaciones de Guerra". Este proyecto ha intentado reunir datos estadísticos sobre las guerras que se han llevado a cabo en todo el mundo, desde 1816; según este enfoque, una guerra sería cualquier conflicto violento con al menos 1.000 combatientes muertos por año. Además, según los autores, para excluir los genocidios y las masacres esporádicas de esta definición, ambas partes en el conflicto deben haberse organizado para cometer una violencia colectiva, o la parte con el menor número de combatientes, debe haber infligido por lo menos el 5% de sus propias pérdidas al adversario. Adicionalmente, de acuerdo con el estudio de Sarkees & Wayman (2010), bajo los parámetros establecidos por Singer & Small (1989), establecen que en las 14.531 guerras ocurridas desde el 3600 a.C. hasta la el siglo XXI (periodo en el cual solo se han disfrutado de 292 años de paz), el total de víctimas fatales ha sido de 3.640 millones de personas.

De acuerdo a Sipri (2017), y según el "Programa de Recopilación de Datos sobre Conflictos de Uppsala" (UCDP, por sus siglas en inglés), el número de guerras activas pasó de 52 guerras en 2014, a 49 guerras en 2016. De los 49 conflictos activos en 2016, dos eran interestatales (India-Pakistán y Eritrea-Etiopia), y 47 intraestatales, implicando gobiernos (22), territorios (24) o ambos (1). El UCDP (quien asume la guerra como un conflicto armado que da lugar a mil muertes en combates), registró 12 guerras en 2016, una más que en 2015; de estas, 3 guerras de las registradas en 2015 habían reducido su intensidad y habían pasado a ser conflictos armados menores en 2016 (Nigeria, Pakistán y Ucrania), mientras que 4 guerras registradas anteriormente se agravaron hasta el nivel de guerra: Afganistán–Estado Islámico, Libia-Estado Islámico, Turquía-Estado Islámico y Turquía-Kurdistán.

En definitiva, es útil emplear definiciones de lo que se está estudiando; de esta forma, otras personas pueden trabajar en aquello a lo que se está refiriendo

y pueden ofrecer ajustes o críticas a la amplitud o estrechez del propio estudio, permitiendo por lo tanto, que el conocimiento se expanda. Pero como cualquier definición en las ciencias sociales, nunca podría llegar a ser completa y absoluta; la definición de la guerra sólo puede ser una definición de trabajo, sin perjuicio, en su caso, al cambio, sobre todo en sus fronteras conceptuales que como con cualquier concepto sociológico, son intrínsecamente borrosas.

Por lo tanto, la definición sobre la cual trabaja este documento es que la guerra es un estado de conflicto colectivo y organizado, que puede desarrollarse a través de hostilidades violentas y no violentas. Es un estado de conflicto colectivo, a diferencia, por ejemplo de un combate de boxeo; y es organizado, contrario a los disturbios, los cuales son ostensiblemente en su mayoría conflictos no organizados que parecieran entrar en erupción de forma espontánea, lo que implica una aleatoriedad al comportamiento de las personas, así como a sus objetivos o actos de destrucción. Sin embargo, a pesar de que no parecen estar organizados en ningún sentido significativo (es decir, político y estratégico), algunos disturbios son premeditados y coordinados en algún nivel.

Con base en la definición anterior, aunque necesariamente incompleta y empíricamente vaga, sirve para distinguir las guerras de las querellas, peleas, reyertas y otras interrupciones sociológicas que buscan competir por su inclusión. Rebeliones, insurrecciones, alzamientos, motines y revueltas comparten el conflicto y la hostilidad colectiva con la guerra, pero comúnmente denotan un objetivo político para alterar o para derrocar un régimen de turno. De acuerdo a Parker (2010), una definición de estudio de la guerra debería evitar concepciones políticas específicas del mundo (por ejemplo, que el mundo sólo se compone de los Estados nacionales), ya que el objetivo de la guerra no es exclusivamente el derrocamiento de un régimen; por el contrario, puede ser la guerra por la gloria, por el amor de Dios, por el valor ritual, entre otros.

En consecuencia, una definición académicamente útil, debería propugnar por describir lo que es la guerra, sin que ello dé cuenta de implicaciones normativas o juicios de valor (como justo o legítimo).

Según el derecho internacional, la guerra, en principio, sólo puede desarrollarse entre entidades políticas soberanas, es decir, Estados-nación; la guerra es, pues, un medio para resolver las diferencias entre las unidades del más alto orden de la organización política. Empero, no todas las guerras implican a Estados nacionales o entidades políticas. Algunos son reacciones primitivas a factores sociales o ambientales, mientras que otros son percibidos como formas de rituales intersociales.

Los actos humanos no vienen de la nada, ni vienen de la naturaleza del medio ambiente. Proceden de las creencias que las personas poseen (y optan por poseer), en relación con su medio ambiente, sus quejas, temores, expectativas, y así sucesivamente. Según Parker (2010), todas las culturas desarrollan su propia forma de realizar la guerra; pueblos con territorio abundante y poca población suelen preferir conflictos de carácter ritual, en los cuales sólo luchan unos cuantos, a pesar que su destino decide el del resto de los miembros de la comunidad.

3. Tipologías de la Guerra

La forma de hacer la guerra ha evolucionado de tal manera, que las dificultades para definir la guerra también se presentan al tratar de clasificarla. No obstante, la tipificación de las guerras posee un considerable valor teórico y práctico, pues crea las condiciones propicias para el estudio de los rasgos y las distinciones que caracterizan cada tipo de guerra, dando cuenta de cómo evoluciona su naturaleza.

Para comprender la anatomía de la guerra, es necesario diseccionarla, para descubrir su estructura y las funciones de sus partes. Ello facilita la comprensión de las distinciones de un tipo de guerra frente a otra. En este orden de ideas, una de las primeras perspectivas utilizadas para clasificar las guerras fue desarrollada por Delbrück (1985), quien dividía las guerras en dos tipos de conflicto: los de "aniquilación" *(niederwerfungsstrategie)*, en la que se busca un rápido fin a través batalla decisiva; y las de "agotamiento" *(ermattungsstrategie)*, donde el objetivo es desgastar al oponente a través de una larga serie de batallas, maniobras, bloqueos y similares. El historiador alemán señalaba que Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte, fueron los mejores practicantes de la batalla decisiva; mientras que los maestros del agotamiento bien podrían ser Pericles, Belisario, Wallenstein, Gustavo Adolfo y Federico el Grande.

Otro enfoque para clasificar las guerras toma el objeto del conflicto y los objetivos de las partes en conflicto como un criterio para la diferenciación. En efecto, el Grupo de Trabajo para la Investigación sobre las Causas de la Guerra de la Universidad de Hamburgo distingue entre las "guerras contra el régimen" (es decir, guerras para derrocar un partido gobernante o el cambio del status quo político); "guerras autonómicas y de secesión" (es decir, guerras para el logro de una mayor autonomía regional dentro de un Estado determinado); y "guerras de descolonización" (que como su nombre lo indica, son guerras de emancipación frente al dominio colonial). Otras tipologías diferencian entre guerras "étnicas" y guerras "revolucionarias" políticamente motivadas.

Lo cierto es que tal tipología es problemática, ya que más de una causa se puede llegar a manifestar en un solo conflicto violento. Asimismo, los objetivos de la guerra de las partes en conflicto tienden a cambiar a menudo en el curso de la acción violenta. Esta es la razón por la cual un segundo enfoque no clasifica las guerras con base a sus causas y objetivos, sino más bien al estado político o

grupo de actores involucrados (Sarkees & Wayman, 2010). En otras palabras, dicho enfoque clasifica las guerras de acuerdo a si las partes en conflicto son actores estatales o no estatales.

En consecuencia, bajo este segundo enfoque, se pueden diferenciar entre dos tipos diferentes de guerra: las guerras simétricas o intraestatales (conflictos violentos entre dos Estados), y las guerras asimétricas entre un Estado y actor no estatal. El segundo tipo de guerra, es decir, la guerra asimétrica, se puede dividir a su vez en dos subcategorías: Conflicto violento intraestatal o guerras entre un actor no estatal y un Estado dentro de las fronteras del estado existente; y conflicto extraestatal o extrasistémico violento entre un agente no estatal y un actor estatal, fuera de las fronteras estatales existentes (por ejemplo, la guerra de los Estados occidentales de la OTAN contra los talibanes en Afganistán).

Otra manera de clasificar las guerras modernas ha sido la utilizada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el cual divide las guerras según varios criterios, entre ellos el del tipo del enemigo a combatir. Siguiendo este criterio, las guerras podrían agruparse en conflictos de alta, mediana y baja intensidad.

Los conflictos de alta intensidad o guerras convencionales, son aquellas donde el enemigo es otro ejército, mejor o peor armado que el propio, pero el cual dispone de cuarteles, centros de mando y territorio que defender, lo que provocaría que la contienda sea más o menos pareja.

Los conflictos de mediana intensidad o guerra de guerrillas, son los realizados contra grupos paramilitares sostenidos, pobremente armados, pero que controlan ciertas regiones de difícil acceso y con el apoyo directo o tácito de la población o por los poderes electos a través de sus ejércitos.

Los conflictos de baja intensidad, son los que implican a movimientos terroristas (pequeños grupos que no controlan territorio, pero que, a veces, son apoyados por una parte de la población); sus ataques suelen ir dirigidos contra los poderes establecidos y las fuerzas del orden público, aunque también pueden provocar matanzas indiscriminadas contra la población civil.

Otro modelo para clasificar las guerras parte del concepto de generaciones evolutivas, en el que se busca enmarcar la guerra dentro de una serie de particularidades que son repetitivas, indistintamente del lugar o región del mundo en donde se esté desarrollando la confrontación armada, pero que a su vez permiten observar elementos distintivos dentro de una generación y otra. Esta teoría tiene sus fundamentos en dos variables: la primera de ellas se enfoca en la tecnología, que puede ser entendida como los medios a través de los cuales se lucha en una guerra en particular; y la segunda variable la constituye la estrategia, o mejor aún, la teoría de la guerra que se esté empleando en la confrontación armada. Con base en lo anterior y siguiendo a otros teóricos, Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton &Wilson (1989), clasificarían la guerra moderna en cuatro generaciones o fases:

3.1 Guerras de Primera Generación

Las Guerras de Primera Generación (G1G) inician con la utilización sistemática de las armas de fuego al campo de combate, y con la formación de ejércitos profesionales al servicio de los Estados-nación, en reemplazo de milicias mercenarias encargadas de la seguridad y defensa de los territorios. En efecto, “la utilización de mercenarios fue una práctica común y legal en la Edad Media, extendiéndose su uso a los primeros tiempos de la Edad Moderna” (Álvarez, 2017a, p.58). De acuerdo a Lind (2004), las G1G pueden ubicarse aproximadamente en el periodo que transcurre entre 1648 a 1860; por lo tanto, las G1G surgen no sólo a partir de la invención de la pólvora, de los mosquetes

y del cañón, sino también a partir de las estructuras políticas, económicas y sociales que se desarrollaron cuando Europa pasó de un sistema feudal a Estados gobernados por monarcas, luego de la Paz de Westfalia en 1648.

Las G1G se basaban en tácticas de línea y columna, donde las batallas eran formales y el campo de batalla era ordenado, creando una cultura militar disciplinada. Buena parte de las particularidades que distinguen hoy a los ejércitos profesionales (como los uniformes, las salutaciones y las graduaciones de rango), son productos de la G1G y tenían como propósito reforzar la cultura del orden, con la intención expresa de estimular las mismas tradiciones duraderas y las orgullosas lealtades a la unidad que habían caracterizado a las legiones del Imperio romano.

No obstante, la transición de la guerra feudal a la guerra napoleónica requirió siglos. Demandaba no sólo de armas de fuego confiables, sino también de sistemas políticos, sociales, económicos y tecnológicos capaces de sostener los ejércitos masivos de la era napoleónica. Políticamente, requería la evolución del Estado-nación para levantar, entrenar, equipar y sostener sus enormes ejércitos. Económicamente, los grandes avances en la agricultura y el transporte eran absolutamente esenciales para generar la riqueza y los recursos necesarios para movilizar, alimentar y sostener las tropas.

Según Hammes (2005), a partir del 1500 tanto la densidad demográfica como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, aumentaron significativamente más rápido que en épocas anteriores. Esta combinación elevó la riqueza general de los Estados, proveyendo comida adicional para los ejércitos y liberando mano de obra de la agricultura para la movilización bélica. A medida que aumentaron la riqueza y el comercio europeo, también lo hicieron las redes de transporte terrestre, esencial para movilizar ejércitos de grandes dimensiones. Por ejemplo, mientras que en 1415, un máximo de 55.000 hombres luchara en Agincourt en

el contexto de la Guerra de los 100 años (Seward, 1978), Napoleón llevaría a casi 450.000 hombres con él a la campaña contra Rusia en 1812 (Chandler, 1966).

Socialmente, el desarrollo del nacionalismo moderno sería esencial para permitir la G1G. Impulsado a partir de la Revolución Francesa de 1789, el patriotismo permitió que las columnas francesas mal entrenadas rompieran el equilibrio de poder reinante en Europa. La Revolución francesa hizo realidad el ideal de la "nación en armas"; a partir de aquel momento, se esperaba que la tropa exhibiera el mismo tipo de entrega que en épocas pasadas sólo se reservaba a los oficiales, y las nuevas lealtades del soldado raso influyeron en la táctica, la logística y la estrategia (Parker, 2010). En consecuencia, con el éxito del ejército napoleónico, los Aliados tuvieron que ampliar la base de sus fuerzas, y el concepto del nacionalismo alcanzaría a las otras naciones de Europa.

Técnicamente, la producción en masa del mosquete de alisado suave y confiable, y el desarrollo de la artillería ligera también contribuyeron a la transformación de la guerra. Es evidente que Napoleón se dio cuenta de la importancia de la artillería, incrementando su contingente. Y con la combinación de infantería, caballería y artillería, así como con la maestría que esgrimiera en la táctica y las operaciones, Napoleón tendría como objetivo, no sólo derrotar al ejército enemigo, sino además destruirlo por completo. Por tanto, en las G1G se empleó la "aniquilación" como un mecanismo de derrota, que buscaba la destrucción directa del ejército enemigo, en las formaciones de líneas y columnas, mediante la aplicación de la fuerza cinética contra el centro de gravedad del adversario.

En resumen, se requerían cambios a lo largo de los ámbitos político, económico, social y técnico para abastecer a los ejércitos y masificar el uso de armas de fuego. En este orden de ideas, destacan como ejemplos de GIG, la

Guerra de Sucesión Española (1701-1713), la Guerra de los Siete Años (1756-1763), la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783), las Guerras Napoleónicas (1803-1815), las Guerras de Independencia Hispanoamericanas (1810-1833), y la Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865).

3.2 Guerras de Segunda Generación

Las Guerras de Segunda Generación (G2G), evolucionarían con la Revolución Industrial y la mecanización de los ejércitos, ya que su elemento fundamental era la capacidad de movilización y el uso de maquinaria bélica con un mayor poder de fuego. Por ejemplo, la introducción del cañón estriado en los fusiles[17], cartuchos sin humo y la retrocarga[18], revolucionarían la infantería para siempre.

Sin embargo, del mismo modo que las G1G, las G2G no crecieron sólo a partir de mejoras en el armamento; también requerirían cambios estructurales en otros campos de la actividad humana. Si bien la estructura política del Estado-nación ya estaba presente a inicios del siglo XIX, la capacidad de los Estados de tributar e imponer impuestos aumentó dramáticamente durante los 100 años transcurridos entre la batalla de Waterloo y la del Marne; sin embargo, más importante que el incremento estatal en el poder de tributación, fue el hecho de que existía mayor riqueza de la cual poder extraer impuestos para el Estado. El PIB per cápita en Europa occidental se triplicó entre 1800 a 1915, mientras que la población aumentó alrededor del 50% (Chandler, 1966); por ende, la conjunción del aumento del PIB per cápita, el incremento de la población, y un mejor control tributario de los Estados nacionales, ampliaron considerablemente la riqueza disponible para los gobiernos de Europa.

17. El estriado o rayado de un cañón es el conjunto de ranuras o estrías en el ánima, que se extienden en forma helicoidal desde su origen cerca de la recámara (garganta) hasta la boca; su objeto es impartir velocidad de rotación al proyectil para que adquiera estabilidad direccional, asegurando que vuele, pegue de punta y tenga precisión. También permite el buen uso de balas alargadas, que si fueran disparadas en armas de ánima lisa, no tendrían estabilidad balística. Si bien ya en 1547 se experimentaba con rayado helicoidal, sus ventajas solo se pudieron aprovechar plenamente con las armas de retrocarga.
18. Un arma de retrocarga es un arma de fuego en la cual el proyectil es cargado por la parte posterior de la misma, a diferencia de las armas de avancarga, en las cuales el proyectil y el propelente se introducen en el arma por la boca de la misma.

Pero la G2G también requería una masiva producción industrial para producir las armas y las enormes cantidades de munición que consumía. Además, los sistemas de transporte también tuvieron que madurar. Como las fuerzas de los ejércitos nacionales aumentaron de cientos de miles a millones de hombres, se necesitaban extensos sistemas ferroviarios y sus redes telegráficas19 de apoyo, para mover, controlar y coordinar los ejércitos y sus "montañas" de suministros.

> La tecnología moderna fue aplicada a la fabricación de armamento más sofisticado, y una serie de avances en las tecnologías 'civiles' demostraron ser enormemente significativas para el futuro desarrollo de la guerra. Armamento, municiones y material de guerra podían ser producidos en masa por primera vez. Se podían sostener ejércitos más grandes y la habilidad de almacenar comida enlatada hacía más fácil el suministro de alimentos, y estos suministros ahora podían moverse más rápidamente usando la nueva red de ferrocarriles. Los ferrocarriles transportaban rápidamente a los soldados y los dejaban relativamente descansados una vez hubiesen llegado al campo de batalla; además, los heridos podían ser llevados al hospital, y los refuerzos y reemplazos podían llegar con mayor frecuencia. (Szentkereszty, 2016, p. 70).

El problema es que, hacia mediados del siglo XIX, el campo ordenado de batalla comenzó a derrumbarse. A pesar de que ya existían ejércitos masivos de soldados que en realidad si querían luchar[20], los fusiles estriados y las primeras ametralladoras hicieron que las antiguas tácticas de línea y columna

19. El telégrafo posibilitó que los conductores políticos y militares pudieran mantener comunicaciones casi instantáneas con los comandantes de los teatros de operaciones estacionados a grandes distancias.

20. Antes del siglo XVIII, y a diferencia de los soldados de caballería que solían proceder de la élite de la sociedad (en donde sus miembros se entrenaban para el combate desde la infancia), el soldado de infantería era reclutado a veces contra de su propia voluntad, por lo que solían adaptarse mal a la vida militar y expresaban su desaprobación desertando o amotinándose. Es decir, el objetivo principal de un soldado de infantería del siglo XVIII era desertar.

fueran obsoletas, incluso suicidas. Estos avances en armamentos se ensayarían por primera vez en la Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865), una guerra que mostraría la transición entre la G1G y G2G. En ella, el poder militar, fundamentado en el apoyo popular y la industrialización, y lanzado a cientos de kilómetros por el ferrocarril y el barco de vapor, se acercó a las fronteras de la guerra total. Por lo tanto, la Guerra Civil norteamericana se considera el conflicto más importante del siglo XIX, pues fue la primera vez en que unos gobiernos enfrentados asociaron el entusiasmo popular de la Revolución Francesa a la tecnología industrial que se estaba apoderando de Occidente.

Pero el coste de aquella guerra fue atroz; en ella murieron unos 625.000 soldados entre ambos bandos, tanto los del sur como los del norte (1 millón si se suman no combatientes); cifra igual al total de las demás guerras norteamericanas, incluida una gran parte del conflicto de Vietnam. Según Parker (2010), si Estados Unidos hubiera sufrido un nivel de bajas comparable en la Primera Guerra Mundial, las vidas perdidas habrían rondado la cifra de 2,1 millones (en vez de 115.000). Entonces, ya la Guerra Civil de los Estados Unidos señalaba que el nuevo campo de batalla tecnológico se cobraría un considerable tributo en vidas; y que la capacidad del Estado moderno para movilizar sus recursos humanos e industriales podía nutrir el teatro de operaciones de forma casi indefinida. Y esos recursos crecerían de manera ostensible, a medida que la civilización occidental entraba en el siglo XX.

El elevado número de muertos en combate durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, fue producto del uso de tácticas napoleónicas (como las cargas y la aproximación directa), totalmente inapropiadas tras el desarrollo de armas de fuego más precisas, como el rifle Spencer y las experimentales ametralladoras Gatling. En consecuencia, las primeras filas de soldados eran diezmadas mucho antes de acercarse al enemigo; ello explica el alto número

de bajas en la Primera Guerra Mundial (1914-1918): lucharon 65,8 millones de soldados, de los que murieron 1 de cada 8, un promedio de 7.534 hombres fallecidos cada día de los cuatro años que duró la guerra. En total, se calcula que la Gran Guerra produjo aproximadamente 11 millones de muertos y 23 millones de heridos (Kagan, 1995).

En consecuencia, la industrialización produjo un cambio profundo en la forma en la cual se combatían las guerras. Como resultado del desarrollo de un mayor poder de fuego por parte de los ejércitos, la mayoría de la cual era fuego de artillería indirecto, se generalizaría la utilización de las trincheras como medio de protección de los soldados. Desarrollado por el ejército francés durante y después de la Primera Guerra Mundial, la G2G fue resumida por los franceses como "la artillería conquista, la infantería ocupa" (Lind, 2004, p. 12). Entonces, en la Primera Guerra Mundial, el objetivo de la guerra terminaría desembocando en el desgaste o la atrición[21], una estrategia que inexorablemente conduciría a una pírrica victoria[22].

> Este tipo de guerra de desgaste fue exactamente lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), donde la línea de trincheras en el frente occidental se extendía desde Suiza hasta el Canal Inglés. No había flancos a circundar, los ejércitos no podían moverse rápidamente, y los defensores contaban con ametralladoras y artillería de largo alcance, protegidas por trincheras y alambrados, siendo las tropas constantemente aprovisionadas por su propio servicio de ferrocarril. Con el fin de romper el estancamiento, cada Estado intentó desarrollar e implementar nuevas tecnologías y estrategias. La implementación de gas venenoso, la creación

21. La guerra de atrición busca el aniquilamiento de las fuerzas adversarias mediante la destrucción y negación de los recursos necesarios para que el enemigo siga combatiendo.
22. Una victoria pírrica es una victoria que inflige un precio tan devastador para el vencedor, que equivaldría casi que a una derrota. Alguien que gana una victoria pírrica ha sido victorioso de alguna manera, aunque el precio que se ha pagado (en vidas humanas y otros recursos), niega un auténtico sentido de logro o beneficio.

> y uso de tanques, la campaña submarina alemana, y la creación de las Fuerzas Aéreas Nacionales, son claro ejemplo de ello (Szentkereszty, 2016, p. 71).

Sin embargo, la G2G fue un gran alivio para los oficiales, porque preservó la cultura del orden. El enfoque se centró en las reglas, procesos y procedimientos. La obediencia era más importante que la iniciativa, ya que esta última podría poner en peligro la sincronización. Cabe señalar, que tanto en las G1G como en las G2G, las bajas civiles fueron minoritarias, más como una consecuencia secundaria de los combates o "daño colateral"23; ello dado a que los combates se desarrollaban usualmente en amplios territorios rurales en los cuales podían desarrollarse la táctica de guerra basada en línea y columna.

Destacan como ejemplos de G2G, la Guerra de los Bóer (1880-1902), la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Guerra Greco-Turca (1919-1922), la Guerra Polaco-Soviética (1919-1921), la Guerra del Chaco (1932-1935), la Guerra Irán-Irak (1980-1988), el Conflicto del Beagle (1888-1984), la Guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000).

3.3 Guerras de Tercera Generación

Las Guerras de Tercera Generación (G3G) inician en 1939, con la estrategia de guerra alemana conocida como *Blitzkrieg*[24] o "guerra de maniobra". La G3G ya no se basaría en la potencia de fuego y el desgaste, sino en la velocidad, la sorpresa, y la dislocación mental y física. Tácticamente, desde el punto de vista ofensivo, un soldado de la G3G buscaría penetrar en la retaguardia del enemigo

23. Daño colateral ha sido un concepto utilizado por diversas fuerzas armadas para referirse al daño no intencional o accidental producto de una operación militar. El término fue acuñado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, y podría referirse a fuego amigo o al asesinato no intencional de civiles.
24. *Blitzkrieg* es una palabra alemana que literalmente significa "guerra relámpago". La versión japonesa fue la *Kido Butai* o "fuerza móvil", compuesta por una flota combinada de 6 portaaviones mayores, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sería el grupo de batalla naval más grande del mundo.

y colapsarlo desde atrás hacia delante; en lugar de "cerrar y destruir", el lema era "desviar y colapsar" (Lind, 2004). En la defensiva, la táctica sería atraer al enemigo y cortarlo de su fuerza principal. En este orden de ideas, el enfoque de la G3G se fundaría sobre la rapidez y la habilidad de maniobra de las tropas (Szentkereszty, 2016).

La G3G sería producto de la mecanización de los ejércitos (particularmente la invención de los tanques en la Gran Guerra), para romper el estancamiento de la guerra de trincheras. Se basaba en la velocidad y sorpresa de una ofensiva, en la base de una superioridad tecnológica sobre el enemigo, impidiendo cualquier ejecución de defensa coordinada de las Fuerzas Militares que estaban siendo objeto de ataque. La ofensiva militar se fundaba en la concentración de fuerzas aéreas y terrestres coordinadas, en la interrupción del comando, control y comunicaciones del enemigo, y en el aislamiento logístico de sus defensas; causando un aterrador e intencional impacto psicológico en el adversario.

Si bien Alemania hizo uso sistemático de aeronaves, tanques y comunicaciones por radio en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), todas las naciones europeas tenían para la época un mismo acceso a dichas tecnologías. No obstante, franceses y británicos no desarrollaron esta táctica de guerra, al menos en un principio. Una explicación tendría que ver con el ambiente político social; si bien el Estado políticamente unificado que permitía la G3G todavía existía en buena parte de Europa, el contrato social entre gobernantes y gobernados había sido dramáticamente alterado por la Primera Guerra Mundial. En los Estados democráticos europeos, la sociedad ya no tenía una fe "ciega" en las instituciones de gobierno, tomando en cuenta que prácticamente todas las familias de Gran Bretaña y Francia habían perdido al menos un pariente varón en el sacrificio sin sentido de la "guerra de trincheras"; los Aliados habían movilizado aproximadamente 28 millones de hombres y habían sufrido casi

7 millones de bajas (Dupuy, 1984). Con razón la población culpó de estas asombrosas pérdidas a los fracasos tanto de sus gobiernos como de sus fuerzas armadas, y no apoyó en el periodo entre guerras, una reconstrucción de sus ejércitos.

En contraste, el pueblo alemán, a pesar de sufrir víctimas proporcionalmente más elevadas (5 millones de 11 millones movilizados en la Gran Guerra), no reaccionó de la misma manera y nunca retiraron su apoyo a las fuerzas armadas de su país. Por el contrario, las fuerzas armadas siguieron siendo una institución respetada en la sociedad alemana. Así, las condiciones políticas eran muy diferentes en el período de entreguerras, facilitando que el ejército alemán comenzara a reconstruirse años antes que las fuerzas armadas de los aliados. Es notorio que el gobierno británico de Neville Chamberlain no comenzase a reconstruir sus fuerzas armadas sino hasta febrero de 1939 (tan sólo siete meses antes del estallido de hostilidades), mientras que los franceses se "contentaron" con concentrar sus activos en el concepto profundamente defectuoso de la guerra de posiciones, en torno a la Línea Maginot (Hammes, 2005).

Si una primera aproximación a la definición de la "Estrategia" podría llegar a ser la "articulación equilibrada entre medios, fines y voluntad", los medios (particularmente económicos), eran similares para todos los Estados involucrados. El hecho es que a pesar de la Gran Depresión (1929-1939), tanto Francia, Gran Bretaña y Alemania, así como los Estados Unidos, tenían la base económica para construir las fuerzas de armamento combinadas que hicieron posible la *Blitzkrieg*; desde el final de la Primera Guerra Mundial, cada Estado había desarrollado una sociedad capaz de producir el equipo y los mecánicos, conductores y electricistas necesarios para ejecutarlo. Pero sólo los alemanes tenían la voluntad política y el imperativo estratégico de construir un equipo completo de armas combinadas para ejecutar las tácticas que habían desarrollado en la Primera Guerra Mundial.

Mientras que las nuevas tácticas de los alemanes no lograron ganar la Primera Guerra Mundial, introdujeron a toda una generación de oficiales alemanes a la idea de órdenes de tipo misión, reconocimiento y aprovechamiento de la penetración. Es más, llegaron a entender lo que realmente había sucedido en la Primera Guerra Mundial, por lo que estaban dispuestos a explotar las mejoras tecnológicas en 1939. Para la Segunda Guerra Mundial, las tácticas cambiarían y las Fuerzas Militares no intentarían mantener o avanzar en una línea; por lo que la G3G no es lineal. Con las tácticas y los avances tecnológicos, también la cultura militar experimentaría una transformación; durante los juegos de guerra del siglo XIX, los oficiales subalternos alemanes recibían rutinariamente problemas que sólo podían resolverse desobedeciendo órdenes. Las órdenes especificaban el resultado que debía alcanzarse, pero nunca el método *(auftragstaktik)*, por lo que la iniciativa era más importante que la obediencia (Lind, 2004). Todo dependería de la autodisciplina, y no de la disciplina impuesta.

Los franceses también realizaron un intenso estudio de la Primera Guerra Mundial en busca de lecciones doctrinales y organizacionales. Desafortunadamente para ellos, el sesgo institucional hacia una "batalla metódica", aseguró que el estudio se limitara a aquellas batallas que demostraban que un enfrentamiento militar fuertemente controlado y centralizado en el poder de fuego, era la clave de la victoria (Dupuy, 1984). En consecuencia, el énfasis en la "batalla metódica" facilitaría que el ejército francés perdiese por completo la perspectiva de la evolución que llevaría a la *Blitzkrieg alemana*.

A diferencia de las dos generaciones anteriores de la guerra, en las G3G se atacaría masivamente a los civiles, para impedir que estos sostuvieran la industria bélica que necesitaba el enemigo para continuar la guerra. El número de muertes resultantes de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo incierto, pero fue alrededor de 70 millones de personas; de éstos, aproximadamente 22

millones fueron bajas militares, mientras que el resto fueron muertes de civiles, bien fuese durante las operaciones militares, por hambre o en crímenes contra la humanidad. Esto representaba, más o menos, el 3% de la población mundial total en ese momento (Kagan, 1995).

Un factor crítico del aumento considerable en las muertes de civiles en la Segunda Guerra Mundial fue el uso sistemático del poder aéreo. En efecto, al terminar la Primera Guerra Mundial, la aviación ya había hecho acto de presencia en todas las funciones que configuran la guerra aérea en la actualidad, como el apoyo directo desde el aire; reconocimiento; interdicción y defensa aérea; y superioridad en el aire y bombardeo estratégico. Sin embargo, la utilización del poder aéreo en la Primera Guerra Mundial solo se vino a ejecutar en los últimos estadios del conflicto. Por el contrario, en el periodo entre guerras, surgirían dos escuelas del pensamiento de poder aéreo con distintos argumentos sobre cuál debería ser el papel de la aviación militar en las guerras futuras.

En Europa, el general italiano Giulio Douhet y el primer comandante de la Real Fuerza Aérea británica, Lord Trenchard, sostenían que el bombardeo estratégico de centros de población aportaría la victoria en la siguiente contienda; según sus opiniones, los centros civiles eran especialmente vulnerables a un "ataque desde el aire", por lo que el bombardeo aéreo no tardaría en provocar sublevaciones masivas, desplome de la autoridad civil y revoluciones. Ambos sostenían que otras formas de poder aéreo constituían un uso incorrecto de su capacidad.

Por su parte en los Estados Unidos, donde el Congreso de la época no parecía dispuesto a permitir el desarrollo de una fuerza de bombarderos cuyo objetivo principal de ataque fueran centros de población civiles, se desarrolló un planteamiento distinto. La *Air Corps Tactical School* formuló una concepción de

poder aéreo cuyo propósito era inutilizar el sistema económico del enemigo. En su visión, al destruir industrias esenciales e infraestructura crítica (por ejemplo, centrales eléctricas, fábricas de producción, vías férreas, etc.), el bombardeo aéreo podía paralizar la actividad industrial del enemigo[25]. Por supuesto, la teoría dependía de que los bombarderos recorrieran grandes distancias atravesando las defensas aéreas del enemigo sin sufrir graves pérdidas y de su capacidad para acertar en la diana con precisión milimétrica.

Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton &Wilson (1989), aseveraron que cada una de las tres primeras generaciones evolucionó gracias a soluciones técnicas en respuesta a desafíos tácticos específicos. No obstante, si bien los avances técnicos claramente tienen un impacto, atribuir los cambios generacionales en la guerra simplemente a factores técnicos, simplificaría exageradamente el problema. Al trazar la evolución de las tres primeras generaciones de guerra, es posible identificar varias características de importancia: Primero, ninguna de las tres primeras generaciones de la guerra es producto de una transformación repentina; Segundo, cada nueva generación requirió cambios estructurales en los ámbitos político, económico, social y tecnológico, para crear las condiciones necesarias para que la siguiente generación evolucionara; y Tercero, cada sucesiva generación hizo uso de los cambios en la sociedad para profundizar más en la retaguardia del enemigo.

25. Si bien el bombardeo estratégico llevado a cabo por la Fuerza Aérea Norteamericana en el teatro de operaciones europeo, mantuvo la decisión de atacar la infraestructura crítica y las industrias alemanas, no sucedería lo mismo en el Pacífico. La conquista de *Okinawa* (la isla más septentrional del archipiélago japonés), había costado a los norteamericanos 65.631 bajas, de las 111.600 bajas sufridas en toda la campaña de la Guerra del Pacífico. Por ende, era un presagio aterrador de lo que podría significar una inminente invasión contra las islas principales de Japón (*Kyushu, Honshu y Hokkaido*), en donde todo el peso de las fuerzas de tierra de los Estados Unidos entrarían en contacto con un ejército japonés altamente concentrado y motivado. El alto mando norteamericano había elegido el 1 de noviembre de 1945, como las fecha para la operación *Olympic*, la invasión terrestre en la isla de *Kyushu*. No obstante, el número de bajas causado por la operación habría resultado demoledor tanto para Japón como para Estados Unidos, por lo que la noche del 8 de marzo de 1945, los B-29 estadounidenses destruyeron una gran parte de Tokio en una tormenta de fuego (con un saldo de 83.000 japoneses muertos y 41.000 más heridos, la mayoría civiles), procediendo luego a la destrucción de las demás ciudades japonesas una tras otra, culminando el 6 de agosto con el bombardeo nuclear a *Hiroshima* (150.000 muertos) y el 9 de agosto a *Nagasaki* (80.000 muertos).

Destacan como ejemplos de G3G, la Guerra Civil Española (1936-1939), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra de los Seis Días de 1967, la Guerra del Yom Kippur de 1973, la Guerra del Golfo (1990-1991), la Invasión de Iraq de 2003, la Guerra del Líbano de 2006.

3.4 Guerras de Cuarta Generación

Según Lind (2004), las Guerras de Cuarta Generación (G4G) marcan el cambio más radical de la transformación de la guerra desde la Paz de Westfalia; ello debido a que en la G4G, el Estado pierde el monopolio sobre la guerra. La G4G combina elementos de guerra de guerrillas, terrorismo, guerra convencional, y la capacidad de atacar la voluntad y la moral de la estructura de apoyo del adversario para lograr la victoria política.

La Segunda Guerra Mundial fue el tercer catalizador[26] de la guerra moderna en expandir el pensamiento sobre la teoría militar, ya que precipitó por lo menos tres líneas mayores de pensamiento: Primero, la teoría de Guerra y Disuasión Nuclear; Segundo, la teoría de la Guerra Limitada; y Tercero, la teoría de la Guerra Revolucionaria.

Durante las dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, los Estados Unidos asumieron una posición de poder preeminente en el mundo, al demostrar su capacidad para proyectar sus capacidades militares simultáneamente en varios teatros de operaciones. Sin embargo, en 1950, los Estados Unidos se enfrentaron con una guerra que los probó en una forma diferente; ya que la Guerra de Corea (1950-1953) trajo consigo varias sorpresas para los norteamericanos.

Sólo 5 años después de demostrar su dominio militar, las fuerzas estadounidenses fueron desafiadas por un poder militar de tercera categoría,

26. Las Guerras Napoleónicas y la Primera Guerra Mundial fueron los otros dos catalizadores.

como lo era en ese momento Corea del Norte. Y aun cuando las fuerzas militares de los Estados Unidos se habían recuperado de la primera ofensiva norcoreana, y habían logrado la ventaja e iban camino a una victoria completa, la entrada de China presentó una guerra completamente nueva y los Estados Unidos se encontraron de repente liderando una coalición de Naciones Unidas en la península coreana. En estas circunstancias, los Estados Unidos optaron por una guerra con objetivos limitados y el uso de medios limitados.

Mientras la guerra limitada no era un nuevo fenómeno, la Guerra de Corea trajo características diferentes a las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra no proporcionó la justificación suficiente para ganar la voluntad popular y lograr el apoyo en Estados Unidos, ya que la guerra se apuntó a objetivos considerablemente menos grandiosos, por lo que los líderes políticos y militares norteamericanos encontraron mucha dificultad para diseñar estrategias nacionales y operacionales efectivas para obtener esos objetivos. En resumen, la guerra limitada en Corea obligó a repensar la teoría militar referida al carácter y conducta de la guerra en esas circunstancias; es entonces cuando comienzan a esbozarse las discrepancias político-militares dentro de los Estados Unidos, la influencia de la opinión pública, y el predominio de la guerra limitada por el equilibrio nuclear en el mundo, que después sería trágico en Vietnam.

Debido a que las guerras limitadas como la de Corea, se llevaron a cabo sin emplear armas nucleares, muchos suponen que eso es lo que significa la guerra limitada. Es decir, una guerra que está limitada en el empleo de armas convencionales. No obstante, esta no sería una correcta definición; las guerras limitadas vienen definidas por la naturaleza "limitada" de sus objetivos. Es decir, la Guerra de Corea fue limitada, desde el punto de vista norteamericano, porque su objetivo en dicho país estaba constreñido a ciertas metas políticas ya que no amenazaban la supervivencia misma de los Estados Unidos.

Lo mismo ocurrió con los objetivos de Estados Unidos en Vietnam, debido a que el equilibrio de fuerzas (o balanza estratégica, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos), no fue amenazado en ninguno de ambos casos. Por supuesto, una acumulación de ese tipo de cambios de orientación podría producir, con el tiempo, una modificación bastante decisiva en el equilibrio estratégico; es por ello que las guerras limitadas pueden tener consecuencias posteriores de gran importancia para las primeras potencias. Pero la Guerra de Corea y Vietnam, desde el punto de vista de Seúl o Saigón respectivamente, si fueron guerras ilimitadas, ya que la intervención militar de los Estados Unidos amenazaba, en ambos casos, la supervivencia de los regímenes norcoreano y norvietnamita, debido a que el objetivo de los norteamericanos era cambiar el statu quo de la situación política, alterando el equilibrio local del poder.

> Los conflictos armados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por ser guerras limitadas. De hecho, como los Estados Unidos y la Unión Soviética adquirieron un mayor número de armas nucleares, la guerra total debía ser evitada a toda costa, razón por la cual la Guerra Fría estaba limitada en cuanto a los objetivos buscados, medios empleados y las zonas geográficas afectadas. En este contexto, la reticencia a una guerra total generó la oportunidad de utilizar tácticas asimétricas. (Szentkereszty, 2016, p. 73).

Por ende, la teoría de la guerra limitada pareciera ser el marco básico para las intervenciones militares de Estados Unidos en la actualidad, sobre todo en intervenciones enmarcadas en luchas de naturaleza contrainsurgente. En la teoría de guerra limitada, las operaciones militares son consideradas un mecanismo altamente politizado del uso de la coerción y la disuasión en el discurrir de la crisis y de la guerra, diseñado para producir un acuerdo negociado y no una

victoria militar total. La estrategia está diseñada para erosionar la voluntad de lucha del adversario, más que denegarle los medios (destrucción de sus capacidades militares) para hacerlo. Su utilización debe tener claro que en cierto momento el adversario sucumbirá a la coerción o a la compulsión, aceptando parar sus acciones o accediendo a un acuerdo negociado. Esta doctrina estaba establecida en la creencia de la limitación de la escalada en la guerra a través de su componente político, donde la fuerza militar es una mera herramienta al servicio de objetivos políticos limitados.

Otra línea de pensamiento sobre la teoría militar, derivada del final de la Segunda Guerra Mundial, sería la guerra revolucionaria, guerra de guerrillas o guerra insurgente, la cual se enmarca dentro de las G4G. La aplicación moderna de la G4G fue concebida y ejecutada con éxito, por primera vez, por Mao Tse-Tung, quien lograría construir en 1949, la República Popular de China. Es una aplicación moderna, por cuanto, la G4G no es novedosa, sino un retorno a la forma en que la guerra funcionó antes del surgimiento del Estado. Ahora, como entonces, muchas entidades diferentes, no sólo los Estados, harán la guerra y por muchas razones diferentes, no sólo "la extensión de la política por otros medios". Utilizarán muchas herramientas distintas para luchar la guerra, no restringiéndose a lo que reconocemos hoy como fuerzas militares (Lind, 2004, p. 16).

En efecto, Mao no fue el primer teórico en articular las virtudes de la insurgencia; se sabe que Mao leyó a Sun Tzu y Clausewitz. Si bien Sun Tzu (2012) no se ocupó directamente de la guerra de guerrillas, si discutía ciertas tácticas y principios que fácilmente se podrían aplicar a esa forma de guerra. Clausewitz (2003) por el contrario, se refirió explícitamente a ella, llamándola una "realidad" *(Erscheinung)* del siglo XIX, proporcionando algunas ideas valiosas sobre su naturaleza; pronunció una serie de conferencias sobre el tema, basadas en sus observaciones de la insurrección española contra las fuerzas

napoleónicas, en el Colegio Prusiano de Guerra en 1810 y 1811 (Echevarría, 2005).

El origen del término *"guerrilla"* (pequeña guerra) se remonta al alzamiento español en contra de la ocupación napoleónica (1807-1812). Se le atribuye a la guerrilla española (sin subestimar la importancia de las fuerzas clásicas de Wellington), el hecho de haber puesto fuera de combate a 400 mil soldados franceses; más que durante todas las campañas contra Prusia y Austria, y casi tantos como en Rusia (Chaliand, 2007). En tanto que técnica, la guerrilla es inmemorial. Boot (2013) afirma que la guerra tribal era esencialmente una guerra de guerrillas, ya que se realizaba de manera no convencional; en contraste, la guerra convencional es una invención relativamente reciente que solo surge con la aparición de los primeros Estados primitivos, hace 5 mil años en Mesopotamia.

No obstante, hubo que esperar al inicio del siglo XIX para que se publicaran, tanto en francés como en alemán, los primeros tratados sobre la guerrilla; el patriota dominicano Matías Ramón Mella, en la Guerra de la Independencia Dominicana contra la ocupación haitiana, elaboró el "*Manual de Guerra de Guerrillas"* en 1864.

En general, la lucha de guerrillas es de resistencia a un invasor y está aureolada por motivos patrióticos, revolucionarios o religiosos (Chaliand, 2007): en el Siglo II antes de Cristo, las guerrillas fueron utilizadas por las tribus lusitanas, al mando de Viriato, en la lucha contra la invasión romana de Hispania en lo que hoy es España y Portugal; los galeses se opusieron a la invasión de los normandos mediante guerrillas de arqueros certeros en el siglo XII; la leyenda de Robín Hood se basa probablemente en la resistencia de campesinos armados al reinado de Juan sin Tierra; en el siglo XVII en Colombia, los indios Pijaos emplearon la guerra de guerrillas contra España; durante todo el siglo XIX, los

movimientos nacionalistas, como el de Garibaldi en Italia, se basaron en luchas de grupos civiles armados; la lucha independentista en Estados Unidos fue acompañada por guerrillas que sorprendían a las tropas inglesas en emboscadas; tanto los ejércitos patriotas como realistas recurrieron a la táctica de guerra de guerrillas durante la Guerra de Independencia Hispanoamericana; en la Guerra de los Bóers, en la actual Sudáfrica, los colonos holandeses utilizaron también esa táctica, así como los irlandeses, creando un ejército de irregulares (el IRA) para oponerse a los británicos; a principios del siglo XX, Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, formaron ejércitos de campesinos en México e iniciaron una revolución con métodos de guerrilla, finalmente frustrada; en la Revolución Cubana durante las primeras fases de la lucha armada se empleó la guerra de guerrillas por parte de los revolucionarios; y el británico Lawrence de Arabia utilizó la guerra de guerrillas junto a los árabes y contra los turcos, con devastadores efectos.

Como el primer practicante moderno en definir la insurgencia, Mao comprendía que la guerra era fundamentalmente una empresa política; en efecto, veía la revolución como una lucha política en la que se debía prestar especial atención el mantenimiento de la buena voluntad del pueblo (Tse-tung, 1954). Sabía que sólo los campesinos podían proporcionar una inmejorable red de inteligencia y una fuente constante de mano de obra y recursos en forma de alimentos y soldados. Su teoría de la guerra, denominada “Guerra Popular Prolongada”, sería una estrategia político-militar basada en mantener el apoyo de la población y atraer al enemigo al “interior” donde la insurgencia pudiese desangrarlos por medio de una mezcla de guerra móvil y guerra de guerrillas.

La estrategia era una aproximación indirecta, basada en la importancia de la información que permitiera escoger el momento y el lugar favorables gracias a un buen conocimiento del territorio por tener asegurada, de antemano,

la superioridad local; luego, asediar al adversario conservando siempre la iniciativa; y posteriormente, crear a través de la desmoralización las condiciones de la victoria incluso antes de la batalla. En definitiva, el principio fundamental consistía en "conservar las fuerzas propias y acabar con las del enemigo" (Tse-Tung, 1954, p. 65).

Dada la fragmentación y la autonomía de las regiones en el campo (propio de países basados en economías feudales o semifeudales como la China de principios del siglo XX), la estrategia perseguía la toma del poder en el país a través del cerco a las ciudades desde el campo. A diferencia de la revolución rusa de 1917, no planteaba la insurrección en las ciudades, como forma principal de lucha; al menos no durante las primeras etapas y hasta que no se hubiesen desarrollado y consolidado las fuerzas en el interior del país (el campo).

La estrategia constaba de tres fases, definidas a partir del desarrollo de la guerra misma: La Primera Fase era la movilización política o defensiva estratégica, asociada a la guerra de guerrillas y a la formación inicial de grupos armados de campesinos que obtienen el apoyo de la población, a través de ataques contra la maquinaria gubernamental y por la difusión de propaganda; la Segunda Fase era el equilibrio estratégico, ligado a la guerra de movimientos, y al crecimiento y expansión del ejército revolucionario. Se caracterizaba por el aumento en la potencia de los ataques sobre el poder militar y las instituciones vitales del Estado; la Tercera Fase era la ofensiva estratégica del combate convencional, en la cual la insurgencia busca la destrucción del gobierno a través de una guerra de posiciones, usando fuerzas convencionales. En esta fase se incrementaban los enfrentamientos directos y la cantidad de contingentes desplegados para capturar las ciudades, desbordando al gobierno y controlando el país.

En la primera fase, era aconsejable operar lejos de los centros del enemigo, allí donde las comunicaciones fuesen mediocres. Por ende, en el principio había que forzar a los combatientes a conseguir que su confianza aumentase con éxitos fáciles gracias a la iniciativa y a la sorpresa. Era raro que una guerrilla victoriosa no hubiese contado con apoyo exterior, y sobre todo, con santuarios territoriales o políticos en otros países. De cualquier forma, la organización era el factor que permitía a la guerrilla compensar la superioridad material aplastante del adversario. La segunda fase, la que seguiría a la implantación de la política y a los brotes militares, era en general muy larga; es la de la extensión de las operaciones militares y sobre todo de la creación de las jerarquías paralelas. Cuando llegaba el punto de equilibrio o la tercera fase, la guerrilla revolucionaria debía escoger el lugar donde va a dar los golpes decisivos: el que pondría fin a la voluntad de combatir del adversario. La utilización del terrorismo selectivo en la "guerra popular prolongada" no tiene como objetivo la victoria militar, sino el debilitamiento de la voluntad del Estado, y la demostración a las masas de que se podía atacar al enemigo incluso en su propia ciudadela: la capital.

Según Hammes (2005), Mao sabía que los insurgentes no podían inicialmente igualar las fuerzas militares convencionales del gobierno. Por lo tanto, concibió la cuidadosa acumulación de poder político, social y económico durante la primera y segunda fase; su meta era transformar la "correlación de fuerzas" entre el gobierno y el insurgente, posibilitando el paso a la tercera y última fase. Mao Tse-Tung también comprendía que las organizaciones de masas organizadas y entrelazadas en red, eran la clave del poder político; demostrando cómo poderosas fuerzas de maniobra podrían ser golpeadas por fuerzas políticas, a través del tiempo. No en vano, una guerrilla exitosa pareciera tener que resignarse a librar una prolongada guerra. En resumen, las G4G se caracterizan por el uso de las redes, disposición a sufrir bajas y disposición a que el conflicto perdure en el tiempo; este tipo de guerras se mide

en décadas más que en campañas que duran meses o años. Por ejemplo, los chinos comunistas lucharon por 27 años; los vietnamitas lucharon contra los franceses, y más tarde contra los norteamericanos, durante 30 años; los afganos, apoyados por otras naciones, combatieron a los soviéticos durante 10 años; y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras insurgencias en Colombia, durante más de 50 años.

La siguiente modificación importante de la doctrina de la "guerra popular prolongada", fue desarrollada y empleada por Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap, en lo que eventualmente sería conocida como la "variante vietnamita". Ante el imperativo estratégico de derrotar a un poderoso gobierno exterior, los norvietnamitas desarrollaron un interesante giro al concepto de "guerra popular" de Mao; mientras mantenían el modelo maoísta de una insurgencia de tres fases, basada en los campesinos, refinaron el modelo para incluir un ataque agresivo contra la voluntad nacional de su verdadero enemigo principal, primero Francia y luego Estados Unidos. Ho y Giap desarrollaron la capacidad de llevar la guerra política a la patria de su enemigo distante y destruir su voluntad de continuar la lucha. Por supuesto, sus esfuerzos fueron tácitamente facilitados por la incapacidad francesa y norteamericana de "leer" adecuadamente el tipo de guerra que se luchaba.

Si bien Ho y Giap aceptaban las ideas básicas de Mao, se apartaban en tres aspectos de fondo: Primero, consideraban que las fases del proceso no solo se podían desarrollar de manera sucesiva, sino que debían ser simultáneas; Segundo, la toma del poder no solamente se da como consecuencia de las ofensivas que los insurgentes desarrollan en la última fase, sino que se complementa con una insurrección generalizada en las ciudades; Tercero, se requiere una huelga total de todos los gremios productivos del país que lo paraliza por completo y lo lleva a la ingobernabilidad (Giap, 1970). Para ellos, es la combinación de estos

tres elementos la que permite el triunfo de los insurgentes, a diferencia de Mao, cuya idea se orienta más al triunfo militar del ejército del pueblo organizado con base en la movilización campesina.

Sin embargo, tanto la primera como la segunda guerra de Indochina hicieron uso de la teoría de la "guerra popular prolongada", tal como lo declaró explícitamente Ho Chi Minh, en su discurso al Segundo Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores en 1951:

> Nuestro partido y gobierno preveían que nuestra guerra de resistencia tiene tres etapas. En la primera etapa todo lo que hicimos fue preservar y aumentar nuestras fuerzas principales. En la segunda etapa, hemos combatido activamente con el enemigo y preparado para la contraofensiva general. La tercera etapa es la contraofensiva general (Minh, 1984, p. 316).

Así mismo, explicó abiertamente cómo esperaba vencer a la alianza entre Estados Unidos y Vietnam del Sur. Planeó una guerra de desgaste acompañada de una intensa propaganda nacional e internacional para debilitar la resolución estadounidense (Minh, 1984). Ho había avanzado la G4G a un nuevo nivel, ya que derrotó en dos oportunidades a potencias militares y económicas superiores, a pesar de que él no podría amenazar sus patrias, ni incluso derrotar por completo a las fuerzas militares que enviaron a Vietnam.

En Nicaragua, los sandinistas a través de pasos evolutivos, incrementaron aún más el énfasis en el desarrollo político que condujo al resultado del campo de batalla. Refinaron la doctrina maoísta convirtiendo la estrategia política en el "fin del juego". En la estrategia sandinista, las maniobras políticas no serían el precursor de una invasión convencional, sino que serviría como invasión, destruyendo el apoyo externo a la Guardia Nacional Nicaragüense. Sin embargo,

al igual que las innovaciones anteriores, tomó tiempo y el inevitable ejercicio del "ensayo y error", antes de que los sandinistas encontraran la solución para tomar el poder.

Fundada en 1961, los sandinistas inicialmente no tenían un concepto claro sobre cómo tomarían el poder. Intentaron desarrollar una insurgencia de "foco"[27], de base urbana y luego campesina (Hodges, 1986). En cada caso, sus organizaciones fueron rápidamente identificadas y atacadas con resultados desastrosos para los insurgentes. En consecuencia, y después de todos estos fracasos, Humberto Ortega eligió un curso muy diferente para el movimiento guerrillero; la solución fue crear una "tercera vía", formando una coalición de base amplia campesina y urbana, cuya fuerza descansaba en una red de empresarios de clase media, estudiantes desempleados y citadinos de barrios pobres y marginales (Kinzer, 2007).

El 4 de mayo de 1977, Ortega publicó un nuevo documento de estrategia que contenía la estrategia insurreccional básica, el cual incluía: Primero, el desarrollo de un programa sin retórica izquierdista; Segundo, la creación de un amplio frente anti-Somoza con grupos de oposición no marxistas; Tercero, la creación de organizaciones de masas para apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); Cuarto, la agitación para provocar la radicalización de la oposición moderada; Quinto, la acción para socavar la integridad de la Guardia Nacional; y Sexto, la unificación de las tres facciones del FSLN bajo un liderazgo conjunto (Zimmermann, 2001).

El énfasis de Ortega en ocultar la doctrina izquierdista del FSLN, combinada con la propaganda activa para una coalición moderada, le permitió convencer a una amplia gama de oponentes de Somoza de unirse a la coalición. Su verdadera innovación fue que, a pesar de la aparición de un amplio frente, Ortega aseguró

27. La teoría de la insurgencia de "foco", afirma que al crear un pequeño grupo focal de guerrillas armadas, un grupo insurgente podrá estimular un levantamiento espontáneo de la masa del pueblo y derrocar rápidamente al gobierno.

que los elementos clave del poder, es decir todos los elementos militares y de seguridad de la coalición, permanecieron firmemente en manos de los líderes comunistas. Más importante para la revolución que las actividades dentro del país, fue adicionalmente el trabajo que los Sandinistas hicieron para socavar aún más el apoyo al gobierno de Somoza en la comunidad internacional. El FSLN mostró una autentica visión estratégica y finura operacional en la orquestación de esta campaña, al tiempo que consolidaron su control sobre el "frente popular" que se oponía al régimen.

Los guerrilleros no fueran esenciales para la victoria. El factor decisivo fue la organización política de primera línea que atrajo nuevos miembros al movimiento y aseguró el apoyo externo de los países del bloque no comunista. El partido del FSLN era el verdadero poder detrás de la coalición en todo momento (y no tenía intención alguna de compartir el poder con los miembros moderados de la coalición); en otras palabras, los moderados eran sencillamente un adorno y una distracción. Por último, los sandinistas utilizaron a los sacerdotes y a la filosofía de la Teología de la Liberación para proporcionar una base moral inatacable para la insurgencia. En conclusión, la contribución de los sandinistas a la teoría de la "guerra popular prolongada" fue eliminar la exigencia de que la última fase fuese la ofensiva militar convencional; fueron sus esfuerzos políticos los que cambiaron "la correlación de fuerzas", colapsando el gobierno de Somoza.

En el caso colombiano, durante la Séptima Conferencia Guerrillera en 1982, las FARC diseñaron su estrategia para la toma del poder en Colombia, a la que llamaron "Plan Estratégico" y más adelante "Campaña Bolivariana para una Nueva Colombia". Bajo la orientación de Manuel Marulanda, las FARC planificaron los aspectos militares y políticos tratando de acelerar el proceso insurreccional. Según Mackenzie (2007), al no contar con un partido político que organizara las masas, las FARC decidieron adoptar la "variante

vietnamita", menos rígida que el modelo maoísta, y empezar a desarrollar las ofensivas contra las fuerzas del gobierno lo más pronto posible.

> A partir de la Séptima Conferencia de las FARC en 1982, dicha guerrilla decidió avanzar por la Cordillera Oriental, que atraviesa el país desde el Macizo Colombiano (Cauca) hasta la Serranía del Perijá (La Guajira), para llegar a Bogotá a tomarse el poder por las armas. La nueva estrategia denominada "Toma a Santa Fe de Bogotá", tenía proyectado crear un anillo de presión alrededor de Bogotá. La idea era aislar a la ciudad capital del resto del país, atacando las principales vías de acceso a Bogotá (Álvarez, 2017b).

En definitiva, y luego de tantos años, la estrategia de las FARC basada en la variante vietnamita, la idea de la toma del poder por las armas, y la movilización campesina, terminaría fracasando. Es probable que como consecuencia de ello, y ante la propia transformación de la guerra hacia una nueva generación, ese grupo haya tomado la decisión de implementar el "refinamiento sandinista" de la teoría de "guerra popular prolongada", buscando a través de la participación política y la atracción de una base política moderada de carácter urbana, un cambio en la "correlación de fuerzas".

Las características de la G4G anteriormente expuestas le dan a este tipo de guerras, una ventaja dialéctica sobre la G3G; ya que les permite a fuerzas cuantitativa y cualitativamente inferiores ganar sobre fuerzas superiores en tamaño o armamento. Al basarse la G3G en la superioridad tecnológica, llegaron a surgir enormes ejércitos con un gran poder de ataque militar. En consecuencia, la única forma sensata de intentar enfrentar dichos aparatos militares sería con el uso de fuerzas irregulares ocultas que ataquen sorpresivamente al enemigo, tratando de provocar su derrota al desestabilizar a su rival. Es decir, con la

utilización de tácticas no convencionales de combate, a través de la guerra de guerrillas o guerra insurgente. Por ende, en estas tácticas las grandes batallas desaparecen casi por completo, solo sucediendo cuando la fuerza irregular se atrinchera en una ciudad y la fuerza regular o convencional impide su escape, produciéndose una batalla urbana, como atestiguan los casos recientes de Faluya, Mosul o Raqqa, en Siria.

En las G4G la población civil es esencial para ambas partes; una guerrilla no puede sobrevivir sin el soporte de una parte de la población, de la que dependen las informaciones, las comunicaciones, la provisión de alimentos y el reclutamiento. Por parte del Estado, la población no solo provee los medios y recursos necesarios, sino que además legitima el accionar de las fuerzas militares convencionales en contra de la amenaza insurgente. Asimismo, la G4G también está caracterizada por una constelación de actores en conflicto, y ya no exclusivamente de Estados. En la G4G, la invasión por inmigración puede ser al menos tan peligrosa como la invasión por un ejército convencional de un Estado nacional. En las raíces de la G4G se encuentra una crisis universal de la legitimidad del Estado, lo cual iría de la mano con la tesis presentada por Huntington (1993).

Destacan como ejemplos de G4G, la Guerra civil china (1927-1950), la Guerra de Vietnam (1955-1975), el Conflicto armado (guerra) en Colombia (1964-2017?); Guerra civil de Angola (1975-2002); Guerra de Afganistán (1978-1992); Guerra Civil Somalí (1991-2017?); Guerras Yugoslavas (1991-2002); Segunda Guerra del Congo (1998-2003).

3.5 ¿Fin de las G4G?

Van Creveld (1991) establece que básicamente la G1G se basa en movilizar la mano de obra, la G2G en el poder de fuego, la G3G en la libertad de maniobra,

y la G4G en la combinación de todas las formas de lucha (terrorismo, guerra psicológica, sanciones económicas, operaciones convencionales, disuasión nuclear, guerra de guerrillas). No obstante, la teoría de generaciones de guerra de Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton & Wilson (1989), se limitan a la era moderna de la guerra que transcurre desde la Paz de Westfalia en 1648, a los ataques terroristas de Al Qaeda de 2001. Lind et.al (1989), no abordan la guerra ni en los periodos de las guerras pre-modernas (antes de 1648), o posmodernas (después de 2001).

Por su parte, Hammes (2006) expande el constructo desarrollado previamente por Lind et. al (1989); mientras que Lind (2004) atribuye los cambios generacionales en la guerra a dos impulsores primarios, la tecnología y las ideas, Hammes (2006) eleva el concepto a un nuevo nivel, describiendo cómo la guerra moderna ha evolucionado como resultado de cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos que han ocurrido en el tiempo en las sociedades. Lo cierto es que la guerra moderna ha evolucionado como resultado de los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos que se han producido con el tiempo en las sociedades.

Se han presentado cambios profundos en toda la gama de actividades humanas, desde que la G3G evolucionara en 1939. Políticamente, hay más actores en el sistema internacional. Mientras que en 1945, el sistema internacional estaba compuesto por 51 Estados nacionales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hoy existen 193 Estados-nación, luego de la inclusión de Sudan del Sur. Pero más allá del aumento en los Estados nacionales, hay muchos otros jugadores, entre los que se cuentan organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, organizaciones transnacionales como la Hermandad Islámica y actores no estatales al margen de la ley como los carteles de drogas, todas las cuales influyen en la toma de decisiones, incluso en los países más poderosos; una situación ni siquiera concebida en 1939.

Así mismo, desde el punto de vista económico, los Estados ya no controlan del todo sus propias políticas de inversión, aranceles y comercio. Hoy en día, varias organizaciones internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Unión Europea (UE), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y otros, limitan severamente la capacidad de cada país para establecer esas políticas de manera independiente. Además, desde el punto de vista social, el mundo es dramáticamente más pequeño gracias a la globalización; a diferencia de 1945, hoy los seres humanos se comunican y viajan libremente alrededor del globo. El avance en las telecomunicaciones conecta incluso a los territorios más apartados y aislados del mundo, en contraste a 1939, cuando la comunicación internacional era muy cara, y los primeros vuelos transoceánicos apenas iniciaban.

Hace más de 100 años, la electricidad era una novedad disponible sólo en áreas limitadas; y a medida que su uso se extendió, también lo hizo la dependencia a ella. A medida que los sistemas e infraestructuras críticas reconocían su vulnerabilidad a las interrupciones de la red eléctrica, la carrera por entrar en esta red pronto se vio compensada por una contra-necesidad de salir de la misma. La computadora también comenzó como una novedad restringida a muy pocos, pero su disponibilidad y su uso se extendió; y al igual que la electricidad, las computadoras se conectaron en red al unirse al Internet. Y de la misma manera que la red eléctrica, el Internet creció en importancia al soportar sistemas, procesos e infraestructuras críticas, que afectan la propia seguridad nacional de los Estados.

El sorprendente éxito inicial de las fuerzas de Gran Bretaña en las Malvinas en 1982 y de la Coalición liderada por Estados Unidos en las dos guerras del Golfo en 1991 y 2003, podrían dar a entender una continuidad en la forma de hacer la guerra en occidente. Pero esos tres conflictos se libraron exactamente

de la manera precisa para la que habían sido adiestradas las fuerzas occidentales, es decir, tomar o recuperar un territorio enfrentándose a un agresor armado convencional. Además, Occidente ha destacado siempre por su capacidad para enviar fuerzas militares a teatros de operaciones distantes, como en las campañas de Alejandro y Julio César, las Cruzadas y la conquista de América, la represión del Motín de la India y de los Bóer, la Guerra del Pacífico y las guerras del Golfo.

En los años noventa, las fuerzas armadas de los principales Estados occidentales experimentaron una serie de cambios interrelacionados que mejoraron esa capacidad para trasladar fuerzas militares a frentes distantes; estos cambios se suelen conocer como la "Revolución en Asuntos Militares" (Revolution in Military Affairs). Término acuñado por el *Office of Net Assessement* del Pentágono para referirse a la interacción entre los sistemas que recogen, procesan, fusionan y comunican información, y los que aplican la fuerza militar para posibilitar una "violencia precisa". La Revolución en Asuntos Militares (RAM), consistiría en la sinergia entre tres elementos: 1) unos servicios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de tecnología avanzada; 2) unos recursos de mando, control, comunicación, informática y espionaje avanzados; 3) unas municiones guiadas con precisión.

En 1943, tanto Estados Unidos como Alemania comenzaron a emplear armas inteligentes, dirigidas contra blancos (fijos o móviles) mediante señales de radio enviadas desde la plataforma de lanzamiento; en 1958, Estados Unidos empezó a utilizar misiles de precisión guiados contra objetivos móviles, y una década después entraron en servicio los primeros misiles del tipo "dispara y olvida", que no requerían ser guiados por una persona; los satélites se utilizaron por primera vez en labores de reconocimiento en 1961 y para comunicaciones en 1965; los primeros ordenadores tácticos entraron en uso en 1966 y el primer

correo electrónico se envió en 1972. Sin embargo, cada uno de esos elementos se empleó operativamente de manera aislada, hasta que la disolución de la Unión Soviética pusiera fin a la amenaza nuclear (al menos, de forma temporal); sólo entonces y justo a tiempo para la Guerra del Golfo, comenzaron los militares a integrar esas innovaciones en un sistema de sistemas.

La actual RMA depende de una de las características distintivas de la práctica occidental de la guerra: una fuerte inversión en investigación y tecnología para compensar una acusada inferioridad numérica y, más recientemente, para contrarrestar la aversión a sufrir bajas. Como lo indica Boot (2006), Estados Unidos ha definido un modelo americano de hacer la guerra, basado en su superioridad industrial, logística y organizativa. No obstante, son pocas las hostilidades recientes declaradas por potencias soberanas en las que se han utilizado arsenales de alta tecnología, ya que el 90% de los conflictos declarados desde 1945, han sido guerras civiles libradas con armas relativamente sencillas. Pauta que continuará en el siglo XXI, debido a que las guerras de alta tecnología, que dan prioridad a un adiestramiento riguroso, un respaldo logístico imponente y un abundante arsenal actualizado, plantean exigencias que pocos Estados pueden satisfacer.

Empero, las guerras libradas con arsenales menos avanzados y en especial las guerras civiles, tienden a ser más brutales y a provocar más bajas civiles. En las guerras entabladas en Europa durante el siglo XIX y principios del XX, las bajas militares sumaban entre el 70 y el 80% del total. En cambio, desde 1945, la mayoría de los aproximadamente 50 millones de personas muertas en guerra han sido civiles. Además, casi todas ellas murieron por heridas infligidas por armas baratas y de producción masiva con munición de pequeño calibre; incluso, a veces bastaban las armas tradicionales: la mayoría de los 500.000 a 800.000 tutsis muertos en Ruanda en 1994 en un periodo de tres meses, perdieron la vida a “machetazos”.

Las matanzas de las guerras civiles tampoco fueron producto, normalmente, de una violencia masiva, es decir, de una guerra de todos contra todos, en una sociedad irremediablemente dividida. En efecto, los titulares de prensa de los campos de batalla en países como Siria, Libia, Nigeria, Afganistán, Ucrania, entre otros, dan la impresión de que el mundo se está volviendo cada vez más violento. De hecho, desde 2013 el número de conflictos armados en el mundo y el número de muertes por batalla ha venido en creciente aumento (Scott, Mokleiv, Strand & Urdal, 2016). Según el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala (UCDP, por sus siglas en inglés)[28], el número de conflictos aumentó de 34 en 2013 a 40 en 2014, la suma más alta desde 1999. Además, el número de personas muertas como consecuencia directa de estos conflictos pasó de 100.000 por primera vez en más de 25 años.

Con relación a la guerra padecida en Colombia, los datos de violencia señalan que es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina.

> La investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) permite concluir que en este conflicto se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Su dimensión es tan abrumadora que si se toma como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición de la población de ciudades enteras como Popayán o Sincelejo (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 31).

28. La UCDP es el principal proveedor de estadísticas sobre violencia política. Ha identificado 259 conflictos armados distintos desde 1946, los cuales involucran a uno o más gobiernos estatales y causando al menos 25 muertes relacionadas con batallas en un año.

De acuerdo al Registro Único de Víctimas (RUV), desde 1985 hasta 2013, 166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado (sin contar con las 11.238 víctimas documentadas en la base de datos del GMH, entre 1958 y 1984). Así mismo, según el GMH, entre 1958 y 2012, murieron 40.787 combatientes; en consecuencia, de las 220.000 víctimas que arroja el conflicto armado desde 1958 hasta el 2012, el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes (es decir, ocho de cada diez muertos han sido civiles).

En consecuencia, ante un entorno estratégico cada vez más complejo, volátil, incierto y ambiguo, y al promover la idea de que la guerra puede ser vista desde la perspectiva de una tipología generacional, Hammes (2006; 2007) sugiere la probabilidad de que los conflictos están transitando en la actualidad a una Guerra de Quinta Generación (G5G). Entonces, si las guerras de G4G marca el final de la era moderna de la guerra, las G5G podrían significar el comienzo de la era posmoderna, que marca su inicio con los ataques terroristas perpetrado por Al Qaeda en los Estado Unidos, el 11 de septiembre de 2001. En efecto, la guerra contra el terrorismo ha puesto en evidencia la ineficacia de las medidas convencionales de la guerra contra insurgencias estructuradas en redes, tales como las que están siguiendo el modelo de Al Qaeda o del Estado Islámico (Daesh); este tipo de amenazas sientan las bases para la era posmoderna de la guerra.

Liang & Xiangsui (2002) afirman que la guerra ha vuelto a "invadir la sociedad global" de una manera más compleja; la dificultad está en reconocerla y contradecirla. Hasta ahora, no ha habido una definición comúnmente aceptada para la G5G, ya que incluso los arquitectos del concepto de generaciones de guerra difieren sobre su surgimiento. Sin embargo, Hammes (2007) postula que, dada la velocidad a la que cambia la naturaleza de la guerra, es razonable aceptar que la G5G ya está haciendo su aparición: pasaron cientos de años

desde el desarrollo del fusil y del cañón para que evolucionara la G1G; la G2G evolucionó y alcanzó su punto máximo en los 100 años ocurridos entre las batallas de Waterloo y Verdún; la guerra de G3G llegó a su madurez en menos de 25 años; la G4G, que se llevó a cabo inmediatamente después de su concepción en China, ha estado presente en los últimos 85 años. Por ende, es probable que la G5G esté emergiendo, a pesar de que no se reconozca inmediatamente.

Es importante resaltar que no se vería a las generaciones posteriores de la guerra (G5G, G6G,… etc.), como una eliminación de las generaciones anteriores. En lugar de ello, las generaciones anteriores de la guerra seguirían existiendo, ya que los Estados u otros actores que carecen de los medios para mantener a las generaciones posteriores de la guerra, continuarán utilizando las anteriores, es decir, las de G1G, G2G, G3G y G4G.

4 ¿Guerras del Presente o del Futuro?: Mutando a G5G

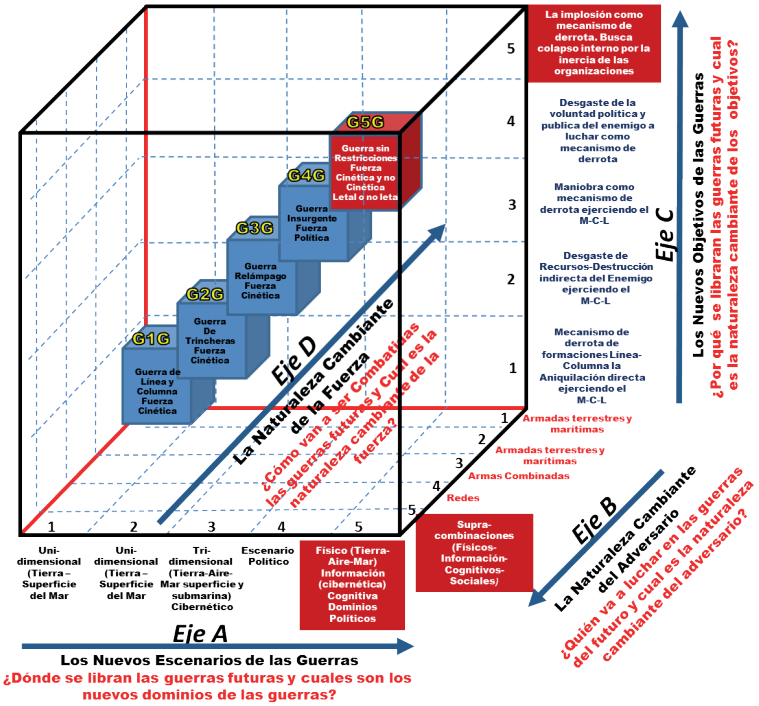
Con base en los aportes de Lind (1984; 2004), Hammes (2005; 2006; 2007), Liang & Xiangsui (2002), es posible extraer los elementos necesarios para la construcción de una tipología generacional de la guerra. Estos elementos esenciales son: los nuevos dominios del conflicto; la naturaleza cambiante de los adversarios; la naturaleza cambiante de los objetivos; y la naturaleza cambiante de la fuerza.

Los tres primeros elementos se refieren al carácter o los medios de la guerra, mientras que el último elemento aborda la naturaleza de la guerra, es decir, a su esencia misma como ejercicio de la voluntad humana en la aplicación de la fuerza. Liang & Xiangsui (2002) sostienen que hasta el presente, los elementos básicos de los campos de batalla de guerra (dominios), soldados (adversarios), propósito (objetivos) y armas (fuerza), nunca han sido cuestionados. Sin embargo, el problema en la era posmoderna de la guerra viene con la comprensión de que,

como resultado de los impactos políticos, económicos, sociales y tecnológicos de la era de la información y de la globalización, y porque la conducción de la guerra se ha extendido más allá de las fuerzas estrictamente militares, estos elementos han cambiado profundamente, lo que exigiría una nueva comprensión de ellos.

Por lo tanto, Reed (2008), ha establecido que los cuatro elementos esenciales de la guerra y su evolución sobre ejes separados, pueden ser analizados a través de un modelo tridimensional, como puede observarse en el Gráfico No. 1. En lugar de separarlos unos de otros para el análisis individual, el modelo utiliza los cuatro elementos como un todo compuesto para ilustrar la evolución de generaciones de guerra. La tipología generacional de la guerra en el Gráfico No. 1 cumple con cada uno de estos requisitos.

Gráfico 1. Tipología Generacional de la Guerra



Fuente: Adaptado de Reed, D. J. (2008).

La evolución de los Eje A (nuevos dominios de conflicto), Eje B (naturaleza cambiante de los adversarios), y Eje C (naturaleza cambiante de los objetivos), forman el marco básico del modelo, y en conjunto posibilitan la evolución del Eje D (cambio de la naturaleza de la fuerza). Los Ejes A, B y C se refieren al término "carácter de la guerra" empleado por Clausewitz (2003), o a los medios por los cuales se libra la guerra; demuestran aspectos del determinismo causal, ya que evolucionan junto con (y como resultado de…), los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos que han ocurrido a lo largo del tiempo en las sociedades. Sin embargo, la evolución del Eje D difiere de los ejes A, B y C, ya que no refleja en demasía los resultados de determinación causal, y es más característico del ejercicio del libre albedrío.

Con base en Clausewitz (2003), la definición de la naturaleza de la guerra se refiere al uso de la fuerza o el poder para obligar a un adversario a aceptar la imposición de la propia voluntad. En este sentido, Liang & Xiangsui (2002) afirman que al interior de la naturaleza de la guerra, el concepto de la compulsión es inmutable; sin embargo, las formas que puede adoptar la fuerza son adaptables y su aplicación depende del ejercicio de la voluntad. A pesar de ello, los resultados del Eje D[29], sólo son posibles como resultado del modelo creado por los Ejes A, B, y C, por lo que no puede ser separado de ellos.

Al producir este resultado, el modelo muestra cómo los cambios en el "carácter la guerra", es decir, los medios por los cuales se combate la guerra (Ejes A, B y C), permiten un cambio en la naturaleza de la guerra (Eje D), expandiendo las formas que podría llegar a tomar la fuerza (Reed, 2008). De esta manera, el modelo tridimensional ilustra la orden mediante el cual, el surgimiento de la G5G puede estar transformando la naturaleza o esencia misma de las guerras en la actualidad.

29. Es decir, la expansión del concepto de fuerza más allá de la fuerza cinética, abarcando tanto las fuerzas políticas como las no cinéticas. La fuerza cinética militar, es un eufemismo para la acción militar que implica el uso de fuerza letal.

4.1 Eje A: Los Nuevos Escenarios del Conflicto

La evolución de los escenarios de conflicto en el Eje A es resultado de los cambios sociales. La tecnología y la capacidad económica hicieron posible los inmensos teatros de operaciones unidimensionales de las G1G y G2G, pero también los hicieron insostenibles, incluso para los Estados más ricos e industrializados. Inclusive, cuando la G1G se llevó a cabo en el mar, la guerra se libró en un escenario unidimensional (superficie del agua). La G3G, aprovechando los mayores avances económicos y tecnológicos de los Estados-nación resultantes de la era industrial, extiende los escenarios de la guerra hacia un entorno tridimensional, que abarcase tierra, aire, mar (incluido el submarino), y cibernético. La G4G, en contraste con las tres primeras, expande la guerra más allá del campo de batalla tridimensional, de carácter físico, hacia el escenario político. Al hacerlo, permite a los oponentes militarmente más débiles cambiar el enfoque de la superioridad militar convencional y hacer de la guerra un concurso de voluntad política, en lugar de una simple contienda de fuerza armamentista. La G5G trasciende la de G4G, al expandir aún más allá los escenarios de conflicto, para incluir el físico (tierra, aire, mar, espacio exterior)[30], la información (cibernética)[31], y la cognitiva y social (los dominios políticos)[32].

Esta expansión de los escenarios de la guerra hace posible la extensión exponencial del concepto de campo de batalla más allá del dominio físico, eliminando sus limitaciones geográficas y políticas, permitiendo que el escenario de guerra se torne omnipresente.

30. El escenario físico es el escenario tradicional de la guerra, donde una fuerza se mueve a través del tiempo y el espacio; comprende los dominios tradicionales terrestres, marítimos, aéreos y espaciales, donde las fuerzas militares ejecutan sus operaciones militares, y en donde se realiza la mayor parte de la guerra convencional.
31. El escenario de información es aquel donde se crea, manipula y comparte la información; abarca el dominio cibernético.
32. El escenario cognitivo es donde residen la intención, la doctrina, las tácticas, las técnicas y los procedimientos; es el dominio donde surgen los conceptos decisivos. Por su parte, el escenario social comprende los elementos necesarios de cualquier empresa humana; es donde los seres humanos interactúan, intercambian información, forman conocimiento compartido y entendimientos, y toman decisiones colaborativas. A su vez, es el ámbito de la cultura, la religión, los valores, las actitudes y las creencias, y donde se toman decisiones políticas relacionadas con la "voluntad de la comunidad".

> Los dos tipos de escenarios de batalla [el espacio convencional y el espacio tecnológico] se superponen y se intersecan entre sí, y se complementarán mutuamente a medida que cada uno se desarrolle a su manera. Así, la guerra evolucionará simultáneamente en las esferas "macroscópica", "mesoscópica" y "microscópica", así como en otras esferas definidas por sus propiedades físicas, que finalmente servirán para constituir un maravilloso campo de batalla sin precedentes en los anales de la guerra humana (Liang & Xiangsui, 2002, p.32).

Uno de los espacios convencionales característicos de las G5G serían las ciudades. De acuerdo a Dimarco (2012), los centros urbanos parecen haber dominado el campo de batalla durante la mayor parte de la historia, particularmente en la guerra pre-moderna. En efecto, la guerra pareciera ser una institución humana permanente que ha tendido por su propia naturaleza, a desarrollarse en aquellos lugares en donde las personas se concentran, y desarrollan principalmente sus actividades políticas, económicas y sociales (Kilcullen, 2013). Y si bien en las G1G y G2G, evitar las ciudades había sido generalmente el curso de acción deseado, ya que la población civil no hacía parte del centro de gravedad[33] del enemigo, en las G3G y G4G los centros urbanos retomaron un papel cada vez más relevante en el desarrollo de operaciones militares, como lo atestiguan las batallas de Stalingrado y Aachen durante la Segunda Guerra Mundial, Hue durante la guerra de Vietnam, o Grozny en 1994-1995 y 1999-2000.

Sin embargo, en las G5G las ciudades se han constituido como un escenario protagónico de la guerra. (Álvarez, 2017b) El colapso de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 demostró la susceptibilidad de las ciudades

33. Desde el punto de vista militar el origen del concepto se le atribuye a Carl Von Clausewitz. En física, el centro de gravedad representa el punto donde las fuerzas de la gravedad convergen dentro de un objeto; también es el punto en el cual al aplicar una fuerza, el objeto se moverá eficazmente: si se golpea con bastante fuerza es posible que el objeto pierda su equilibrio y se caiga. Desde el punto de vista militar, el centro de gravedad es una fuente de fortaleza física o moral, o de influencia, cuya neutralización, degradación, dislocación, o destrucción tendrá decisivo impacto para lograr los objetivos ofensivos o defensivo establecidos (Manual de Estado Mayor y Mando Conjunto para las Fuerzas Militares de Colombia 3-25/2005).

a los ataques terroristas; desde entonces y hasta la actualidad, ataques terroristas en centros urbanos en Israel, España, India, Francia, Reino Unido, Egipto, Alemania, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Iraq, Siria, Rusia, Turquía, México, entre muchos otros, han arrojado un saldo aproximado de 14.057 muertos y 43.748 heridos, en comparación con los aproximadamente 1.954 muertos y 8.284 heridos entre 1970 al 2000 (Williams & Selle, 2016).

En la actualidad, las ciudades absorben gran parte del impacto y las consecuencias de las guerras contemporáneas, tanto directa como indirectamente, con consecuencias tanto para el desarrollo como para la gobernabilidad de los Estados. En el siglo XXI, desde Karachi hasta Bogotá, las ciudades han sido blancos de actos de terror episódicos o sostenidos; prueba de ello han sido los 33 incidentes (mayores y menores) de terrorismo perpetrados en Bogotá entre el 2015 y 2017 (Álvarez, 2017b). No obstante, los actos terroristas son solo una forma de violencia que enfrentan las poblaciones urbanas; también son sitios de violencia y oposición política, guerra civil y competencia conflictiva por el acceso y control sobre el espacio y los recursos urbanos. Estas batallas pueden superponerse con la violencia criminal, la guerra de pandillas u otras características de la fragilidad y complejidad que supone la vida urbana, pero no deben confundirse con el terrorismo internacionalmente vinculado, aunque a menudo están en la retórica de la "guerra contra el terrorismo".

Guerras como las libradas actualmente en Siria e Irak, respaldan la tendencia de que las operaciones urbanas dominarán la guerra en el Siglo XXI. A medida que la urbanización se acelera, también es probable que el conflicto urbano aumente, ya que existen numerosos incentivos políticos y económicos para que los adversarios de los Estados decidan luchar en las ciudades. Además,

> Es probable que en esta dinámica urbanizadora, los recién llegados a zonas urbanas experimenten algún grado de frustración provocado

> por la decepción económica y las expectativas insatisfechas de lograr obtener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Y es en este contexto, que un gran número de jóvenes desempleados o subempleados tendrían amplias oportunidades para luchar y participar en el crimen organizado u otras actividades al margen de la ley (Álvarez, 2017b, p.42).

Otro dominio distintivo de las G5G, en este caso tecnológico, es el ciberespacio; dentro de la comunidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), el ciberespacio se refiere al conjunto de medios físicos y lógicos que conforman las infraestructuras de los sistemas de comunicaciones e informáticos. De acuerdo a Ottis & Lorents (2009), el ciberespacio puede también definirse como "un conjunto de sistemas de información interconectados, dependientes del tiempo, junto con los usuarios que interactúan con estos sistemas" (p.182). La Unión Internacional de Telecomunicaciones, define el ciberespacio como el lugar creado a través de la interconexión de sistemas de ordenador mediante Internet; es decir, el ciberespacio se puede considerar como la interconexión de los seres humanos a través de los ordenadores y las telecomunicaciones, sin tener en cuenta la dimensión física. Por su parte, el ciberentorno incluye a usuarios, redes, dispositivos, todo el software, procesos, información almacenada o que circula, aplicaciones, servicios y sistemas que están conectados directa o indirectamente a las redes.

La importancia del ciberespacio como escenario de conflicto de las G5G, estaría relacionada con la información y la comunicación. El término comunicación procede del latín communicare que significa "hacer a otro partícipe de lo que uno tiene"; por ende, la comunicación se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una información, y ha sido una acción tan importante en la actividad humana, que se le relacionaba en el pasado con los dioses. Por

ejemplo, en la mitología griega, Hermes era el dios olímpico mensajero, de las fronteras y los viajeros que las cruzan, el ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos.

Los sistemas de comunicación iniciales solo transmitían señales entre dos puntos geográficos; el verdadero avance lo constituiría establecer una cadena de transmisión y así aumentar la distancia en la propagación del mensaje. Asimismo, durante miles de años la velocidad de las comunicaciones estaba dada por el método empleado para comunicar un mensaje a distancia, desde mensajeros a pie, palomas, caballos, trenes, telegrafía, teléfono, hasta la inmediatez que proporciona el internet. Por ejemplo, en 1858 tomó 40 días para que las noticias del motín indio llegaran a Londres, mientras que para 1870 había varias líneas telegráficas que conectaban India a Europa; el advenimiento del cable submarino en 1866 redujo el tiempo para enviar un mensaje de un par de semanas, a la transmisión prácticamente instantánea. En la década de 1840, cuando la telegrafía eléctrica empezó a extenderse, la información podía enviarse a una velocidad de 4 ó 5 palabras por minuto; en la actualidad, el contenido completo de la Enciclopedia Británica podría transmitirse en un solo hilo de fibra óptica en una fracción de segundo.

Pero las comunicaciones han tenido un lugar destacado en el desarrollo de las guerras a lo largo de la historia, y han sido esencialmente importantes para conducir los asuntos del Estado. Tanto así, que hasta años recientes, los gobiernos seguían manteniendo las comunicaciones bajo capital público, y no privado. La Grecia antigua y el Imperio Romano ya poseyeron sistemas de telégrafo bien organizados como cadena de servicios para la transmisión de información; por ejemplo, para su ataque a Troya, Agamenón erigió una línea de 500 kilómetros de faros en 1184 a.C. Especialmente práctico fue un "telégrafo" de antorcha que idearon dos ingenieros de Alejandría, Kleoxenos y Demokleitos, en el antiguo

Egipto; el rey persa Darío I (550-485 a.C.) tenía una red de fuego-telegrafía en toda Persia, permitiendo obtener información oportuna sobre cualquier rebelión o ataque planificado desde el exterior. Los romanos, ya en el 150 a.C., además de usar señales de humo y fuego, levantaron y bajaron vigas de madera sobre una plataforma de torres especiales colocadas en una línea recta de visión en varias áreas a lo largo de más de 4.500 km, hasta el Muro de Adriano en el norte de Inglaterra; estos cientos de torres les permitían cubrir más de 6 millones de km² (Szymanczyk, 2013).

En China también se utilizaría la transmisión de mensajes mediante señales de fuego de torre a torre a lo largo de la muralla china, logrando transmitir en pocas horas mensajes a casi 750 km de distancia. En la Edad Media, se emplearon señales de humo y fuego entre las ciudades y los fuertes construidos por los cruzados en Palestina y Siria. Además de las señales de fuego y humo, también se aplicaron recursos de transmisión acústica, como el gong de China, o los cuernos y caracolas sonoras en otras partes del mundo, las cuales se podían escuchar a más de 1 km de distancia; pareciera que Alejandro Magno utilizaba un cuerno con el cual daba órdenes a distancias de hasta 18 km. Por su parte Darío I podía enviar las noticias de la capital a las provincias del imperio persa, por medio de una línea de los "hombres de grito", colocados en alturas; de esta forma, usando la voz humana, se podía llamar a combatir a todos los soldados, en apenas tres días. En el caso del continente americano, los aztecas, incas y chibchas tenían un completo sistema de comunicación a distancia. Llama la atención el episodio que sucedería a finales de octubre de 1520, y que tuviese como protagonistas a los Onas, indígenas del extremo sur de Argentina. Estos, al avistar la presencia de los portugueses, encendieron sobre las costas grandes hogueras por las que avisaron de tal novedad a su gente tierra adentro; en consecuencia, Fernando Magallanes, al ver tantas fogatas encendidas, denominaría a dichos territorios como "Tierra del Fuego" (Szymanczyk, 2013).

Los animales también fueron empleados en las comunicaciones; en Persia, por ejemplo, se establecería en el 500 a.C. un correo expreso empleando el medio de transporte a caballo. La utilización de palomas mensajeras se aplicó tanto para los servicios comerciales en tiempos de paz, como de información en tiempos de guerra, y fueron probablemente los egipcios los primeros en practicarlo, alrededor del 3.000 a.C. Las palomas y los perros fueron utilizadas exhaustivamente durante la Primera Guerra Mundial, así como en la Guerra Franco Alemana entre 1870 y 1871, generando un negocio tan rentable, que daría paso a la creación de la Casa Reuter, una empresa informativa que subsiste hasta el día de hoy.

Sin embargo, las telecomunicaciones propiamente dichas, solo aparecerían hacia finales del siglo XVIII. Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes u otro tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia; incluye además toda clase de tecnologías como la radio, televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes informáticas o Internet (gran parte de estas tecnologías nacieron para satisfacer necesidades militares). El primer sistema de telecomunicaciones moderno sería el telégrafo óptico de Chappe, inventado en la Francia revolucionaria, aunque la primera aplicación de la telegrafía eléctrica en la guerra, se realizaría solo hasta la Guerra de Crimea (1853–1856). Desde entonces, el uso del telégrafo ha sido decisivo en grandes contiendas como el Motín de la India de 1857, las guerras de unificación italiana en 1859, o en la Guerra de Secesión de Estados Unidos de 1861-1865. En Colombia, el 1 de noviembre de 1865 se transmitiría por primera vez un telegrama, iniciando así el desarrollo de las redes telegráficas en el país, que permitieron eventualmente la comunicación inmediata entre lugares distantes del territorio nacional, y años después, con el resto del mundo (Rodríguez, 2012).

El desarrollo de las telecomunicaciones permitiría en la Primera Guerra Mundial, la generalización del uso de las telecomunicaciones en el campo de batalla, y si bien al inicio de la contienda los medios móviles eran escasos, la telecomunicación tomó un papel relevante en los frentes, para lo que se instalaron miles de km de líneas telegráficas y telefónicas. Por su parte, en la Segunda Guerra Mundial nacería el uso de la radiodifusión como arma psicológica y propagandística. A su vez, la carrera armamentística causada por la Guerra Fría, propiciaría avances en telecomunicaciones como la telefonía móvil, de la mano de Motorola en 1973, gracias a la carrera espacial y la puesta de satélites orbitales.

El origen de Internet se remonta a 1969, cuando la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos (ARPA en sus siglas en inglés), conectó cuatro sistemas distantes en una red que se denominó ARPANET, destinada a mantener las comunicaciones en caso de una guerra nuclear.; esta agencia, dependiente del Departamento de Defensa, nació en 1958 con el objetivo de desarrollar proyectos de tecnología militar en plena Guerra Fría. Con ARPANET llegaba una revolución en el campo de las comunicaciones porque era una red que permitía la entrada y salida de conexiones sin que el sistema se viera afectado; hasta aquel momento, Estados Unidos contaba con una red centralizada que se consideraba muy insegura en caso de guerra, ya que un solo fallo podría bloquear el sistema. Ello conduciría a que la red conectase todas las agencias y los proyectos de defensa de Estados Unidos. Empero, el salto cualitativo se produciría cuando ARPANET se extendió por el mundo académico, permitiendo a los científicos y académicos, compartir opiniones y colaborar en sus trabajos; hasta el punto que para 1972, la red ya integraba a 50 universidades y centros de investigación diseminados por todos los Estados Unidos. Posteriormente, a principios de los años noventa, aparecería el Internet tal cual se conoce, revolucionando junto con la fibra óptica, las telecomunicaciones y la información.

Por lo tanto, el ciberespacio sería el nuevo campo de batalla en el siglo XXI. En la actualidad se experimenta una continua hostilidad entre diversos actores estatales y no estatales, conducidos en gran parte por medios no militares, como por ejemplo, acciones de propaganda, agitación política, sabotaje, crimen, espionaje industrial y político, entre otros, llevados a cabo en, a través o en combinación con el ciberespacio (Betz & Stevens, 2012).

Según Rosenzweig (2013), los actores (tanto estatales como no estatales) que decidan operar en el ciberespacio, obtendrían una serie de ventajas asimétricas: Primero, el ciberespacio es un campo de batalla de grandes dimensiones y donde resulta relativamente fácil asegurar el anonimato, ya que además, los ataques se pueden lanzar desde casi cualquier parte del mundo; Segundo, los efectos de los ataques son desproporcionados con respecto a su coste, es decir, las operaciones se pueden realizar sin necesidad de efectuar fuertes inversiones en recursos humanos y materiales; Tercero, la naturaleza de los ciberataques fuerza a la mayoría de las víctimas, tanto reales como potenciales, a adoptar una actitud defensiva; Cuarto, esta amenaza tiene un alcance global, en la cual el actor (ya sea ciberdelincuente, ciber-terrorista, etc.), puede operar desde cualquier parte del mundo con el único requisito de tener acceso al ciberespacio; y Quinto, proporciona las herramientas necesarias para que los más pequeños puedan enfrentarse, incluso vencer y mostrarse superiores a los más poderosos, con unos riesgos mínimos para ellos.

En definitiva, considerando el ciberespacio como un espacio o una colección de recursos, los actores implicados (incluyendo Estados, negocios, organizaciones, grupos o individuos), competirían por controlarlo, conduciendo inevitablemente a conflictos en el ciberespacio. Se podría definir "ciberconflicto" como la confrontación entre dos o más partes, donde al menos una parte utiliza los ciberataques contra el otro. Por supuesto, la naturaleza

del conflicto diferirá de la naturaleza y objetivos de los participantes. Por ejemplo, los delincuentes buscarían ingresos ilegales, de modo que secuestran parte del ciberespacio; los servicios de inteligencia buscarían información útil para atacar a partes enemigas, amistosas o neutrales del ciberespacio para obtener acceso a esa información; y las fuerzas militares buscarían interrumpir las operaciones del enemigo, por lo cual atacarían sistemas de sensores, logísticos, de comunicaciones y control en el ciberespacio enemigo.

Los conflictos pueden ser tan simples como disputas civiles sobre la propiedad de un nombre de dominio, o más complejos, como campañas deliberadas de ciberataques como parte de la guerra convencional entre Estados tecnológicamente avanzados. Dando por supuesto que los ciberconflictos son inevitables, se pueden establecer varias implicaciones desde la variable tiempo de la que depende el ciberespacio; esta dependencia del tiempo se podría explicar cómo el cambio en la estructura y contenido del ciberespacio a lo largo del tiempo, tomando en cuenta que el tiempo en el ciberespacio puede ser relativamente corto: minutos, incluso segundos o fracciones de segundo.

4.2 Eje B: La Naturaleza Cambiante del Adversario

La evolución de nuevos escenarios de conflicto en el Eje A, guarda coherencia con la evolución de la naturaleza de los adversarios en el Eje B (Reed, 2008). En efecto, la aparición de armamento con mayor potencia y cadencia de fuego (rifles de carga, ametralladoras y artillería avanzada), haría inoperantes las formaciones de líneas y columnas de ejércitos que practicaban la G1G; además, serían demasiado costosas en vidas humanas. Como consecuencia, los ejércitos de la G2G fueron forzados a adaptarse a la guerra de trincheras (a pesar que el campo de batalla seguía siendo unidimensional), más que a formaciones masivas y abiertas al aire libre.

La Guerra Civil Norteamericana es el mejor ejemplo de la transición de la G1G a la G2G; si bien el conflicto armado comenzaría con campos de batalla abiertos, al estilo practicado por los ejércitos napoleónicos 50 años atrás, terminaría con tácticas y estrategias más parecidas a la guerra de trincheras de los campos de batalla del Marne, Somme y Verdún. Podría afirmarse que la Guerra Civil fue la primera guerra moderna de la historia, pues fue la primera vez en que unos gobiernos enfrentados (un Norte industrializado versus un Sur semifeudal), asociarían las ideas de la revolución francesa del siglo XVIII, con el proceso de la industrialización del siglo XIX. La Guerra Civil señalaría que el nuevo campo de batalla tecnológico se cobraría un considerable tributo en vidas, y que la capacidad del Estado moderno para movilizar sus recursos humanos e industriales, podía nutrir dicho campo de batalla de forma casi indefinida.

Sin embargo, con el advenimiento de la G3G, los ejércitos mecanizados con mayores capacidades de maniobra y velocidad, llegaron a dominar el campo de batalla convencional, buscando romper la inercia de la guerra de trincheras. Por ejemplo, cuando los nazis se enfrentaron con el ejército francés atrincherado a lo largo de la fuertemente fortificada Línea Maginot en 1940, utilizando el concepto de *blitzkrieg* en los escenarios de aire, mar y tierra, simplemente maniobraron alrededor del ejército francés más rápido de lo que los franceses podrían responder, haciendo que Francia capitulara después una campaña que duró sólo seis semanas (Reed, 2008). Esto a pesar de que Francia tenía un mayor número de soldados que Alemania, así como el apoyo de las fuerzas aliadas de Gran Bretaña, Bélgica y Holanda.

El concepto de *blitzkrieg* por grandes fuerzas mecanizadas en la G3G ha sido refinado en las últimas décadas y sigue dominando la guerra convencional de hoy; su encarnación actual se puede encontrar en la rápida y decisiva doctrina de victoria del Ejército de los Estados Unidos. Pero a pesar del abrumador éxito

de los ejércitos mecanizados en los campos de batalla convencionales, en los últimos 50 años los conflictos de baja intensidad y las insurgencias que practican formas de G4G habían dominado el conflicto contra los Estados-nación. Van Creveld (1991) señala que de los más de 160 conflictos armados alrededor del mundo entre 1945 y 1991, más del 75% de ellos se han caracterizado como conflictos de baja intensidad. Han variado desde guerras de guerrillas hasta acciones terroristas, y se caracterizan por su tendencia a ocurrir en las regiones menos desarrolladas del planeta, en donde no existen ejércitos modernos o el uso de armas de alta tecnología.

La prevalencia de G4G en la segunda mitad del siglo XX se podría deber a su eficacia; en efecto, Lyall & Wilson (2006) encontrarían que contra 159 insurgencias estudiadas, la tasa de éxito de los Estados-naciones que combatían las insurgencias fue de sólo un 21% entre 1950 al 2003. Un ejemplo postmoderno de la dificultad que plantean las insurgencias para los Estados con ejércitos modernos, es la insurgencia que han enfrentado los militares estadounidenses en Irak desde 2003. Grupos como Daesh o Al-Qaeda, con una estructura horizontal (en lugar de jerárquica), y ad hoc (en lugar de unificada), han logrado la resistencia de una red, frente a un oponente con recursos casi ilimitados; como indica Hoffman (2006), "no hay centro de gravedad, ni liderazgo, ni jerarquía; son más una constelación que una organización. Han adoptado una estructura que asegura su longevidad".

Ahora bien, como la G5G permitiría que el campo de batalla se haga omnipresente, expandiéndola más allá de los escenarios de las G3G y G4G, también da poder a cualquier actor de librar la guerra, sin importar los medios económicos y técnicos que posea. Por ende, la guerra ya no sería el monopolio de los Estados-nación o incluso de las insurgencias; tal como lo señala Hammes (2007), como resultado de la era de la información y los efectos de la globalización,

"la guerra se ha convertido en una provincia de entidades estatales y no estatales en forma de redes, individuos súper empoderados y grupos que son capaces de formar supra-combinaciones que no se han visto antes" (p.21). La aparición de individuos y grupos súper empoderados demostraría que incluso individuos solitarios ahora pueden adquirir la capacidad de atacar Estados-nación en el omnipresente campo de batalla, conduciendo sus ataques en cualquiera de los dominios físicos, de información, cognitivos o sociales[34].

Otro actor que competiría por ocupar un lugar destacado en las G5G (Gráfico No. 2), son las Compañías Militares y de Seguridad Privadas (CMSP), las cuales ofrecen servicios militares y de seguridad que hasta hace poco eran consideradas un dominio exclusivo del Estado. Actualmente, un centenar de CMSP[35] operan en más de 110 países, proveyendo un sinnúmero de servicios, desde soporte logístico, operaciones especiales, interrogatorios y combates, hasta protección de seguridad a operaciones multilaterales de paz llevadas a cabo por la ONU (Álvarez, 2017a); de acuerdo a Benavides (2010), "se estima que el valor de esta industria ha pasado de 33 mil millones de dólares en 1990 a unos 100 mil millones en 2006" (p.104), logrando en la actualidad los 200 mil millones de dólares.

Por lo tanto, la relación de contratistas civiles frente a personal militar que participan en conflictos internacionales se ha elevado considerablemente en las últimas décadas; analizando el caso de los Estados Unidos, se observaría que en la Primera Guerra Mundial, frente a los 2.000.000 de combatientes militares, el Departamento de Defensa emplearía a 85.000 mil contratistas civiles, mientras que en la Segunda Guerra Mundial, frente a los 5.400.000 combatientes

34. Hammes se refiere al ataque de ántrax en el Capitolio de los Estados Unidos, en octubre de 2001, como posiblemente el primer ejemplo de un ataque de G5G. Debido a que la investigación no pudo revelar al autor del ataque, él asume que fue ejecutado por un individuo o un grupo muy pequeño.
35. Como por ejemplo, Bechtel, Blackwater (rebautizado Academi), CACI International, G4S, DynCorp, Halliburton, Kellogg, Brown, Root, Logo Logistics y Titan, entre otras.

militares, se dispondría de 734.000 contratistas civiles; por su parte, en la Guerra de Corea, con relación a los 393.000 soldados estadounidenses, se utilizarían 156.000 contratistas civiles, cifra que disminuiría en la Guerra de Vietnam en la década de los setenta (con relación a los 359.000 soldados estadounidenses, participarían 70.000 contratistas civiles) y en la Guerra del Golfo Pérsico (541.000 de personal militar frente a 5.200 contratistas civiles). Empero, a partir del Conflicto de los Balcanes la tendencia se alteraría; en dicha guerra, Estados Unidos emplearía 20.000 soldados y 20.000 contratistas civiles; en la Guerra de Irak, 95.900 soldados frente a 95.500 contratistas privados; y en la Guerra de Afganistán, 79.100 soldados frente a 112.100 contratistas civiles (Álvarez, 2017a).

> La progresiva participación de las CMSP ha significado que durante la primera Guerra del Golfo, a principios de 1990, uno de cada 100 soldados era un empleado de una empresa privada de seguridad, durante las guerras en ex Yugoslavia la proporción había pasado ya a uno de cada 50, y actualmente la proporción sería uno de cada 10 (Gómez del Prado, 2006, SP).

En Colombia, el mercenarismo ha sido un fenómeno que ha estado presente desde la formación de la República; tal sería el caso de la participación de las legiones extranjeras que lucharon en la independencia de Colombia. Pero sería a partir de los noventa que las CMSP hacen su aparición en el contexto colombiano, bajo el marco de la cooperación colombo-estadounidense en la guerra contra las drogas; desde entonces, han operado en Colombia 77 CMSP[36] (Álvarez, 2017a). No obstante, la auténtica privatización de la seguridad en Colombia, a partir de la entrada en escena de las CMSP, iniciaría con la implementación del

36. Por ejemplo, Northrop Grumman, Airscan, Eagle Aviation Services and Technology, MPRI, DSL, Raytheon, ITT, ARINC, DynCorp y Lockheed Martin.

Plan Colombia en 1999, ya que una de las ventajas derivadas de la utilización de contratistas privados en lugares como Colombia, sería reducir el nivel de escrutinio y preocupación que normalmente asiste por parte del Congreso y la opinión pública norteamericana.

En efecto, la mayor demanda de los servicios de CMSP en las G5G, se podría deber a la capacidad que poseen las CMSP de ofrecer servicios militares de "forma más eficiente, más rápidamente y más barata de lo que las fuerzas militares estatales u otras compañías no militares podrían hacerlo" (Cotton, 2010. p.131). Además, los costes deducidos de las tareas desempeñadas por las CMSP podrían llegar a favorecer a Estados con presupuestos cada vez más limitados en recursos para la Seguridad y Defensa. Aparte, las preocupaciones por la rendición de cuentas y las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, así como la renuencia de los Estados en desplegar fuerzas convencionales en territorios inestables, perpetuaría la demanda de CMSP en el futuro próximo.

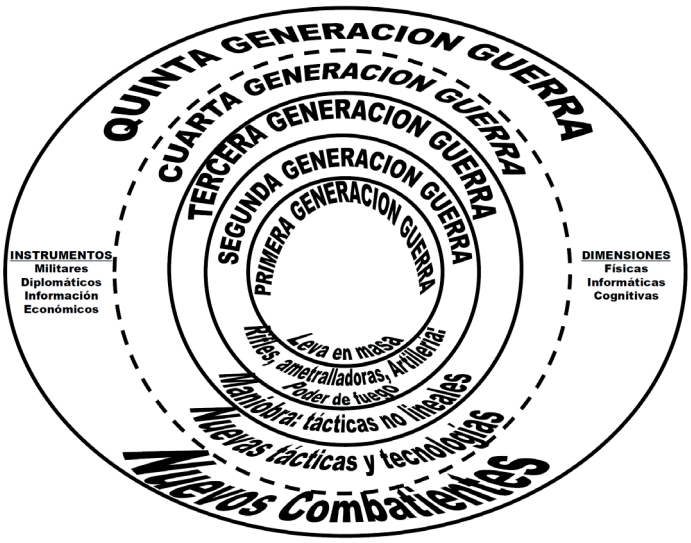
Por último, ante la enorme gama de amenazas a la seguridad ciudadana en Colombia, la privatización de la seguridad también ha dado campo a un mercado floreciente para las compañías de Vigilancia y Seguridad Privada (VSP) colombianas, que proveen servicios en vigilancia, consultoría y asesoría, seguridad electrónica, transporte de valores, blindaje de vehículos y escoltas (Álvarez, 2017a). Se estima que el sector está conformado por 1.500 empresas y más de 215.000 personas, con ingresos por el valor de $7 mil millones de pesos anuales (tres veces superiores al hotelero), es decir, dos puntos del PIB de Colombia.

4.3 Eje C: La Naturaleza Cambiante de los Objetivos

A medida que las sucesivas generaciones de guerra ampliarían los dominios de los conflictos y cambiarían la naturaleza de los adversarios, en consecuencia también se alteraría la naturaleza de los objetivos expuestos en el Eje C. Para aclararlo, sería útil asociar la evolución de los objetivos con los mecanismos de

derrota correspondientes, comprendiendo que un mecanismo de derrota sería una acción singular (no necesariamente el tipo de fuerza o el tipo de adversario), dirigida contra un oponente que garantizaría el éxito del curso de acción (Reed, 2008).

Gráfico 2. Características de las Generaciones de la Guerra



Fuente: Adaptado de Artelli & Drecko (2008).

Hans Delbrück, durante su estudio y redacción de la historia militar, identificaría dos mecanismos de derrota. El primero, denominado *Ermattungs-Strategie,* era una "estrategia de desgaste"; el segundo, denominado *Niederwerfungs-Strategie,* era una "estrategia de aniquilación". Delbrück (1985) afirmaba que la estrategia de desgaste era una "estrategia bipolar", en la que el comandante decidía constantemente si el logro de su objetivo se llevaría a cabo mediante la batalla o la maniobra. Sin embargo, en oposición a la estrategia de desgaste existía la estrategia de aniquilación, la cual tenía como objetivo destruir las fuerzas del enemigo e imponer la "voluntad del conquistador". Delbrück (1985) expresa que Napoleón a menudo utilizaría la aniquilación como un mecanismo de derrota, ya que a menudo conducía a toda su fuerza en un flanco o ala del enemigo, envolviéndolo y destruyéndolo por

completo. En este sentido, la estrategia de aniquilación busca la victoria para el logro de un éxito absoluto y una guerra corta. Por el contrario, la estrategia de desgaste no busca la victoria mediante una rápida derrota del enemigo, sino su erosión hasta el punto que prefiera aceptar las condiciones de rendición.

Por su parte, Leonhard (1991) sugiere tres mecanismos de derrota distinguibles: anticipación *(preemption)*, dislocación e interrupción, considerándolos superiores al desgaste mental. Estos mecanismos de derrota están orientados a la maniobra, ya que contempla el desgaste como un mecanismo de derrota inaceptable. En este orden de ideas, el concepto de anticipación como mecanismo de derrota, es un movimiento para atacar al enemigo antes de que este espere un ataque; considerado a menudo impulsivo, estos tipos de operaciones generalmente se basan en la sorpresa para la protección, buscando arrebatarle una victoria al enemigo antes de que este espere un enfrentamiento decisivo. Leonhard (1991) establece tres criterios de anticipación o prevención: el primer criterio es dejar de lado la precaución convencional, como la campaña del Mariscal Rommel contra los británicos en 1941, en Cirenaica, África del Norte; en segundo lugar, las operaciones preventivas o anticipadas se basan más en la velocidad que en la potencia de fuego, ya que normalmente se requiere velocidad para obtener suficiente sorpresa como para que la fuerza preventiva tenga éxito; el último criterio también está relacionado con la velocidad, utilizándola para disminuir el número de opciones del enemigo. Asimismo, describe la anticipación como el mecanismo de derrota más difícil de emplear, pero la mejor expresión de la teoría de maniobras.

El mecanismo de derrota de dislocación hace que la fuerza del enemigo sea irrelevante. Evita inicialmente el contacto con el enemigo y existe en las formas de dislocación posicional y funcional. La dislocación posicional elimina al enemigo del punto decisivo, como una finta para eliminar una reserva enemiga desde donde puede influir en la batalla; por su lado, la dislocación funcional hace

que la fuerza del enemigo sea irrelevante a través de la tecnología o las tácticas, y neutraliza al enemigo o hace que su fuerza sea inapropiada. Un ejemplo es el uso de dispositivos de visión nocturna por parte de un ejército, para mitigar la potencia de fuego de un enemigo con menor tecnología.

Leonhard (1991) define el mecanismo de derrota de interrupción o ruptura, como la derrota del enemigo a causa del ataque a su centro de gravedad. El objetivo es paralizar al enemigo donde es más susceptible o vulnerable al ataque, sin tener que destruir el componente físico del ejército; es atacar el talón de Aquiles del enemigo. Esto puede llegar a influir en el estado mental de los soldados enemigos o su comandante, o ambos. Leonhard (1991) cita la invasión de Incheon por parte de MacArthur en el otoño de 1950 y las posteriores derrotas norcoreanas, con la combinación de esta maniobra y la ruptura de Pusan.

Schneider (1995), otro teórico de la guerra, sugiere que el concepto de ciberchoque *(cybershock)* es un tipo de mecanismo de derrota distinto del desgaste y la maniobra. Argumenta que este mecanismo de derrota surgió con el inicio del arte operacional, y afirma que la revolución industrial fue el comienzo de ejércitos y operaciones militares cada vez más complejo. A partir de entonces, los comandantes y su personal ahora tenían que diseñar y ejecutar un complejo mosaico de operaciones profundas y prolongadas para derrotar a un adversario; por ende, este nuevo grado de complejidad crearía una vulnerabilidad a lo que el Dr. Schneider llama el peligro de la parálisis. Por lo tanto, la vulnerabilidad creada por el binomio ciberchoque/parálisis complementaría y perfeccionaría la maniobra.

Para ilustrar el concepto de ciberchoque, el autor utiliza el caso de la batalla de Chancellorsville, durante la Guerra Civil estadounidense, la cual considera sería la primera batalla en la que una fuerza fue derrotada por el ciberchoque. La batalla enfrentó al Ejército del Potomac del General de la Unión Joseph

Hooker contra el confederado Ejército de Virginia del Norte del General Robert E. Lee, el 27 de abril de 1863. La utilización del telégrafo ayudaba a la maniobra operativa del Ejército del General Joseph Hooker, pero cuando el Teniente General confederado Thomas "Stonewall" Jackson logró incursionar en la retaguardia enemiga e interrumpir las líneas telegráficas, las fuerzas de la Unión perdieron la capacidad de dirigir y controlar con eficacia las maniobras en el teatro de operaciones, siendo eventualmente derrotadas. Mientras que Hooker intentó explotar la tecnología que estaba disponible con la introducción del telégrafo, creó una vulnerabilidad al peligro del ciberchoque; en otras palabras, la tecnología utilizada por las fuerzas de la Unión ayudó en su derrota. El ciberchoque conduce un sistema organizado a un estado desorganizado a través de la destrucción de la conectividad de la información entre las partes de un sistema complejo. Esta desintegración conduce a la destrucción de la voluntad de luchar, ya que los sistemas complejos operan con información fluida y confiable.

Schneider (1995) plantea que el ciberchoque incluye cinco formas de parálisis: el primero es negar al enemigo la información completa que necesita, a través de la seguridad operativa, las operaciones psicológicas y el engaño; la segunda forma es un medio electrónico para romper la "coherencia organizacional", creando un ataque del sistema nervioso del oponente; el siguiente es un reconocimiento activo y enérgico, el elemento crucial en la lucha por la información relevante; el cuarto es que el choque causado por la sorpresa induce una amplia sensación de pánico; y por último, el alto tiempo de las fuerzas amigas imparte un aturdimiento cibernético al enemigo. Al estar sobrecargado el sistema nervioso enemigo, aumentaría la confusión y luego el desorden.

La teoría de ciberchoque como un mecanismo de derrota no sugiere que pueda ser independiente sin otro mecanismo de derrota. En este modelo, la

deserción tiene el efecto de aniquilación y existe en el dominio físico. La maniobra tiene un efecto de agotamiento y existe en el dominio logístico, mientras que el ciberchoque paraliza en el dominio cibernético. El resultado de estos mecanismos de derrota, que operarían en concierto, busca el resultado de la desintegración. Schneider (1995) muestra la relación de desgaste, maniobra y ciberchoque de la siguiente manera (Cuadro No. 1):

Cuadro 1. Comparativo de Desgaste, Maniobra y Ciberchoque

EFECTO	PATRON	DOMINIO DE LA ACCION	RESULTADO
Desgaste	Aniquilación	Física	Desintegración
Maniobra	Agotamiento	Logística	
Ciber-choque	Parálisis	Cibernético	

Fuente: Schneider (1995).

Wass de Czege (1984), fundador de la Escuela de Estudios Militares Avanzados del Ejército de los Estados Unidos, formuló tres mecanismos básicos de derrota operativa, cada uno con una base histórica distinta, que pueden emplearse independientemente o en combinación, y con ventajas o desventajas dependiendo de las situaciones en las que se emplean. El mecanismo de derrota del desgaste enfatiza la dimensión física de la guerra y la destrucción de las fuentes de poder enemigas, siempre y cuando la destrucción se produzca a una tasa mayor que la de la recuperación del adversario; el mecanismo de derrota de la dislocación se orienta al liderazgo del enemigo, haciendo que sus planes y opciones sean irrelevantes, al cambiar rápidamente las condiciones para que el enemigo no pueda tomar la iniciativa; finalmente, el mecanismo de derrota de la desintegración se centra en el estado mental de los combatientes enemigos, atacando la voluntad de los soldados de resistir, y erosionando la cohesión y el trabajo en equipo del enemigo.

Estos mecanismos de derrota de desgaste, dislocación y desintegración, pueden ampliarse a cinco mecanismos de derrota: aniquilación, desgaste de los recursos, maniobra, desgaste de la voluntad; e implosión. Y corresponderían con cada una de las cinco generaciones de guerra (Reed, 2008). En la G1G, el mecanismo de la derrota para las formaciones militares de línea y columna era la aniquilación (la destrucción directa del ejército adversario), con la aplicación de la fuerza militar contra su centro de gravedad; un ejemplo clásico es la derrota de Napoleón por Wellington en Waterloo, después de la cual *La Grande Armée* ya no existía como una fuerza de combate coherente, sino que tenía mayor semejanza con una masa confusa y desorganizada de hombres.

Sin embargo, a medida que la disponibilidad de un mayor poder de fuego comenzara a dominar sobre las formaciones masivas de soldados, el mecanismo de derrota empleado por los ejércitos en la G2G pasó de la aniquilación al desgaste de los recursos, y el objetivo se convirtió en la destrucción indirecta del ejército enemigo; en efecto, las batallas del Marne, Somme y Verdún durante la Primera Guerra Mundial, estaban dominados por el poder de fuego de la artillería y la ametralladora, y literalmente las millones de bajas producidas demostraría claramente la aplicación del desgaste de los recursos como un mecanismo de derrota por parte de los ejércitos enemigos.

En su aplicación del concepto de blitzkrieg al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes introdujeron la maniobra como un mecanismo de derrota para la G3G. Maniobrando alrededor de la Línea Maginot en su conquista de Francia, el ejército alemán anuló con éxito el mecanismo francés de la derrota del desgaste de fuerzas. A cambio, el ejército alemán pudo aplicar su propio mecanismo de maniobra de derrota contra el Mando, el Control y la estructura Logística (M-C-L) que apoyaba a los elementos combatientes del ejército francés emplazados a lo largo de la Línea Maginot. Sin el M-C-L, los ejércitos de G1G, G2G y G3G no tendrían más alternativa que capitular.

Pero sin los recursos suficientes para derrotar convencionalmente a sus oponentes por aniquilación, desgaste de recursos o por maniobra, los practicantes de la G4G concibieron el mecanismo de derrota de la deserción de la voluntad. Al combinar la estrategia y las tácticas de una insurgencia en red, con una intensa campaña de información o propaganda durante un largo período de tiempo, pueden concentrar sus esfuerzos en el desgaste de la voluntad política y pública de su oponente para luchar. Como se indicó anteriormente, este mecanismo de derrota ha demostrado ser extremadamente eficaz y ha hecho de la G4G la forma de guerra más exitosa en la última mitad del siglo XX, como lo atestiguan las derrotas de Estados Unidos en Vietnam, Líbano y Somalia, y la de la Unión Soviética en Afganistán (Hammes, 2006).

Los escenarios ampliados de la guerra, combinados con las potenciales supra-combinaciones en red de Estados-nación, actores no estatales e individuos, hacen que los practicantes de la G5G resistan los mecanismos de derrota de aniquilación, maniobra, desgaste de recursos o voluntad de lucha. Sin embargo, no son impermeables a la derrota y siguen siendo vulnerables al mecanismo de derrota de la implosión, o el colapso interno de sus organizaciones debido a la inercia. Según Reed (2006), al analizar las redes y supra-combinaciones como procesos, en lugar de instituciones o estructuras, es posible atacar sus subprocesos, incluyendo el desarrollo del liderazgo; construcción de alianzas; alcance público e ideológico; adquisición de fondos, material, vivienda y apoyo; reclutamiento; adoctrinamiento y capacitación del personal; planificación y focalización; movilización y operaciones; comunicaciones; y explotación de los resultados. Por lo tanto, el ataque contra subprocesos de un oponente en red podría llevarse a cabo por cualquier medio, sea este militar o no militar, letal o no letal, cinético o no cinético, conllevando a que los esfuerzos del oponente sean irrelevantes, hasta el punto de que se vuelva vulnerable a la implosión por inercia o parálisis.

4.4 Eje D: La Naturaleza Cambiante de la Fuerza

En la actualidad, pareciera que la guerra es una confrontación en la que intervienen todos los sectores de la sociedad; ya no se trataría tan solo de la competencia entre fuerzas de tierra, mar y aire de dos o más Estados nacionales. Por lo tanto, en un mundo que pareciera alejarse de la posibilidad de grandes guerras como las vividas por la humanidad en el siglo pasado, donde las armas nucleares de las grandes potencias ejercían una disuasión eficaz para este tipo de conflictos, surge un mundo más inestable por la aparición de amenazas multidimensionales que involucran riesgos a la Seguridad y Defensa de los Estados, que trascienden el campo militar. Ello explicaría, al menos en parte, que actualmente las Fuerzas Armadas de los países se vean comprometidas en nuevas tareas, que desbordan las clásicas de defensa del territorio; así lo recogen las Estrategias Nacionales de Seguridad de algunos Estados, que poco a poco ven ampliados sus cometidos más allá de los propios de la Defensa.

En sí, la naturaleza de la guerra no parece haber cambiado, ya que son los medios los que se renuevan, y por ende también las doctrinas y estrategias. Durante la crisis de Ucrania, se desplegaron en un determinado momento cerca de 40.000 efectivos rusos cerca de la frontera con ruso-ucraniana; este despliegue de fuerzas convencionales era simultáneo y guardaba obvia relación con acciones de combate urbano e irregular, así como operaciones de desestabilización en el interior de Ucrania y fuera de ella. Rusia, aparentemente ha empleado, para alcanzar sus objetivos políticos, una mezcla de operaciones especiales, presión económica, agentes de inteligencia, instrumentalización del flujo de gas natural, ciberataques, guerra de información y empleo de fuerza militar convencional como medida de presión y disuasión. Todo ello, perfectamente sincronizado formando parte de un plan de operaciones que podría llegar a enmarcarse dentro del concepto de “guerra híbrida”.

Se considera como hito de "nacimiento" de la guerra híbrida el conflicto que en 2006 enfrentaría a Israel y Hezbollah, guerra en la cual la milicia chií no pudo ser derrotada. En dicha guerra, Hezbollah empleó una mezcla de milicianos, fuerzas con adiestramiento especial, equipos de misiles contra carro, inteligencia de señales, empleo táctico y operacional de fuego de cohetes, vehículos aéreos no tripulados (UAV en sus siglas en inglés) y misiles antibuque, siendo equipo y armamento de última generación en muchos casos. Ante esta realidad, los líderes de Hezbollah describirían sus fuerzas como un "cruce" entre un ejército convencional y una guerrilla, llegando a considerar que habían desarrollado un nuevo modelo. Sin embargo, desde tiempo atrás ya existía una gran cantidad de conflictos en los cuales se empleó de manera combinada fuerzas y procedimientos regulares e irregulares como medio esencial para alcanzar la victoria, como por ejemplo, la guerra de independencia de los Estados Unidos o de los países hispanoamericanos, la guerra contra la invasión francesa de España en 1808, la guerra de la China comunista de Mao, la Guerra de Vietnam, entre otras. Rusia, desde su periodo imperial hasta el presente, ha empleado de manera magistral fuerzas regulares e irregulares, bien propias o "delegadas" (de países o grupos étnicos aliados) en la mayor parte de sus guerras.

Hoffman (2009), define la amenaza híbrida como "cualquier adversario que de manera simultánea y adaptativa emplea una mezcla de armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y comportamiento criminal en el espacio de batalla para alcanzar sus objetivos políticos" (p.36). A un costo relativamente bajo, un jugador agresivo podría difuminar intencionalmente y explotar distinciones de guerra y paz, operaciones civiles y militares, y actores estatales y no estatales. Es decir, las amenazas híbridas incorporan una gama completa de modos de guerra, que incluyen capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas que incluyen violencia,

coacción indiscriminada y desorden criminal; estas actividades multimodales podrían realizarse por unidades separadas o incluso por la misma unidad, pero generalmente se dirigirían y se coordinarían, operacional y tácticamente, dentro del principal espacio de batalla para lograr efectos sinérgicos en las dimensiones física y psicológica del conflicto. En este sentido, los efectos se pueden obtener en todos los niveles de la guerra; por lo tanto, la compresión de los niveles de guerra se complica por una convergencia simultánea de modos (Hoffman & Mattis, 2005).

A menudo se confunde la guerra híbrida con otro tipo de guerras. Cuando se produce un grado significativo de coordinación estratégica entre las fuerzas regulares e irregulares en los conflictos, estas pueden considerarse como "guerras compuestas" *(compound wars)*. De acuerdo a Huber (1996), las guerras compuestas serían aquellas guerras con componentes regulares e irregulares significativos que combaten simultáneamente bajo una dirección unificada. Los efectos complementarios de la guerra compuesta se generarían por su capacidad de explotar las ventajas de cada tipo de fuerza y el aumento de la naturaleza de la amenaza que representa cada tipo de fuerza; por ejemplo, la fuerza irregular ataca las áreas débiles, obligando a un oponente convencional a dispersar a sus fuerzas de seguridad, mientras que la fuerza convencional generalmente induce al adversario a concentrarse para la defensa o para lograr la masa crítica necesaria para las decisivas operaciones ofensivas.

Sin embargo, las guerras compuestas (como la desarrollada en la guerra de independencia de Colombia), ofrecieron sinergia y combinaciones a nivel estratégico, pero no la complejidad, fusión y simultaneidad que podría llegar a anticiparse en los niveles operacionales e incluso tácticos en las guerras híbridas, donde una o ambas partes se mezclan, y fusionan toda la gama de métodos y modos de conflicto en el teatro de operaciones; las fuerzas irregulares en

los casos de las guerras compuestas, operan principalmente como una medida de distracción o economía de fuerza en un teatro separado o área operativa adyacente; en consecuencia, debido a que las guerras compuestas se basan en fuerzas operacionalmente separadas, el concepto compuesto no capturó la fusión o los modos de guerra borrosos identificados en estudios de casos pasados como Hezbollah en la segunda guerra del Líbano de 2006. Según Eronen (2016), durante la guerra fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a cabo innumerables ejemplos de guerra híbrida, en lo que sus aparatos de inteligencia llamaron "medidas activas". Por ejemplo, a falta de confrontaciones armadas reales, esta dimensión de la rivalidad de las superpotencias incluiría la financiación de $75 millones de dólares por 27 años a los cristianos demócratas de Italia, por parte de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés); y por parte de los soviéticos, el asesinato en 1978 del disidente búlgaro Georgi Markov, con un paraguas envenenado.

El combate híbrido, es decir, la combinación de medios violentos y no violentos al servicio de objetivos políticos, ha sido una práctica cotidiana en el pasado, si al menos uno de los adversarios recurre a una combinación de operaciones convencionales y guerra irregular, entre las cuales cabrían acciones terroristas y conexiones con el crimen organizado. Empero, a diferencia de los conflictos del pasado (muchos de los cuales podrían ser calificados como híbridos), las G5G guardan relación con el incremento de capacidades del terrorismo, delincuencia organizada y guerra de información, así como del hecho que estas capacidades puedan trabajar integradas. Y este es, precisamente, el planteamiento de Liang & Xiangsui (1999) sobre la "guerra irrestricta" o "guerra sin restricciones". En términos generales, los autores reiteran que en un mundo donde todas las cosas son interdependientes, el significado de límites y fronteras es algo simplemente relativo, y que por tanto, es preciso combinar

en un "gran método de guerra", todas las dimensiones y procedimientos (tanto militares como no militares), para llevar a cabo la guerra.

Según Liang & Xiangsui (1999), como el escenario de guerra se ha expandido, abarcando la cultura política, económica, diplomática, sociocultural y psicológica, además de la tierra, el mar, el aire, el espacio exterior y el ciberespacio, la interacción entre todos los factores ha hecho que sea difícil para el ámbito militar servir como esfera principal en todos los sentidos. Por lo que si se quiere tener una victoria en las futuras guerras, se debería estar bien preparados intelectualmente para este escenario, es decir, estar preparados para llevar a cabo una guerra que afecta a todos los ámbitos de la vida de los Estados nacionales involucrados, lo que puede ser conducido en un ámbito dominado por acciones no militares. Además, Liang & Xiangsui (1999) plantean que utilizando todos los medios, militares y no militares, letal y no letal, se amplía el concepto de guerra a partir de las nuevas posibilidades de ejercer la violencia, las que no se limitan solo a las operaciones militares. De este modo, la guerra ya no está definida por sus medios y menos por una restricción al ejercicio de la violencia por medios sangrientos, abriéndose las opciones de ejercerla por otros medios. Por ende, la guerra irrestricta o guerra sin restricciones, se puede comprender como una guerra combinada que trasciende las principales áreas y métodos de los asuntos militares y no militares, donde se deben incluir todas las dimensiones que ejercen influencia sobre la seguridad nacional y donde se persigue un objetivo político por medio del ejercicio de la violencia, en un sentido amplio del concepto.

Para que una guerra llegue a ser considerada "irrestricta", debería regirse por el concepto de "operaciones de guerra no militares", lo que en definitiva se ejercería por medio de la desinformación y el control de ciertas áreas sensibles para un Estado y su sociedad, aumentando el ejercicio de otros tipos de violencia

política, cultural, económica (como el suministro de recursos estratégicos) y tecnológica. En este sentido, la guerra llevada a cabo por Rusia es novedosa en la era post-moderna y pareciera ajustarse a la teoría de guerra sin restricciones. Dado que Rusia no puede igualar todavía la capacidad militar convencional de Estados Unidos, desplegaría comparativamente pocas fuerzas convencionales, pero con una gran coordinación de otros instrumentos del poder nacional; estas herramientas son por necesidad asimétricas y se aplican donde no se las espera, basándose en la estrategia de *maskirovka* o "subterfugio": los elementos de sorpresa, diversión y engaño[37].

En efecto, Eronen (2016) afirma que la conducta rusa aprovecharía la disposición de Vladimir Putin para actuar fuera de las normas operacionales de la posguerra, dentro de las cuales Occidente ha construido sus mecanismos de respuesta militar y política. En este orden de ideas, el ciberespacio parece configurarse como uno de los principales teatros de la actividad asimétrica de Rusia. Esto se debería a que el ciberespacio ofrece una manera fácil de combinar los escenarios de combate, incluidos el espionaje, las operaciones de información y el combate convencional, realizándolo detrás de una barrera de denegabilidad plausible. Gracias al ciberespacio, un atacante puede cruzar sigilosamente grandes distancias, sin barreras físicas, y alcanzar un objetivo determinado. Además, tales acciones pueden combinar dos o más instrumentos: políticos, de inteligencia, diplomáticos, cibernéticos o de información. Rusia puede hacerlo sin énfasis en la velocidad, ya que la victoria rápida y decisiva es innecesaria porque el flujo y reflujo del combate puede llegar a agotar los recursos del adversario, o generar confusión y desencadenar una respuesta que también sirva a los objetivos rusos.

37. Este tipo de estretegia ha sido bautizada en Occidente bajo el concepto de "Poder Agudo". En una proxima entrega se abordará este tema con mayor amplitud.

Al igual que Rusia, otros Estados autocráticos como China, Corea del Norte, Venezuela o Nicaragua, estarían mejor posicionados para participar en G5G. Como tomadores de decisiones centralizadas, pueden actuar rápidamente, sin obstáculos y frenos impuestos por controles democráticos como un Poder Legislativo; pueden prolongar las operaciones sin la necesidad de justificar públicamente el uso de los recursos o, en muchos casos, explicar las bajas en el campo de batalla. Por estas y otras razones, pueden librar fácilmente una G5G en "tiempos de paz", cuando es más difícil para las democracias liberales occidentales construir apoyo público y legislativo para el gasto y los riesgos inherentes a las bajas de militares y civiles. Estos Estados tienen los ingredientes para llevar a cabo G5G exitosas: liderazgo político fuerte para ordenar un ataque, un sofisticado aparato de inteligencia para identificar vulnerabilidades, control sobre una amplia gama de recursos que pueden desplegarse rápidamente y una capacidad de información y propaganda altamente desarrollada para comunicaciones internas y externas. En la práctica, los ataques emplean la diplomacia; la amenaza y el uso real de la fuerza militar, incluidas las tácticas de "tierra arrasada" contra civiles; incentivo económico y coacción; guerra jurídica; ciberguerra y guerra de redes.

Frente a las dos últimas habría que hacerse varias precisiones, por ser, entre otras, una de las fuerzas no cinéticas más distintivas a emplear en G5G. Por un lado, la ciberguerra *(cyberwar)* se podría referir a la conducción y preparación de operaciones militares de acuerdo con los principios relacionados con la información. Para Arquilla & Ronfeldt (2001), la ciberguerra busca interrumpir, si no destruir, los sistemas de información y comunicación ampliamente definidos para incluir incluso la cultura militar, sobre la cual un adversario se apoya para "conocerse": quién es, dónde está, cuándo puede hacer algo, por qué combate, qué amenazas debe contrarrestar primero, etc.; significaría intentar saber "todo" sobre un adversario, mientras que le niega saber mucho sobre uno

mismo, además de convertir el "equilibrio de la información y el conocimiento" a su favor (especialmente si el equilibrio de fuerzas no lo está). Así mismo, significaría usar el conocimiento para que menos capital y mano de obra tengan que ser utilizados. Esta forma de guerra podría implicar diversas tecnologías, especialmente para el comando, control, comunicaciones e inteligencia (C3I); para la recolección, procesamiento y distribución de inteligencia; para comunicaciones tácticas, posicionamiento e identificación amigo o enemigo; y para los sistemas de armas "inteligentes", entre otros. También podría involucrar cegamiento electrónico, interferencia, engaño, sobrecarga e intrusión en los circuitos de información y comunicaciones de un adversario.

Sin embargo, la ciberguerra no sería simplemente un conjunto de medidas basadas en la tecnología, y no debería confundirse con antiguos significados de la guerra computarizada, automatizada, robótica o electrónica, ya que la ciberguerra pudiera tener amplias ramificaciones para la organización y doctrina militar; así, la guerra cibernética podría implicar un cierto rediseño institucional para un ejército en áreas tanto "intra" como "inter" servicio (Arquilla & Ronfeldt, 2001). El traslado a las estructuras en red podría requerir una cierta descentralización del mando y control, que bien podría resistirse a la luz de opiniones anteriores de que la nueva tecnología proporcionaría un mayor control central de las operaciones militares. La guerra cibernética también pudiese implicar el desarrollo de nuevas doctrinas sobre qué tipo de fuerzas se necesitan, dónde y cómo desplegarlas, y qué y cómo atacar al enemigo; cómo y dónde posicionar qué tipo de computadoras y sensores, redes, bases de datos, etc. relacionados, pueden llegar a ser tan importante como la pregunta que se solía hacer para el despliegue de bombarderos y sus funciones de apoyo (Rosenzweig, 2013).

La ciberguerra también podría tener implicaciones para la integración de lo político y psicológico, con los aspectos militares de la guerra. Como una

innovación en la guerra, se anticiparía que la ciberguerra pudiera llegar ser para el siglo XXI lo que fue el blitzkrieg para el siglo XX, ya que el campo de batalla postmoderna se encontraría fundamentalmente alterado por la revolución de la tecnología de la información, tanto a nivel estratégico como táctico. Sin embargo, la ciberguerra es una idea más amplia que atacar los sistemas C3I de un enemigo, mientras mejora y defiende los propios; en el sentido clausewitziano, se caracteriza por el esfuerzo de convertir el conocimiento en capacidad.

De hecho, aunque su diseño completo y su implementación requieren tecnología avanzada, la ciberguerra no depende de la tecnología avanzada *per se.* Si bien el desarrollo continuo de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones es crucial para las capacidades defensivas u ofensivas de Estados como el colombiano, la guerra cibernética (tanto si se lleva a cabo por Colombia como por otros actores), no requeriría necesariamente la presencia de tecnología avanzada. Las dimensiones organizacionales y psicológicas pueden ser tan importantes como las técnicas, por lo que en algunas circunstancias, la ciberguerra puede llegar a ser emprendida con baja tecnología.

Por otra parte, la guerra de red *(netwar),* se refiere al conflicto relacionado con la información a un gran nivel entre Estados o sociedades. Para Arquilla & Ronfeldt (2001), es intentar interrumpir, dañar o modificar lo que una población objetivo "sabe" o "piensa que sabe" sobre sí misma, y sobre el mundo que la rodea[38]. La guerra de red puede centrarse en la opinión pública o la de élite, o ambos; puede implicar medidas de diplomacia pública, propaganda y campañas psicológicas, subversión política y cultural, engaño o interferencia

38. Dicha estrategia guarda relación con el pensamiento de Antonio Gramsci, quien establece unas pautas a seguir para instaurar el socialismo en los países latinos. Su lema era "adueñarnos del mundo de las ideas, para que las nuestras, lleguen a ser las ideas del mundo". La metodología de la revolución cultural marxista de Gramsci, se podría sintetizar en lo siguiente: Primero, desacreditar todo lo tradicional; Segundo, inventar una nueva doctrina para suplantar a la anterior; Tercero, infiltrarse en la superestructura (Educación, Iglesia, Fuerzas Militares, Medios de Comunicación, Economía, etc.) para seguir desacreditando lo "antiguo", y fortalecer el nuevo pensamiento desde el interior; Cuarto, legalizar todo lo anterior (convertirlo en ley); y Quinto, tomar el poder político, es decir, el gobierno.

con los medios locales, infiltración de redes informáticas y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos de disidencia u oposición a través de redes informáticas.

En otras palabras, la guerra de redes representaría una nueva entrada en el espectro del conflicto que abarca formas económicas, políticas, sociales y militares de "guerra". En contraste con las guerras económicas que se dirigen a la producción y distribución de bienes, y las guerras políticas que apuntan al liderazgo y a las instituciones de un gobierno, las redes se distinguirían por su orientación de la información y las comunicaciones. Al igual que otras formas en este espectro, las guerras en red serían en gran medida no militares, pero podrían tener dimensiones que se solapan en una guerra militar. Por ejemplo, una guerra económica podría incluir restricciones comerciales, *dumping* de bienes, penetración ilícita y subversión de negocios y mercados en un país objetivo, así como el robo de tecnología, ninguno de los cuales necesita involucrar a las fuerzas armadas; sin embargo, una guerra económica también podría llegar a incluir un bloqueo armado o un bombardeo estratégico de activos económicos, lo que significa que también se ha convertido en una guerra militar. De la misma manera, la guerra de red que conduce a apuntar a las capacidades de C3I de un enemigo militar se convierte, al menos en parte, en lo que se entendería por ciberguerra.

La guerra de red tomaría varias formas, dependiendo de los actores. Algunos podrían ocurrir entre los gobiernos de Estados-naciones rivales; por ejemplo, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba están comprometidos en una guerra de red, a través de las actividades de Radio y TV Martí en el lado de los Estados Unidos, y las actividades de las redes de apoyo cubano en todo el mundo del lado cubano servicio (Arquilla & Ronfeldt, 2001). Sin embargo, podrían surgir otros tipos de redes entre gobiernos y actores no estatales; por ejemplo, los gobiernos

podrían luchar contra los grupos y organizaciones ilícitas que participan en el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción en masa o el contrabando de drogas. O, por el contrario, pueden ser emprendidos contra las políticas de gobiernos específicos por grupos y movimientos sociales, por ejemplo, en lo que respecta a cuestiones ambientales, de Derechos Humanos o religiosas.

Los actores no estatales pueden o no estar asociados con Estados y, en algunos casos, puede estar organizados en vastas redes y coaliciones transnacionales. Otra clase de la guerra de red puede ocurrir entre actores no estatales rivales, con los gobiernos que maniobran al margen para prevenir daño colateral a los intereses nacionales y quizás para apoyar a uno u otro lado. Este sería el tipo más especulativo de la red, pero los elementos para ello ya han aparecido, especialmente entre los movimientos de promoción alrededor del mundo. Algunos movimientos se están organizando cada vez más en redes y coaliciones transfronterizas, identificándose más con el desarrollo de la sociedad civil (incluso con la sociedad civil global), que con los Estados nacionales y utilizando tecnologías avanzadas de información y comunicaciones para fortalecer sus actividades. Tal es el caso del ciberactivismo, o el despliegue de nuevas tecnologías para llevar a cabo transformaciones políticas.

> El ciberactivismo se constituye en una nueva forma de expresión revolucionaria o forma de alentar la revolución, en medio de un universo en el que los intereses geopolíticos de las grandes potencias y actores, pueden hacer uso de ellas para promover e incitar las revueltas revolucionarias sin ofrecer rastro alguno, o por movimientos antisistémicos que ven en el ciberactivismo la mejor forma de desestabilizar las formas de poder desde el descontento social y su accionar colectivo (Cortes & Garzón, 2017).

Esto bien puede resultar ser la próxima gran frontera para el conflicto ideológico, y la guerra de red puede ser su característica principal. La mayoría de guerras de redes probablemente no sean violentas, pero en el peor de los casos se podrían combinar las posibilidades en algunos escenarios de conflicto de baja intensidad. Es decir, alguna guerra de red implicarían asuntos militares, ya que las tendencias sociales más amplias (por ejemplo, la redefinición de los conceptos de seguridad, los nuevos roles de los grupos de presión, la difuminación de las fronteras tradicionales entre lo militar y lo no militar, entre lo público y lo privado, y entre lo que concierne al Estado y lo que concierne a la sociedad), pueden comprometer los intereses de al menos algunas oficinas militares en algunas actividades relacionadas con la guerra de red. En resumen, las guerras de redes no son guerras reales, pero podrían convertirse en un instrumento para intentar, desde el principio, evitar que surja una verdadera guerra; la disuasión en un mundo caótico puede convertirse en una función tanto de la postura y presencia cibernética de un actor, como de la postura y presencia de la fuerza.

En la guerra de red, un actor protagónico serían las redes sociales, debido a que las herramientas y aplicaciones de redes sociales están disponibles para todo el mundo con una computadora o un teléfono inteligente. Se han utilizado cada vez más como un arma eficaz por distintos actores a lo largo y ancho de los conflictos contemporáneos; si bien la principal herramienta de Daesh para expandir su influencia ha sido la fuerza bruta, ha intentado crear credibilidad y establecer legitimidad a través de la propaganda, utilizando las redes sociales y la tecnología cibernética para reclutar combatientes e intimidar a los enemigos. El Estado Islámico no es el primer grupo de extremistas violentos que usa esos medios para llevar a casa sus mensajes o realizar operaciones; Al-Shabaab, las FARC, el ELN y otros, también los han utilizado. Sin embargo, el Estado Islámico (ISIS) se distingue por su uso sofisticado y su comprensión de los medios para alcanzar sus objetivos.

De acuerdo a Farwell (2014), la estrategia de comunicación de ISIS tiene como objetivo persuadir a todos los musulmanes que es un deber religioso guerrear para la restauración de un califato. La narrativa del grupo retrata a ISIS como un agente de cambio, el verdadero apóstol de una fe soberana, un campeón de sus propias perversas nociones de justicia social, y una colección de vengadores empeñados en resolver cuentas pendientes por los sufrimientos percibidos de otros. Esta narración enfatiza que el Estado Islámico está ganando fuerza y acumulando poder, y que la victoria sería inevitable. El uso de la tecnología celular, junto con la explotación de los principales medios de comunicación (los videos de ISIS han aparecido en las emisoras occidentales y en los sitios web extremistas), significa que estos mensajes han llegado a audiencias de todo el mundo.

Asimismo, el grupo ha empleado Twitter, Facebook e Instagram para influir en los adversarios, amigos y periodistas por igual. De acuerdo a Oregan (2016), "sólo en Twitter se estima que Daesh posee 46.000 cuentas (…). Además, el grupo terrorista cuenta con 30 productoras audiovisuales (tres de ellas para contenidos internacionales y 27 restantes dirigidas al público musulmán), que se dedican a producir contenidos al por mayor" (p.52). Estos métodos han permitido que el grupo distribuya imágenes poderosas y emocionales. Algunos de ellos, consistentes con su mensaje de victoria inevitable, representan a los miembros del grupo como temibles guerreros; estas imágenes se pueden utilizar para generar apoyo entre compañeros de viaje y reclutar nuevos miembros. En consecuencia, tanto los militares como las organizaciones civiles de todo tipo, tendrán que ser más eficaces para ver cómo sus enemigos usan las redes sociales, defendiéndose de los ataques en curso de las redes sociales, y utilizando las redes sociales como un arma en pos de sus propios objetivos.

Muchos factores han influido en un cambio hacia el predominio de la guerra irregular y la guerra no convencional. Estos incluyen el cambio de alianzas

políticas y sociales, así como las condiciones económicas que han aumentado la disponibilidad de financiación para los actores no estatales. Con esta nueva financiación, los actores no estatales podrían obtener una variedad de armas, para combinarlas con las antiguas habilidades de improvisar armas asequibles y efectivas para satisfacer las necesidades de combate en un determinado teatro de guerra. En muchos sentidos, Internet ha facilitado el inicio y mantenimiento de las insurgencias. Ha abierto el reino de la guerra no sólo a los insurgentes que luchan contra un gobierno, sino también a las facciones sociales, culturales, económicas y religiosas de todo el mundo que desean luchar y participar de la guerra del siglo XXI. Internet ha permitido a estas facciones infligirse intencionalmente daño mutuo sin armas cinéticas, y a menudo, sin el riesgo que supone una confrontación cara a cara. En otras palabras, la era de la guerra de los medios sociales proporciona armas equivalentes para todos.

Las oportunidades que ofrece la tecnología de la información permiten a cualquier persona filmar, editar, y compartir información, imágenes y videos en tiempo real, independientemente de que los medios de comunicación tradicionales informen sobre los eventos. Esto le da a cada individuo la oportunidad de convertirse en un actor de información y potencialmente distribuir mensajes a audiencias de número y tamaño ilimitado en todo el mundo. Por lo tanto, los gobiernos y los medios tradicionales ya no son los actores más importantes en el espacio de la información; ahora tienen que competir por su lugar entre todos los demás actores. Desde las primeras "guerras de Internet" en Kosovo en 1999, el conflicto entre Hezbollah e Israel, y la "primavera árabe" en el norte de África y Oriente Medio, hasta los actuales conflictos en Siria, Ucrania o Colombia, los medios de comunicación se utilizan para dar forma a la opinión pública, movilizar a los partidarios, coordinar las actividades militares y recopilar información con fines de focalización. Parece haberse convertido cada vez más en el "arma de elección", tanto para los actores estatales y no estatales.

Nissen (2015) propone 6 maneras en que las redes sociales podrían utilizarse efectivamente para apoyar operaciones militares:

Primero, utilizar las redes sociales para identificar objetivos potenciales para las acciones militares en el dominio físico (basadas en imágenes geo-etiquetadas o conversaciones en curso en las redes sociales), así como atacar las cuentas de redes sociales mediante piratería informática o desfigurarlas. Por ejemplo, Google Maps y los teléfonos celulares se utilizaron en Libia para asignar posiciones de régimen que luego fueron pasadas a la OTAN, que utilizó la información para identificar objetivos y comprometerlos utilizando el poder aéreo.

Segundo, la búsqueda enfocada y el análisis de información de redes de redes sociales y perfiles, incluyendo contenido y conversaciones. En este sentido, existen varios enfoques para analizar los medios sociales para la recolección de inteligencia (por ejemplo, análisis de tendencia, red, sentimiento, geográfico, contenido, comportamiento, sistémico e información). Todas estas formas de análisis pueden contribuir al análisis del público objetivo y apoyar la guerra psicológica o la selección de objetivos para operaciones tanto en línea como fuera de línea; básicamente, las redes sociales permiten obtener información detallada sobre las redes, los actores y la comunicación relacionada, ayudando así a cualquier grupo a comprender mejor el entorno de la información y la situación de cualquier grupo objetivo sin estar físicamente presente. Si se estudia constantemente, las redes sociales pueden ser una fuente útil para la conciencia de la situación e incluso para identificar las "señales de alerta temprana" de una crisis futura. No obstante, existen ciertos retos y limitaciones en el análisis de los medios sociales; hay consideraciones legales y éticas, como violaciones de privacidad, "ruido" en el flujo de datos dificultando la diferenciación de información valiosa de la "basura", así como el desafío de medir el efecto de las discusiones en línea sobre eventos fuera de línea.

Tercero, las operaciones cibernéticas o el ataque de plataformas de medios sociales y cuentas para romper los espacios protegidos con contraseña, alterar el contenido de un perfil, o hacer un sitio web completamente inutilizable. Las operaciones cibernéticas pueden ser ofensivas o defensivas, sin embargo la mayoría de las ciber operaciones de medios sociales son de naturaleza ofensiva. Pueden incluir acciones como los ataques DDoS (Distributed Denial of Service) en sitios web, hackear contraseñas para obtener acceso y exponer el contenido de salas de chat, correos electrónicos o teléfonos celulares, alterar contenido en cuentas de redes sociales o intrusión en bases de datos para recopilar información. Todas estas actividades tienen por objeto impedir que otros actores utilicen plataformas de redes sociales para comunicar, coordinar acciones, acceder a información o mensajes, al menos temporalmente. Las operaciones cibernéticas que tienen lugar a través de las redes sociales pueden crear consecuencias tangibles en la vida real; por ejemplo, el grupo de hackers del Ejército Electrónico Sirio atacó la cuenta de Twitter de la agencia de noticias Associated Press, publicando un falso tweet afirmando que la Casa Blanca había sido bombardeada y el presidente estadounidense herido, generando un desplome de $1.365 millones de dólares en el índice S & P 500 en tres minutos.

Cuarto, el uso de las redes sociales para la comunicación interna, el intercambio de información, la coordinación y la sincronización de las acciones. El uso de medios de comunicación social para fines de Mando y Control (C2) es importante para los actores no estatales, como los grupos insurgentes, en particular si estos grupos carecen de estructura formal o están dispersos en grandes áreas geográficas. En otras palabras, los medios sociales pueden proporcionar un medio de comunicación y una forma de coordinar sus actividades; sin embargo, el uso de las redes sociales expone las actividades de los grupos insurgentes a los servicios de inteligencia. Los medios de comunicación social pueden utilizarse también para las tácticas de "enjambre",

es decir, la distribución de información para movilizar y coordinar movimientos sociales con un interés común para comprometerse con un objetivo específico.

De acuerdo a Erbschloe (2017), una larga lista de tácticas defensivas se utiliza en la guerra de las redes sociales (Cuadro No. 2). La guerra irregular y no convencional deja abierta la posibilidad de que una gran variedad de tácticas se emplearán a medida que cambien las situaciones. La eficacia de una táctica depende de numerosos factores, incluyendo en qué medida los individuos en cualquier situación de conflicto tienen acceso o utilizan aplicaciones de redes sociales. La táctica de autovalidación, o asegurar al mundo la validez y legitimidad de una posición o acción tomada por una organización o individuo, es una práctica común en prácticamente todas las situaciones de conflicto. La autovalidación sirve para muchos propósitos: Primero, refuerza en los miembros de la organización que están en lo correcto y que el compromiso con la causa es bueno y justo. Un ejemplo es usar el lema "Dios/Pueblo/Historia está de nuestro lado" para validar una posición o acción; Segundo, el empleo de la autovalidación refuerza el mensaje a las organizaciones aliadas y a sus miembros de que dicha organización tiene razón y está justificada en tomar medidas, manteniendo en alto el nivel de comodidad de los aliados.

Cuadro 2. Tácticas Defensivas de la Guerra de Redes Sociales

Autovalidación: *Asegurar al mundo la validez y legitimidad de una posición o acción.*
Influir en entidades alineadas: *Convencer a los aliados de la validez y legitimidad de una posición o una acción.*
Reforzar alianzas: *Mostrar apoyo de la posición o acción de un aliado.*
Persuasión de entidades no alineadas: *Convencer a los no aliados de la validez y legitimidad de una posición o acción.*
Reclutamiento y adoctrinamiento: *Atraer a las personas hacia una causa y enseñar causa doctrina relacionada.*
Creación de relaciones: *Establecimiento de esfuerzos cooperativos con personas u organizaciones.*
Anulando a los oponentes: *Esfuerzos para desacreditar a los oponentes.*

Fuente: Erbschloe, 2017. Traducción propia

Por su parte, influir en organizaciones aliadas, o trabajar para convencer a los aliados de la validez y legitimidad de una posición o acción tomada por una organización o individuo, va un paso más allá de la autovalidación. El objetivo de influenciar a los aliados es hacer que adopten la misma posición y utilicen la misma retórica o justificaciones para convencer a sus propios miembros o la población objetivo, de que están haciendo lo correcto apoyando una causa o acción determinada; esto colabora en la disuasión de los ciudadanos de un Estado u organización miembro de la coalición. La táctica de reforzar alianzas es el proceso de visibilizar públicamente el apoyo a la posición o acción de un aliado. Esto ayuda a influir en entidades aliadas, así como en entidades no alineadas, enviando señales de refuerzo en apoyo de acciones tomadas por un miembro de una alianza específica o un grupo de miembros de la alianza. En el caso de los Estados, este refuerzo ayuda a convencer a la población de que todos los socios de la alianza están trabajando en conjunto con los demás, para el logro de los mismos objetivos, lo cual disuade a los ciudadanos de los Estados miembros a que cooperan en los esfuerzos.

La persuasión de entidades no alineadas es el proceso de convencer a los no aliados de la validez y legitimidad de una posición o acción tomada por la organización y todas las entidades alineadas involucradas en una posición o acción; la persuasión está diseñada para atraer a entidades no alineadas a una coalición o alianza, o al menos convencerlas de que no se opongan a una posición o acción. Mientras tanto, el reclutamiento y adoctrinamiento es el proceso de alinear nuevas entidades o individuos a una causa de guerra de redes sociales, o cualquier tipo de causa que tiene componentes de guerra de redes; en general, los nuevos reclutas o nuevos socios de la alianza necesitarán cierta educación sobre la doctrina causal, y el proceso y herramientas a través de los cuales se persiguen las metas y los objetivos.

La construcción de relaciones es el proceso de establecer y fomentar los esfuerzos cooperativos con personas u organizaciones similares. Este es un proceso continuo que involucra organizaciones o individuos ya alineados, así como organizaciones no alineadas o individuos que están siendo cortejados o controlados de alguna manera; el proceso de construcción de relaciones es interminable y siempre presentará desafíos a medida que las condiciones sociales y económicas cambien o evolucionen. Por último, anular a los oponentes es el proceso de desacreditar a los opositores ante los socios de la alianza o los actores no alineados. Anular los esfuerzos puede reforzar las relaciones positivas existentes y ayudar a atraer nuevas relaciones; el proceso de anulación generalmente implica rebajar o demonizar la posición ideológica o política de los opositores; también puede implicar desacreditar o invalidar posiciones adoptadas por oponentes basadas en información o datos inexactos.

Asimismo, existe una larga lista de tácticas ofensivas que se pueden utilizar en la guerra de las redes sociales. En algunos casos, las tácticas ofensivas son básicamente tácticas defensivas aplicadas con el propósito de atacar a una entidad, grupo o una causa, más que en su propia defensa. Por lo tanto, existe la posibilidad de emplear diferentes tácticas ofensivas de guerra de redes sociales (Erbschloe, 2017).

Cuadro 3. Tácticas Ofensivas de la Guerra de Redes Sociales

Engaño: *falsas promesas e información inválida.*
Confusión: *Crear y perpetuar la incertidumbre.*
División: *Instigando el odio y la sospecha.*
Exposición: *Liberación no autorizada de información*
Trolling: *Publicar mensajes opuestos a los mensajes existentes.*
Creación de relaciones: *Establecer esfuerzos cooperativos con personas o organizaciones con ideas similares.*
Anular a los oponentes: *Esfuerzos para desacreditar a los oponentes.*
Amenazas combinadas: *Actividades combinadas para lograr objetivos ofensivos.*

Fuente: Erbschloe, 2017. Traducción propia

La táctica de engaño es el proceso de usar información inválida o falsa, o la pretensión de convencer a los oponentes de que una posición o proposición específica es verdadera cuando no hay base fáctica para ello. El engaño es también el proceso de tratar de influir en un oponente o un partidario potencial para apoyar una posición o acción específica basada en la creencia de que tal ayuda dará lugar a los resultados deseados para el partidario potencial; el que engaña intenta influir en el objetivo con una promesa de resultados que no puede, o no pretende, proporcionar. Las tácticas de confusión son procesos diseñados para desorientar y engañar a los oponentes con respecto a lo que es y no es real. En muchos sentidos, este es un método de propaganda clásico que está destinado a inculcar miedo, incertidumbre y duda; puede implicar desinformación sobre lo que ha sucedido o lo que está por suceder y está diseñado para desorientar a las organizaciones o individuos antagónicos, y estimular acciones de su parte que son contraproducentes o incluso autodestructivas.

Las tácticas divisivas implican instigar el odio y la sospecha entre los opositores o la población de un Estado o alianza antagónica. Tales tácticas han tenido mucho éxito en el surgimiento del fascismo, y el odio racial y religioso. Hace honor al viejo adagio de divide et impera (divide y domina); también funciona muy bien en las sociedades que se sienten desamparadas u oprimidas. Las tácticas de exposición implican, con mayor frecuencia, la liberación no autorizada de información que podría avergonzar o poner en peligro al propietario o al creador de la información expuesta; tal fue el caso de la liberación del material de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), de Eric Snowden y WikiLeak.

El *Trolling* es el proceso de que las personas respondan o comenten a los posts o mensajes en las redes sociales, en un intento individual o en nombre de una organización de influir, engañar, reclutar y/o adoctrinar. La eficacia de este

tipo de táctica está todavía por demostrarse, pero dada la propensión a trolling en las redes sociales, es obvio que hay muchos que piensan que es eficaz. Es una manifestación que se ha popularizado en foros de internet, páginas de Facebook y en los comentarios en las versiones digitales de revistas y periódicos, que son bombardeados con insultos, provocaciones y amenazas; el trolling parece hacer parte de un fenómeno mayor que incluye lo que se conoce como *cyberbullying* o acoso virtual. La táctica de construcción de relaciones es el proceso de establecer y fomentar los esfuerzos cooperativos con personas u organizaciones similares; como una táctica ofensiva, la meta suele ser el de persuadir a los socios de la alianza o las organizaciones no alineadas, y los individuos, que una acción ofensiva estaba justificada.

Al igual que en los procesos defensivos de anulación de oponentes de guerra de redes sociales, los esfuerzos de anulación ofensiva se consideran esfuerzos de ataque preventivo. Anular a los opositores a través de una táctica ofensiva, es el proceso de desacreditar a los oponentes a los ojos de los miembros de la alianza u otros actores, a las cuales se está tratando de influir. Anular los esfuerzos puede reforzar las relaciones positivas existentes y ayudar a construir nuevas relaciones, el proceso de anulación generalmente implica rebajar o demonizar las opiniones ideológicas o políticas de los opositores, pero también puede implicar desacreditar o invalidar las posiciones adoptadas por los oponentes, basándose en información o datos empíricos supuestos pero inexactos.

Por último, las tácticas de amenazas combinadas son actividades combinadas diseñadas para lograr objetivos ofensivos. Esto incluye tácticas de engaño combinadas con *trolling* oponentes para ayudar a legitimar el post o mensaje engañoso de un agresor. En una situación ofensiva combinada, se pueden usar múltiples plataformas de medios sociales junto con métodos mixtos de medios que incluirían textos, fotos y/o videos; este es el enfoque moderno de las campañas clásicas de propaganda.

Con relación a los medios, cientos de aplicaciones de redes sociales se han lanzado en la última década (Cuadro No. 4). Muchos están disponibles gratuitamente en Internet, mientras que otras se pueden comprar y descargar. Las capacidades de las aplicaciones de redes sociales se encuentran en un estado constante de evolución; hay varios tipos de aplicaciones de medios sociales y sitios web.

Cuadro 4. Algunas Aplicaciones de Redes Sociales

360.yahoo	Bloson	dogster	fotolog	Twitter	Groupsite
43things	blurty	dol2day	foursquare	MySpace	Heello
4talk IM	BrightKite	dontstayin	FreindFeed	Snapchat	Hi5
academia	Brizzly	Dot429	friendster	Reddit	Hubbub
advogato	buzznet	downelink	Gather	Vimeo	hubpages
asianave	cafemom	elftown	gays	Pandora	imvu
badoo car	Care2	Everloop	gazzag	Youtube	Instagram
bebo	Chi	Evernote	geni	Pinterest	itsjustcoffee
bigadda	Classmates	exploroo	GetGlue	Twingly	Jaiku
bigtent	Coderwall	Fab	Glogster	scribd	Jumptive
biip.no	Dailymotion	Facebook	gogoyoko	livejournal	KirkL
BlackPlanet	Delicious	faceparty	Going	Superfan	kiwibox
Blip.tv	deviantart	fetlife	goodreads	Xanga	Last.fm
Blogger	Diddit	fledgewing	Google+	Skitch	LeFeed
blogster	Digg	Flickr	graduates	Netlog	LikeALittle
BlogTV	diigo	flixster	GROU.PS	Zwiggo	LinkedIn

Fuente: Erbschloe, 2017.

Entre los más populares se encuentran los blogs y las aplicaciones de soporte de blogs; aplicaciones de comentarios; aplicaciones de flujo de contenido; redes sociales y redes profesionales; sitios web y noticias sociales. Existen numerosas aplicaciones de redes sociales y sitios web que se enfocan en compartir información, incluyendo información propietaria, fotos, videos, diapositivas, marcadores, revisiones de productos e información genealógica.

Algunas aplicaciones están diseñadas para servir a un público global, pero muchas sirven a regiones, ciudades e incluso comunidades más pequeñas.

El gran número de aplicaciones de redes sociales crea desafíos significativos para defensores y estrategas defensivos y tácticos, ya que hace complicada la supervisión de la actividad de potenciales atacantes en aplicaciones creados por ellos mismos (Erbschloe, 2017). Esto a menudo pone a los defensores en un modo reactivo y requiere que las tropas defensoras aprendan rápidamente nuevas aplicaciones y entiendan cómo monitorear y analizar el uso que los atacantes hacen de estas aplicaciones. Los defensores deben desarrollar rápidamente contramedidas y tácticas para supervisar el uso de una aplicación de redes sociales y si se elige, para minimizar su valor para los atacantes o neutralizar el impacto de la aplicación en conjunto. No obstante, el gran número de aplicaciones de redes sociales crea también desafíos significativos para los atacantes; según Nissen (2015), aunque el número de aplicaciones ofrece muchas oportunidades para su uso en una situación de conflicto, también aumenta la complejidad de usar aplicaciones de redes sociales en general. Esto a menudo requiere que los atacantes estén en constante estado de aprendizaje y entrenamiento; y requiere que las tropas atacantes aprendan rápidamente cómo usar nuevas aplicaciones y cómo maximizar su efectividad.

Tanto los defensores como los atacantes de la guerra de redes sociales necesitan tener un enfoque disciplinado hacia el uso de estas aplicaciones en situaciones de conflicto, o incluso sin la existencia del conflicto (Stevens, 2012). Esto incluiría saber cuándo y cómo usar las aplicaciones de redes sociales para asegurarse de que la mensajería y el contenido no revelan información que pueda beneficiar a un adversario. Esto requiere una comprensión de qué tipos de vulnerabilidades puede crear el uso de dichas aplicaciones; comprender la plataforma tecnológica utilizada para soportar el uso de los

medios de comunicación social como un teléfono inteligente, un dispositivo de computación móvil o una instalación de computación fija es un buen inicio.

En efecto, los teléfonos inteligentes, por ejemplo, están siendo utilizados por las tropas de ambos lados de una guerra para comunicarse con amigos y familiares, utilizando a menudo las redes sociales. Y esto crea algunas dificultades (Nissen, 2015): en primer lugar, la ubicación de un teléfono inteligente, y por lo tanto su usuario, puede ser identificado utilizando diversas tecnologías de seguimiento de señales; además, las fotos que se toman con un teléfono inteligente y se publican en las redes sociales tienen características de geoetiquetado, que revelan la ubicación dónde se tomó la foto y es visible cuando se publica en ciertas plataformas de medios sociales, proporcionándole así inteligencia precisa a los adversarios. En segundo lugar, el uso de aplicaciones de redes sociales a partir del uso de dispositivos de computación fija pueden eventualmente revelar el origen de transmisión, dependiendo de la sofisticación de la aplicación y del proveedor de servicios que sirve a la aplicación; esto deja a los atacantes insurgentes más vulnerables porque los defensores tienen una mejor oportunidad de desarrollar relaciones de cooperación con los proveedores de servicios y desarrolladores de aplicaciones para ayudar a obtener información de ubicación. Tercero, tanto las tropas defensivas como las tropas atacantes necesitan ser entrenadas en el uso de aplicaciones de redes sociales para su uso personal y para no comprometer la seguridad de las operaciones. También deberían existir políticas establecidas por las organizaciones con respecto al uso de aplicaciones de redes sociales, tal como sucede en las Fuerzas Militares estadounidenses; en efecto, el Manual de Redes Sociales del Ejército de los Estados Unidos provee orientación sobre cómo los miembros del ejército deben usar las aplicaciones de redes sociales y en qué deben ser cautelosas para no llegar a comprometer la seguridad de las operaciones.

En conclusión, en las G1G, G2G y G3G, tanto el carácter como la naturaleza de la guerra permanecen constantes, consistentes en la aplicación por parte de los ejércitos, de la fuerza cinética contra los centros de gravedad de sus adversarios, en un campo de batalla físico. Empero, la G4G elimina los centros de gravedad del campo de batalla físico, y los traslada al campo de batalla político. También modifica el concepto de fuerza cinética inherente a la definición de guerra clausewitziana, estableciendo que la fuerza política o fuerza no cinética puede ser usada para derrotar a un oponente, cuando el propio lado no posee la fuerza militar o cinética necesaria para hacerlo; en la G4G, la ventaja dialéctica de la fuerza política o no cinética aplicada con éxito, puede derrotar a la fuerza militar o cinética (Reed, 2008).

En cambio, en los centros de gravedad de G5G, contra los cuales se podría aplicar fuerza, particularmente en el caso de las supra-combinaciones en red, no sólo estos se eliminan del campo de batalla físico, sino que pueden llegar a disiparse hasta el punto de ser irreconocibles, o incluso inexistentes. Entonces, el concepto de fuerza se ampliaría para incluir cualquier medio, cinético o no cinético, para obligar a un adversario a acceder a la voluntad propia, si se considera que la esencia de la guerra es, en última instancia, la capacidad de obligar a un oponente a la propia voluntad, mediante la generación y aplicación de la fuerza. A diferencia de generaciones anteriores de guerra, la G5G no se basa en derrotar únicamente a un oponente por la vía militar (como ocurría en la G1G, G2G y G3G), o por la vía política (como en la G4G). La naturaleza irrestricta de la G5G buscaría simplemente hacer que los esfuerzos de un oponente sean irrelevantes por cualquier medio, dejándolo vulnerable al mecanismo de la derrota de la "implosión" o destrucción hacia dentro.

5. Conclusiones

Es posible mirar a futuros alternativos y ver cada uno como G5G, aunque todavía no es posible elegir la correcta con precisión. Un futuro posible es que la

G5G será simplemente una forma más evolucionada de guerra insurgente, en la que esta será vulnerable a la derrota militar; es decir, un refinamiento adicional de una forma ya existente de la G4G, en lugar de un cambio cualitativo y dialéctico completo que introduce una nueva generación de la guerra. Sin embargo, al expandir las 4 variables esenciales de la guerra (escenarios, adversarios, objetivos, fuerza), a tal grado que transformaría el carácter de la guerra, la G5G demostraría que es algo más que un refinamiento de la G4G o simplemente una forma más evolucionada de guerra insurgente. En su forma última, la G5G es liderada por coaliciones formadas por Estados nacionales, entidades no estatales en forma de redes, e individuos y grupos súper empoderados (o cualquier combinación de ellos), mantenidos juntos por intereses comunes en lugar de propósitos nacionalistas o ideológicos. Aunque conserva el principio inmutable de la compulsión, introduce el precepto fundamental de que la fuerza ya no está restringida a la fuerza cinética, sino que puede provenir de cualquier fuente o medio y adoptar cualquier forma, cinética o no cinética.

Adicionalmente, la G5G tendría tres características que lo distinguen y le permiten aumentar su ventaja dialéctica sobre las generaciones anteriores de la guerra: Primero, su potencial para lograr supra-combinaciones; Segundo, la eliminación de límites que tradicionalmente han restringido la guerra dentro de un rango militar o político específico; y Tercero, la manera en que limita el papel de las Fuerzas Militares mecanizadas modernas en futuros conflictos.

Con relación al potencial para lograr supra-combinaciones, la G5G tendría una ventaja que trasciende los límites de la guerra convencional (Reed, 2008). Como ya se ha anotado, el advenimiento de la era de la información da a los Estados-nación y a las entidades no estatales la capacidad de competir en supra-combinaciones en maneras no vistas en la era moderna de la guerra, y ofrece formas casi ilimitadas en las cuales los esfuerzos de un oponente pueden

llegar a ser irrelevantes. Por lo tanto, la expansión de la guerra para abarcar los escenarios físico, informativo, cognitivo y social del conflicto, significa que la guerra ya no se limita a los adversarios armados, sino que se expande para abarcar todos los aspectos de la experiencia humana.

Con el acceso a escenarios o dominios alternativos de conflicto, los adversarios ya no están limitados o dependen de la fuerza militar superior para derrotarse mutuamente. En este sentido, las combinaciones supra-escenarios incluyen operaciones conducidas simultáneamente a través de múltiples escenarios de conflicto, incluyendo cualquier mezcla de los dominios físico + informativo + cognitivo + social. En consecuencia, la fusión de operaciones a través de múltiples escenarios de conflicto hace posible el campo de batalla omnipresente. Además del combate convencional entre las fuerzas militares, son posibles nuevas formas de guerra, incluyendo por ejemplo la guerra financiera, la guerra ambiental, la guerra de medios de información, la guerra científica y tecnológica, la guerra cultural, la guerra psicológica, la guerra religiosa o cualquier combinación de éstos.

Por su parte, la combinación supra-adversaria se extiende más allá del concepto tradicional del Estado-nación e incluyen coaliciones que consisten en varias combinaciones de individuos y grupos super-empoderados. Con acceso a Internet para el alcance regional y mundial, estos individuos y grupos super-empoderados se mantienen unidos por intereses comunes en lugar de límites geográficos, nacionalistas o ideológicos. El impacto de la tecnología y la era de la información es que los miembros de estas nuevas comunidades pueden formar combinaciones supra-adversarias, capaces de competir en pie de igualdad con los Estados-nación.

Asimismo, la G5G redefine el éxito en la consecución de los objetivos, que puede o no puede implicar la derrota directa de un oponente en el sentido

tradicional. La guerra en la era moderna había sido percibida como una acción en cuatro niveles: la política, los niveles estratégicos, operacionales y tácticos, que se distinguen en el tiempo y el espacio; por el contrario, las combinaciones supra-objetivos son acciones para alcanzar objetivos en cualquier combinación de niveles (política + estratégica + operativa + táctica), que podría llegar a tener un impacto inmediato en un antagonista en cualquier otro nivel, sin tener en cuenta el tiempo y el espacio. Las acciones se dirigen contra los centros de gravedad de los opositores convencionales o contra los subprocesos de redes o combinaciones supra-adversarios. Por ejemplo, una acción táctica podría resultar en una política inmediata o resultado estratégico contra un oponente convencional, sin acumulación previa de acciones tácticas a través del tiempo o el espacio. De manera similar, la interrupción en cualquier combinación de niveles de los subprocesos que permiten a los oponentes operar como redes o en supra-combinaciones, puede hacerlos irrelevantes y vulnerables al mecanismo de la derrota de la implosión. Por ende, un oponente que carece de la flexibilidad y agilidad para operar simultáneamente en múltiples niveles y lograr combinaciones supra-objetivos estaría en desventaja.

Además, la G5G postula que cualquier forma de fuerza, ya sea cinética o no cinética, se puede usar para derrotar a un oponente (Hammes, 2007). Las fuentes de fuerza no cinéticas que pueden combinarse incluyen, por ejemplo, políticas, económicas, sociales o culturales, medios de comunicación, control de la información, la negación de recursos, las medidas legales, psicológicas, religiosas o cualquier otra medida tomada para derrotar a un adversario. Las combinaciones supra-fuerza incluyen cualquier combinación de fuerza-cinética/ no cinética + fuerza armada/no armada + militar/no militar + letal /no letal-para realizar operaciones. En resumen, es fuerza sin reglas ni restricciones (Liang & Xiangsui, 1999).

Según Van Creveld (2002), un oponente que logra las combinaciones antes mencionadas, o incluso alcanza la capacidad más avanzada para lograr combinaciones de combinaciones a través de múltiples elementos de la guerra simultáneamente, alcanzaría un nivel de flexibilidad y agilidad prácticamente inigualable en el mundo de hoy. De esta manera, podría llegar a superar las limitaciones de los recursos finitos y alcanzar el nivel de capacidades infinitas, restringidas sólo por la imaginación. Los objetivos de la guerra se amplían para que el éxito no dependa de la destrucción física o la derrota de un adversario, sino que puede lograrse simplemente haciendo que sus esfuerzos sean irrelevantes para el conflicto existente en las nuevas variables de la guerra: supra-escenario, supra adversario, supra objetivo, o supra-fuerza. Es de esta manera que un ejército convencional puede ganar todas las batallas tácticas en el dominio físico del conflicto, pero perder estratégicamente la guerra, porque sus esfuerzos han sido hechos irrelevantes por un oponente que no está restringido a un solo dominio de conflicto, objetivo o tipo de fuerza. Esto haría que un oponente que emplea la G5G fuese potencialmente invencible frente a fuerzas militares convencionales que están restringidas a la G4G o la G3G.

Con respecto a la segunda característica, en el proceso de globalización donde todas las variables se vuelven cada vez más interdependientes, las fronteras se disipan y los límites se vuelven relativos; al hablar de una guerra que va más allá de los límites, (Liang & Xiangsui, 1999) hablan en términos relativos, refiriéndose a acciones que van más allá de aquellos límites[39] que tradicionalmente han restringido la guerra a un rango específico (militar o político). En términos de la G5G, la confusión de líneas y fronteras significa menos distinciones entre un arma y lo que no es un arma, entre un campo de batalla y lo que no es un campo de batalla, entre actos criminales y actos de

39. La forma de los límites no importa, bien sea que se clasifican como físicas, técnicas, ideológicas o morales; o si se les llama límites, restricciones, leyes o tabúes.

guerra, entre un combatiente y un no combatiente, entre un Estado-nación o una entidad no estatal, o entre acciones morales y acciones profanas.

Las acciones de los grupos terroristas han demostrado la manera en que un actor no estatal puede aprovechar las tecnologías desarrolladas por los Estados para el beneficio de la humanidad, pero para ser usado como un arma potencial para atacarlo, como el uso del internet y la aviación comercial. También refuerza el concepto de que los actores no estatales se benefician al no tener que financiar o llevar a cabo investigación y desarrollo para nuevas armas, sino que simplemente pueden usar las tecnologías y recursos existentes de sus oponentes estatales contra ellos mismos; esta borrosa distinción entre lo que es un arma y lo que no es un arma también difumina la distinción entre lo que es un campo de batalla y lo que no es un campo de batalla. Los efectos de la tecnología y la globalización en la era posmoderna de la guerra significarían que los intercambios bursátiles, laboratorios de investigación, medios de comunicación, bancos y centros financieros, salas de reuniones corporativas, centros religiosos, aulas de clase, y servidores de dominio de Internet, no son menos campos de batalla que los campos de exterminio de Afganistán, Irak o Myanmar.

Como indican Liang & Xiangsui (1999), la naturaleza no violenta de estas nuevas armas y campos de batalla de la G5G, no altera la esencia de la competencia de la guerra y tampoco altera su resultado: la derrota del oponente. Asimismo, las borrosas distinciones entre armas y campos de batalla también difuminan las distinciones entre combatientes y no combatientes. En los campos de batalla de la G5G descritos anteriormente, corredores de bolsa, celebridades, profesores, científicos, periodistas, banqueros, ejecutivos corporativos, clérigos y técnicos, clasificarían, al igual que los soldados, como combatientes. Con base en lo anterior, ¿sería esa la lógica con la cual grupos como las FARC atacaron centros civiles, como por ejemplo, el Club El Nogal?

Pareciera entonces que los actos que antes se habrían considerado crímenes ahora pueden concebirse como actos de guerra. Por lo tanto, la distinción entre combatientes y no combatientes, a menudo codificada pero no siempre acatada en las pasadas guerras, también se vería problemática en la G5G. También reflejan la confusión de las reglas de moralidad internacionalmente reconocidas que acompañaron a la guerra en la era moderna; con la aparición de entidades no estatales y la falta de cualquier orden gobernante al que sean responsables más allá de sus propios intereses, la G5G adopta un enfoque más maquiavélico de la moralidad en la que los fines son utilizados para justificar los medios, al eliminar los límites de la guerra. Parece que las G5G no imponen restricciones a los combatientes, ni restricciones a la selección de blancos o a la realización de ataques indiscriminados contra civiles y no combatientes, como se ha observado en los bombardeos a ISIS en algunas ciudades de Irak y Siria. En última instancia, la moralidad de las acciones en la G5G, terminaría siendo definido por el vencedor.

Finalmente, si bien la G5G no eliminaría la necesidad de modernas armas combinadas o fuerzas militares mecanizadas, sí las relega a un papel más limitado que las generaciones anteriores de guerra. A medida que las variables de la guerra (escenarios, adversarios, objetivos y fuerza), se han expandido para acomodar la G5G, el desempeño de los modernos ejércitos ha disminuido; en efecto Lyall & Wilson (2006) documentan el declive en el desempeño de los ejércitos modernos y ofrecen explicaciones de por qué este declive ha ocurrido. Al estudiar 268 conflictos entre 1809 y 2003, entre ellos 49 guerras convencionales (entre poderosos Estados-naciones), 60 guerras pequeñas (entre Estados naciones más fuertes y Estados-naciones más débiles) y 159 insurgencias (entre Estados-nación e insurgencias), los autores llegaron a la conclusión que durante el período estudiado, si bien los poderosos Estados nacionales aumentaron tanto su poderío militar como su poder económico, a su vez fueron testigos de una

disminución dramática en su capacidad para ganar guerras pequeñas y contra insurgencias; en las guerras pequeñas, las tasas de éxito de los Estados-nación se redujeron a la mitad a lo largo del tiempo, pasando de 100% entre 1800-1850, al 50% entre 1950-2003, mientras que contra las insurgencias, los índices de éxito de los grandes Estados se reducía del 89% entre 1800-1850, al 21% entre 1950-2003 (Lyall & Wilson, 2006).

Ellos argumentan que son dos variables las que operan: Primero, que a medida que los países se industrializan, sus economías se especializan cada vez más en la producción de material de guerra que no es apto para la victoria en "pequeñas" guerras; en efecto, la industrialización junto con el advenimiento de las economías de mercado, privilegia la competencia a nivel táctico debido a la preocupación por los indicadores de poder "duro" y los horizontes a corto plazo, en lugar del poder "blando" y la estrategia a largo plazo. Segundo, la idea de que a medida que las grandes potencias se modernizan, se enmarcan en prácticas organizacionales que privilegian operaciones mecanizadas, rápidas y decisivas. Como consecuencia, las doctrinas militares y las prácticas organizativas se han orientado en torno a la aplicación de la guerra mecanizada para el logro de batallas decisivas contra el centro de gravedad de un enemigo. Y si bien tales conceptos todavía pueden definir la guerra moderna contra oponentes de constitución similar, parecen fracasar desastrosamente en situaciones en las que el oponente no tiene un centro de gravedad material o rechaza la idea de una batalla decisiva.

Por ejemplo, la aparición de piratas informáticos, los ataques de antrax en el 2001 y ricina entre el 2003-2004 en los Estados Unidos, los atentados terroristas a ciudades europeas, y la aparición de Al Qaeda e ISIS, comparten dos características en común que contribuyen a hacer de ellos indicadores de la G5G. En primer lugar, cada uno es un ejemplo de cómo un oponente puede disipar sus

centros de gravedad en todos los campos de batalla para que sean prácticamente inexistentes, permitiendo a redes vinculadas por causas comunes desafiar a los Estados-nación. Gran parte del éxito de los autores de estos hechos es porque actúan en redes y no tienen centros de gravedad reconocibles que puedan ser atacados usando métodos convencionales; a pesar de grandes contramedidas tomadas por los Estados, el éxito de los hackers organizados como Anonymous no ha disminuido, mientras que el número de individuos capaces de llevar a cabo ataques similares a los del ántrax es prácticamente ilimitada. En segundo lugar, ninguno de los actores mencionados ha demostrado una dependencia de la fuerza militar; por el contrario, han demostrado una capacidad colectiva para la aplicación exitosa de múltiples fuentes cinéticas y no cinéticas de fuerza. Además, la convergencia o alianza entre crimen organizado transnacional, insurgencia y terrorismo, podría ser una expresión de la G5G, en donde el espacio de lucha no se limita tan solo al ámbito aéreo, terrestre o marítimo, sino también al cibernético.

Es en este complejo y dinámico contexto en el que se podría estar materializando la G5G, en el cual actores estatales, no estatales e individuales recurrirían cada vez más a la violencia para perseguir sus objetivos políticos, económicos, culturales e ideológicos. En definitiva, pareciera que en la G5G estarían implicadas las fuerzas culturales, económicas, sociales, científicas, de propaganda…etc., dando lugar a una "guerra irrestricta o guerra sin restricciones". Durante las décadas siguientes, ciertas tendencias globales se fusionarían con las tensiones locales y regionales existentes para alimentar la frecuencia, la intensidad y el alcance de los conflictos. Una de las tendencias mundiales más destacadas es el avance de la globalización y la tecnología, que ha conducido a una mayor conectividad global y avances científicos que están impulsando la prosperidad mundial, pero también subrayando las disparidades en la riqueza y el poder entre las sociedades. Además, estos dos fenómenos

del siglo XXI, han proporcionado inadvertidamente los medios para exportar el terrorismo y el extremismo en todo el mundo; en el mundo posmoderno de la actualidad, los que se sienten víctimas o amenazados por los impactos culturales y económicos de la globalización, estarían cada vez más atraídos por grupos extremistas radicales y religiosos. La volatilidad también aumentará en las áreas urbanas, ya que crecerá para contener casi el 60% de la población mundial en 2025 (Álvarez, 2017b), por lo que un escenario característico de la G5G podría ser la guerra urbana, en donde las fuerzas militares mecanizadas tendrían varios desafíos y dificultades en operar. Otros peligros se esconden en refugios seguros cuando los Estados, muchos de los cuales sufren las presiones de la explosión demográfica, no pueden o no quieren ejercer el control dentro de sus fronteras. Estos santuarios permiten a los grupos criminales y terroristas operar efectivamente dentro del territorio de los Estados para explotar los espacios vacíos rurales y urbanos.

Capítulo IV

Globalización Desviada: Plataforma de Convergencia Criminal[40]

Carlos Enrique Álvarez Calderón
CC. Jaime Andrés Zambrano

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, las personas han expresado su política y su poder en una variedad de formas. En ese sentido, si bien la política internacional aparecería con la llegada de los primeros Estados organizados hace miles de años, la política global sería más reciente, apareciendo hace aproximadamente unos cinco siglos, cuando los Estados imperiales europeos comenzaron a unir los espacios geográficos más remotos del planeta a través de la conquista y del comercio. A partir de entonces, el planeta estaría caracterizado por la globalización o la interdependencia económica, cultural, legal, social, psicológica, tecnológica, ambiental y, por lo tanto, política, cada vez más compleja.

Hasta hace poco, el desarrollo de la globalización había sido lento. Aunque los países se aliaban, intercambiaban y negociaban entre sí, las divisiones entre los Estados superaban con creces los lazos de cooperación, y las naciones a menudo resolvían sus conflictos con la guerra o la amenaza de guerra. Sin embargo, desde 1945 como resultado de la Guerra Fría, la globalización parece haberse desarrollado de manera más rápida y profunda. Hoy todos

40. Este Capítulo de Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

los seres humanos estarían formalmente vinculados unos a otros, a través de la membresía de su país en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, junto con los beneficios personales del comercio internacional, las telecomunicaciones, los viajes y el Internet.

No obstante, la globalización tiene un lado oscuro: destruye y crea empleos, distribuye y concentra la riqueza, y convierte las amenazas domésticas a la seguridad y defensa de los Estados, en amenazas trasnacionales que podrían llegar a afectar la seguridad colectiva del conjunto de los países que conforman el Sistema Internacional; en consecuencia, la globalización significaría que cualquier evento internacional importante podría llegar a afectar a los Estados de diversas maneras, y de la misma manera, cada tema nacional importante sería, de diversas maneras, un problema internacional.

Las computadoras cada vez más sofisticadas, conectadas en una vez más densa, son una fuerza importante que impulsa la globalización. Gobiernos, corporaciones, agencias de inteligencia, grupos terroristas y cualquier otra persona conectada a la *world wide web,* tienen un poder sin precedentes para comunicarse, compartir información, espiar, resolver problemas o crear nuevas crisis; con un toque del teclado, gigabytes de información o virus cuidadosamente ocultos pueden recorrer todo el planeta. Por ende, a medida que la interdependencia se complejiza, la gama de conflictos internacionales se multiplica; si bien las redes envolventes de relaciones de la globalización podrían llegar a beneficiar a innumerables personas de distintas maneras, simultáneamente podrían dañar a innumerables otros, engendrando mayores conflictos políticos y afirmaciones de poder.

Aunque casi todos los que se sienten perjudicados por la globalización se enfrentan pacíficamente a ese problema, otros recurren a la violencia para hacer valer sus intereses. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 al World

Trade Center y al Pentágono en los Estados Unidos, expresarían la reacción más radical contra el proceso de globalización, así como la personificación de su "lado oscuro". Si bien ese tipo de guerra no sería nueva, su escala no tiene precedentes, ya que Al Qaeda terminaría librando la primera guerra terrorista global abarcando más de 70 países. Ciertamente la guerra y la globalización han marchado al unísono en los últimos cinco siglos, desde el nacimiento del mundo moderno, culminando con las dos guerras mundiales del siglo XX, en las que murieron aproximadamente 16 millones de personas en la Primera Guerra Mundial y 70 millones en la Segunda Guerra Mundial.

El término globalización es bastante nuevo, se introdujo ampliamente solo a fines de la década de 1980, aunque los japoneses utilizaron un concepto equivalente en la década de 1960. El término y el concepto detrás de la globalización no fueron acuñados en un principio por los historiadores, sino por otros científicos sociales, como los economistas. En este orden de ideas, la globalización significaría en su sentido literal, el "proceso de transformación de los fenómenos locales en fenómenos globales (…) un proceso mediante el cual las personas del mundo se unifican en una sola sociedad y funcionan juntas" (Stearns, 2010, p.1). Este proceso sería la combinación de fuerzas económicas, tecnológicas, socioculturales y políticas; no obstante, el término se utiliza a menudo para centrarse en la economía, es decir, la integración de las economías nacionales en una economía internacional a través del comercio, inversión extranjera directa, flujos de capital, migración y difusión de la tecnología.

El término francés *globaliser* tiene un significado distinto al del inglés *globalization* o del castellano "globalización", ya que cuando los franceses hablan de "globalización", generalmente usan el término *mondialisation*. Por el contrario, *globaliser* significa establecer nexos entre diversas áreas temáticas, como por ejemplo, la seguridad y la economía. En castellano, la "globalización"

estaría definida por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), como "el proceso por el cual las economías y los mercados, con el desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos" (RAE, 2017). Por su parte, Gilman et al (2011) definen la globalización como la integración transfronteriza de la actividad económica de valor agregado; esta integración se debe a que los ingredientes básicos de la actividad económica (bienes, servicios, dinero, personas e ideas, sin orden particular), se han vuelto cada vez más móviles a través del espacio, el tiempo y las fronteras políticas.

2. Breve Historia de la Globalización

La globalización sería claramente un proceso, aunque no es fácil fechar sus orígenes efectivos de manera decisiva. Según Hopkins (2002), si el fenómeno de globalización se estudiase a partir de la primera emergencia de patrones de comercio regulares, se podría argumentar que la globalización se estaba volviendo inevitable para el año 1000 d.C. No obstante, bien podrían apreciarse antecedentes significativos del fenómeno globalizador desde el 1200 a.C.

2.1 Primeras Interacciones

Las migraciones fueron posiblemente el primer encuentro humano con largas distancias. Es probable que la mayoría de los grupos migratorios se mudaran a unas pocas decenas de kilómetros (km) de su lugar de origen inicialmente, lográndose largas distancias con el tiempo, como resultado del movimiento de muchas generaciones sucesivas. Hubo, sin embargo, ejemplos de movimientos aparentemente rápidos a lo largo de muchos cientos de kilómetros; parece probable que algunos grupos de nativos americanos migraron rápidamente a lo largo de la costa del Pacífico, desde el puente terrestre Siberia-Alaska y el

noroeste estadounidense, mediante el uso de buques costeros, llegando a varias partes de América del Sur. Sin embargo, migraciones de largas distancias no establecieron necesariamente estructuras de intercambio (Gills & Thompson, 2006); en efecto, llevaron personas a nuevos lugares y a veces mezclaron diferentes grupos de personas, pero los migrantes generalmente no regresaron, por lo que no se desarrollaron patrones duraderos de interacción regional, más allá de los encuentros entre residentes e inmigrantes en el lugar.

En contraste, el comercio a cualquier distancia apreciable, si traería consigo interacciones de ida y vuelta., aunque no está del todo claro cuándo surgió el comercio, más allá de los contactos puramente locales. De acuerdo a Stearns (2010), las conchas marinas del Océano Índico llegaron a Siria alrededor del año 5000 a.C., lo que probablemente constituya un intercambio de ornamentos y sugiera algún movimiento en el Medio Oriente de una costa a otra. El comercio también se desarrollaría a más de 200 km, por ejemplo, en el este europeo (de Hungría a Polonia), no solo para piedras preciosas sino también para materiales como el pedernal, importantes en la fabricación de herramientas y armas tempranas. Empero, el comercio inicial más arriesgado se podría haber desarrollado entre los pueblos del sudeste asiático, por ejemplo, en algunas de las islas de la actual Indonesia, donde se desarrollaron embarcaciones capaces de navegar en algunas secciones del Océano Índico. El comercio primitivo también se desarrollaría en la región del Golfo Pérsico hacia el 4000 a.C., que aprovechando los vientos favorables durante ciertos meses del año, les permitiría alcanzar la India y la costa este de África, lo que explica el intercambio de cultivos entre las dos regiones (Casson,1994).

Desarrollos cruciales en el surgimiento del comercio terrestre (incluidos los transbordos de mercancías inicialmente traídos por vía marítima, por ejemplo, desde puertos del Océano Índico en el Golfo Pérsico, hacia el interior del Medio

Oriente), involucrarían la domesticación de animales de carga, como los burros hacia el 3000 a.C.; su capacidad de transportar cargas relativamente pesadas a largas distancias, fue un avance crucial para los viajes en tierra; para ciertas regiones, tanto en Asia como en África, la domesticación del camello llegaría a tener un significado parecido. Cabe resaltar que si bien estos fueron avances humildes en comparación con las últimas tecnologías de la globalización, promovieron en gran medida las conexiones entre las regiones adyacentes (LaBianca & Schum, 2004).

Varias de las primeras civilizaciones mesopotámicas desarrollaron el comercio interregional. Por su parte Egipto, comenzaría a comerciar a través del Mar Rojo hacia el 2500 a.C., alcanzando la Península Arábiga (actual Yemen) y la costa africana del Océano Índico (Mark, 1997). Los egipcios recibieron oro, marfil y esclavos de Etiopía, a cambio de productos manufacturados, mientras que el comercio con Oriente Medio desde lugares más lejanos, se concentraría en la exportación de especias, algunas de las cuales habían sido enviadas desde lugares tan remotos como la India (Miller, 1998). En resumen, el comercio operaba en saltos interregionales más cortos en lugar de contactos directos, en este caso entre Egipto e India. Según Nester (2010), varios *hub* comerciales en el Golfo Pérsico, en particular uno llamado Dilmun (Bahrein), ya servían como centros de transmisión de mercancías, como piedras preciosas, producidas en otros lugares.

Sin embargo, estas primeras aventuras comerciales tenían algunas limitaciones, ya que en su mayor parte operaron entre dos regiones vecinas, en lugar de distancias más largas. Además, las migraciones e invasiones a Medio Oriente e India, socavaron las iniciativas marítimas alrededor del año 2000 a.C., ya que los recién llegados, aunque triunfaron militarmente sobre los lugareños, simplemente no sabían cómo ejecutar las operaciones comerciales

más ambiciosas (Manning, 2005). Otra limitación resultaría de la competencia prescriptiva, ya que como podría suponerse, algunas de las personas involucradas en el comercio trabajarían activamente para desalentar a otros a unirse. Por ejemplo, según Stearns (2010), comerciantes árabes que llevaban canela a Egipto en barcos y/o caravanas terrestres, intentaron convencer a los egipcios de que no sabían de dónde venían las especias; peor aún, afirmaban que estas fueron arrojadas a las montañas por pájaros gigantes y temibles, y que solo se podían obtener luego de luchar contra dragones.

Finalmente, la percepción frente a la profesión mercantil, también sugeriría vacilaciones interesantes sobre los contactos comerciales; por un lado, los comerciantes eran vitales para el proceso de intercambio, pero por otro lado, muchas sociedades desconfiaban de ellos, por sus motivos de lucro y porque parecían diferir de los aristócratas de alto prestigio y los funcionarios estatales. Es cierto que algunas de las desigualdades y vacilaciones sobre los contactos interregionales pueden evidenciarse todavía en la actual globalización, como por ejemplo, la tensión entre la identidad local y la autosuficiencia, por un lado, y un alcance más amplio.

A pesar de la desconfianza hacia la actividad comercial, para el 3000 a.C. los *clusters* de comerciantes extranjeros ubicados en ciudades clave, reflejaban y alentaban la conciencia de la importancia del comercio más allá de la sociedad individual. De acuerdo a Nester (2010), algunas asociaciones de comerciantes se habían desarrollado para ayudar a regular el comercio interregional, bien fuese para el manejo del intercambio de pagos o para asegurar estándares éticos.

Asimismo, los gobiernos trabajaban para estimular el comercio, desarrollando un claro interés en asegurar y, cuando fuese posible, expandir su alcance. Actuaron no solo por su propio interés en diversificar los bienes disponibles, incluyendo materiales vitales en la producción de armas, sino

también por los impuestos que podrían cobrar en el envío y el comercio de caravanas. En efecto, los gobernantes egipcios, por ejemplo, eran muy conscientes de las ventajas que Egipto obtenía de su acceso al Océano Índico y estaban ansiosos por asegurarse de que ninguna otra sociedad interfiriera ni compitiera indebidamente (Miller, 1998); incluso se ha argumentado que el conflicto griego con Persia, más que un choque de civilizaciones, se debió a la renuencia griega a aceptar la capacidad persa de cortar el contacto griego con el Océano Índico y sus riquezas comerciales. Motivos de este tipo, sugieren cómo los contactos comerciales en las primeras sociedades agrícolas reflejaron y promovieron los tipos de pensamiento que alimentarían más tarde, las conexiones interregionales más elaboradas, que en última instancia incluirían a la globalización misma.

2.2 La Era clásica

El advenimiento de las grandes civilizaciones clásicas, desde el año 1000 a.C., plantearía una complicación obvia incluso en un análisis sumario de los antecedentes históricos iniciales de la globalización; las principales civilizaciones ahora comenzarían a extenderse sobre un gran espacio territorial. Por ejemplo, durante la dinastía Han, tomaba cuarenta días viajar desde la capital a las provincias más remotas de China, incluso en los caminos relativamente sofisticados que el Estado proporcionaba para aquel entonces; en consecuencia, los líderes chinos trabajarían arduamente para unir el norte y el sur de China, construyendo canales para facilitar el comercio, enviando colonos del norte al sur y promoviendo el uso de un solo idioma, el mandarín (al menos entre la clase gobernante), a pesar de la multiplicidad de grupos étnicos, idiomas y culturas que componían el imperio chino (Yingshi, 1967).

Al igual que en China, todos los imperios clásicos fomentarían sistemas culturales como el hinduismo y el budismo en la India, proporcionando nuevos enlaces basados en valores más amplios. Asimismo, el comercio buscaría

aprovechar las especializaciones locales, como el cultivo de granos en el norte de África a cambio de vinos y aceite de Italia y Grecia, promoviendo una mayor eficiencia y prosperidad en el proceso de crear una economía global más coherente. Los sistemas sociales comunes también se extenderían, como los patrones de la esclavitud en el Mediterráneo o el sistema de castas en la India. Finalmente, los imperios intentarían proporcionar unidad política a las principales áreas de civilización. Estos esfuerzos tuvieron bastante éxito durante muchos siglos, y en algunos casos (especialmente en India y China), crearon valores e instituciones duraderos que proporcionarían coherencia interna y distinción frente a otras sociedades importantes durante muchos siglos, incluso hasta la actualidad (Liu, 1998). De hecho, en la medida en que los esfuerzos de integración promovieran las identidades centrales para muchas personas, en realidad podrían desalentar el contacto más amplio y fomentar el desdén por las sociedades y regiones fuera de la base. Según Yingshi (1967), tanto los griegos como los chinos comenzaron a referirse a los pueblos que se encontraban fuera de sus propias órbitas en expansión como bárbaros, claramente inferiores y que merecían poca o ninguna atención cuando había tantas oportunidades emocionantes a nivel doméstico.

Lo cierto es que los nuevos imperios trajeron territorios que no habían sido partes regulares de los patrones de intercambio. Por ejemplo, la arquitectura del Imperio Romano ahora involucraba a todo el Norte de África en contactos regulares con el Medio Oriente y nuevas partes de Europa, como Francia. Además, los imperios crearon una infraestructura que podría facilitar un alcance aún más amplio haciendo que el comercio y los viajes fuesen más fáciles. Como lo expresan Ellis & Kidner (2004), particularmente importantes fueron los desarrollos en el Imperio Persa, dada la centralidad geográfica de esta región a posibles contactos entre el Océano Índico y las redes mediterráneas. Con las conquistas que comenzaron en 556 a.C., el imperio llegó a extenderse desde el río Indo en el noreste de la India, hasta Egipto y Libia, conectados a través de

un impresionante sistema de carreteras, que se extendería más de 13.000 km; el objetivo principal era, por supuesto, facilitar la comunicación y el comercio dentro del imperio, incluido el movimiento de las fuerzas militares.

Desarrollos similares tuvieron lugar en los imperios romano y chino. Los emperadores chinos comenzaron a construir carreteras de hasta quince metros de ancho, con árboles plantados a lo largo de las vías por razones estéticas; en la época de la dinastía Han, existían en China 35.000 km de carreteras, que proporcionaban enlaces internos pero también conexiones con Asia central y Occidente (Yingshi, 1967); Roma construyó aún más carreteras (77.000 km), así como puertos marítimos a lo largo del Mediterráneo, particularmente para el envío de granos (Miller, 1998). Empero, el enlace más famoso fue la Ruta de la Seda, que en su apogeo trajo productos de China a las clases altas del Imperio Romano, así como a las élites en Persia, Medio Oriente y la India.

De acuerdo a Wood (2004), el intercambio de seda desde China hacia el oeste comenzaría como resultado de contactos crecientes y tensiones con pueblos nómadas en el oeste de China y Asia central; los funcionarios y comerciantes chinos comenzaron a traer telas de seda más allá de las fronteras del país como regalos para conciliar posibles invasores, pero también a cambio de caballos con cualidades superiores, que tuvieron un gran impacto entre los militares chinos. Finalmente, los chinos también importarían semillas de alfalfa, lo que les permitió una mejor base agrícola para sostener a los caballos de los que dependían. No obstante, el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda fue esencialmente unidireccional, es decir, un movimiento de producción manufacturera china hacia otras regiones.

A pesar de la importancia de la Ruta de la Seda, se establecieron otras rutas para unir diferentes partes de Asia, África y Europa a través de largas distancias. El más importante era por vía marítima a través del Océano Índico, con India

como jugador central; Malasia, Vietnam e Indonesia también participarían activamente en esta red, proporcionando productos y comerciantes por igual. Las especias constituían el núcleo del comercio del Océano Índico, como la pimienta que era producida en India y que los griegos usarían para fines medicinales o los romanos para la cocina (Miller, 1998). Las especias, el incienso, las perlas y otros materiales del este de África y la Península Arábiga también se mezclaron en este comercio. Sin embargo, los productos manufacturados ganaban cada vez mayor atención; el paño de algodón indio era popular, aunque el Imperio Romano finalmente lo prohibió debido a su competencia con las telas de lana y lino.

No obstante, Roma fomentaba el comercio como una política de Estado; de acuerdo a Begley & De Puma (1991), las flotas regulares zarpaban desde la costa del Mar Rojo de Egipto hacia los puertos de India, en caravanas de más de 120 barcos y con arqueros romanos para ayudar a repeler a los piratas; estos barcos romanos también comerciaban regularmente con Sri Lanka y el Medio Oriente. Desde el Mar Rojo, los productos se transportaban en camellos hasta el Nilo y de allí al puerto de Alejandría, donde podían ingresar al comercio mediterráneo estándar. A pesar de ello, los romanos enfrentaron un constante desafío en la balanza de pagos, porque las mercancías que demandaban de Asia, excedían el interés asiático en lo que tenían para ofrecer (lino y vino, principalmente). En consecuencia, los envíos de oro romano serían esenciales para corregir el desequilibrio, aunque los políticos romanos se preocupasen de que se estuviera desviando demasiado de su riqueza como resultado.

En conclusión, la interdependencia en el mundo clásico podría asumirse como una primera aproximación y referencia al proceso de la globalización económica, aunque por supuesto, solo participarían algunas regiones de tan solo tres continentes, y no de los seis continentes habitados. Como lo señala James (2016).

> Pruebas arqueológicas indican el alcance mundial del comercio durante el imperio romano, cuando se empleaba la moneda romana en lugares tan distantes de la Ciudad Eterna como las regiones costeras de Sri Lanka y Vietnam. Luego hubo numerosas expansiones del comercio y las finanzas mundiales. En muchas de estas, se revivieron ideas de la antigüedad clásica y de la época de la globalización romana (y de su dominio mundial), como en el caso de la recuperación económica de fines del siglo XV y principios del XVI (contexto económico del renacimiento) o del siglo XVIII, durante el cual la mejora de la tecnología y una mayor facilidad de comunicación allanaron el camino a los imperios mundiales (británico y francés). (p.19)

2.3 La Era de los descubrimientos

El descubrimiento y conquista de América por parte de los imperios europeos, a partir del 1500, marcaría un proceso de integración comercial que conduciría eventualmente al fenómeno de globalización moderno. En efecto, la inclusión de las Américas en los patrones de contacto, así como el acceso europeo al Pacífico, crearían la posibilidad de vínculos crecientes con prácticamente todas las sociedades relevantes en aquel momento. Si bien aún continuaban aislados ciertos territorios (Australia y Nueva Zelanda no entrarían completamente en escena hasta el siglo XVIII), el aislamiento era ahora la excepción y la mayoría de las regiones se involucraron cada vez más en los intercambios de bienes y personas.

No obstante, la nueva geografía global fue solo una parte del cambio, ya que la intensidad y las consecuencias de las conexiones también se transformaron. Precisamente porque los intercambios tenían implicaciones más intrusivas, algunas sociedades decidieron conscientemente limitar su participación, un testimonio indirecto del hecho de que los contactos ahora planteaban nuevos

tipos de problemas de identidad, en comparación con los patrones más informales de la fase previa. También surgieron nuevos tipos de desigualdad dentro del sistema global, presentes desde el siglo XVI hasta el presente. Las nuevas formas de armamento, obviamente, facilitaron el ingreso forzado de algunas sociedades a otras, pero también hubo algunos cambios en el transporte y la comunicación que impulsaron el proceso de interconexión.

Diversos historiadores (Gunn, 2003; Robertson, 2003; Schäfer, 2007) reconocen la importancia de los cambios que comenzaron a desarrollarse a partir del siglo XVI. Por ejemplo, Schäfer (2007) argumenta que los cambios masivos ocurridos después de 1950 han creado un mundo fundamentalmente diferente basado en la globalización, aunque admite que el siglo XVI abriría un nuevo capítulo significativo en la historia mundial, al que llama "protoglobalización"[41]. Asimismo, Robertson (2003), en su propuesta sobre las "tres olas" de la globalización, establece que la primera ola se daría en el siglo XVI. Sin embargo, otros académicos sugieren que la globalización propiamente dicha solo se daría a partir del siglo XVIII; tal es el caso de Osterhammel et. al (2005), quienes si bien hacen breves reverencias al impacto anterior del Islam y los mongoles, y luego el aumento del comercio marítimo europeo y la inclusión de las Américas, realmente retrasan cualquier referencia clara a la globalización hasta 1750. Antes de eso, a juicio de los autores, mientras las fuerzas de integración ganaban terreno, la mayoría de las sociedades operaba de manera muy separada; fue solo con un aumento adicional del imperialismo europeo y los primeros frutos de la Revolución Industrial, que la globalización se hizo posible.

Uno de los desarrollos más obvios durante las décadas posteriores a 1500 muestran algunas de las complejidades de los nuevos patrones de contacto en

41. El concepto de un período "protoglobal", que avanza genuinamente hacia la globalización, pero que aún no podría clasificarse como parte de la globalización, podría tener mucho sentido, pero necesita una definición explícita más allá de las referencias tradicionales al aumento del comercio dominado por Europa.

este período. Después del 1500, la capacidad de España, Portugal, Francia, Holanda y Gran Bretaña para establecer y operar colonias de ultramar a grandes distancias del país de origen, demostraría nuevas fortalezas organizacionales relevantes para el avance de la globalización. Estas naciones ya contaban con la capacidad logística y organizacional para enviar burócratas, establecer reglas y llevar registros de las actividades de sus colonias en ultramar como nunca antes había sucedido.

Además, las armas de fuego (particularmente el cañón naval), desempeñaron un papel importante en apuntalar los nuevos patrones de contacto global; cuando Vasco da Gama llegaría a la India en 1498-99, señalando la entrada de los portugueses en los patrones establecidos del comercio del Océano Índico, en realidad tenía poco que ofrecer a sus contrapartes asiáticos: los bienes europeos que traían poco interés. Pero cuando Gama regresó a la India en un segundo viaje, y cuando Portugal organizó una flota del Océano Índico, las armas de los buques comenzaron a producir la ventaja que las meras ofertas comerciales no podían proporcionar. Asimismo, las armas eran una parte fundamental del paquete militar que permitiría a los europeos obtener ventaja en las Américas y el Caribe, a menudo con relativamente poca resistencia.

De acuerdo a Sherratt (2003), los avances en la navegación y las tecnologías de transporte, también impactarían el desarrollo de los contactos transregionales después de 1500; luego de 1492, los europeos establecieron una creciente serie de viajes a varias partes del Caribe y América, conectando no solo a Europa sino también a África. Durante el siglo XVI, no solo América del Sur sino también América del Norte, incluidos los lugares más lejanos del este de Canadá, se convirtieron en terrenos rutinarios para los exploradores, comerciantes y colonos europeos. A su vez, se establecería un comercio de esclavos de África para satisfacer las crecientes necesidades de mano de obra en América.

Por su parte, la habilitación del Pacífico se desarrollaría más lentamente. En 1519, Magallanes rodeó el extremo sur de América del Sur para lanzarse al Pacífico, descubriendo las islas del Pacífico Sur, Guam y las Filipinas; posteriormente, los españoles comenzaron a establecer intercambios regulares a través del Pacífico desde México hasta las Filipinas. Pero la exploración del vasto Pacífico aun inexplorado se desarrolló gracias a británicos y franceses durante el siglo XVIII, y fue solo hasta aquel momento que Hawái, Australia y Nueva Zelanda entrarían en el radar del proceso globalizador en la era de los descubrimientos, después de 1750.

La inclusión de las Américas, y luego de Oceanía, aumentarían la importancia de los contactos a nivel mundial, gracias a los nuevos productos disponibles; según Gunn (2003), la producción estadounidense de plata organizada por los españoles, alimentaría el comercio entre Europa Occidental y Asia, ya que los europeos usaron el bien valuado para pagar bienes, que de otro modo, estaban fuera de su alcance debido a cuestiones de balanza de pagos. China, en particular, importó plata con gran celo, expandiendo su producción de porcelana y otros artículos; la plata se volvió tan común, que para el siglo XVII, circulaban más pesos mexicanos en China que en el propio México, debido a su alto contenido de plata (Gunn, 2003). Y como era de esperarse, la creciente dependencia al comercio mundial, terminaría provocando enfrentamientos militares. Si bien esta no era la primera vez que el comercio había motivado la guerra, las motivaciones aumentaron a causa de un mayor alcance geográfico del comercio; en consecuencia, Gran Bretaña y España lucharían por la supremacía del mar en Europa y América, mientras que los enfrentamientos del siglo XVIII entre Gran Bretaña y Holanda, y Gran Bretaña y Francia, tenían como base el esfuerzo por establecer una ventaja comercial a nivel global.

La capacidad organizativa también ofrecería una innovación esencial para el avance de la globalización como proceso; en las décadas posteriores

al 1500, los negocios internacionales, tal como se definen en la actualidad, se constituyeron como un elemento permanente de las interacciones globales. De acuerdo a Chaudhuri (2006), las compañías comerciales que comenzaron a establecerse en la Europa del siglo XVI, organizaron un grupo de accionistas público-privados que les permitió acumular grandes cantidades de capital. En el proceso, compañías como la *British East India Company* o la *Dutch East India Company*, construyeron capacidades militares y gubernamentales en áreas clave, administrando las colonias desde sus sedes corporativas de Londres o Ámsterdam; además, las compañías internacionales podrían cambiar fondos de un lugar a otro, cambiar divisas y contratar ventas en extensas rutas comerciales.

Por ejemplo, la Dutch East India Company (DEIC), tenía puestos comerciales no solo en Holanda e Indonesia, sino también en Persia, China, India, Taiwán, Tailandia y en otros lugares, y también ayudó a la constitución de la colonia holandesa en Sudáfrica (Wallerstein, 2011); traería plata y cobre de Japón para adquirir seda de China y algodón de la India, que luego se comercializaría a otras partes de Asia para obtener más especias o regresaron a Europa. Para 1669, la DEIC era la compañía privada con mayor riqueza del mundo, contando con más de 150 buques mercantes, 40 buques de guerra, 50,000 empleados y un ejército privado de 10,000 soldados (Chaudhuri, 2006).

2.4 El Proceso de Globalizacion a partir del 1800

Los orígenes efectivos del fenómeno de la globalización se ubicarían a mediados del siglo XIX. Según Zeiler (2003), si bien los cambios recientes en tecnología han acelerado el ritmo de la globalización más allá de lo que era visible hace 150 años, en términos de cambios básicos en el transporte, nuevas redes comerciales y relaciones económicas, el movimiento real hacia la globalización comenzaría a partir del siglo XIX. Sería alimentada no solo por

los nuevos buques de vapor[42] y los ferrocarriles, sino también por los canales de Suez y Panamá que aceleraron el comercio en todo el mundo (Fletcher, 1958); así como por los avances en las telecomunicaciones, con líneas telegráficas entre Estados Unidos, América Latina y Europa, y cables submarinos británicos que se dirigían a Asia, permitiendo interacciones comerciales e intercambios de noticias casi instantáneas.

> La tecnología y la globalización están íntimamente ligadas: incluso podríamos describir el fenómeno como "tecnobalización". La máquina de vapor impulsó la interconexión mundial del siglo XIX. El ferrocarril abrió nuevos continentes y permitió a los granjeros producir alimentos básicos para mercados remotos. Luego, el barco de vapor unió continentes y la notable reducción de los costos del transporte estimuló la integración de mercados. La coordinación del transporte exigió información unificada, y el telégrafo —que en 1865 logró atravesar océanos con el tendido del primer cable transatlántico estable— pudo trasmitir la información que los mercados necesitaban saber. (James, 2016, p.19)

Adicionalmente, las grandes ferias mundiales (comenzando en Londres en 1851), destacaron la fabricación occidental pero con creciente atención a los patrones económicos y culturales en otras partes del mundo. Un impulso a la globalización y a la consecuente expansión económica del siglo XIX, sería la emigración desde la periferia europea que comprenden las regiones de Europa Oriental, el Mediterráneo y Escandinavia, hacia el continente americano; entre mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, 30 millones de personas emigraron de Europa a Estados Unidos, 6,5 millones a la Argentina y 5 millones a Canadá. Por ende, los niveles de comercio global alcanzaron niveles

42. Los buques de vapor se desarrollaron a principios del siglo XIX, pero no tendrían una relevancia inicial para la globalización. En un primer periodo, el uso de esta tecnología se centró en los viajes costeros y los viajes a lo largo de los ríos, principalmente para el correo o para transportar pasajeros adinerados.

sin precedentes, hasta el punto que el valor total de todas las exportaciones e importaciones mundiales se quintuplicaron entre los años de 1850 a 1900, duplicándose de nuevo en 1914 (Stearns, 2007).

De acuerdo a Kenwood & Lougheed (1999), las exportaciones británicas aumentaron en un 57% entre 1870 a 1900, a pesar que la participación británica en el comercio mundial disminuiría por el ingreso de nuevos jugadores como Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón, entre otros; por ejemplo, las exportaciones de los Estados Unidos crecieron aproximadamente en un 200% entre 1879 y 1914. La participación de África y América Latina en el comercio mundial también aumentaría, por lo que en general, el comercio mundial se expandió en un promedio de 4% anual en la última mitad del siglo XIX (Kenwood & Lougheed, 1999).

Aparecerían para la fecha los grandes bancos, particularmente de Europa y Estados Unidos, los cuales aumentaron constantemente sus tenencias en otros países. La inversión europea en los Estados Unidos creció constantemente, proporcionando gran parte de la base para grandes desarrollos como los ferrocarriles transcontinentales; el capital británico en los Estados Unidos se cuadruplicó entre 1870 y 1914 (Stearns, 2007). Asimismo, el creciente comercio internacional impulsaría la expansión de las compañías internacionales, generando nuevos patrones de comercio como la "integración vertical", la cual permitió a las empresas occidentales establecer grandes explotaciones mineras o agrícolas en lugares como América Latina y África, al mismo tiempo que establecían oficinas de ventas de sucursales para sus productos terminados en muchas otras partes del mundo; por ejemplo, la *United Fruit Company* fundada en 1899, había adquirido en el transcurso de tan solo siete años, 160 km² de tierra para el cultivo de bananos en Colombia, Cuba y otros lugares de América Central, empleando a casi 15.000 personas; además, terminaría operando líneas

ferroviarias, compañías navieras y estaciones de radio, influyendo decididamente en la política de algunos gobiernos latinoamericanos (Zeiler, 2003).

Empero, la expansión del comercio mundial, banca y negocios, acrecentarían las crisis económicas a nivel internacional. Tradicionalmente, las oscilaciones económicas dependían de factores regionales y solo tenían repercusiones mundiales limitadas. Sin embargo, para finales del siglo XIX, este patrón estaba cambiando; primero se insinuó en una breve crisis en 1856, y luego más extensamente en 1873, extendiéndose las recesiones no solo a través de las fronteras nacionales, sino a través de los océanos. A partir de aquel momento, las crisis económicas siempre abarcaron a Europa y a los Estados Unidos, y generalmente tuvieron un impacto significativo en la caída del comercio, tanto de exportaciones como de importaciones, en América Latina y Asia (la Gran Depresión de 1929 sería un ejemplo).

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las transformaciones en el transporte y las comunicaciones, así como en la política internacional, relanzarían el proceso de globalización luego de las tribulaciones sufridas durante las décadas transcurridas entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la experiencia y el resultado de la Segunda Guerra Mundial impulsarían este nuevo marco, ya que apresuraría el desmantelamiento de los imperios occidentales, y ayudaría a conducir a nuevas divisiones que sustentaron la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. De acuerdo a Nester (2010), tres facetas de la guerra promoverían nuevos niveles de interacción global. En primer lugar, la nueva posición de los Estados Unidos brindó un estímulo adicional a las nuevas conexiones, como por ejemplo, en la creciente importancia del idioma inglés en las comunicaciones internacionales; en segundo lugar, el enorme alcance geográfico de la guerra, mucho mayor que el de la Primera Guerra Mundial, promovió nuevas tecnologías que tendrían implicaciones más allá de lo militar (nuevos tipos de aviones y sistemas de

comunicación); en tercer lugar, el impacto de la guerra haría que muchos líderes reconsideraran las políticas anteriores, comprometiéndose a crear nuevas políticas que promoverían la paz y el crecimiento económico.

En efecto, las nuevas instituciones internacionales, y los valores y funciones que incorporaron, alterarían el marco globalizador; se esbozaron dos tipos de instituciones, una para la política mundial y la otra para la economía global, que reflejaban el amplio deseo de encontrar soluciones mundiales para los problemas que habían desgarrado al mundo en las dos décadas anteriores. Las instituciones económicas también reflejarían el papel creciente de los Estados Unidos en la esfera internacional, así como su compromiso con el capitalismo de libre mercado (Friedman, 2000). Con referencia al primer tipo de institución, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China lanzarían en 1943, un llamado para la creación de una nueva organización internacional que reemplazara a la Liga de las Naciones. Como resultado, la ONU aparecería en escena, luego de la conferencia de San Francisco en 1945; se esperaba que esta nueva organización fuera más eficaz en resolver los conflictos y garantizar la paz, de lo que había sido la Liga de las Naciones.

Con relación al segundo tipo de institución, las reuniones en Bretton Woods en 1944 establecieron nuevos organismos y políticas para ayudar a regular la economía global y prevenir los tipos de inestabilidad vividas en el periodo entreguerras. El objetivo principal de Bretton Woods sería obtener el acuerdo de cada país participante para mantener el valor de cambio de su moneda en relación con el precio del oro o, después de 1971, el dólar estadounidense, a fin de evitar las fluctuaciones que pudiesen llegar a perturbar el comercio internacional. Además, se crearían dos instituciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que más tarde se convirtió en el Banco Mundial (BM); la idea básica de la creación de estas dos

instituciones era asegurar un flujo libre de comercio, así como el compromiso de colaborar en asuntos económicos, para evitar el tipo de aislacionismo nacional que claramente había exacerbado la depresión.

En este sentido, el FMI ayudó a supervisar la estabilidad de los tipos de cambio, al tiempo que asesoraba a los países sobre las políticas que podrían afectar el sistema monetario internacional; la organización también tenía un fondo que podría proporcionar préstamos a los miembros para cubrir déficits comerciales temporales, al tiempo que insistía en la adopción de políticas económicas que consideraba adecuadas. Por su lado, el BM tuvo la tarea de proporcionar dinero de inversión para ayudar en la recuperación económica de la posguerra (particularmente en Europa), y más tarde, ayudar a los Estados en vías de desarrollo a acelerar su crecimiento económico y ocasionalmente proporcionar alivio de la deuda. Por último, el debate internacional también se concentraría en la reducción de las tasas arancelarias al comercio, desembocando eventualmente en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995.

Los orígenes de la globalización contemporánea se pueden encontrar en los cambios en las finanzas internacionales en la década de 1970, iniciados por la administración del presidente de los Estados Unidos Richard M. Nixon (1969-1974), con la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, así como otras reformas estructurales incentivadas por preocupaciones económicas y geopolíticas inmediatas. No obstante, la reciente ola de globalización financiera tomaría forma a mediados de los años ochenta, impulsada por la liberalización de los controles de capital en muchos países, que preveían mayor crecimiento y estabilidad del consumo gracias a las corrientes transfronterizas; en teoría, se esperaba que los beneficios serían cuantiosos, sobre todo para los países en vías de desarrollo, que por lo general disponían de menos capitales. En consecuencia,

las dos décadas siguientes a la Guerra Fría serían celebradas como la auténtica era de la globalización, tomando en cuenta que el movimiento transfronterizo de capitales, bienes y personas se expandiría de manera profusa; en efecto, entre la caída del Muro de Berlín en 1989 y el temprano inicio de la crisis financiera mundial en 2007, los flujos internacionales de capital crecerían del 5% al 21% del PIB mundial, mientras que el comercio aumentaría de 39% a 59% (Mallaby, 2016).

Por ende, los niveles de comercio global se dispararían en la segunda mitad del siglo XX, gracias a nuevos medios de transporte, comunicaciones instantáneas basadas en el internet y los satélites, así como numerosas organizaciones internacionales y acuerdos que fomentarían el libre comercio. Sin embargo, a mayor comercio, mayor dependencia de las exportaciones. A principios del siglo XXI, entre 2002 y 2007, China aumentaría sus exportaciones en un 400%, mientras que los principales productores de materias primas obviamente dependían enormemente del comercio mundial, como los Estados productores de petróleo del Oriente Medio, Venezuela o Rusia. El ascenso de Chile como potencia económica dependería también de las exportaciones agrícolas comerciales de frutas y verduras a América del Norte y Asia oriental. Por ende, el aumento del comercio internacional significaría una dependencia creciente de la economía mundial para un gran número de regiones, industrias y trabajadores.

La economía mundial, incluso cuando se expandió agresivamente, también traería nuevos signos de desigualdades económicas, como entre las áreas rurales y urbanas de países como Colombia. Y varios serían los factores que empujaron a ciertas regiones, como América Latina, a una pobreza creciente, no necesariamente derivadas todas de la globalización. El rápido aumento de la población fue un problema en áreas específicas, ya que las tasas de crecimiento

económico comenzaron a desacelerarse en todo el mundo. Sin embargo, al menos fue tan importante el hecho de que los precios de muchas materias primas y alimentos (incluyendo el petróleo), cayeron más del 50% desde 1980, debido a que la oferta superaría la demanda. Por lo que, en términos generales, a principios del siglo XXI, el 20% de la población mundial controlaba el 86% del PIB global (Nester, 2010).

Luego de la crisis financiera mundial de 2007, el panorama de la globalización aparentaría ser más compleja. En efecto, los flujos internacionales de capital se han desplomado, el comercio se ha estancado y solo continúa constante el movimiento transfronterizo de personas. En consecuencia, algunos historiadores económicos presagian que estos sucesos marcan el comienzo de una nueva etapa, quizás una era de "desglobalización". Y ello podría llegar a ser posible, si se toma en consideración algunas lecciones del pasado, como la rápida globalización de fines del siglo XIX que terminaría desembocando en la desglobalización de principios del siglo XX (O'Rourke & Williamson, 1999).

Según James (2016), la reacción violenta contra el proceso de globalización puede explicarse por varios motivos históricos. La primera estaría relacionada con la reacción psicológica natural del ser humano ante lo desconocido. Por ejemplo, tanto Aristóteles como Tomás de Aquino, si bien reconocían la necesidad del intercambio de algunos productos con mercados lejanos, tenían una mayor consideración hacia la producción local ya que consideraban que los extranjeros podrían llegar a perturbar la vida cívica (Irwin, 1996). El filósofo romano Plinio el Viejo se quejaba del desangre económico que representaba para Roma, las costosas importaciones de lujos fútiles originarios de India, China y el Medio Oriente, mientras que Martín Lutero denunciaba los lujosos productos italianos que socavaban la producción alemana. Pero dichas consideraciones no solo se suscribían a los bienes importados, sino también a las personas. Por ejemplo, el Congreso estadounidense aprobaría en 1882 la Ley de Exclusión de chinos, que

prohibía la inmigración de trabajadores chinos y exigía que todas las personas chinas presentaran al llegar un certificado que declarara su profesión; de manera similar, la Ley 62 del 24 de abril de 1887, sancionada por el vicepresidente de Colombia Eliseo Payán, dictaba en su artículo 4º: "Prohíbase la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas Compañías, antes de la expedición de la presente ley".

El segundo motivo que podría llegar a explicar cierta animadversión temporaria hacia la globalización, es que esta colapsa durante las crisis financieras. La globalización amplifica la magnitud de las crisis financieras, como quedaría demostrado en 2007, ya que las finanzas constituirían, constituyen el más volátil de los vínculos internacionales. Además, las grandes crisis financieras como las de 1907, 1929 ó 2007 provocan nuevos nacionalismos y una animadversión contra todo lo extranjero, como lo evidencia la actual xenofobia en Europa y Estados Unidos. Un tercer motivo es que los colapsos financieros promueven el debate sobre el adecuado funcionamiento del sistema internacional y la dinámica del poder económico y financiero. Por ejemplo, en 1871 el sistema financiero giraba en torno al Reino Unido, pero luego de la crisis de 1907, nuevas potencias industriales como Alemania y los Estados Unidos entendieron la conveniencia de movilizar el poder financiero hacia otros lugares, como Nueva York. En la actualidad, el centro de gravedad financiero podría estar desplazándose paulatinamente a otro territorio, como por ejemplo, Shanghái; una característica relevante del acuerdo de 2014 sobre el gas entre China y Rusia, fue que las ventas no estarían expresadas en dólares, lo que satisfizo el deseo de China de incrementar el protagonismo del renminbi y la meta rusa de reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional.

Por último, "las conexiones mundiales se destruyen por las guerras que surgen de las tensiones resultantes de un panorama geopolítico alterado por la

globalización y también en respuesta a las vulnerabilidades y la interdependencia estratégica" (James, 1999, p.20). Si bien la interdependencia económica se propondría como una garantía para la preservación de las relaciones pacíficas entre los actores del Sistema Internacional, esa misma interdependencia económica pareciera emplear la amenaza de la perturbación sistémica como instrumento de la política de poder (Lambert, 2012). Según Rachman (2012), pareciera que para algunos países la lección fundamental de la crisis de 2008 es que el mundo es, por naturaleza, un lugar de conflicto y que las grandes potencias están haciendo un juego de suma cero en una lucha por la hegemonía.

3. La Globalizacion Desviada

La globalización, referida como el proceso de integración de los mercados y el acercamiento de las personas, en especial como el resultado de la liberalización de los intercambios, el desarrollo de los medios de transporte de personas y mercancías, y el impacto de la tecnología de información y de las comunicaciones a nivel mundial, pareciera ser un fenómeno significativo que ha venido borrando, paulatinamente, los límites físicos entre los Estados (Álvarez, 2017).

En efecto, esta dinámica ha permitido el crecimiento de los intercambios entre los países y las personas gracias al uso de medios cada vez más rápidos y tecnologías más sofisticadas. Sin embargo, tal dinámica parece haber beneficiado también a grupos criminales, que adaptándose a este proceso, han aprovechado nuevas oportunidades al explotar los espacios vacíos físicos, jurídicos o virtuales dejados sin vigilancia por parte de los Estados, que no han podido controlar todas las transformaciones inmediatas resultantes de la globalización. La transformación de la economía global que incentiva la práctica del libre comercio, ha dado paso a la apertura de las fronteras y límites tanto geográficos como jurídicos; y esta apertura económica a través de las fronteras, facilitaría

el actuar delictivo por la complejidad que conlleva para los Estados el ejercicio de controles efectivos; "tanto es así que en el mercado global dominado por corporaciones transnacionales del mundo industrializado, las organizaciones criminales o delictivas, figuran entre algunas de las transnacionales más exitosas - aunque menos aplaudidas - del mundo en desarrollo" (Andreas, 2005, p.67).

La facilidad con la que en la actualidad viajan personas y mercancías entre los países, dificulta cualquier intento regulatorio por parte de los Estados. El número de pasajeros aéreos ha crecido aproximadamente 5% anual durante los últimos 30 años, gracias a la introducción de aviones con mayor capacidad de transporte de pasajeros y carga, así como la desregulación de las aerolíneas y la disminución en los precios de los tiquetes. En 2016, las aerolíneas del mundo volaron alrededor de 35 millones de vuelos regulares, transportando a más de 4.000 millones de pasajeros a través de 3.750 aeropuertos en todo el mundo (IATA, 2017), siendo más fácil viajar a ciudades que anteriormente se consideraban remotas e inaccesibles; esta expansión de la aviación civil ha proporcionado la movilidad necesaria tanto para la actividad internacional lícita como ilícita. No obstante, en lo que se refiere a las mercancías, estos son transportados principalmente por mar. Más del 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima: mientras que en 1996 se transportaron 332 millones de toneladas de mercancías en todo el mundo, en 2016 esa cifra aumentó a 10 mil millones de toneladas (UNCTAD, 2016); y al igual que con el transporte aéreo, se ha vuelto económicamente factible mover bienes entre países anteriormente divididos por un espacio geográfico insuperable, aunque muy poca de esta carga puede ser efectivamente inspeccionada.

El crecimiento de las comunicaciones globales ha sido más acelerado. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el número total de suscripciones móviles-celulares aumentó de 2.20 billones en 2005 a 5.29

billones en 2010, 7.18 billones en 2015 y aproximadamente 7.74 billones en 2017; el número de suscripciones por cada 100 habitantes ha crecido de 33.9 en 2005 a 76.6 en 2010, 98.2 en 2015 y un estimado de 103.5 en 2017. El número total de suscripciones activas de banda ancha móvil aumentó de 268 millones en 2007 a 807 millones en 2010, 3.300 millones en 2015, hasta aproximadamente 4.220 millones en 2017 (ITU, 2017); y se espera que el tráfico de datos desde teléfonos inteligentes supere el tráfico informático convencional para 2020, mientras que el tráfico de dispositivos inalámbricos y móviles representará entonces dos tercios de todo el tráfico IP.

Por su parte, el número de suscripciones de banda ancha fija ha aumentado de 220 millones en 2005 a 526 millones en 2010, 842 millones en 2015, hasta un estimado de 979 millones en 2017 en todo el mundo. Los últimos datos de la ITU estiman que más de la mitad de los hogares del mundo (53,6%) tienen ahora acceso a Internet en el hogar, en comparación con menos del 20% en 2005 y poco más del 30% en 2010. Para 2017, se estima que el 84,4 por ciento de los hogares en los países desarrollados tendrán acceso a Internet, en comparación con el 42,9 por ciento en los países en desarrollo (ITU, 2017). Además, mientras que en 1991 Internet estaba compuesto por 1 página web, en 2017 existían más de 1.000 millones de sitios, visitados por aproximadamente 3.500 millones de usuarios, quienes envían alrededor de 21.900 millones de mensajes de texto cada día. Es imposible vigilar estos flujos de información, por lo que la delincuencia contaría con el respaldo de la tecnología de la información, que permite el surgimiento de nuevas formas de criminalidad, únicas en el mundo virtual.

Por ende, la globalización es en la actualidad un "arquitecto" influyente de la nueva agenda de seguridad internacional. Pero su impacto en la evolución de las relaciones entre los Estados es contradictorio: Por un lado,

la globalización contribuye al desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, el progreso científico y tecnológico, y la comunicación cada vez más intensa entre los Estados y los pueblos; sin embargo, los procesos de globalización, que principalmente se desarrollan de forma espontánea y sin una direccionalidad colectiva de la comunidad mundial, agravan una serie de viejos problemas de seguridad nacional e internacional, generando nuevos riesgos y desafíos a la propia seguridad de los Estados. En consecuencia, la velocidad con la cual se desarrolló este fenómeno global pareciera dificultar la creación de estrategias para acompañar y controlar las consecuencias no deseadas de la globalización, como por ejemplo, el incremento en el tráfico ilícito de armas o drogas.

En la actualidad, el Crimen Organizado Transnacional (COT) sería una dinámica que, potenciada por la globalización, conoce un crecimiento de sus actividades y de sus recursos, impactando no solo a la seguridad de los Estados, sino a su vez, la seguridad de los individuos; como lo menciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), "la delincuencia organizada se ha diversificado, se ha vuelto global y ha alcanzado proporciones macroeconómicas: los bienes ilícitos proceden de un continente, se trafican a través de otro y se comercializan en un tercero" (UNODC, 2010, p.82). En otras palabras, si bien la globalización ofrece cada vez más oportunidades para el desarrollo de los Estados en las esferas económica, social y política, una "globalización desviada" presenta una amenaza a ese mismo desarrollo.

De acuerdo a Gilman et al. (2013), la "globalización desviada" podría ser descrita como:

> Redes económicas ilegales transfronterizas que producen, mueven y consumen productos y servicios tan variados como narcóticos, fauna en vías de extinción, mercancías falsificadas, dinero sucio, residuos tóxicos, armas ilícitas, así como seres humanos

> indocumentados en busca de oportunidades laborales y actividades sexuales poco ortodoxas. Esta amplia y próspera gama de servicios e industrias ilícitas se llevan a cabo en las sombras de la economía global formal y lícita, y su rápido crecimiento está desafiando las nociones tradicionales de riqueza, desarrollo y poder. (p.3)

En suma, la globalización desviada podría llegar a describir la forma en que los grupos terroristas, insurgentes y criminales, utilizarían la infraestructura técnica de la globalización para explotar los puntos ciegos de las diferencias en la regulación y la aplicación de la ley de mercados de bienes y servicios ilícitos. Gilman et al (2011) describen el fenómeno de la "globalización desviada" como un concepto económico, jurídico y moral, el cual no se puede reducir solamente a actividades económicas que violan la ley, argumentando que es ante todo un fenómeno que no puede ser separado del proceso más amplio de la globalización. Es decir, la globalización desviada sería el fenómeno de las redes económicas transfronterizas que operan en la intersección de la diferencia ética y la ineficiencia regulatoria.

Por ende, al ser un fenómeno económico, el factor más crítico de entender acerca de la globalización desviada es que estaría inseparablemente vinculada y ligada a la corriente principal de la globalización, por lo que no se podría tener uno sin el otro, ya que ambas son actividades impulsadas por el mercado; ambas estarían activadas por los mismos sistemas financieros, de comunicación y de transporte integrados a nivel mundial; ambas buscarían trascender las fronteras políticas, económicas, culturales, sociales, y ambientales en un proceso dinámico de "creación destructiva"; y ambas estarían presentes en prácticamente todas las plataformas del proceso de globalización (Gilman et. al, 2013).

En resumen, la globalización desviada reflejaría el "lado oscuro" de la globalización, incluyendo la proliferación del comercio ilícito posibilitado

por los mismos avances tecnológicos y una mayor movilidad global que ha proporcionado la prosperidad de la globalización licita. De acuerdo a Hillison Ɛ Isaacson (2016), este comercio no se limitaría a actividades ilegales, como la trata de personas, las drogas y el tráfico de armas, sino que se aplicaría en general a un espectro de actividades cuasi-legales que generan externalidades negativas, incluyendo el lavado de dinero y la explotación de los recursos naturales. Este comercio atraviesa y a menudo amenaza los bienes comunes globales, al alterar la gobernanza legítima y la actividad del mercado. Estos bienes, servicios e ideas fluyen a través de todos los dominios, incluidos la tierra y el ciberespacio, y los mercados legales e ilícitos.

> Los flujos desviados se mueven a través de las ciudades -en un archipiélago de facto que va de las ciudades metropolitanas internas de los Estados Unidos a las favelas de Río de Janeiro, de los banlieues de París al cinturón urbano casi continuo que cierra el Golfo de Guinea, desde Abidjan hasta Lagos. Se mueven por ciudades y pueblos a lo largo de la ruta de suministro de cocaína que une las montañas de Colombia con São Paulo y las vías fluviales de África Occidental hasta las narices en los Países Bajos. Y se mueven a través de los "nodos globales" que conforman la infraestructura financiera del mundo, desde Wall Street a Londres, hasta el distrito de Nihombashi de Tokio. En suma, es posible encontrar manifestaciones de Globalización Desviada en casi todas las ciudades, cada hogar, cada carril marítimo y puerto, así como casi todas las direcciones IP conectadas a la economía global" (Gilman et al., 2011, pág. 11).

La globalización desviada estaría impulsada principalmente por la codicia, el poder y la ideología que beneficiaría a una élite selecta, lícita o ilícita, que con la capacidad de corromper al sistema político, crearía influencias

desestabilizadoras para garantizar su propia supervivencia y promover sus propios intereses. Aunque los mercados ilícitos se benefician claramente del éxito de la globalización desviada, estos productos también pueden servir para satisfacer la demanda global dentro del espacio de mercado "convencional", mediante el aumento de la competencia con bienes y servicios legítimos. Por ende, la globalización desviada explicaría en parte el auge y la expansión del crimen transnacional organizado (Serrano, 2005), que ha desarrollado y planteado sofisticados mecanismos para la evasión de las normas Estatales y "han entretejido redes de tráfico de personas, estupefacientes, mercancías, entre otros, que les dan poder económico y político; a todo esto se le adiciona la corrupción como un factor determinante, que a su vez es un rasgo característico del crimen transnacional como actor de la globalización desviada, un rasgo en el que las fronteras que separan lo legal y lo ilícito, lo público y lo privado, se hacen mucho más confusas" (Serrano & Toro, 2005, pág. 272).

Según la UNDOC, el crimen organizado se manifiesta bajo variadas formas y actividades, desde los tipos tradicionales de organizaciones criminales hasta las redes criminales transnacionales, que tienen una estructura elástica y la capacidad de movilizarse rápidamente, transformarse y ser controladas desde varios lugares. La Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional, define por "grupo delictivo organizado", a un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (UNODC, 2010).

Por otra parte, el Artículo 3º de la Convención caracteriza un crimen transnacional si: primero, se comete en más de un Estado; segundo, se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación,

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; tercero, se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; y/o cuarto, se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado (UNDOC, 2010).

Estos grupos delincuenciales se desarrollan generalmente en áreas descuidadas por el Estado, como los espacios vacíos rurales o urbanos (comunas, favelas, cinturones de miseria), en comunidades que a menudo sufren de una falta de oportunidades, a las cuales responden creando sus propias fuentes de trabajo y de seguridad. Sin regulación, tales actividades pueden convertirse en usura, extorsión laboral y mercado de protección; del mismo modo, cuando el Estado prohíbe bienes y servicios por los cuales existe, sin embargo, una fuerte demanda (por ejemplo, drogas, juegos y prostitución), autoridades autoproclamadas pueden llegar a asumir un papel de regulación y tasación. De esta manera, tales grupos ilegales llegan a proporcionar una amplia gama de productos y servicios a la comunidad marginalizada, aparentando ser benefactoras de la sociedad, cuando al final solo buscarían enriquecerse mediante actividades delictivas, con el único objetivo de servir a sus propios intereses.

Las organizaciones del crimen organizado siempre se han beneficiado del tráfico transnacional, traficando por su cuenta o cobrando impuestos sobre el contrabando en áreas bajo su control. Sin embargo, ciertos cambios sociales volvieron las condiciones menos favorables para estos grupos (por ejemplo el mejor acceso al crédito, la disminución de la influencia de los sindicatos laborales, las políticas a favor de la integración de los inmigrantes, etc.). En consecuencia, una mayor regulación nacional ha conducido a que tales grupos busquen oportunidades al nivel transnacional, aprovechando la falta de control. Por su naturaleza transnacional, clandestina e híbrida, el crimen organizado representaría un desafío para las autoridades que tienen el objetivo de combatirlo,

ya que en primer lugar, los crímenes cometidos por tales organizaciones no son usualmente reportados a las autoridades; por otra parte, estas organizaciones criminales suelen tener los recursos necesarios para corromper a los funcionarios públicos, ya que las actividades del crimen organizado transnacional necesitan operar de manera suficiente visible para atraer clientes y consumidores, lo que supone un cierto grado, tolerancia por parte de algunas autoridades.

Generalmente se encuentran dos tipos de grupos en el crimen organizado transnacional: los grupos altamente estructurados y las redes criminales que tienen una estructura más flexible. Sin embargo, la tendencia reciente demostraría que las primeras estructuras tienden a ser reemplazadas por las segundas, en donde la globalización desviada tendría una responsabilidad considerable sobre esta evolución, desde las estructuras tradicionales de tipo piramidal, hacia la conformación de redes criminales. En otras palabras, si bien la estructura rígida y enfocada en el mantenimiento de la autoridad al nivel local de las organizaciones jerárquicas fue un factor decisivo en cuanto a su capacidad de aprovechar las oportunidades emergentes a nivel global, la aparición de las redes criminales sería una respuesta a la presión de las autoridades, representando la nueva generación del crimen organizado.

En efecto, la cooperación internacional en la persecución de los delitos transnacionales y la resolución de diversos Estados en llevar a la justicia a distintos actores al margen de la ley, ha obligado a las organizaciones criminales y terroristas a descentralizar sus estructuras organizativas; por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico en Colombia durante la década de 1990, causaría que los principales cárteles de la droga que operaban en el país se dividieran en unidades más pequeñas. En consecuencia, la nueva estructura de horizontalidad de estos grupos ha venido creando nuevas y peligrosas oportunidades para la colaboración entre criminales y terroristas. De acuerdo a Dishman (2005),

> Las acciones de subordinados criminales u operarios terroristas ya no están tan restringidas, debido a que las redes criminales o terroristas ya no pueden microadministrar a sus empleados. Los delincuentes y terroristas de nivel medio e inferior están aprovechando su independencia para formar vínculos sinérgicos entre los dos grupos. Algunos grupos militantes políticos también han introducido sistemas de incentivos financieros para reclutar y retener a los militantes. Debido a que los miembros se juntan para ganar dinero, rápidamente relegarían los objetivos ideológicos a un lado, si ello llegase a afectar las ganancias (p.237).

A principios del siglo XX, el principal sector de la economía era la industria. En aras de obtener una mayor productividad se introduciría una estructura empresarial basada en las jerarquías, permitiendo mejorar la eficiencia de las empresas industriales en la producción y distribución en masa de bienes y servicios. Además, con la implementación del modelo de gestión tayloriano[43], se mantenía un estricto control de las operaciones, proporcionando roles diferenciales y tareas especializadas para cada operario y trabajador. Según Ashkens et al. (2002), en una jerarquía existían límites entre los gerentes y los departamentos al interior de una compañía dividían cada función o especialización de la organización. La información se compartimentaba dentro de los niveles superiores de la organización, mientras los trabajadores realizaban tareas o funciones especializadas.

No obstante, con la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la década de 1970, devendría un conjunto diferente

43. El taylorismo podría ser definido como la aceleración de los ciclos operacionales, en los diversos puestos de trabajo, y el decremento de tiempos muertos, y con ello lograr una jornada de trabajo eficiente, mediante principios generales de organización del trabajo, disminución de autonomía de los colaboradores y supervisión permanente en la ejecución de las tareas asignadas.

de factores para el éxito corporativo, poniendo en cuestionamiento la rígida organización jerárquica de la primera mitad del siglo XX. Los rendimientos se desplomaron cuando las corporaciones jerárquicas no pudieron ajustarse a las demandas de la era de la información y algunas compañías se dieron cuenta de que la jerarquía estaba impidiendo su éxito, obligando a un cambio estructural para la adaptación a un nuevo entorno de los negocios, caracterizado por el auge del sector terciario, o el de servicios, que exigía un modelo de gestión distinto al tayloriano.

A partir de entonces, la velocidad, la flexibilidad, la integración y la innovación se convertirían entonces en los ingredientes para el éxito en un ambiente cada vez más competitivo y globalizado. Bajo una estructura descentralizada, los trabajadores aprenderían nuevas capacidades y asumirían nuevas responsabilidades; asimismo, la información ya no estaba compartimentada y los altos directivos compartían las metas y los objetivos de la empresa con los empleados. En este orden de ideas, la era de la información no solo tendría graves implicaciones en el sector empresarial, sino también para el terrorismo, la insurgencia y el crimen organizado. En los últimos 30 años, las organizaciones criminales y terroristas se han sometido a sus propios procesos de modernización, flexibilización, integración e innovación, transformando sus propias estructuras jerárquicas en redes. Por ejemplo, grupos como Al Qaeda ampliarían el tamaño y la importancia de las redes ya integradas en sus organizaciones jerárquicas tradicionales, mientras que otros evolucionaron de un grupo en red a un diseño horizontal más complejo (Dishman, 2005).

A diferencia de la comunidad empresarial, en las que las bajas ganancias impulsarían un cambio del paradigma organizacional y de gestión, sería la aplicación de la ley y de la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados, la que motivaría a los grupos al margen de la ley a encontrar

nuevas formas de resiliencia, evitando el colapso de las organizaciones delincuenciales si el líder principal o los demás miembros directivos fuesen arrestados o asesinados. En este contexto, Arquilla & Ronfeldt (2001) han descrito a las redes como la estructura preferida de las organizaciones delictivas en el presente. Estas contienen nodos dispersos, ya sean células o individuos, conectados por Internet mediante creencias, ideología, doctrina y objetivos similares. Ya no existe un comando central, sede central o líder único, debido a que las células se comunican horizontalmente y dependen ampliamente de la tecnología para facilitar la comunicación pesada necesaria para que las redes lleven a cabo sus operaciones. Además, los participantes en una red pueden abarcar desde personas extremadamente comprometidas hasta individuos que solo participan por períodos cortos.

En consecuencia, grupos insurgentes autodenominados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aprendieron rápidamente la resiliencia que proporcionaba la estructura en red, viéndose obligados a cambiar radicalmente su estructura organizativa para resistir las sofocantes operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Militares de Colombia. Asimismo, desde el 11 de septiembre de 2001, la presión contra organizaciones terroristas internacionales como Al Qaeda también obligaría a esos grupos a depender más de las redes para organizarse, prepararse y llevar a cabo ataques terroristas. Por ende, la transformación de organizaciones terroristas, insurgentes y criminales de estructuras jerárquicas a estructuras en red, tendría graves implicaciones para la Seguridad y Defensa de los Estados en la actualidad, ya que el COT, grupos terroristas e insurgentes ahora tienen pocas reservas sobre cómo cooperar entre sí. Muchos crearán alianzas estratégicas a largo plazo para aprovechar la experiencia de cada uno, haciendo que sus grupos sean más peligrosos y elusivos al accionar de los Estados.

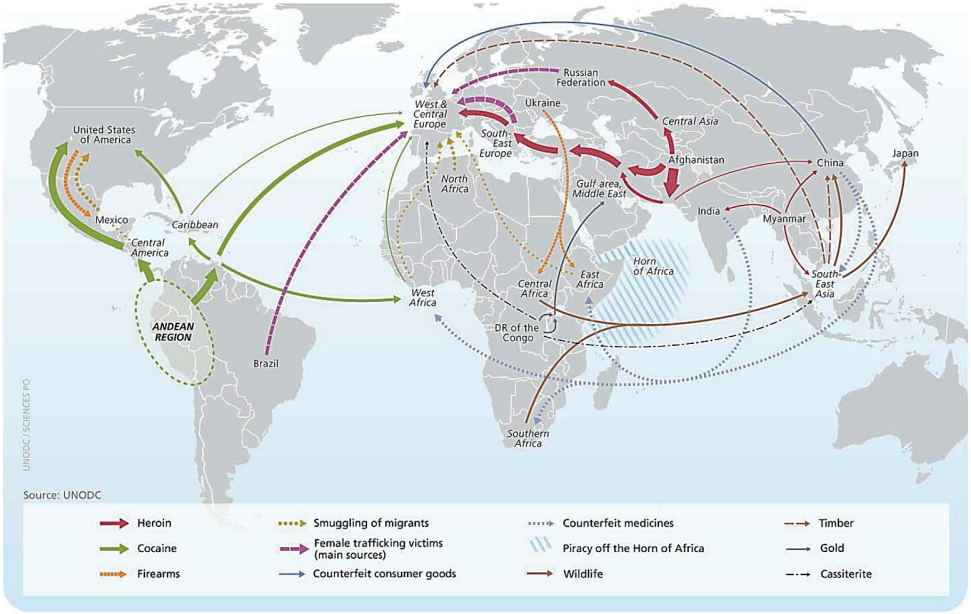
Pero más allá de las dinámicas y nuevas caracterizaciones del COT, la Globalización Desviada habría alterado el panorama político y la distribución del poder en la economía mundial, en formas casi tan profundas como cualquier tendencia o evento político-económico de relevancia desde el colapso de la Unión Soviética. Es importante señalar que hasta hace poco, la comunidad internacional no había apreciado el impacto que la globalización desviada ha tenido en la política internacional y la economía global. Empero, la globalización desviada estaría inexorablemente conectada a estos importantes problemas mundiales, y también necesita ser destacada y discutida, ya que tiene un impacto directo en el medio ambiente, la seguridad y defensa, y por supuesto, la economía, con utilidades que superan incluso las generadas por el comercio legal globalizado. De acuerdo al Consejo de Seguridad de la ONU (2012) "se estima que el volumen de negocio generado por la delincuencia organizada transnacional asciende a 870.000 millones de dólares al año, de los cuales los mayores ingresos provienen de las drogas ilícitas, que representan la mitad de sus ingresos" (UN Consejo de Seguridad, 2012, p.1).

De igual manera se contemplan en orden descendente los siguientes problemas derivados del crimen transnacional organizado de acuerdo a los flujos de dineros producido (Mapa No. 1): cocaína a Norteamérica y Europa, heroína a Europa y Rusia, falsificación mercancías a Europa, migración ilegal desde América Latina, madera ilícita del sudeste asiático, medicamentos falsificados, tráfico de personas hacia Europa, el robo de identidad, la pornografía infantil, el contrabando migratorio desde África, la piratería marítima, marfil y cuerno de rinoceronte a Asia, armas de fuego de Europa del Este, México y Colombia (UNODC, 2010).

De tal manera, las redes de crimen transnacional se han convertido en nuevas amenazas para la seguridad de los Estados. Estas alianzas son las que

finalmente configuran el fenómeno de la Convergencia, que mediante nodos comunes logran materializar, expandir sus acciones y transferir las ganancias ilícitas producto de su comercio desviado. Es así como investigaciones realizadas sobre este fenómeno han dado cuenta, por ejemplo, de los estrechos vínculos entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (partidos gobernantes de El Salvador y Nicaragua respectivamente), las FARC y el Régimen Venezolano, para el movimiento de cientos de millones de dólares de manera no rastreable a través de compañías petroleras estatales interconectadas (Rabasa et al, 2017, pág. v).

Mapa 1. Principales Flujos del COT



Fuente: UNODC, 2010.

Cabe anotar que estas organizaciones han logrado adaptarse camaleónicamente a través del tiempo y de las condiciones normativas, lo que les ha permitido converger con otros grupos al margen de la ley, formando

un entretejido sustentable a pesar de los esfuerzos que puedan desarrollar los Estados para controlarlos. Y esta labor no sería nada fácil en un entorno en el que el efecto de la globalización en el mundo mueve una gran cantidad de comercio; "aproximadamente el 90% del comercio mundial se lleva a cabo a través de contenedores marítimos, de los cuales más de 500 millones se entregan anualmente en la cadena de suministro del comercio, y de esta cantidad, menos del 2% son inspeccionados" (UNODC, 2017).

De esta manera, al igual que la globalización legal en el mundo, la Globalización Desviada se daría a través de la interconexión de redes, entendidas como una serie de nodos interconectados que se verían representados en individuos, organizaciones, empresas, computadores, e incluso, Estados nacionales (Williams, 2001). Estas redes son complejas por su naturaleza; pueden ser creadas y dirigidas por un núcleo de organizaciones o emerger espontáneamente; pueden variar desde asociaciones pequeñas locales hasta redes especializadas en un solo producto o en una variedad de productos ilegales y actividades criminales.

4. Globalización Desviada y el Fenómeno de Convergencia

Al facilitar el crecimiento de actores violentos no estatales, el fortalecimiento del crimen organizado, la aparición de un nuevo conjunto de cadenas de suministro transcontinentales, así como la expansión de los mercados ilícitos existentes, la globalización desviada ha generado una dinámica convergente de intereses ilícitos y criminales entre distintos grupos al margen de la ley. La creciente convergencia en las actividades ilícitas de estos grupos, les ha dado mayor capacidad para evadir las contramedidas oficiales y superar los desafíos logísticos, así como mejores herramientas para explotar las debilidades y oportunidades dentro del propio mercado legítimo de los Estados.

Dada su complejidad, la Convergencia de las organizaciones criminales para formar redes ilícitas es una amenaza no sólo para la estabilidad política y económica en los distintos Estados, sino también para la estabilidad en todo el mundo (Deville, 2013).

> Estas corrientes ilícitas plantean un desafío único que está estrechamente ligado a otros fenómenos, incluidos la violencia de los cárteles de traficantes de drogas; la corrupción; la fragilidad del estado de derecho; las consecuencias negativas sobre la salud y el desarrollo; la Convergencia entre insurgentes y grupos delictivos; la prolongación de los conflictos; las formas modernas de esclavitud y explotación; el deterioro de la gobernanza; y el efecto distorsionador del blanqueo de dinero sobre las economías lícitas (UN Consejo de Seguridad, 2012, pág. 2).

Al intentar definir la Convergencia, la RAE nos indica que converger es la tendencia a unirse en un punto (RAE, 2017); de esta manera y para el contexto de este análisis, el fenómeno de Convergencia se podría explicar cómo la tendencia que tienen las redes del crimen transnacional para encontrarse en puntos comunes o nodos; y es a través del entretejido de estos nodos que se facilita su accionar delictivo, infiltrando todas las esferas, desde lo económico, lo social y lo político, de tal manera que se potencian y se hace aún más compleja la intervención del Estado.

Ya que los actores ilícitos han extendido sus actividades a lo largo de los dominios comunes de tierra, mar, aire y ciberespacio, los Estados están llamados a diseñar estrategias y políticas multidimensionales para combatir las complejas amenazas transnacionales que plantean estas redes ilícitas. Combatir estos grupos de forma separada y desarticulada, a partir de distintas estrategias

y medios, podría no llegar a ser la mejor solución ante los retos que plantea combatir grupos convergentes establecidos en redes criminales constituidos por la asociación estratégica entre crimen organizado transnacional, grupos terroristas y movimientos insurgentes.

En efecto, la guerra contra el terrorismo ha puesto en evidencia la ineficacia de las medidas convencionales de la guerra contra insurgencias estructuradas en redes, tales como las que están siguiendo el modelo de Al Qaeda o el Estado Islámico. Estos tratan de colaborar con la delincuencia organizada transnacional, con el objetivo de financiar actos terroristas, y adquirir armas y otros suministros vitales para sus operaciones. Por otro lado, muchas organizaciones criminales transnacionales han adoptado actos terroristas como un elemento central en sus planes estratégicos de comunicación y una forma de intimidar a sus enemigos, como ocurriría en Colombia con el Cartel de Medellín en la década de los noventa. En casos como el de las FARC o el ELN, vemos la convergencia de la delincuencia, el terrorismo y la insurgencia en un potente conjunto de capacidades que es particularmente complejo.

Pero el fenómeno de Convergencia sería un dilema de seguridad que se plantearía particularmente en países que poseen dos características (Radden, 2013):

La primera característica sería la ubicación geoestratégica. Tal es el caso de Colombia, la cual situada en el cruce de Norte y Sur América, se ha convertido en un conducto vital del comercio mundial, lícito e ilícito desde hace décadas. Ya sea que el cargamento sean narcóticos, personas, armas o dinero, algunos países pueden funcionar como un hub comercial ilícito o incluso como una base de operaciones transitoria.

> El crimen organizado puede ser aún más importante cuando los rebeldes obtienen el control exclusivo de una parte de un país. Los pseudo-Estados así creados no tienen responsabilidad internacional y, particularmente cuando están estratégicamente ubicados, a menudo se convierten en centros de tráfico y centros minoristas para todo tipo de bienes y servicios ilícitos. También siguen representando una amenaza para la seguridad nacional e internacional, proporcionando un refugio seguro para los fugitivos internacionales, incluidos los terroristas (UNODC, 2010, p.221).

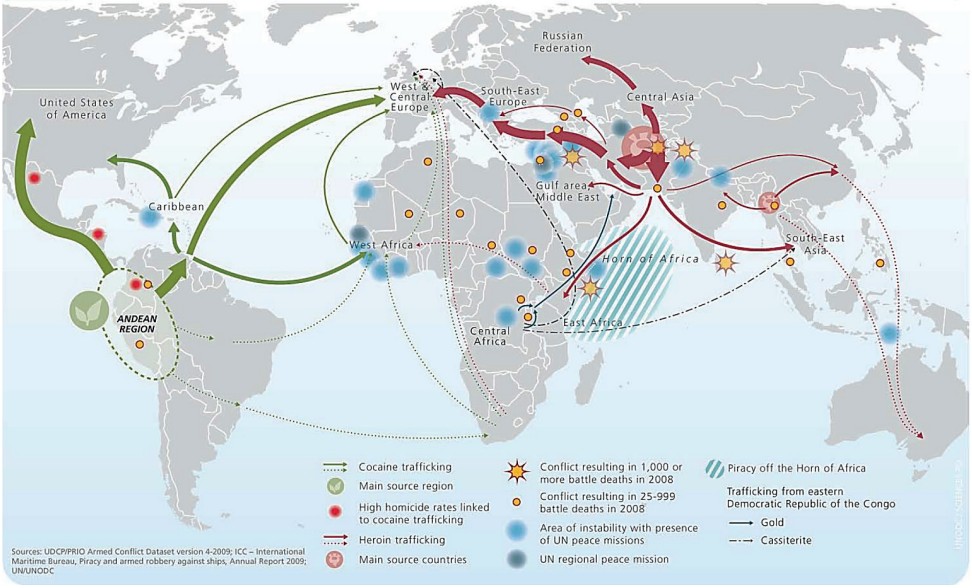
Las redes criminales transnacionales son móviles, y al igual que las multinacionales legítimas, migran sus operaciones a lugares que estimen sean atractivos, desde el punto de vista jurídico o geográfico. La existencia de lugares que son especialmente susceptibles a la delincuencia organizada transnacional, como es el caso de Colombia (Mapa No. 2), son referidos en la terminología de la geopolítica como "Estados portales", o incluso "agujeros negros geopolíticos" (Cohen, 2009). Los Estados portales desempeñan un papel geoestratégico sumamente importante al unir diferentes partes del mundo, facilitando el intercambio de personas, bienes e ideas, y jugando roles económicos y sociales positivos. Pero en algunos casos, a causa de la globalización desviada, pueden llegar a ser más problemáticos.

> Si el crimen organizado se "entiende mejor como la continuación del comercio por otros medios", y grupos criminales transnacionales son "las contrapartes ilícitas de las empresas multinacionales", entonces es lógico pensar que al igual que sus legítimos parientes, los empresarios del bajo mundo podrían llegar a depender, en

> sus actividades a nivel mundial, con ciertos centros logísticos especialmente convenientes (Radden, 2013, p.98).

Pero las zonas de conflicto no serían los únicos lugares donde el COT podría llegar a representar una amenaza para los Estados. De acuerdo a la UNODC (2010), el COT se ha vuelto tan poderoso en ciertos lugares del mundo, que en lugar de tratar de evadir a los gobiernos, comienzan a enfrentarlos directamente, a través de la corrupción, la intimidación y el asesinato de funcionarios públicos, generadores de opinión y otros actores relevantes.

Mapa 2. COT e Inestabilidad



Fuente: UNODC, 2010.

La segunda característica de la aparición de la dinámica de convergencia entre terrorismo, insurgencia y crimen organizado transnacional en algunos países, es el problema de los territorios sin gobierno efectivo dentro de estos Estados, a los cuales se les puede denominar "espacios vacíos", es decir, áreas geográficas en las que un Estado se enfrenta a retos importantes en

el establecimiento de la autoridad y el control efectivo del territorio y las dinámicas económicas, sociales y políticas que en ella se susciten. Si bien estos espacios vacíos son territorios no gobernados por el Estado, no significa que dichos territorios estén necesariamente desprovistos de gobierno. Por el contrario, las estructuras de autoridad que existen en los espacios vacíos no están necesariamente relacionados con las instituciones formales del Estado, sino con aquellas instituciones ilegales comandadas por grupos terroristas, insurgentes o delincuenciales, que subvierten la legitimidad del Estado a favor propio y amenazan la Seguridad Nacional desde el interior de las propias fronteras.

Según Oehme III (2008), existiría una sólida correlación entre los Estados atrapados en lo que podría caracterizarse como la "zona intersticial"[44] (donde el entorno de seguridad es crítico y el resultado potencial no ha llegado a un punto de inflexión), y la convergencia de criminales, insurgentes y terroristas. En esta zona, las débiles o disfuncionales instituciones gubernamentales y civiles, son particularmente vulnerables a redes complejas de delincuencia organizada, donde las condiciones son lo suficientemente estables y predecibles para llevar a cabo operaciones de crimen organizado, como lavado de dinero, extorsión, soborno, contrabando y actividades perniciosas relacionadas. Bajo estas condiciones, también hay una amenaza inminente de otros actores al margen de la ley (extremistas e insurgentes), que podrían obtener algún nivel de cooperación de grupos delictivos organizados; de acuerdo a Makarenko (2002), aquí es donde la convergencia alcanza su punto máximo y se desarrollan alianzas de conveniencia.

La amorfa y cambiante relación entre redes criminales, insurgentes y terroristas en Colombia ha sido bastante ilustrativa en este aspecto. Por

44. Esta zona se puede diferenciar conceptualmente de un Estado-nación que estaría avanzando por un período de transición, donde el gobierno ha cruzado un "punto de inflexión" y es probable que se vuelva más estable y funcional a lo largo del tiempo. Por el contrario, si un país está atrapado en una zona intersticial, esencialmente al borde del caos o la inestabilidad, sigue siendo más susceptible a la explotación por parte de actores al margen de la ley.

ejemplo, en los inicios de las FARC en la década de 1960, esta era una genuina organización insurgente de carácter campesino, que por su propia naturaleza, no disponía de fondos financieros importantes para el desarrollo de una guerra revolucionaria, ya que el apoyo provenía inicialmente de la población pobre de aquellas regiones donde las FARC tenían influencia.

En este sentido, los precarios recursos financieros recaudados eran insuficientes para el logro de los objetivos estratégicos de la organización. En consecuencia, y de acuerdo a Ospina (2016):

> Las FARC a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, siguieron constituyéndose como una organización pequeña con recursos limitados, y objetivos locales y rurales limitados. Pero finalmente, los líderes de las FARC se dieron cuenta de que nunca lograrían su objetivo de tomar el poder mediante una guerra prolongada y, además, ese objetivo no era lo que su "mentor", el [Partido Comunista Colombiano] PCC, quería. Por lo tanto, decidieron que las FARC debían luchar su propia guerra por sus propios medios, independientemente de cualquier apoyo externo. Esto marcó el final de la fase puramente "insurgente", cuando las FARC dependían por completo de la población rural en sus áreas de operación para sustento y seguridad (p.155).

Con este distanciamiento del PCC y la pérdida de esa fuente de apoyo financiero, la sostenibilidad se convirtió en un problema apremiante, conduciendo a las FARC en la consecución de nuevos métodos de financiación basados en actividades criminales, como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, con la irrupción del narcotráfico en Colombia a fines de la década de 1970, se desencadenaría una nueva etapa en esa organización insurgente. Si bien en un principio se prohibiría la participación del grupo guerrillero en

cualquiera de los eslabones del narcotráfico por parte del Secretariado de las FARC, "un jefe de columna subordinado, Argemiro, comenzó a extorsionar a traficantes de drogas dentro de su área de operaciones. Cobrando por la cantidad de kilos producidos en los laboratorios, el número de hectáreas cultivadas, el número de trabajadores y de otras maneras" (Ospina, 2016, p.155).

Desde aquel momento, la idea de participar del narcotráfico para financiar operaciones comenzaría a ser parte integral del accionar del grupo insurgente. Como lo señala Ospina (2016), "la lógica era que si las FARC podían imponer impuestos a todos los aspectos del ciclo de la cocaína, con tolerancia cero para el uso individual o el enriquecimiento dentro del movimiento mismo, podría garantizar una fuente sostenible de apoyo financiero y al mismo tiempo mejorar sus capacidades de combate". Los ingentes ingresos provenientes del narcotráfico permitirían a las FARC transitar a una fase de guerra de movimientos, gracias a una mejor capacidad militar que le proveía una financiación sostenible y altamente lucrativa. A partir de entonces, las FARC como organización narco-terrorista, se constituirían en un claro ejemplo del fenómeno de Convergencia que utiliza la plataforma de la Globalización Desviada para el cumplimiento de sus intereses estratégicos.

Ambas organizaciones, narcotráfico y organizaciones terroristas, son criminales a los ojos del derecho internacional, independientemente de si sus actividades están motivadas por la política o la economía. Además, debido al carácter criminal de sus actividades, este tipo de organizaciones generalmente se ven obligadas a operar en la parte más tenebrosa de la sociedad, entrando en contacto o compartiendo un territorio común, aumentando las posibilidades de interacción por pura coexistencia (Björnehed, 2004). Asimismo, las estructuras de grupos narcotraficantes y las organizaciones terroristas e insurgentes son similares, ya que muchas de las organizaciones se han internacionalizado durante

las últimas décadas, operando en un ámbito transnacional. Tanto el COT como las organizaciones terroristas e insurgentes se caracterizan, en general, por una estructura vertical en los niveles superiores de la organización, mientras utilizan una estructura más horizontal en los niveles medios y la base de la organización.

En el caso de las FARC, "dada su condición político-militar compleja, tiene una mezcla activa de elementos de una estructura jerarquizada y horizontal" (Torrijos & Otálora, 2013, p.98), ya que si bien existe un Secretariado del Estado Mayor Central con base en el cual se establecen relaciones de subordinación, la membresía de la organización es homogénea y de supuesta igualdad entre sus miembros, permitiendo cierta flexibilidad y autonomía. Por lo tanto Torrijos (2012) expone que organizaciones complejas como las FARC podrían llegar a considerarse como "redes jerarquizadas". Ha sido evidente, en este sentido, que las FARC han obtenido mayores capacidades de poder de la globalización desviada para desafiar la autoridad del Estado colombiano y eventualmente reemplazarlo.

Finalmente, desde finales de la década de 1990, los grupos terroristas, insurgentes y criminales han estado activos en varias plataformas que provee la Globalización Desviada, incluidas las virtuales. Dichas organizaciones mantienen miles de sitios *web* y plataformas de redes sociales, explotando la naturaleza no regulada, anónima y de fácil acceso de Internet para transmitir una serie de mensajes a una variedad de públicos específicos, desde la guerra psicológica y la propaganda, a usos altamente instrumentales como la recaudación de fondos, el reclutamiento y la coordinación de acciones. Sin embargo, estos grupos al margen de la ley descubrirían que la *surface web* era demasiado riesgosa para el mantenimiento del anonimato, ya que podían ser monitoreados, rastreados y eventualmente ubicados. En consecuencia, se necesitaría de una red oculta y anónima que estuviese fácilmente disponible,

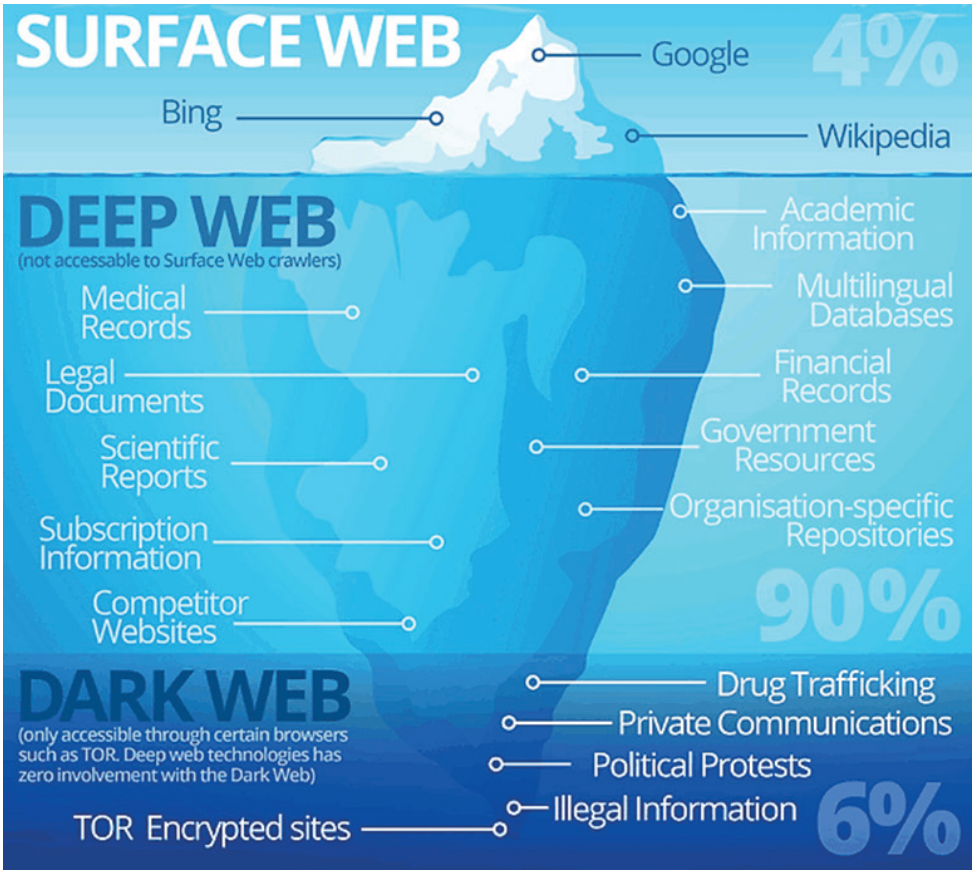
pero generalmente inaccesible e invisible al monitoreo de las agencias de seguridad de los Estados. Es en este contexto en el que surgiría la *dark web*.

5. La Globalización Desviada Virtualizada: *Dark Web y Darknet*

La *Dark Web* es altamente beneficiosa para los grupos al margen de la ley. Aunque Internet ha estado disponible para el público desde la década de 1990, la *Dark Web* solo ha surgido en los últimos años. La naturaleza reservada de esta parte de la *Web* combinada con la falta de una metodología útil diseñada para la recopilación y análisis de datos de *Dark Web*, ha limitado la capacidad de estudiar y combatir el fenómeno de Convergencia y la Globalización Desviada.

Para entender qué es la *Dark Web* es necesario entender cuatro conceptos diferentes: *Clearnet (Surface Web), Deep Web, Dark Web y Darknet. Clearnet* es el internet tal y como se conoce usualmente. Son las páginas que se encuentran en Google y otros buscadores y a las que se puede acceder directamente desde ellos. Sin embargo, el 90% del contenido de la red no es accesible a través de buscadores. Puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un *paywall*, pero también archivos guardados en Dropbox, correos guardados en los servidores de los proveedores, y todas esas páginas que se crean durante unos instantes. Es una *web* única configurada con los datos que se han introducido, y a la cual no se puede acceder de forma directa. Si la *Deep Web* es el 90% de Internet, la *Dark Web* ocuparía únicamente el 6% de ella (Gráfico No. 1). Es una porción de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y que son accesibles sólo con un navegador *web* especial. Eso es una parte de la *Deep Web*, que engloba toda la información que no se puede acceder públicamente.

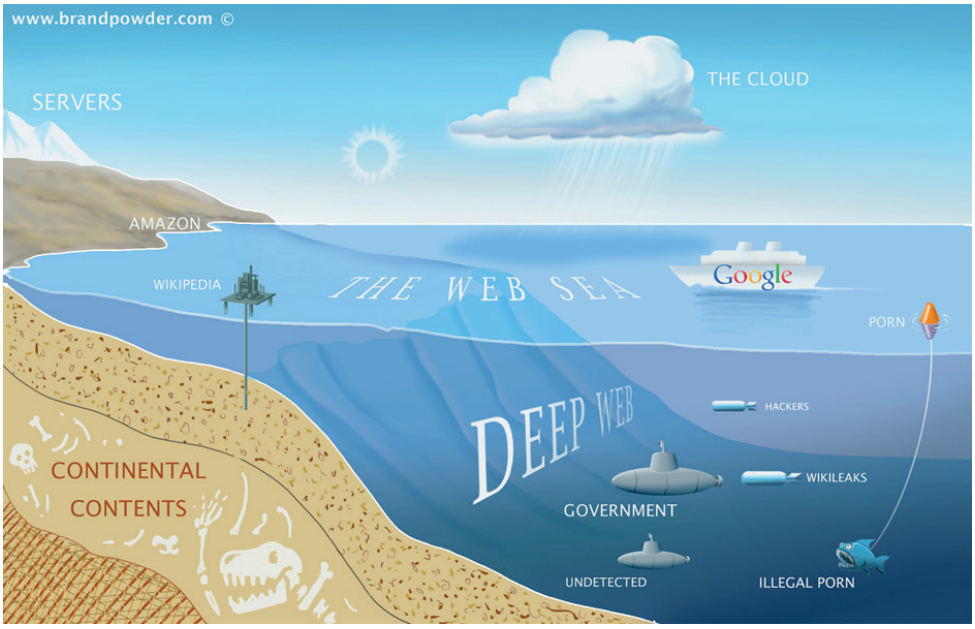
Gráfico 1. *Surface, Deep y Dark Web*



Fuente: Google

La *Dark Web* por lo tanto forma parte de la *Deep Web* (Gráfico No. 2), pero son cosas diferentes. Por ejemplo, si la *Deep Web* fuera una ciudad, la *Dark Web* serían varios barrios, es decir, forman parte de la ciudad, pero no son la ciudad. La *Dark Web* es el contenido que se puede encontrar en diferentes *Darknets*, que son cada una de las redes a las que sólo se puede acceder con programas específicos; entre los *Darknet*, la más popular ha sido TOR, pero también están Freenet, I2P o ZeroNet.

Gráfico 2. Mapa del Ciberespacio



Fuente: www.brandpowder.com

Respecto a su funcionalidad, lo que permite TOR es proteger la identidad del usuario, y que no se pueda rastrear su procedencia. La *Dark Web* es un espacio oculto e impenetrable de internet, que genera controversia. Si bien nació con el objetivo de dar protección a los disidentes en regímenes opresivos, también se convirtió en un refugio de criminales; allí se esconderían pedófilos, redes de tráfico y venta de drogas, trata de personas, entre otras actividades ilegales, hasta el punto que se estima que más del 40% del contenido de la *Dark Web* es ilegal (Bartlett, 2014). Como sucede con el resto de internet, crear leyes para regular el uso de esta red resulta difícil, ya que los países son soberanos y unificar las diversas legislaciones resultaría extremadamente complicado. No obstante, en junio de 2017 un esfuerzo combinado de agencias encargadas de hacer cumplir la ley en varios países dieron de baja a Darknets como AlphaBay y Hansa.

Por ende, la *Dark Web* es la plataforma que posibilita las actividades cibercriminales en el marco de la Globalización Desviada, y es de donde se lanzan buena parte de los ciberataques. Cuando la división de seguridad de IBM publicó su informe de amenazas de seguridad para el tercer trimestre de 2015, destacó la amenaza de los ataques cibernéticos provenientes de la *Dark Web*, utilizando redes TOR (Weimann, 2016). Se habla de ciberataque cuando un delincuente intenta acceder a redes o dispositivos de una empresa o una persona con el objetivo de causar daño, bien sea para anular su capacidad para seguir funcionando o para robar información. Estos ciber-ataques usualmente utilizan un *malware*, es decir, un software malicioso que se infiltra en un equipo o sistema informático de una persona sin su autorización. El *malware* disemina un virus en un equipo, dañando bien sea su *software* o *hardware*. Además, tiene la capacidad de replicarse para infectar a otros equipos conectados a una red.

Los ciber-ataques también incluyen los ataques de "denegación de servicio" (DoS), los cuales son sencillos de realizar, pero a la vez son muy complicados de contrarrestar. Los hackers también usan "gusanos", los cuales son similares a un virus y puede propagarse en una red sin la ayuda de una persona; sin saberlo, el usuario puede enviar cientos o miles de copias del código malicioso a equipos de su red creando un efecto de ola. Otra táctica empleada es el uso de Troyanos; bajo apariencia de un programa legítimo, el troyano crea una "puerta trasera" en el sistema operativo de un equipo. Con ella los delincuentes pueden tomar control del mismo y descargar, si lo desean, otras clases de software malicioso.

Por su lado, el *ransomware* es una de las técnicas más disruptivas de los ciber-ataques en la actualidad. Es una técnica que secuestra datos y archivos por medio de un programa malicioso que se inyecta al equipo de la víctima. El código no se roba los datos, sino que los encripta y luego exige, por lo general dentro de un plazo definido, un pago a cambio de la clave para desencriptarlos.

Por último, los *zombie* son equipos personales bajo el control remoto de otra persona, que son empleados en actividades criminales sin que su propietario lo sepa gracias a un código malicioso (Brenner, 2010).

Durante el primer semestre de 2017, se presentaron un total de 677 millones de amenazas cibernéticas en América Latina. Esto quiere decir que cada hora se registraron 117 ataques. Los incidentes en la región han aumentado en un 59% en comparación con 2016, cuando se registraron 398 millones de ataques en los primeros ocho meses del año. Según Kaspersky (2017), Brasil es el país que más registra ataques con un 53%, seguido de México con un 17% y Colombia con un 9%. Brasil, México y Colombia también lideran la lista de países más afectados por el *ransomware*, con un 30, 20 y 5%, respectivamente. Se estima que más de 550 colombianos han sido víctimas de una operación de *ransomware* de carácter continental bautizado como "Saguaro", originada en México por ciber-delincuentes locales y que ha cobrado 120.000 víctimas desde que fue lanzada en 2009; luego de seis años enfocada en territorio mexicano, la banda expandió sus operaciones a Brasil, Venezuela y Colombia. Como lo señala Kaspersky (2017), este tipo de ataques ha presentado en la región un crecimiento anual del 30%.

Ello se explica por la cada vez mayor dependencia al internet. Por ejemplo, el 86% de personas entre 25 y 34 años son usuarios de teléfonos inteligentes, y 94% de ellos utiliza la banca en línea. Solo en los Estados Unidos, el 44% ha sido víctima del ciber-crimen, 31% comparte sus contraseñas y credenciales bancarias, y 84% pone en riesgo sus cuentas al revisarlas desde puntos wifi públicos (Ghernaouti, 2013). La compañía de seguridad RSA calcula en US$9.100 millones de dólares al año las pérdidas por *phishing*, es decir, páginas web falsas para robar información financiera. Asimismo, un estudio del Federal Bureau of Investigations (FBI) estima en US$2.300 millones de dólares el daño causado en el mundo en los últimos tres años solo por *ransomware* (FBI, 2016).

En Colombia ocurrió un sonado caso en 2014, en el que los delincuentes lograron hurtar el equivalente a US$304.000 dólares provenientes de catorce cajeros automáticos infectados; la infección de *malware* en el país se ha incrementado en un 114% en lo corrido del 2017 (El Tiempo, 2017). La capacidad de operación de las bandas dedicadas al ciber-crimen no tiene fronteras, por ello este delito se han convertido en una de las principales amenazas para Gobiernos, empresas y personas. Se calcula que el impacto económico de esa actividad es de unos US$3 trillones de dólares a nivel mundial, un cifra incluso superior al del negocio del narcotráfico, estimado en aproximadamente US$1 trillón de dólares. El 50% de las bandas dedicadas al ciber-crimen se componen de 6 o más personas. De ellos, el 76% son hombres, cuyas edades van desde los 14 años (8%) hasta los 50 (11%). Aunque la edad promedio de este tipo de delincuentes es 35 años (43%) (Ablon et. al, 2014)

Las regiones más afectadas por este delito, cuyo mercado mueve unos US$12.500 millones al año, son Asia (49% de los ataques), Europa (28%), América del Norte y del Sur (19%). Uno de los casos más graves es el de Indonesia, una nación que recibe el 14% del tráfico malicioso del mundo. Adicionalmente, como si se tratara de un portafolio de productos, los cibercriminales tienen un valor para cada uno de sus servicios; por ejemplo, según Ablon et al. (2014) el robo de una cuenta en Skype puede costar US$25 dólares, conocer los datos de acceso a una cuenta a Facebook US$200 dólares, conocer detalles de una tarjeta de crédito US$10 dólares, robar un personaje virtual de un juego por internet US$150 dólares. A estas pérdidas se sumaría el gasto en el que incurre una persona por comprar un antivirus que no hace absolutamente nada por proteger sus datos (US$50 dólares), y la restauración de los datos después de que su computador ha sido infectado con un "troyano" (US$100 dólares). Concluyendo, el ciber-crimen podría ser en la actualidad el negocio más rentable de la Globalización Desviada.

6. Conclusiones

La Globalización Desviada hace cada vez más difícil para los Estados sostener y explotar el control sobre su territorio y su economía. Estos Estados tienen "brechas de capacidad en una o más de tres áreas cruciales: están fallando en controlar sus territorios, cumplir con la mayoría de las necesidades básicas de sus ciudadanos, y brindar una legitimidad que fluye de una gobernanza efectiva y transparente" (Weinstein et al., 2004, p.2). Al mismo tiempo, la Globalización Desviada permite a "actores violentos no estatales [como las BACRIM, ELN o las disidencias de las FARC], controlar el territorio, involucrarse en la diplomacia, formar grupos de electores, e incluso participar en política (Naim, 2013, p.23).

Además, ha facilitado que los actores no estatales obtengan los diversos tipos de poder necesarios para impugnar el control en el dominio territorial. La complejidad de las redes en un mundo globalizado y la forma en que pueden emplearse para propagar influencia, las convierte en un instrumento ideal de la lucha de poderes. Estos actores al margen de la ley pueden superar la falta de recursos, o la fuerza militar, a través de otros tipos de poder; particularmente cuando la gobernanza del Estado es débil y una parte significativa de la población se siente agraviada por el statu quo. Estos actores violentos no estatales son "más fuertes donde los gobiernos son más débiles, explotan a las personas atrapadas en Estados frágiles o fallidos" (Demsey, 2015, p.3).

Hasta hace poco, la opinión predominante entre académicos, políticos y analistas de seguridad, era que grupos terroristas e insurgentes eran claramente distinguibles del crimen organizado, por las motivaciones y métodos utilizados para alcanzar sus objetivos; los terroristas e insurgentes usaban o amenazaban con la violencia extrema para lograr fines políticos, y el crimen organizado usaba tácticas menos agresivas para obtener ganancias. No obstante, estas distinciones

ya no son muy útiles para discernir y evaluar el panorama de seguridad en países encerrados en la zona intersticial, como había venido sucediendo en Colombia desde hace algunas décadas. En este tipo de Estados, los terroristas y los insurgentes recurrirían al crimen organizado para sustentar sus actividades, así como apoyo especializado en ciertas áreas (fraude documental, malversación de fondos, lavado de activos, etc.). Así mismo, el crimen organizado emplearía métodos violentos similares a las redes terroristas para intimidar u obtener concesiones de los funcionarios de los Estados.

El nivel de cooperación e interacción entre grupos terroristas, insurgentes y criminales dependería de una variedad de variables interdependientes, entre las que se incluirían la evaluación del riesgo, oportunidades, ventajas y capacidades. Los factores específicos que probablemente fomentarían una mayor asociación, al menos desde una perspectiva operativa, incluirían acceso a mayores recursos financieros, experiencia e inteligencia, protección y capacidades logísticas, así como intercambio de tácticas, técnicas y métodos.

Las redes criminales productos de la Convergencia y la Globalización Desviada no requerirían equipo militar de alta tecnología para causar daños físicos y psicológicos significativos, o para desafiar a las autoridades gubernamentales legítimas. Por el contrario, los dispositivos explosivos improvisados, la ubicación del sistema de posicionamiento global, drones, teléfonos celulares y el Internet, les han dado a los actores no estatales la capacidad de actuar de manera rápida, precisa y en otros escenarios no militares. Como lo expresaba el Presidente Barack H. Obama, esa es la gran ironía de nuestra Era de la Información: "las mismas tecnologías que nos facultan para crear y construir, también fortalecen a aquellos que quiebran y destruyen." (Obama, 2009).

Además, los grupos al margen de la ley podrían utilizar la Globalización Desviada para ayudar a manipular el equilibrio de poder en un país o una

región, trasladando el punto de apoyo del poder ya que no están sujetos a las mismas limitaciones que las fuerzas militares y policiales. Tampoco tendrían que preocuparse por las barreras legales o por las reglas de enfrentamiento que demanda el Derecho Internacional Humanitario y las legislaciones internas de los Estados. Asimismo, podrían aprovechar las redes sociales, un mayor acceso a los bienes comunes globales y reducir las barreras al poder para desafiar la legitimidad de los Estados y sus fuerzas militares. Los grupos terroristas, insurgentes y criminales cambiarían el punto de apoyo capitalizando las expectativas poco realistas de la población y la incapacidad del Estado para cumplir con su parte del contrato social, así como el uso de redes ilícitas para suministrar servicios básicos donde el gobierno no puede cumplir. En este sentido, los grupos insurgentes son probablemente los más peligrosos de estos grupos al margen de la ley que se aprovechan del fenómeno de Convergencia y de la Globalización Desviada; si bien cada insurgencia es única, comparten algunas características comunes, que incluyen beneficiarse de la difusión del poder provocada por la globalización desviada y la lógica de red criminal.

Dicho esto, el instrumento militar puede ofrecer una utilidad sustancial para la lucha contra el fenómeno de Convergencia y la Globalización Desviada. Las Fuerzas Militares de Colombia poseen capacidades sustanciales para la recopilación de inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, así como la acción directa. Si bien su valor agregado estaría direccionado a dar respuesta a las manifestaciones del delito en lugar de abordar sus causas, no obstante debería ser tenida en cuenta en cualquier estrategia viable que busque reducir la delincuencia en mejora de las condiciones de Seguridad de Colombia.

Parte 2
Escenarios y Desafíos Tradicionales de la Seguridad y Defensa de Colombia

Capítulo V

Ocupación de Espacios Vacíos: Una Condición *Sine Qua Non* de la Seguridad Multidimensional en Colombia[45]

Carlos Enrique Álvarez Calderón

1. Introducción

Uno de los grandes desafíos que se cierne para Colombia en los próximos años, luego del acuerdo de paz firmado con una parte representativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y posiblemente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es evitar los fracasos que han experimentado, en otras partes del mundo, las actividades de consolidación de paz y reconstrucción de Estado. En parte, estos fracasos han estado ligados a una falta de comprensión y sensibilidad hacia las especificidades culturales, históricas y geográficas de las sociedades devastadas por la guerra, así como la incapacidad de reconocer la forma en que las complejas y dinámicas condiciones de la guerra, terminaron transformando a las sociedades (o al menos algunos individuos), de los territorios en conflicto.

Si bien aquellas zonas que han sufrido conflictos prolongados (como es el caso de algunos territorios de Colombia), se describen a menudo en términos de anarquía; no obstante los individuos y las comunidades no son siempre

45. Este Capítulo de Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

"víctimas pasivas ante el fracaso y el colapso del Estado" (Menkhaus, 2010, p. 181). En efecto, por necesidad, muchos se esforzarán por encontrar formas de sobrevivir y hacer frente durante el conflicto, a veces exhibiendo iniciativa, ingenio y habilidad emprendedora en el proceso; otros en cambio, desarrollarán un interés personal en la continuación del conflicto armado, no sólo con fines de supervivencia, sino también por la cobertura que provee la persistencia del conflicto para la actividad depredadora y criminal.

Rabasa et al. (2007) afirman que el Estado es simplemente un actor dentro de un "ecosistema", en el que muchos grupos y entidades interactúan entre sí y evolucionan a través de la adaptación a los cambios en el medio ambiente. En esta situación surge una dinámica de "supervivencia del más apto", en la cual la salud de cualesquiera instituciones que puedan estar presentes (particularmente la judicial), es un factor determinante de la capacidad del Estado para influir y legitimarse en la sociedad.

En este contexto, los grupos armados al margen de la ley podrían seguir planteando un desafío después de que las guerras terminen. Si bien algunos miembros de estos grupos construyen o se insertan en partidos políticos, otros deciden regresar al conflicto armado; en algunos casos, surgen nuevos grupos o los antiguos grupos insurgentes se reinventan con nuevas denominaciones, desafiando nuevamente al Estado.

En otros casos, la amenaza no es un grupo insurgente, sino un grupo armado que surge en un entorno de post-conflicto pobre, pero rico en oportunidades, cultivando intencionalmente el fracaso del Estado para la perpetuación del beneficio personal y colectivo; estos grupos pueden incluir las pandillas, las bandas criminales (Bacrim), y el crimen organizado transnacional, todos los cuales plantean desafíos a la seguridad y defensa del Estado, aumentando el riesgo de violencia.

De acuerdo a Berdal & Malone (2000), estos desafíos se agudizan en escenarios de post-conflicto, cuando la capacidad de los Estados para proporcionar gobernabilidad y seguridad es limitada o está comprometida; particularmente en aquellos territorios en donde se le dificulta al Estado el mantenimiento del monopolio del uso de la fuerza, el orden público y la provisión de las necesidades básicas de sus poblaciones, a través de inversiones mínimas en salud, educación, infraestructura y otros servicios sociales.

En este sentido, cabría preguntarse si para la consolidación del acuerdo de paz suscrito con las FARC, y posiblemente el ELN, ¿es una condición *sine qua non*, la ocupación racional de los "espacios vacíos" por parte del Estado colombiano? En otras palabras, tratar de averiguar ¿si el desarrollo y la Seguridad Multidimensional de un Estado, dependerían en gran medida de una apropiada integración de los territorios que le pertenecen, que facilite el progreso socioeconómico y la acción de defensa?

2. Los Espacios Vacíos en la Geografía Política

El concepto de "espacio vacío" proviene de los aportes en geografía política de Saúl Cohen. En efecto, Cohen (2009) establece que los espacios vacíos son esencialmente áreas desprovistas de población, con pocas perspectivas de asentamiento humano masivo; dependiendo de su ubicación y extensión, pueden proporcionar profundidad defensiva y sitios para pruebas de armas, y algunos son importantes como fuentes de recursos estratégicos (por ejemplo, minerales) y fuentes de ingreso para el Estado (por ejemplo, turismo). El concepto de "espacio vacío" guarda una estrecha similitud con otras concepciones geopolíticas, como las "fronteras interiores" (Escuela geopolítica chilena) y los "territorios no gobernados" (Escuela geopolítica estadounidense).

Para este documento, se entenderá por "espacios vacíos" como aquellos espacios terrestres, marítimos, aéreos bajo la soberanía de un Estado, no

vinculados total o efectivamente a la acción del gobierno central y/o regional, donde se dificulta el desarrollo de las actividades humanas y productivas, bien sea por su distancia y/o incomunicación con el núcleo vital[46] y geo-histórico del país. Dicha distancia e incomunicación puede ser física, a causa, por ejemplo, de la carencia o mal estado de las vías de comunicación; o cultural, como consecuencia de la influencia económica y cultural extranjera, y la percepción ciudadana colectiva en cada uno de los espacios geográficos de constituir un ente diferente, separado y postergado del resto de la población nacional, y, que no alcanza a disfrutar del bienestar general debido a factores geográficos adversos.

No obstante, por espacios vacíos no sólo deben entenderse enclaves territoriales que han quedado sustantiva o relativamente al margen de los grandes avances derivados de la dinámica económica, política y social del Estado y que por lo tanto, no están participando ni entregando el aporte que el modelo les ha asignado y se espera de estos espacios. Como resultado de una deficiente infraestructura y un débil poblamiento, estos espacios vacíos han significado una peligrosa interrupción de la continuidad territorial y, por consiguiente, debilitan la plena soberanía del Estado-nación. Incluso, los espacios vacíos son dominios tangibles (físicos) e intangibles (cibernéticos), en el cual un Estado enfrenta desafíos significativos para establecer el control y a donde la autoridad del gobierno central no llega a extenderse.

Según Migdal (1988), un primer atributo de un espacio vacío podría ser la debilidad de "penetración" de las instituciones estatales en la sociedad de dicha

46. Los Núcleos Vitales son las áreas en las que se originan los Estados y de los cuales se ha desarrollado la idea de Nación. La relación entre el entorno físico del núcleo y el sistema político-cultural que se desarrolla puede quedar arraigada y persistir como un elemento importante de la identidad e ideología nacional o regional. Usualmente, es el territorio donde se ubican los poderes del Estado y desde donde se emana la potencia hacia las fronteras y fuera de ellas; generalmente éste se encuentra formado por varios núcleos pequeños, que al unirse forman el corazón o *heartland*. El núcleo vital o *heartland* de un Estado se localiza, en la mayoría de los casos, en las regiones interiores, resguardados del mar pero convenientemente conectados a ella; además, es un área geográfica con abundancia en recursos naturales, principalmente en alimentos, que permiten el sustento y el asentamiento de una proporción significativa de la población nacional.

área geográfica. Esta falta de "penetración" estatal estaría caracterizada por instituciones estatales ausentes o que no funcionan; por ejemplo, las entidades encargadas de hacer cumplir la ley o de proveer salud y bienestar, sólo estarían presentes en la capital[47] o las ciudades intermedias de un Estado, dejando un territorio sustancial del país, fuera del efectivo alcance institucional del Estado. Esta ausencia institucional del Estado permitiría que otras organizaciones tengan prioridad en la determinación de las reglas de la vida cotidiana (Zartman, 1995). Así, grupos insurgentes o criminales pueden ofrecer la única atención de salud u otros servicios sociales a aquellas sociedades que residen en dichos espacios vacíos.

La falta de penetración del Estado también se refleja en un bajo cumplimiento de las leyes vigentes. Cuando la penetración del Estado es débil, los habitantes de los espacios vacíos territoriales pueden ignorar las leyes con poca o ninguna sanción. Por ejemplo, pueden no pagar impuestos o pueden contrabandear o extraer ilegalmente recursos naturales, sin el riesgo de ser arrestados o procesados por la justicia. El "cumplimiento" implicaría la colaboración de los ciudadanos con el Estado, por ejemplo, bajo la percepción social de que el Estado y sus leyes son legítimos (Migdal, 1988).

En los espacios vacíos, el Estado no es usualmente la principal fuente de autoridad, razón por la cual otras instituciones sociales (por ejemplo, tribus y clanes indígenas), o grupos al margen de la ley, sean percibidas como legítimas, obteniendo el cumplimiento de sus leyes, por encima de las del propio Estado. Sin embargo, los espacios vacíos pueden ser, en ocasiones, el resultado de las decisiones políticas de los que estando en el poder, deciden operar a través

47. Las capitales sirven como foco político y simbólico de las actividades que rigen el comportamiento de las personas en territorios políticamente definidos. Si bien sus funciones pueden ser esencialmente administrativas, en teoría el paisaje construido de una capital nacional (sus formas arquitectónicas, edificios, monumentos y disposición), tiene un valor simbólico considerable en la movilización del apoyo al Estado. Las capitales pueden ser seleccionadas por una variedad de razones, bien sea por su centralidad geográfica al resto del espacio nacional, por sus cualidades geográficas defensivas o por sus lugares fronterizos, como trampolines para la expansión territorial.

de canales informales (milicias o redes criminales), y fuera de las estructuras formales del Estado.

Por su parte, autores como Clunan & Trinkunas (2010) señalan que algunos espacios vacíos son gobernados de manera distinta, argumentando que ciertos "espacios no gobernados" existen "cuando el control estatal territorial ha sido cedido voluntaria o involuntariamente, total o parcialmente, a [otros] actores distintos de las autoridades soberanas legalmente reconocidas" (p.17). Entonces, la distinción entre "espacios no gobernados" y "alternativamente gobernados" pareciera enfatizar aún más el papel que cumple la relación entre la población y la entidad que la gobierna; sostienen Clunan & Trinkunas (2010) que "si las formas alternativas de gobernanza son capaces de proporcionar bienes estatales como la seguridad y el bienestar a [la población] que está dentro de su dominio, con mayor eficacia que los gobiernos, entonces es natural suponer que [dicha población] les será leales" (p.27).

Por lo tanto, cuando el Estado no ocupa efectivamente un espacio vacío, deja abierta la posibilidad de que un actor no estatal pueda ser capaz de ganar la lealtad de la población; la presencia de grupos armados fuera del control del Estado es un indicador primario de la existencia de espacios vacíos. Las actividades de grupos ilegales, particularmente cuando trafican con productos lucrativos y socialmente destructivos como la cocaína, tienden a debilitar y corromper las instituciones políticas y sociales. En la medida en que estos grupos son exitosos, también desplazan a las instituciones estatales y gubernamentales (generalmente débiles) en las áreas donde establecen un punto de apoyo. Por ende, los grupos armados ilegales ampliarían su base de recursos, aumentarían su capacidad de reclutamiento y generarían mayor capacidad a expensas del Estado. Tales grupos también amenazan a los ciudadanos individuales, exigiéndoles pagar "impuestos" u obligarlos a participar en actividades ilegales.

Estas acciones debilitan aún más el Estado porque los ciudadanos terminan percibiéndolo como una institución ineficaz o irrelevante.

Sin embargo, la existencia de espacios vacíos no significa necesariamente que los actores no estatales explotarán el área en cuestión o que las poblaciones darán su lealtad a entidades gubernamentales alternativas. Por lo tanto, Rabasa et al. (2007) identifican cuatro características de espacios vacíos que los hacen especialmente propicios para la explotación por grupos armados y criminales; estas cuatro características son: Primero, adecuación de la infraestructura y el acceso operacional; Segundo, fuentes de ingresos; Tercero, características demográficas y sociales favorables; y Cuarto, invisibilidad.

Con relación a la adecuación de la infraestructura y el acceso operacional, este se referiría a la capacidad del grupo al margen de la ley para desempeñar sus funciones básicas. Los elementos de esta infraestructura incluirían (Kingsley, 2014): Primero, instalaciones de comunicaciones; Segundo, un sistema bancario oficial o no oficial que permita la transferencia de fondos; y Tercero, una red de transporte que proporcione acceso a los centros urbanos y potenciales objetivos externos.

Con base en lo anterior, si bien un área ubicada en una región remota puede llegar a ofrecer la invisibilidad que un grupo armado al margen de la ley necesita, para evadir a las fuerzas militares y policiales del Estado, una zona geográfica demasiado remota también puede impedir que el grupo obtenga los recursos y suministros necesarios para llevar a cabo sus operaciones con eficacia. Tal podría ser el caso de los remotos espacios vacíos de la geografía colombiana que no logran ofrecer las comunicaciones o instalaciones bancarias necesarias o el acceso a objetivos potenciales en los centros urbanos, tomando en cuenta que los grupos armados criminales e insurgentes necesitan acceder a fuentes locales de ingresos para poder financiar sus operaciones.

Las fuentes locales de ingresos permiten al grupo al margen de la ley financiar sus operaciones sin tener que depender de donaciones externas. Por ende, la presencia de productos de alto valor en los espacios vacíos, como los narcóticos o los minerales, se han relacionado con la presencia de este tipo de grupos; en consecuencia, la capacidad de una organización criminal para establecer el control sobre la comercialización de estos productos básicos puede proporcionar una importante fuente de ingresos para el grupo.

Además, la prevalencia de la economía informal se refiere a la medida en que la economía informal eclipsa la economía formal y escapa al control del Estado. El sector informal está compuesto por actores económicos en una variedad de actividades comerciales que operan más allá del ámbito del empleo formal o de la economía; típicamente, este sector no genera ingresos fiscales para el Estado como lo hace la economía formal, y alimenta la corrupción. En efecto, la corrupción es endémica en la mayoría de los espacios vacíos, y la corrupción generalizada, deslegitimiza al Estado y puede tener graves consecuencias a la seguridad.

El entorno social y demográfico existente de una zona puede influir en el nivel de vulnerabilidad de la zona a la explotación. Los elementos incluidos en esta categoría incluyen (Kingsley, 2014): Primero, la presencia de grupos violentos o comunidades vulnerables a la cooptación o intimidación; Segundo, normas sociales de apoyo entre la población; Tercero, un estado preexistente de violencia comunales; Cuarto, programas informales de asistencia social abiertos a la explotación; y Quinto, sindicatos criminales disponibles para alquiler. Estos elementos se enfocan más específicamente en la población, y pueden llegar a incluir factores económicos y políticos que persuadan a las poblaciones a cooperar con actores armados no estatales.

Adicionalmente, la resistencia social y cultural suele significar que la población cuestiona la legitimidad del Estado y sus instituciones y prefiere que otras entidades (grupos étnicos, clanes, tribus, familias extendidas) sirvan de base para la organización social, judicial y política.

La invisibilidad se referiría a la capacidad que tiene un grupo armado no estatal para operar en un territorio determinado, sin llamar la atención de autoridades locales o internacionales. Esta podría lograrse a través de la capacidad del grupo al margen de la ley de "mezclarse" con la población local, debido a similitudes en apariencia, lenguaje o comportamiento. Alternativamente, puede lograrse a través de la capacidad de incorporación a una sociedad cosmopolita (como es el caso de los espacios vacíos urbanos), donde la diversidad es la norma. Debido a la correlación entre la invisibilidad y el acceso operacional, los grupos insurgentes o criminales pueden en distintos momentos valorar el acceso operacional por sobre la invisibilidad, o viceversa. Por ende, las formas en que los grupos al margen de la ley aprovechan estas condiciones e interactúan con las poblaciones locales, así como con entidades gubernamentales y no gubernamentales, podrían revelar cómo estos actores no estatales desafían y transforman las relaciones de poder existentes en las áreas y comunidades en las que operan.

En resumen, un bajo nivel de "penetración" del Estado en la sociedad (o como articularia su relación con la población en ciertas áreas geográficas), una incapacidad del Estado en la garantía del monopolio del uso de la fuerza, una debilidad del Estado en el control de sus fronteras, y una inhabilidad de negar la intervención e influencia de otros Estados en algunos territorios bajo su soberanía, son factores que indicarían la presencia de espacios vacíos en un determinado Estado (Rabasa et al., 2007). En consecuencia, todos estos factores apuntarían a la existencia de un Estado débil, que tendría dificultades para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos en ciertos lugares de la geografía nacional.

3. Los Espacios Vacíos de Colombia: Una Construcción Geopolítica Inconclusa

Los espacios vacíos en Colombia han generado todo tipo de problemas de seguridad, como conflictos civiles y crisis humanitarias, contrabando de armas, drogas y especies, minería ilegal y flujos de migrantes irregulares, amenazando la estabilidad y la Seguridad Multidimensional del Estado colombiano y sus vecinos regionales. No obstante, la problemática geopolítica de los espacios vacíos en Colombia no es un fenómeno nuevo.

> La historia de Colombia sirve para comprobar el escaso interés de su dirigencia por conservar los territorios legados del periodo precolombino, durante el cual sus primeros habitantes, los chibchas, se extendieron hasta los actuales territorios de Costa Rica y Nicaragua, al grado de que en la actualidad su extensión abarca un espacio menor, esencialmente el corredor andino y la parte de la región Caribe; esto incide en que se sigan considerando como "espacios vacíos" las amplias regiones de los llanos de la Orinoquía y los que comprenden la región amazónica (Ostos, 2011, p. 150).

Para comprender la presencia de espacios vacíos en el territorio colombiano, se hace necesaria una breve revisión geohistórica de la construcción geopolítica del Estado en el territorio colombiano.

La conquista española del territorio colombiano comenzaría, luego que Alonso de Ojeda tocase tierra en el Cabo de la Vela en 1499, con una serie de expediciones llevadas a cabo por el conquistador Pedro de Heredia en 1533, y continuadas con las incursiones de Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federmán y Jorge Robledo, desde las zonas costeras hacia el centro del país, entre 1538 hasta 1541. Por ejemplo, cuando Gonzalo

Jiménez de Quezada arribó a la Costa Caribe colombiana, se enfrentó a unas condiciones muy adversas de clima malsano y altas temperaturas, mosquitos, culebras, epidemias tropicales y otros azares, como la presencia de tribus indígenas altamente belicosas.

En consecuencia, ante el interés de Quesada por encontrar oro en grandes cantidades y tomar distancia de territorios que dificultasen el asentamiento humano y la actividad agrícola, lo llevaría, a ascender por el Río Magdalena hasta la sabana cundi-boyacense entre 1537 a 1538, en donde encontraría un clima con una temperatura promedio que se asemejaba al otoño madrileño. Como lo señala Arciniegas (2010), "en Colombia el mapa de la nacionalidad quedó trazado por Jiménez de Quesada al emprender su marcha de Santa Marta al interior, en busca de ese más allá que le iban señalando los indios para salir de él y que vino a quedar convertido en el mito de El Dorado" (p. 14).

El relieve predilecto que se escogería para los asentamientos españoles en la región andina fueron zonas llanas con climas más templados. Por ende, los altiplanos, mesetas y valles más amplios en las cordilleras fueron los sitios en donde la colonización española tomaría asiento. Por el contrario, las pendientes de las montañas constituirían para los españoles un enorme desafío para su ocupación y tránsito, debido a su inexperiencia en la ocupación humana y construcción de visas de comunicación en este tipo de suelos.

> Este hecho fue de crucial importancia para la ocupación de lo que hoy es Colombia, pues, al separarse la cordillera en tres grandes ramales en su territorio, predomina una abrupta topografía en la que aparecen zonas planas discontinuas, como las altiplanicies de Pasto, o la cundiboyacense, o como el valle de Aburrá, donde se ubica Medellín. Es allí donde se asientan los españoles dejando de

> lado las zonas de pendientes, que no serán colonizadas sino hasta bien entrado el siglo XIX (Serje, 2011, p.92).

Además, a la llegada de los españoles al Reino de Tierra Firme, las familias indígenas más importantes, de acuerdo con su cultura y sus características lingüísticas, eran la Chibcha (que predominaba en las tierras altas), y la Caribe (en las tierras bajas); una tercera familia fue la Arahuaca (establecida en las zonas bajas del oriente del país desde la Guajira, los llanos de la Orinoquía y la Amazonía). Las principales sociedades indígenas se encontraban apartadas por amplios espacios territoriales, diferencias de altitud y obstáculos naturales, que sólo eran superadas por esporádicos intercambios de bienes valiosos, como el oro o la sal. Según Melo (2010), "los contactos entre las grandes culturas, y con mayor razón entre los grupos más pequeños, eran intermitentes y estacionales, y no imponían la necesidad de mantener o crear un sistema de caminos" (p. 38).

Las históricas vías de comunicación de las comunidades indígenas sólo se establecieron en los alrededores de los centros religiosos, culturales o políticos más importantes, o en las inmediaciones de los núcleos más importantes de población, la mayoría localizadas en la región Andina Oriental, la cual estaba densamente poblada por diversos pueblos, tanto en las zonas de montaña, como en los valles de los ríos.

Por ende, la llegada de Quesada a la sabana de Bogotá, y su decisión de establecer en ella un asiento permanente, pudiera explicarse por la presencia de los Muiscas, la etnia Chibcha más representativa y avanzada; tan sólo los Muiscas (en los 20 mil kilómetros cuadrados de altiplanicies de las actuales Cundinamarca y Boyacá, de las cuales 3 mil representaban tierras llanas aptas para el cultivo), se estimaban en una población entre los 800.000 a 1.000.000 de habitantes a la llegada de los españoles, es decir, más del 50% de la población indígena localizada entre Mesoamérica y el Imperio Inca.

En consecuencia, el hecho de la conquista española, buscando las poblaciones indígenas más numerosas y explotables, hubiesen establecido la mayoría de los centros urbanos colombianos en zonas alejadas de las costas, generó en buena medida, un patrón de poblamiento e integración contrario del que prevaleciera en otras zonas geográficas de América Latina, donde el ecúmene[48] y la capital administrativa y económica, quedarían en la costa o a corta distancia de ella. Entonces, estos acontecimientos determinarían que el Virreinato de la Nueva Granada se estableciera de forma inversa a como lo llegarían a ejecutar otras sociedades del continente, las cuales emprendieron tradicionalmente su expansión territorial desde el mar hacia el interior, y no al revés.

Sin embargo, los españoles se preocuparon por conectar sus principales centros de poder económico en el norte de América del Sur. El corredor de Lima a Caracas, que pasaba por Quito y Santa Fe de Bogotá, se trazó a lo largo de las cordilleras Central y Oriental de los Andes, siendo fieles a la estructura y esquema de los prósperos establecimientos urbanos de los indígenas. No obstante, Santafé de Bogotá, Tunja, Popayán, Pasto y Santa Fe de Antioquia fueron centros de población relativamente distantes entre sí, rodeados de unos hinterland[49] extraños, y aislados por territorios indígenas no sometidos e "insuperables" obstáculos geográficos; pero por sobre todo, distantes del mar y del contacto con España.

---

48. Las ecúmenes son las áreas de mayor densidad de población y actividad económica, creados y expandidos por densas redes de transporte para reflejar la concentración económica. En la actualidad, los límites de las ecúmenes pueden ampliarse para incluir áreas que están vinculadas por las telecomunicaciones modernas. Debido a que la ecúmene es la parte económicamente más avanzada del Estado, así como su sector más poblado, suele ser el área política más importante del Estado.
49. El *hinterland* o "tierra posterior" (a una ciudad, un puerto, etc.), se refiere en un sentido amplio, al territorio adyacente al *heartland* de un Estado. Usualmente, el *hinterland* es el espacio existente entre el núcleo vital y las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas de un Estado. Protege al núcleo vital y le provee de recursos que el propio núcleo vital no posee, y es el primer destino de los productos de valor agregado que el núcleo vital genera, por lo cual es el medio geográfico en el cual se desarrolla y se expande un Estado. En consecuencia, el *hinterland* es el espacio geográfico hasta donde llega el control efectivo de un Estado (en lo político-militar, económico, social y jurídico). No obstante, puede que el *hinterland* no abarque la totalidad del territorio bajo la soberanía jurisdiccional del Estado, ya que si bien el limite o frontera interior de un Estado (su *hinterland*) debería coincidir con su frontera exterior, en algunos casos esto no ocurre; por tanto, el espacio residual entre la frontera interior o límite del *hinterland* y la frontera exterior de un Estado, es denominado Espacio Vacío.

Cada uno de estos núcleos urbanos se constituyó entonces en el generador de zonas de frontera relativamente autónomas, que estimulaban la constitución de núcleos vitales secundarios y subsidiarios de población, tan pronto se saturaba la capacidad de los asentamientos indígenas vecinos para alimentar y sostener a la ciudad española. En efecto, Santafé de Bogotá dio nacimiento a Tunja, Vélez, Pamplona, Tocaima, Mariquita e Ibagué; Popayán a Cali, Timaná y Neiva; a su vez Cali a Buga, Cartago y Pereira; Santa Fe de Antioquia a Cáceres, Zaragoza, Remedios y Medellín; Cartagena a Mompox; Santa Marta a Riohacha y Valledupar (Melo, 1996). En el transcurso del siglo XVII, los territorios de estos núcleos secundarios se fueron colmando paulatinamente de poblaciones mestizas y españolas, tendencia que se aceleraría con la expansión demográfica y económica del siglo XVIII.

Este patrón de poblamiento en Colombia estructuraría un sistema de caminos reales desde Pasto por el sur, Buenaventura por el occidente, Cartagena y Santa Marta por el norte, y Cúcuta y Villavicencio por el oriente, para llegar a Santafé de Bogotá, y formar de aquella manera el hinterland que cubriera la Nueva Granada desde todos los extremos de sus centros urbanos intermedios. Además, la necesidad de comunicación prioritaria de las ciudades andinas con los puertos del Atlántico llevó a que la Corona Española tuviese como eje de navegación y comunicación al Río Magdalena, arteria fluvial al cual confluían varios de los principales caminos del interior. Del Magdalena partía los caminos que por Ibagué, se dirigían al Quindío y Cali; y por Neiva a Popayán, para seguir a Pasto y a Quito, también ciudades andinas. Vías más cortas comunicaban al Magdalena con Cartagena y con Santa Fe de Antioquia, por Rionegro; y con Santafé de Bogotá, por Vélez y Villeta (a través del río Negro), y por Tocaima (utilizando el río Bogotá). Asimismo, la vía que desde Santafé de Bogotá llevaba a Tunja, Pamplona, Mérida y Caracas completaba el mapa de los que podrían denominarse caminos reales troncales coloniales (Melo, 2010).

> Los viajes de Quesada, Federmán y Belalcázar señalaron los esquemas de los primeros caminos y de ahí en adelante, cada exploración que se hizo fue indicando el nuevo camino. Cada parada en el lugar donde nacería una nueva ciudad y la explicación de que Colombia sea un país de ciudades, se encuentra en los tambos que fueron marcando como paradores, los altos en las jornadas, cuando la Colonia se hizo para que la transitaran los españoles a lomo de mula, o más exactamente de indio. No hubiera sido por El Dorado, y se hubiera fijado la capital del reino en Santa Marta o Cartagena, los caminos reales hubieran quedado para que los abriera la República en una tardía época de expansión. Ilusión o realidad, El Dorado fue el fundamento de la nación colombiana tal como quedó formada sobre el esqueleto de los caminos reales. Y el Magdalena y el Cauca, los ríos que facilitaron la primera parte de la penetración. En primer lugar, el Magdalena. Como correspondía a la obra del fundador Jiménez de Quesada (Arcieniegas, 2010, p. 15).

Efectivamente, durante los 300 años de ocupación española, se consolidarían una serie de espacios articulados al proyecto de urbanización, producción y comercio metropolitanos, ocupando el eje Norte-Sur de las tres cordilleras y la costa Caribe entre los ríos Sinú y Magdalena. En este sentido, Alexander Von Humboldt señalaba a principios del siglo XIX, que la entonces Capitanía General de Venezuela poseía una privilegiada posición geoestratégica dentro del continente, cuya mirada puesta en el horizonte que le brindaban sus litorales y por ende sus puertos sobre el Mar Caribe, le iban a permitir afianzar sus relaciones comerciales y de paso las relaciones políticas con el extranjero; en contraste, las condiciones geográficas del Virreinato de la Nueva Granada, su diseño de forma vertical atribuido al predominio de los Andes, y a sus principales arterias fluviales que recorren el territorio de sur a norte, retrasaban y cohibían

su contacto allende de sus fronteras. Pero incluso al interior de sus propias fronteras, ya que otras zonas de la geografía neogranadina se marginaron del ordenamiento colonial español.

Este conjunto de territorios fueron calificados como los "umbrales del Virreinato" durante la ocupación colonial, gracias a la dificultad de acceso que las definió en términos de aislamiento y porque carecían de recursos atractivos para la economía colonial; pero también como consecuencia a sus características climáticas y naturales adversas, y porque en sus dominios se alojaban frentes de resistencia indígena o cimarrona. Según Serje (2011), entre estas regiones se podían contar la Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá, el Catatumbo y el valle medio del río Magdalena, la serranía de San Lucas, el Alto Sinú y San Jorge, el Darién, el litoral pacífico, el piedemonte oriental y la mayor parte de la Amazonía y la Orinoquía; desde aquel momento, más de la mitad del Virreinato de la Nueva Granada se constituiría como espacio vacío y territorios de refugio para las poblaciones marginales[50] de la sociedad colonial, así como para el conjunto de actividades ilegales vinculadas al contrabando (de esclavos, armas, ron, chicha, harinas, tabaco).

Igualmente, estos espacios vacíos facilitarían eventualmente la constitución de agrupaciones sociales parcialmente autónomas, producto de nuevas alianzas indígenas (Sierra Nevada de Santa Marta, Alta Guajira y Catatumbo); o indígenas y cimarronas (Darién y litoral pacífico); o mestizas (Magdalena Medio y Serranía de San Lucas).

En resumen, la preeminencia de las montañas que rodean y amurallan los centros de decisión política y económica en Colombia, como sucede con Bogotá, Medellín y Cali, aunado a la discontinuidad de los ríos y a la falta de

50. Indios belicosos; esclavos fugitivos que incluían mestizos, zambos y mulatos; colonos pobres españoles venidos ilegalmente de España; hechiceras y hierbateras; desertores; vagabundos; ladrones; asesinos; leprosos, etc.

vías de comunicación, dificultaron el rápido contacto con las zonas portuarias, convertidas en los puntos de conexión con el mundo exterior, así como con aquellos territorios no vinculados efectivamente al hinterland de Colombia, propiciando una atmósfera conveniente para el aislamiento geográfico y la consolidación de espacios vacíos al interior del territorio. Una orientación más aperturista y cosmopolita que le brindan, por ejemplo, la horizontalidad de los litorales a Venezuela, en contraste con el verticalismo que le imprime la cordillera de los Andes a un país como Colombia, llevaría a una visión más introspectiva del territorio colombiano, y menos pragmática hacia la integración nacional o regional, generando en el neogranadino un visión "a-geográfica" del desarrollo y consolidación del Estado.

Posteriormente, una vez consolidada la independencia y la inexorable disolución de la Gran Colombia, los gobiernos de la nueva República se limitaron a administrar desde Bogotá a una fracción del país que se restringía a Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Popayán, y sus alrededores, desconociendo que el restante 75% del territorio marítimo y terrestre del país, también eran parte sustantiva de Colombia (Rosales, 2012).

Si acaso, en los momentos iniciales de la República de Colombia, dichos territorios eran considerados como "baldíos" que albergaban importantes riquezas minerales y vegetales, así como oportunidades para la apertura de canales interoceánicos y rutas fluviales que cruzaran el continente. Pero ni Panamá y el Darién, la Costa Mosquitia que hoy pertenece a Nicaragua y Costa Rica, la Alta Guajira y la Amazonia colombiana, estaban en la agenda del Estado; en contraposición, "se priorizarían los grandes centros de desarrollo versus los territorios apartados de la nación que serían desplazados hacia una simple referencia geográfica relacionada sobre cuál es la extensión del territorio nacional" (Gallo, 2015, p.10).

Eventualmente, Panamá se separaría de Colombia en 1903; tres años antes, la Costa Mosquitia limítrofe con Costa Rica se terminaría perdiendo en un arbitraje del Presidente francés Emile Loubet, mientras que la que limitaba con Nicaragua habría que reconocérsela a ese país en 1928. Posteriormente, Colombia cedería ante el Perú después del conflicto armado colombo peruano entre 1932 a 1933, una importante zona del hasta entonces territorio amazónico colombiano. A su vez, en la década del cincuenta, el Estado colombiano endosaría el archipiélago de los Monjes a Venezuela, y en años más recientes, el 19 de Noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, si bien ratificaba la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, le reduciría a Colombia más del 50% de posesión, dominio y autoridad sobre las aguas marítimas en esa parte del Mar Caribe (aproximadamente 75 mil kilómetros cuadrados). En definitiva, desde la Nueva Granada (Mapa No. 1), Colombia ha cedido territorios a Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.

> Si se realiza una simple observación a la cartografía histórica en la cual se describen los territorios que abarcaba el Virreinato de la Nueva Granada y se compara con el mapa de Colombia 200 años después, la apreciación instantánea que surge es que la extensión representada por el mapa actual de la República de Colombia no guarda similitud con la representación de la Nueva Granada cuando limitaba con la Capitanía General de Guatemala, con el Virreinato de Perú y con la Capitanía General de Venezuela (Gallo, 2015, p.12).

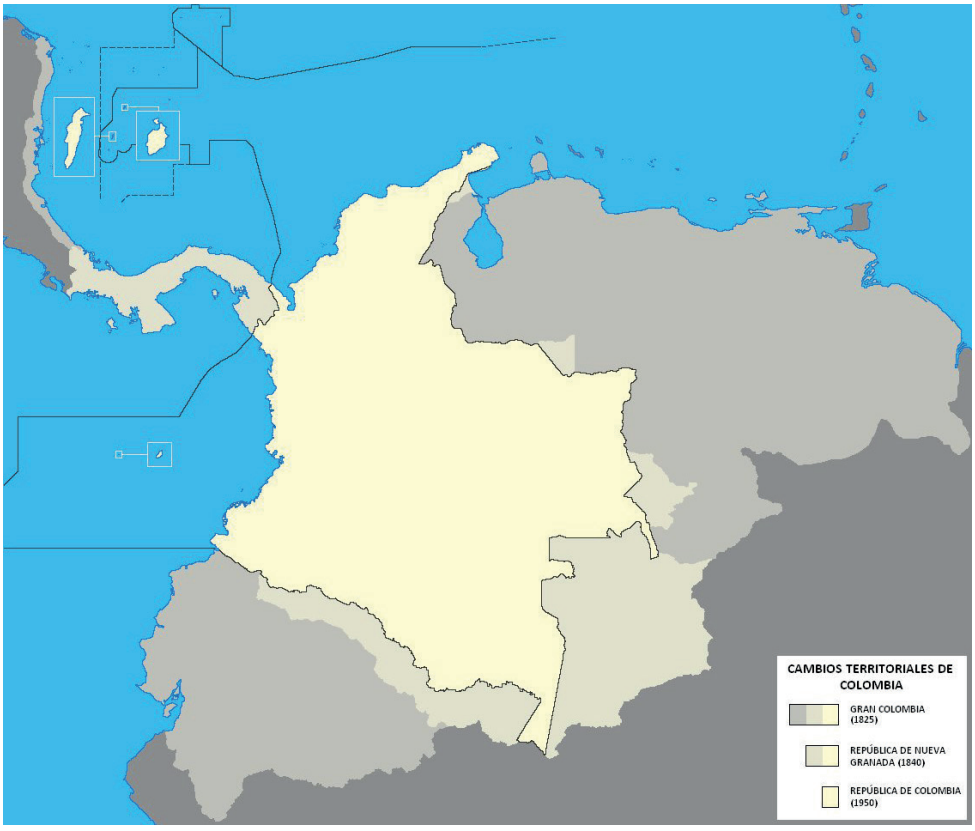
El Estado Colombiano, para eximirse de las dificultades que le representaba la administración de esa extensa porción del territorio colombiano, al cual denominaba "Territorios Nacionales"51, resolvió entregarlo mediante el

51. Un apelativo bastante llamativo para, tal vez, los menos nacionales de los territorios.

Concordato de 1887 y los convenios de misiones de 1903, 1928 y 1953, en un principio, a la administración de comunidades religiosas.

> Desde la Constitución de 1863 se estableció que estas "enormes extensiones selváticas", de gran potencial económico e incapaces de gobernarse a sí mismas por estar pobladas de tribus salvajes, fueran administradas directamente por el Gobierno central para ser colonizadas y sometidas a mejoras. Se conocen desde entonces como territorios nacionales, tutelados por un régimen especial. A finales del siglo XIX la República decide entregar el control de estas mismas regiones a la Iglesia católica, a través de un convenio con el Vaticano. Allí se definieron como territorios salvajes, "habitados por aborígenes nómadas o que habitan en las selvas vírgenes" y se convierten en "territorios de misiones" (Serje, 2011, p.16).

Mapa No. 1 Cambios Territoriales en Colombia



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

3.1 Los Espacios Vacíos de la Amazonia y la Orinoquia

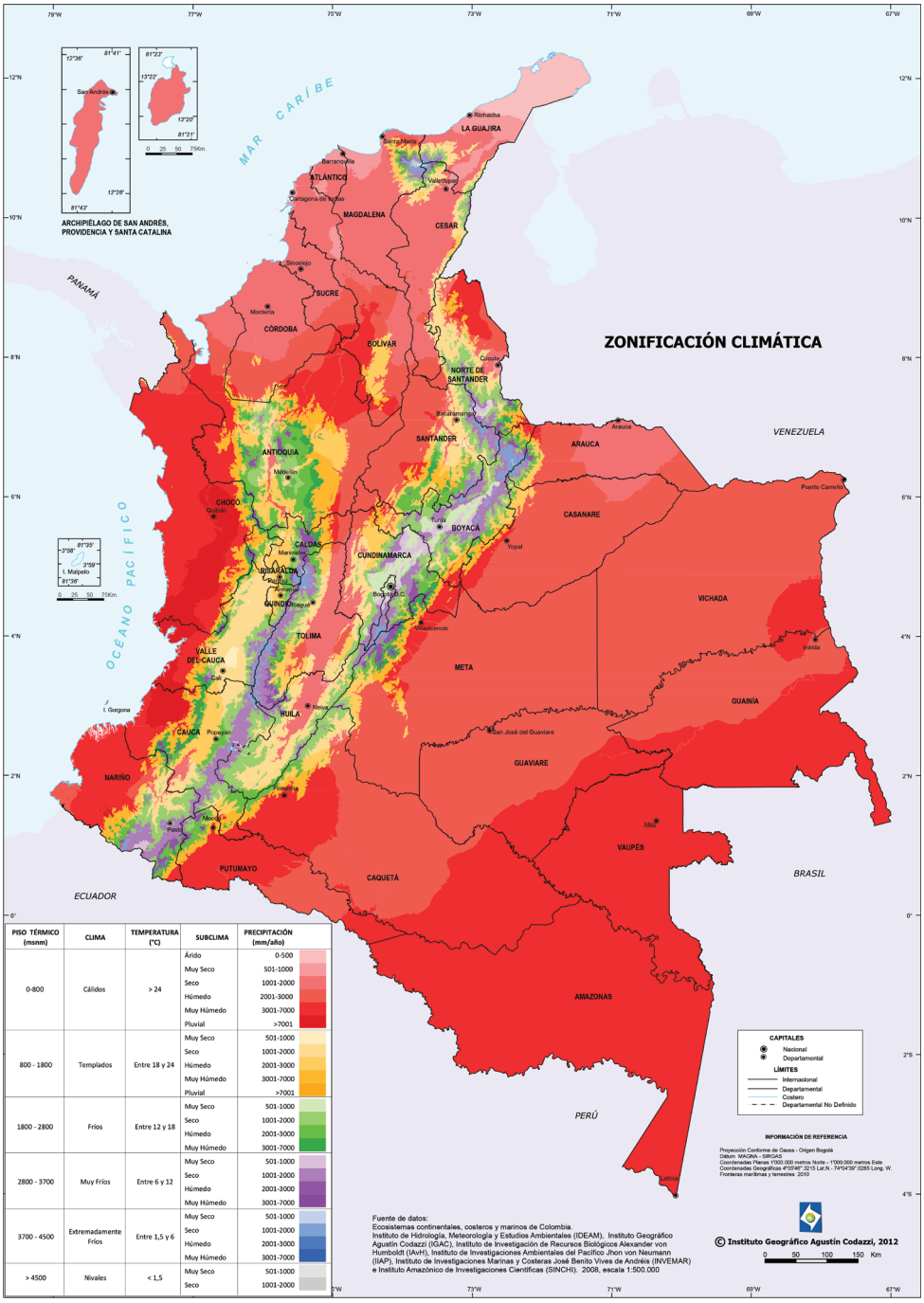
Como se ya se ha mencionado, la población de Colombia se ha agrupado con mayor densidad en las regiones montañosas, al menos desde la época colonial, gracias a que estas posiblemente proporcionaban un escape del calor[52] y las enfermedades tropicales, así como unas mejores condiciones para la agricultura intensiva (Mapa No. 2).

52. Santafé de Bogotá, localizada a 2.630 metros, tiene una temperatura promedio de 13°C; Medellín, localizada a unos 1.500 metros, goza de una temperatura media anual de 21°C; Cali, localizada a 1.002 metros, tiene un clima promedio de 25°C). En cambio, ciudades como Barranquilla o Cartagena de Indias experimentan temperaturas promedios entre los 28 a 30°C.

Alrededor del 9% del territorio nacional se encuentra entre los 1.000 y 2.000 metros, en los flancos de las montañas o en los valles internos, en donde si bien el clima es cálido, es agradable. Sólo el 6% del territorio colombiano está por encima del nivel de los 2.000 metros, donde la temperatura es fría. Sin embargo, en el 15% del territorio del país que se encuentra por encima de 1.000 metros, es donde vive la mayoría de la población colombiana. En contraste, las tierras bajas tropicales que representan alrededor del 85% de la geografía terrestre, han estado escasamente habitadas, albergando tan sólo un poco más de un tercio de la población nacional. Lo mismo ocurre con los valles fluviales del interior (como en Neiva, Honda y Mompox en el río Magdalena) y en el Chocó, así como en los llanos orientales y en la cuenca del Amazonas (Safford & Palacios, 2012).

En este orden de ideas, los llanos orientales y la región amazónica han carecido de población significativa; a pesar que estas dos regiones representan casi el 56% del territorio nacional (Mapa No. 3), hasta hace poco contenían tan sólo un poco más del 1% de la población nacional. Por ende, en las condiciones de vacío y subdesarrollo del Amazonas y la Orinoquia, estos comenzaron paulatinamente a convertirse en el refugio ideal para delincuentes, guerrilleros, paramilitares, e incluso, empresarios privados de "dudosa reputación". Tanto así, que empresas privadas como la tenebrosa Casa Arana, quien ocupó el territorio ubicado entre los ríos Caquetá y Amazonas, no solo explotaron a su merced los recursos naturales en detrimento del país, sino que a su vez se constituyeron en "para-Estados", minando la legitimidad y gobernanza de las instituciones del Estado colombiano.

Mapa No. 2 Zonificación Climática de Colombia



PISO TÉRMICO (msnm)	CLIMA	TEMPERATURA (°C)	SUBCLIMA	PRECIPITACIÓN (mm/año)
0-800	Cálidos	> 24	Árido	0-500
			Muy Seco	501-1000
			Seco	1001-2000
			Húmedo	2001-3000
			Muy Húmedo	3001-7000
			Pluvial	>7001
800 - 1800	Templados	Entre 18 y 24	Muy Seco	501-1000
			Seco	1001-2000
			Húmedo	2001-3000
			Muy Húmedo	3001-7000
			Pluvial	>7001
1800 - 2800	Fríos	Entre 12 y 18	Muy Seco	501-1000
			Seco	1001-2000
			Húmedo	2001-3000
			Muy Húmedo	3001-7000
2800 - 3700	Muy Fríos	Entre 6 y 12	Muy Seco	501-1000
			Seco	1001-2000
			Húmedo	2001-3000
			Muy Húmedo	3001-7000
3700 - 4500	Extremadamente Fríos	Entre 1,5 y 6	Muy Seco	501-1000
			Seco	1001-2000
			Húmedo	2001-3000
			Muy Húmedo	3001-7000
> 4500	Nivales	< 1,5	Muy Seco	501-1000
			Seco	1001-2000

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

Mapa No. 3 Regiones Geográficas



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

La región de la Amazonía colombiana comprende los Departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. El Departamento del Amazonas fue descubierto por el conquistador Francisco de Orellana en 1524, el primer europeo en navegar por el río Amazonas. Por su parte, Vaupés fue descubierto por Hernán Pérez de Quesada en 1538 y Philip Von Hutten en 1541. Pérez de Quesada también fue protagonista en el descubrimiento de Caquetá. Durante la época de la Colonia estos territorios estaban bajo la hegemonía de la Provincia de Popayán; luego, durante la Gran Colombia, el Amazonas y Putumayo, formaron parte del Departamento de Azuay, el cual incluía territorios de los que actualmente son Ecuador, Colombia y Perú. A partir del siglo XX estos se convirtieron en comisarías de los Territorios Nacionales hasta que, por disposición de la Constitución Política de 1991, fueron elevados a la categoría de departamentos.

La Amazonia es la región terrestre más extensa de Colombia, abarcando el 35% del territorio, es decir, 403.000 km². Al mismo tiempo, se trata de la menos poblada por un amplio margen, pues tiene una densidad poblacional de tan solo 2,6 habitantes por km², en contraste con el resto de la geografía nacional (162,2 habitantes por km²). Según el reloj poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la Amazonia colombiana residían 1.123.582 habitantes en 2017, correspondientes al 2.3% del total de la población nacional, la cual ascendería a 49.450.000 habitantes en 2017. Su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia es del 1%, a pesar de albergar el 35% del territorio, lo que la convierte, por un amplio margen, en la región de menor producción del país (Meisel et. al, 2013). A lo largo de la historia, en lugar de colonizar y explotarla intensivamente la región, el Estado colombiano ha optado por favorecer la preservación de sus riquezas naturales; de esta manera, no sólo se ha mantenido como una región conservada, sino como un territorio extraño y distante para la gran mayoría de los colombianos, quienes desconocen sus características geográficas, económicas y socio-culturales.

No obstante, la marginalidad de la Amazonía colombiana cambiaría por un tiempo, a partir de mediados del siglo XIX, cuando se desataría la fiebre del caucho, gracias al aumento en los precios internacionales y al incremento en la demanda de látex desde Estados Unidos y Europa. Como la Amazonía era una región abundante en caucho, el territorio se convertiría en una zona estratégica con un inmenso valor comercial. Por lo tanto, se fundaron campamentos, centros de acopio, y una base industrial asociados con la comercialización de látex, dando inicio al proceso de colonización de la Amazonía, el desarrollo de ciudades y la conformación de una economía regional, más dependiente de los ciclos económicos de ciudades amazónicas emergentes como Iquitos (Perú) o Manaos (Brasil), que del *heartland* colombiano, dominado por Bogotá, Medellín y Cali.

Es en este contexto en el que se produce la fundación de la Casa Arana en 1903, por parte de Julio César Arana, un empresario peruano dedicado a la comercialización de caucho, en el corregimiento de La Chorrera, en el Departamento del Amazonas. De acuerdo a Serje (2011), "por los mismos años en que los capuchinos montaban su empresa en el Sibundoy y en el alto Putumayo, un poco más abajo, selva adentro, la Casa Arana montaba su sistema de explotación siringuera" (p.239). La fundación de la Casa fue apoyada por el Gobierno peruano, como una forma de ejercer soberanía sobre la zona, pues en la época había una disputa con Colombia por el territorio amazónico. La bonanza del caucho y el modelo empresarial de la Casa, basado en la coerción y la intimidación, permitieron que la empresa se convirtiera en una de las más rentables del Perú para la época. Tal fue su éxito que hacia 1907 la Casa Arana se convirtió en la *Peruvian Amazon Rubber Company*, con sedes en Londres y Nueva York. El problema consistía en que existían severos castigos para la población indígena; se estima que murieron más de 40.000 indígenas con la operación de la Casa Arana, lo que disminuyó considerablemente la población

indígena de la Amazonía colombiana. Desafortunadamente, para aquella época, instituciones privadas como la Casa Arana eran la cara del Estado colombiano en los espacios vacíos y zonas de frontera, por lo cual sus acciones eran consideradas la extensión de las decisiones tomadas desde los centros políticos como Bogotá. Adicionalmente, el papel de los caucheros en la historia de la Amazonía fue sumamente protagónico, no solo por la configuración de una economía regional y las atrocidades en contra de la población indígena, sino por el papel que desempeñarían en la guerra entre Colombia y Perú a partir de 1932.

La región Amazónica colombiana estaría dividida en dos áreas geoeconómicas: la primera es una zona mejor integrada a la economía nacional, relativamente poblada, que cuenta con un mayor ingreso y, en general, un mayor grado de intervención, lo que la asemeje al resto del país; en efecto, Caquetá con una población de 490 mil habitantes y Putumayo con 354 mil habitantes, representan el 75% de la población amazónica. La segunda es una Amazonía geográficamente aislada, con municipios que no se relacionan entre sí, bajos niveles de colonización, un amplio número de comunidades indígenas y cuya economía funciona como un enclave (Mapa No. 4).

Mapa No. 4 Resguardos Indígenas y Colectivos



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015.

El grueso de la red vial de la Amazonía se concentra en el anillo de poblamiento, en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare. Las vías más importantes, y que se encuentran en mejores condiciones, son las que comunican las capitales de estos tres departamentos con el interior del país. No obstante, la mayor parte de la región amazónica no tiene comunicación terrestre con el resto del país. Otro factor que afecta la comunicación de esta región con el resto del país, subyace en la navegabilidad fluvial, la cual es interrumpida por rápidos y raudales. Sin embargo, las proporciones de segmentos navegables en los principales ríos de la Amazonía colombiana son relativamente altas. Por ejemplo, el río Caquetá es navegable en 89% de su recorrido; el Putumayo, en 93%. Por su parte, los ríos Amazonas y Guaviare son navegables en todo su tramo. En este punto vale la pena resaltar el papel fundamental que desempeña el río Amazonas, el cual permite mantener una navegación mayor permanente a lo largo de sus 116 kilómetros de recorrido por territorio colombiano.

> El Caquetá y el Putumayo son los dos ríos colombianos más grandes que participan en la hoya amazónica. Ambos desembocan en el río Amazonas en puntos fuera del territorio nacional. Merced a ellos, Colombia se incorpora en una extensa red fluvial de 44.000 kilómetros. Aunque el comercio en esta zona es aún muy limitado, puede llegar a ser uno de los más importantes del Mundo, toda vez que productos de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia podrán movilizarse por sus aguas en forma muy económica (Bahamón, 2012, p.91).

Debido a la escasa comunicación terrestre de esta región con el resto del país y la dificultad en la navegación fluvial, los aeropuertos desempeñan un papel fundamental para mantenerla comunicada, sobre todo en zonas catalogadas como enclaves geopolíticos. Pero sin duda, se trataría de una de las

regiones colombianas con mayores desafíos, que a pesar de su importancia en biodiversidad, se encuentra entre aquellas con mayor incidencia de la pobreza. Los costos que implican el transporte de mercancías por vía aérea harían poco probable el desarrollo de una economía sostenible y atractiva, que motive la migración de inversión y recurso humano a esta región.

> Si pretendemos desarrollar la Amazonia, debemos empezar por aceptar que las vías terrestres serán el principal factor de transformación. Los sistemas aéreos y fluviales han mostrado su incoherencia con las condiciones y capacidades económicas de sus usuarios y por lo limitado de su esfera de influencia para despertar las fuerzas económicas. Si bien los medios fluvial y aéreo proyectan el sector desde y hacia el exterior, están muy lejos de producir su desarrollo intrínseco. Sólo las vías terrestres han mostrado en el transcurso de la historia, que marcan un decidido influjo (Bahamón, 2012, p.94).

Uno de los proyectos más importantes para dar respuesta a la ocupación de los espacios vacíos de la región amazónica, es la construcción de la "Carretera Marginal de la Selva" o "Troncal del Piedemonte", una iniciativa de hace más de 50 años, en la que se planteara la realización de una carretera que integrara a Ecuador, Colombia y Venezuela, en busca de una salida para el continente por vía terrestre, desde el Pacífico hasta el Atlántico, sin la necesidad de atravesar la cordillera de los Andes. El trayecto de 1.500 km² (incluido en el Plan Maestro de Transporte Intermodal al 2035), iría desde el puente internacional San Miguel, pasando por Santa Ana y Villagarzón (en el Putumayo), San José del Fragua, Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán (en el Caquetá), para llegar a San José del Guaviare (en el Guaviare), empalmar con la vía a Villavicencio (en el Meta) y seguir hacia Yopal (en el Casanare) para arribar a Arauca (en Arauca).

> Si alguien quisiera ir por carretera desde Puerto Rico (Meta), hasta Puerto Rico (Caquetá), tendría que dar la vuelta por Bogotá. En otras palabras, no hay una vía terrestre que una directamente la Orinoquia con la Amazonia. Esa vía terrestre sería la carretera marginal de la selva. Falta una decidida determinación oficial, que esté por encima del interés endógeno de sus departamentos, para culminar el esfuerzo que se ha venido haciendo desde 1965 y que se mostrará más adelante, construyendo los 200 kilómetros que hacen falta para integrar las dos regiones, entre San Juan de Arama (Meta), y San Vicente del Caguán (Caquetá). Cuando se hayan finalizado esfuerzos serios para consolidar la pacificación de esta región, que comienza con la integración vial, se les quitará de la mente a algunos colombianos, que puedan existir "repúblicas independientes" o "zonas de distensión" a escasos kilómetros de Bogotá (Bahamón, 2012, p.14).

Es importante que en la Amazonía haya una mayor conectividad, tanto interregional como intrarregional, para favorecer la configuración de economías locales y no de enclaves económicos que funcionan de manera aislada, tal como viene sucediendo en la actualidad. En ese sentido, la importancia geopolítica que reviste la Carretera Marginal de la Selva, que se encuentra en proceso de construcción, ya que podría impulsar la expansión del *hinterland* colombiano hacia su costado suroriental. Empero, se requiere, además de una mayor institucionalidad, una visión integral del territorio Amazónico, de manera que la política de desarrollo regional incorpore las dinámicas locales. La dinámica geopolítica del Estado Colombiano hacia la Amazonia pareciera ser la misma que existe hacia el contexto general de la región oriental del país. No existe aún una conciencia geopolítica clara hacia este territorio, por lo que estas zonas no

han logrado vincularse con los sistemas u órganos sobre los cuales se desarrolla la vida geográfica del Estado.

Por su parte, la región de la Orinoquia comprende los actuales departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. La vertiente hidrográfica del Orinoco comprende las sabanas naturales en una extensión de aproximadamente 254.000 km². De este total, aproximadamente 200.000 km² corresponden a la sabana y cerca de un 20% al piedemonte. La actividad económica de esta región del país se ha caracterizado durante los últimos 400 años por la extracción de diversos productos tales como: el ganado vacuno, los cueros, el caucho, el chicle, la sal, las plumas de garza, la quina, la sarrapia, el pendare, el chiquichiqui, las pieles de animales salvajes entre otros (Viloria, 2009). Cabe resaltar, que estas formas de explotación del medio siempre dependieron de la demanda en los mercados externos y pareciera que no dieron lugar a un desarrollo industrial local.

Durante la ocupación colonial española también se exportaron esclavos indígenas. Los primeros europeos que exploraron los Llanos Orientales procedían de Venezuela, entre ellos el español Alonso Herrera y los alemanes Nicolás de Ferdermán y Jorge Spira, quienes entre 1535 y 1539 recorrieron las llanuras del Arauca, Casanare y Meta. La conquista española causó estragos entre las poblaciones aborígenes; en efecto, diezmados por las enfermedades, acosados por los buscadores de esclavos o enfrentados a pagar los tributos a los encomenderos, algunos indígenas como los Sáliva y Achagua, se sometieron a las encomiendas y misiones establecidas en los Llanos por los misioneros, mientras que otros se evadieron y atacaban sistemáticamente las haciendas y fundaciones con el fin de obtener bienes de consumo.

> Este sistema misional de catequización se vio formalizado por el Convenio de Misiones, suscrito entre el Ministerio de Relaciones

> Exteriores y la Santa Sede, mediante el cual se delegaba a las órdenes misioneras "poderes extraordinarios para ejercer la autoridad civil, penal y judicial", con el cargo de jefes superiores de policía en todos los territorios habitados por las tribus nómades o habitantes de las selvas vírgenes (Serje, 2011, p.239).

Los misioneros de la compañía de Jesús, a quienes se les asignó el área de los Llanos Colombianos, Venezolanos y parte de las selvas actuales del Alto y Medio Orinoco, establecieron haciendas y baluartes de una economía que producía lozas, vajillas, mantas, especias, cacao, resinas naturales, pieles, telas, café y otros productos que enviaban a Santa Fe de Bogotá o que exportaban por el Orinoco hacia sus otras misiones. Durante los siglos XVII y XVIII los jesuitas fundaron asentamientos como: Chita, Támara, Nunchía, Morcote, Pore, Caviona, Moreno, Ten, Chire, Santiago de las Atalayas, San Martín, San Juan de los Llanos, Apiay, San Fernando de Atabapo y Maipures, entre otros.

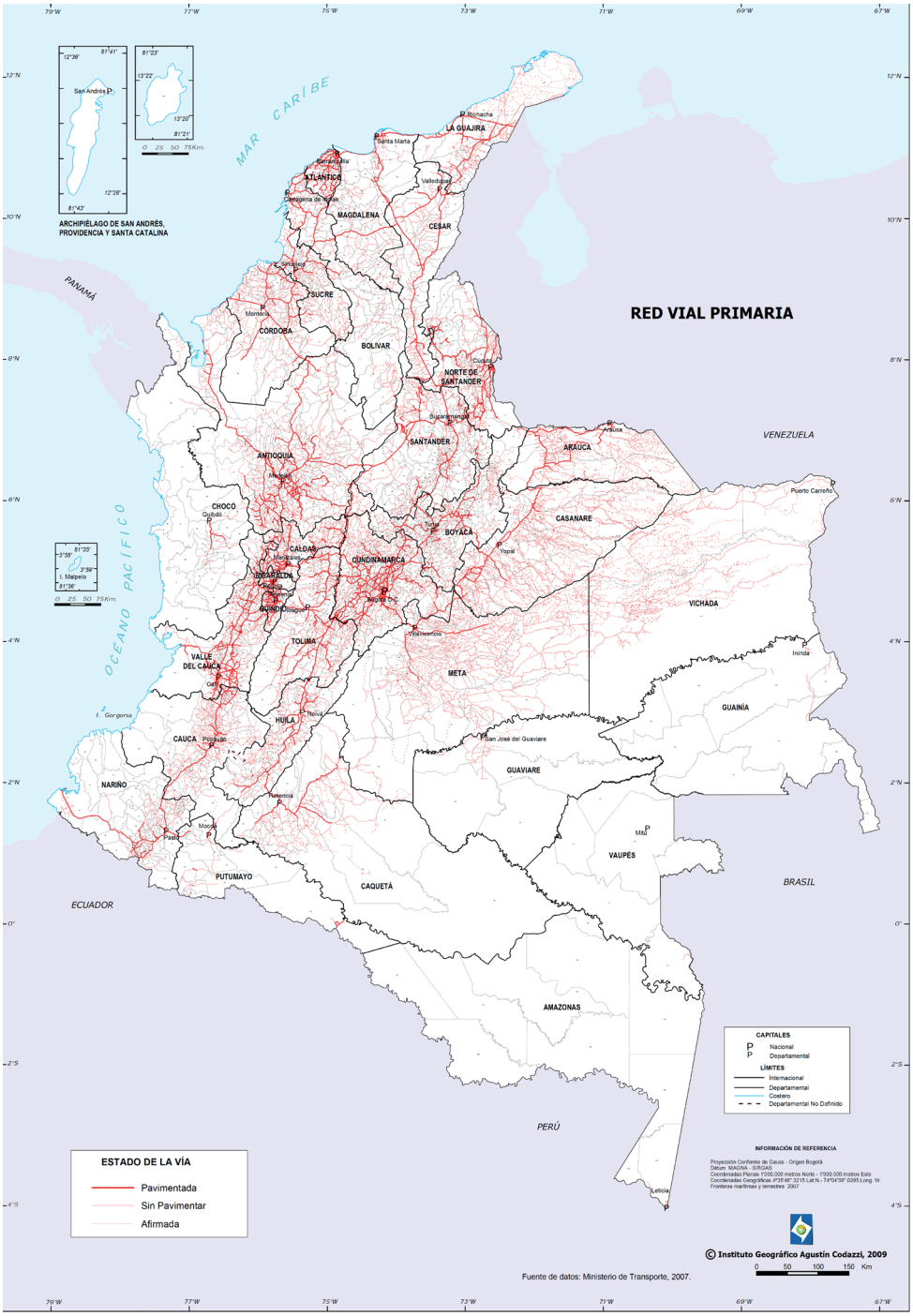
Estas misiones estaban localizadas tanto en el área del piedemonte de lo que hoy es Casanare y Meta como en la sabana y en las selvas a orillas del Orinoco. Uno de los baluartes de la economía de estos misioneros era la producción de ganado vacuno en las haciendas (también poseían bestias de carga). De acuerdo Viloria (2009), en un total de 9 misiones en el año de 1730, los jesuitas poseían alrededor de 102.000 cabezas de ganado. No obstante, el rey Carlos III terminaría expulsando a la Compañía de Jesús de todas las posesiones españolas en el año de 1767, por lo que diversas autoridades procedieron después al remate de los bienes y haciendas que los clérigos poseían.

Desde entonces y a pesar de la relativa cercanía con el núcleo vital de Colombia, llama la atención que la Orinoquia continúe siendo un territorio periférico y marginado, sin una adecuada comunicación vial (Mapa No. 5). Sin

embargo, el Gobierno colombiano, desde principios del siglo XX, realizaría diversos intentos de desarrollar una colonización dirigida hacia la Orinoquia; para el año de 1926, un interesante proyecto de Ley del Senado de la República señalaba la importancia de construir algunas vías importantes en la región. Pero sería durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo que se diera inicio a un plan de carreteras nacionales (Ley 3 de 1936), que incluía como vías de penetración al Llano, el trayecto que conducía de Pamplona a Arauca, la de Villavicencio a Puerto Carreño, y la de Casanare al río Meta (pasando por Sogamoso).

Así mismo, el primer vuelo realizado a la Orinoquia en hidroavión se llevaría a cabo en 1935, cuando fueron visitadas las poblaciones de Cabuyaro, Arauca, Orocué y Puerto Carreño, mientras que la navegación por el río Meta comenzaría a desarrollarse en embarcaciones más modernas, debido a que la región entraba en un proceso de desarrollo agropecuario y comercial. La sociedad que se ha desarrollado en la Orinoquia colombiana, ha sido producto de una colonización continua de 400 años de europeos, españoles, italianos y siriolibaneses, como de población procedente de los departamentos del interior del país. Esta sociedad está hoy formada por el sector indígena, el llanero o colono antiguo, y el sector de una colonización reciente de hace aproximadamente 20 años. No obstante, uno de los problemas más señalados en los espacios vacíos territoriales, es el de la ausencia de vías de comunicación o medios de transporte para sacar los productos de esta amalgama de culturas.

Mapa No. 5 Red Vial en Colombia



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2009.

En el caso de la Orinoquia, la dificultad de transportar las cosechas de las áreas circundantes a los ríos Ariari, Guejar y de las fuentes del río Guaviare, parecieran ser bastante complicadas. Para un territorio de 255.000 km², las vías de comunicación en la actualidad no lograrían darle solución a las dificultades de incomunicación de la región, incluso con los proyectos terrestres y fluviales contemplados hasta la actualidad. La perspectiva de construcción de una vía moderna entre Bogotá a Puerto Carreño es geoestratégicamente importante; el tramo de Bogotá a Villavicencio, en una longitud total de 108.8 km., está en perfectas condiciones; el tramo de Villavicencio a Puerto Carreño, con una extensión de 873 km está pavimentado hasta Puerto Gaitán, pero desde Puerto Gaitán hasta la base aérea de Marandúa (en el Vichada), haría falta la construcción de un tramo de 517 km.

En consecuencia, algunas comunidades indígenas y de campesinos llaneros siguen padeciendo los problemas de aislamiento para la provisión de servicios básicos como educación, salud o energía eléctrica, así como para sacar sus productos al *hinterland* o a los mercados internacionales. Mientras lo anterior persista, estas comunidades seguirán presentando altos índices de analfabetismo, deserción escolar, desnutrición, enfermedades y pobreza; algo que no debería suceder, ya que como hábitat para la subsistencia de los grupos humanos, la Orinoquia se diferencia de otras zonas bajas tropicales de Colombia en que su clima es relativamente sano, si se exceptúan algunas áreas pantanosas. A pesar de la acidez de sus suelos (a excepción del piedemonte), las tierras planas adaptables a una agricultura comercial son mecanizables y por ello, una vez establecidas las vías, sería rentable su explotación, si bien es cierto que la economía de las últimas décadas ha girado en torno a los pozos petroleros explotados en dicha región.

> Observando la importancia geopolítica de los Llanos Orientales por su extensión, sus riquezas petrolífera, agrícola y ganadera, su cercanía a la región central, la proximidad al vecino país de Venezuela y el evidente atraso en que se mantiene, encontramos la razón para que los dos principales grupos subversivos, las FARC y el ELN, hayan mostrado predilección por ellos. En las tres últimas décadas, el teatro de operaciones de la subversión ha sido la Colombia que queda al este de la Cordillera Oriental y que está conformada por la Amazonia y la Orinoquia. Sus condiciones geográficas y el narcotráfico han sido los ingredientes para un clima de inestabilidad que presenta un panorama desalentador (Bahamón, 2012, p.118).

3.2 Los Espacios Vacíos del Pacífico y el Caribe

La región Caribe está conformada por los departamentos continentales de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, y el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En conjunto representarían el 11,6% del territorio nacional. En 2017 la población representó el 21,6% (10.725.000 habitantes), del total de los colombianos y aportó el 15,1% del PIB total país. Sin embargo, los dos extremos terrestres de la región Caribe siguen caracterizándose como espacios vacíos; los bosques tropicales del Chocó en el noroeste y el desierto de Guajira en el noreste continúan escasamente habitados.

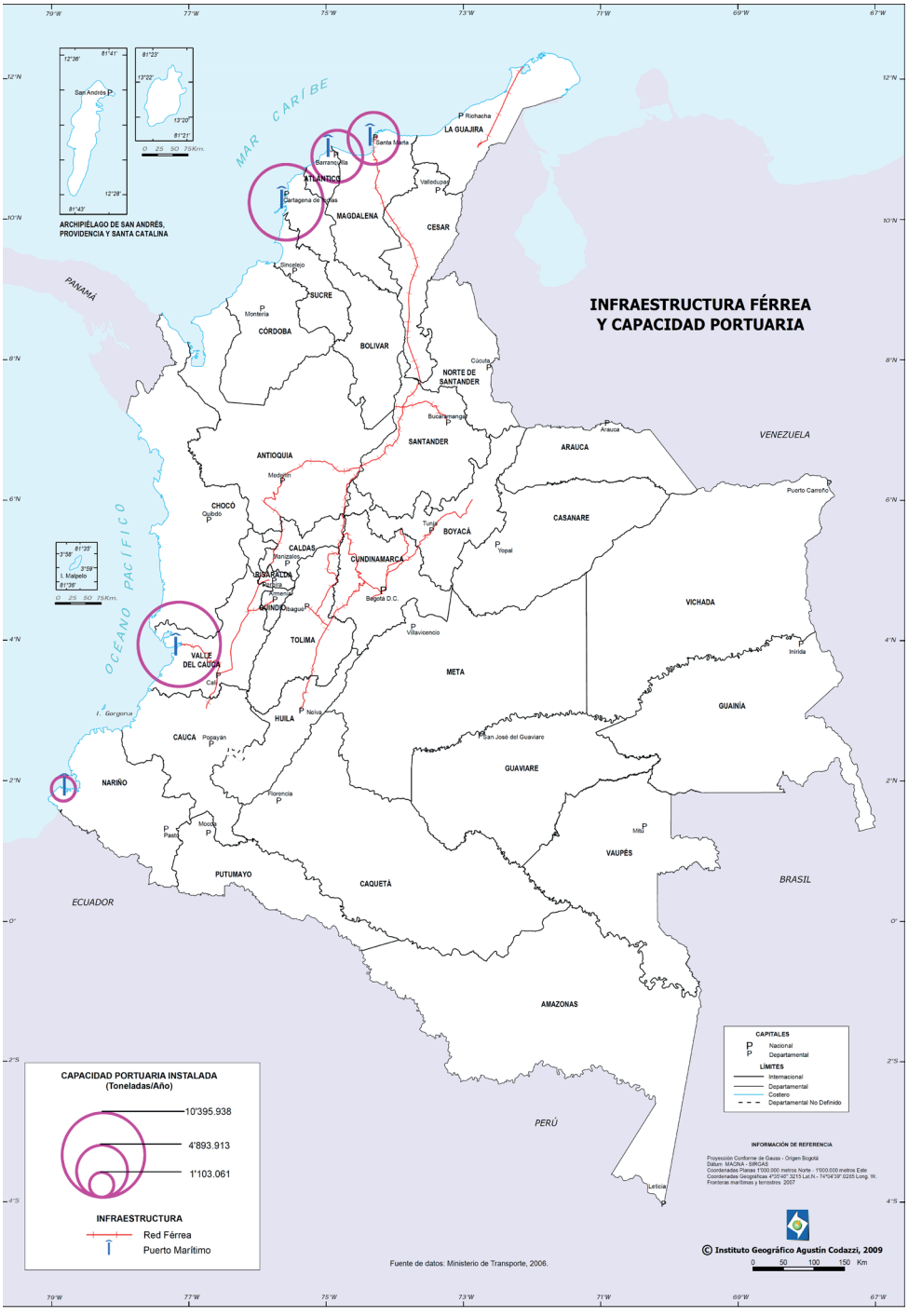
No obstante, a lo largo de la historia colombiana, la zona de las tierras bajas más pobladas ha sido la costa caribeña. Antes de la conquista española, aparentemente contenía importantes concentraciones poblacionales, pero a causa de la conquista española, estas culturas indígenas fueron diezmadas. Sin

embargo, la costa caribeña asumiría en el periodo colonial, un nuevo papel como intermediario entre el interior más poblado y el mundo exterior, particularmente Europa. A través de los puertos marítimos de Cartagena de Indias (durante la colonia), Santa Marta y Barranquilla (a partir del siglo XIX), fluían bienes importados y exportados. Para estas ciudades portuarias (Mapa No. 6), una conexión efectiva con el río Magdalena, que unía la costa con el interior, era un asunto de primer orden; otra parte de la zona caribeña, el Istmo de Panamá, también funcionó como un punto de tránsito para el comercio, en este caso entre el mundo atlántico y la costa del Pacífico de las Américas.

En gran parte debido a su vinculación más estrecha con el comercio exterior y con el mundo exterior en general, la zona del Caribe desarrolló características distintas a las del resto del país, y su población se ha identificado más, con la vida y cultura del Caribe, que con la cultura andina del interior. Sin embargo, a pesar del vínculo histórico y cultural con la Cuenca del Caribe, Colombia ha descuidado su presencia en el Caribe, lo cual resulta incomprensible si se tiene en cuenta la extensión del litoral colombiano sobre el mar Caribe (1.600 km.), y el área de mar territorial y zona económica exclusiva que en él posee (575.000 km2.), la cual aún puede ser caracterizada como un espacio vacío de carácter marítimo.

Razón por la cual, Colombia es un país que en su historia le ha dado la espalda al mar, tanto en el Caribe, como en el Pacífico. Incluso, se podría decir que los habitantes de las costas colombianas y sus islas, se desarrollan de espaldas al mar, teniendo como máxima aspiración, establecerse en algún momento en el interior del país.

Mapa No. 6 Infraestructura Portuaria



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2009.

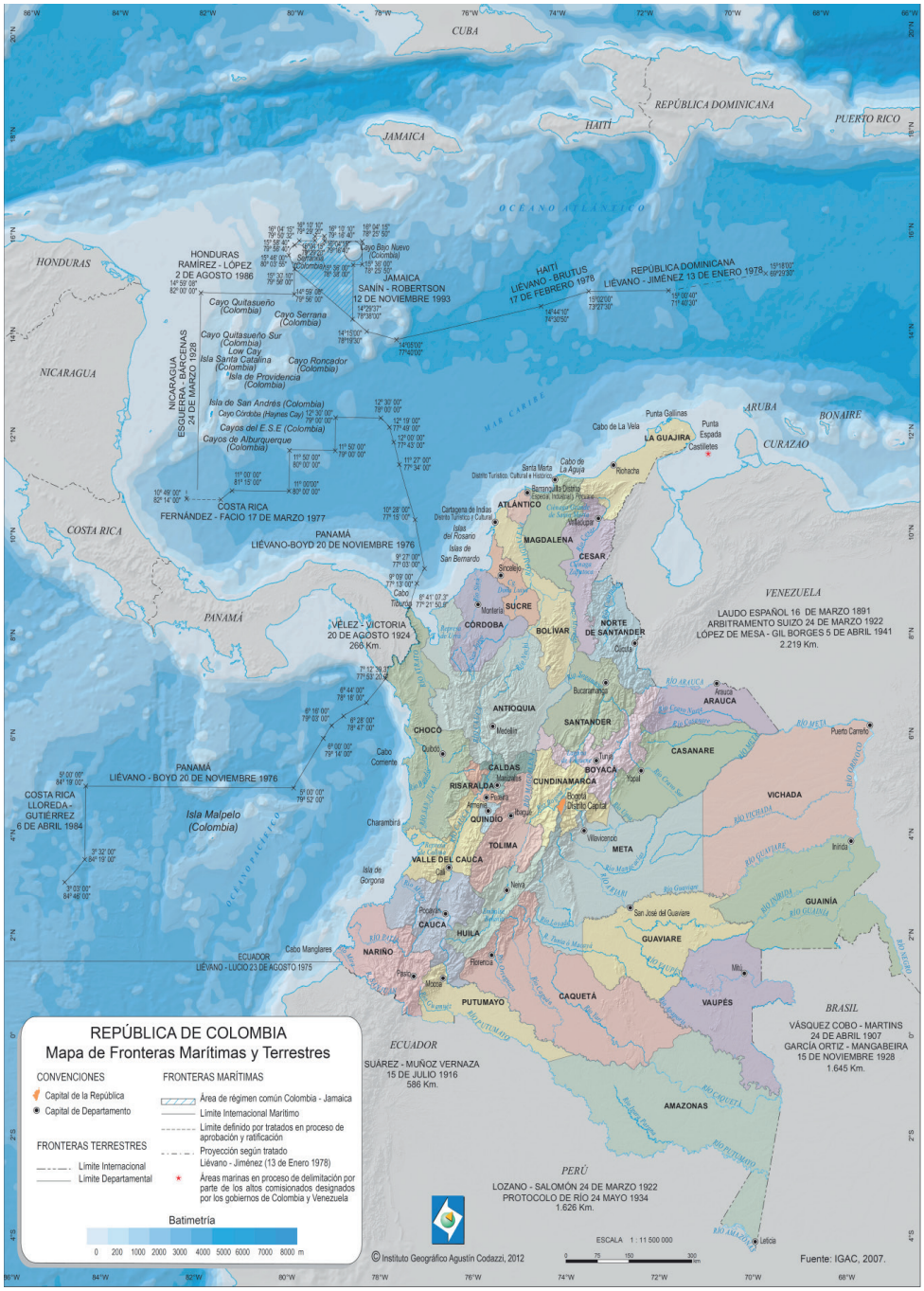
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (así como los cayos Blowing, Rocks, Cangrejo, Córdoba, Alburquerque, Roncador, Sucre, y los bancos Alicia, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo y Quitasueño), al encontrarse en el suroccidente del Mar Caribe, eran visitadas en época prehispánica con alguna frecuencia por los misquitos, indígenas de origen chibcha que habitaban las costas de Centroamérica. Eran atraídos por los bosques y aguas marinas del archipiélago, en donde se aprovisionaban de finas maderas y pescaban tortugas, langostas, caracoles y peces. Posteriormente, cuando el Mar Caribe fue descubierto por europeos, éstos comenzaron a llegar al Archipiélago, en el siglo XVI. En un principio, tendrían mayor importancia estratégica las islas de Santa Catalina y Providencia, gracias a sus altas montañas, sirviendo como guía de navegación para los aventureros ingleses y holandeses, los cuales terminarían instalando sus fuertes como estrategia ofensiva y defensiva; es así como fueron base de corsarios y piratas y sitios de confrontación de los imperios europeos.

En el siglo XVI, los españoles prestaron poca atención a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sólo mostrarían interés cuando los ingleses fundaron ahí sus colonias, en el siglo XVII. Pero los ataques a los barcos españoles que traían oro desde Perú llevarían al gobierno español, establecido en Cartagena, a expulsar a los ingleses de Providencia. Aun así, entre 1677 y 1780, el archipiélago quedaría en el abandono y fueron unas islas casi deshabitadas, visitadas esporádicamente por jamaiquinos que llegaban en busca de maderas o pesca de tortugas. En 1788 se dio una nueva colonización con el permiso del gobierno español, y para 1795 este territorio ya se consideraba como un cantón bajo la jurisdicción de Cartagena hasta inicios de la Independencia, cuando las islas de Providencia y San Andrés se adhirieron a la República de Colombia y reconocieron la Constitución de Cúcuta de 1822.

Desde entonces, y como pareciera fuera la norma histórica, los territorios marítimos y terrestres del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siguen desvinculados de la dinámica nacional (Mapa No. 7). El principal problema es que el Estado colombiano ha desconocido las características geográficas de la isla y la condición étnica de la población. Pero por sobre todo, su valor geoestratégico como el "Malta" colombiano en la Cuenca del Caribe; a pesar de su importancia, la zona aún se constituye como un espacio vacío. La carencia de agua potable y un adecuado sistema de salud, energía costosa, calles deterioradas, falta de oportunidades laborales, son solo algunos de los problemas históricos a los cuales el Estado no ha dado una definitiva solución. Además, las condiciones económicas se han venido agravando desde que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, le concediera en 2012 a Nicaragua, jurisdicción sobre las aguas que comprenden el banco de peces Luna Verde, diezmando el consumo de langosta espinosa y caracol pala, habituales en la dieta de los raizales.

No existe otro lugar, salvo la Guajira, en el que la soberanía colombiana esté seriamente amenazada como es este territorio insular del país. Adicionalmente a las nuevas pretensiones jurídicas de Nicaragua de acceder a una plataforma continental extendida, ese país ha ofrecido ciudadanía a raizales en las islas. Sin embargo, los raizales han venido demandando, y cada vez con mayor vehemencia, la declaración del archipiélago como Territorio Étnico Raizal y Autogobernado; esa, según ellos, sería la única forma de borrar la eterna humillación y abandono.

Mapa No. 7 Fronteras Marítimas y Terrestres



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2007.

La importancia estratégica y política que tuvieron los territorios caribeños y sus pueblos en el proceso de independencia y consolidación de la República fue sobresaliente; pero "de ser el espacio geopolítico más importante para la política exterior de la Gran Colombia, luego de la disolución de ésta y del surgimiento de la Nueva Granada, el Caribe fue quedando relegado con el paso del tiempo al último lugar de las prioridades de los gobiernos republicanos" (Bell, 2010, p.70). Si bien a lo largo del Siglo XIX, la política exterior de Colombia fue muy activa en defender la soberanía colombiana de los territorios caribeños, el Estado realizaría pocos esfuerzos para tener una presencia efectiva y activa en el Caribe. Las razones para ello los sintetiza Bell (2010), de la siguiente manera: La primera de ellas fue la extrema pobreza fiscal de los gobiernos centrales y seccionales para promover vías de comunicación y el desarrollo de la navegación marítima con la creación de una marina mercante con bandera nacional; la segunda fueron los innumerables conflictos internos, que dificultaban el diseño de políticas para fomentar la presencia del Estado en el litoral Caribe y en los países pertenecientes a la región; y la tercera sería el desdén y desprecio de las elites gobernantes hacia las costas de tierra caliente cuya población estaba compuesta mayoritariamente por población mestiza de orígenes africanas.

Otro territorio caribeño que se configura como espacio vacío es la Guajira, la cual ha sido objeto de un constante e histórico abandono por parte del Estado. Es el territorio más septentrional de Colombia, con un clima cálido y seco, de temperaturas de 29°C en promedio; así mismo, los vientos alisios soplan durante diez meses al año, mientras la lluvia se reduce a los dos meses restantes. Estos factores climáticos, aunado a la aridez del suelo (Mapa No. 8), han sido adversos al desarrollo de una agricultura comercial y sostenible en gran parte del territorio guajiro, conllevando a que la economía regional, antes de la explotación carbonífera, se apoyara principalmente en la práctica de la ilegalidad como el contrabando en las zonas de frontera, lejos del gobierno central y en ausencia de instituciones fuertes, como una estrategia de supervivencia por

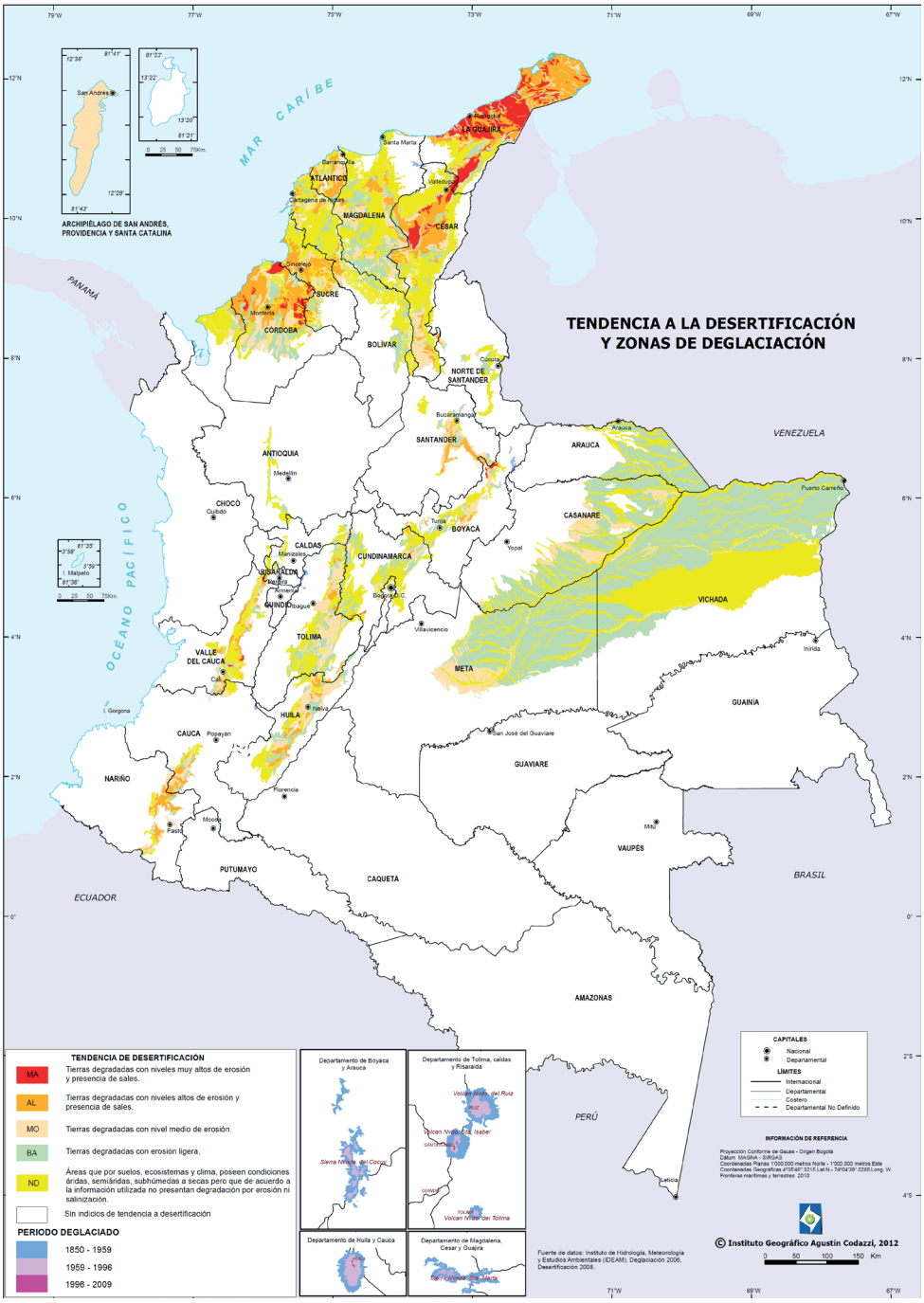
parte de su población nativa y de los comerciantes. Dicha ilegalidad se remonta a los tiempos coloniales, ya que la inflexibilidad de las instituciones coloniales españolas no permitió el desarrollo de fronteras vivas[53], como sí ocurrió en las colonias inglesas de Norteamérica.

En la misma vía, el Estado colombiano parece no haber acometido las inversiones necesarias para que, desde finales del siglo XIX, esta región pudiese haber creado los incentivos para la llegada de capitales privados; en consecuencia, la debilidad institucional aparentaría ser la principal causa por la cual en ciertas zonas del territorio se fortalecerían actividades económicas al margen de la ley. Los empresarios y dirigentes regionales vinculados a las actividades extractivas y al comercio, no pudieron crear las instituciones ni el ambiente empresarial propicio para que en la economía guajira se consolidara un tejido productivo basado en la producción exportadora, con empresas competitivas y una economía respetuosa de la legislación nacional.

En contraste, hacia el sur del territorio, la agricultura ha sido muy importante, al contar con tierra fértil y abundantes recursos hídricos. Lo cierto es que en todo el departamento de la Guajira, el comercio fue impulsado en su mayoría por empresarios extranjeros (franceses, italianos y árabes), quienes junto con los indígenas wayuu, crearon su propia dinámica económica en función de mercados externos como Curazao, Venezuela e incluso Estados Unidos.

53. Las fronteras vivas son aquellas que tienen un intercambio permanente y una gran dinámica económico-social. En contraste, las fronteras muertas o vacías son las que carecen de intercambio efectivo y generalmente se enmarcan dentro de regiones selváticas, desérticas o deshabitadas.

Mapa No.8 Desertificación y Deglaciación



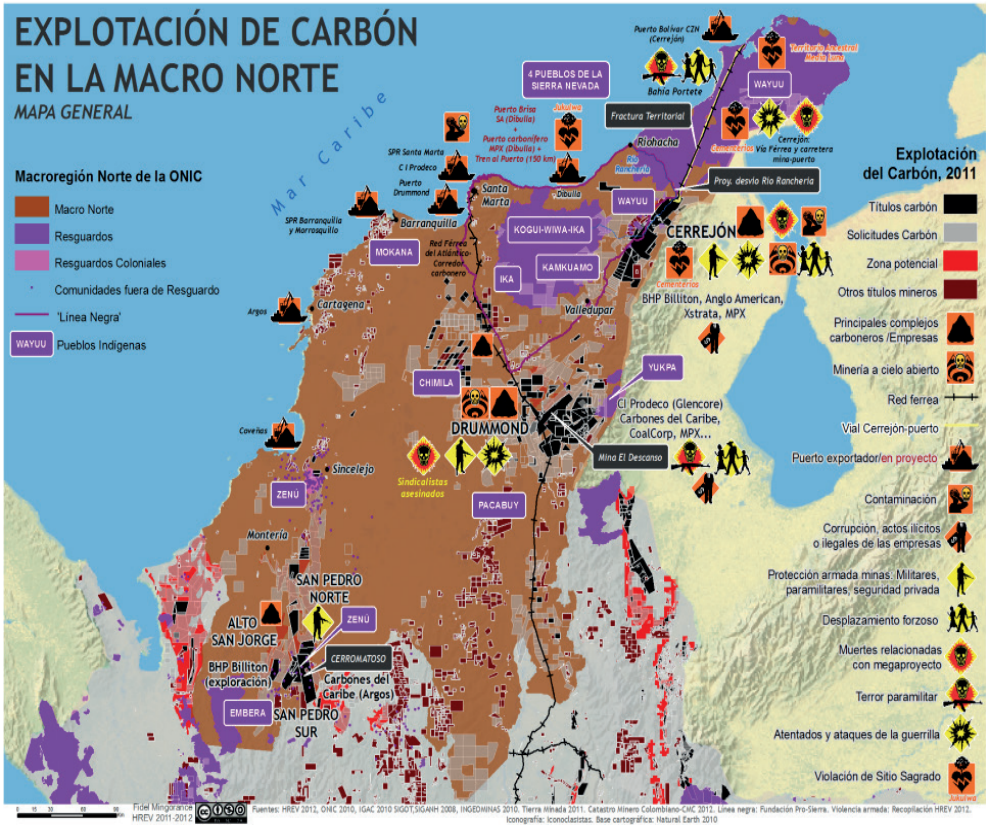
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

El desarrollo económico de La Guajira no se ha logrado consolidar por sus limitaciones agrológicas y ambientales, y sobre todo, por la ausencia de una política de inversiones para este territorio del Caribe colombiano.

> Como las actividades económicas de esta zona del país generaban escasos encadenamientos, pagaban pocos impuestos y las vías de comunicación estaban en mal estado, ciudades como Riohacha no tuvieron los recursos para construir una infraestructura de servicios y comunicaciones, que la hiciera atractiva en el largo plazo para los empresarios que lograron amasar fortuna en su territorio. Por lo anterior, la mayoría de estos negociantes se fueron de La Guajira para establecerse en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Santa Marta, París o Curazao. Estos comerciantes adinerados iban en busca de nuevas oportunidades de negocio, una mejor educación para sus hijos, nuevas relaciones sociales y las comodidades citadinas que ofrece el progreso económico (Viloria, 2013, p.53).

La falta de condiciones para el desarrollo de una economía lícita sostenible, ha influido en los problemas de inseguridad de la Guajira, y en general, de toda la zona de frontera que Colombia comparte con Venezuela. La frontera de 2.219 km de largo que separa a Colombia de Venezuela es extensa y diversa; ni Bogotá ni Caracas han prestado suficiente atención a las regiones fronterizas, que sufren de pobreza extrema y un conflicto armado tripartito que involucra a fuerzas del gobierno colombiano, grupos insurgentes como las FARC y el ELN, y bandas criminales como el Clan del Golfo (Mapa No. 9). Estas organizaciones compiten por el control del narcotráfico en la región y usan la frontera porosa para apoyar sus transacciones ilícitas, obtener armas y proveer refugio de las Fuerzas Militares de Colombia.

Mapa No. 9 Carbón y Grupos Armados



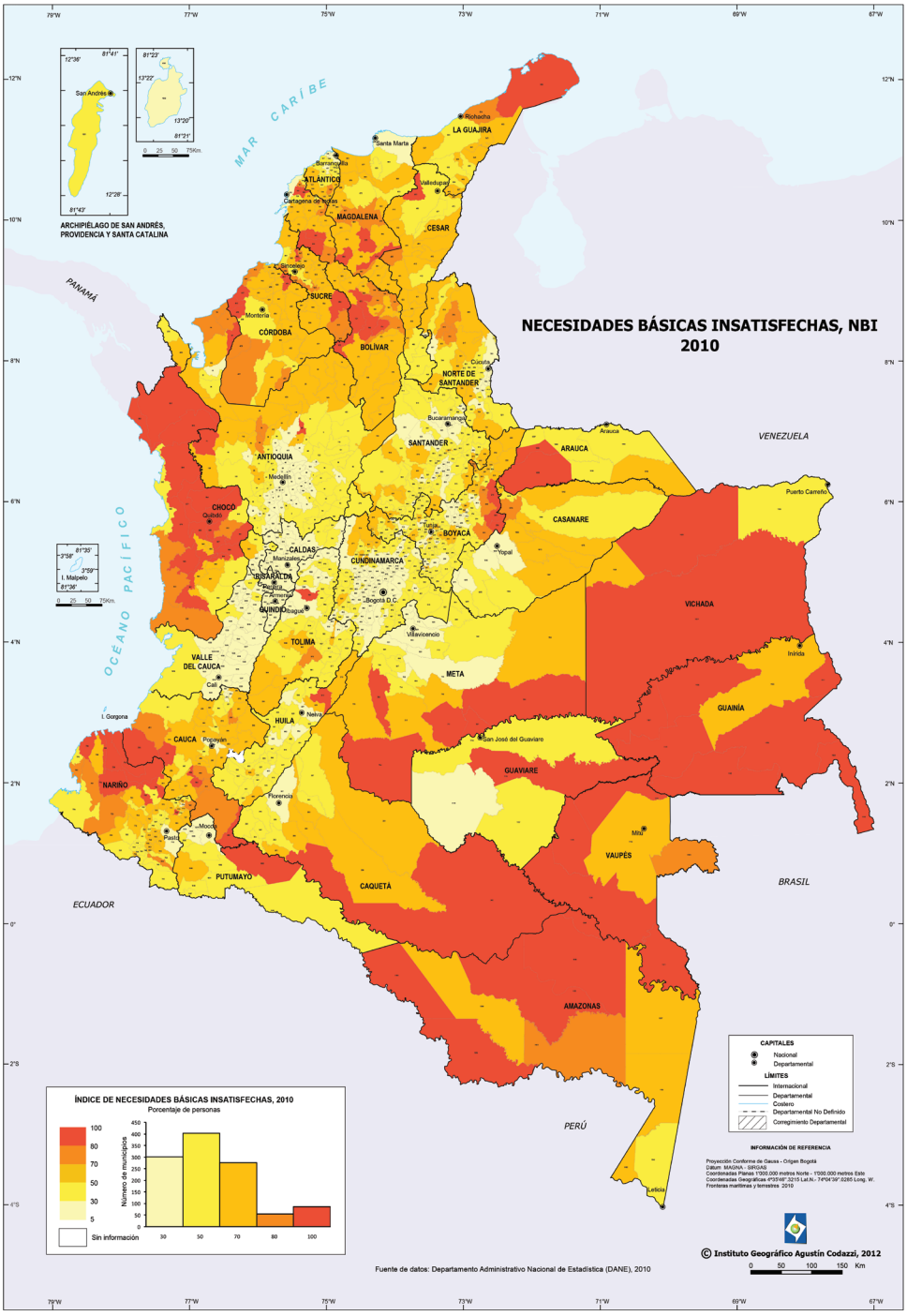
Fuente: Geoactivismo.org

La región fronteriza colombo-venezolana, que incluyen a los departamentos colombianos de La Guajira, César, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía, y los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, exhiben muchos de los factores que caracterizan a los espacios vacíos. Los grupos al margen de la ley actúan como el gobierno de facto, recaudando impuestos, dictando normas sociales y controlando la producción agrícola (principalmente el cultivo de hoja de coca). Además, todos los grupos armados ilegales intentan controlar o influir en los gobiernos locales, a través de la corrupción o las amenazas e intimidación de los funcionarios locales.

Pero más allá de los problemas de seguridad, la falta de presencia estatal, combinada con la pobreza, ha dejado a las poblaciones vulnerables a grupos ilegales. Aparte de las principales ciudades fronterizas de Cúcuta y San Cristóbal (Táchira), que albergan el comercio transfronterizo y donde se extiende la principal carretera que une Bogotá y Caracas, la mayoría de las áreas están subdesarrolladas y son inaccesibles. El DANE estima que el 50 al 60% de la población en La Guajira y Norte de Santander, el 61 al 70% por ciento en Cesar, y un número desconocido en Arauca, Vichada y Guainía, viven por debajo de la línea de pobreza (Mapa No. 10). Numerosos municipios de la región fronteriza siguen aislados por la escasa infraestructura, y tan solo el 15% de los habitantes rurales tienen acceso a servicios telefónicos, 62% a agua potable y 32% a servicios de tratamiento de aguas residuales.

Además existe una resistencia cultural y social al Estado; la región fronteriza colombiana es el hogar de aproximadamente 80 grupos indígenas que viven en regiones autónomas que fueron otorgados bajo la Constitución de 1991. Los más prominentes en la región son los casi 100.000 Wayuu de La Guajira, algunos de los cuales están bien armados y fuertemente involucrados en el comercio de contrabando. La recaudación de impuestos es otro buen ejemplo de resistencia social. La capacidad de Colombia para cobrar impuestos a sus ciudadanos es lamentablemente baja; de hecho, menos del 37% de la población elegible paga impuestos a la renta y alrededor del 28% de los colombianos sienten que la evasión de impuestos está justificada (Rabasa et. al, 2007). Cabe señalar que incluso cuando hay presencia estatal, la eficacia de las agencias estatales se ve obstaculizada por la rivalidad entre los propios organismos del Estado, y por la escasa coordinación e intercambio de información.

Mapa No. 10 Necesidades Básicas Insatisfechas 2010



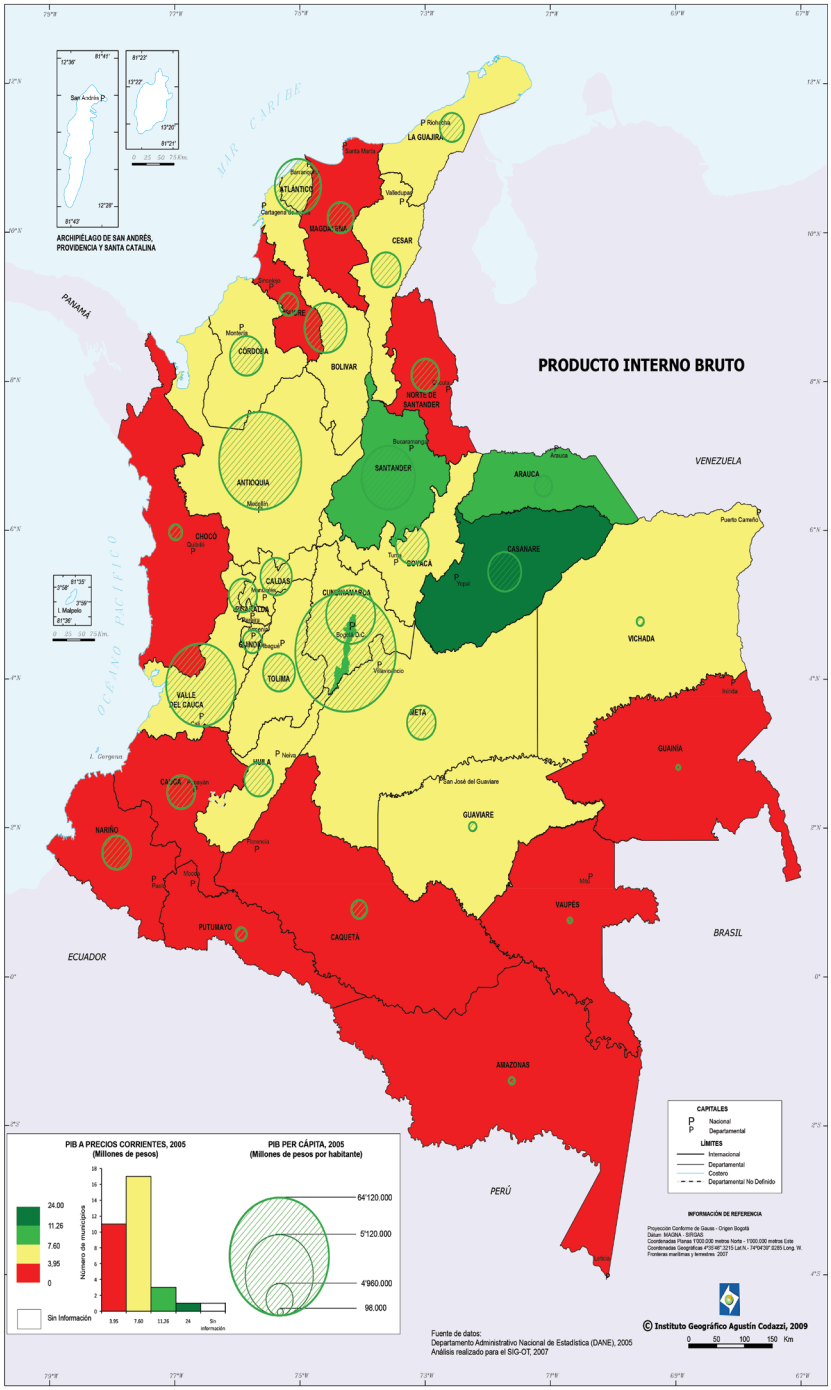
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

La región Pacífico está conformada por los departamentos del Chocó, Valle del Cauca (Buenaventura), Cauca y Nariño. El Pacífico colombiano, geopolíticamente hablando, lo conforman tres entidades geográficas: el océano Pacífico, las islas y el Andén Pacífico. El Andén Pacífico abarca una superficie de 83.170 Km², representando el 7% del territorio continental y su población aproximada es de 1.200.000 habitantes; el océano pacífico colombiano cubre una superficie de 339.100 km², representando el 16,4% de la geografía nacional; y las principales islas del Pacífico colombiano son, Cacahual, Cangreja, Ajicito, Micay, Sanquianca, Cocal, El Gallo, Viciosa, El Morro, así como las de mayor importancia: Malpelo y Gorgona.

Hay cuatro elementos relevantes en el medio ambiente que caracteriza al Pacífico colombiano. Primero, la presencia del mar, que no es solo el Océano Pacífico sino su variabilidad climática; Segundo, el relieve andino, que no es solo la Cordillera Occidental, sino la dificultad que esta impone en la comunicación con otras regiones; Tercero, la riqueza hidrográfica, ríos y cuerpos de agua, que más allá de la explotación artesanal del oro, no se traduce en una fuente de riqueza y solo medianamente resuelve el problema de comunicación al interior de la región; y Cuarto, el clima, específicamente la condición de humedad y precipitación excesiva, una de las más altas del mundo, que desafían las condiciones de vida de sus habitantes.

La economía del Pacífico es una de las más rezagadas de Colombia; en términos de desarrollo económico, cuenta con un producto por habitante que es menos de la mitad del observado en el agregado nacional y casi una tercera parte del que tiene la región Andina (Mapa No. 11).

Mapa No. 11 Producto Interno Bruto



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2009.

Pero para comprender las diferencias en el desarrollo económico entre el Pacífico y las demás regiones del país, es preciso conocer el papel que ha jugado la geografía, por el aislamiento económico que se observa en la región, presente en el poblamiento de su territorio incluso antes del período colonial. Desde la Colonia, la Independencia e incluso en las guerras civiles de finales del siglo XIX, la costa pacífica colombiana fue parte de intereses de comerciantes, corsarios piratas y fuerzas independentistas que luchaban por controlar los pequeños puertos y las rutas marítimas comerciales que llegaban de Panamá y salían a Perú y a Chile. Posteriormente, al finalizar el régimen colonial español, un Estado republicano surgido de lo que quedó de la Gran Colombia, tuvo que adelantar grandes esfuerzos para mantener una unidad territorial y un consenso político de la "Nación". Pero al parecer no todos los territorios deseaban anexarse a Colombia; por ejemplo, a la discusión, expedición y firma de la primera Constitución Granadina en 1832, no concurrieron los representantes de las Provincias Caucanas de Buenaventura, Chocó, Pasto y Popayán, quienes insistían en anexarse al Ecuador.

En ese contexto, Colombia centralizó sus esfuerzos en realizar sus importaciones y exportaciones por el mar Caribe, utilizando como vía de acceso el río Magdalena y algunas vías terrestres construidas a lo largo de los valles y cordilleras que corrían en dirección sur norte, algo más fácil que atravesarlas para llegar al Pacífico. Por lo tanto, la característica más sobresaliente del Pacífico colombiano es su aislamiento geográfico. Muy pronto las necesidades del país crecieron, especialmente la exportación de café y se requería con urgencia habilitar una vía de comunicación al Pacífico, dando como resultado el desarrollo de Buenaventura.

Mientras tanto, el Chocó tuvo unas condiciones históricas diferentes a las de otros departamentos del país, ya que su colonización pareciera ser

consecuencia de la búsqueda de oro, lo que se traduciría en su demografía ya que el patrón de poblamiento fue disperso e improvisado y los poblados eran centros mineros o lugares de depósito que no se pensaron propiamente como ciudades. Es decir, los colonos no tuvieron intenciones de asentamiento más allá de unas colonias extractivas que ofrecieran la oportunidad de fortuna rápida y posterior migración a lugares más saludables. Como lo señala Sachs (2006), las condiciones geográficas de aislamiento que caracterizan la geografía chocoana, así como su intenso régimen lluvioso que la convierte en la región con más altos índices de pluviosidad en todo el hemisferio, son factores determinantes del estado de atraso relativo de la economía departamental.

Si bien hacia finales del siglo XIX, el Chocó experimentaba un período de prosperidad, gracias al auge de las exportaciones de oro y platino, ya era notoria la falta de vías de comunicación, iglesias, colegios y edificios oficiales, y el ambiente económico que se vivía era de oferta reducida de bienes y precios altos. Una precaria situación económica, agravada por los altos índices de violencia y la presencia de grupos al margen de la ley, parecen haber colocado al departamento en clara desventaja frente a otras regiones del país, ya que uno de los problemas críticos en los últimos años ha sido el desplazamiento de personas; a partir de 1996, se intensificó el conflicto armado en el departamento y paulatinamente ha ido cubriendo todos sus municipios. Se han registrado enfrentamientos directos entre las guerrillas y bandas criminales que han puesto en serio peligro a la población civil. Las zonas más afectadas por estos combates son el bajo y medio Atrato, medio San Juan, Juradó y el eje vial Quibdó-Medellín. Como consecuencia de esta situación, grandes grupos de la población se han visto obligados a desplazarse forzadamente hacia otros lugares del departamento y del país.

Adicionalmente, una de las lecturas tradicionales que se hace sobre las causas del atraso relativo del Chocó es su alta corrupción. No obstante, y como lo afirma Bonet (2008), "al simplemente asumir que la causa de su atraso son los altos niveles de corrupción, se está desconociendo la realidad histórica de abandono estatal, de debilidad institucional y de condiciones geográficas y climáticas adversas que han condicionado su bajo desarrollo social y económico" (p.48).

En Buenaventura, el panorama no ha sido distinto; este municipio tuvo sus orígenes como asentamiento y no propiamente como una población. Las intenciones, de finales del siglo XIX, de ver a Buenaventura desarrollada a partir de su potencial portuario se vieron limitadas por las condiciones geográficas que complicaban su construcción (espesa selva, alta humedad, alta temperatura). Un hecho notable fue que para esta misma época Buenaventura fue azotada por la viruela y la fiebre amarilla, enfermedades que devastaron la quinta parte de la población (Pérez, 2008).

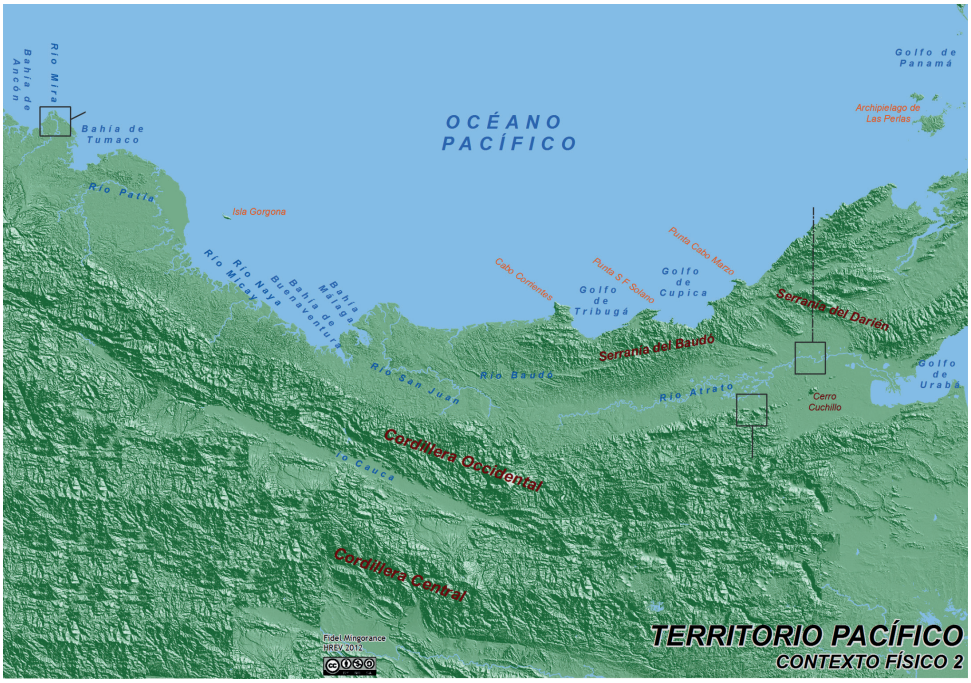
Por su lado, en el departamento del Cauca, las diferencias culturales y la variedad étnica y geográfica, han causado conflictos en la tenencia de la tierra, siendo el segundo departamento con mayor desigualdad en este respecto (Gamarra, 2007). Para los blancos y mestizos la tierra es un factor de producción, pero para las minorías étnicas la tierra es además, el espacio en el que afirman su identidad y ejercen su autoridad.

La región del Pacífico es menos urbana que las demás regiones de Colombia, y en relación con la superficie que ocupa es una de las menos habitadas. En el Pacífico más del 50% de la población habita en áreas rurales dispersas, particularidad que solo es comparable con la región del Amazonas. En el Pacífico hay en promedio 30,7 habitantes por km². Desde el punto de vista racial, 33%

se considera afro descendiente y 13% indígena; exceptuando algunos casos en Cauca y Nariño, las tierras bajas del Pacífico son en esencia multiculturales. En 26 de los 137 municipios de la región, 3 en Cauca y 24 en Nariño, la población afrocolombiana o indígena representa menos del 1%, mientras que en 39 municipios de la región, estos grupos de población representan más del 95%, 8 en Cauca, 8 en Nariño y 23 en Chocó (Romero, 2009).

En pocas regiones del país la geografía es tan importante para la economía como en el Pacífico, ya que los colonizadores no mostraron mayores intereses por transformar su entorno económico, dadas las condiciones geográficas. En su relación con el espacio, se muestra que para el territorio que ocupa, el Pacifico es una de las regiones con menos productividad por km², si se compara con regiones como la Andina o Caribe; sólo llegaría a ser más productiva que las regiones de la Orinoquia y la Amazonia. Como el Océano Pacífico es una constante para toda la región, la formación de su suelo la divide en dos cuerpos que permiten identificar dos tipos de superficie a lado y lado del Cabo Corrientes, un arrecife donde el mar impacta con violencia y que se encuentra a la altura del municipio chocoano de Bajo Baudó (Mapa No. 12); al norte del Cabo sobresalen los acantilados rocosos, las bahías y ensenadas, mientras que al sur del Cabo, se encuentra la llanura inundable del Pacífico, compuesta por la presencia de ciénagas y esteros. Esta diferenciación, en donde la geografía está presente, también repercute sobre lo económico; muestra porque en la mitad sur de la región se registra la actividad portuaria y las salidas del comercio exterior colombiano hacia el Océano Pacífico, a través de los puertos de Buenaventura y Tumaco, y no a través del Chocó.

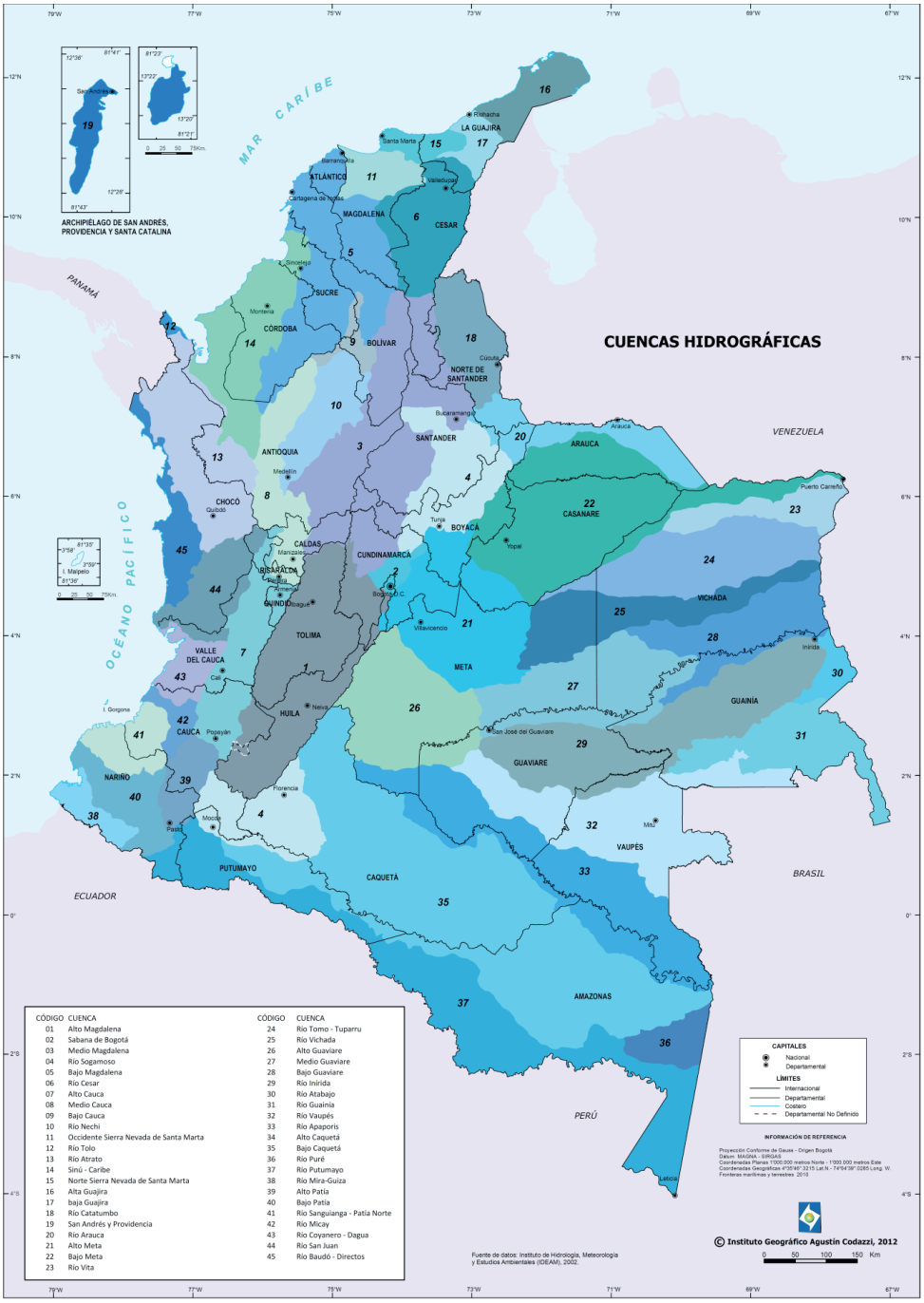
Mapa No. 12 Andén del Pacífico



Fuente: Geoactivismo.org

Pero la hidrografía del Pacífico también incide sobre el desarrollo de algunas actividades económicas (Mapa No. 13). Según Romero (2009), aunque en la hoya hidrográfica del río Atrato se encuentren las tierras más fértiles, se tratan de territorios que escasamente se dedican a la agricultura, en contraste con la actividad minera de oro, plata y platino, así como en la cuenca del río San Juan y en una de las dos desembocaduras del río Mira. Las otras actividades son la generación de energía eléctrica, aprovechando el caudal del río Anchicayá en Buenaventura, así como la agricultura y ganadería en la cuenca del río Patía.

Mapa No. 13 Cuencas Hidrográficas



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

En resumen, los ríos en el Pacífico están mejor dispuestos para la navegación y la explotación minera que para el desarrollo de la agricultura. Además, así de escasa como es la comunicación del Pacífico colombiano con otras regiones del país, las conexiones terrestres entre las principales urbes solo son posibles al sur de la región, en la vía Popayán-Pasto-Tumaco, quedando aisladas del resto, las ciudades de Quibdó y Buenaventura; la naturaleza resuelve en parte la ausencia de carreteras y la comunicación de las dos últimas con otras ciudades de la región, a través de rutas fluviales. En definitiva, Colombia se ha desarrollado bajo una concepción geopolítica de carácter continental y no marítima. Como lo afirma Bahamón (2012), el país no ha logrado desarrollar su poder marítimo, ni el mar ha influenciado su vida y su destino, porque a pesar de poseer litorales tanto en el Pacífico como en el Caribe, estos no han sido atravesados por las líneas de comunicación en los puertos, que las unan entre sí, de costa a costa y hacia el interior del país. Por ende, Colombia con su ecúmene y su gobierno en su heartland, y con un enorme hinterland, debería poseer una inmensa red de vías que condujera siempre la acción del Estado a los más apartados territorios. A esta red de vías debería sumarse una eficiente marina que custodiara y aprovechara sus 200 millas de Zona Económica Exclusiva o sus 912.000 Km² de áreas marinas y submarinas, que equivalen al 80% de la superficie terrestre.

> En el momento en que Colombia logre articular sus dos frentes marítimos a través de un corredor bioceánico en el Darién colombiano, se convertirá en un Estado poderoso, estable y ampliamente desarrollado, inclusive con aspiraciones hegemónicas regionales. Existen en nuestro país todas las condiciones geopolíticas para serlo, tan sólo falta «maduración espacial», adquisición y desarrollo de los espacios indispensables para lograrlo. Esto se logrará a través de la colonización racional del Chocó y el andén del pacífico colombiano (Álvarez, 2017, p.37).

4. El Imperativo Geopolítico de Ocupación de Espacios Vacíos

Desde el punto de vista geopolítico, la sociedad colombiana posee, en general, una concepción espacial de carácter terrestre (Mapa No. 14). El proceso de colonización en Colombia, por su origen histórico, se desarrolló de adentro hacia afuera, es decir, de los centros urbanos hacia la periferia. Además, y salvo el periodo de la Gran Colombia, el pueblo colombiano ha carecido de una tradición marítima; en consecuencia, pareciera que la falta de una consciencia marítima haya limitado al país a satisfacer sus intereses marítimos y salvaguardar los activos geoestratégicos que el mar le provee.

Por lo tanto, los neogranadinos tenían una visión muy menguada de lo que era el mundo, porque desde este centro no se veían las fronteras y menos los mares. En definitiva los colombianos son montañeros y siguen las cuencas de los ríos para explotar sus tierras fértiles y no sus recursos acuíferos. Como ya se ha mencionado, el desarrollo histórico del poblamiento, condicionado por los factores morfológicos y climáticos, generaron una dinámica de expansión prácticamente en el sentido de los meridianos y las cuencas de los dos ríos longitudinales colombianos encausaron una dinámica de crecimiento en dirección Norte-sur. En el interior de Colombia las tierras altas andinas han dividido el país de manera económica, cultural y política, ya que la cordillera de los Andes en territorio colombiano no forman una sola cordillera, sino tres grandes cordilleras separadas, que se separan unas de otras justo al norte de la frontera colombiana con Ecuador y se extienden más o menos paralelas en dirección norte-noreste.

Mapa No. 14 Físico de Colombia

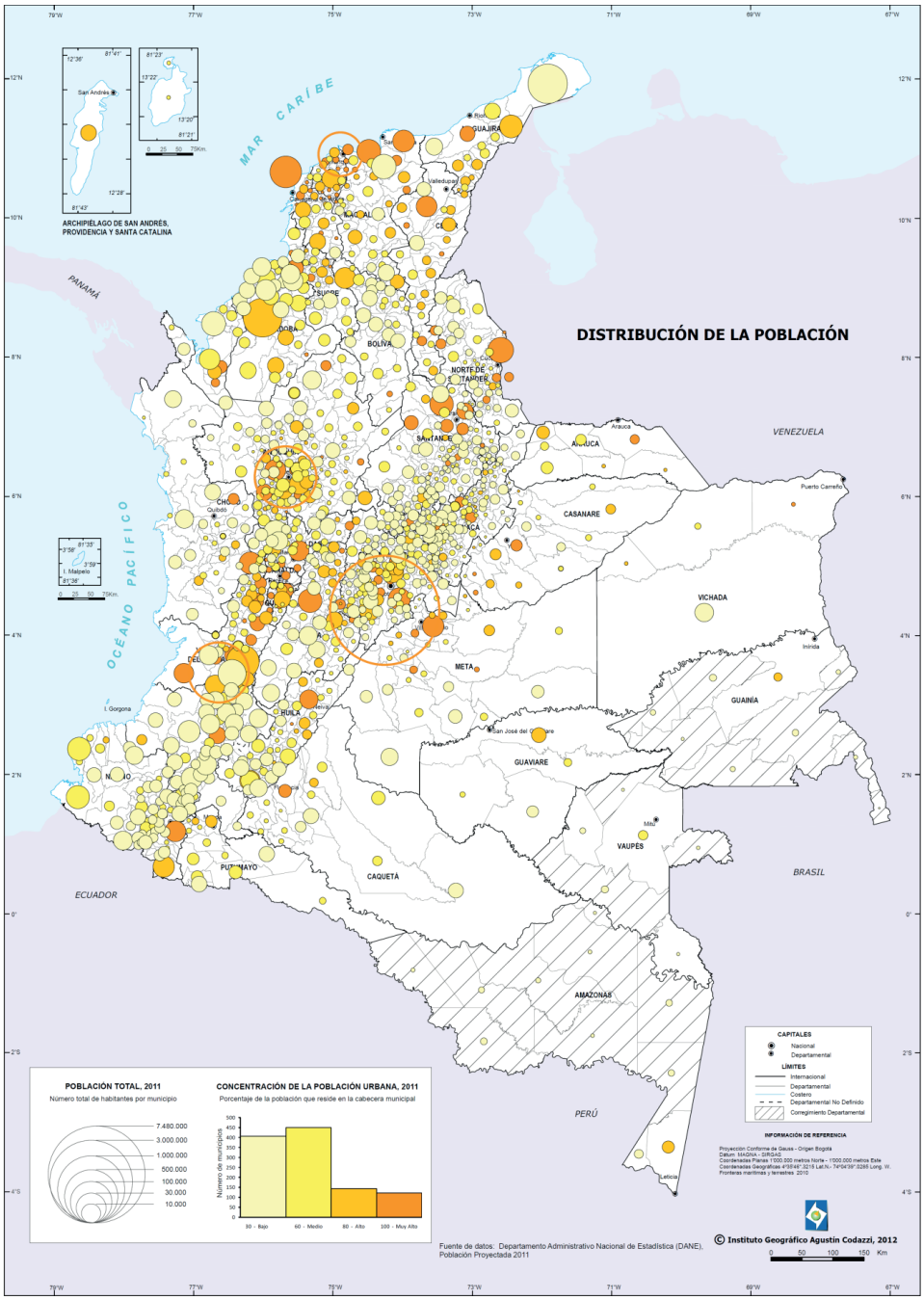


Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

De acuerdo a Safford & Palacios (2002), si bien los Andes colombianos no alcanzan las altas alturas de las montañas en Perú y Bolivia, estas tres cordilleras han presentado considerables obstáculos a la comunicación entre las distintas regiones de Colombia, y entre el interior del país y el exterior. La estructura urbano regional del país se caracterizó, entonces, por la existencia de un puñado de grandes ciudades que concentran la mayor parte de la riqueza del país *(heartland)*, por un grupo de ciudades intermedias con un cierto nivel de desarrollo *(hinterland)*, y por una gran mayoría de municipios pequeños y atrasados, con un gran predominio de actividades rurales de muy baja productividad (espacios vacíos territoriales). Evidentemente, aun en las ciudades grandes e intermedias el problema de la pobreza y la miseria es importante, y también configura al interior de estos, espacios vacíos sin el control efectivo del Estado (Álvarez, 2017b).

Colombia presenta una gran dicotomía espacial, donde es posible observar una fuerte concentración en torno al núcleo central y un débil grado de ocupación en las regiones periféricas. Es así como el 80% de la población se asienta en el 25% del territorio (Mapa No. 15). La desequilibrada distribución espacial de la población colombiana, a lo que ha influido entre otras razones factores climáticos, relieve, fertilidad de los suelos, recursos del subsuelo y del mar, vías de comunicaciones, además de un elemento difícil de mensurar, así como una cultura desprovista de una visión geopolítica, ha conllevado a que la presencia de espacios vacíos en Colombia en pleno siglo XXI, denote que en algunas regiones del país, la situación continúe asemejándose, en el mejor de los casos, al siglo XIX.

Mapa No. 15 Distribución de la Población



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

Con todo, como producto de las singulares condiciones ambientales e históricas de su proceso de colonización, que llevaron tardíamente a incorporarlas a la vida económica y social del país, es que las regiones de la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico estén escasamente habitadas y su volumen de población sea ínfimo en comparación a la enormidad de su superficie.

Así, en términos generales, se puede señalar que Colombia presenta, desde el punto de vista de la distribución espacial de la población, dos zonas diferentes. Una de desarrollo más integrado, como lo es la de presencia y concentración demográfica en el Triángulo de Oro de Colombia, que engloban las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, los cuales ejercen una influencia nacional y multirregional. Y por otro lado, una zona de vacío demográfico, que se caracteriza por las bajas densidades de población, predominio de las estructuras ilegales orientadas hacia la utilización ilícita de los recursos naturales y otras actividades criminales, bajos niveles de infraestructura y una débil penetración del Estado.

En los espacios vacíos del país están constituidos los principales corredores estratégicos de la globalización desviada[54] de Colombia; entre los corredores utilizados por las redes dedicadas a la economía criminal, se encuentran corredores de alta montaña, corredores de carreteras, corredores fluviales, corredores marítimos, corredores aéreos y corredores fronterizos (Mapa No. 16). Estos corredores estratégicos se caracterizan por permitir a los actores criminales la movilidad de tropas, comida, medicinas, armas y otros elementos indispensables para la continuidad de la guerra, así como drogas, tráfico de especies, minería ilegal, tráfico de migrantes, etc.

En consecuencia, controlar estos corredores o alguno de sus tramos representa ventajas significativas en la conducción de la guerra, y garantiza la

54.. Concepto visto en el capítulo anterior

continuidad en la condición de actor hegemónico para un actor del conflicto armado de la región (Salas, 2010). No puede olvidarse que Colombia por su posición geográfica, es un paso obligado para todo tipo de comercio ilícito que busca llegar hacia Centro o Norteamérica, Suramérica, Caribe, Asia, Europa, África. Como lo anota Salas (2010), "la estrategia territorial de los actores del conflicto armado está determinada, fundamentalmente, por las condiciones geoeconómicas de la guerra" (p.22).

En efecto, de acuerdo a Collier (2004), la mayoría de los conflictos civiles parecieran no responder necesariamente a reivindicaciones sociales o políticas, sino a oportunidades de pillaje y saqueo económico. Ello es evidente en el caso de economías que dependen de la exportación de commodities, particularmente aquellas que puedan ser objeto de contrabando. Como resultado, los actores al margen de la ley, aun manteniendo un discurso político y social que les dieron origen, tenderían a actuar más en función de sus objetivos económicos.

El Tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, es una de las regiones más complejas de controlar para el Estado, por su clima tropical, selva inexpugnable y ausencia de carreteras. Esas condiciones, sin embargo, lo convierten en una "autopista" natural para grupos dedicados al comercio de armas, droga, oro y migrantes, entre los que se encuentran el frente 57 de las FARC, sus disidentes, el ELN y el Clan del Golfo, dando forma al fenómeno de Convergencia que conlleva a grupos insurgentes, terrorismo y crimen organizado transnacional a trabajar en red. El área incluye jurisdicciones de Antioquia, Chocó y la provincia panameña del Darién, con una serranía, vertientes de los ríos Atrato y Tuira, accesos a tres golfos y salidas al mar Caribe y océano Pacífico. Toda esa geografía es aprovechada geoestratégicamente por las mafias que mueven sus negocios ilícitos entre Centro y Suramérica.

El Tapón del Darién es uno de los aproximadamente 30 corredores que, sin la necesidad de pavimentación, unen las economías del bajo mundo colombiano; forma parte de un trayecto más extenso, que termina entrelazando la Costa Pacífica colombiana, desde Chocó hasta Nariño y Ecuador, razón por la cual son altamente codiciados por parte de los grupos al margen de la ley. Es tal la importancia de esta conexión, que al menos la mitad de las 2.005 estructuras de crimen organizado detectadas en Colombia ejercen influencia en alguno de sus tramos, incluidas las guerrillas. Además de múltiples senderos selváticos, afluentes y desembocaduras, ofrece rutas de salida hacia el océano Pacífico, para la exportación de cocaína o la importación de armas.

En el Pacífico nace también una de las rutas más importantes para el comercio de drogas, atravesando el centro del país hasta el norte por los Santanderes, surtiendo las plazas de microtráfico en los espacios vacíos urbanos del triángulo de oro de Colombia, en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga.

En Antioquia, las estructuras delictivas buscan consolidar su presencia en un "triángulo estratégico del narcotráfico". En las puntas del triángulo hay una zona de cultivos (Bajo Cauca y Nordeste), una plataforma de exportación (Urabá) y un lugar para el lavado de activos (Valle de Aburrá). De allí que los grupos al margen de la ley busquen corredores para interconectar esos lugares, como es el caso del Nudo del Paramillo y los corredores fluviales del Cauca, Atrato y Magdalena, que permiten el desplazamiento a otros departamentos. El incremento de la minería ilegal desde 2012 añadió otro atractivo a esos corredores, por donde no solo se mueven las ganancias de dicha actividad, sino también insumos como combustible, maquinaria y explosivos. Los corredores hacia el Valle de Aburrá son fundamentales, ya que es allí en donde se invierten las ganancias ilegales (propiedad raíz, comercio, etc.); por ende, los corredores preferidos son las carreteras que acercan las subregiones de Occidente y Oriente

a Medellín. Sin embargo, el corredor estratégico más crítico es el que conecta a las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste del departamento, ya que esa es una ruta para llevar droga y oro a la Costa Atlántica.

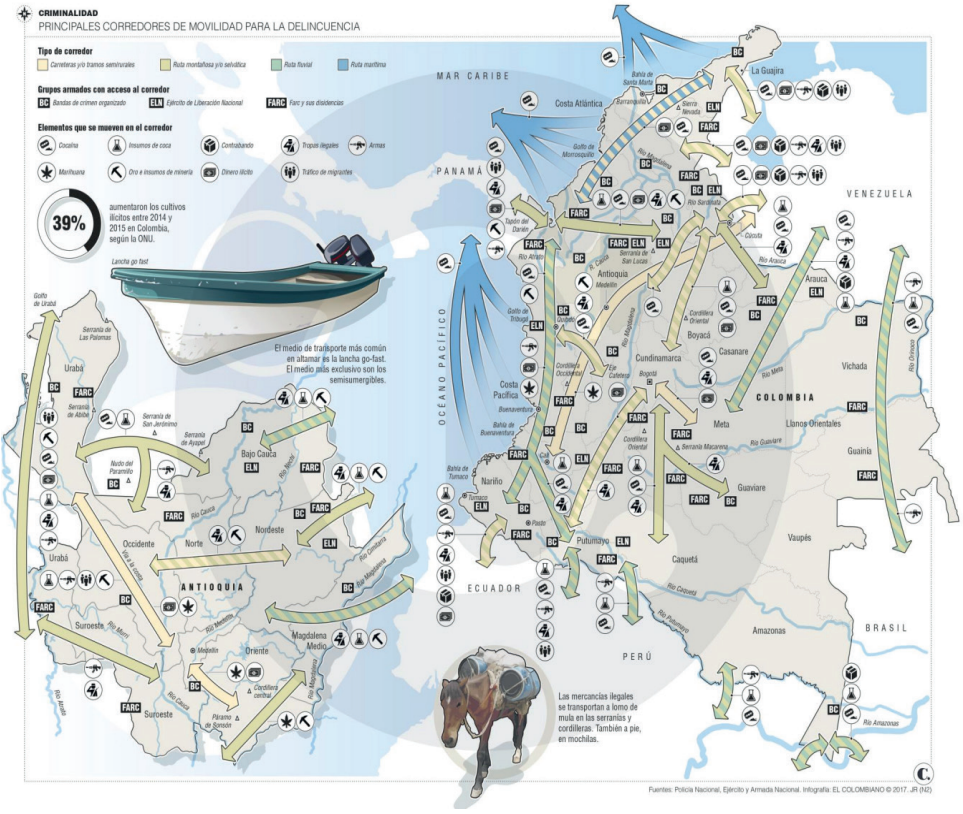
La serranía de la Macarena y la cordillera Oriental son accidentes geográficos aprovechados por insurgentes y bandas criminales del centro y el sur del país, para acercarse a Bogotá; por allí se transportan insumos para estupefacientes y dineros calientes para comerciar en suelo bogotano y sus alrededores. Bogotá también se encuentra en la ruta de grupos al margen de la ley que operan en la Orinoquia; para estos, el río Meta y sus subsidiarios forman una red de comunicaciones fluviales por donde pueden transportar mercancías y personal, mientras evaden el control estatal. En su parte más oriental, la región de la Orinoquia ofrece una enorme planicie que sirve de conexión entre Colombia, Venezuela y Brasil; el tráfico ilícito de armas es uno de los negocios que aprovecha esta particularidad, moviendo arsenal y municiones por vía fluvial, terrestre o aérea.

Otro de los puntos frecuentados por la mafia es el norte, tanto por el acceso al mar Caribe, como por los mercados que se abren en Venezuela. La subregión del Catatumbo es la central de producción de cocaína en este punto y sus cultivos representan el 12% del total del país. De ese producto se lucran carteles colombianos y venezolanos, como el "Cartel de la Guajira" y el "Cartel de los Soles". Además del desierto de La Guajira, los criminales usan las trochas de las serranías de Los Motilones, Santurbán y Las Preciosas, al igual que el río Sardinata. Al tráfico de cocaína lo acompaña el de migrantes, pero es el contrabando el que le da su particularidad a esta frontera, caracterizada por la desigualdad social y el abandono total del Estado. El fenómeno también se da al sur del territorio colombiano, donde los departamentos del Amazonas, Putumayo y Nariño, se encuentran con Brasil, Perú y Ecuador.

Con la desmovilización de las FARC, la preocupación por los corredores toma nuevas dimensiones, pues se trata de un botín para la economía y logística de cualquier organización criminal. Las FARC ejercieron durante años un control efectivo de amplios territorios en Colombia; el que los ocupe primero, los conozca y los domine tendría la ventaja estratégica. Por lo tanto, el Estado está ante el desafío de ocupar esos espacios rurales y corredores estratégicos como un imperativo geopolítico, evitando que el conflicto se recicle con la llegada de otros actores armados. Una de las lecciones aprendidas fue la experiencia con el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se desmovilizó en su mayoría en 1991; sin embargo, un pequeño grupo se resistió a dejar las armas y se concentró en el Catatumbo, transformándose en una banda criminal dedicada al narcotráfico.

Las características geográficas singulares de Colombia, especialmente en cuanto al marcado desequilibrio entre territorio y población, falta de presencia del Estado, y manifestación de factores de inestabilidad a través de grupos al margen de la ley, hace necesario consolidar polos de desarrollo económico o núcleos vitales secundarios, en zonas más deprimidas o desvinculadas territorialmente.

Mapa No. 16 Corredores Estratégicos Ilegales en Colombia



Fuente: El Colombiano, 2017.

Este documento define como imperativos geopolíticos, las necesidades estratégicas que un país debe perseguir si quiere lograr su propia seguridad y éxito en el plano regional o mundial; estos son "caminos" no ideológicos, determinados por la geografía de un país y la de sus vecinos. En este orden de ideas, los tres principales imperativos geopolíticos que coadyuven a la garantía de la Seguridad Multidimensional en Colombia, serían:

Primero, la protección del núcleo vital o heartland del país; es decir, la región que engloba el Triángulo de Oro y en donde se concentra el 74% del PIB nacional, el 80% de la población y el 50% de la producción de alimentos.

Segundo, el control del *hinterland* del país, que comprende la región adyacente al núcleo vital y que conecta a este tanto al Mar Caribe como al Océano Pacífico; este territorio comprende las ciudades intermedias de mayor crecimiento, y el alcance de la red de infraestructura terrestre del país.

Tercero, ocupar los espacios vacíos del país, es decir, aquellos espacios insulares, terrestres y fluviales que no se encuentran bajo el control efectivo del Estado, y en los cuales se concentran las reservas estratégicas de Colombia, y en donde se localizan los principales actores armados al margen de la ley (Mapa No. 17).

El Estado ha logrado satisfacer, en buena medida, los dos primeros imperativos geopolíticos del país. No obstante, el tercer imperativo geopolítico sigue siendo una tarea pendiente para la garantía de la Seguridad Multidimensional de Colombia.

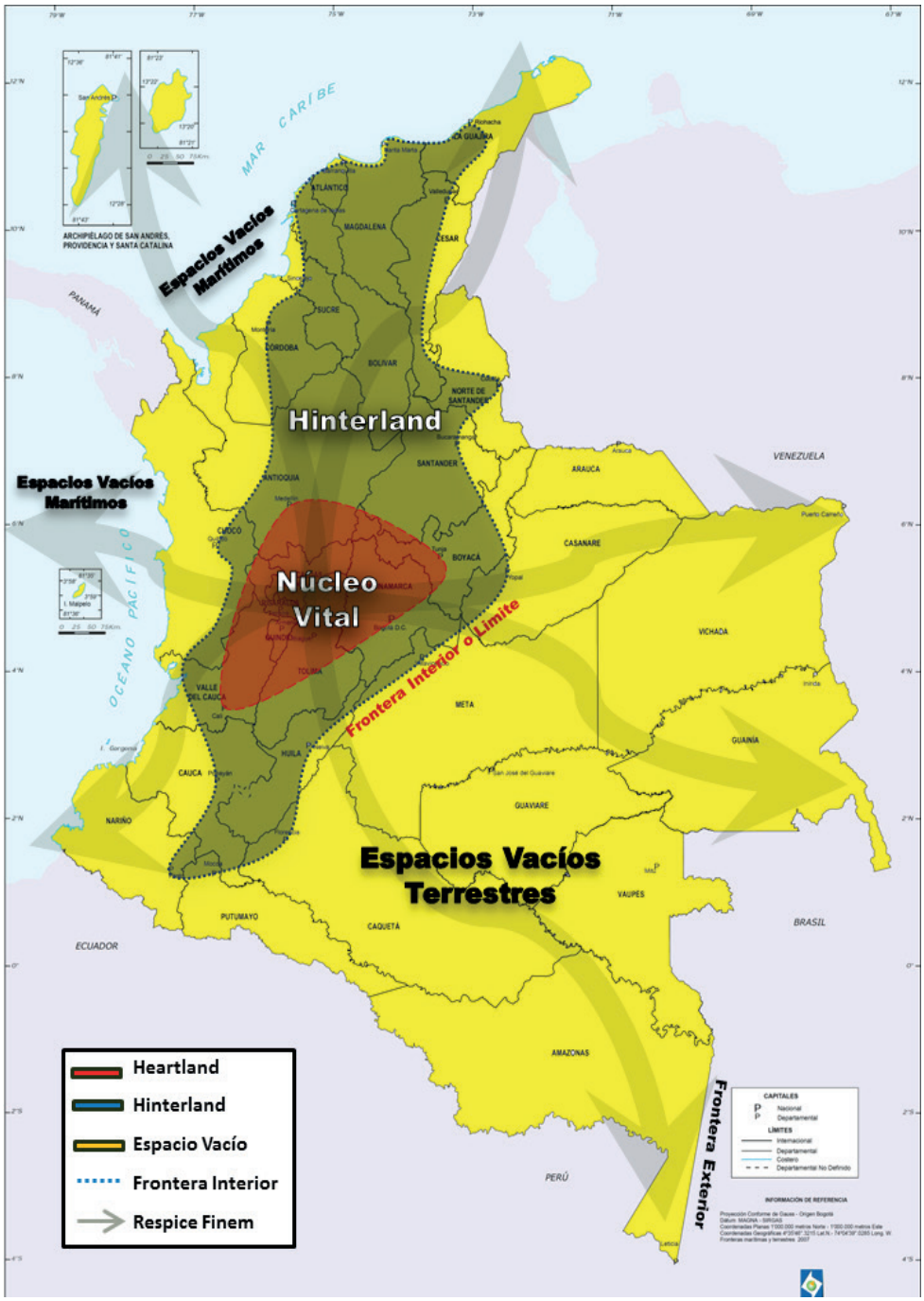
Tras cerca de 200 años, ya existiría una naciente identidad nacional en Colombia forjada en el Triángulo de Oro de Colombia; no obstante, esta convive y a veces entra en colisión con los sentimientos de pertenencia a una tribu o a una región particular de la geografía colombiana. El poder tanto económico como político se ha controlado y se ha ejercido desde el núcleo vital, y el acceso a los recursos del país (particularmente aquellos del hinterland), se hace desde el núcleo vital. El núcleo vital ha ejercido una fuerza centrípeta determinante en los primeros años de la consolidación del Estado colombiano, alcanzando a irradiar su potencia al hinterland de Colombia; en él han convivido ciudadanos venidos de distintos puntos del país y pertenecientes a comunidades étnicas y socioculturales diversas. Y es alrededor de él donde se ha generado el sentimiento de ciudadanía y donde se ha forjado la identidad nacional.

Sin embargo, en los márgenes geográficos al núcleo vital y al *hinterland,* el fenómeno es contrario; la presencia del Estado es menor y la calidad de los servicios del Estado es inferior. Las poblaciones menos atendidas de los territorios que escapan al hinterland, con escasa capacidad de influencia y en áreas de menor interés para la economía nacional, se sienten menos involucrados por lo que ocurre en el núcleo vital y el *hinterland*, y miran hacia la frontera, en lugar del Triángulo de Oro como su espacio vital. Frente a la fuerza centrípeta del núcleo vital, se genera una fuerza centrífuga para muchas poblaciones o regiones de la periferia. En consecuencia, el vacío de poder en dichas zonas ha propiciado aparición de situaciones de inestabilidad y de tráficos ilícitos, así como de enfrentamientos armados.

Por lo tanto, una de las acciones geoestratégicas que permitirían colaborar en la realización del tercer imperativo, sería la comunicación física entre el heartland colombiano y los espacios vacíos. En efecto, algunos de los símbolos más potentes del control estatal provienen de las redes de transporte; en la mayoría de los países, las carreteras y su construcción son responsabilidades públicas y, al menos desde la época del Imperio Romano, las carreteras se han visto como una forma que permite unir distintos espacios terrestres en un territorio unificado. En el siglo XX, el sistema de autopistas que se construiría en la década de los treinta en Alemania bajo el Tercer Reich, tendría como objetivo explícito hacer de Berlín un núcleo vital más accesible a Baviera, el sur y el oeste. Posteriormente, la mayoría de los demás países europeos seguirían su ejemplo y ahora también cuentan con extensas redes nacionales de autopistas. También llama la atención que una de las primeras iniciativas importantes para fomentar la integración europea, fue un proyecto para vincular estas redes nacionales de autopistas y las llamadas "eurorrutas", que permiten la conexión actual de la mayoría de las principales ciudades de Europa, de la misma manera que el sistema de carreteras interestatales lo permite en los Estados Unidos.

Se pueden trazar implicaciones estratégicas similares con los ferrocarriles, las líneas aéreas, las rutas marítimas o fluviales, y otros medios para el transporte de bienes y personas. Incluso cuando los operadores o la red está privatizada, todavía se presenta un fuerte sentido de identidad con la imagen política nacional o regional prevaleciente; los buques en alta mar enarbolan la bandera del país donde están registrados y las aerolíneas invariablemente están estrechamente identificadas con su país de origen (incluso cuando no son formalmente operadores nacionales). Todo sirve para unir íntimamente el territorio y la lealtad en la imaginación popular y así reforzar el sentido de compromiso con una realidad política arbitraria y finalmente efímera. En resumen, los símbolos concretos de control, como la infraestructura estatal, son esenciales ya que recuerdan a la población quién está a cargo, y refuerzan continuamente el mensaje aun cuando la evidencia en el "terreno", puede llegar a ser difícil de encontrar.

Mapa No. 17 Imperativos Geopolíticos de Colombia



Fuente: Elaboración propia con base en mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012.

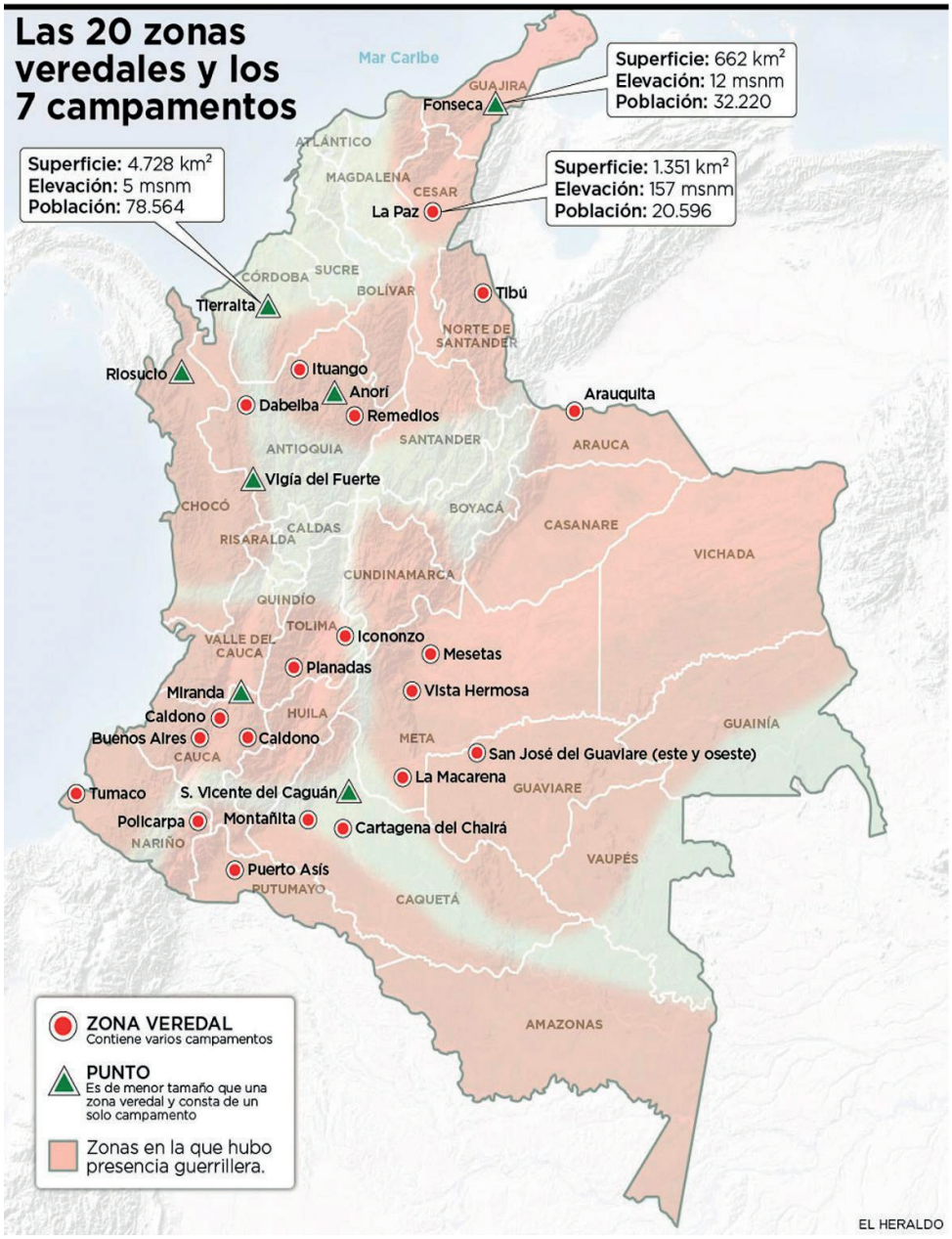
5. Conclusiones

Los espacios vacíos se refieren a aquellas zonas en Colombia que, a las puertas del siglo XXI, se encuentran en desmejorada situación, y merecen (por parte del Estado y la sociedad colombiana), atención por su proyección, por las condiciones desventajosas de sus habitantes respecto al resto del país y por las inmensas potencialidades existentes en ellas, todo lo anterior basado en una concepción solidaria y dinámica de la unidad nacional. Para un país de la fisionomía geográfica y de la impronta cultural como la colombiana, esta tarea nacional debe asumir el carácter de una imaginativa y persistente política de Estado, que involucre seriamente a agentes privados y también públicos. Es decir, una "acción integral" que complemente las actividades y heroicos esfuerzos que las Fuerzas Militares y de Policía han realizado en dichos territorios.

En efecto, luego del desplazamiento de las tropas desmovilizadas de las FARC (Mapa No. 18), a los siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y a las diez y nueve Zonas Veredales de Verificación para la Transición (ZVTN)[55], la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el esfuerzo por satisfacer el tercer imperativo geopolítico, ha sido decisiva. A través del Plan Victoria, las Fuerzas Militares de Colombia han venido participando en la estabilización y consolidación del territorio (Mapa No. 19), con el fin de coadyuvar en las políticas gubernamentales dirigidas a fortalecer la presencia del Estado en los espacios vacíos, con fines de seguridad interna e internacional, en aquellas áreas más vulnerables desde el punto de vista del desarrollo económico.

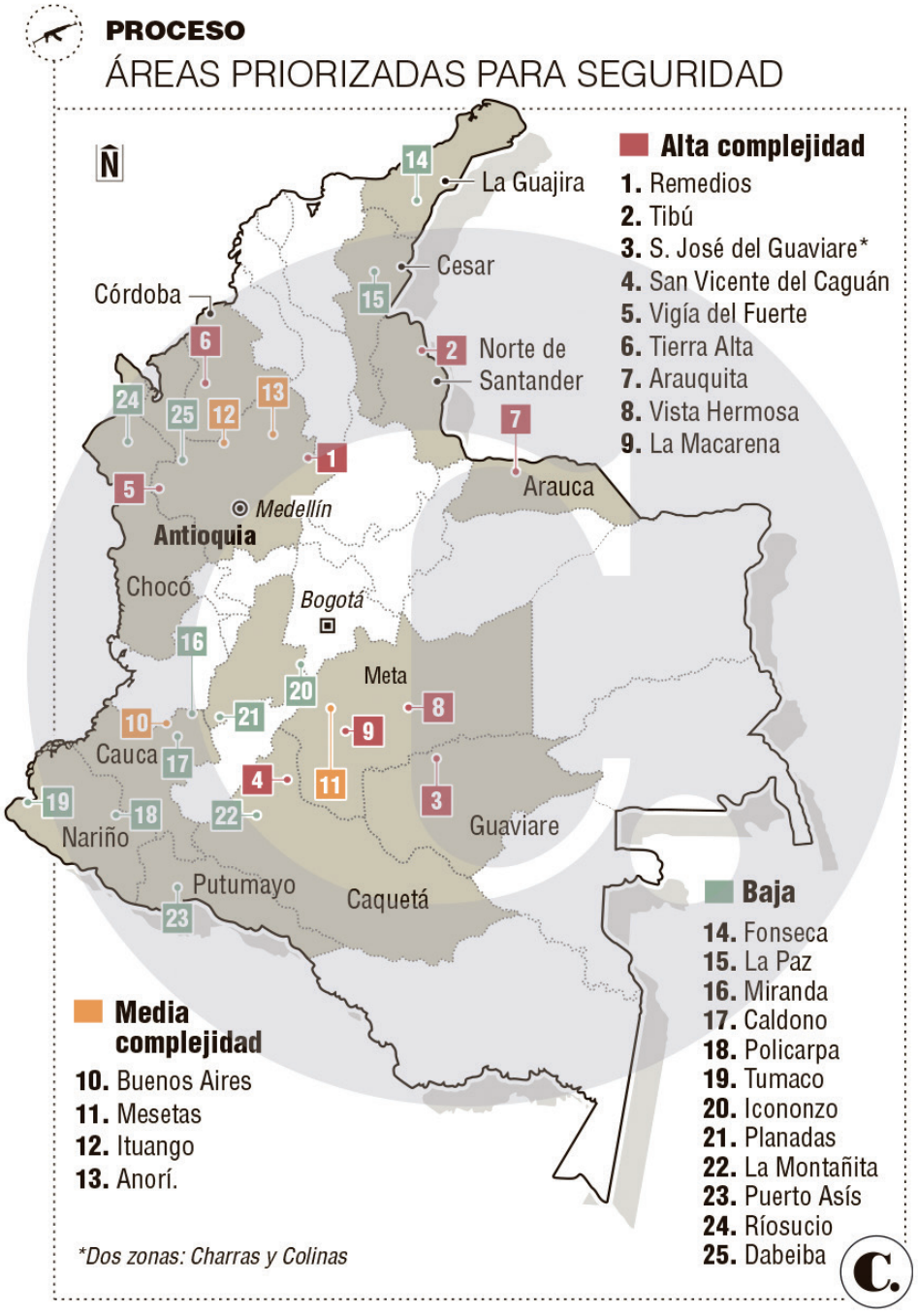
55. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la diferencia entre una zona y un punto es la cantidad de guerrilleros que albergarán, el tamaño y la ubicación.

Mapa No. 18 ZVTN y PTN



Fuente: El Heraldo, 2016.

Mapa No. 19 Zonas Priorizadas de Seguridad



Fuente: El Colombiano, 2017.

En ninguna parte es más evidente la ausencia de presencia estatal que en las selvas periféricas del sureste de Colombia. Esta zona del país, que representa el 60% de la masa terrestre de Colombia, se convirtieron en las últimas dos décadas, en el frente central del conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, La Macarena, en el sur del departamento del Meta, se convirtió en el bastión simbólico y estratégico de las FARC; a pesar de su lejanía y baja demografía (sólo el 0,1% de los colombianos vive en la región de La Macarena), el 30% de la población admitía tener lazos con esta insurgencia. En este orden de ideas

> Para el periodo 2002-2006, el Gobierno Nacional enfocó sus esfuerzos en lograr el restablecimiento de las condiciones de seguridad de la población civil, por lo cual implementó y colocó en curso la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), que tenía como propósito consolidar la presencia del Estado en el territorio nacional, lograr impulsar la recuperación económica y mejorar las condiciones de bienestar de toda la sociedad; retos altamente ambiciosos por las complicaciones para enfrentar un sinnúmero de amenazas y condiciones diversas en zonas que presentaban características diferentes para enfocar estos esfuerzos (López, 2017).

Pero la militarización de la periferia colombiana no parece haber garantizado una seguridad y paz duradera. Algunos incluso sugerían un programa de "colonización militar", una idea al menos tan antigua como el Imperio Romano, que en el siglo XXI se ha propuesto como un remedio a la subpoblación de las regiones fronterizas de Colombia. Sin embargo, una de las razones por las que esta idea nunca llegó a adquirir fuerza, y es poco probable que lo haga hacia el futuro, es que no existe un gran número de personas deseosas de trasladarse a estas áreas selváticas distantes, incómodas, insalubres, con pocos servicios y

con un elevado costo de vida. Incluso los funcionarios de policía admiten que la asignación de policías a puestos remotos, lejos de las familias, en empleos que serían a la vez solitarios, peligrosos y mortales, son un verdadero reto (Delgado, 2015).

No obstante, los esfuerzos que se han venido adelantando en los últimos años son importantes; por ejemplo, el Plan Nacional de Consolidación (PNC) de 2009 crearía el Programa de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), con aceptables resultados. En fechas más recientes, la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT), aprobada en 2014, ha buscado la generación de capacidades institucionales necesarias para asegurar el acceso y la protección de los derechos fundamentales de la población de los territorios afectados históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos. En este sentido, la Presidencia de la República (2014) contempla tres pilares fundamentales para lograr la ocupación de los espacios vacíos colombianos:

El primer pilar es la institucionalización del territorio, entendida como el establecimiento de las capacidades institucionales necesarias para corregir las condiciones que favorecen el control ilegal del territorio, logrando así el imperio de la Constitución y la Ley. Es decir, lograr que el Estado obtenga el monopolio de la seguridad, la justicia y la tributación.

El segundo pilar es la participación ciudadana y el buen gobierno. La seguridad ciudadana es entendida como la generación y el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía y la comunidad para influir en la gestión del desarrollo local y ejercer el control democrático de la gestión pública en el territorio. Por su parte, el buen gobierno local se refiere a las capacidades institucionales de los municipios para garantizar el eficaz y transparente funcionamiento de la gestión local del desarrollo y los recursos para la provisión de servicios a la población.

El tercer pilar es la integración regional a la vida social, económica y política de la Nación. Es decir, el establecimiento de las condiciones básicas de infraestructura de conectividad, servicios sociales, servicios de apoyo al desarrollo productivo, entre otras, las cuales son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo en los territorios de consolidación frente a las que tiene el promedio de la población nacional.

Si bien la PNCRT es coherente y busca resolver los elementos que constituyen los espacios vacíos de un Estado, el problema del despliegue de personal para promover la presencia del Estado y la implementación del PNCRT en dichas zonas, llega a ser un desafío, ya que los civiles capacitados y competentes prefieren permanecer en la capital, en lugar de arriesgar sus vidas y distanciarse del gobierno central. Empero, un desarrollo armónico del territorio colombiano, extendiendo el actual hinterland a las fronteras colombianas, impactaría favorablemente en la cohesión de la población colombiana, y en la construcción de una identidad nacional; además, ayudaría a la edificación de un sentido espacial de carácter geopolítico y a una proyección externa más efectiva.

Dentro de los objetivos y lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: "Todos por un Nuevo País", un objetivo del PND 2014-2018 ha sido el de integrar el territorio y las sociedades contenidas en ellas.

> En las regiones donde el conflicto armado fue más intenso y persistente se han visto limitadas las capacidades institucionales para apoyar el desarrollo integral del territorio y, en particular, de la producción agropecuaria sostenible. De igual forma, la confianza entre ciudadanía, comunidades e institucionalidad estatal también se ha visto afectada por el conflicto, así como por la débil

> presencia estatal en algunos territorios. Por esto, la integración y la transformación de los territorios, en particular aquellos que se encuentran rezagados institucionalmente, requieren esfuerzos especiales dirigidos a mejorar en ellos la gobernabilidad y el buen gobierno, así como la infraestructura y conectividad física, de cada colectividad (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p.46).

El PND 2014-2018 afirma que para alcanzar los propósitos de integración territorial, es indispensable la construcción de redes viales, en particular las vías terciarias, así como la provisión de servicios básicos y la conectividad en comunicaciones, entre otras.

> Para ello se requiere avanzar en esquemas innovadores de ejecución de los proyectos que focalicen la participación de la comunidad en las actividades de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, especialmente en aquellos territorios más rezagados en su desarrollo. De igual forma, se requiere un nuevo marco técnico y jurídico, que tenga en cuenta las realidades regionales y las características geográficas de estos territorios. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p.47).

No obstante, la capacidad del Estado en lograr los objetivos anteriormente expuestos pareciera estar en entredicho. El fin de las guerras y la consolidación de la paz son procesos de transición que requieren un esfuerzo constante para brindar seguridad, bienestar y representación. La expectativa de las poblaciones locales en la paz y la recuperación económica debe ser manejada cuidadosamente, para que no caer en frustraciones y una mayor deslegitimidad del Estado. En este contexto, las dimensiones económicas son críticas porque el proceso de dejar atrás el sufrimiento infligido por la guerra, puede acelerarse si las personas invierten su tiempo y energía en actividades productivas, condiciones que solo

pueden ser proveídas a partir de una articulación efectiva entre el sector público y privado.

Los desafíos para la política vienen cuando el esfuerzo de estabilización dirigido por civiles intenta romper el vínculo de la población rural con la economía ilícita de la coca, a través del desarrollo alternativo y la integración al mercado nacional. Hasta ahora no han influido en la población, que apoya obstinadamente a las FARC y a los intermediarios criminales que trafican su producto. Para los campesinos que cultivan hojas de coca, cualquier otro cultivo sería menos rentable y los reduciría inevitablemente a la agricultura de subsistencia. Por lo tanto, con el fin de crear salvaguardias contra el problema de expectativas irreales (y profundas decepciones), el futuro del desarrollo económico y social de los espacios vacíos debería ser discutida de manera responsable entre todas las partes interesadas.

Finalmente, en opinión del autor de este documento, antes de pensar en redistribuir las limitadas capacidades del Estado a la obtención de un mayor perfil en el escenario internacional, por ejemplo, a través de la participación de las Fuerzas Militares colombianas en operaciones de mantenimiento de paz en espacios vacíos de otros Estados, es fundamental concentrarse en la consolidación del monopolio de la fuerza, la tributación y la ley, en los espacios vacíos propios del territorio de Colombia. Para ello se necesita el concurso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, el gobierno y algunos Estados vecinos, por su condición "involuntaria" de santuarios estratégicos de los grupos al margen de ley. Por ende, la doctrina de política exterior colombiana, y de seguridad y defensa, no debería estar sujeta por ahora al *Réspice Pollum* (mirar al polo, al norte), *Réspice Similia* (mirar a los semejantes), o *Réspice Omnia* (mirar al universo). La doctrina que debería orientar en la próxima década los esfuerzos del Estado para la ocupación de los espacios vacíos terrestres, marítimos y

aéreos colombianos, para la garantía de la Seguridad Multidimensional y una eventual proyección de Colombia como potencia regional secundaria, es la doctrina del *Réspice Finem*, o "mirar hacia el final", es decir, hacia las fronteras interiores y exteriores del país.

Capítulo VI

Respice Aqua Vitae: Hacia una Hidropolítica Nacional[56]

Carlos enrique Álvarez Calderón
Alejandro Moreno Romero
CF. Juan Carlos Gómez Martínez

1. Introducción

La correspondencia entre las redes fluviales y los océanos podrían meramente suscribirse a una configuración geográfica, que tendría su más estrecha relación en los accidentes morfológicos generados al desembocar los ríos en el mar; sin embargo, esto deja por fuera el valor que les da a estas interacciones la utilización de estos entornos por parte del hombre y su aprovechamiento ya sea aguas arriba (en el caso de los ríos), o mar adentro (en el caso de los océanos). La constante más obvia entre los entornos fluviales y oceánicos estaría en el agua; así, esta trascendería más allá de su importancia como un recurso natural, a ser un elemento de sinergia social, política, económica, cultural y militar, que aumenta su valor estratégico en la medida que el hombre y los Estados le den la importancia requerida en la medida que su uso, control y soberanía (o ausencia de los mismos), afecten sus intereses vitales.

Por ende, los recursos naturales han venido adquiriendo una centralidad geoestratégica y geopolítica a nivel global, planteándole a los Estados un auténtico problema político y de seguridad; no en vano, la dotación de recursos y la superficie apta para la actividad productiva, serían factores estructurales básicos para la supervivencia de un Estado. En efecto, la posesión de reservas

56. Este Capítulo de Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

estratégicas, la potencialidad en la producción de alimentos a gran escala y una importante dotación de materias primas, entre otros, siguen constituyendo un factor estratégico de poder estatal. En este orden de ideas, un recurso natural sería un bien físico que ofrece la naturaleza, como por ejemplo, el agua dulce de los ríos, la fauna silvestre o el bosque natural. Asimismo, se consideraría como recurso natural las funciones o servicios de la naturaleza que la sociedad utiliza según sus demandas, como por ejemplo, la regulación que un bosque proporciona a una cuenca fluvial, evitando su sedimentación; ese carácter regulador de un bosque sería también un recurso natural y no solamente la madera que se obtuviese de él. Es preciso diferenciar los recursos propios de la naturaleza, de los construidos o inducidos por la acción consciente del hombre; las plantas de cultivo, la explotación ganadera o la formación de lagos artificiales, son ejemplos de este grupo de elementos. Por lo tanto, un recurso natural sería todo lo que proviene de la naturaleza y que el hombre puede utilizar para satisfacer sus necesidades.

Algunos recursos naturales son inagotables, ya que están disponibles en inmensas cantidades, y las actividades que realiza el hombre no podrían acabarlos o disminuir su cantidad; tal sería el caso, por ejemplo, del agua del mar y/o la energía del sol. Los demás recursos naturales se pueden clasificar en renovables y no renovables; entre los primeros, algunos se agotan (según el uso que se haga de ellos), como el suelo utilizado para las actividades agrícolas. Por su parte, los no renovables son todos agotables, ya que no habría como reemplazarlos (además, la naturaleza podría tardar millones de años en hacerlo); ese sería el caso de recursos naturales como el petróleo, el carbón, etc.

En cuanto a un recurso natural estratégico, este sería definido como todo recurso natural escaso que actual o potencialmente es vital para el desarrollo de la actividad económica o para el mantenimiento de la calidad de vida de un país.

De acuerdo a Fornillo (2014), un recurso natural puede considerarse estratégico si responde a unas condiciones relativas a su valor de uso y disponibilidad. Con relación a las condiciones relativas a su valor de uso: Primero, ser clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista; Segundo, ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial; y Tercero, ser clave para el despliegue de una economía verde o de pos desarrollo. Adicionalmente, en cuanto a las condiciones relativas a su disponibilidad: Primero, si el recurso es escaso o relativamente escaso; Segundo, si el recurso es insustituible o difícilmente sustituible; y Tercero, si el recurso es desigualmente distribuido.

En concordancia, los recursos naturales estratégicos tenderían usualmente a concentrarse en pocas manos y a ser escasos a nivel global, constituyéndose en un posible factor de conflicto político, económico y/o militar. No obstante, el componente geopolítico del recurso natural influye en su valoración a nivel global, ya que un recurso escaso o abundante para todos, no podría llegar a ser necesariamente un factor de conflicto; el problema surgiría cuando para un Estado un recurso natural determinado es abundante, y para otro Estado, escaso. Por ende, un recurso natural podría llegar a convertirse en un elemento de poder cuando es escaso a nivel global, comprometiendo a dos o más actores en una lucha por el control del mismo. En consecuencia, la manifestación del conflicto derivado por la competencia del recurso natural podría llegar a darse en el ámbito diplomático, político, económico o militar, y resolverse mediante el acuerdo o la confrontación armada. El siglo XX cuenta con muchos ejemplos de Estados que fueron a la guerra para proteger o asegurar su acceso a recursos naturales estratégicos vitales, especialmente petróleo. Tal fue el caso de Japón, quien atacaría a los Estados Unidos en 1941, con la intención de limitar la presencia japonesa en el sudeste asiático, un territorio esencial para el suministro de petróleo, caucho y minerales al esfuerzo bélico japonés.

Y el siglo XXI no sería diferente. Según Le Billon (2005), los recursos naturales han adquirido una nueva importancia estratégica en las guerras. En efecto, con la retirada del patrocinio extranjero de la Guerra Fría a fines de la década de 1980, los recursos locales se habrían convertido en el pilar de la mayoría de las guerras económicas; "más allá de financiar la guerra, los recursos naturales han sido identificados como un importante motivo de varias guerras, desde la invasión iraquí de yacimientos petrolíferos kuwaitíes, hasta las guerras civiles alimentadas con diamantes en el oeste de África" (p.1). A partir del fin de la Guerra Fría, aparecerían nuevos conceptos no militares de la seguridad; en efecto, Kofi Annan, en calidad de Secretario General de las Naciones Unidas, manifestaría que "hoy, la seguridad se entiende cada vez menos en términos militares […] es de hecho un fenómeno que abarca el desarrollo económico […] la protección del medio ambiente" (Annan, 1997).

Efectivamente, la competencia económica parecería estar eclipsando la rivalidad ideológica, ya que los Estados tendrían como interés nacional estratégico "la posesión y control de unos bienes económicamente vitales para la industria" (Klare, 2003, p.261), siendo el agua dulce un recurso natural estratégico para la industria; por ejemplo, cerca del 20% de su volumen es indispensable en la extracción y producción de petróleo y gas (así como de carbón), 70% es necesario para la agricultura y 10% para uso doméstico. El agua cubre el 71% de la superficie del planeta Tierra, formando grandes cuerpos de agua subterránea y teniendo presencia en la atmósfera, en los organismos y en el suelo. El volumen total de agua se estimaría en 1.386 millones de km^3, pero sólo el 2,5% sería agua dulce (el volumen restante sería agua salada). Del agua dulce, casi el 70% estaría inmovilizado en las capas de hielo y los glaciares, y un 30% estaría almacenado en los acuíferos del mundo; por lo tanto, el agua superficial de los ríos y lagos representaría apenas el 0,3% del total de agua dulce del planeta (Un-Water, 2015).

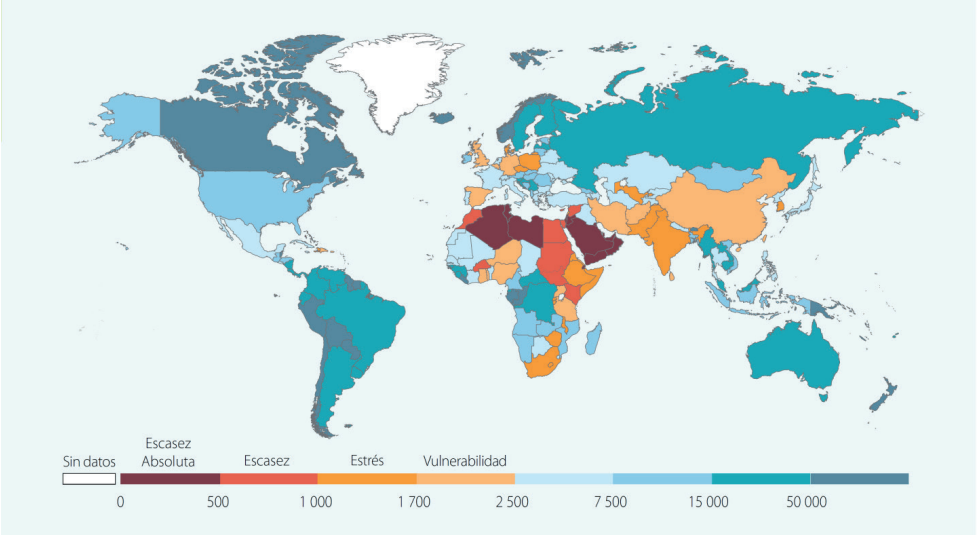
El volumen total de agua es prácticamente constante y se hallaría en continuo movimiento formando el ciclo hidrológico, el cual condiciona la distribución espacial y temporal del agua del planeta. En efecto, las aguas subterráneas y el agua de ríos y lagos, se renuevan continuamente por la caída de lluvia; grandes volúmenes anuales de lluvia (2.400 mm) caen en las zonas tropicales y de latitudes medias, y en las cadenas de alta montaña. A pesar de que solamente el 8% de los recursos hídricos renovables serían extraídos cada año, en muchas regiones del planeta ya no se podría satisfacer la creciente demanda de agua. Se sabe que en 15 países la oferta hídrica sería menor a 500 m^3, en 12 países entre 500 y 1.000 m^3, y 22 países entre 1.000 y 2.000 m^3. En regiones donde se dispondría de más de 1.700 m^3 de agua por persona y año, raras veces existe escasez de agua y, en caso de que exista, es localizado.

En este orden de ideas, las precipitaciones en Colombia, salvo casos particulares, parecen ser abundantes durante todo el año; particularmente en el Oriente Amazónico y en las costas del Pacífico, donde se alcanzan medias anuales de 6.000 mm (en algunas localidades de la costa pacífica, se han registrado precipitaciones superiores a los 7.000 mm, con más de 320 días de lluvia al año). Los mayores niveles de precipitación en Colombia se dan en el Chocó, por el gran volumen de masas de aire húmedo que provienen del Océano Pacífico y penetran al país por el oeste acumulándose en la Cordillera, recibiendo entre 3.000 y 12.000 mm anuales, en contraste con la península de la Guajira, en donde las lluvias son muy escasas (unos 350 mm al año). A la limitada disponibilidad del agua en algunas regiones del país, se añade la creciente contaminación de los recursos hídricos, por causas diversas, entre las que se cuenta el flagelo de la minería ilegal. Estas cuestiones plantean desafíos a la Defensa nacional de los países, y, en este orden de cosas, la propiedad del recurso será vital en el aseguramiento del suministro propio, a tal punto que hace a la supervivencia misma del Estado como tarea prioritaria.

2. Panorama de la crisis de agua dulce en el mundo

La creciente demanda mundial de agua estaría influenciada por el crecimiento demográfico, la urbanización, las políticas de seguridad alimentaria y energética, y los procesos macroeconómicos como la globalización del comercio y los cambios en los patrones de consumo. Durante el siglo XX, el desarrollo de los recursos hídricos estuvo impulsado por las demandas de las poblaciones en expansión de alimentos y energía; además, el significativo crecimiento de los ingresos y del nivel de vida de una clase media creciente, provocaron un importante aumento del uso del agua, probablemente insostenible para el siglo XXI (Mapa No. 1).

Mapa 1. Recursos de Agua Renovable Total Per Cápita (2013)

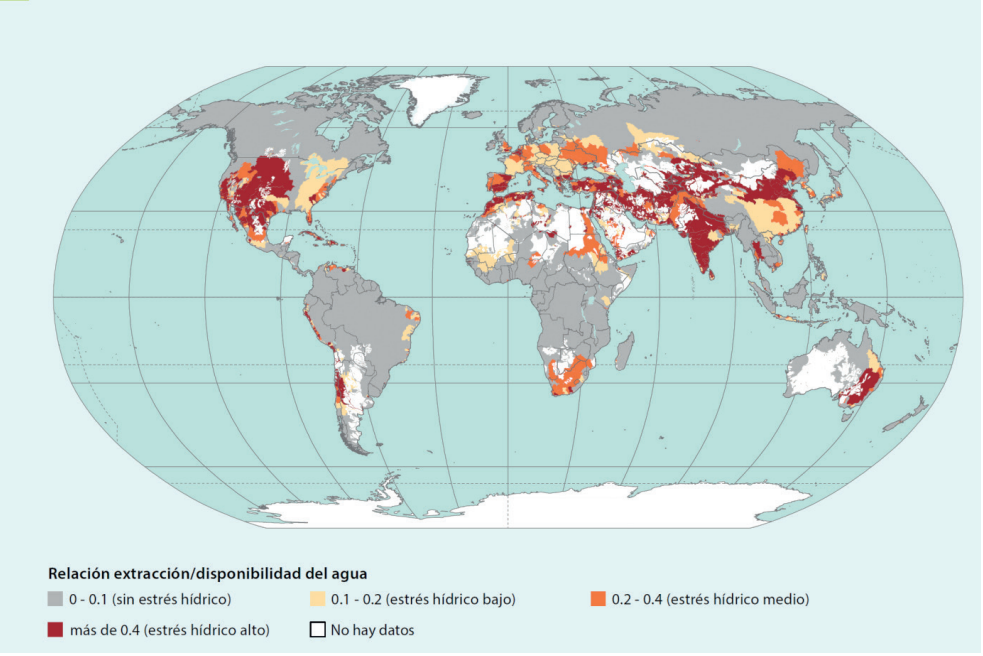


Fuente: WWAP, con datos de la base de datos de AQUASTAT FAO

En efecto, se espera que la demanda de agua aumente en todos los sectores de producción (Mapa No. 2), proyectándose para el 2030 un déficit hídrico global del 40% (UN-Water, 2015). El crecimiento de la población sería otro factor, aunque la relación no es necesariamente lineal, ya que en las últimas

décadas la tasa de demanda de agua duplicó la tasa de crecimiento de la población (Shiklomanov, 1999). La población mundial estaría creciendo en aproximadamente 80 millones de personas por año, alcanzando los 9.100 millones en 2050, de los cuales 2.400 millones de personas vivirían en el África subsahariana, la región con los recursos hídricos más heterogéneamente distribuidos del mundo (UNDESA, 2013).

Mapa 2. Promedio Anual de Estrés Hídrico (1981-2010)

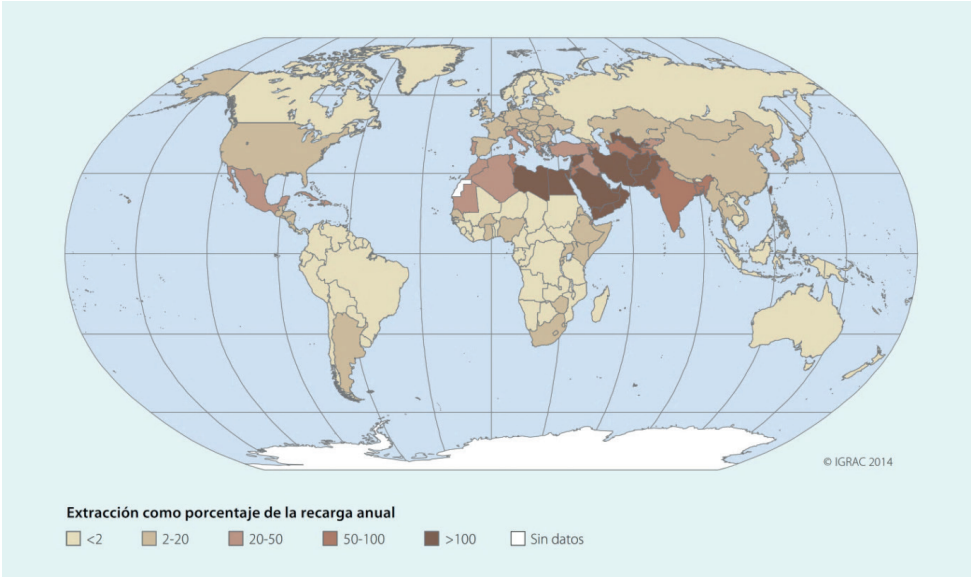


Fuente: Alcamo et. al, 2007.

Existe un alto estrés hídrico[57] en gran parte de India, norte de China, Asia central, Medio Oriente, los países de la cuenca del Mediterráneo, Australia Oriental (es decir la cuenca Murray Darling), América Latina occidental, gran parte del oeste de Estados Unidos y norte de México (UNESCO, 2015).

57. El estrés hídrico mide la cantidad de presión que los usuarios (hogares, industrias, y agricultura) ejercen sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos y puede compararse fácilmente a través de las cuencas hidrográficas. Cuanto mayor sea el volumen de agua extraído, usado y descargado a un río, mayor es el agotamiento o degradación del caudal del río para los usuarios aguas abajo y por lo tanto mayor será el estrés hídrico.

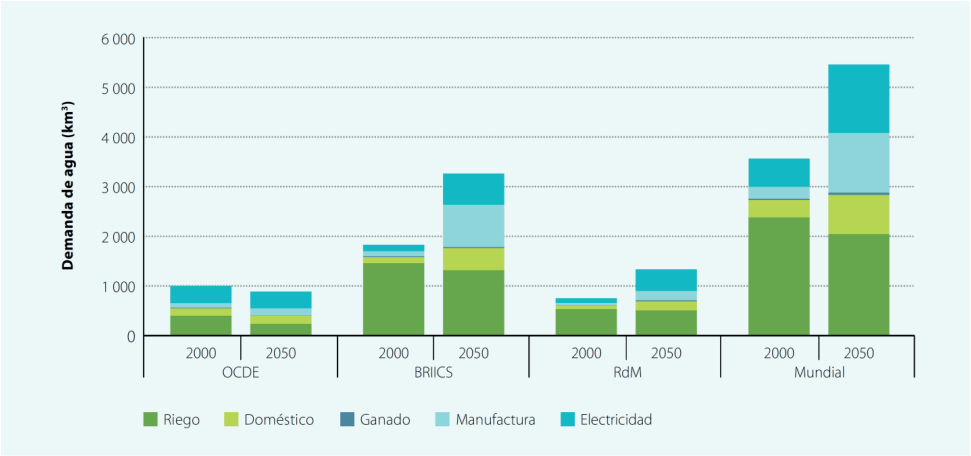
Mapa 3. Estrés de desarrollo de las Aguas Subterráneas (2010)



Fuente: IGRAC (2014).

Asimismo, el aumento de la urbanización estaría causando presiones específicas, ya que en la actualidad, más del 50% de las personas en el planeta viven en las ciudades, con un 30% de todos los habitantes urbanos viviendo en barrios marginales (Álvarez, 2017). Según ONU-Hábitat (2013), los países en desarrollo representan el 93% de la urbanización en todo el mundo, el 40% de los cuales es la expansión de los barrios marginales; además, se prevé que las poblaciones urbanas globales aumentarían a un total de 6.300 millones para 2050. Las extracciones excesivas de agua para la agricultura y la energía podrían agravar aún más la escasez de agua (Gráfico No. 1). El sector agrícola ya es el mayor usuario de recursos hídricos, representando aproximadamente el 70% de todas las extracciones de agua dulce a nivel mundial, y más del 90% en la mayoría de los países menos desarrollados del mundo (WWAP, 2014).

Gráfico 1. Demanda Mundial de Agua (Escenario Base 2000 y 2050)



Nota: BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, Sudáfrica); OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos); RdM (resto del mundo).

Fuente: OCDE (2012

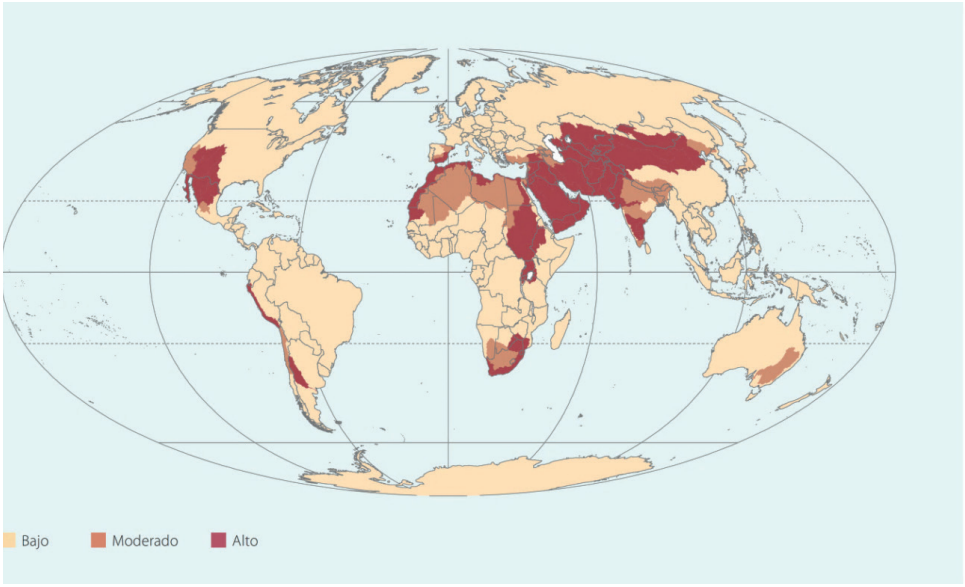
Según UN-Water (2014), cerca de 870 millones de personas estarían en condición de desnutrición debido a la dificultad en el acceso de alimentos, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), estima que para la demanda mundial de alimentos, existiría la necesidad de aumentar en un 50% la producción agrícola; ello acrecentaría la demanda de agua dulce, tomando en cuenta que "cada tonelada de grano producida ha supuesto 3.000 toneladas de agua: tres veces más de lo que se considera normal" (Barlow y Clarke, 2004, p. 46).

A su vez, el nexo entre agua y energía se presentaría como un factor restrictivo en la seguridad alimentaria, ya que el 30% de la producción global de energía se destina a la producción y suministro de alimentos, cifra que junto al crecimiento demográfico, incrementaría exponencialmente el consumo de energía, aproximadamente en un 50% para el 2030 y del 80% para el 2050 (FAO, 2014). Además, el agua es fundamental en los pasos de extracción y

procesamiento de combustibles fósiles; la extracción global de petróleo fue de 85 millones de barriles en el 2009, para lo cual se utilizaron 12 millones de toneladas métricas de agua, recurso necesario para el sistema de refrigeración de los taladros de perforación petrolera, así como para la refinación de gasolina, diésel y otros combustibles. Para ese mismo año, se extrajeron 2.987 trillones de metros cúbicos de gas natural, en donde la tasa promedio de extracción de gas por cada millón de pies cúbicos fue de 182 barriles de agua; asimismo, en el 2009 se explotaron 7 billones de toneladas métricas de carbón, actividad en la cual el agua fue utilizada para enfriar las perforadoras mineras, lavar el carbón de azufre y mercurio, y recuperar e irrigar la tierra explotada (Allen et. al, 2011).

La distribución y disponibilidad de los recursos de agua dulce, a través de la precipitación y la escorrentía, podría ser irregular, con diferentes áreas del mundo recibiendo distintas cantidades de agua en un año dado. Sin embargo, los promedios anuales compuestos muestran variaciones significativas en la disponibilidad de agua per cápita entre los países (Mapa No. 4).

Mapa 4. Distribución Global Escasez Física de Agua en las Principales Cuencas 2011



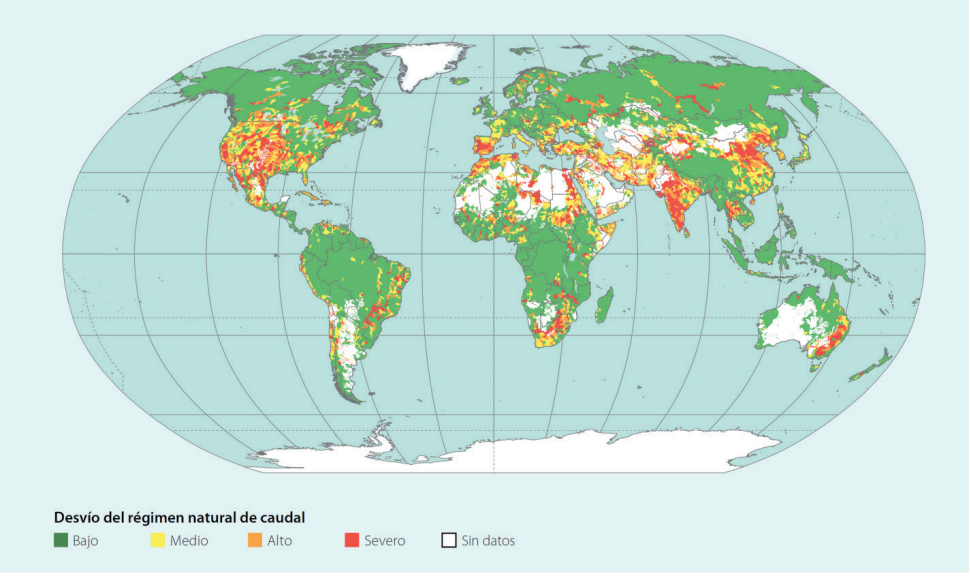
Fuente: FAO, 2011

El Hemisferio Americano es predominantemente húmedo y cuenta con importantes recursos hídricos, pero también posee zonas sumamente áridas. La agricultura es la principal usuaria de agua, a la que se destina el 70% de las extracciones, mientras que el uso doméstico y la industria representan respectivamente el 17% y 13% (AQUASTAT, 2016). Cabe señalar que la región es altamente dependiente de la energía hidroeléctrica, la cual provee más del 60% de la energía eléctrica, y una gran parte de su potencial técnico (74%), se encuentra aún subdesarrollado. También es una de las regiones más urbanizadas del mundo, ya que el 80% de la población vive en zonas urbanas; en la actualidad, hay cuatro mega ciudades con más de 10 millones de habitantes y se espera añadir dos más a la lista para el año 2030. (DAES, 2014).

La dependencia de energía hidroeléctrica en el continente americano modifica sustancialmente los regímenes naturales de caudal, por las importantes captaciones de agua y el funcionamiento de las represas (Mapa No.5). El

indicador "estrés hídrico ambiental debido a alteraciones de régimen de caudal" se utiliza para evaluar las alteraciones hidrológicas resultantes de dichos impactos (Schneider et. al, 2013). En efecto, el 60% de los ríos del mundo son desviados a las 840.000 represas existentes en el mundo, muchas de los cuales están localizadas en Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón (Barlow y Clarke, 2004).

Mapa 5. Estrés Ambiental Debido a Alteraciones del Régimen de Caudal (1981-2010)



Fuente: Centro de Investigación de Sistemas Ambientales de la Universidad de Kassel

Los regímenes de caudal se ven especialmente alterados debido a las represas y a la gestión del agua en Estados Unidos, México, España, Portugal, Oriente Medio, la India y el Noreste y Noroeste de China. En el Este de Australia, la cuenca de Murray Darling muestra graves desviaciones respecto a las condiciones naturales, al igual que en África, en la cuenca del río Nilo, en Egipto, Sudán, el Sur de Sudán y Uganda, las cuencas del Orange y el Limpopo en Sudáfrica y las cuencas de Marruecos.

Uno de los casos más sobresalientes del riesgo de la degradación del ecosistema, como consecuencia de las captaciones de agua, fue la del mar Aral; los gobiernos de la extinta Unión Soviética tomaron la decisión entre 1940 y 1980, de desviar los ríos Amu y el Syr que alimentaban el mar Aral, para irrigar las llanuras de Asia Central, y los desiertos en Uzbekistán y Kazajstán (con el objetivo de producir algodón de exportación). Como consecuencia, el mar Aral perdería el 80% de su volumen de agua (Barlow y Clarke, 2004).

2.1 El Cambio Climático

El cambio climático exacerbaría los riesgos asociados con las variaciones en la distribución y disponibilidad de los recursos hídricos. El Acuerdo de París sobre el cambio climático del 11 de diciembre de 2015, sería una prueba de que el calentamiento global representa un riesgo global, particularmente en la provisión de agua dulce. Barlow y Clarke (2004) señalan que "el calentamiento global por si solo provocará que para el año 2050, 66 millones más de personas tengan que vivir en países con escasez de agua y 170 millones más de personas vivirán en países con grave escasez de agua" (p.79). A medida que se eleve la temperatura del planeta, cambiarían las pautas de las precipitaciones y se multiplicarían los episodios extremos, como sequías, inundaciones e incendios forestales. Millones de personas de las zonas costeras densamente pobladas, y de los países insulares, perderán sus hogares a medida que se eleve el nivel del mar.

Adicionalmente, las poblaciones más pobres de América Latina, África, Asia y otros lugares, se enfrentarían con la perspectiva de pérdidas de cosechas de consecuencias trágicas, descenso de la productividad agrícola, y aumento del hambre, la malnutrición y las enfermedades. En efecto, si bien el cambio climático amenaza al mundo entero, serían los países en desarrollo los más vulnerables; según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio

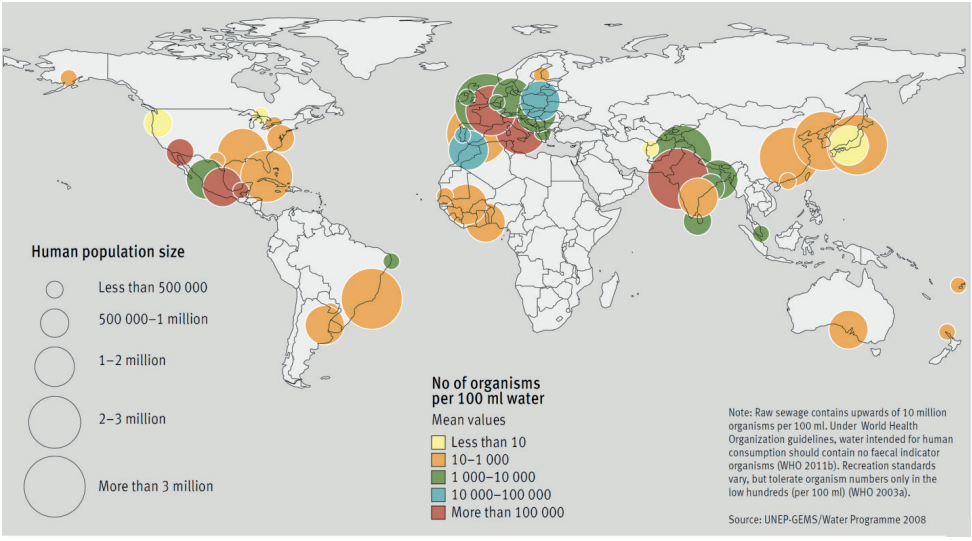
Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), el mundo en desarrollo soportaría aproximadamente entre el 75% y el 80% del costo de los daños provocados por la variación del clima. Incluso un calentamiento de 2°C podría generar en África y Asia meridional una reducción permanente del PIB de entre el 4% y el 5% (UNEP, 2012).

En el peor de los escenarios, un cambio climático incontrolado podría provocar un calentamiento de más de 5°C, que sería la diferencia entre el clima en la actualidad y la última era glacial, cuando los glaciares llegaron a Europa central y al norte de los Estados Unidos. De acuerdo a la UNEP (2012), ese cambio tardó milenios y la velocidad del cambio podría condenar a la extinción a más del 50% de las especies. Los niveles del mar podrían subir 1 metro en el presente siglo, lo que representaría una amenaza para más de 60 millones de personas y $200.000 millones de dólares de activos sólo en los países en desarrollo; además, entre 100 y 400 millones más de personas correrían riesgo de padecer hambre, y entre 1.000 y 2.000 millones más de personas quizás no dispondrían de agua suficiente para atender sus necesidades.

Además, las principales epidemias mortales podrían ampliar su extensión, ya que entre 220 a 400 millones de personas podrían verse expuestas al paludismo, enfermedad que ya cobra la vida de alrededor de un millón de seres humanos todos los años. Las epidemias y la contaminación de las fuentes hídricas parecerían ir de la mano; según Barlow y Clarke (2004), "la polución afecta en mayor grado a los acuíferos permeables, ya que puede penetrar en ellos más fácil y extenderse rápidamente por la capa freática" (p. 58). Tan solo en el caso de la India, ríos como el Ganges, el Brahmaputra y Yamuna, concentran bacterias, materia fecal y sustancias tóxicas a causa de la actividad industrial creciente (Mapa No. 6); India posee el agua más contaminada después de China, mientras que en África, el lago Victoria, por ejemplo, es el vertedero

de materia fecal y residuos industriales de Kenia, Tanzania y Uganda (Barlow y Clarke, 2004).

Mapa 6. Concentraciones de Coliformes Fecales en los Ríos Cerca de las Principales Ciudades: un Indicador de Patógenos Transmitidos por el Agua (1990-2011)



Fuente: UNEP-GEMS/Water Programme 2008

Por ende, las consecuencias del cambio climático en la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria, la prevalencia de enfermedades, los límites costeros, y la distribución de la población, se ven cada vez más como amenazas a la seguridad y defensa de los Estados, agravando las tensiones existentes y generando potenciales nuevos conflictos.

2.2 Crisis del Agua Dulce en los Estados Unidos y China

Bajo el concepto de la Seguridad Nacional, el agua dulce representaría un factor de poder económico en las relaciones internacionales, ya que se tornaría imperativo para los Estados, el desarrollo de la capacidad de posesión o control de bienes económicamente vitales para la industria y el poder económico relativo de los Estados (Klare, 2003). Desde este punto de vista, la posesión y

administración de fuentes de agua dulce se convertiría en un interés nacional de los Estados, como es el caso de los dos actores estatales más relevantes en el Sistema Internacional: Estados Unidos de América y la República Popular de China.

La primera singularidad de los Estados Unidos, es que el 95% del agua dulce que posee es subterránea, de los cuales el 50% ya se ha agotado, incluyendo el acuífero Ogallala (el más grande de Norteamérica), que abarca una extensión de 500.000 km² y 4.000 billones de toneladas de agua, que recorren ocho Estados (desde Texas hasta Dakota del Sur). El 51% del acuífero ha desaparecido a causa del excesivo bombeo para satisfacer el 21% de la irrigación, pues el acuífero se extiende a través de la Gran Cuenca del río Mississippi[58], la cual es considerada como el área con mayor intensidad de tierra cultivable del mundo (aproximadamente 162 millones de hectáreas de cultivo). En efecto, "con una proporción de absorción de agua de 50 millones de litros cada minuto, [el acuífero Ogallala] se agota a un ritmo 14 veces más rápido del que necesitaría la naturaleza para reabastecer las pérdidas" (Barlow y Clarke, 2004, p.40), razón por la cual explica porque Rusia destronó en 2016 a Estados Unidos del primer puesto de exportador de trigo en el mundo con un descenso de 21,1 millones de toneladas métricas.

El Estado de California, potencia agrícola al interior de los Estados Unidos, consume cerca del 80% del agua dulce de la Costa Oeste; en tan solo un siglo, su población se incrementó de 3 a 38 millones de personas, por lo que la reserva de agua subterránea de las cuencas de San Joaquín y Sacramento han disminuido en 42.000 millones de m³ desde el 2014. Adicionalmente, California ha perdido el 97% de las zonas húmedas debido a la sobreexplotación de la actividad agrícola, conllevando a que el 62% del territorio se encuentre en una

58.. La Cuenca del Mississippi es el Núcleo Vital de los Estados Unidos.

sequía extrema. En consecuencia, la administración local de California decidió por primera vez en su historia, restringir el consumo doméstico de agua en un 25% a favor de la actividad agrícola, ya que "el coste de la pérdida de tierras cultivables en Norteamérica, debido al agotamiento de los acuíferos, sería de $400.000 millones de dólares al año" (Barlow y Clarke, 2004, p.40).

El panorama se agrava cuando se toma en cuenta que el 40% de los ríos estadounidenses están contaminados. En efecto, se estima que 500 millones de kilos de herbicidas e insecticidas son vertidos cada año en los sistemas de agua (Barlow y Clarke, 2004). Asimismo, en la frontera entre los Estados Unidos y México, el 75% de las maquilas vierten desechos tóxicos a lo largo del río Bravo y el río Colorado; por su parte, en los Grandes Lagos se derraman entre 50 a 100 millones de toneladas de tóxicos de la industria estadounidense, afectando a Canadá, un país que cuenta con el 7% de la reserva hídrica renovable en el mundo. Por último, el 55% de los pozos petroleros en los Estados Unidos se encuentran en las zonas más secas del territorio nacional. Pues bien, la industria petrolera es altamente dependiente del agua; por ejemplo, para la práctica del Fracking en los Estados Unidos, tan solo un pozo requiere de 2 a 10 millones de galones de agua (Gubin, 2014).

Con relación a China, el 80% de sus ríos están contaminados; cerca de 40 millones de toneladas de materia fecal y residuos tóxicos de 20.000 fábricas químicas se derraman en el río Yangtzé y el agua del río Amarillo al año. El 40% del agua de la superficie de China es utilizada por la industria y la agricultura, razón que explica que más de 300 millones de personas no tengan acceso a agua potable (Gleick, 2008). En las provincias de la rica planicie del norte de China, la sobreexplotación del río Amarillo supera el 70% de su capacidad; la industria y la agricultura extraen 5.000 y 35.000 millones de m^3 de agua al año, respectivamente. El déficit de China en abastecimiento anual de agua dulce, es de 40 billones de m^3; las cuencas de los ríos Hua Hei, Hai He y Liao

He han disminuido en un 12% en los últimos 10 años, a consecuencia de la sobreexplotación y el cambio climático traducido en inundaciones y sequías (Gleick, 2008). Por su parte, las pérdidas económicas a razón de las sequías representan el 1.1% del PIB ($300 billones de yuanes), y de $110 billones de yuanes por inundaciones.

Por lo tanto, "sin un flujo estable y garantizado de agua dulce, la economía de Estados Unidos [y China] no estarían en condiciones de generar los productos necesarios para seguir manteniendo la competitividad en los mercados mundiales" (Klare, 2003, p. 26). En este sentido, la balanza de poder entre ambos Estados podría estar determinada por el acceso y control al agua dulce, como instrumento político-económico. Lo cierto es que el crecimiento demográfico, la contaminación masiva y la sobreexplotación, hacen de ese 1% del agua dulce en el mundo un recurso escaso, esencial para la supervivencia humana y de la Seguridad Multidimensional de los Estados. En efecto, la característica del agua dulce como recurso limitado, y el hecho de que las principales cuencas del mundo sean transfronterizas o que las existencias de agua tiendan a concentrarse en regiones fuera de las fronteras nacionales, sumando el panorama mundial y las consecuencias económicas que implica la escasez de agua dulce para los Estados, lleva a considerar que la posesión y control del agua dulce es fundamental para la Seguridad Nacional tanto como el petróleo y otros recursos naturales estratégicos.

3. Guerra por los Recursos

La abundancia o escasez de recursos naturales[59] seguiría contribuyendo al alimento de los conflictos en un amplio abanico de países del mundo desarrollado y en desarrollo. De allí se desprende la importancia del fuerte componente geopolítico en la disputa por los recursos naturales, el cual influye en su

59. Entre los que se podrían incluir aquellos recursos naturales que sirven como insumo a la producción de drogas alucinógenas (coca, marihuana, amapola, etc.).

valoración a nivel global. En algunos lugares (como Colombia), el saqueo de materias primas ha prolongado guerras que inicialmente fueron desencadenadas por otros factores, como quejas no atendidas o luchas ideológicas. Por lo tanto, la intensificación de los intercambios comerciales y el ascenso de nuevas potencias, provocarían una dinámica que se relaciona crecientemente con la propia seguridad soberana del espacio terrestre, aéreo y marítimo con el avance económico. Ello estimularía el crecimiento de la demanda mundial de recursos renovables y no renovables (agua, alimentos, minerales, entre otros), motivados especialmente por el crecimiento demográfico; sin embargo, Klare (2003) afirma que "(...) el crecimiento demográfico representa solo una parte de la explosión de la demanda. No es menos importante la extensión de la industrialización a un número cada vez mayor de zonas del planeta, con el incesante aumento de la riqueza personal a escala mundial" (p.76).

Desde 1990, al menos 18 conflictos violentos han sido motivados por la explotación de recursos naturales. Asimismo, casi el 40% de las 50 guerras y conflictos armados en los últimos años tienen un fuerte componente de recursos, en el sentido de que su explotación legal o ilegal contribuyó a desencadenar o exacerbar un conflicto violento o a financiar su continuación. El costo humano por la relación entre conflictos y recursos es apremiante; según cálculos aproximados, en los 90 perdieron la vida más de 5 millones de personas. Cerca de 6 millones huyeron a países vecinos y entre 11 y 15 millones fueron desplazados dentro de las fronteras de su propio país. Caudillos, gobiernos corruptos, carteles de la droga, grupos insurgentes, grupos terroristas, traficantes de armas y dirigentes empresariales sin escrúpulos, bajo el fenómeno de Convergencia y Globalización Desviada, se benefician del pillaje de los recursos naturales, y utilizan el dinero derivado del recurso correspondiente, para enriquecerse y fortalecerse militarmente. Estos conflictos significan el estancamiento del desarrollo e incluso el empobrecimiento y la muerte.

> La disputa global por recursos minerales, recursos energéticos, gestión de la bio-diversidad, del agua y de los ecosistemas de cara a las nuevas ciencias, se desdobla en múltiples dimensiones políticas, económicas y militares. Sin el desarrollo de un pensamiento estratégico que se afirme en el principio de la soberanía y en una visión de futuro de largo plazo, los países latinoamericanos y la comunidad de países en proceso de integración, tienen menos condiciones de hacer frente a las enormes presiones generadas por esta situación de disputa, donde está en juego, en última instancia, la capacidad de re-organización de proyectos hegemónicos y la emergencia de proyectos contra-hegemónicos (Bruckmann, 2011, p.7).

Las "guerras por los recursos" serían conflictos armados que giran, en un grado significativo, sobre la búsqueda o posesión de materiales críticos (Klare, 2003). El término surgiría en los Estados Unidos a principios de la década de 1980, en referencia a las percibidas amenazas soviéticas sobre el acceso de los Estados Unidos al petróleo de Oriente Medio y los minerales africanos (Clark & Page, 1981).

En resumen, desde el final de la Guerra Fría, las guerras interestatales se han vuelto escasas. Con la excepción del Golfo Pérsico, las áreas más probables para que surjan estos conflictos son los espacios de acceso abierto, como los fondos oceánicos marinos y las áreas marinas ricas en peces, minerales y combustibles fósiles, así como extensos bosques y canales transnacionales que suministran agua dulce para la agricultura, los centros urbanos y el desarrollo industrial. Es más probable que estos conflictos se desarrollen si hay disputas sobre los derechos de acceso, el control y la propiedad de los llamados "bienes comunes de la humanidad", así como los conflictos y reclamos no resueltos en materia de

recursos por parte de los Estados y otro tipo de organizaciones sociales. Estos conflictos potenciales se podrían agrupar en cuatro categorías (Andrews, P. Et Al, 2012): Primero, conflictos en mar abierto sobre el acceso a peces, minerales y combustibles fósiles, incluidas las amenazas a las rutas marítimas; Segundo, conflictos de acceso a suministros de agua dulce en ausencia de controles institucionales; Tercero, conflictos transfronterizos ocasionados por el cambio climático (aumento de los niveles del mar, desertificación), que conducen a la migración a gran escala; Cuarto, conflictos sobre recursos terrestres comunes en ausencia de mecanismos regulatorios.

La escasez de los recursos y el crecimiento de las disputas por el control de las fuentes de suministro de los recursos, es preocupante en la actual dinámica del sistema internacional. Hay recursos críticos que estarían concentrados en áreas de permanente conflicto, surcadas por enfrentamientos étnicos, religiosos, políticos o limítrofes, que tienen relevancia estratégica para las potencias centrales. La región de Medio Oriente y la zona del Mar Caspio son hoy fuentes vitales de suministro en hidrocarburos que son, tal vez, los recursos no renovables de más grave intensidad de explotación y agotamiento. Asimismo, otras regiones como las aguas del Nilo en África o los importantes reservorios de agua en Sudamérica y la fuente de biodiversidad más grande del planeta, la Amazonia, son otras tantas áreas de posible intensificación de conflictos por el control de sus recursos en un mediano plazo. Además, las zonas marítimas costeras son áreas de gravísimo peso estratégico, particularmente por los recursos pesqueros y la posible existencia de yacimientos hidrocarburíferos; por lo que se introduce el problema de la correcta delimitación del mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva, como ha sido el caso del conflicto de Colombia con Nicaragua.

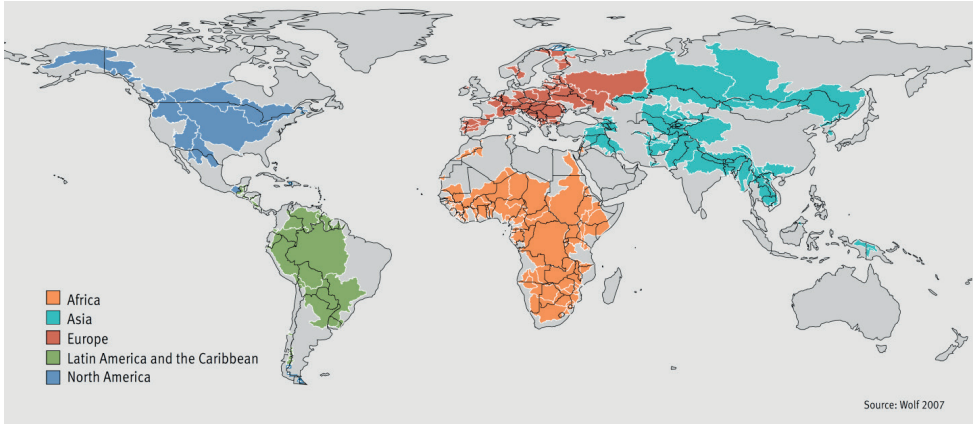
3.1 Conflictos por el agua

El agua se diferencia de los demás recursos escasos en notables aspectos. Es la base de todas las facetas de la sociedad humana, desde la ecología y la biología, hasta la agricultura, pasando también por la industria; y no tiene sustitutos conocidos. Al igual que el aire, el agua es esencial para la vida. No sigue las fronteras políticas de los Estados y su dependencia no se basa necesariamente en el nivel de desarrollo económico de un Estado, ya que en regiones donde su suministro es relativamente escaso, la búsqueda de agua puede llevar al estrés hídrico; este "estrés" aumentaría a medida que factores como el crecimiento de la población, la degradación ambiental, el incremento de los niveles de vida y los avances tecnológicos, afectan el ya limitado suministro de agua.

La ubicación geográfica, el desarrollo económico e industrial, e incluso el poder estatal, pueden afectar o verse afectados por la disponibilidad de agua, o por la falta de ella. Gran parte de la literatura que se enfoca en las "guerras por el agua" (Shapland, 1997; Wolf, 1998; Turton, 1999; Elhance, 1999; Freeman, 2001; Gilmartin, 2015), utiliza como casos de estudio a las cuencas fluviales internacionales. Los ríos internacionales fluyen, en la mayoría de los casos, de un país a otro; la cantidad de agua que utiliza un país de un río en particular, puede llegar a determinar cuánto acceso tiene otro país al agua de dicho río. Estas aguas compartidas son la base de la interdependencia del agua para millones de personas. Por ende, las aguas compartidas serían un factor geopolítico de relevancia (Mapa No. 7); además, los ríos, lagos, acuíferos y humedales internacionales, unen a pueblos separados por fronteras internacionales, algunas de las cuales siguen el curso de las vías fluviales. Las cuencas hidrográficas internacionales (como lagos y aguas subterráneas poco profundas compartidas por más de un país), cubren casi la mitad de la superficie de la tierra del planeta.

Según la UNEP (2012), 2 de cada 5 personas viven actualmente en estas cuencas, que representan también el 60% de los flujos fluviales en el mundo; en la actualidad, 145 países (que representan más del 90% de la población mundial), comparten 263 cuencas. Adicionalmente, más de 30 Estados están ubicados en territorios de cuencas transfronterizas; por ejemplo, la cuenca del Danubio es compartida por 14 Estados (y otros 5 comparten una parte mínima de la misma), mientras que las cuencas del Nilo y el Níger son compartidas por 11 Estados, y la cuenca del Amazonas por 9 Estados (Wolf, 2007). En resumen, alrededor de 61 cuencas cubrirían cerca de dos tercios de la superficie continental.

Mapa 7. Cuencas Fluviales Internacionales, 2000



Fuente: UNEP, 2012/ Wolf, 2007

Los ríos son tan sólo una de las redes de la interdependencia del agua. En muchos países, los lagos compartidos son cruciales para la seguridad del agua, así como para los medios de sustento. De acuerdo a la UNEP (2012), se calcula que unas 30 millones de personas dependen del Lago Victoria (un tercio de la población global de Kenya, Tanzanía y Uganda), mientras que otros 37 millones de personas viven en la cuenca del Lago Chad. Lo mismo puede decirse de la cuenca del Lago Titicaca, en América Latina; más de 2 millones de personas viven en dicha cuenca, que se extiende entre Bolivia y Perú. Pero a diferencia de los ríos y lagos, los acuíferos son invisibles. Éstos también

almacenan más del 90% del agua dulce del planeta y, al igual que los ríos y los lagos, atraviesan las fronteras estatales; tan sólo en Europa existen más de 100 acuíferos transfronterizos, mientras que en América del Sur, el acuífero Guaraní es compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la región del Levante, el acuífero de la Montaña que atraviesa Israel y los Territorios Palestinos, es esencial para la seguridad humana de ambos grupos de usuarios del agua.

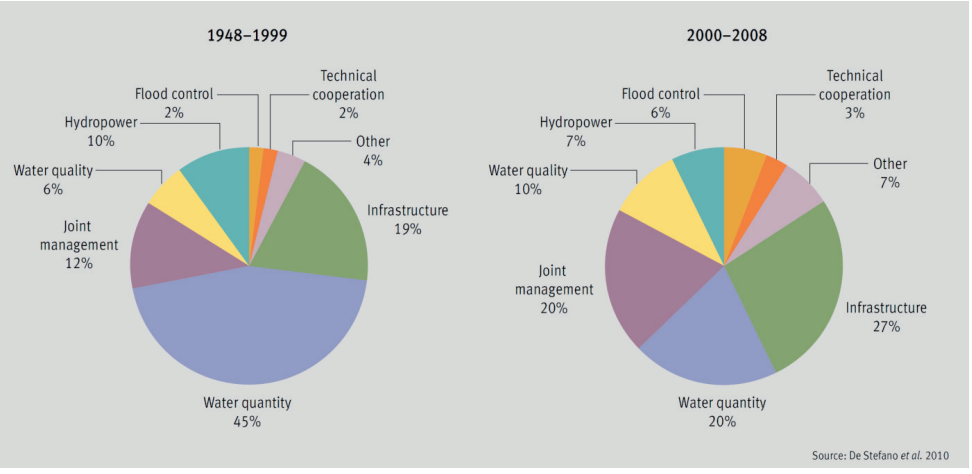
En conclusión, para 39 países con una población de 800 millones de personas, al menos la mitad de sus recursos hídricos provienen de fuera de sus fronteras (De Stefano, 2010). Para un país como Egipto, la dependencia es extremadamente alta, ya que el país apenas recibe precipitaciones y, por lo tanto, depende casi por completo de fuentes de agua externas que recibe a través del Nilo, pero cuyo origen está en Etiopía. Del mismo modo, pero en menor medida, Pakistán depende en gran medida del agua del Indo, Camboya en las aguas del Mekong, e Irak y Siria en el Tigris y el Éufrates, que fluyen desde Turquía. Bangladesh depende de corrientes provenientes de la India para obtener el 91% de su agua, para regar sus cultivos y alimentar sus acuíferos; los agricultores y jornaleros del país que viven en la cuenca del Ganges, el Brahmaputra y el Meghna son los usuarios finales de aguas que han recorrido miles de kilómetros, atravesando las fronteras de cinco países. En todos estos casos, el agua es un recurso geopolítico importante que afecta las relaciones de poder entre los países que comparten una cuenca fluvial común.

Por ello, las aguas compartidas siempre pueden ser motivo de rivalidad. Esto se refleja desde el punto de vista lingüístico: la palabra "rival" se deriva del latín *rivalis*, que hace referencia a "aquel que utiliza el mismo río que el otro". Por ende, los países ribereños son, con frecuencia, rivales por el agua que comparten. Según De Stefano (2010), existen más de 3.800 declaraciones

o convenios unilaterales, bilaterales o multilaterales sobre el agua, de los cuales 286 son tratados, y entre estos, 61 tratados se refieren a más de 200 cuencas fluviales internacionales. Lo llamativo en esta serie de datos, es que sólo se han registrado 37 casos de violencia por el agua entre los Estados (7 de ellos por fuera de Oriente Medio).

En caso de que la cantidad de agua que recibe un Estado, cayera por debajo de un estándar mínimo necesario para mantener las necesidades de esa nación, la escasez y el potencial de conflicto aumentarían. Además, la escasez ambiental causaría una serie de efectos sociales negativos, como el aumento de la pobreza, las tensiones entre los grupos que compiten por los recursos escasos y los movimientos masivos de población. De acuerdo a Freeman (2001), una vez que la escasez de agua alcanzara un punto de quiebre, los Estados podrían usar sus instrumentos de poder para obtener acceso a más agua, y tal vez a costa de otros Estados, por lo que el resultado sería una "guerra por el agua", entre dos o más Estados (Gráfico No. 2).

Gráfico 2. Conflicto de Agua Dulce por Tipo de Problema
1948-1999 y 2000-2008

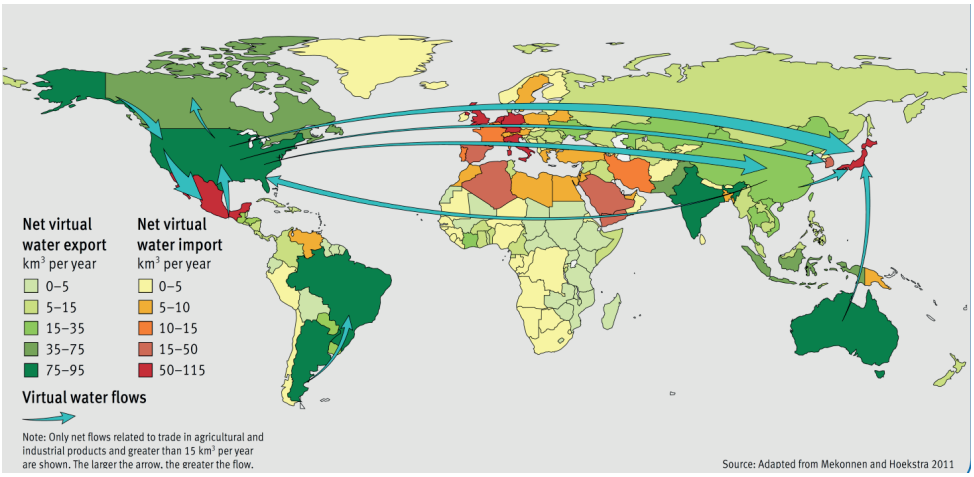


Fuente: UNEP, 2012/ De Stefano et. al, 2010

No obstante, las guerras por el agua parecieran ser raras, ya que se debería cumplir, en teoría, con varias condiciones simultáneamente para que el conflicto se llegue a producir; según Homer-Dixon (1999), estas condiciones serían: Primero, que los Estados ribereños "aguas abajo" sean altamente dependientes del suministro de agua; Segundo, que el país localizado "aguas arriba" tenga la capacidad de controlar, en cierta medida, el flujo de agua río abajo; Tercero, que los países rivales posean una historia de mutuo antagonismo; y Cuarto, que los países "aguas arriba" deberían poseer superioridad militar. Además, Wolf (1998) afirma que los intereses compartidos superarían con creces cualquier motivo de conflicto sobre los recursos hídricos internacionales, y una vez que se conciertan acuerdos entre los ribereños, estos acuerdos tenderían a ser duraderos, incluso cuando se produce un conflicto por otros asuntos. Lo cierto es que los conflictos que ocurren por el agua son generalmente de naturaleza política y no militar.

Según Turton (1999), otra de las razones por las cuales las guerras por el agua serían escasas, es el comercio del "agua virtual" (Mapa No. 8). Los Estados no piensan, generalmente, en la relación entre el comercio internacional y la seguridad del agua. Una de las razones es que el agua (en su forma física), poco se comercializa, debido a sus propiedades voluminosas. Además, no hay propiedad privada del agua, por lo que tampoco se podría comercializar en un mercado o tranzar en las bolsas de valores internacionales. Sin embargo, el agua si se comercializa en forma virtual, es decir, en forma de productos agrícolas e industriales. El comercio mundial virtual de agua para productos agrícolas e industriales ascendió a 2.320 km^3 por año, entre 1996 y 2005; los cultivos aportaron el 76%, mientras que los productos animales e industriales, un 12% cada uno (Mekonnen & Hoekstra, 2011).

Mapa 8. Importaciones, Exportaciones y Flujos Virtuales de Agua (1996-2005)



Fuente: FAO, 2011

Las cuencas, países o regiones con escasez de agua, pueden importar productos de uso intensivo de agua a través del comercio, preservando los escasos recursos hídricos para fines más valiosos. El argumento detrás del "agua virtual" podría explicarse de la siguiente manera: se requieren aproximadamente 1,000 toneladas de agua para producir 1 tonelada de trigo; por lo tanto, importar 1 tonelada de trigo sería cuasi equivalente a la importación de 1,000 toneladas de agua. En consecuencia, los Estados de Medio Oriente, por ejemplo, estarían importando más trigo y cultivando menos, lo que reduciría la presión sobre el suministro de agua; por ende, a medida que esta tendencia aumente, la probabilidad de guerra por el agua, al menos a nivel estatal o regional, disminuiría.

De acuerdo a Chapagain et al. (2006), países con escasez de agua y alta dependencia (25-50%) en la importación virtual de agua serían, por ejemplo, Grecia, Italia, Portugal, España, Argelia, Libia, Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Japón y México. Incluso los países europeos que no tienen una imagen de escasez de agua, como el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, Alemania,

Suiza y Dinamarca, tienen una gran dependencia virtual de las importaciones de agua. Estos países importarían productos que son relativamente intensivos en agua, mientras buscarían exportar productos que consumen menos agua. Por ejemplo, en el período entre 1997 al 2001, Japón (el mayor importador neto de bienes de uso intensivo de agua en el mundo), ahorró anualmente 94 mil millones de m³ de sus recursos hídricos domésticos. De manera similar, México ahorró anualmente 65 mil millones de metros cúbicos, Italia 59 mil millones de metros cúbicos, China 56 mil millones de metros cúbicos, y Argelia 45 mil millones de metros cúbicos.

Para los países que dependen de la importación de productos intensivos en agua, es importante saber si el agua así ahorrada, tendría mayores beneficios marginales que el costo adicional involucrado en la importación de dichos productos. Uno de los países con escasez de agua que más depende en gran medida de las importaciones de productos básicos que hacen un uso intensivo del agua es Jordania; este país importa de 5 a 7 mil millones de m³ de agua en forma virtual por año, en contraste con los mil millones de m³ de agua que extrae de sus fuentes de agua domésticas (Haddadin, 2003). Entonces, Jordania importaría anualmente una cantidad de agua virtual que es cinco veces su propio recurso hídrico anual renovable; por ende, aunque Jordania buscaría preservar sus escasos recursos hídricos, también lo hace dependiente de otros Estados para la provisión de alimentos. En el caso de Egipto, un país con una precipitación de lluvias sumamente baja (la precipitación media es solo de 18 mm/ año), por lo que la mayor parte de su agricultura subsiste a partir de la irrigación. Ahora bien, la importación de trigo en Egipto implica un ahorro de sus recursos hídricos domésticos de 3.600 millones de m³ por año, que es aproximadamente el 7% del volumen total de agua al cual Egipto tiene derecho sobre el uso del río Nilo, según el acuerdo de 1959 (Hoekstra & Chapagain, 2007).

En consecuencia, la importación de "agua virtual" podría ser un medio eficaz para que los países con escasez de agua, puedan conservar sus recursos hídricos domésticos[60], ya que la importación de productos básicos que consumen grandes cantidades de agua, puede aliviar la presión sobre los recursos hídricos domésticos (Allan, 2001). En efecto, este es un mecanismo que hace que muchos países en el Medio Oriente sobrevivan, ya que satisfacen su demanda de alimentos, y ahorran sus recursos hídricos escasamente disponibles mediante la importación de alimentos desde el exterior.

Es previsible que los países que experimenten una mayor escasez de agua debido al cambio climático, se vean forzados en el futuro a una mayor importación de productos que consumen mucha agua. Pero cuando la importación de alimentos pueda llegar a aliviar la escasez nacional de agua, la exportación de productos con alto contenido de agua aumentaría el uso y, por lo tanto, la escasez de agua en los países exportadores, como Colombia. El "agua virtual" no solo viene en forma de trigo, sino también de otros productos agrícolas relativamente sedientos, como el algodón o el arroz. Por lo tanto, el "agua virtual" también podría conducir a la sobreexplotación de los recursos hídricos en los países exportadores, priorizando las necesidades de agua de los productos básicos sobre las necesidades locales básicas, especialmente cuando el modelo económico de dichos países promueve las exportaciones de productos básicos.

Según Hoekstra (2009), los Estados con el mayor uso de agua anual para la producción de productos de exportación, fueron los Estados Unidos (92 mil millones de m³), Australia (57 mil millones de m³), Argentina (47 mil millones de m³), Canadá (43 mil millones de m³), Brasil (36 mil millones de m³) y Tailandia (26 mil millones de m³). En el caso de los Estados Unidos,

60. México importa trigo, maíz y sorgo de los Estados Unidos, los cuales requieren de 7.100 millones de m³ de agua por año en los Estados Unidos. Si México produjera los cultivos importados, requeriría 15.600 millones de m³ de agua por año. Por lo tanto, desde una perspectiva global, el comercio de cereales de Estados Unidos a México le ahorraría a los mexicanos 8.5 mil millones de m³ de agua por año.

los principales productos detrás del uso nacional del agua para la exportación, fueron los cultivos oleaginosos y de cereales; en Australia y Canadá, el uso del agua para la exportación se relacionó principalmente con la producción de cereales y pecuarios; para los casos de Argentina y Brasil, el uso del agua para la exportación fue para la producción de cultivos oleaginosos; y en cuanto a Tailandia, el principal uso nacional de agua fue para la exportación de arroz[61].

Por ende, el comercio internacional aumentaría la escasez de agua en algunos lugares y aliviaría la escasez de agua en otros, por lo que muchos de los problemas relacionados con el agua, tendrían un componente comercial internacional. En efecto, el agua subsidiada en Uzbekistán se usa en exceso para producir algodón para la exportación; Kenia agota sus recursos hídricos alrededor del lago Naivasha para producir flores al mercado de los Países Bajos; mientras que los ríos en China se han contaminado gravemente por los flujos de desechos de las fábricas manufactureras que producen productos básicos para el mercado europeo. En resumen, en la mayoría de los países con escasez de agua, la elección podría ser la sobreexplotación de los recursos hídricos domésticos para aumentar la autosuficiencia hídrica (la estrategia aparente de Egipto), o la importación virtual de agua a costa de volverse dependiente del agua (Jordania). China e India, los dos países con las mayores poblaciones del mundo, todavía tienen un alto grado de autosuficiencia hídrica nacional (93% y 98% respectivamente); sin embargo, los dos países tienen una huella hídrica per cápita relativamente baja (China con 700 m³ per cápita anual e India con 980 m³ per cápita anual). Si el patrón de consumo en estos países cambia hacia aquellos Estados con clases medias numerosas, como los Estados Unidos o algunos países de Europa Occidental, enfrentarían una grave escasez de agua en el futuro, sin la probabilidad de mantener su alto grado de autosuficiencia

61. En el período 1997-2001, Tailandia utilizó 27.800 millones de m³ por año de agua (suma de agua de lluvia y agua de riego) para producir arroz para la exportación (Maclean et. al, 2002).

hídrica. Por ende, una pregunta relevante es cómo se alimentarán China e India en el futuro. Si decidieran obtener parcialmente la seguridad alimentaria a través de la importación de alimentos, esto exigiría enormes recursos de tierra y agua en el resto del mundo.

Elhance (1999) agrega que los seres humanos han demostrado una considerable capacidad de adaptación para ajustar los estilos de vida de acuerdo con los recursos que tienen a la mano, y comerciando por recursos y productos limitados que se producen a partir de recursos tan escasos. Pero si bien el comercio virtual del agua podría redistribuir eficientemente el agua y ayudar parcialmente a abordar la desconexión entre el consumo y los impactos de la producción, también podría agravar los conflictos por la dependencia del agua virtual. La relevancia política de la dependencia externa de los recursos hídricos de los Estados haría que el agua sea un recurso geopolítico regional en algunas cuencas fluviales; el otro tipo de dependencia del agua, la dependencia virtual de las importaciones de agua, convertiría el agua en un recurso geopolítico global. Por ende, la creciente dependencia de los Estados con escasez de agua en el suministro de alimentos o agua, podría llegar a ser explotada políticamente por aquellos Estados que controlan el agua. En resumen, si bien la posibilidad de conflicto por el agua no se eliminaría por completo, es mucho más probable que llegue a ser de naturaleza política que militar.

4. Hidropolítica: el *Respice Aqua Vitae* de Colombia

4.1 ConceptualizaciÓn de la Hidropolítica

El estudio de la hidropolítica es una actividad académica relativamente nueva. Al igual que con cualquier disciplina de estudio en construcción, existe bastante confusión en la conceptualización de ciertos términos, que en la

mayoría de los casos son indiscriminadamente utilizados como sinónimos en la literatura. Por estas razones, un mayor enfoque en el desarrollo de la claridad conceptual se ha vuelto esencial, ya que a medida que los académicos se involucran en los estudios de problemas relacionados con el agua, rápidamente se han venido dando cuenta de que el agua es un recurso multifacético. Como la existencia de vida sería imposible sin el agua, esta es reconocida cada vez más como un recurso extremadamente valioso; y debido a que el agua es escasa, y porque es esencial para la vida, la salud y el bienestar, se ha convertido en un recurso natural estratégico disputado y, por lo tanto, político.

Por esta razón, los estudios enfocados en el agua invariablemente tocan las diferentes facetas de la vida, lo que les proporcionaría un visible carácter multidimensional. En este sentido, un análisis preliminar de la literatura revelaría cuatro enfoques importantes con relación a los estudios sobre hidropolítica: El primero sería sobre la relación existente entre la posesión del agua y la proliferación de conflictos entre los Estados (Allan, 1999; Amery, 1997; Anderson, 1988; Ashton, 2000; Boronkay & Abbott, 1997; Brooks, 1994; Diehl & Gleditsch, 2001; Gleick, 1998; Morris, 1997; Salman & De Chazournes, 1998; entre otros); el segundo sería sobre la relación entre el agua y el medio ambiente (Bächler, 1994; Homer-Dixon, 2000; Porter, 1990; Turton, 2000; entre otros); el tercero sería sobre la relación entre el agua y la securitización de la administración de recursos hídricos (Clarke, 1991; Falkenmark & Lindh, 1993; Kolars, 1993; Redclift, 1994; entre otros); y el cuarto sería sobre la relación del agua y la dimensión socio-cultural (Bennett, 1974; Ohlsson, 1999 Yamskov, 1989; Widstrand, 1978; entre otros).

Una definición sintetizada y a la vez amplia de la Hidropolítica es “la asignación autorizada de valores en la sociedad con respecto al agua” (Easton, 1965, p.21); por su parte, Elhance (1999), trata el concepto desde una visión de

actores estatales y expresa que la hidropolítica es el "análisis sistemático de los conflictos interestatales y la cooperación con respecto a los recursos hídricos internacionales" (p.54), mientras que Meissner (1999) define la hidropolítica como "la investigación sistemática de la interacción entre Estados, actores estatales y una multitud de otros participantes, como individuos dentro y fuera del Estado, con respecto a la asignación autorizada y/o uso de recursos hídricos internacionales y nacionales" (p.5-6). Sin embargo, al abordar la relación del agua con los conflictos, el medioambiente, la seguridad, la sociedad y la cultura, Turton & Henwood (2002) afirman que la hidropolítica es el ejercicio de gobernanza por parte de la sociedad, encabezada por el Estado, sobre los recursos hídricos en beneficio de la sociedad y el entorno.

4.2 Hidropolítica y Cuencas Fluviales

El control del agua para la agricultura podría ser la forma más temprana de regulación de ríos y lagos, y su desarrollo dio lugar en las llamadas civilizaciones fluviales o de irrigación, como las cuencas del Nilo, Tigris y Éufrates, Indo, Amarillo y Yangtze, así como en México, el Perú costero y otras localidades dispersas del continente americano. Ya se practicaría en el 4.000 a.C., al menos en Mesopotamia, y su importancia se evidencia por el hecho de que las historias de los orígenes de la sociedad en Egipto, Mesopotamia y China, usualmente se refieren a una figura legendaria que controlaba los ríos, permitiendo que la tierra fuera apta para el cultivo. Según Teclaff (1967), en la epopeya épica babilónica de la creación, el dios Marduk colocó juncos en la superficie de las aguas y amontonó bancos de tierra protegidos por los juncos, para dominar el Éufrates; en el valle del Nilo, Menes (un compuesto de dos o más reyes primitivos), terminaría uniendo el Alto y el Bajo Egipto (hacia 3.400 a.C.), recuperando la ribera izquierda del río mediante la construcción de canales y diques; en China, un papel similar fue desempeñado por Yii, fundador de la dinastía Hsia (aproximadamente a principios del segundo milenio antes de Cristo).

En el caso de Colombia, la leyenda chibcha de Bochica, es otro ejemplo de cómo los mitos fundacionales de las sociedades estarían estrechamente vinculados con la administración del agua. En efecto, cuenta la leyenda que en época de los Chibchas, llovió torrencialmente durante varios días, arruinando los cultivos y las casas de los indígenas. En consecuencia, el Zipa y otros caciques se reunieron para buscar una solución, acordándose de Bochica, un anciano alto con ojos claros y barba blanca, que no era de su tribu y quien había aparecido de repente en un cerro de la sabana. Él les había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana cundi-boyacense. Por lo tanto, los chibchas decidieron pedirle ayuda; como resultado, Bochica se dirigió hacia el suroccidente y se detuvo en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, y en donde las aguas se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Paso siguiente, Bochica miró al cielo y tocó con su bastón las imponentes rocas; cuenta la leyenda que ante la sorpresa de todos, las rocas se abrieron y el agua se volcó por las paredes formando el Salto del Tequendama, que daría origen a una catarata de más de 150 metros de altura, permitiendo que la sabana, poco a poco, volviese a su estado normal.

Todos los grandes valles fluviales de las civilizaciones de río requerían medidas de control de inundaciones y la mayoría de ellos requerían drenaje, como por ejemplo, en los deltas del Nilo y el Tigris-Éufrates. El control del agua para la agricultura comenzaría más tarde en China que en Mesopotamia o Egipto, y se desarrolló independientemente en las dos grandes cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze; se considera que los primeros diques a lo largo del Río Amarillo datan de principios del siglo VII a.C., y los primeros tanques de riego del siglo VI a.C. A su vez, el examen de las obras de las civilizaciones de riego en Mesopotamia, Egipto y China indica que, si bien los gobernantes y sus ingenieros podrían no haber apreciado plenamente la necesidad de lograr una planificación y acceso a todo el sistema fluvial (estos eran, después de todo, ríos

inmensos), si eran conscientes de la interdependencia de las aguas de la cuenca, tendiéndolo en cuenta a la hora del diseño de sus obras.

En Mesopotamia, los canales que atraviesan los territorios de varias ciudades Estado, conceden pruebas tangibles de un grado de cooperación en la antigüedad. Antes de la unificación, las aguas de la cuenca se parcelaron entre estas ciudades Estado, de una manera que recuerda la división moderna de las aguas para el riego en las cuencas del Indo, Nilo y el Río Grande. Además, muchos registros enfatizan la necesidad de mantener en reparación represas, canales y diques, a fin de evitar daños por inundaciones en las tierras bajas. Van desde el Código de Hammurabi, que trata el daño a los campos inferiores causado por descuidar el mantenimiento de las zanjas de riego, a un pasaje del Li Ki (clásico chino del Período Chou), exhortando a los funcionarios locales a inspeccionar tanto las tierras altas como bajas, para ver la reparación de diques y represas, y asegurarse de que los canales y zanjas no tengan sedimentos (Teclaff, 1967).

En casi todos los casos, la unificación territorial fue seguida por la construcción de obras de riego y recuperación, sugiriendo un vínculo entre la unificación política y la unidad física de la cuenca fluvial. En Egipto, la transición a un régimen unitario fue relativamente rápida, tomando pocas generaciones; en Mesopotamia, la transición fue más lenta. Mientras tanto, la unificación de China llegaría más tarde, hacia el 221 a.C., después de que el estado de Ch'in (en la cuenca del río Amarillo), había superado el poderoso estado de Ch'u (en la cuenca del Yangtze). Sin embargo, debe notarse que la formación de esta única unidad política sería provocada por la fusión de dos cuencas hidrográficas enormes y completamente separadas, cada una de las cuales había experimentado un largo proceso de unificación; parecería que la topografía de la cuenca alta del Río Amarillo favoreció la independencia

política en cada valle tributario principal, mientras que la de la cuenca inferior en la Gran Llanura favoreció un gran estado centralizado.

En consecuencia, por su dependencia del control del agua, parecería que las civilizaciones fluviales eran peculiarmente susceptibles a la ruptura por revolución interna o por ataque externo. Por ejemplo, Willcocks (1917) atribuiría los siete años de hambruna en Egipto (en la época bíblica de José), a la captura de los diques del Nilo por parte del Rey del Alto Egipto; la eventual recaptura de estos diques por parte de los gobernantes del bajo Egipto restauraría la prosperidad a Egipto. Asimismo, Herodoto describía cómo los persas usaron su control del flujo de agua para mantener sometidos a los pueblos conquistados. En el periodo clásico, la civilización romana nacida en las llanuras del río Tiber, proyectaría después su poder a través del mar Mediterráneo y su dominio como poder hegemónico de occidente por casi cinco siglos, en el que denominaría su Mare Nostrum.

Otro gran uso de los ríos, que se remonta a tiempos ancestrales, ha sido como medio de transporte. Para el riego de cultivos, la principal preocupación con relación al río es el volumen de agua que se distribuirá o drenará. Para la navegación, es el flujo, es decir, qué tan rápido, qué tan lejos, con qué regularidad, con qué suavidad y en qué dirección conduce la vía fluvial. El río ideal sería largo, ancho y profundo, sin obstrucciones (como caídas o rápidos), sin cambios estacionales marcados en el nivel, y con una red de afluentes navegables. Los grandes sistemas fluviales poseen varias de estas características[62]; no obstante, la ausencia de varias de ellas no ha impedido que muchos ríos se hayan convertido

62. Como por ejemplo, el eje Sena–Scheldt–Mosa, el cual se constituye como un eje principal de la navegación interior en Europa occidental. Los canales, los ríos y los deltas de los ríos en el norte de Francia, Bélgica y los Países Bajos proporcionan una densa red de conexiones al interior de varios grandes puertos del Mar del Norte, así como vínculos entre ellos. Con más de 20 millones de toneladas al año para París y 13 millones de toneladas al año para Lieja, estos dos puertos son los puertos de navegación interior más importantes del corredor; Rotterdam es el mayor puerto marítimo del corredor con más de 200 millones de toneladas al año, seguido de Le Havre y Amberes con unos 60 millones de toneladas al año. El eje Sena-Scheldt-Mosa será relevante para varios corredores futuros de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), incluyendo el Atlántico, el Mar del Norte y el Mar del Norte-Báltico.

en importantes arterias de comunicación, como, por ejemplo, los largos ríos siberianos que son navegables solo durante tres meses al año; el San Lorenzo, también con hielo en invierno; el Ohio[63] y el Mississippi, con sus innumerables barras de arena y canales cambiantes.

La utilidad de los ríos a menudo se evalúa en términos de su navegabilidad actual para embarcaciones de gran calado, así como de su capacidad para competir con otros medios de transporte modernos. En comparación con las carreteras, las líneas de comunicación marítimas y las líneas de comunicación aéreas, que ofrecen una considerable flexibilidad de movimiento, los ríos imponen una rigidez "aguas arriba" y "aguas abajo". Los obstáculos a la navegación, como las cataratas del Nilo, son en muchos casos, más graves que los obstáculos al transporte terrestre. Asimismo, la dirección del flujo ha sido importante en la historia humana de algunas cuencas fluviales; ha hecho una considerable diferencia que el Danubio[64] termine frente a Asia, dándole la espalda a Europa occidental; que el Rin[65] y el Ródano[66] se elevan en los Alpes, pero fluyan en direcciones opuestas; que el San Lorenzo llegue al Océano Atlántico, y no al Ártico ni al Golfo de México; o que el río Magdalena desemboque en el Caribe y no en el río Amazonas.

63. El sistema fluvial del río Ohio tiene 4.506 km de aguas navegables. La mayoría de los 275 millones de toneladas transportadas por esta vía utilizan las 60 instalaciones de esclusas existentes en el sistema. El producto primario enviado a través y dentro de la cuenca del río Ohio es el carbón, en gran parte debido a la gran cantidad de reservas en la región. Sin embargo, también hay cantidades significativas de agregados, petróleo, granos y productos químicos enviados a través del mismo. (US Army Corps of Engineers, 2005, p. 3-5).
64. El Danubio conecta Europa Central con el Rin y el Mar Negro. Este río es el más largo de Europa central y del sudeste de Europa, y la conexión natural del interior de varios puertos del Mar Negro. El Danubio constituirá la columna vertebral del futuro corredor Rin-Danubio de la Red (TEN-T).
65. El eje del Rin constituye la columna vertebral de la navegación interior en Europa; conecta los puertos marítimos más grandes de Europa con su hinterland y con un gran número de nodos intermodales. Más de dos tercios de todas las mercancías transportadas por las vías navegables europeas se transportan por el Rin; con más de 50 millones de toneladas al año, Duisburg es el puerto interior más grande del corredor, seguido por Lieja, Colonia, Estrasburgo y Ludwigshafen. Rotterdam es el mayor puerto marítimo del corredor, seguido por Amsterdam y Amberes. La penetración de la red en el Rin también se da gracias a sus principales afluentes (Meuse, Mosela, Main, Neckar) que actúan como "alimentadores" de la arteria.
66. El eje Ródano-Saona proporciona acceso al centro de Europa occidental a través de la región mediterránea. A pesar de que el eje no está vinculado de manera eficiente con las otras vías fluviales de Europa Occidental, ofrece interesantes oportunidades para la navegación interior y el transporte intermodal en general.

La corriente principal de un sistema fluvial puede concebirse como un eje alrededor del cual la organización de todo el sistema de navegación tiende a cristalizarse. Dependiendo de las circunstancias locales, y especialmente de hasta qué punto el sistema fluvial en cualquier período de la historia es el único o el más importante medio de comunicación, este proceso se puede ver en acción en la unificación comercial de la cuenca, cuando el flujo del comercio marítimo es paralelo al flujo del río, y la cuenca se vuelve coextensiva con el interior del comercio de un puerto marítimo.

Excepto en las llamadas civilizaciones fluviales, donde las mismas obras hidráulicas sirvieron a los propósitos de riego, control de inundaciones y navegación, hubo un desarrollo poco correlacionado de los recursos hídricos a lo largo de la historia, hasta hace algunas décadas. Cada uso se desarrolló por separado, sin tener en cuenta posibles conflictos con otros usos; sin embargo, hacia fines del siglo XIX, a ciertos hombres de visión se les había hecho evidente que, para su máxima utilización, las aguas de una corriente o de una cuenca completa, debían utilizarse en tantas tareas como fuera posible. El aumento de la demanda de agua lo hacía deseable, mientras que los avances tecnológicos lo hacían factible, como la invención de los barcos de vapor.

Tal sería el caso de los Estados Unidos de América; gracias a los avances para la navegación fluvial con los barcos de vapor en 1811, y la construcción de un sistema de puertos, canales, represas (y otras obras de infraestructura), la Gran Cuenca del río Mississippi en los Estados Unidos, se constituiría junto a la Hidrovía Intercostal[67] del sur de los Estados Unidos, como la red fluvial con más kilómetros de vías navegables interiores que el resto del mundo combinado, constituyéndose en el heartland norteamericano (Mapa No. 9). Después del río

67. La Hidrovía Intercostal del sur de los Estados Unidos posee 1.784 km de vías navegables en las que se transporta una parte significativa de los productos básicos de los Estados Unidos. El petróleo es el principal producto transportado (48,5%), seguido por los productos químicos y los materiales crudos que representan el 21% y el 18%, respectivamente.

Missouri, el río Mississippi es el segundo río más largo de los Estados Unidos; fluye alrededor de 3.780 km y baña buena parte del Medio Oeste de los Estados Unidos, la cual se considera es también la mayor parte contigua de tierras de cultivo del mundo (162 millones de hectáreas aproximadamente).

Mapa 9. Gran Cuenca del Mississippi y la Hidrovía Intercostal



Fuente: Stratfor, 2008

El río Mississippi drena agua de 31 estados de la Unión o alrededor del 40% de la tierra en el país; asimismo, drena agua de las provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan. Sin embargo, a pesar de que la red fluvial estadounidense sea de mayor volumen y longitud que muchos ríos del mundo,

ello no es lo que la hace distinta a otras; lo característico es que muy pocos de sus afluentes comienzan a gran altitud, por lo que grandes extensiones de los ríos que componen la Cuenca del Mississippi han sido de fácil navegación. La red fluvial se compone de seis sistemas distintos: Missouri, Arkansas, Rojo, Ohio, Tennessee y, por supuesto, el Mississippi. Por ende, gracias a la naturaleza unificada de este sistema fluvial, desde un principio, la utilidad de la región y el potencial de poder económico y político estadounidense mejorarían enormemente.

En primer lugar, el envío de mercancías por vía fluvial o marítima es más barato que por medios terrestres. En efecto, el costo del transporte por vía fluvial o marítima es de aproximadamente 10 a 30 veces más barato que por tierra; se estima que 175 millones de toneladas de carga se transportan en el río Mississippi cada año. Este simple hecho haría que los países con opciones robustas de transporte marítimo fuesen extremadamente ricos en capital, en comparación con países limitados solamente a las opciones terrestres. Este factor es la razón principal por la cual las principales potencias económicas del último medio siglo han sido Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Por otro lado, la unidad de la red fluvial facilitaría enormemente el tema de la integración política. Todos los pueblos de la Cuenca del Mississippi han sido parte del mismo sistema económico, lo que garantizaría un constante contacto e intereses comunes, en contraste con la variedad de sistemas fluviales separados en el Norte de Europa que dieron lugar a múltiples identidades nacionales, o como la variedad de vertientes y sistemas hidrográficos separados en Colombia, que han dado lugar a múltiples identidades regionales.

Nada de esto eliminaría la utilidad de los puertos costeros, pero en términos hidropolíticos de la capacidad de generación de capital, las regiones

costeras ocuparían un segundo lugar, en comparación con las tierras con ríos navegables. En otras palabras, los ríos navegables, en contraposición a las costas, son estratégicamente más importantes para el desarrollo económico y la construcción de una identidad nacional[68], ya que:

En primer lugar y por definición, los ríos navegables sirven al doble de la superficie de terreno que una costa (los ríos tienen dos bancos, uno a cada lado, las costas sólo uno); En segundo lugar, los ríos no están sujetos a las fuerzas de la marea, lo que facilita en gran medida la construcción y mantenimiento de la infraestructura de apoyo. En tercer lugar, las mareas tormentosas a menudo acompañan a las tormentas oceánicas, que obligan a la evacuación de los puertos oceánicos.

4.3 Inventario Hídrico de Colombia

Para el caso de Colombia, un enfoque en hidropolítica debería ir acorde con la riqueza hídrica del territorio. Así los ríos y cuerpos de aguas interiores pasan a ser los elementos sobre los cuales el agua tiene el poder de hacer gravitar todas las dinámicas de integración social, política, económica y cultural; en estos, los desafíos de seguridad comprometen a las Fuerzas Armadas, y una acertada conducción política con visión estratégica puede hacer de las vías fluviales arterias de integración y desarrollo, así como del medio acuático, un patrimonio para un cuidado y preservación en compromiso con el planeta y las nuevas generaciones. En Colombia, el enfoque sobre el recurso hídrico ha sido liderado por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (con un enfoque ambiental), encontrándose los demás usos y ámbitos disgregados en los Ministerios e Instituciones según su relación con el mismo.

La riqueza hídrica de Colombia se deriva de su ubicación geográfica y otras variables, como la circulación atmosférica, la topografía, la interacción entre la

68. Tal es el caso de río Támesis, el Volga, el Rin, el Danubio, el Ganges, el Nilo, el Tigris y el Eufrates, el Yangtze, el Mekong, entre otros.

tierra y el mar, y la influencia de las zonas selváticas. En efecto, gracias a su ubicación geográfica,

> El país se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios del noreste y del sureste, que concurren en la franja denominada "zona de confluencia intertropical", que favorece la formación de nubosidad. Este fenómeno se ve reforzado por estar situado en la zona ecuatorial, provocando el calentamiento de la superficie terrestre por la incidencia casi vertical de la radiación solar. La interacción de la zona de confluencia intertropical con las cordilleras colombianas propicia la presencia de dos temporadas húmedas a lo largo del año (IGAC, 2016, p.35).

Con base al dato del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el cual cuenta con una red básica nacional que monitorea las principales cuencas del país, compuesta por 784 estaciones hidrológicas y cuyo fin esencial es permitir cuantificar el recurso hídrico a una escala nacional, puede identificarse que el país cuenta con 136 ríos principales y alrededor de 734.000 micro-cuencas[69], que comprenden 15.744 km lineales, de los cuales 12.660 km son navegables (Mapa No. 10).

Estos ríos y micro-cuencas determinan las áreas o vertientes hidrográficas, que son las unidades mayores de análisis hidrogeológico; según el IGAC (2015), una vertiente hidrográfica es un "área localizada dentro del cauce de un río grande […] derivada de la dinámica fluvial y posee vegetación arbustiva […] porción de tierra rodeada por todos lados de agua" (p. 9).

69. Ríos menores, quebradas, y caños

Mapa 10. Ríos de Colombia



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510871

Por lo tanto, las áreas hidrográficas corresponden a las regiones hidrográficas o vertientes que, en sentido estricto, son las grandes cuencas que agrupan un conjunto de ríos con sus afluentes que desembocan en un mismo mar, lago o río (IDEAM, 2013). El relieve colombiano hace que los ríos transcurran en distintas direcciones: unos hacia el Pacífico, otros hacia el Caribe y algunos pocos hacia el golfo de Maracaibo, en Venezuela. Por su parte, los ríos más largos corren por las llanuras orientales, hasta desembocar en el Orinoco y en el Amazonas. La zonificación del país desde el punto de vista hidrológico, tuvo sus inicios en el HIMAT mediante la Resolución 0337 de 1978, la cual estableció que el país estaba conformado por cinco Áreas hidrográficas (Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico), que a su vez estaban divididas en 41 Zonas Hidrográficas, y subdivididas en 351 Subzonas Hidrográficas.

En Colombia se distinguen cuatro vertientes, dos de ellas asociadas a ríos de importancia continental (vertiente del Orinoco y vertiente del Amazonas) y las vertientes del Atlántico y del Pacífico. Se delimita adicionalmente como área hidrográfica la cuenca Magdalena-Cauca, que aunque tributa y forma parte de la vertiente del Atlántico, tiene importancia socioeconómica por su alto poblamiento y aporte al producto interno bruto (IDEAM, 2013, p.13).

Sin embargo, desde la geopolítica, este documento considera que la vertiente hidrográfica del Catatumbo debería analizarse por separado de la vertiente Caribe, por su naturaleza transfronteriza y sus implicaciones socio-políticas. Por su parte, el área hidrográfica Magdalena-Cauca, se incluye dentro de la vertiente Caribe, por cuanto el Cauca desagua en el Magdalena, y este a su vez desagua en el Mar Caribe. En este sentido, Colombia contaría con cinco vertientes o áreas hidrográficas (Caribe, Catatumbo, Orinoquía, Amazonía y Pacífico). Cabe señalar que cada una de estas vertientes tiene características propias en cuanto a área, dirección en la cual drenan sus aguas, longitud y caudal de los ríos que la

forman. En términos generales, estas vertientes generan un caudal promedio de 66.440 m³ por segundo, equivalente a un volumen anual de 2.113 km³, del cual el 23% corresponde a la vertiente del Caribe; el 10% a la vertiente del Pacífico; el 34% a la vertiente de la Amazonía; el 32% a la vertiente de la Orinoquía y sólo el 1% a la vertiente del Catatumbo (IDEAM, 2010).

4.3.1 Vertiente Hidrográfica del Caribe

La vertiente hidrográfica del Caribe es la vertiente más importante del país, ya que alrededor de sus ríos se ha estructurado un complejo intercambio económico entre las regiones que recorre. La vertiente es alimentada por las tres cordilleras Andinas, recogiendo los ríos que recorren de sur a norte, los grandes valles interandinos y vierten sus aguas en el mar Caribe o de las Antillas. Por ende, esta vertiente del Caribe comprende una extensión de 363.878 km² (Mapa No. 11), y está formada por las cuencas70 del sistema Magdalena-Cauca (270.000 km²); cuenca del río Atrato (45.000 km²); cuencas de la sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira (30.000 km²); y cuenca del río Sinú (17.000 km²). Además, en dicha aérea se encuentra el 90% de los sistemas acuíferos explotados para el consumo doméstico y el desarrollo nacional (Carvajal y de Francesco, 2012).

70. Una cuenca es una unidad de territorio donde las aguas fluyen mediante un sistema natural interconectado; en la cual pueden interactuar uno o varios elementos biofísico-socioeconómicos y culturales.

Mapa 11. Vertiente Hidrográfica del Caribe



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510871

El principal río es el Magdalena, el cual recibe las aguas de cerca de 500 afluentes por ambas orillas (Cauca, Cesar, San Jorge, Carare, Sogamoso, Lebrija, Saldaña, Bogotá, Negro, Sumapaz, Guarinó, Lagunilla, La Miel, Magdalena y Nus, entre otros), así como más de 5.000 arroyos y quebradas. Es además el río interandino de mayor extensión en Suramérica, vertiendo al mar 8.000 m³ por segundo. En la Cuenca del río Magdalena, a lo largo de los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca, se presenta una escorrentía de 1.000 mm; en el Medio Magdalena (Cundinamarca, Santander y Bolívar), la escorrentía es de 1.100 mm; finalmente, en el Bajo Magdalena (Magdalena y Bolívar), la escorrentía disminuye a 450 mm al año (García et al., 2001). A lo largo de la historia, este río se constituye como la arteria fluvial más importante de la patria, sirviendo de conexión entre los diversos pueblos de los territorios que recorre, desde su nacimiento en la laguna de la Magdalena (en el páramo de las Papas), a 3.685 m de altura, hasta su desembocadura en las Bocas de Ceniza, en el mar Caribe. Su principal puerto es Barranquilla, y le siguen en importancia los puertos de La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Magangué, El Banco y Girardot. Cabe destacar que el Magdalena está comunicado con el puerto marítimo de Cartagena, a través del canal del Dique de 105 km de longitud.

El río Cauca es el más importante entre los muchos afluentes del Magdalena, con una longitud total de 1.350 km, de los cuales son navegables un poco más de 620 km. El Cauca nace también en el Macizo Colombiano, en la laguna del Buey; discurre entre las cordilleras Central y Occidental del país, y tributa sus aguas en el Magdalena a la altura del departamento de Bolívar, después de regar una hoya hidrográfica cercana a los 63.300 km² de superficie, en la cual se destaca el departamento del Valle del Cauca[71]. Con referencia a la Cuenca

71. En el sur del Caribe Continental es aún importante el transporte fluvial. La red primaria fluvial abarca el río Magdalena y el río Cauca como las principales arterias de comunicación fluvial, junto con el río Sinú. Es de notar que el río Magdalena tiene 1.558 km, de los cuales son navegables 1.290 Km, interrumpidos en el salto de Honda.

del río Cauca, la región del Alto Cauca (Cauca y Valle del Cauca), presenta una escorrentía[72] de 900 mm; el Cauca Medio (Virginia, Risaralda, Caucasia) y Antioquia, cuenta con una escorrentía de 1.500 mm; en el Bajo Cauca, desde Caucasia hasta la desembocadura en el río Magdalena, existe una escorrentía de 1.700 mm (IDEAM, 2013).

Por su parte, el Río Sinú tiene una extensión de 345 km, de los cuales 200 km son navegables hasta Montería, su principal puerto. La cuenca del Sinú es una rica región ganadera y una de las más fértiles de Colombia; el Sinú nace en el nudo de Paramillo y desemboca en la bahía de Cispatá, en el golfo de Morrosquillo. A pesar de tener una menor extensión que el Magdalena, el movimiento de pasajeros por el río Sinú es mayor. En esta red de cuencas se comunican varios de los puertos fluviales de importancia nacional, definidos así por su capacidad de movilización de carga e infraestructura portuaria, así como su accesibilidad a las capitales departamentales y a los puertos fronterizos.

Por su parte, la cuenca del Río Atrato es la principal vía de comunicación del Chocó. Es uno de los ríos más caudalosos del mundo, y cuenta con una extensión de 750 km, de los cuales 500 km son navegables. Su principal puerto es Quibdó. Nace en el cerro Plateado, en la cordillera Occidental, siguiendo un curso sur-norte entre esta cordillera y la serranía del Baudó, a través de un valle húmedo, el cual lo ha favorecido como vía de comunicación, para desembocar finalmente en el golfo de Urabá, en los límites entre Chocó y Antioquia. Entre sus muchos afluentes se encuentran el Ríosucio, el Murri, el Arquía y el Truandó. La cuenca del Atrato es rica en oro y maderas.

Con relación a la Cuenca de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, llama la atención que debido a la cercanía de la Sierra Nevada de Santa Marta al mar, (escasos 40 km), donde nacen a más de 4.000 m de altura, los ríos de

72. Se llama escorrentía a la corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales.

esta cuenca son al mismo tiempo cortos y torrentosos, muy poco aptos para la navegación, pero a su vez aprovechables para el regadío y para la producción de energía hidroeléctrica. En la Guajira, a causa de un alto índice de aridez, cuenta con una tendencia deficitaria de 25 mm de escorrentía.

Por su parte, en la Sierra Nevada de Santa Marta, esta es de 1.000 mm, mientras que en la zona insular de las Islas de San Andrés y Providencia, se presenta una precipitación de 1.700 mm y una escorrentía de 430 mm. (García et al., 2001). Los ríos más destacados de esta cuenca son el Fundación, el Ranchería o Riohacha y el Cesar, que entrega sus aguas al Magdalena, a través de la laguna de Zapatosa en el departamento del Magdalena. Cabe destacar que el 60% de los sistemas acuíferos del Caribe, son la fuente principal de abastecimiento de la población y la agroindustria (Morroa, Golfo de Morosquillo, Arroyo Grande, Media Guajira, Alta Guajira, Ranchería, Cúcuta – Táchira, San Andrés y el Golfo de Urabá).

4.3.2 Vertiente Hidrográfica del Catatumbo

Con relación a la vertiente hidrográfica del Catatumbo, esta tiene una extensión de 18.700 km², por lo cual es la más pequeña de las cinco vertientes colombianas; la atraviesan ríos de poca longitud que drenan principalmente el lago de Maracaibo en Venezuela (Mapa No. 12). Está compuesta por las cuencas del río Zulia (4.800 km² en Colombia) y del río Sardinata (3.400 km²). Cuenta con una escorrentía entre 1.000 y 1.500 mm, en el Norte de Santander y (García et al., 2001). Los ríos que la forman recorren el suelo colombiano en un breve trecho, siendo el principal el Catatumbo, quien se origina en Colombia y desemboca en Venezuela. Su cuenca es selvática pero de gran riqueza de flora y fauna; otros ríos de esta vertiente son el Oro, Tarra, Táchira, Cicutilla, San Miguel y Presidente.

Mapa 12. Vertiente Hidrográfica del Catatumbo



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510871

4.3.3 Vertiente Hidrográfica De La Orinoquia

Los ríos de la vertiente hidrográfica de la Orinoquía ocupan 328.000 km² (Mapa No. 13) en territorio colombiano. Si se sumara los cerca de 655.000 km² en territorio venezolano, podría decirse que la Cuenca del Orinoco abarcaría una extensión total de 1.000.000 de km². Dicha vertiente comprende la cuenca del río Guaviare (140.000 km²), la cuenca del río Meta (112.000 km²), la cuenca

del río Vichada (26.000 km²), la cuenca del río Tomo (20.000 km²), la cuenca del río Arauca (8.000 km² en Colombia) y otras cuencas menores (22.000 km²).

No obstante, la vertiente hidrográfica de la Orinoquía incluye el río Orinoco con 1.787 km de longitud, y otros como el río Inírida (54.280 km²). La mayor parte de los ríos de esta vertiente nacen en la cordillera oriental y descienden a la llanura, donde se explayan y generan amplias zonas de inundación (Roca, Bonilla, & Sánchez, 2013).

Con relación a la Cuenca del Río Orinoco, este río nace en los límites entre Brasil y Venezuela, en la sierra Parima; su longitud total es de 2.900 km, de los cuales son navegables 1.930 km y 420 km se encuentra en la frontera colombo-venezolana. Este sector del río es navegable por embarcaciones mayores, pero la navegabilidad se ve interrumpida por los rápidos de Atures y Maipures (Mesiel, Bonilla & Sanchez, 2013). Se comunica con el Amazonas a través del brazo natural de Casiquiare que desagua en el río Negro, formando entre ambos, una inmensa red hidrográfica, la mayor de Suramérica. El Orinoco desagua en el océano Atlántico venezolano a través de 50 bocas, formando un inmenso delta. Los más importantes afluentes colombianos del Orinoco son el Arauca, el Meta, el Vichada y el Guaviare.

Mapa 13. Vertiente Hidrográfica de la Orinoquia



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510871

El río Arauca nace en el Páramo del Almorzadero a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y cuenta con una longitud 1.050 km, de los cuales 510 km son navegables. Transcurre por la frontera colombo venezolana en 280 km, y recorre Colombia en 400 km, hasta desaguar finalmente en el río Orinoco; sus principales afluentes son los ríos Bajabá, Satocá, San Miguel, Maroua y Rudiván. Con respecto al río Meta, este podría ser el principal río de los Llanos Orientales colombianos, con un total de 804 km, de los cuales 785 km son navegables, haciéndolo de gran utilidad para el comercio de estas extensas regiones. El Meta tiene sus fuentes en los ríos Humea, Guayuriba y Guatiquía, los cuales nacen en el páramo de Sumapaz, en la cordillera Oriental; entre sus afluentes figuran el Cravo Sur, Casanare, Cusiana, Upía y el Manacacías, entre otros.

Por su parte, el río Vichada nace en el departamento del Meta. Su longitud es de 700 km, de los cuales son navegables cerca de 450 km. Tiene abundancia en peces y las tierras que riega son para la ganadería. Sus principales afluentes son los ríos Tillavá, Planas y Muco. Con relación al río Guaviare, este surge de la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, los cuales nacen en la cordillera Oriental. Es el más largo de la Orinoquía, con aproximadamente 1.350 km, de los cuales son navegables 620 km, a través de embarcaciones menores, debido a los raudales de su lecho. Marca la frontera entre el llano y la selva, y su principal afluente es el Inírida, un río selvático con muchos raudales que dificultan su navegación.

Desde el punto de vista hidrográfico, la cuenca orinoquense "es en parte amazónica, gracias a la interconexión Orinoco-Casiquiare-Negro, ya que el agua producida por 39.000 km², desde el alto Orinoco hasta Tamatama, es compartida con la cuenca del Amazonas, siendo Brasil un país "aguas abajo", con respecto a Venezuela y Colombia" (León, 2005, pág. 83). En la parte

correspondiente a la Orinoquia colombiana, el 36% de los ríos cuenta con un caudal por encima de 10 m³ por segundo; cabe destacar además, que el río Orinoco es el tercero en caudal en el mundo, con 31.061 m³ por segundo (León, 2005). Adicionalmente, la Orinoquia colombiana cuenta con 1.128 millones de m³ en lagunas, representando el 3,57% del total nacional, y en ella se ubica el 38,7% de las micro- cuencas del país, representando el 32,47 % de las reservas de agua dulce de Colombia (Correa, Ruiz & Arévalo, 2005).

4.3.4 Vertiente Hidrográfica del Amazonas

La vertiente de la región del Amazonas es la mayor vertiente hidrográfica del mundo (Mapa No. 14), y a Colombia le corresponde cerca de 332.000 km2, participando del 5,5% de la vertiente. La vertiente en suelo colombiano comprende la cuenca del río Caquetá (200.000 km²), la cuenca del río Putumayo (54.000 km² en Colombia), la cuenca del río Vaupés (38.000 km² en Colombia), la cuenca del río Amazonas (3.238 km² en Colombia), y otras cuencas menores (53.000 km²). Sin embargo, esta área hidrográfica abarca el 35,5% del territorio colombiano (Roca, Bonilla & Sánchez, 2013).

El caudal, de sus ríos es casi siempre considerable y se dificulta la navegación en ellos, bien por los raudales o rápidos que presentan algunos como consecuencia de desniveles propios del terreno, o por el carácter selvático de las regiones que atraviesan. Estos ríos bañan las regiones llanas de la selva amazónica, donde reciben por lo general el aporte de numerosos caños que generan una considerable cantidad de ciénagas y pantanos a lo largo de todo su curso (Longo & Agosto, 2005).

Mapa 14. Vertiente Hidrográfica de la Amazonía



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510871

Los seis departamentos que conforman la Amazonía colombiana son, en orden de extensión, el departamento de Amazonas (109.665 km²), Caquetá (88.965 km²), Guainía (72.238 km²), Guaviare (53.460 km²), Putumayo (24.885 km²) y Vaupés (54.135 km²), para un total de 403.348 km².

Los departamentos de Putumayo y Amazonas limitan al sur con Ecuador y Perú, frontera trazada en su gran mayoría por el río Putumayo, y en menor medida por una línea convencional y el río Amazonas. Al este, los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía limitan con Brasil, en una frontera que alterna referentes naturales con líneas convencionales. […] Al norte, la serranía de la Macarena establece los límites entre Caquetá, Guaviare y Meta, y el río Guaviare se constituye en la frontera norte de Guaviare y Guainía, separando la Amazonía legal de la Orinoquía legal. (Roca, Bonilla & Sánchez, 2013, pág. 11).

El Amazonas es el segundo río en el mundo por su longitud, después del Nilo (6.450 km), pero el primero por su caudal y por su navegabilidad, de la que se benefician países como Perú, Ecuador, Colombia y Brasil (Forti, 2014). Su extensión total alcanza los 6.275 km, de los cuales son navegables 5.000 km; cuenta con un caudal máximo de 160.000 m³ por segundo y aproximadamente 270 afluentes; forma en su desembocadura un estuario de 300 km de ancho; posee además, una red navegable de 100.000 km. A Colombia le corresponden sólo 116 km de su gran extensión, al sur del trapecio amazónico, donde demarca los límites con el Brasil y Perú; en territorio colombiano es navegable en toda su extensión, siendo Leticia el puerto colombiano más importante. Son varios los ríos colombianos que forman parte de la cuenca del Amazonas, destacándose desde el punto de vista económico, los ríos Negro o Guainía, el Caquetá, el Vaupés y el Putumayo.

El río Negro o Guainía nace en el departamento del Guainía, y tiene una longitud de 2.000 km, de los cuales 650 corresponden a territorio colombiano. En total, la navegabilidad de este río asciende a 1.700 km y a su vez, marca los límites entre Colombia, Venezuela y Brasil. Por su lado, el río Caquetá se origina en el Macizo Colombiano, (páramo de las Papas), y recorre 2.200 km de los cuales 1.200 km corresponden a Colombia. Es navegable en 1.700 km, interrumpidos por los rápidos de Araracuara; sus principales afluentes son el Apaporis, Caguán y Orteguaza. El río Vaupés también nace en plena selva amazónica, por la confluencia de los ríos Unilla e Itilla, en el departamento del Vaupés. Tiene 1.000 km de extensión, los cuales son navegables en forma interrumpida; es el afluente colombiano más importante del Guainía. Por último, el río Putumayo es el río fronterizo de Colombia con Perú y Ecuador; nace en el nudo de los Pastos, recorre 2.000 km, de los cuales 1.500 transcurren por territorio colombiano. De los 2.000 km, 1.650 km son navegables; su principal afluente es el Guamués (IDEAM, 2013).

La Amazonía colombiana posee además, el 25% de las zonas inundables del país, con una estimación de 14,6 millones de hectáreas; asimismo, cuenta con una superficie de 1.602.250 de m² de pantanos (81,4% del total a nivel nacional), y 763.767 m³ de lagunas, representando el 9,6% a nivel nacional (Roca, Bonilla & Sánchez, 2013).

4.3.5 Vertiente Hidrográfica Del Pacífico

Por último, la vertiente hidrográfica del Pacífico tiene una extensión de 76.500 Km² y está conformada por más de 200 ríos. Esta vertiente se caracteriza por tener ríos de corta longitud y alto caudal, gracias a las altas precipitaciones, que alcanzan los 9.000 mm anuales. Específicamente, la vertiente está conformada por la cuenca del río Patía (24.000 km²), la cuenca del río San Juan (20.000 km²), la cuenca del río Mira (11.000 km²), la cuenca del río Baudó

(8.000 km²), y otras cuencas menores, incluidas las del Micay y Guapi (25.000 km²), Dagua, Anchicayá, Yurumanguí, Naya, Iscuandé y Mataje.

El área hidrográfica de la zona Pacífico (Mapa No. 15), es la de mayor rendimiento en el país, con un alto excedente y volumen, debido a los altos niveles de precipitación en la región. Sin embargo, la condición de humedad y la precipitación excesiva (una de las más altas del mundo), han desafiado las condiciones de vida de sus habitantes y el desarrollo económico en el andén del Pacífico. Tan solo en el Valle de San Juan, se presenta una precipitación anual de 7.941 mm y 291 días de lluvia; esta región obtiene una escorrentía de 3.000 a 4.500 mm al año, en su mayoría proveniente del río San Juan. A este le siguen el río Micay con 4.150 mm, el río Baudó con 4.000 mm, el río Atrato con 3.700 mm y el río Mira con 3.000 mm (García et al., 2001).

La cuenca del río San Juan es el más importante de la vertiente del Pacífico colombiano, con una superficie de 15.000 km², ubicados entre la Cordillera Occidental y las colinas bajas del Litoral Pacífico. Esta cuenca está separada en el norte del Río Atrato, por una cadena de colinas que alcanzan elevaciones alrededor de 100 metros de altura sobre el nivel del mar. El río San Juan tiene un caudal de 1.300 m³ por segundo, lo que lo hace el río más caudaloso del Pacífico suramericano. Entre los tributarios más importantes se encuentran el Paimadó (parcialmente navegable); el Tamaná; el Sipí (con una cuenca de más de 3.400 km² de superficie); y el Calima (que conecta el Puerto de Buenaventura). Otros afluentes importantes son los ríos Cucurrupí, Copomá y Munguidó.

Mapa 15. Vertiente Hidrográfica del Pacífico



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510871

Por su parte, el Patía es el río más extenso de la vertiente Pacífica de Colombia y de Suramérica, con sus 400 km de curso, de los cuales sólo son navegables 90 km. Su recorrido lo realiza con dirección sur, entre las cordilleras Central (donde nace en el Macizo Colombiano) y Occidental; la cuenca del Patía se destaca económicamente por sus riquezas en oro, cacao y banano. El río Mira tiene su origen en territorio ecuatoriano, en el cual realiza la mayor parte de su recorrido; a Colombia le corresponden 88 km del total de su longitud, los cuales son navegables en toda su extensión. La hoya hidrográfica del río Mira transcurre por regiones selváticas, muy poco pobladas, pero más aptas para el asentamiento humano que las selvas del Chocó. Con relación al río Baudó, esta es la más pequeña de las hoyas hidrográficas del Chocó, con una extensión de 375 km². El Río Baudó nace en el Alto del Buey a una altura de 1.810 metros sobre el nivel del mar, y sigue un recorrido norte-sur hasta la desembocadura del Río Pepé. Recibe en su recorrido las aguas de unos 112 afluentes, entre los que se cuentan ríos, quebradas y arroyos. Por último, los ríos más importantes que desembocan directamente al Océano Pacífico son el río Nuquí, el Juradó y el Valle.

4.3.6 Lagos, Lagunas, Ciénagas y Embalses

Además de los ríos, el país cuenta con más de 1.800 lagos y lagunas[73], la mayoría de ellas situadas por encima de los 2.700 metros del nivel del mar. Los lagos y lagunas regulan y estabilizan los caudales gracias a su capacidad receptora, e incluso pueden amortiguar fenómenos importantes como avalanchas y flujos de lodo. El lago más grande de Colombia es el Lago Guamués o La Cocha, ubicada a 2.760 m de altura, en el nudo de los Pastos en el departamento de Nariño; cuenta con un área de más de 40 km², una longitud de 25 km y una

73. Se ha indicado erróneamente que Colombia solo tiene lagunas. De acuerdo a Moreno (1957), un lago es un deposito más o menos considerable de agua dulce o salada, con conexión con el mar o sin ella, que no abastece ni es abastecido, o abastece sin ser abastecido o es abastecido sin abastecer, y cuya profundidad es de 10 metros en adelante; por su parte, las lagunas guardan las mismas características que los lagos, pero su profundidad es inferior a 10 metros. En este sentido, según la Sociedad Geográfica de Colombia, en el país hay muchos lagos y lagunas.

gran profundidad. La laguna de Tota, situada en el departamento de Boyacá y a más de 3.000m sobre el nivel del mar, abarca un área aproximada de 6 km² y una longitud de 12 km (IDEAM, 2013); le siguen la laguna del Otún, La Magdalena, El buey, Laguna Grande, Gavilanes, Fúquene, Suesca y Guatavita. Otros de importancia son Chingaza, Canoas, Cucunubá, entre otras.

En el país existen al menos 1.900 ciénagas, que ocupan más de 7.800 km² (IGAC, 2016). En Colombia se distinguen tres regiones cenagosas, como las llanuras del bajo Magdalena, la baja llanura del río Atrato y la baja llanura del río Sinú. Las ciénagas más conocidas son la ciénaga Grande de Santa Marta (siete veces más extensa que el Lago de la Cocha), y la ciénaga Pajaral; ambas están vinculadas con la bahía de Santa Marta. Otras ciénagas de esa región son la de Tesca, bahía de Cartagena, ciénaga Grande del Sinú, Guájaro, Zapatosa (formada por el río Cesar), Ayapel (formada por el San Jorge), Lorica y otras como las de Chilloa y Simití (formadas por el río Magdalena); así como, los playones de Santa Ana, de Pato, de Don Pedro, entre otras (IDEAM, 2010). La superficie total de los pantanos es de 200 km², concentrándose en los departamentos de Amazonas, Guainía y Guaviare. En total, entre ciénagas y otros cuerpos de agua similares, existen 5.622.750 de hectáreas; las lagunas representan cerca de 22.950 hectáreas y las sabanas inundables cubren una superficie total aproximada de 9.255.475 de hectáreas (Amazonas, Guainía y Guaviare). Los bosques inundables representan 5.351.325 de hectáreas y se localizan en la Orinoquía, Amazonía, Bajo Magdalena y el Pacífico.

Los más importantes lagos artificiales o represas existentes en el país son la Regadera, Muña, Neusa, Sisga y Tominé, así como, el embalse de la laguna de Chingaza, que sirven a Bogotá tanto en la provisión de agua, como en la producción de energía. En la producción de energía eléctrica, se destacan las represas de Ríogrande y Guadalupe en Antioquia, las de Calima y Anchicayá,

en el Valle del Cauca y la de Chivor o Santa María en Boyacá. También se encuentra la represa del Prado en el Tolima, formada por los ríos Prado y Cunday.

4.3.7 Aguas Subterráneas

Las aguas subterráneas son aguas continentales que provienen de la lluvia, el deshielo, los torrentes, los ríos o, incluso, el mar. Se infiltran en el terreno a través de los poros y las grietas y se almacenan o circulan por el subsuelo. Las aguas subterráneas constituyen importantes reservas de agua dulce con una menor susceptibilidad a procesos de contaminación y degradación en comparación con las fuentes superficiales. El IDEAM ha establecido un área potencial de acuíferos equivalente al 74,5% del territorio nacional con reservas estimadas del orden de 5.848 km³ (IDEAM, 2010).

Se han identificado 5 acuíferos transfronterizos y 61 sistemas acuíferos de carácter local y regional (IDEAM, 2014), de los cuales 6 sistemas acuíferos montanos e intramontanos se localizan en la cordillera Oriental; en la región Andina se reconocen adicionalmente otros sistemas acuíferos de las cordilleras Central y Occidental, como los sistemas acuíferos Glacis del Quindío, Santagueda, Bajo Cauca Antioqueño, Santa Fe de Antioquia, Valle de Aburrá y el altiplano nariñense (IDEAM, 2013).

En la Orinoquía y Amazonía colombianas se identifican sistemas acuíferos extensos, asociados a depósitos aluviales de gran extensión y terrazas de piedemonte de grandes ríos; se han identificado y estudiado en la Orinoquía los sistemas acuíferos de Villavicencio-Granada-Puerto López y Yopal-Tauramena, ambos localizados hacia el piedemonte de la cordillera Oriental. En menor grado se conoce el sistema acuífero Arauca-Arauquita, del cual se abastecen comunidades rurales y urbanas aprovechando espesos depósitos aluviales del

río Arauca y tributarios. Hacia la Amazonía colombiana se encuentran sistemas acuíferos asociados a valles aluviales de grandes ríos hacia el piedemonte de la cordillera Oriental; estos acuíferos son extensos, pero discontinuos y hacen parte del proyecto ISARM-Américas, que se comparte con Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú (IDEAM, 2013).

Con relación a los sistemas acuíferos asociados a provincias hidrogeológicas costeras e insulares, los más conocidos son los sistemas acuíferos de Maicao, Morroa, Golfo de Morrosquillo, Cesar, Ranchería, Golfo de Urabá y San Andrés Islas. Estos sistemas acuíferos son estratégicos, pues abastecen poblaciones con poca disponibilidad de recurso hídrico, principalmente en La Guajira y Sucre; además, en el Urabá antioqueño su uso es fundamental para el desarrollo del sector bananero de la región. Otros sistemas acuíferos son los de Barranquilla-Sabanalarga, Arroyogrande, Montería-Ciénaga de Oro, Turbaco, Santa Marta y Mompox. En la costa pacífica se han identificado acuíferos asociados a los valles aluviales de grandes ríos que divagan por las llanuras aluviales y costeras que se forman al occidente de la cordillera Occidental; sin embargo, estos acuíferos son discontinuos. El uso de agua subterránea en la región pacífica realmente es marginal y de insignificante valor para las estadísticas nacionales. En la frontera con Panamá, ISARM-Américas identifica el sistema acuífero transfronterizo SAT2S-Chocó-Darién, aunque no existe información precisa sobre ese sistema (IDEAM, 2013).

Una clase de aguas subterráneas son las aguas minerales, que alimentan las minas de sal gema de la cordillera Oriental, entre las que se destacan las de Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé, así como las minas de azufre de las cordilleras Occidental y Central. Por su parte, las aguas termales se ubican en diversas localidades, asociadas a terrenos volcánicos, a los cuales deben su alta temperatura y composición mineral; algunos ejemplos son las fuentes termales

de Paipa (Boyacá), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), nevado del Ruiz (Caldas), volcán de Puracé (Cauca) y muchas otras.

4.3.8 Centros Hidrográficos

Gracias a la omnipresencia del relieve montañoso en la geografía colombiana, el país cuenta con varios pisos bioclimáticos, como los glaciares y los páramos, desde los cuales provienen las principales fuentes de agua dulce. Estos centros hidrográficos son el Macizo Colombiano, el Nudo de los Pastos, el Cerro de Caramanta, el Nudo de Paramillo, el Páramo de Sumapaz, el Páramo de Guachaneque, el Nudo de Santurbán y los nevados y páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia posee el 49% de los páramos del planeta, los cuales cubren 1.932.987 de hectáreas (1,7% del territorio nacional), y abastecen de agua al 70% de la población colombiana.

El Macizo Colombiano es considerado por la UNESCO como una de las Reservas Mundiales de la Biosfera; cubre un área de 326.823,7 km² en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y Caquetá (IGAC, 2016). Es el principal productor de agua dulce en Colombia, y en donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. Contiene 65 lagunas (El Buey, San Rafael, Los Andes, San Patricio, Santiago, La Magdalena, Cuasiyaco, Rionegro, entre otras), y más de 15 páramos (Barbillas, Las Papas, Coconucos, Yunquillo, Moras, El Letrero, Santo Domingo, Delicias, Guanacas, Bordoncillo, Cutanga, Paletará, Doña Juana, entre otros).

El Nudo de los Pastos se encuentra al sur del departamento de Nariño, y es donde nacen los ríos Putumayo y Mira, así como algunos afluentes del río Patía. También contiene la Laguna de la Cocha. Por su parte, el Cerro de Caramanta está localizado en la cordillera Occidental con una altura de 3.900 metros sobre el nivel del mar, y es el lugar de nacimiento de los ríos San Juan y Risaralda, así como de algunos afluentes del Atrato. El Nudo de Paramillo se

encuentra entre los departamentos de Antioquia y Córdoba y da lugar a los ríos Sinú, León, San Jorge y Ríosucio. En cuanto al Páramo de Sumapaz, este se encuentra localizado al sur del Departamento de Cundinamarca; forma varios afluentes de los ríos Meta y Guaviare, así como los ríos Cabrera y Sumapaz. Al norte de este se encuentra el Páramo de Guachaneque, en donde nacen los ríos de Bogotá, Upía, Sogamoso, Blanco, Guatiquía, Negro y Opón. En el Nudo de Santurbán nacen los ríos Zulia, Lebrija y otros afluentes de los ríos Catatumbo y Arauca., mientras que en la Sierra Nevada de Santa Marta nacen los ríos Cesar, Ranchería, Aracataca, Fundación y Ariguaní, entre otros afluentes.

En Colombia existen actualmente seis glaciares o nevados, de los 14 con los que contaba hasta 1997: Sierra Nevada de Santa Marta (5.775 m); Volcán nevado del Ruiz (5.400 m); Volcán nevado Santa Isabel (5.110 m); Volcán nevado del Tolima (5.280 m); Volcán nevado del Huila (5.665 m); y Sierra Nevada el Cocuy (5.490 m). Lo preocupante es que según estudios del IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se ha calculado la posible desaparición de los glaciares colombianos, concluyendo que los nevados del Ruiz y del Tolima serían los más próximos a desaparecer, y el nevado del Huila el más longevo (IDEAM-UNAL, 1997).

4.4 Balance HÍdrico de Colombia

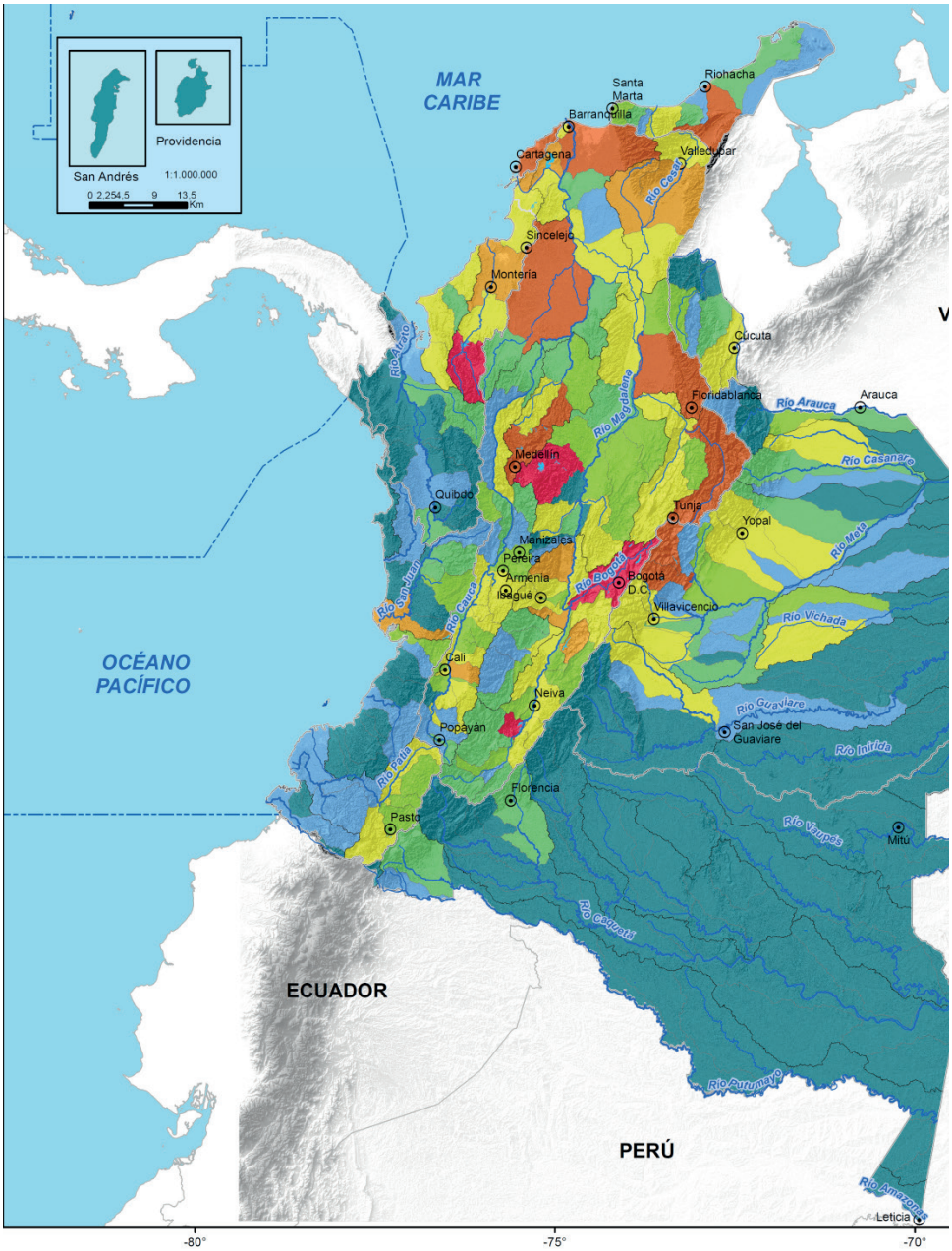
Colombia se ha preciado de contar con una abundante oferta hídrica, pero, "en términos hidrológicos el territorio nacional no es homogéneo, las cinco áreas hidrográficas del país albergan sensibles diferencias que repercuten en la vulnerabilidad tanto del sistema natural como de la estructura socioeconómica" (IDEAM, 2014, p.64). Se estima que a nivel nacional, el rendimiento hídrico[74] es de 56 l/s/km²; este rendimiento hídrico está por encima del promedio mundial (10 l/s-km2), y del latinoamericano (21 l/s/km²) (IDEAM, 2010).

74. Cantidad de agua que fluye por unidad de área

En estas circunstancias, en Colombia se alcanza una escorrentía superficial de 1.764 mm, equivalente a un volumen de 2.012 km³ por año, del cual el 62% de la precipitación se convierte en escorrentía, equivalente a un caudal medio de 63.789 m³ por segundo (Mapa No. 16).

El Pacífico cuenta con el mayor rendimiento hídrico, estimado en 116 l/s/km², seguido de la Amazonia con 69 l/s/km² y el Caribe con 56,4 l/s/km², mientras que las áreas hidrográficas Magdalena-Cauca y Orinoco tendrían los rendimientos promedio más bajos, con 31,7 y 48,4 l/s/km² respectivamente (IDEAM, 2014).

Mapa 16. Escorrentía en Colombia 2014



Fuente: IDEAM, 2014

La demanda hídrica nacional, entendida como "la sustracción de agua del sistema natural destinada a suplir las necesidades y los requerimientos de consumo humano, producción sectorial y demandas esenciales de los ecosistemas existentes (…)" (IDEAM, 2010, p.78), alcanzó 35.987 millones de m³ en 2014 (Mapa No. 17). El sector agrícola utiliza 16.760 millones de m³ equivalentes al 46,6% del total del volumen de agua que utiliza Colombia, mientras que el uso para generación de energía participa con el 21,5%, el sector pecuario con el 8,5%, y el uso doméstico con el 8,3% (IDEAM, 2014). Asimismo, el mayor uso de agua (Gráfico No. 3), se concentra en el área hidrográfica de los ríos Magdalena y Cauca con el 67% de la demanda total, seguida por el Caribe Colombiano (16%) y el Orinoco con el 12% (por el consumo de agua en el sector de los hidrocarburos).

Gráfico 3. Uso del Agua por Vertiente Hidrográfica 2014

Uso de agua	Área hidrográfica del Caribe	Área hidrográfica del Magdalena Cauca	Área hidrográfica del Orinoco	Área hidrográ del Amazon
	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Doméstico	368,85	2.210,28	148,64	68,84
Agrícola	2.674,38	9.358,74	1.340,93	32,28
Pecuario	235,75	1.932,89	397,03	38,89
Acuícola	3,09	1.174,8	53,26	0,17
Industria	5,62	252,52	1,3	0
Construcción	0,7	23,34	3,75	0,02
Energía Hidro y Termo	1.433,49	4.634,64	1.320,89	0
Hidrocarburos	1,7	83,38	328,64	16,84

Fuente: IDEAM, 2014

Mapa 17. Demanda Hídrica en Colombia 2014

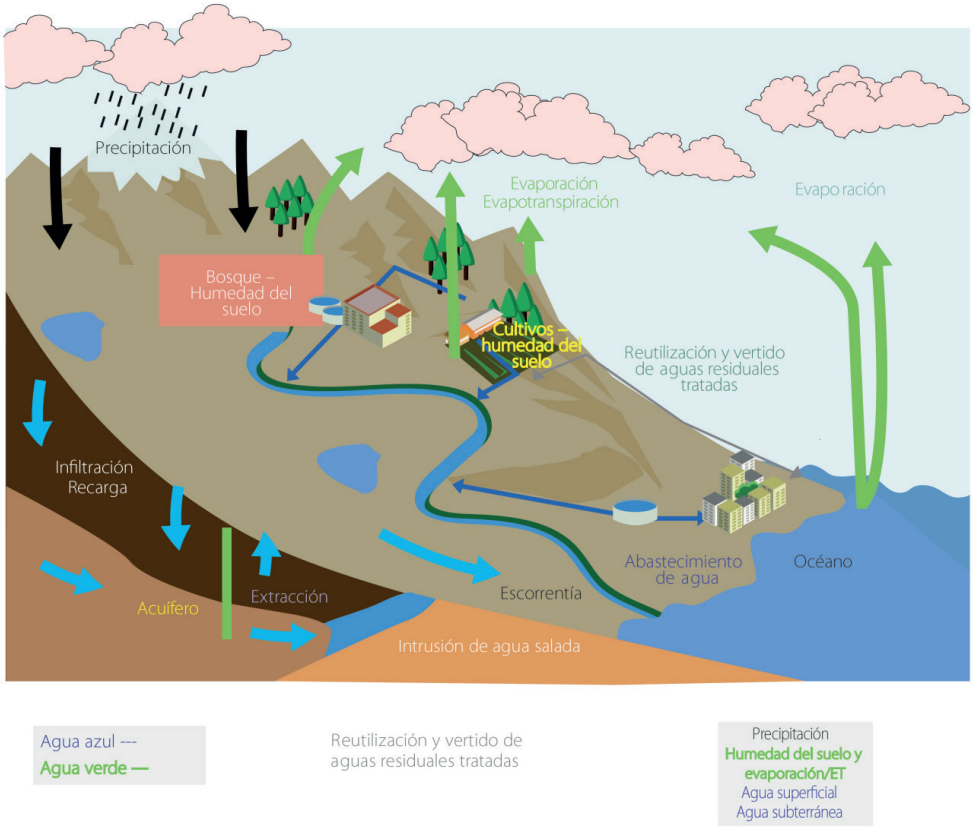
Uso de agua	Área hidrográfica del Caribe	Área hidrográfica del Magdalena Cauca	Área hidrográfica del Orinoco	Área hidrográ del Amazon
	Mm³	Mm³	Mm³	Mm³
Doméstico	368,85	2.210,28	148,64	68,84
Agrícola	2.674,38	9.358,74	1.340,93	32,28
Pecuario	235,75	1.932,89	397,03	38,89
Acuícola	3,09	1.174,8	53,26	0,17
Industria	5,62	252,52	1,3	0
Construcción	0,7	23,34	3,75	0,02
Energía Hidro y Termo	1.433,49	4.634,64	1.320,89	0
Hidrocarburos	1,7	83,38	328,64	16,84

Fuente: IDEAM, 2014

Con relación a los flujos de agua virtual, Konar et al. (2011) establecen que con sus exportaciones de aceite de palma, azúcar, banano, café, cacao, plátano y flores, Colombia sigue la tendencia de Sur América de exportar en gran mayoría agua verde, la cual al 2012, representaba el 92% del flujo virtual de agua total exportada a través de los 7 productos agrícolas mencionados. Ello denota una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, ya que es agua almacenada en el suelo de zonas en donde se encuentran los cultivos que se exportan, y no las aguas de riego que podrían procurarse de las cuencas. Por ende, "el costo de oportunidad del uso de agua con fines agrícolas de Colombia es menor que en otros lugares, [por ejemplo Asia], en donde se requiere un mayor volumen de agua azul para producir los mismos bienes" (IDEAM, 2014, p.235). En consecuencia, Colombia tendría una ventaja comparativa en la producción de bienes agrícolas, en términos de uso eficiente del recurso hídrico y de costos asociados a la construcción de infraestructura destinada a la irrigación de las áreas para la producción de estos bienes.

Es necesario precisar que por "agua azul" se entienden los recursos hídricos dulces que hacen falta para fabricar un producto o prestar un servicio; es el volumen de agua dulce consumida de las aguas superficiales (ríos, lagos y embalses) y subterráneas (acuíferos). El "agua verde" es el volumen de agua evaporada y transpirada desde los recursos globales de agua verde (principalmente agua de lluvia almacenada en el suelo agrícola en forma de humedad durante el periodo de crecimiento de los cultivos). Por su parte, el "agua gris" se refiere al agua que se contamina como resultado de los procesos (Gráfico No. 4).

Gráfico 4. Ciclo Hidrológico



Fuente: UNESCO, 2003

En resumen, la situación hidrográfica de Colombia a 2014 presenta un panorama en el que, si bien el potencial hídrico nacional era alto, el agua está siendo ineficientemente gestionada. Los datos con los que se cuenta, y con base en los cuales se diseñan las políticas públicas al respecto, son parciales e incompletos, por cuanto las estaciones de monitoreo no trabajan adecuadamente, y las instituciones encargadas de proteger y gestionar el agua dulce como las Corporaciones Autónomas Regionales, han fracasado en su administración del recurso hídrico nacional. (Carvajal y De Francesco, 2010).

Según el IDEAM (2008), Colombia ocupaba a finales del siglo XX, el cuarto lugar en el mundo por disponibilidad per cápita de agua; no obstante, la UNESCO (2003) situaba al país en el puesto 24 entre 203 países. Las intensas sequías que han afectado al país desde el 2016, han sido un factor determinante para que decenas de ríos tengan los más bajos caudales en su historia, agravados por las captaciones ilegales de agua por parte de campesinos, gremios de agricultores y empresas, que desviando los cauces para su uso personal, impiden que el suministro de agua llegue a ciertas poblaciones que sufren por el desabastecimiento.

El agua dulce podría llegar a ser la primera ventaja competitiva de Colombia en los mercados internacionales. Al ser una "isla" con 5 vertientes hidrográficas, con un total de reservas internas de recursos hídricos renovables de 2.132 km³/ año, y detentando el 29,9% de los recursos hídricos de Latinoamérica (a pesar de representar tan solo el 7% del territorio regional), no es presuntuoso afirmar que Colombia aún se constituye como una potencia hídrica a escala global.

En Colombia caen, en promedio cada año, 3.400 km³ de agua, se evaporan 1.100 km³ y escurren 2.300 km³; si se supone que un país es capaz de retener en sus dispositivos de abastecimiento el 40% de esta oferta, en efectivo Colombia

contaría con 1.150 km³/año de la oferta hídrica total superficial. Esta simple ventaja estadística tiene grandes implicaciones frente al siglo XXI, pues este potencial hídrico se traduce en una "ventaja competitiva para el transporte fluvial, para la generación de electricidad, para desarrollos agrícolas y forestales y para el propio suministro de agua potable" (OSPINA, 2008, p. 32).

5. Hacia una Hidropolítica Colombiana

5.1 La Importancia histórica de los Ríos para la seguridad y defensa en Colombia

La idea de que una cuenca fluvial debía ser tratada como una unidad de planificación, estaría asociada desde el comienzo con proyectos multipropósito en los Estados Unidos y otros países del mundo. Desafortunadamente, tal no ha sido el caso colombiano; en efecto, las características geográficas de Colombia como un país amurallado por selvas, dividida por la Cordillera de los Andes, inmersa en un conjunto de ríos internos (muchas de las veces inexplorados e inutilizables para la navegación fluvial), han sido fundamentales en la conformación de las distintas regiones que coexisten y configuran al país, en el que se localizan "islas humanas" diferenciadas entre sí, y que Julio Londoño bautizaría con el nombre de "archipiélagos biológicos".

Paradójicamente, desde el punto de vista geopolítico, Colombia es un país insular; al Norte está el mar Caribe, al Occidente el Pacífico, por el Sur el río Amazonas y por el Oriente el río Orinoco. En otras palabras, Colombia es una "isla rodeada" de agua por todas partes. No obstante, el colombiano promedio no tiene una cultura del agua; ello explicaría, en parte, la ausencia de una conciencia marítima nacional. Así mismo, y ante el abandono marítimo, el colombiano también le ha dado la espalda a las cuencas fluviales; en el país, el que usa el río es el marginado, a diferencia de otras regiones del mundo,

en donde normalmente se asientan en las riberas fluviales, las comunidades más ricas de la nación. En contraste, los asentamientos humanos más pobres de Colombia se localizan en las riberas, mientras que las poblaciones más pudientes lo hacen en las montañas. Además, el colombiano le tiene un atávico temor a sus ríos; ello se ve reflejado en las historias de espantos más famosas del folclore colombiano, que usualmente tienen como escenario la cuenca de un río. Tal es el caso de los relatos de la Madre monte, el Mohán, la Madre del Agua, el Hombre Caimán, la Patasola y la Llorona.

Sin embargo, los ríos si jugarían un papel fundamental para los españoles durante la Colonia, aunque su valor estratégico se iría diluyendo durante la época republicana en Colombia. En efecto, una vez conquistado el atlántico colombiano, los conquistadores españoles se lanzarían a la exploración y conquista del interior de la geografía nacional, siguiendo los cauces de los ríos más preponderantes que ofrecía la naturaleza:

> El 5 de abril de 1536, Quesada y su tropa salen a explorar los tesoros del río Magdalena por comisión del gobernador don Pedro Fernández de Lugo. Días más tarde se reúnen con varios bergantines que los acompañan hasta el Magdalena medio, donde ya parece imposible continuar entre la selva inundada. El licenciado decide entonces remontar el río Opón, atraído por las perspectivas de grandes riquezas que parece reservarle el altiplano. (Laverde, 1988, p. 24).

No obstante, numerosas de estas empresas fueron diezmadas debido a las malsanas condiciones de los climas tropicales, la vegetación densa e inhóspita, y los animales salvajes como caimanes, tigres, jaguares y culebras, que disminuyeron ostensiblemente las tropas que se aventuraron a conectar con

las tribus en la parte alta de la cordillera de los Andes (Pardo, 1965). Por otra parte, en escritos realizados por los conquistadores acerca de la importancia del río Magdalena, los autores dan cuenta que debido a las diferentes condiciones adversas en ambas riberas, estas no fueron aptas para desarrollar asentamientos humanos; por tal razón, los indígenas se desplazaron hacia las montañas o hacia sectores más altos cerca al río, utilizando el río solo para el desplazamiento o para realizar transacciones comerciales (Uribe, 1964).

El Chocó fue otra cuenca importante en el desarrollo de la conquista; los registros del Archivo General de las Indias y el Archivo Central de Bogotá informan sobre las gestas desarrolladas por Jorge Robledo en 1540, quien realizó contacto con los indios Chocoes. Así mismo, los relatos de los cronistas Juan de Castellanos y Pedro Simón, describen los intentos de colonización en el Chocó meridional hacia el 1573, resaltando la importancia de su conectividad entre el Atlántico y el Pacífico, gracias al sistema fluvial que allí prevalecía. Además, existió una conexión entre las costas del mar Caribe y las islas Antillanas, que se extendía hacia el Amazonas a través de la cuenca del río Orinoco medio, bajo y sus afluentes, los cuales jugaron un papel importante en el desarrollo de las culturas precolombinas, sobre todo en la interrelación entre los indios Caribes y Tainos, que permitió los intercambios comerciales y culturales entre Sur América y el Caribe, incluso antes de la llegada de los españoles (Amodio, 1999).

Más adelante, durante la Guerra de Independencia de Colombia, el control de los ríos se constituiría como un esfuerzo de suma importancia, tanto para realistas como para el Ejército Libertador. En este orden de ideas, se destacaría la Campaña del Magdalena, una operación militar mediante la cual el General Bolívar se apoderaría del curso del río Magdalena entre 1812 y 1813. Posteriormente, en la Guerra Civil de 1885, el General Ricardo

Gaitán Obeso también utilizaría el río Magdalena para llegar a Barranquilla y eventualmente sitiar a Cartagena (Deas, 1980); durante la Guerra de los Mil Días, el río Magdalena continuó ocupando un papel estratégico en el desarrollo de las hostilidades, ya que en ella se desarrollaron varios combates, resaltando la batalla del Obispo, en el cual las tropas conservadoras aseguraron el control del río Magdalena y mantuvieron un flujo ininterrumpido del transporte de munición y pertrechos requeridos para la Guerra (Posada, 2001).

Durante el gobierno del señor General Rafael Reyes entre 1904 a 1909, se daría a la tarea de determinar los límites departamentales; en este periodo, los departamentos de la época buscaban el río Magdalena, tomándolo unos como límite y otros como eje central. De acuerdo a Rosales (2005), quienes lo tomaban como referencia de delimitación lo hacían porque, en la estrecha conciencia geopolítica de la época, se pensaba que los ríos eran buenos límites. Pero en términos geopolíticos, mientras las montañas dividen, los ríos conectan; por ende, la proyección geoestratégica del Estado colombiano, no solo residiría en las aproximaciones marítimas y oceánicas, sino también en la de sus vías fluviales. Dicha proyección geoestratégica se puso en peligro durante la Guerra Colombo Peruana, cuando "el 1 de septiembre de 1932, cincuenta hombres armados se tomaron la población de Leticia, detuvieron a la autoridad colombiana presente y nacionales que manifestaron su disgusto; arriaron el tricolor nacional, e izaron la bandera bicolor peruana" (Novak-Namihas, 2011, p.2). Durante esta guerra se desarrollan diferentes combates, destacando las acciones fluviales del 17 de Marzo de 1933 (entre la Cañonera Pichincha y tropas peruanas del puesto Cotuhé), el 18 de Marzo de 1933 en Tarapacá (cuando aviones peruanos atacan buques colombianos sobre el río Putumayo), y las del 26 de Marzo de 1933 (combate de Guepi, donde fuerzas colombianas ocupan el territorio presentándose varios enfrentamientos posteriores a lo largo del río Putumayo).

En años más recientes, el valor estratégico de los ríos colombianos para el accionar de grupos al margen de la ley es innegable. Las FARC, durante su Primera Conferencia desarrollada en 1965, reseñaba que las arterias fluviales deberían encontrarse en sus áreas de injerencias, siendo empleadas en forma netamente defensiva, es decir, como corredores de movilidad para efectuar retiradas cuando la situación operacional lo ameritase, o para desarrollar actividades de guerra de guerrillas. Posteriormente, las arterias fluviales irían adquiriendo para las FARC una mayor preponderancia, conforme se iban desarrollando las diferentes conferencias guerrilleras; durante la Séptima Conferencia realizada en 1982, ya se hablaba abiertamente de la necesidad y la dependencia que tenía las FARC con los ríos del sur, por ser las vías naturales para el abastecimiento de armas, pertrechos y otros recursos derivado de las actividades ilícitas, principalmente del narcotráfico; por ejemplo, el control territorial que tendría las FARC en la región de La Macarena fue potencializado por la ausencia del Estado en el control de la parte alta, media y baja del río Guayabero, donde proliferaron cultivos de coca al servicio de la guerrilla.

En la Octava Conferencia realizada en 1993, se tomaría la decisión de acelerar la fase de guerra de movimientos; por lo tanto, las FARC perpetrarían acciones militares cada vez más osadas, como la toma de la base "Las Delicias", en el departamento de Putumayo en Agosto de 1996, durante el cual participaron entre 400 y 600 guerrilleros de los frentes 14, 15, 32, 48, 49, así como un grupo especial de asalto del Bloque Sur, empleando principalmente las vías fluviales. De la misma manera, la toma de la base de "Patascoy", en el departamento de Nariño en 1997, donde los frentes 14, 15, 32, 48 y 49 emplearían diversas formas de transporte, incluyendo el fluvial, para la concentración de 200 guerrilleros; así como en la toma a la base de "Miraflores", en el departamento de Guaviare en 1998, donde participarían los frentes 1, 7, 39, 44, y la columna Juan José Rondón, reuniendo casi 1.500 guerrilleros gracias al uso de las vías (Torres, 2013).

En consecuencia, Colombia no puede permitirse ignorar la importancia de sus sistemas fluviales, no solo por el papel estratégico en Seguridad y Defensa que ha cumplido a lo largo de su historia, sino porque además, es la única forma para que muchos de sus habitantes se comuniquen con el resto del país y del mundo; en efecto, diversas comunidades aisladas del territorio nacional dependen de los ríos para transportar sus cultivos y aprovisionarse de los recursos básicos para la supervivencia. Por ende, sin la posibilidad de navegar libremente sobre los ríos, estas personas no tienen forma de ganarse la vida y mantener a sus familias, por lo que el control efectivo y la seguridad de los cursos de agua debería ser una prioridad para el Estado.

La Política de Seguridad y Defensa de la actual administración del presidente Juan Manuel Santos Calderón, plantea un escenario estratégico desde el 2015 hasta el 2018, en el cual se esbozan nueve objetivos estratégicos de la Política Sectorial de Seguridad y Defensa:

> 1) Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto, la construcción y el mantenimiento de la paz; 2) Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía; 3) Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo; 4) Combatir las nuevas y tempranas expresiones de Crimen Organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, usando todas las capacidades de la Fuerza Pública; 5) Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales; 6) Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la

> seguridad jurídica, la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública; 7) Fortalecer la proyección internacional del sector como partícipe de la Política Exterior establecida por el Gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos; 8) Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres naturales y proteger los ecosistemas; 9) Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales del Sector Defensa objetivos estratégicos de la política sectorial de seguridad y defensa. (Ministerio de defensa Nacional, 2015, p.1).

De los nueve objetivos estratégicos de la Política Sectorial de Seguridad y Defensa, se evidencia que los objetivos número 4, 5, 7 y 9 afectan a las vías fluviales, haciendo imperiosa la consolidación de las vías fluviales por parte de las Fuerzas Militares. Es por ello que la Infantería de Marina de Colombia (IMC) tiene una fuerza de 21.000 efectivos, lo que la convierte en la tercera fuerza de infantería naval más grande del mundo, por detrás del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (183.400 efectivos), y el Cuerpo de Marines de Corea del Sur (27,000 efectivos) (Jane's, 2017). Sin embargo, aunque las infanterías de marina de Estados Unidos y Corea del Sur se ocupan principalmente de la guerra anfibia y las operaciones expedicionarias, el IMC tiene como principal área de especialización las operaciones fluviales; de hecho, es la fuerza de guerra ribereña más grande del mundo en la actualidad (más de 8.000 efectivos asignadas a unidades ribereñas), así como la más experimentada en este campo, habiendo realizado operaciones fluviales de forma continua desde 1971.

5.2 Los Imperativos Hidropolíticos de Colombia

La riqueza hídrica de Colombia sería una de las múltiples razones por las cuales el país ostenta el título de país mega-biodiverso. En efecto, Colombia ocupa la segunda posición en el mundo con mayor biodiversidad, después de Brasil, gracias al agua dulce que le provee sus vertientes hidrográficas. Dicha situación hidropolítica, le presenta a Colombia una característica dual; es una bendición de la naturaleza, pero a su vez representa una gran responsabilidad ante la apetencia por recursos de actores extra-regionales, ya que el agua dulce, al igual que el petróleo, se concentra solo en determinadas regiones y su distribución es desigual. La enorme capacidad hídrica de Colombia y en general de Suramérica, contrasta con el probable aumento en un 55% de la demanda mundial de agua dulce para el 2050 (UN-Water, 2015); siendo escaso e insustituible, el agua dulce se transforma en recurso natural estratégico y un instrumento de poder, proyección e influencia hidropolítica.

Los autores de este capítulo proponen un nuevo concepto de la Hidropolítica, en el marco de la Escuela de Pensamiento Geopolítico Colombiano. Si la Geopolítica podría definirse, en términos generales, como el "estudio de la interacción entre las dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales y militares, y los factores geográficos de un territorio determinado", por ende, la Hidropolítica se definiría como "el estudio de la interacción entre las dinámicas políticas, económicas, socio-culturales, ambientales, tecnológicas y militares, con las características hidrográficas de un territorio determinado"; en consecuencia, la Hidropolítica sería (al igual que la Oceanopolítica o la Astropolítica), una corriente de pensamiento al interior de la Escuela Geopolítica.

Asimismo, si la Geoestrategia podría ser "la gestión estratégica de los imperativos geopolíticos a través de políticas, acciones y estrategias

determinadas", la Hidroestrategia sería la "gestión estratégica de los imperativos hidropolíticos, a través de políticas, acciones y estrategias específicas". Esta última conceptualización sobre la Hidroestrategia busca complementar los aportes que en la materia ya se han realizado en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. En efecto, de acuerdo a Chávez (2016), la Hidroestrategia es entendida como "[…] la aplicación del poder nacional para lograr objetivos de Seguridad Nacional que estén relacionados con las reservas o fuentes del agua del Estado" (p.350), mediante dos medios generales de acción: la acción político-diplomática y el poder militar.

En este orden de ideas, gracias al estudio de la Hidropolítica, podría identificarse unos imperativos hidropolíticos necesarios para la garantía de la Seguridad Multidimensional de Colombia, entendidos como las obligaciones o deberes del Estado en función del espacio hidrográfico y las reservas de agua dulce que garanticen su conservación y/o aprovechamiento estratégico. Por lo tanto, los imperativos hidropolíticos de Colombia, podrían ser los siguientes:

Primero, proteger y conservar el núcleo vital hidropolítico del Estado, es decir, la Cuenca Magdalena-Cauca, la cual es el sistema fluvial de mayor importancia en Colombia, generando el 70% de la producción hidroeléctrica del país, el 85% del PIB y concentrando más del 65% de la población colombiana (IGAC, 2016).

Existe plena relación entre las zonas más pobladas del territorio nacional y las cuencas más vulnerables; esta situación se presenta en cuencas estratégicas como las de los ríos Magdalena, Cauca, Bogotá, Sogamoso, Sierra Nevada de Santa Marta, Sinú y Cesar. Es importante señalar que si se relaciona los recursos hídricos por relieve, se identifica que la mayoría de la población colombiana estaría concentrada en la zona de montaña que posee una hidrología insuficiente,

en comparación con otras regiones menos pobladas como los espacios vacíos del Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia. Los centros más poblados, localizados en el Triángulo de Oro de Colombia, ocupan una tercera parte del área continental, cuyos ejes son las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca que abarcan escasos 300 mil km². En esta zona solo existe una precipitación entre 1.500 a 2.000 mm, lo que ubica los excesos del recurso hídrico del país en la zona extra andina. El área hidrográfica con mayor demanda de agua es el Magdalena-Cauca con 20.247,23 millones de m³, seguida de Orinoco, Caribe, Pacífico y Amazonas (IDEAM, 2014).

Por ende, desde el punto de vista hidropolítico, "existe una Colombia seca y poblada, bordeada por una Colombia húmeda y despoblada" (Marin, 2003, p.2), lo que obliga al Estado a la conservación del núcleo vital hidropolítico de Colombia.

> Las zonas hidrográficas con altos excedentes de agua son las de Amazonas, con el 88% de su área, con alta proporción en las regiones de los ríos Putumayo, Vaupés, Guainía, y la del Pacífico, 67% de su área, con los ríos que drenan directamente al Pacífico y el río Baudó; en el área del Caribe los mayores excedentes del agua se observan en la cuenca del río Atrato, seguido del Catatumbo; en el área hidrográfica del Orinoco los ríos Apure e Inírida, y en el área del Magdalena-Cauca el río Nechí (IDEAM, 2014).

Segundo, habilitar el *hinterland* hidrográfico del Pacífico y de la Cuenca del Río Atrato, las cuales son zonas adyacentes al núcleo vital hidropolítico del Estado.

Como ya se ha mencionado, la base vital del poderío del Estado colombiano no solo residiría en el mar, también residiría en sus ríos; por lo tanto, mientras

no se habilite las cuencas de los ríos que componen la vertiente hidrográfica del Pacífico y de la Cuenca del río Atrato, no se debería considerar aún a Colombia como un país fluvial, debido a las mismas razones por cuales no se debe denominar como país bioceánico. En efecto, para Álvarez (2016) "desde el punto de vista geopolítico, un país es bioceánico en la medida que tenga la capacidad de conectar ambos espacios marítimos a través de corredores bioceánicos" (p.8); pues bien, aquellos corredores naturales solo pueden ser los ríos, es decir, la conexión entre el río Atrato y San Juan en el departamento del Chocó, junto a los ríos Cauca y Magdalena. Decir que Colombia, como casa de esquina, tiene una ventaja geográfica por poseer salida a ambos océanos, sólo puede hacerse realidad cuando las vías existentes permitan esa salida y la intercomunicación (Bahamón, 1989).

Utilizar los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico permitiría la conexión del andén del Pacífico, el cual sirve de fachada colombiana al nuevo centro de gravedad geoeconómico del mundo, la Cuenca del Asia Pacífico. Así de escasa como es la comunicación del Pacífico colombiano con otras regiones del país, las conexiones entre las principales ciudades solo son posibles al sur de la región, a través del eje terrestre Popayán-Pasto-Tumaco, quedando aisladas Quibdó y Buenaventura. Sin embargo, la geografía resuelve en parte la ausencia de carreteras y la comunicación de las dos últimas con otras ciudades de la región, gracias a las vías fluviales; en efecto, los ríos en el Pacífico están mejor dispuestos para la navegación y la explotación minera, que para el desarrollo de la agricultura.

Tercero, habilitar el espacio vital hidropolítico de Colombia que componen las vertientes hidrográficas de la Amazonia y la Orinoquia, como vías de comunicación multipropósito (carga, pasajeros, etc.), tomando en cuenta que el transporte fluvial es un sistema de comunicación con mayor capacidad,

que al estar integrado con otras formas de transporte, facilitaría una mayor competitividad de la economía de los espacios vacíos del sur oriente de Colombia.

Además, tendría un bajo impacto medio ambiental y permitiría una profundización del comercio con Perú y Brasil, a través del eje Iquitos-Leticia-Manaos. En efecto, Leticia es fundamental en los intereses hidropolíticos del Estado colombiano, ya que es la punta de lanza en la consolidación y ocupación del espacio vacío amazónico; Leticia actúa como punta de crecimiento de Colombia en la Gran Cuenca Amazónica, teniendo en consideración que una punta de crecimiento es una entrada que el territorio de un país hace en el territorio del vecino.

Bajo esta lógica, la Ley de las Puntas de Crecimiento, estipula que la punta de crecimiento se ampliará o disminuirá en proporción inversa al medio que la rodea (Bahamón, 1989). Otra ley de la geopolítica es el concepto de Puntos Triples, el cual afirma que toda frontera necesariamente termina en un punto donde concurren tres países. En este sentido, Leticia es el punto donde confluyen Colombia (Leticia), Brasil (Tabatinga) y Perú (Santa Rosa). Sin embargo, para darle dinamismo a este enclave hidropolítico de doble función (punto triple y punta de crecimiento), el Estado colombiano ha considerado suficiente mantener tan solo contacto aéreo con Leticia. Por lo tanto, para satisfacer este tercer imperativo hidropolítico, la más urgente tarea hidroestratégica sería la de crear la infraestructura adecuada (hidrovías y corredores hídricos), en provecho de los afluentes del sistema Amazonia-Orinoquia.

Adicionalmente, es importante considerar que el 30% del territorio nacional está subutilizado. De las 114 millones de hectáreas que posee Colombia75,

75. La mayor parte del territorio colombiano son bosques (67 millones de hectáreas). Por su parte, los cuerpos de agua en el país ocupan 2 millones de hectáreas.

solo se explota 6,3 millones de hectáreas de las 26 millones que son aptas para actividades agrícolas, pecuarias y forestales (es decir, un rendimiento de apenas el 24,2 %); y de los tierra netamente agrícola (11,3 millones de hectáreas), solo se aprovecha el 35%. Eso explicaría, en parte, la importación del 28,5% de la demanda de alimentos en Colombia, tomando en cuenta que "Colombia produce 32'016.861 toneladas de alimentos, y el consumo aparente es de 38'910.992 toneladas" (SAC, 2016). En este orden de ideas, existen vastas extensiones de tierra sin aprovechar; por ejemplo, el departamento del Amazonas posee 10'903.686 de hectáreas, de las cuales solo se utiliza el 0,9%. Si bien el suelo amazónico y orinoquense son pobres en nutrientes, es posible habilitar sus suelos, como lo demuestran los casos exitosos de Brasil en el Matto Brosso y el Cerrado.

Cuarto, ocupar los espacios vacíos hidropolíticos de Colombia, es decir aquellos territorios rurales y urbanos escasos de agua dulce. Evidentemente, a pesar de que Colombia tiene una gran riqueza hídrica, hay comunidades en el país que se están muriendo de sed:

> Las regiones con mayor déficit de agua se concentran en el área hidrográfica del Caribe, en La Guajira, donde el índice de aridez va de categoría altamente deficitaria a deficitaria en las cuencas de los ríos que drenan directamente al Caribe y el río Ranchería. Esta condición es un poco menos crítica en otras regiones, con valores moderados de aridez en el Catatumbo (en el Caribe), el río Sumapaz, Saldaña y el Bajo Cesar en el área del Magdalena-Cauca. En el sur del país las cuencas de los ríos Garagoa, Chitagá en el Orinoco y el Guáitara en el Pacífico, muestran una condición moderada del índice de aridez (IDEAM, 2014, p.62).

Adicionalmente, la carencia de agua potable y saneamiento básico para poblaciones con bajas condiciones de vida, debería constituir en pleno siglo XXI, un motivo de vergüenza nacional. La consecuencia más grave es la persistente mortalidad por causa de las enfermedades infecciosas de origen hídrico entre la población infantil. Según la Procuraduría General de la Nación, 12.7 millones de colombianos aun carecían de servicios de acueducto y alcantarillado para el 2006, a pesar de que el Gobierno había transferido en los últimos 10 años un total de $117.5 billones de pesos, de los cuales $7.2 billones de pesos se habían asignado al sector de agua potable (Triana et. al, 2006). Además, el CONPES 3343 establecía que el costo promedio en salud pública debido a las inadecuadas condiciones de abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene, ascendía a $1.96 billones de pesos para el 2005 (DNP, 2005).

Quinto, utilizar la vertiente hidrográfica del Catatumbo como instrumento de proyección de poder del Estado colombiano hacia Venezuela. Un principio de la hidropolítica determinaría que aquel Estado que tenga la cabecera de la cuenca de un rio, sería usualmente el que controla su cauce (Chávez, 2016). En este sentido, Colombia controlaría el cauce del río Catatumbo y otros que transcurren en sentido occidente-oriente hacia territorio venezolano. Por ende, tomando en cuenta que la hidroestrategia sería la acción político-diplomática en la consecución de los deberes hidropolíticos del Estado, Colombia podría utilizar sus activos hídricos como estrategia de disuasión, negación o compromiso frente a Venezuela.

Sexto, vigilar por parte de actores estatales o no estatales extranjeros, y negar por parte de actores al margen de la ley, el acceso y control de los activos hidrográficos de Colombia. Ante el rol hidropolítico de Colombia, se hace indispensable la formulación de una estrategia de defensa de recursos hidropolíticos con proyección regional, entendiendo la defensa nacional como

una "constante actividad para prevenir y resistir los riesgos de un posible adversario, sus ataques o agresiones que afecten la seguridad nacional" (Santos, 2010, p. 26). En efecto, 16 ríos hacen frontera con los países vecinos, en una extensión de 3.587 km; además, sobre sus riberas se asientan tres capitales de departamento y siete poblaciones de relativa importancia. Estos ríos facilitan a los grupos al margen de la ley evadir la acción de la Fuerza Pública, generando entre otros, inconvenientes en las relaciones bilaterales de Colombia con los vecinos (Chávez, 2016).

Como ya se ha insistido, la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económico de Colombia. El artículo 80 de la Carta Magna señala que:

> El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (...) (Constitución Política de Colombia, 1991).

Si bien las políticas de privatización de los servicios de agua han presentado beneficios en las zonas con usuarios urbanos con ingresos medios y altos, han fracasado en el ámbito de los usuarios con escasa capacidad de pago, generado complejas situaciones e incluso alteraciones del orden público; la privatización ha sido útil en la mejora de la eficiencia de los sistemas de distribución, pero no lo ha sido en temas referentes a la equidad en la distribución del recurso. En consecuencia, desde hace algunos años, se ha denotado la tendencia a reversar la ola privatizadora de los servicios de agua potable (Laclette & Zúñiga, 2012). Por eso llama la atención la venta de un porcentaje significativo de la generadora

de energía ISAGEN (la empresa nacional que más agua maneja), a la canadiense Brookfield Assets Management[76], con el pretexto de financiar las vías 4G, ya que con la operación financiera también se le entregó al inversionista extranjero, un valioso patrimonio ambiental de 23.000 hectáreas de bosques, espejos de agua y amplia biodiversidad.

Para la consecución de los imperativos hidropolíticos anteriormente mencionados, cobra importancia el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y el Plan Maestro Fluvial (PMF). En efecto, el PMTI es una aproximación ambiciosa de interconectividad nacional que tiene dos módulos principales: el primer módulo hace referencia a la infraestructura y el segundo hace referencia a la hoja de ruta al 2025. Además contiene tres objetivos principales: el primero es impulsar el comercio exterior, el segundo es la integración del territorio colombiano, y el tercero es impulsar el desarrollo regional. Así mismo, el PMTI contiene como meta principal a largo plazo, la consolidación de una lista de proyectos prioritarios que requiera una redimensión de la infraestructura de vías terrestres, portuarias, férreas y fluviales, desarrollando una red de transporte integral competitiva que permita la disminución de los costos de los fletes. En este contexto, una de las bondades del PMTI es aumentar el transporte fluvial de carga, de 2 millones de toneladas en 2015 a 6 millones de toneladas al 2035 (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2015).

Por su parte, el PMF estaría diseñado para retomar la navegación de los ríos, mejorar e incrementar la movilización de la carga y pasajeros, y promover su articulación del transporte intermodal y la integración de las regiones y ciudades en Colombia. El volumen nacional total de carga transportada en 2014 fue de aproximadamente 300 millones de toneladas; de este volumen, el 1% del

76. En 2016, la firma canadiense Brookfield Asset Management, a través de BRE Colombia Investments L.P., depositó en la cuenta que tiene el Tesoro Nacional en Nueva York, la suma equivalente a $6,48 billones de pesos.

total de carga transportada se realizó por vías fluviales77 (aproximadamente 3,4 millones de toneladas), de los cuales la mayoría de la carga se transportó por los ríos Magdalena y León (Ministerio de Transporte Colombia, 2015).

El desarrollo del PMF fue promulgado por la Alianza Colombo-Holandesa, la cual articularía los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) y apoyaría el desarrollo del PMTI. El principal objetivo de la PMF sería contar con un sistema de transporte fluvial más competitivo, limpio, seguro y beneficioso para el desarrollo social, tomando en consideración cinco elementos fundamentales: 1) Infraestructura Fluvial; 2) Ordenamiento Institucional; 3) Operación; 4) Promoción; y 5) Financiamiento (Ministerio de Transporte Colombia, 2015). El PMF sería una herramienta lo suficientemente robusta para potenciar el desarrollo del uso del río Magdalena, teniendo en cuenta todas las bondades que se pueden adquirir con una vía fluvial de esta envergadura, al servicio de una interconexión del centro del país con los puertos de Barranquilla y Cartagena, facilitando el transporte fluvial de carga desde y hacia el interior del país.

El PMF complementa al CONPES 3758, promulgado el 6 de Agosto de 2013 por parte del Consejo Nacional de Políticas y Economía Social, donde intervienen el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. El CONPES 3758 busca sentar las directrices para el restablecimiento de la navegabilidad del río Magdalena, manteniendo un dragado permanente de un canal navegable para aprovechamiento de la hidrovía como un corredor logístico intermodal, enmarcándose en cuatro objetivos: 1) Mejorar la navegabilidad del río Magdalena

77. El volumen total de carga en los ríos colombianos es limitado en comparación con otros países (por ejemplo 6% en Brasil y en la Unión Europea). Con respecto a los flujos de pasajeros en 2014, se transportaron 3,7 millones de personas.

a través de adecuadas inversiones en infraestructura y ayudas a la navegación; 2) Consolidar la oferta de infraestructura logística integrada en los diferentes nodos estratégicos; 3) Permitir una navegación segura y continua durante las 24 horas del día, para lo cual se debe ampliar la cobertura del Sistema de Asistencia Satelital (SNS); y 4) Mitigar impactos ambientales que actualmente afectan la condición ecológica de la cuenca y del recurso hídrico, sumado a la afectación de sus usos y aprovechamientos socioeconómicos, como lo es la navegabilidad. (Consejo Nacional de Políticas y Economía Social, 2013, p. 21).

6. Conclusiones

Según Haushofer (2012), "es la geopolítica la que ante todo debe crear la herramienta de una política exterior fructífera, que ha de despertar un enorme eco en el pueblo al completo, para que nazcan las fuerzas que la llevarán a cabo" (p. 335); en consecuencia, para llevar cabo un destino manifiesto geopolítico colombiano, se hace necesario la socialización de los imperativos hidropolíticos en el conjunto de la sociedad. Además, es un menester del Estado propugnar por una educación ambiental de la sociedad, tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia:

> Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Constitución Política de Colombia, 1991).

En Colombia la preocupación social por el recurso hídrico es relativamente marginal, salvo por supuesto, en aquellas regiones que sufren del desabastecimiento de agua. Es decir, no existe en Colombia una "cultura

del agua" o una "consciencia hídrica", ya que aún persiste en buena parte de la sociedad, la creencia de que el agua es un elemento perenne en el desarrollo, dadas las características de biodiversidad y abundancia de las que momentáneamente disfruta el país; ello no permite dimensionar el hecho de que el agua no solo es un recurso natural, es un recurso natural estratégico para la Seguridad Multidimensional de Colombia.

No obstante, el Estado colombiano ha empezado a planificar con base en los activos hídricos, siguiendo los lineamientos de orden internacional que abogan por un manejo más integral y globalizado del agua. Evidentemente, Colombia crearía a través de la Ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente (antes del Ministerio, entidades como el INDERENA realizaban algunas funciones ambientales), encargada de definir los lineamientos de políticas, para los diversos aspectos que involucrasen el medio ambiente, entre ellos el agua. Por lo tanto, se estructurarían los Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua en 1995; las Bases para una Política Nacional de Población y Medio Ambiente en 1998; las Estrategias para un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; los Lineamientos para la Política Nacional de Ordenamiento Ambiental del Territorio en 1998; la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia en el 2000; la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia en 1994; y la Política Nacional de Educación Ambiental en 2002.

En el 2004 se tuvo la intención de materializar el proyecto de la Ley del Agua, el cual tenía como uno de los objetivos el fomento de una cultura frente al agua en aras de garantizar su uso eficiente y sostenible. Además, la Ley buscaba establecer los lineamientos principales para regular su explotación, su uso y aprovechamiento; garantizar a la población el acceso al agua, en la

cantidad y calidad adecuadas; otorgar competencias administrativas y de control en los distintos niveles con el fin de proteger el recurso hídrico; y darle al agua un valor adecuado para garantizar su correcto uso y controlar su disposición final (Laclette & Zúñiga, 2012). A pesar de su importancia, la Ley no prosperó en los debates del Congreso de la República, al igual de la Ley de Seguridad y Defensa. No obstante, para el 2010 se expidió la Política Hídrica Nacional, que ha servido de instrumento orientador de la gestión integral del recurso hídrico en Colombia.

En cuanto al marco normativo en Colombia, el país cuenta con un conjunto de normas para la gestión ambiental e hídrica bastante generosa. Por ejemplo, sobre el recurso hídrico en general, se encuentran la Ley 23 de 1973; Decreto 2811 de 1974; Decreto 1449 de 1977; Decreto 1541 de 1978; Ley 9 de 1979; Decreto 1594 de 1984; Constitución Política de Colombia en los Artículos 78, 79, 80, 365, 366, 367, 368, 369 y 370; Ley 99 de 1993; Ley 373 de 1997; y el Decreto 1220 de 2005. Con relación a cuerpos de agua y cuencas hidrográficas, están la Ley 161 de 1994; Ley 357 de 1997; Decreto 1604 de 2002; Decreto 1729 de 2002; Resolución 769 de 2002; Resolución IDEAM 104 de 2003; Resolución 196 de 2006; y el Decreto 1480 de 2007. Por ende, "los múltiples problemas que aún se tienen en materia de agua no son por falta de legislación, sino por dispersión normativa, falta de voluntad política para aplicar adecuadamente la normatividad y también por carencia de educación ambiental" (Laclette & Zúñiga, 2012, p.220).

Finalmente, y complementando la propuesta de estructurar una doctrina de *Réspice Finem* (desarrollada en el capítulo anterior), que permita visualizar y concretar las acciones necesarias para la ocupación racional de los espacios vacíos y los territorios de frontera de Colombia, este capítulo también propone una doctrina de política exterior y de seguridad, basada en

el *Réspice Aqua Vitae*, o "mirar hacia la vitalidad del agua"; es decir, una Hidrodiplomacia, que en un escenario de escasez de agua dulce en el mundo, podría presentar una ventaja geopolítica desde el punto de vista económico y estratégico. En efecto, ya Colombia ha venido participando activamente en foros multilaterales relacionadas con el tema del agua, como la Organización Hidrográfica Internacional, y ha establecido tratados de cooperación exitosos, como el Tratado de Cooperación Amazónica.

El agua dulce juega un papel fundamental en el apoyo al medio ambiente, la sociedad y la economía. Ecosistemas como los humedales, ríos, acuíferos y lagos, son indispensables para la vida en el planeta, y son vitales para la garantía de una gama de beneficios y servicios tales como agua potable, agua para alimentos e industria (incluyendo energía), hábitats para vida acuática, y soluciones naturales para la purificación del agua, la amortiguación de las inundaciones y reservorios en períodos de sequía, entre otros. Administrado adecuadamente para enfrentar las demandas de la competencia y garantizar su resiliencia ante el cambio climático, los desastres y los conflictos, los ecosistemas de agua dulce contribuirán a mitigar los riesgos, la promoción de la estabilidad y las medidas de fomento de la confianza. Como tales, serán esenciales para el desarrollo sostenible, la paz y la Seguridad Multidimensional.

Capítulo VII
Seguridad y Defensa de las Fronteras: Dos Casos de Estudio[78]

Carlos Enrique Álvarez Calderón
CR. (RA) Darío Ruíz Tinoco
CCESP Javier Enrique Gómez Torres
MY. Felipe Gomes Nunes

1. Introducción

Las fronteras de un Estado podrían llegar a representar una ventaja aprovechable desde el punto de vista estratégico, pero a la vez, si el tema no tiene un manejo adecuado por parte del Estado, se constituirían en una condición de gran vulnerabilidad para la Seguridad Nacional y la propia soberanía.

Colombia ha tenido, históricamente, unas fronteras internacionales permeables e inseguras, que son resultado de la ausencia de una política de Estado sostenible, permanente y de alcance estratégico con respecto al perímetro nacional; ello se ha visto reflejado en las pérdidas del territorio patrio heredado de España, desde el mismo momento de la independencia y en aplicación del Utis Possidetis Juris de 1810. Varias publicaciones y análisis sustentan un estimado de un millón de km² en pérdidas de territorio en los 207 años de vida independiente.

78. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

Entrar a negociar con Nicaragua unas nuevas fronteras marítimas en el Mar Caribe se constituiría como un asunto de gran complejidad, ya que el Estado centroamericano no negociaría ningún territorio marítimo con Colombia que afecte o cambie la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012. Es más, las nuevas demandas contra Colombia no solo se basan en el incumplimiento de la Sentencia, sino en el criterio de una Plataforma Continental Extendida como la que contempla la Convención del Mar de 1982, de la cual Colombia no forma parte, por no haberla aún ratificado como si lo hizo en su momento Nicaragua.

La Sentencia tiene todas la características de una sentencia inejecutable por dos razones fundamentales: La primera, porque fraccionó la integridad geográfica del Archipiélago de San Andrés y Providencia, generando una inaceptable solución de "enclave", que afecta a la vez Tratados e intereses de terceros Estados, tales como los suscritos con Panamá, Costa Rica (que por efecto de la sentencia dejó de ser un país limítrofe de Colombia), Honduras y Jamaica; y por otra parte, porque se pretende modificar el artículo 101 de la Carta Constitucional de Colombia, mediante una sentencia de un tribunal extranjero, lo cual la hace inaplicable, así la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, establezca que los Estados que son parte de la Convención, no podrán invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un Tratado Internacional, en razón a que dicha sentencia fue posterior a la Carta Constitucional de 1991.

Contrario a lo que haría Nicaragua, que al interponer una demanda contra Colombia, partiría de la comisión de un acto ilícito a la luz del propio Derecho Internacional, como fue la declaratoria de nulidad del Tratado Esguerra Bárcenas Meneses de 1928, ocurrida el 4 de febrero de 1980, violando el principio fundamental del Derecho Internacional, como es el *Pacta Sun Servanda*.

Es necesario tener en cuenta que existe una clasificación inicial de las fronteras en las categorías de terrestres, marítimas y aéreas. Las primeras difieren sustancialmente de las segundas, toda vez que su conformación obedece a una titularidad histórica, a lo largo de un complejo procedimiento de negociación diplomática, que para el caso colombiano solo concluiría hasta el 5 de abril de 1941, cuando se suscribió el último tratado de fronteras terrestres con Venezuela. Las fronteras marítimas por el contrario, se derivan de la condición de Estado ribereño, es decir Estados con acceso al Mar, y por consiguiente, su trazado es un asunto técnico-jurídico (más que de títulos históricos), aunque Venezuela en su controversia con Colombia, sustente equivocadamente que el Golfo de Coquivacoa es una bahía histórica a favor de Venezuela, desconociendo el hecho de que existe una acceso geográfico por parte de Colombia sobre las aguas del Golfo, entre Castilletes y Punta Espada, en la Península de la Guajira.

Desde la perspectiva geopolítica, las fronteras suelen presentar para su estudio una clasificación particular y consecuente con lo anterior; en efecto, se habla de fronteras geográficas que comprenden a su vez las naturales y astronómicas, topográficas y mixtas; otra categorización involucra el concepto de fronteras en economía, en defensa, que a su vez se subdivide en principales y secundarias. En resumen y para simplificar su conceptualización, los Estados comparten fronteras terrestres, marítimas y aéreas, derivándose esta última, de la proyección hacia el espacio de las dos primeras.

2. Breve Análisis de la Conceptualización de las Fronteras

Algunos autores (Rosenau, 1997; Agnew, 2005; Kahler & Walter, 2006; Paasi, 2009), afirman que nuevas formas de espacialidad han surgido en las últimas décadas, por causa de los trastornos geopolíticos y geoeconómicos derivados de la finalización de la Guerra Fría; mientras que otros (Ohmae, 1995; Appadurai, 1996; Strange, 1996), deslumbrados por el proceso de la

globalización y el surgimiento de un mundo caracterizado por "flujos" y "redes", argumentan que se ha venido habilitando un "mundo sin fronteras", y deshabilitando la noción y el papel del Estado-nación westfaliano. No obstante, el rol de las fronteras continúa jugando un papel fundamental en el Sistema Internacional, así como en la valoración de la Seguridad y Defensa de los Estados. En efecto, Taylor (1993) sugirió una vez que "un mundo de Estados soberanos es un mundo dividido por fronteras" (p.164); de manera similar, Giddens (1987) argumentaba que, al contrario de los Estados feudales separados por límites (que eran esencialmente zonas), un Estado-nación tendría el monopolio administrativo de un territorio con fronteras demarcadas.

Según Gallo (2015) "las fronteras constituyen un escenario vital de la proyección del Estado y se consolidan como espacios estratégicos, en los que juega un rol central la soberanía. También en la frontera se encuentra la capacidad de ejercer un efectivo control territorial, basado en preceptos como equidad, justicia, desarrollo y como complemento una noción de seguridad y defensa sobre la base del orden y la legitimidad" (p.37). De acuerdo a la Sociedad Geográfica de Colombia, la Frontera sería la delimitación exacta del territorio de un Estado, o la zona intermedia entre dos países. También podría ser considerada como la periferia, confín o final del territorio en el que se ejerce soberanía, y la zona en la cual la población asentada en cada uno de los países colindantes interactúa en necesarias relaciones de vecindad. Bajo el Derecho Internacional, la frontera es la línea que marca el límite exterior del territorio de un Estado, es decir, la línea que determina el ámbito espacial donde un Estado ejerce su soberanía con exclusión a otros.

De manera similar, la geopolítica concibe la frontera como aquella que demarca el espacio terrestre, marítimo o aéreo hasta donde llegaría la plena soberanía jurisdiccional de un Estado. No obstante, diferencia los conceptos

de frontera y de límite, entendiendo la segunda como aquella que demarca el espacio terrestre, marítimo o aéreo hasta donde llegaría el control efectivo[79] de un Estado. Vaughan-Williams (2011), plantea que el concepto del límite del Estado es intrínseco al de integridad territorial y al orden jurídico-político, constituyéndose como un indicador de los límites del poder soberano, que se localiza y se fija en el borde geográfico del territorio soberano del Estado. En consecuencia, lo ideal es que el límite coincida al menos con la frontera; sin embargo, existen Estados en los cuales su límite no concuerda con su frontera, bien sea porque la excede *(rimland)*, o porque no la alcanza (frontera interior). La frontera, al ser el órgano periférico del Estado, sería el elemento que define la conformación geopolítica del planeta.

La frontera se crea y se define con base en acuerdos suscritos en tratados o en "arreglos" emanados por la fuerza, la diplomacia, la amenaza, el permiso o el convenio pacífico; una vez fijada la frontera, el Estado la protege con medios defensivos tales como fortificaciones, muros, puestos de control, o soldados. En efecto, la defensa de las fronteras patrias es misión de las fuerzas militares de un país; por ejemplo, la misión constitucional de las Fuerzas Militares de Colombia, contemplada en el Artículo 217 de la Constitución de 1991, establece que:

> La nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (Constitución de Colombia, 1991, Articulo 217).

Lo cierto es que las fronteras, límites, confines, márgenes y/o lindes, son creaciones humanas basadas en varias tradiciones éticas judías, romanas,

79. Jurídico, tributario, económico, socio-cultural, militar y/o policial, entre otros.

cristianas, confucianas, islámicas y liberales. Por ejemplo, los límites organizarían al Imperio Romano de acuerdo con una jerarquía de espacios, es decir, territorios de variadas dimensiones y funciones, que incluían asentamientos, ciudades, provincias y regiones. En cambio, durante la Edad Media, pareciera que el sistema feudal estaba más preocupado por el control de las ciudades y territorios, que en el establecimiento de fronteras propiamente dichas, permitiendo la existencia de zonas de frontera algo ambiguas. Sin embargo, gracias a los geógrafos, la tecnología de mapeo permitiría a los gobernantes tener una vista espacial de sus posesiones; por lo tanto, lo que originalmente eran límites erráticos que determinaban el alcance del control territorial del soberano, se convertirían progresivamente en fronteras (Anderson, 1996).

Además, los vocabularios del espacio comenzaron a reflejar esta evolución refinando los significados que permitirían diferenciar entre fronteras, límites, confines, perímetros, etc. Anderson (1996) describió cómo el significado varía según el lugar, señalando, por ejemplo, que la "frontera" en la tradición estadounidense y francesa no obedece a una misma percepción del espacio. En francés, un *frontière* es una región fronteriza, como por ejemplo, la región francesa de Alsacia. En Estados Unidos, sin embargo, una "frontera" es una zona móvil de asentamiento, que puede relacionarse con la imagen de la conquista del Oeste norteamericano en el siglo XIX. En el caso de Colombia, llama la atención que se utilice el concepto de límite y no de frontera, posiblemente importado de la concepción anglosajona de aquella línea que marca el confín de la jurisdicción de un Estado frente a otro. En efecto, de acuerdo al Artículo 101 de la Constitución de 1991, Colombia establece que:

> Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos

> arbitrales en que sea parte la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República (…) (Constitución de Colombia, 1991, Articulo 101).

Por lo tanto, la mayoría de las teorías del Estado identificarían al territorio como un elemento constitutivo del Estado, relacionando la soberanía con un territorio delimitado (Biersteker & Weber, 1996). El marco territorial de la soberanía estatal ha incluido un modelo de ciudadanía y narrativas de identidad basadas en el territorio, que típicamente se fundarían en el pasado. El Estado usaría su poder territorial para controlar a sus ciudadanos y, cada vez más, a aquellos que no han logrado la ciudadanía, como los refugiados, inmigrantes y otras personas desplazadas. Para los nacionalistas, la soberanía es la palabra clave y el Estado es visto como la principal expresión política de la comunidad (Anderson, 1991). La lealtad al Estado (es decir, el patriotismo), bien podría reforzar o, por el contrario, entrar en conflicto con el nacionalismo, ya que es solo dentro de los Estados nacionales "reales"[80], que el patriotismo y el nacionalismo se apoyan mutuamente.

Ahora bien, las primeras obras de demarcación territorial por parte de geógrafos políticos e historiadores contribuirían, eventualmente, a la formación del orden político moderno, que requería el reconocimiento internacional por parte de otros Estados, de las fronteras de los Estados soberanos. Un ejemplo notable es el Tratado hispano-holandés de Westfalia de 1648, que establecería las fronteras para las posesiones territoriales de Inglaterra, Francia, Holanda, los principados alemanes, Moscovia, Polonia, Turquía, España y Suecia. En este sentido, el Tratado de Westfalia marcaría el comienzo de la era de la

80. Por Estados nacionales "reales" se entenderían aquellos Estados que han sido edificados a partir de una identidad común de nación, o en su defecto, que la han construido con el paso del tiempo.

Nación-estado y del nacionalismo, que los historiadores y geógrafos estudiaron y explicaron durante los siglos XIX y XX.

Otro ejemplo sería el Tratado de París, el cual revisaría las fronteras de la mayoría de los Estados al final de la Primera Guerra Mundial; demostrando el papel que jugarían los mapas en la determinación de las fronteras, Macmillan (2003) afirma que durante las negociaciones diplomáticas y los juegos de influencia que tuvieron lugar en torno al Tratado de París de 1919, los representantes de los Estados se referirían a mapas engrandecidos que servían a sus propósitos, pero que no eran representaciones exactas de los territorios y de sus poblaciones[81]. Tanto en el Tratado de Westfalia como en el de París, la soberanía, definida como el derecho exclusivo del ejercicio de la violencia legítima dentro de las fronteras de un territorio, sería reconocida mutuamente por los Estados, particularmente por las superpotencias Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos; por ende, a medida que la autodeterminación y la soberanía se convirtieron en los principios organizadores del Sistema Internacional, las fronteras terminarían delimitando a los Estados modernos.

Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, los primeros estudios sistemáticos de las fronteras se centraron tanto en las naturales como artificiales; por ejemplo, Ellen Churchill Semple, en su obra *Influences of Geographic Environment* de 1911, afirmaba que las fronteras geográficas naturales donde los humanos no podrían asentarse, eran fronteras ideales (Minghi, 1963). Más tarde, Lyde (1915) y Holdich (1916), discutieron las virtudes de las fronteras, considerándolas buenas o malas dependiendo de la capacidad que tuviesen

81. El poder de los mapas y su capacidad de crear una nueva realidad para quienes los utilizan, ha sido reconocido y valorado durante mucho tiempo. Desde el primer mapa del que se tenga conocimiento (uno de Mesopotamia de hace tres mil años), todas las sociedades importantes han utilizado los mapas para representar los límites y las divisiones en todas las escalas imaginables, con lo que legitiman políticamente la división del territorio que controlan (Wood, 1993). Desde una perspectiva política, aunque los mapas pretendan ser neutrales e integrales, en realidad son intrínsecamente distorsionantes y selectivos, ya que tienden a exagerar hasta cierto punto, características importantes (como ríos, accidentes geográficos, etc.). Como resultado, los cartógrafos tienen una enorme licencia para moldear las imágenes que crean para reflejar su propia visión del mundo, o la de sus empleadores.

de fomentar o restringir tensiones, e incluso guerras entre los Estados. Estas opiniones también marcaron el comienzo de un debate sobre las funciones de las fronteras. Por ejemplo, Perry (1919) argumentó que las fronteras deberían proporcionar un equilibrio económico, mientras que Boggs (1940) sugirió que las fronteras tenían funciones específicas que variaban en tiempo y espacio, y que podían interactuar para disminuir las tensiones inter-estatales; esta idea llevaría a Spykman (1942) a sugerir que el territorio externo que rodeaba la frontera era central para entender las relaciones de poder a través de las fronteras.

Por su parte, Peattie (1944) sostendría que las fronteras deberían fortalecer el poder del Estado, tomando en consideración que los Estados europeos convirtieron sus fronteras en teatros de operaciones militares, como lo demostraban los túneles subterráneos militarizados que se construirían a lo largo de las fronteras (como la línea Maginot que dividió a Francia y Alemania hasta 1939). Sin embargo, a principios de la década de 1960, la opinión generalmente aceptada era que los cambios en las funciones fronterizas podían disminuir las tensiones entre las regiones fronterizas (Jones, 1959).

Originalmente, las fronteras se utilizaban para delimitar las posesiones territoriales de los Estados soberanos, y el trabajo de los científicos sociales sirvió al propósito de los gobernantes que estaban ansiosos por imaginar la línea divisoria de sus posesiones. En resumen, las fronteras se convirtieron en el centro de la agenda nacionalista y el desarrollo de los Estados naciones. Paasi (1999) identificaría tales fronteras como construcciones institucionales; en el centro de tales construcciones está el hecho de que las fronteras resultan de acuerdos internacionales que se establecen por mutuo entendimiento entre los Estados, creando redes complejas y entrelazadas de políticas gubernamentales y funciones que interactúan para formar fronteras internacionales que delinean espacios soberanos.

Si hay algo que desmiente más las nociones de un "mundo sin territorios y sin fronteras", es el hecho de que las fronteras, en una variedad de formatos e intensidades, continúan delimitando los territorios dentro de los cuales están compartimentadas las personas, determinando con quién interactúan y con quién se afilian. Si bien algunas fronteras podrían estar desapareciendo, al mismo tiempo se están estableciendo nuevos límites, que van desde el Estado y el territorio, hasta lo social y virtual, todo al mismo tiempo. Las fronteras no solo son estáticas, inmutables y características del paisaje político; también tendrían sus propias dinámicas internas, creando nuevas realidades que afectan las vidas de aquellas personas y grupos sociales que residen muy cerca de la frontera. Tampoco los límites son simplemente fenómenos territoriales y geográficos; los límites sociales, económicos, políticos y virtuales crean compartimentos dentro de los cuales algunos están incluidos, y muchos excluidos, como ocurre en el territorio colombiano.

2.1 Tipología de Fronteras

Los primeros estudios de fronteras estaban repletos de tipologías y clasificaciones de fronteras. De estos, el uso de Hartshorne (1936) de los términos tomados de la geomorfología fluvial en la década de 1930, aún permanece fuertemente arraigado en la mente de muchos geógrafos políticos. En efecto, su uso de términos tales como fronteras "primarias", "antecedentes" y "subsiguientes", buscaba distinguir entre fronteras que se delimitaron en territorios vírgenes no ocupados, con aquellos que posteriormente, determinarían la distribución espacial del asentamiento diferenciado en sus características culturales y étnicas, por la línea de separación ya existente, en contraste con las fronteras que fueron demarcadas de acuerdo con los patrones de asentamiento humano y que consolidaron y compartimentaron la diferenciación espacial étnica y cultural en territorios políticos separados, como los Estados nacionales. Según

Newman (2003), en la actualidad se diría que las fronteras están determinadas por la formación de identidades sociales separadas que se expresan, por un lado, a través de los procesos de compartimentalización espacial, y por el otro, a través de fuertes niveles de segregación residencial.

De particular importancia para la discusión contemporánea de la descolonización y el poscolonialismo, sería la clasificación de la frontera "superpuesta", es decir, aquellas líneas que habían sido trazadas por las potencias coloniales en Europa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas se habían superpuesto a los paisajes coloniales en Asia, Medio Oriente y África, como parte del proceso que llevaría las nociones europeas de territorios fijos, a regiones cuyas poblaciones eran tribales y seminómadas, y cuyos patrones estacionales de movimiento estaban en desacuerdo con las nociones políticas de fijación territorial. Estas líneas, a menudo trazadas en Europa, utilizando mapas inexactos y con poco conocimiento de los patrones espaciales de distribución étnica y tribal, se caracterizaron por líneas "geométricas" con poca relación a las características naturales de los paisajes humanos o físicos.

De allí, que algunos afirmen que la génesis de los conflictos armados africanos que aún subsisten en la actualidad son a causa de las "falsas" fronteras coloniales, establecidas en la Conferencia de Berlín de 1885 (Lemon, 2001; Ramutsindela, 1999). Sin embargo, lo cierto es que las fronteras coloniales africanas no serían ni peores ni mejores que las de cualquier otro continente. Como en todos los casos, han nacido de procesos históricos, influencias locales y extranjeras, accidentes geográficos, conflictos y negociaciones; lo cierto es que en el contexto de la Conferencia de Berlín, los funcionarios coloniales europeos no desconocían la realidad geográfica, histórica y humana del territorio que administraban.

De hecho, en el caso del modelo colonial británico, la Indirect Rule permitía que fuesen los propios líderes locales, los que estableciesen las divisiones territoriales. Ahora bien, podría resultar sospechoso que un 42% de las fronteras sigan líneas geométricas; pero ha de tenerse en cuenta que, en la mayor parte de los casos, corresponde a espacios vacíos o líneas sobre las arenas del desierto para los que no parece que puedan encontrarse criterios más justos (las arenas y dunas del desierto se desplazan constantemente). En todo caso lo que no se tiene en pie es el argumento de que los males de África derivan tan solo del diseño de fronteras; arbitrarias o no, las fronteras han dado lugar a Estados reconocibles ya por varias generaciones[82].

Por su parte, una distinción que resaltaría la naturaleza determinista de los primeros estudios de fronteras, es aquella realizada entre las fronteras "naturales" y "artificiales" (Boggs, 1940). Por fronteras "naturales" se sugirió que las características físicas del paisaje (como ríos, pantanos, desiertos, selvas, crestas de montañas, valles, etc.), determinarían el curso final y la demarcación de la línea de frontera. Esta forma de determinismo ambiental sería posteriormente descartada en favor del enfoque que establecía que todas las fronteras son "artificiales", en el sentido de que su demarcación está determinada por personas: políticos, planificadores y tomadores de decisiones (Kristoff, 1959).

Empero, no puede ignorarse el hecho de que las características ambientales desempeñaron un papel más prominente en la determinación de los patrones espaciales humanos en las épocas pre-tecnológicas, cuando los Estados eran menos capaces de manipular y cambiar el paisaje de acuerdo con sus objetivos

82. Parece una posición muy aceptada atribuir todos los males de África a la delimitación de sus fronteras, y que la mayor parte de los conflictos habidos en África tienen su origen en las «fronteras artificiales». La realidad es que los conflictos fronterizos no son exclusivos de África. Los líderes africanos, siguiendo las directrices de la propia Organización para la Unidad Africana, respetaron las fronteras emanadas de la colonización; o se sometieron al arbitraje o fallos de los tribunales internacionales, cuando la demarcación no estaba clara. Así, desde 1963 hasta 2013, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha fallado sobre disputas entre Burkina Faso y Malí, Chad y Libia, Guinea Bissau y Senegal, Botsuana y Namibia, Camerún y Nigeria, y Burkina Faso y Níger, entre otros.

sociales y políticos (como ocurre en la actualidad, con la creación de islas artificiales en el Mar del Sur de China); en efecto, la distribución espacial de diferentes grupos étnicos y nacionales estaría determinada, en parte, por las fronteras que los separaban de otras culturas y grupos sociales vecinos, en un período histórico en que la movilidad estaba severamente limitada, y cuando las características topográficas naturales constituían obstáculos principales para cualquier tipo de interacción.

Las fronteras premodernas jugaron también un papel importante en la formación de identidades nacionales y étnicas separadas dentro de los Estados y otras formas de compartimentos territoriales cuya definición espacial pudo haber sido determinada, al menos en parte, por la existencia de las características ambientales que actuaban como barreras y obstáculos al movimiento. Desde el punto de vista geográfico, además de las fronteras "naturales" y "artificiales", las fronteras se podrían llegar a clasificar en (Rosales, 2015): frontera terrestre (la que se da en el continente); frontera marítima (la que se da en mares y océanos); frontera aérea (la que corresponde al espacio aéreo y su dimensión vertical, incluyendo en teoría, la órbita geoestacionaria); fronteras políticas (las que determinan los límites de soberanía territorial del Estado); fronteras de poblamiento (las que son consecuencia de la extensión de un asentamiento humano; fronteras continentales (las que delimitan al Estado dentro del contexto continental); y las fronteras extra-continentales (las que posee el Estado fuera de su área territorial, como Guam para los Estados Unidos o la isla de Pascua para Chile).

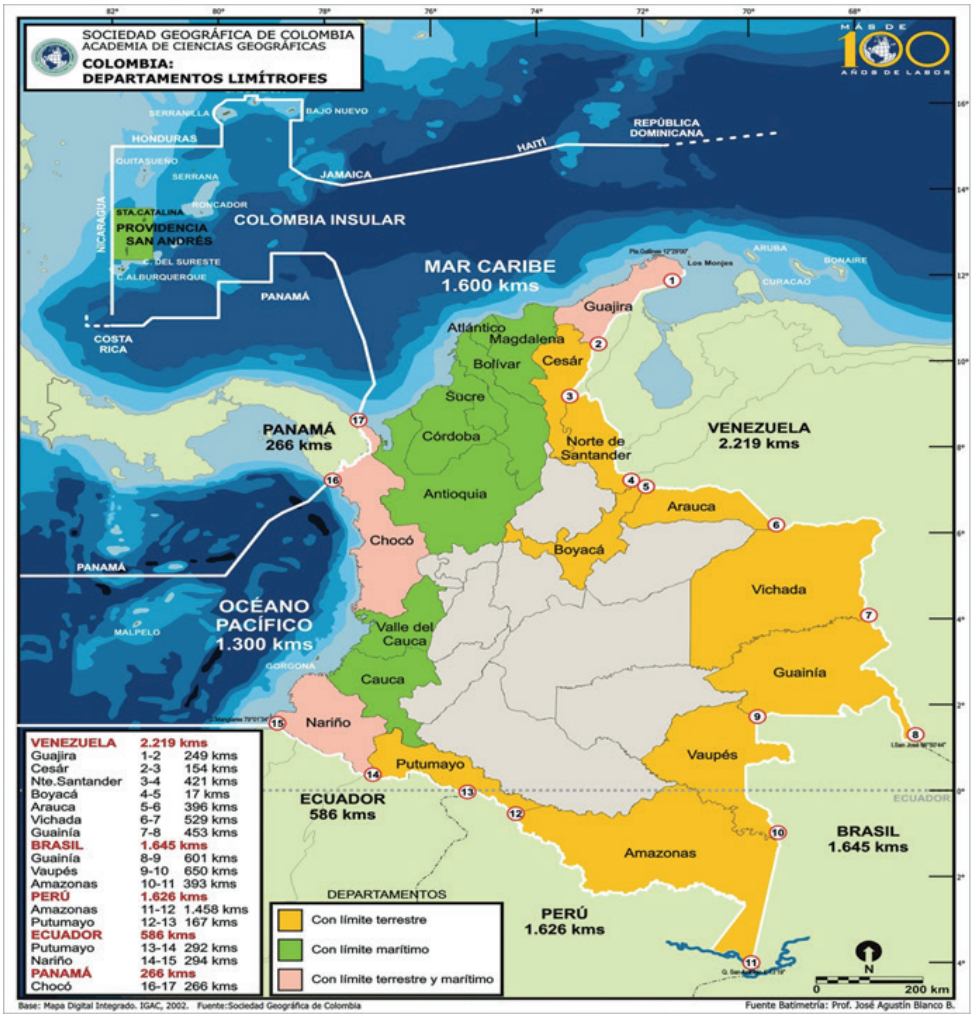
Desde el punto de vista histórico: fronteras en formación (producto del proceso histórico en la formación del Estado, como la adopción del principio del *Uti Possidetis Juris* de 1810); fronteras estables (las que han permanecido inalteradas por mayor tiempo); fronteras inestables (las que han sufrido más

variaciones en el tiempo); y fronteras esbozadas (aquellas que se han enunciado pero que no se han materializado en el terreno), y que suelen ser las más conflictivas. Desde el punto de vista sociopolítico: fronteras culturales (las que tradicionalmente han separado nacionalidades y culturas); fronteras ideológicas (las que separan Estados distanciados por sus sistemas políticos, económicos o sociales); fronteras vivas (aquellas que tienen un intercambio permanente y una gran dinámica económico-social); y las fronteras muertas (las que carecen de intercambio efectivo, generalmente se enmarcan dentro de regiones selváticas, desérticas o deshabitadas). Por último, desde el punto de vista geopolítico: fronteras estáticas o defensivas (las que mantienen los Estados en un statu quo, con un criterio defensivo y de permanencia, generalmente por respeto mutuo); fronteras dinámicas o agresivas (las que dada su incidencia estratégica, son objeto de presiones constantes); y fronteras porosas (las que a falta de un control efectivo, son activos escenarios de las amenazas a la seguridad y defensa de los Estados).

2.2 Fronteras de Colombia

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2002), Colombia suma 6.342 km de fronteras terrestres. Por su parte, el área continental es de 1.141.748 km² y está conformada por 13 departamentos, 12 terrestres y uno insular: Amazonas, Arauca, Boyacá, Chocó, Cesar, Guajira, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés , Vichada y el insular San Andrés y Providencia (Mapa No. 1).

Mapa 1. Departamentos Limítrofes de Colombia



Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

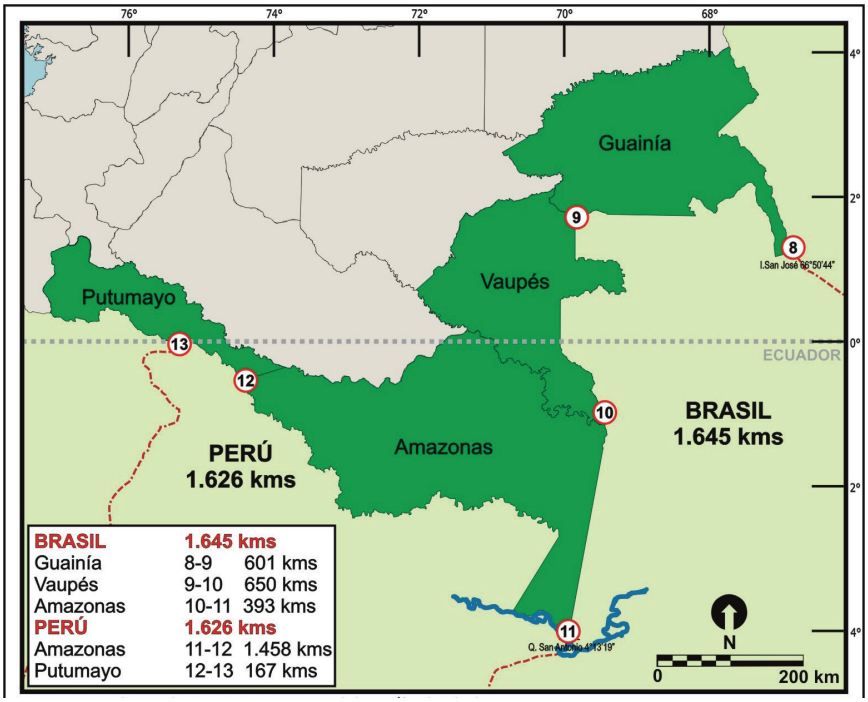
Los 12 departamentos que están en la frontera terrestre contienen 54 municipios, los cuales constituyen la denominada "Zona de Frontera". Asimismo, Colombia comparte 2.219 km de frontera terrestre con Venezuela (Mapa No. 2); con Brasil 1.645 km de frontera terrestre y con Perú 1.626 km de frontera terrestre (Mapa No. 3); con Ecuador 586 km de frontera terrestre (Mapa No. 4); y con Panamá 266 km de frontera terrestre (Mapa No. 5).

Mapa 2. Frontera con Venezuela



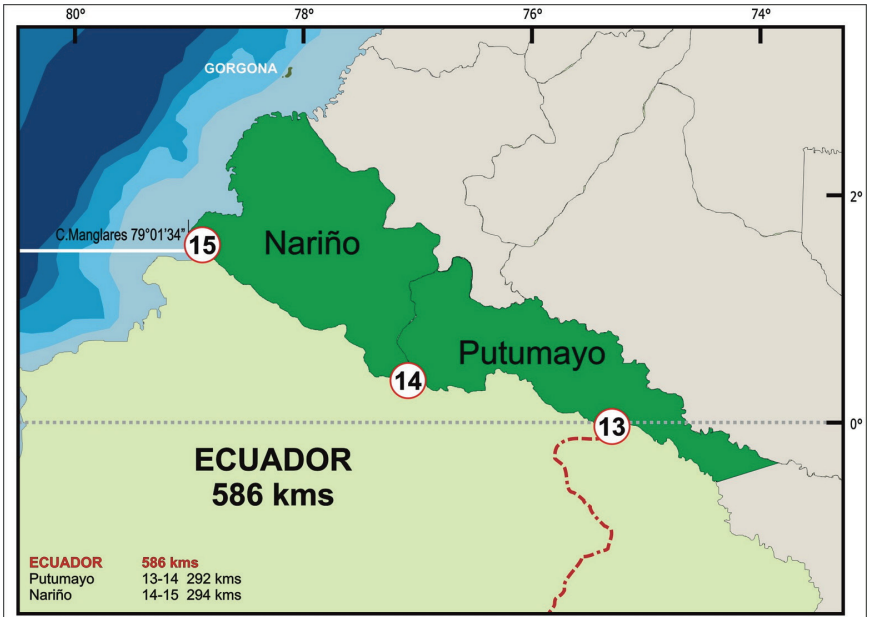
Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

Mapa 3. Frontera con Brasil y Perú



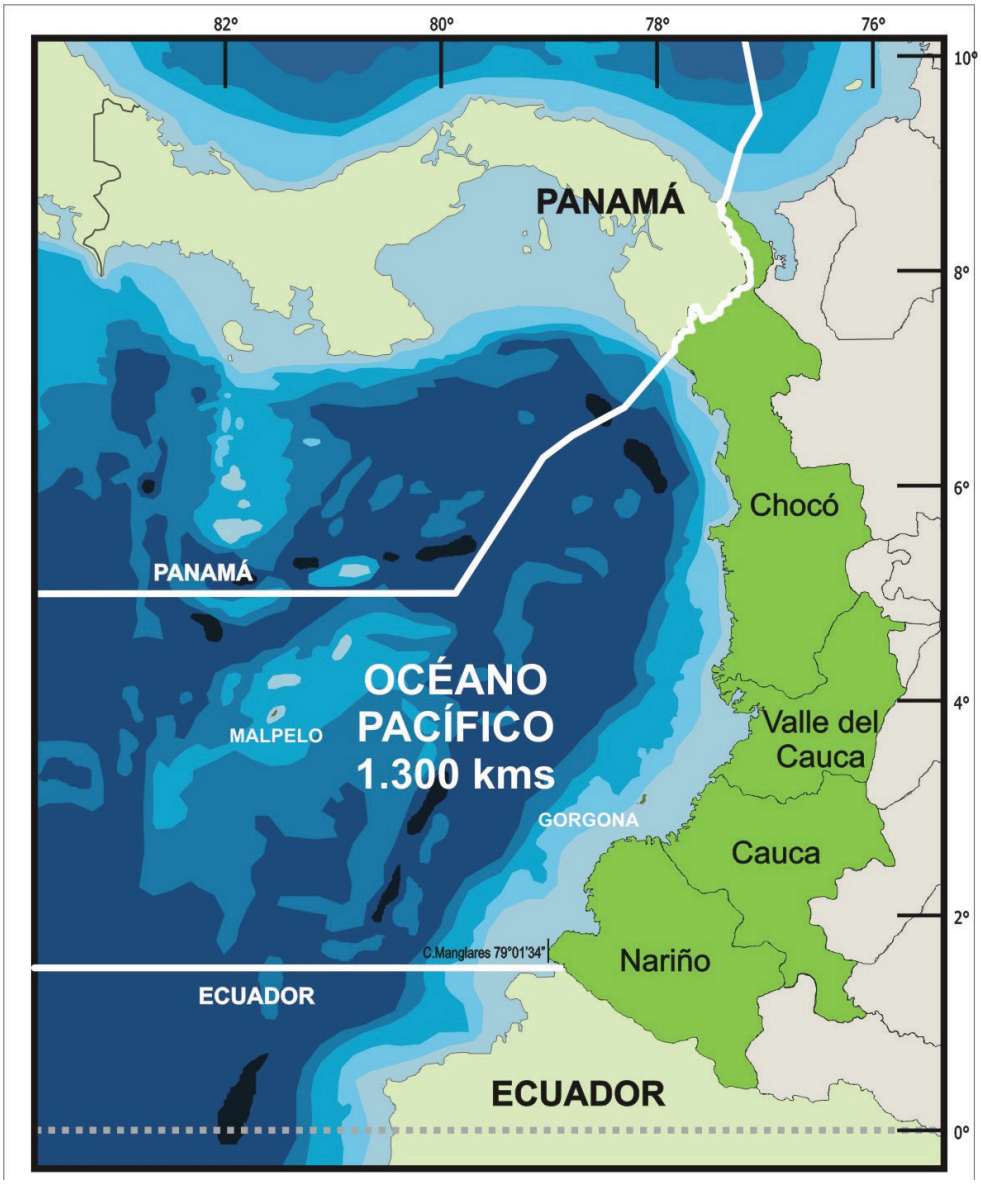
Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

Mapa 4. Frontera con Ecuador



Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

Mapa 5. Frontera con Panamá

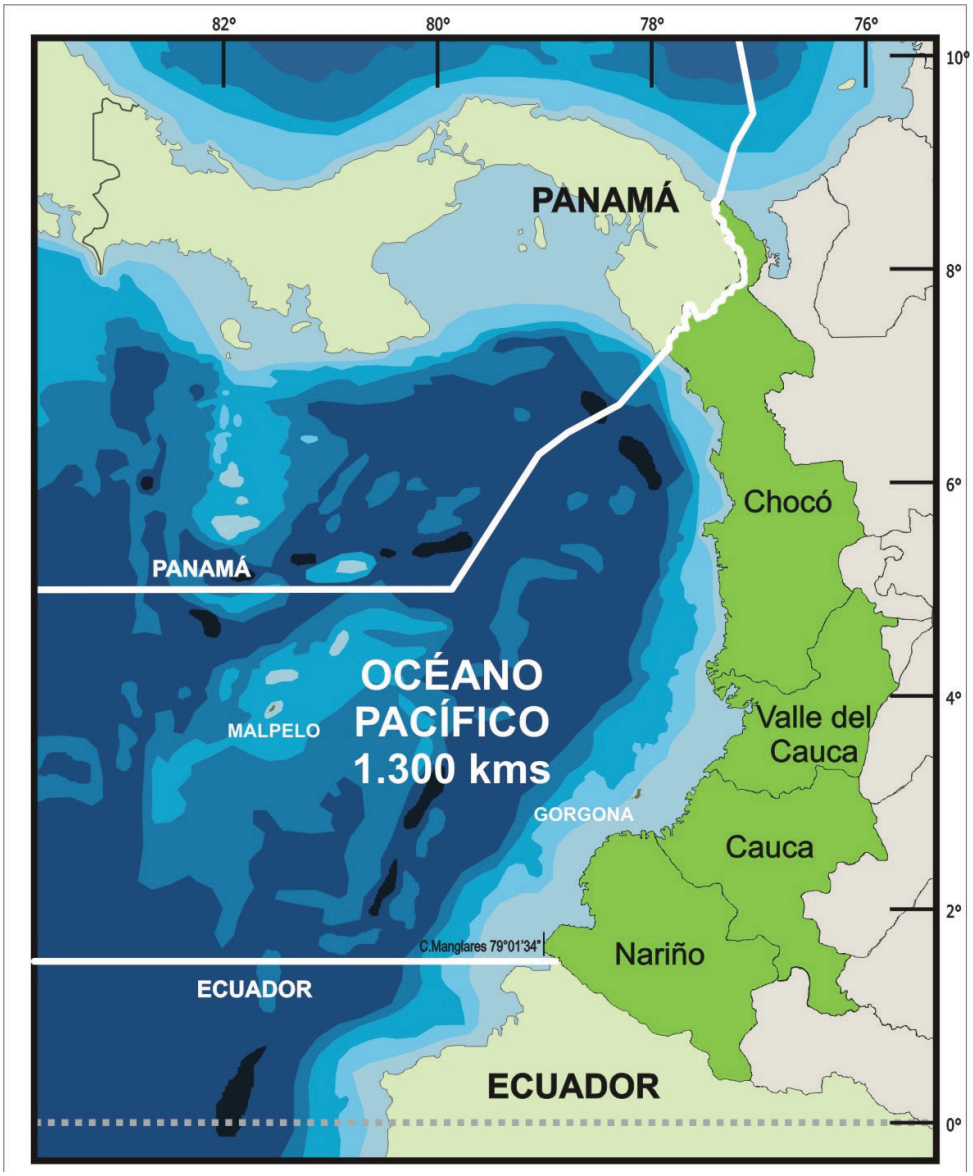


Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

Colombia también posee fronteras marítimas con 10 países vecinos, 7 en el Mar Caribe (Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Panamá), y 3 en el Océano Pacífico (Costa Rica, Ecuador y

Panamá); el territorio marítimo colombiano suma un total de 589.360 km² en el Caribe y 339.200 km² en el Pacífico (Mapa No. 6).

Mapa 6. Espacio Marítimo en el Pacífico



Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

2.2.1 Evolución de las Fronteras

La conquista del territorio colombiano por parte de los españoles inicia en 1499, año en el cual Alonso de Ojeda arribaría al Cabo de la Vela, en la península de la Guajira; a partir de aquel momento, el Reino de Tierra Firme sería el nombre que los conquistadores darían al territorio recién descubierto. Para 1509, la Corona española divide la Tierra Firme en dos unidades administrativas, las gobernaciones de Nueva Andalucía y Castilla de Oro, las cuales dependerían judicialmente de la Real Audiencia con asiento en la isla La Española, que comprende los actuales países de República Dominicana y Haití; la Gobernación de Nueva Andalucía comprendía el territorio entre la Guajira y el Golfo de Urabá, mientras que la Gobernación de Castilla de Oro se extendía entre el Golfo de Urabá y el territorio de Veragua, en la actual Panamá que colinda con Costa Rica.

En 1510, Alonso de Ojeda, en calidad de gobernador de Nueva Andalucía, funda San Sebastián de Urabá, el primer asentamiento continental de América; ese mismo año, Martín Fernández de Enciso funda Santa María Antigua del Darién, convirtiéndose en "capital de la Gobernación de Castilla de Oro, primer obispado del Nuevo Continente, residencia de Pedro Arias De Ávila (fundador de Panamá), y de Vasco Núñez de Balboa quien, desde allí, exploró el istmo de Panamá y descubrió el mar del Sur u Océano Pacífico, el 27 de septiembre de 1513" (Mendoza, 1989, p.3). Para 1513, la Corona española decide unificar las dos gobernaciones mencionadas bajo el nombre de Castilla de Oro (Mapa No. 7), fundándose eventualmente Panamá en 1519 (Mapa No. 8); posteriormente, se crearían las gobernaciones de Santa Marta (1525), Cartagena (1533) y Popayán (1536).

Mapa 7. Periodo de Conquista

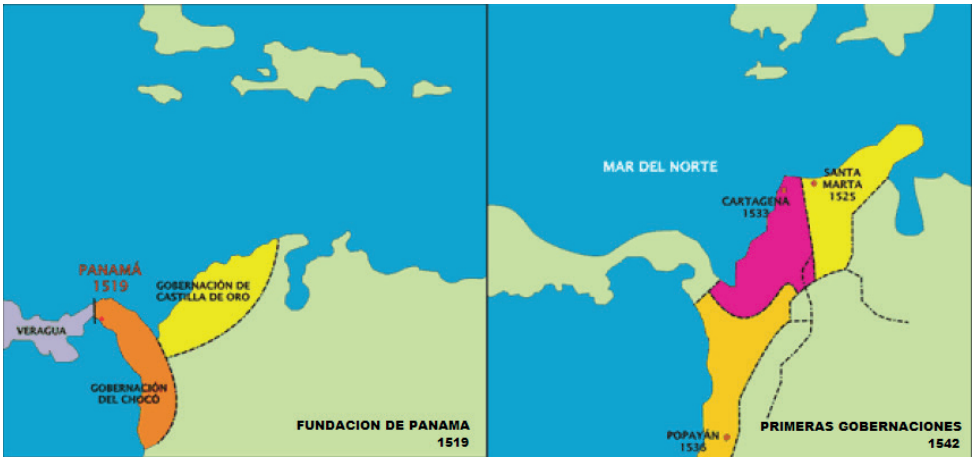


Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

A medida que evolucionaba la arquitectura político-administrativa de la Colonia española en América, el Rey Carlos V crearía las Reales Audiencias en Tierra Firme, como parte de una administración descentralizada que permitiera una gestión más expedita en materia judicial, ya que hasta aquel momento los pleitos y querellas eran resueltos en la distante Audiencia de Santo Domingo. En consecuencia, se crearía la Audiencia de Panamá en 1538, a cuya jurisdicción se asignaron las gobernaciones de Cartagena y Popayán, mientras que la gobernación de Santa Marta seguiría dependiendo de la Audiencia de Santo Domingo. Para el año de 1544 sería creada la Real Audiencia de Lima,

quedando la Gobernación de Popayán bajo su jurisdicción. En julio de 1549 se establecería la Real Audiencia de la Nueva Granada, dependiente del Virreinato del Perú.

Mapa 8. Periodo de Conquista



Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

Posteriormente, con la creación del Nuevo Reino de Granada, esta se constituirá como el territorio central de los oficios de la Audiencia, la cual comprendía las provincias de Santafé y Tunja, y ciudades tales como Mérida y San Cristóbal (hoy Venezuela), Pamplona, Mariquita, Ibagué, y Tocaima. Por su parte, la Gobernación de Santa Marta llegaba hasta la ciudad del Río de la Hacha y limitaba al occidente con la gobernación de Cartagena, al oriente con la Capitanía de Venezuela, al sur con Vélez y norte con el mar Caribe; su capital fue Santa Marta, e incluía otros pueblos como Tenerife y Tamalameque a la orilla del Río Magdalena, así como Ciudad de los Reyes, en el Valle de Upar. Asimismo, la Gobernación de Cartagena comprendía los territorios desde el río Magdalena hasta el Darién; Cartagena de Indias era la capital y contaba con otras ciudades como Tolú, Mompox y Barranca de Malambo. Por su lado, la Gobernación de Popayán, la cual compartía límites con el Nuevo Reino de Granada, era posiblemente la más extensa de las gobernaciones, ya

que limitaba al norte con la Gobernación de Cartagena, al sur con la Audiencia de Quito, al occidente con el Mar del Sur (el Pacífico entre el Cabo Corrientes y el Ancón de Sardinas), y por el oriente hasta San Juan de los Llanos; tenía por capital a Popayán y contaba con ciudades como Cali, Buenaventura, Santafé de Antioquia, Anserma, Cartago, Guadalajara de Buga, Timaná, y Pasto.

Con el Rey Felipe V (1701-1746) se inaugura el periodo de la Colonia y finaliza el periodo de Conquista; además, el sistema federado de audiencias reales de los Habsburgos terminaría siendo sustituido por el sistema centralista de los virreinatos instaurados por los Borbones (Mapa No. 9). Es en este contexto en el que se establecen en la América española cuatro virreinatos: Nueva España o México, Nueva Granada, Perú y Río de La Plata; adicionalmente, funcionaban 3 capitanías: Cuba, Guatemala y Chile (la capitanía de Venezuela sería adscrita al virreinato de la Nueva Granada). Con relación al Virreinato de la Nueva Granada, este quedaría conformado por la fusión de las Reales Audiencias de Santafé, Quito y la Capitanía de Venezuela. Para 1810, el virreinato de la Nueva Granada había variado sus límites y extensión, limitando nuevamente con la Capitanía de Venezuela y la Provincia de Quito, segregadas del mismo virreinato en 1777 por disposición del Rey Carlos III (1759-1778); la configuración territorial resultante partiría de la aplicación del principio jurídico *Uti possidetis* juris (poseeremos como poseímos), base para los futuros arreglos fronterizos. En consecuencia, la Nueva Granada se extendía al golfo de Venezuela por el norte y ocupaba una extensa zona amazónica por el sur y el oriente (Mendoza, 1989).

Mapa 9. Transición Reales Audiencias - Virreinatos



Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia.

El virreinato contaba para la época con 15 provincias, siendo estas las de Santafé, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Chocó, Antioquia, Popayán, Neiva, Mariquita, Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare, Panamá Veragua. No obstante, por su enorme extensión pobremente intercomunicado, el control central era más nominal que real y la solidaridad entre Provincias no existía; de acuerdo a Mendoza (1989), "en esa heterogeneidad geográfica se fraguarían los

arquetipos colombianos de pastusos, antioqueños, santandereanos, costeños, llaneros, tolimenses, cundiboyacenses, litoraleños, isleños, caucanos" (p.10).

A partir de 1810 y como consecuencia del proceso de Independencia, las provincias de la Nueva Granada se desintegrarían en varios Estados, reclamando cada una su propia soberanía; estas reivindicaciones soberanas derivarían en la primera guerra civil colombiana, entre centralistas y federalistas, concluyendo con la creación de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. El 17 de diciembre de 1819 se terminaría creando la Gran Colombia, bajo el liderazgo del Libertador Simón Bolívar, la cual comprendía los departamentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito. Con la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, el territorio sería dividido en nuevos departamentos y éstos, a su vez, en provincias, cantones y parroquias. Para 1824, el Congreso de Colombia reorganizó nuevamente la división político administrativa de la República (Mapa No. 10), quedando constituidos 12 departamentos (Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Cauca, Istmo, Orinoco, Venezuela, Apure, Zulia, Ecuador, Azuay, Guayaquil).

En 1830, la Gran Colombia se desmembraría en 3 Estados: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Por ende, la República de la Nueva Granada contrajo su territorio al antiguo departamento de Cundinamarca, el cual a su vez, coincidía con el territorio del antiguo virreinato de la Nueva Granada, todo lo cual significó en términos físicos, volver al *Uti possidetis* de 1810. En consecuencia, el territorio quedó con aproximadamente 2.243.000 km² de extensión, entre Costa Rica, el mar Caribe, Venezuela, Brasil, Ecuador y el Océano Pacífico. No obstante, desde aquel momento y hasta la actualidad, Colombia ha venido perdiendo territorio, a veces por laudos arbitrales, por reivindicaciones independentistas de parte de su territorio, o por los diferentes tratados firmados con países limítrofes, principalmente por desconocimiento,

impericia o improvisación de nuestros delegados y negociadores en los diferentes tratados (Cadena, 2014).

Mapa 10. La Gran Colombia



Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Gran_Colombia_%281824%29.svg

El descalabro territorial del país ha ocurrido en los cuatro puntos cardinales colombianos; un ejemplo es el caso de los Monjes, un archipiélago integrado por tres grupos de rocas o islotes, situados en el mar Caribe a escasas 19 millas de la península Guajira. A partir del descubrimiento del caribe sudamericano, este territorio insular se incorporó a los dominios de la Corona española, y para el efecto de su manejo administrativo, comenzaría aplicarse el principio de que "la tierra domina el mar" o, en términos de hoy, la Teoría de la Contigüidad,

según la cual al Estado continental se le reconocen como suyas aquellas islas adyacentes a su territorio y que estén separadas apenas por un "brazo de mar". Es por ello que a las provincias que componían los virreinatos y capitanías generales en que se dividieron los territorios de ultramar, se les adjudicó alguna isla o formación insular: por ejemplo, la provincia de Riohacha llevaba consigo los islotes de Los Monjes; la provincia de Caracas o Venezuela, las islas de Tortuga, Blanquilla, la Orchila, los Roques y la de Aves; y la provincia de Panamá las de San Blas, Escudo de Veraguas y otras.

Fue con este mismo criterio que la Corona expidió la Real Orden del 20 de noviembre de 1803, mediante la cual dispuso que el territorio continental de la costa de Mosquitos y sus islas adyacentes de San Andrés se segregaran de la capitanía general de Guatemala y se agregaran al Virreinato de Nueva Granada. Como ya se comentó anteriormente, la Corona estableció por primera vez el virreinato de la Nueva Granada el 27 de mayo de 1717, y dispuso que de él hicieran parte todas las provincias de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada y las de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana, Popayán y las de San Francisco de Quito. Si bien el virreinato fue suprimido el 5 de noviembre de 1723, la Corona resuelve revivirlo por razones de manejo administrativo y del contrabando, a través de la real cédula del 20 de agosto de 1739; en esta ocasión se agregaría a la jurisdicción del virreinato las provincias de Chocó, Popayán, Reino de Quito y Guayaquil, Provincias de Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Río del Hacha, Maracaibo, Caracas, Cumaná, Guayana, Isla de Trinidad y Margarita y Río Orinoco, Provincias de Panamá, Portobelo, Veragua y el Darién.

Por lo tanto, el gobierno colombiano celebraba un contrato el 20 de febrero de 1856, con el ciudadano norteamericano John E. Gowen, mediante el cual se le autorizaba explotar el guano en las islas de San Andrés, Providencia

y Los Monjes. Seis días después, los plenipotenciarios venezolanos Carlos Castelli y J.G. Villafañe protestaron por el acto y afirmaron que Los Monjes le pertenecían a Venezuela. El canciller colombiano de la época, Lino de Pombo, manifestaría que no se pronunciaba sobre la propiedad y jurisdicción sobre Los Monjes, aunque por su posición, parecían una natural anexión de la península de la Guajira. Según Gaviria (2000), tan poca importancia fue el incidente para la clase política de Colombia, que ni siquiera aparece en las memorias de Relaciones Exteriores de ese año.

En consecuencia, en los años posteriores y hasta la década de 1950, la posición colombiana frente a la soberanía sobre el archipiélago fue algo más que tímida. El 1 de septiembre de 1952, la Armada Nacional de Colombia realizaba desde el buque de guerra Almirante Padilla, entrenamientos de tiro cerca a Los Monjes; Venezuela reaccionó de inmediato con maniobras aeronavales, orientadas a demostrar la superioridad manifiesta sobre la armada y fuerza aérea colombianas. Sin embargo, la cesión de estos islotes a Venezuela, que vino después, no puede atribuirse a las maniobras de la Armada colombiana, sino a una decisión del gobierno colombiano que ya había sido tomada desde la ocupación de facto de los Monjes por Venezuela (Gaviria, 2000).

En pleno siglo XXI, se asegura que las fronteras colombianas no solo siguen siendo contestadas por otros países vecinos (Mapa No. 11); además, son porosas, inseguras y expuestas a las industrias ilícitas. En efecto, de no adoptarse una posición responsable en el tema de fronteras, Colombia podría seguir perdiendo territorio a favor de terceros; la pérdida de mar territorial ante Nicaragua en 2012 por decisión de la Corte Internacional de Justicia, es una muestra clara de la forma mediocre como los diferentes gobiernos han manejado el tema frente a reclamaciones de vecinos con intereses expansionistas (Cadena, 2014).

Mapa 11. Pérdidas Territoriales de Colombia



Fuente: IGAC/El Espectador

Con relación a las fronteras porosas, siguen existiendo en numerosos Estados sudamericanos una falta de control de la totalidad de sus territorios, en los que el poder central no ejerce, en exclusiva, el monopolio de la violencia legítima, y en los que a menudo el control de la población y la soberanía están contestadas. Como ya se ha argumentado, la frontera sería, desde el punto de vista jurídico, una línea que determina hasta dónde llega la jurisdicción de un Estado, mientras que desde el punto de vista geopolítico, el límite sería una línea que establece hasta dónde llega el control efectivo del Estado. En este orden de ideas, las fronteras y límites en Sudamérica parecieran no coincidir en todos los casos, ya que primero vendría la demarcación territorial, y del territorio incluido dentro de las fronteras acabaría surgiendo el Estado poscolonial. Así, frente a la concepción del Estado europeo que al tiempo que se consolida como unidad va forjando sus límites territoriales, en el caso sudamericano (y colombiano), primero fueron las fronteras, y a partir de ellas comienza el proceso de formación y consolidación estatal.

La frontera ideal sería aquella que presenta las características de mayor estabilidad, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista geopolítico, para que ofrezca las mejores condiciones de seguridad. Por lo tanto, teorías geopolíticas como el "Espacio Vital" de Haushofer y/o el "Rimland" de Spykman describen, en términos generales, "que para el Estado no hay espacio dentro de su concepción territorial que pueda ser desdeñado o minusvalorado en el cálculo para el cumplimiento de sus intereses nacionales" (Gallo, 2015. p. 8).

En este orden de ideas, se analizarán brevemente a continuación dos casos sobre frontera, una al norte de Colombia (en el escenario marítimo), desde una perspectiva colombiana; y otra al sur del país (en el escenario terrestre), desde una perspectiva brasileña.

El primer caso de estudio se relaciona con el impacto en la seguridad clásica y multidimensional del post-conflicto en la frontera con el Brasil; el análisis de este caso ha sido complementado con una serie de teorías y apreciaciones que permiten analizar la seguridad en una frontera, que por su condición geográfica de "frontera muerta" (es decir con muy poca actividad poblacional, económica y comercial), los factores de inseguridad y vulnerabilidad siguen siendo imperantes, salvo que las políticas y estrategias mancomunadas de los dos Estados logren revertir su condición de abandono por la de una de mayor presencia estatal.

El segundo caso de estudio hace referencia al empleo de la Plataforma Continental como argumento para la soberanía nacional sobre los espacios marinos; para ello es necesario partir del concepto y evolución que a lo largo de la historia ha tenido la Plataforma continental, desde la famosa Proclama del Presidente Truman de 1945, pasando por las definiciones y percepciones

de las Convenciones de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental, y la modificación que sufrió el concepto de Plataforma Continental en la Convención de Montego Bay (Jamaica) de 1982.

3. los retos de Seguridad y Defensa en la región fronteriza Colombo Brasileña

En el escenario regional de América del Sur, Brasil es un actor preponderante desde el punto de vista económico, territorial y militar. En efecto, en el ámbito geográfico, Brasil comparte fronteras terrestres con 10 de los 12 países de la región, constituyéndose como el país del hemisferio con el mayor número de fronteras compartidas, planteándole un reto a su seguridad y defensa, por la vulnerabilidad y marginalidad de algunas de ellas.

Colombia comparte con Brasil la segunda frontera terrestre colombiana más extensa, caracterizada por un amplio espacio amazónico y un extenso sistema fluvial que tiene como eje articulador al río Amazonas; dichas características transforman la frontera colombo brasileña en una de alto valor estratégico, debido no solo a los recursos que contiene, sino también a su ubicación e interconectividad natural entre el este y oeste, así como el norte y sur de la región sudamericana.

No obstante, este reconocido entorno medioambiental ha sido utilizado en las últimas décadas por redes criminales transnacionales no solo para explotar clandestinamente los diversos recursos que ofrece la zona, sino también para transportar y comercializar diferentes mercancías ilícitas aprovechando las condiciones de la zona, cuyas particularidades dificultan la labor de las autoridades, facilitan el transporte tanto fluvial como aéreo de dichas mercancías y posibilitan el ocultamiento de las mismas. Aparte del crimen organizado que acapara el comercio de las drogas y el tráfico ilegal de armas y municiones,

existen otras actividades ilegales que han estado presentes en la zona fronteriza y que básicamente están vinculadas a la minería ilegal y al contrabando de maderas finas y de especies silvestres (Tarapues, 2012, p.429).

El reciente acuerdo logrado entre el gobierno colombiano y las FARC, ha generado una situación de incertidumbre en la frontera común de Brasil y Colombia, por razón de los espacios vacíos que allí se encuentran y la porosidad de la frontera que habilita acciones delincuenciales y de violencia por parte de grupos al margen de la ley. Por ende, la salida de las FARC de estas regiones obligaría al Estado colombiano a desarrollar políticas destinadas a incrementar la presencia estatal en favor de los habitantes de estas regiones marginadas. Brasil, de igual forma, no tiene un desarrollo adecuado y coherente en la frontera común en concordancia a las necesidades de la región, lo cual se manifiesta en la ausencia efectiva del Estado y por ende, en la falta de una seguridad fronteriza. Esta condición obligaría a Brasil y Colombia a desarrollar acciones mancomunadas y coordinadas, destinadas a incrementar la presencia de ambos Estados en la región de la frontera común, con miras a mantener su estabilidad y seguridad.

3.1 Capacidades y acciones brasileñas para cuestiones de frontera

El tema de soberanía y frontera siempre fue discutido a lo largo del tiempo por la imprecisión de los límites coloniales. En la América del Sur este asunto cobró gran importancia desde principios del siglo XIX, como objeto de las colonias españolas y las controversias territoriales entre Estados americanos por la indefinición de sus fronteras. En la discusión en cuestiones fronterizas se involucró el concepto de soberanía defendido por los realistas donde, según Bodin (1992), “la soberanía, por lo tanto, no se limita ni el poder, ni la función y ni en el tiempo” (p.5).

En su Estrategia Nacional de Defensa (END), Brasil (2012) sostiene que la "seguridad de un país se ve afectada por el grado de estabilidad en la región que se inserta" (p.22). Por lo tanto, es deseable que se produzca una convergencia de acciones entre países vecinos, que permita reducir los crímenes transnacionales y lograr mejores condiciones para el desarrollo económico y social en la región, ya que la existencia de zonas de inestabilidad alimentan los crímenes transnacionales que desbordan las fronteras de los países de la América del Sur. La persistencia de estas incertidumbres es también un elemento que justifica la prioridad a la protección del Estado, con el fin de preservar el interés nacional, la soberanía y la independencia. Teniendo en cuenta su END (2012), Brasil plantea que la región amazónica es la prioridad estratégica número uno; en consecuencia, por medio de sus Fuerzas Militares, Brasil viene implementando estrategias y acciones para hacer frente a este escenario (Brasil, 2012a).

En efecto, el tema crece de importancia cuando extensos espacios vacíos se ubican a lo largo de las fronteras, impactando las relaciones y trayendo nuevas reflexiones a respecto de la Seguridad y Defensa, y también de la soberanía. La principal agenda entre los dos países son las cuestiones de los delitos transnacionales, como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilícito de armas de fuego-municiones-explosivos y la explotación minera ilegal; los aumentos de estas actividades criminales en la frontera son indicadores de su carácter multidimensional.

Los aumentos de algunos indicadores de violencia en Brasil tienen directa relación con la permeabilidad de la frontera. Las autoridades del país destacan, principalmente, las cuestiones relacionadas al narcotráfico, al tráfico de armas de fuego-municiones-explosivos y al contrabando, también relacionadas como factores de inestabilidad del post-acuerdo en Colombia. A lo largo de la historia, la frontera entre los dos países sufrió el impacto de conflicto, como en el caso del ataque de las FARC en la región del Traíra contra una patrulla del Ejército

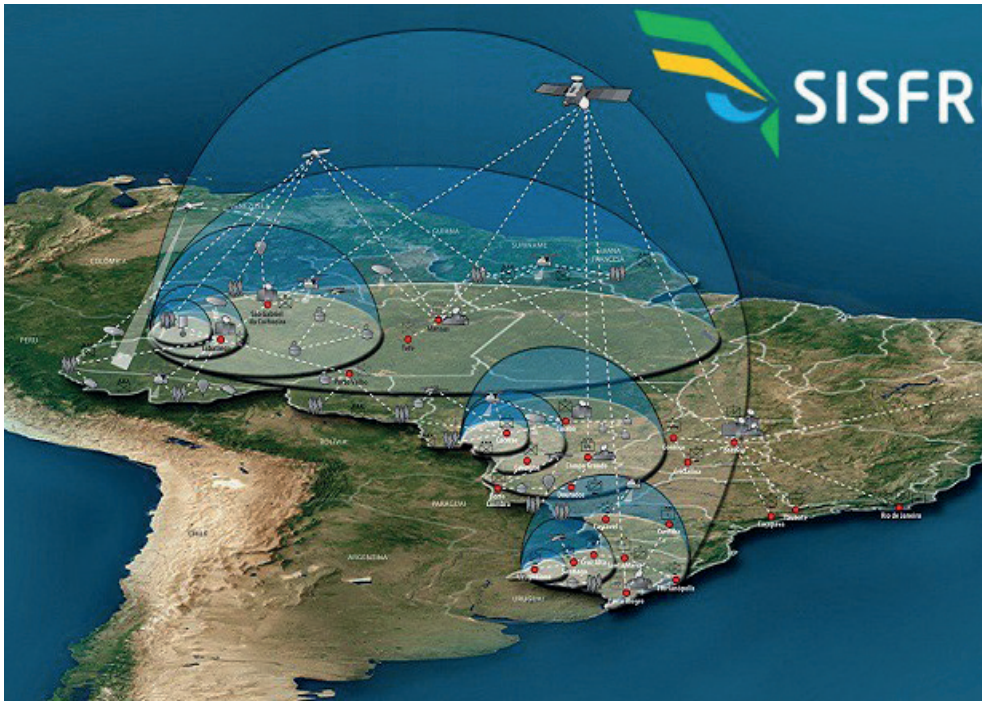
brasilero; así como el tráfico de armas entre las FARC y el traficante brasileño Fernandino Beira Mar, y más recientemente, con la asociación de delincuentes brasileros con Bandas Criminales de Colombia.

Por lo tanto, Brasil viene implementando en el Ejército siete proyectos estructurales, entre los cuales se destacan para la región fronteriza colombo-brasileña: (1) Proyecto Ampliación de la Capacidad Operativa, con énfasis para el Sub proyecto de Implantación y adecuación de Organizaciones Militares en la Amazonia y (2) Proyecto SISFRON, que es un sistema que permite el monitoreo de toda la frontera occidental del país (Brasil, 2012 b). Con relación al primer proyecto, la principal estrategia es "vivificar" la frontera con el aumento de organizaciones militares a lo largo de la línea fronteriza, en especial con la creación de nuevos pelotones especiales de frontera; esto permitiría disminuir la ausencia del Estado en algunos espacios vacíos, y aumentar el control de la permeabilidad fronteriza. Frente al SISFRON (Mapa No. 12), Werdan (2016) establece que:

> El sistema prevé múltiples plataformas tecnológicas: radares de vigilancia terrestre, sistema de vigilancia por imágenes, sistemas aéreos no piloteados, interconexión con redes de satélites, sistema de comunicaciones, centros de control y patrullas terrestres. Además de contribuir para la soberanía, posee otras posibilidades de empleo, y puede contribuir en el control y el combate a todo un espectro de crímenes transfronterizos y a una amplia gama de amenazas" (p.45).

El sistema fue implementando con éxito en la frontera de Brasil con Paraguay y Bolivia, razón por la cual se decidió ampliarla para la región amazónica.

Mapa 12. SISFRON



Fuente: http://www.epex.eb.mil.br/images/imagens_menu/imagem_conteudos/sisfron.jpg

Otra capacidad de las Fuerzas Militares de Brasil para cuestiones de frontera, sería la capacidad de actuar en labores policivas en la franja de frontera, hasta 150 km. entre la frontera y el interior del país[83]. De acuerdo con la ley Complementaria No. 97 del 9 de junio de 1999, alterada por la Ley Complementaria No. 117 del 2 de septiembre de 2004:

> Es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, además de otras acciones pertinentes, también como atribuciones subsidiarias, preservadas las competencias exclusivas de las policías judiciales, actuar, por medio de acciones preventivas y represivas, en la franja de frontera

83. Al contrario de la estructura organizativa las Fuerza Pública en Colombia, en el que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están bajo el control del Ministerio de Defensa, en Brasil, la Policía está bajo el mando del Ministerio de la Justicia, lo que fundamenta la ley para actuación como Policía en Franja de la Frontera.

> terrestre, en el mar y en las aguas interiores, independientemente de la posesión, de la propiedad, de la finalidad o de cualquier gravamen que sobre ella recaiga, contra delitos transfronterizos y ambientales, aisladamente o en coordinación con otros órganos del Poder Ejecutivo, ejecutando, entre otras, las acciones de: patrullaje; requisa de personas, de vehículos terrestres, de embarcaciones y de aeronaves; y delincuentes en flagrante delito. (Brasil, 1999).

Adicionalmente, la Fuerza Aérea de Brasil en pos de garantizar la seguridad del espacio aéreo brasileño, tiene el respaldo legal para derribar aeronaves hostiles o sospechosos de tráfico de sustancias estupefacientes; en 1998, la Ley No. 9614 incluyó el párrafo tercero al artículo 303 del Código Brasileño de Aeronáutica, para indicar que las aeronaves de actividad criminal pueden ser derribadas. Pero en 2004, sólo un decreto presidencial definió el protocolo a seguir hasta la eventual caída de una aeronave; el Decreto presidencial No. 5144 del 2004, delegó al Comandante de la Fuerza Aérea, la competencia para autorizar la aplicación del tiro de destrucción de aeronave (Brasil, 2004).

3.1. Operación Traíra

A lo largo de la historia, algunos casos fueron significativos al colocar en evidencia los conceptos de soberanía, seguridad y defensa en las regiones fronterizas de Brasil y Colombia, tales como la Operación Traíra en la frontera con Colombia en 1991. En la mitad del siglo XX, la región amazónica comenzó a destacarse en el escenario internacional; las crisis por recursos energéticos evidenciaron los potenciales recursos de la selva amazónica. Por ende, los intereses de las grandes potencias mundiales llevarían a que los países amazónicos tomasen la iniciativa de crear, por medio del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), un bloque regional para traer mejores condiciones de desarrollo a la región. Así, en 1978, Brasil, Bolivia, Colombia,

Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela crearían el bloque dando un primer paso para la integración (Brasil, 2017b).

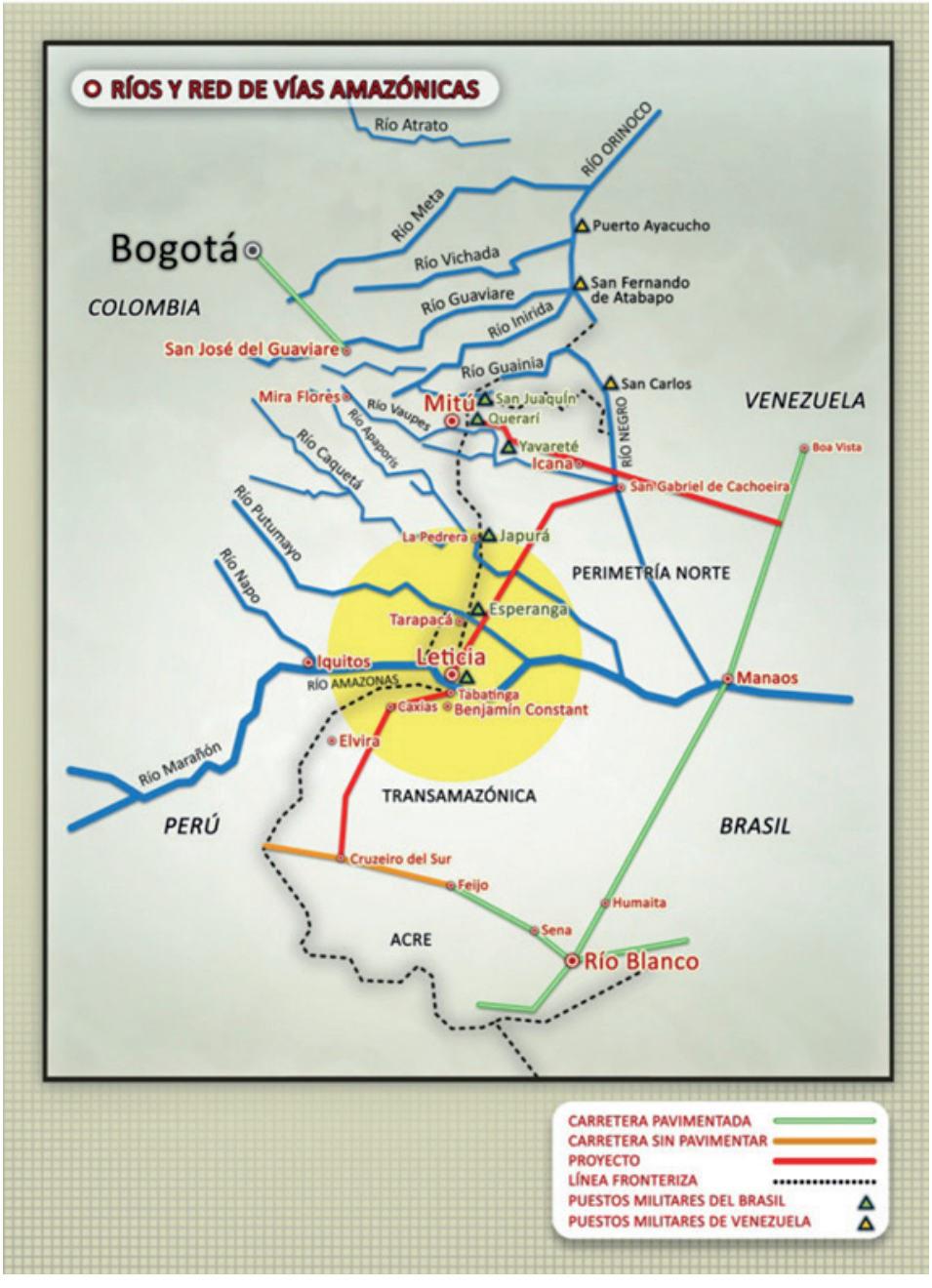
En ese contexto, aumentaron las preocupaciones por el vacío demográfico en las fronteras poco pobladas, afectadas a la vez por las influencias socialistas en Guyana y Suriname, y las actividades ilícitas de tráfico de drogas y contrabando, que llevaría al Brasil a crear el Programa Calha Norte (PCN), que era un intento de la política expansiva más allá del TCA (Miyamoto, 2002). Esta política condujo a que las Fuerzas Armadas de Brasil establecieran un cambio en sus prioridades de ubicación en sus dispositivos militares. En el siglo pasado, Brasil reforzó el sur del país en razón a la importancia que revestía el Río de la Plata, redireccionando luego su dispositivo hacia el norte. De esta forma, algunas estructuras militares fueron desplazadas hacia la Amazonía, mientras que otras fueron creadas. Según Miyamoto (2002) "proteger la Amazonía significaba reforzar las fronteras con cinco países, a lo largo de más de 6.500 km, con el objetivo de mostrar la disposición de que el gobierno tiene que estar presente en esta área sensible" (p.9). Como resultado, se crearon seis ejes preferenciales de actuación y entre los cuatro prioritarios, figuraba el tramo del alto Amazonas y del alto Traíra, frontera occidental de Brasil con Colombia.

Sin embargo, la instalación del destacamento Traíra fue una decisión del Comando Militar del Amazonas, autorizada por el Ministro del Ejército y el Comandante de la Fuerza de la Tierra, para hacer frente a la situación desenfrenada en la Sierra de la región Traíra, departamento del Amazonas, generada por la presencia de un gran número de mineros ilegales brasileños *(garimperiros)* y colombianos, que no cambiaron de ubicación después del cierre de las instalaciones de la compañía minera Paranapanema, porque tenían el permiso de exploración minera de oro emitidos por el Gobierno Federal. El destacamento se quedó al mando del 1º Comando de Frontera Solimones /1º

Batallón Especial de Frontera, con sede en Tabatinga (Álvaro, 2005). Al mismo tiempo, las FARC se encontraban en un proceso de expansión en la zona del río Traíra (Mapa No.13).

De acuerdo con Álvaro (2005), el 26 de febrero de 1991, alrededor de 40 elementos de las FARC lanzaron un ataque contra un destacamento del Ejército Brasileño, resultando en la pérdida de vida de tres soldados brasileños, así como nueve heridos. Los guerrilleros se apropiaron de equipos de radio, municiones, uniformes y todo el armamento del destacamento. Con ese ataque, las FARC caracterizaban una verdadera ruptura al concepto de la soberanía brasileña, trayendo la cuestión para el nivel político-militar en consecuencia; la capacidad de respuesta de los gobiernos de Brasil y Colombia y sus relaciones diplomáticas serían puestos a prueba. En este sentido, Cortés (2006) presenta el concepto de "frontera metafísica", como aquella línea de confrontación entre los intereses de dos (o más) Estados, y que las vulnerabilidades en ese concepto debe ser identificada para que se adopten medidas pertinentes, evitando violaciones territoriales como ocurrió en el caso del río Traíra (2006).

Mapa 13. Vías Amazónicas



Fuente: Bahamón, 2012

El Presidente de Brasil Fernando Collor de Mello, con el conocimiento del Presidente colombiano, Cesar Gaviria Trujillo, organizó una acción de búsqueda y rescate de los materiales aprehendidos por la guerrilla. Esa acción fue denominada Operación Traíra, una operación conjunta entre los ejércitos de Brasil y de Colombia, actuando cada uno de su lado de la frontera (Nobre, 2013). De acuerdo con Álvaro (2005).

> La operación Traíra fue exitosa por haberse recuperado los materiales que estaban de poder de las FARC y al dar de baja a algunos de sus miembros, pero los resultados más significativos en términos de capacidad de seguridad y defensa, en los niveles políticos y militares se tradujeron en: acuerdos en los niveles políticos para desarrollo regional; intercambio militar de inteligencia; empleo de capacidades como fuerzas especiales y empleo de helicópteros; concentración estratégica con empleo de la Fuerza Aérea Brasileña; y empleo de la Armada Brasileña en apoyo fluvial (p.35).

Las principales enseñanzas de la operación fueron la acción oportuna de respuesta de los Estados frente a una violación de la soberanía, en este caso la brasileña, y desarrollar acciones más efectivas a fin de capacitar aún más a las Fuerzas Armadas para dar respuesta oportuna e incrementar políticas para disminuir la ausencia de los Estados en los territorios fronterizos afectados por la ausencia estatal. Este episodio tiene un carácter significativo, pues fue uno de los grandes motivadores hacia los cambios de la política brasileña en términos de seguridad y defensa para la región amazónica.

3.3 Seguridad multidimensional en la frontera Brasil-Colombia

En la ampliación del concepto de seguridad, la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso en la "Declaración sobre Seguridad en las Américas", que la nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio era de alcance multidimensional, incluyendo las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas. De acuerdo con la OEA (2003):

> La seguridad de los Estados se ve afectada por: el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados.

Brasil y Colombia sufren la amenaza a la región fronteriza por las vulnerabilidades anteriormente descritas, con énfasis para el narcotráfico, contrabando, explotación minera y tráfico ilícito de armas de fuego-municiones-explosivos. Además, las condiciones económicas y sociales en la región son críticas, lo que aumenta los retos que deben asumir los dos gobiernos. En el campo económico, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia establece metas de inversiones en diversos proyectos sociales, teniendo como uno de los principales centros de acción la infraestructura, lo que permitirá la integración de las regiones fronterizas con las regiones más desarrolladas del país. (Colombia, 2017 c). Por otra parte, este escenario se complementa con el hecho de que Brasil vive uno de los peores momentos económicos de su historia. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el PIB brasileño ha caído de forma significativa en los años de 2015 y 2016, cerca de

4% al año, confirmando una de las más grandes recesiones sufridas por ese país en los últimos años, limitando las acciones del Estado en la frontera, una región que lucha por desarrollarse de forma integrada al resto del país (IBGE, 2017).

En el campo militar, los acuerdos de cooperación entre Brasil y Colombia ya están firmados e implementaos en diversas áreas. Pero aún las Fuerzas Militares de los dos países requieren desarrollar mayores capacidades para enfrentar los desafíos, especialmente en el campo del derecho y la justicia con miras a neutralizar los nocivos efectos que produce la guerra jurídica contra miembros de la Fuerza Pública, que resultan en muchas ocasiones involucrados en delitos que no han cometido en desarrollo de sus actividades profesionales. Además, de acuerdo con el objetivo estratégico número 01 del Plan Estratégico Militar 2030 (PEM 2030), las Fuerzas Militares de Colombia deben contar con una autonomía estratégica y capacidad disuasiva creíble y sostenible para actuar de forma efectiva y simultánea en más de un escenario que justifique la investigación en el contexto fronterizo con Brasil (Colombia, 2017 b).

Teniendo en cuenta los retos de gobernabilidad frente al posacuerdo, el gobierno establece la "acción unificada" de todos los sectores del Estado para lograr éxito en el acuerdo de paz. Así, en el campo militar, se establece el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación "Victoria", que define la participación de las Fuerzas Militares en la acción unificada del Estado, teniendo como Estado Final Deseado (EFD) la paz estable y duradera (Colombia, 2017c). De acuerdo con el MFE 3-07 Estabilidad, acción unificada:

> Es la sincronización, coordinación e integración de actividades de entidades, gubernamentales y no gubernamentales, con las operaciones militares para lograr una unidad de esfuerzo (MFE 3-0). Dicha unidad de esfuerzo se define como la coordinación

> y cooperación hacia objetivos comunes, incluso cuando los participantes no se encuentran bajo el mismo mando o no formen parte de la misma organización (2016, p.5).

En este escenario del post-acuerdo, crece en importancia el concepto de amenaza híbrida planteado por Frank Hoffman: "cualquier adversario que de manera simultánea y adaptativa emplea una mezcla de armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y comportamiento criminal en el espacio de batalla para alcanzar sus objetivos políticos" (IEEE, 2014). Este concepto es importante porque está alineado con el escenario que vive Colombia en el post-acuerdo: Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo (VICA). Este escenario encuentra soporte por la acción de diversos actores criminales (ELN y Grupos Armados Organizados-Sistema de Amenazas Persistentes), diversos modos de actuación (sistemas en red y transnacionalidad), diversidad de medios (economías ilícitas y corrupción), diversidad de fines (debilidad del Estado y crisis de gobernabilidad), diversos fenómenos (impactos ambientales y migraciones) y el contexto nacional-internacional (nuevos actores y globalización).

En completa sintonía con el PEM 2030, el Plan Victoria define la misión de las Fuerzas Militares en tres ejes: recuperación y control del territorio, estabilización y consolidación. En el primer eje está el gran desafío de este Plan: ¿cómo ocurrirá el control del territorio en la región fronteriza Brasil-Colombia? De las fronteras que Colombia tiene con otros países, la frontera con Brasil puede ser considerada la más tranquila y la más distante de regiones que fueron dominadas por las FARC; estas consideraciones implican que la frontera con Brasil no es un área prioritaria de los esfuerzos del gobierno. Los dos últimos ejes son caracterizados por acciones más coordinadas con otros órganos estatales (Colombia, 2017c).

Lo más importante para la región fronteriza entre Colombia y Brasil es la forma como el Plan Victoria pretende tratar los factores de inestabilidad que son inherentes a la región: el tráfico de armas-municiones-explosivos, el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y los secuestros/extorsión. Estos factores de inestabilidad se encuadran en las amenazas de la seguridad multidimensional planteadas por la OEA y que hacen parte de la agenda de Seguridad y Defensa de los dos países.

Por ende, se puede concluir de forma parcial que la paz, por medio de los acuerdos, es el objetivo de la sociedad colombiana; los esfuerzos hechos con las FARC son un gran paso rumbo a eso objetivo. Sin embargo, los próximos pasos son fundamentales para el mantenimiento del acuerdo, sin desconocer las amenasas que aún plantean otros grupos insurgentes con presencia en la frontera. La acción unificada del Estado colombiano cuenta con la participación decisiva de las Fuerzas Militares en el control del territorio, lo que exigirá capacidades nuevas frente a las estrategias establecidas en los planes, en especial en las fronteras.

El avance de la sociedad y sus nuevas necesidades son una realidad que coloca a otros actores en el balance de las relaciones entre los Estados, lo que impacta los conceptos de soberanía, seguridad, defensa y frontera. Ese avance de la sociedad demandó una ampliación de los conceptos de seguridad que fue presentado con algunas características dentro del concepto de la Seguridad Multidimensional en la frontera colombo-brasileña en el escenario del post-acuerdo de paz con las FARC.

En resumen, los retos que se presentan son variados. Los Estados deben priorizar diversas medidas en varios sectores, entre ellos los sectores políticos, económicos, sociales, ambientales y, de especial manera, el sector militar,

para que de esa forma sean creadas condiciones para desarrollo de la región fronteriza que permitan disminuir la incertidumbre en la segurida y la defensa de Brasil y Colombia.

4. Empleo de la Plataforma Continental como argumento para la soberanía nacional sobre los espacios marítimos.

La promulgación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, dio paso a la creación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (CIJ, 2017), el cual se ha constituido como un instrumento para la solución pacífica de diferendos entre los Estados. Más aún, con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR 1982), se define el límite de las zonas marítimas y se establecen mecanismos para la solución de controversias en dicho contexto. Entre los mecanismos para la solución de controversias, se encuentra la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, amparado en el artículo 76 de la CONVEMAR, que permite examinar a través de un panel de expertos en Geofísica, Geología e Hidrografía, los datos y otros elementos de información presentados por los Estados ribereños, respecto de los límites exteriores de la plataforma continental, cuando ésta se extiende más allá de 200 millas marinas (CONVEMAR, 1982).

De esta forma, tanto los fallos proferidos por la CIJ, como los resultados del análisis realizado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, se encuentran basados en argumentos técnico-científicos, tanto para la delimitación de la plataforma continental, como para la proyección del territorio continental. La motivación del presente caso de estudio, surge de la capitalización de lecciones aprendidas a raíz de los recientes pronunciamientos de la CIJ con respecto al diferendo colombo nicaragüense, el cual ha planteado una alteración del equilibrio y estabilidad de las fronteras de Colombia en el

Caribe, afectando la soberanía colombiana sobre amplios espacios marítimos, que tradicionalmente fueron considerados bajo tutela nacional.

Estos potenciales escenarios de incertidumbre geopolítica obligan a que tanto la academia como las Fuerzas Militares y demás entes del Estado, fortalezcan sus procesos de generación de conocimiento, con el fin de contribuir a la función constitucional de defensa de la integridad territorial, a través de un uso eficiente de los recursos del Estado. La proyección del estudio consiste en determinar los aspectos de la Plataforma Continental que constituyen argumentos para la defensa de la soberanía sobre los espacios marítimos.

4.1 La Plataforma Continental

La plataforma continental es la prolongación natural de los continentes y territorios insulares bajo el mar, la cual se extiende hasta el borde exterior del margen continental, donde se produce la transición al océano profundo, a través del talud continental. Por medio del conocimiento de las condiciones geomorfológicas de la Plataforma continental, es posible establecer con claridad la solución a diferendos sobre fronteras marítimas; así como extender los límites del territorio cuando la plataforma tiene una anchura superior al establecido en el derecho internacional. Generar este conocimiento, requiere adelantar estudios técnicos y científicos, para la obtención de información de calidad sobre el suelo y subsuelo marino, a través de la columna de agua. Esto es posible mediante el empleo de equipo y personal especializado en áreas de la Hidrografía, Geología y Geofísica, entre otros.

El concepto actual de Plataforma Continental, proviene de un proceso evolutivo del Derecho del Mar, donde se han abarcado diferentes conceptos y posturas, en función de los intereses de los Estados en la exploración y

explotación de los recursos marinos. De esta forma, autores como Francisco de Vitoria y Hugo Grocio (siglo XVII), defendían la libertad de los mares *(Mare Liberum)*, en contraposición a pretensiones como las portuguesas y españolas fijadas en el Tratado de Tordesillas en1494.

Según Carreras (2002), la definición de los espacios que constituyen el Derecho del Mar, presenta dos períodos claramente identificables. El primero desde el siglo XVI hasta 1945, desde donde se produce un lento desarrollo, principalmente sobre los temas libertad de los mares y soberanía sobre una franja costera; el segundo período, iniciaría con la Proclama Truman en 1945, con relación a la política de los Estados Unidos respecto de los recursos naturales del subsuelo y el lecho marino de la Plataforma Continental (Truman, 1945). El segundo período, que se extiende desde 1945 hasta la actualidad, "se caracteriza por un acentuado desarrollo normativo y la diferenciación de nuevos espacios marítimos de superficie y la incorporación de otros como la plataforma submarina y el suelo y subsuelo de altamar" (Carreras, 2002, p.23).

La proclama efectuada por el Presidente Truman, constituiría el primer antecedente sobre la definición de la Plataforma Continental como espacio marítimo dentro del derecho del mar, sobre el cual se generan intereses particulares de explotación de los recursos energéticos allí contenidos. El Presidente Truman manifestaría que tanto el lecho como el subsuelo marino de la plataforma continental contigua a las costas de Estados Unidos, le pertenecen y se encuentran bajo su jurisdicción y control. En consecuencia, la declaración expuesta por Estados Unidos desencadenaría en América Latina una serie de formulaciones similares entre 1945 y 1950, para México, Chile, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Honduras y El Salvador (Carreras, 2002). Con estos antecedentes, se empezó a consolidar una definición formal de la plataforma, llegando a un consenso regional en la "Conferencia

Especializada Interamericana sobre Preservación de los Recursos Naturales: Plataforma Submarina y Agua de Mar", donde se fijó la plataforma hasta donde se alcanzara la profundidad de 200 metros, más allá del mar territorial (OEA, 1956).

La definición de los espacios marítimos que se conocen en la actualidad, obtuvieron un alto grado de desarrollo en la Conferencia del Mar, especialmente en la primera y tercera conferencia, convocadas por las Naciones Unidas. La primera conferencia (Ginebra, 1958), estuvo conformada por cuatro convenciones, de las cuales la tercera convención trataría específicamente sobre Plataforma Continental, entrando en vigor en junio de 1964. Por ello, la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es y ha sido en la historia, la más numerosa en cuanto a la participación de los Estados y la de más larga elaboración, ya que en la construcción del texto participarían delegados y expertos de más de 150 países, durante aproximadamente nueve años.

Sin embargo, los delegados de estos países no partieron de cero; utilizaron como base de su trabajo la labor que adelantó el Comité de Fondos Marinos y Oceánicos de las Naciones Unidas entre 1967 a 1973, así como los textos de las Cuatro Convenciones de Ginebra sobre Derecho del Mar de 1958 (Ruiz, 2002). Fue negociado por la vía del consenso de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y por ello no permite la reserva sobre ninguno de sus artículos. Por ende, después de 11 períodos de sesiones, la Tercera Convención del Mar denominada "CONVEMAR", tendría una gran acogida mundial con la firma de 119 Estados, constituyendo un hito importante en la historia del derecho internacional. Por lo tanto, para el desarrollo del presente caso de estudio, se empleará la definición de Plataforma Continental, conforme se describe en la Parte VI de la CONVEMAR, en los Artículos 76 a 85, estableciendo que:

> La Plataforma Continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. (CONVEMAR, 1982).

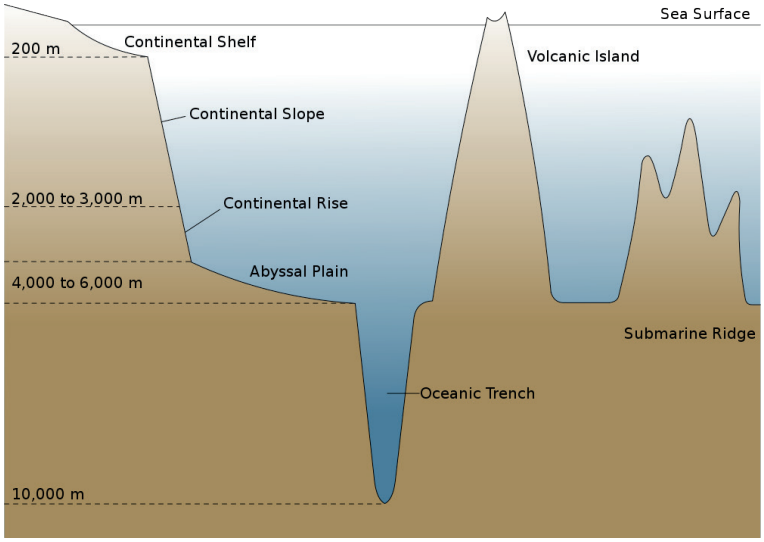
Además de ésta definición jurídica de la plataforma continental, la CONVEMAR contemplaría otros aspectos técnicos, donde en condiciones especiales de prolongación natural más allá de las 200 millas marinas, los Estados podrían solicitar su extensión hasta un máximo de 350 millas marinas. Ante esta condición, los estudios técnicos y científicos se tornarían relevantes, bien para la delimitación de la plataforma con Estados adyacentes, o para la justificación de la extensión de la Plataforma Continental, cuando ésta se extienda más allá de las 200 millas marinas, según se establece en el artículo 76 de la CONVEMAR. En este contexto, la CONVEMAR reconocería la conveniencia de establecer un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos (CONVEMAR, 1982).

Por su parte, la Plataforma Continental estaría conformada por criterios geológicos y elementos morfológicos que representan una gran importancia para la soberanía de los Estados, a partir de los cuales se podrían construir argumentos técnicos y científicos, que soporten la definición de nuevos límites

del territorio cuando éste se extiende más allá de las 200 millas marinas; o cuando contiene formaciones geológicas que resaltan el interés nacional.

Dentro de las definiciones contenidas en el Artículo 76 de la CONVEMAR, se identificarían algunos conceptos de criterio geológico para la determinación de la Plataforma Continental, como son: margen continental, talud continental, pie del talud, suelo, subsuelo, e isobata de 2.500 metros. En términos técnicos, el margen continental correspondería a la extensión sumergida del continente, conteniendo dentro de ella a la plataforma continental (continental shelf), el talud continental (continental slope), y a la elevación continental (continental rise). Se observa entonces que la definición jurídica difiere de la concepción geológica, en su conformación y extensión. El Mapa No. 14 ilustra el margen continental, el cual según la definición jurídica debería prolongarse hasta un punto que se ubica entre el talud y la elevación continental, denominado pie del talud, como se expone en el numeral 1 del Artículo 76 de la CONVEMAR.

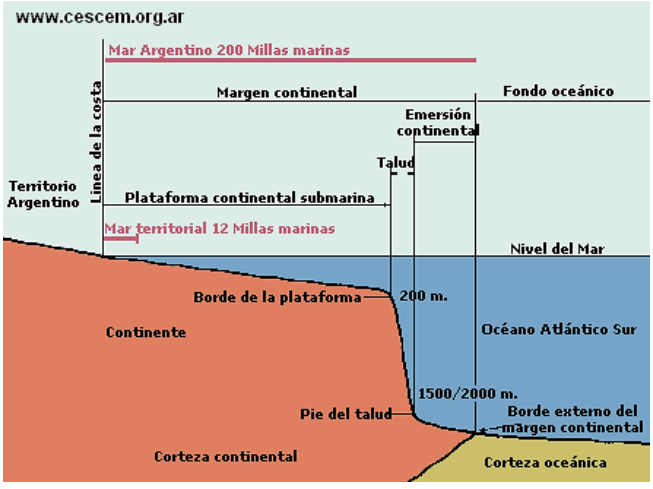
Mapa 14. Margen Continental



Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1812130

El talud, que separa la plataforma (geológica) de la planicie abisal *(abyssal plain)*, es en ocasiones una pared inclinada cuyo inicio y final es fácil de determinar, dado que el cambio en el ángulo de inclinación del suelo es muy marcado; en otros casos el cambio en la pendiente es progresivo y difuso. En la CONVEMAR no existiría el concepto de elevación continental; por ello el límite del margen continental corresponde al pie del talud. Para efectos jurídicos, la línea que demarca el límite del margen continental correspondería a una serie de puntos, donde se ha establecido el pie del talud, pese a las dificultades geológicas que presente su determinación. Por ésta razón, los estudios de plataforma continental estarían sujetos al análisis e interpretación geomorfológico que adelanten los Estados, a fin de establecer con precisión el límite de la misma. El Mapa No. 15 permite observar cómo en el caso argentino de extensión de Plataforma Continental, se prolonga el margen continental hasta un punto más allá del pie del talud, con base en el literal ii del párrafo 4 del Artículo 76 de la CONVEMAR. El punto determinado se ubicaría geológicamente sobre la elevación continental.

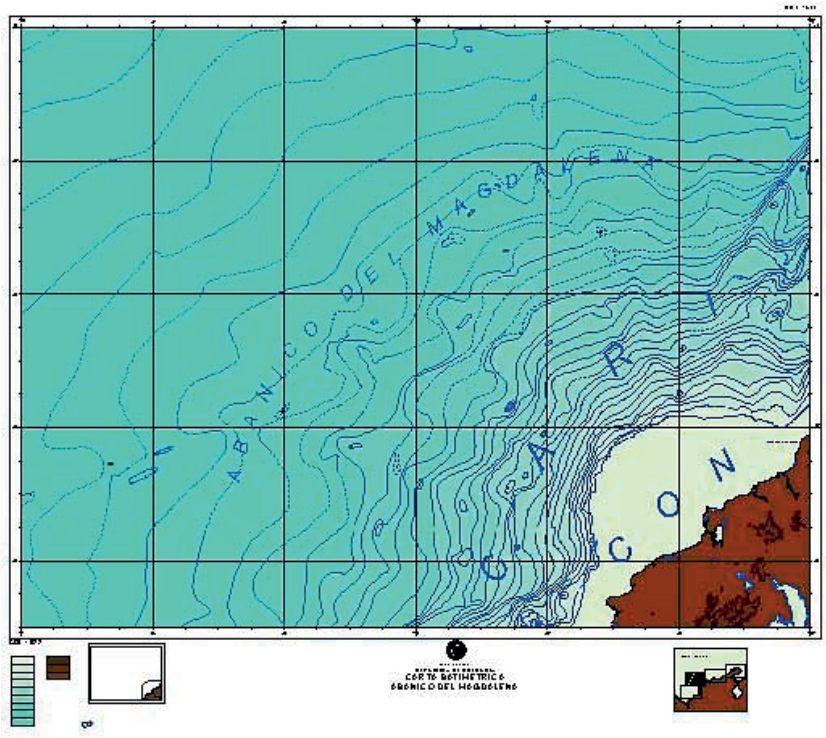
Mapa 15. Descripción Límite Borde Exterior del Margen Continental en el Caso Argentino.



Fuente: www.cescem.org.ar

En cuanto a los elementos morfológicos, existe una gran variedad de geoformas submarinas que de forma análoga a los accidentes geográficos sobre la corteza terrestre, revestirían gran importancia para la soberanía de un Estado y la identidad de sus pobladores. Según el listado normalizado de geoformas que establece la publicación B-6 de la Organización Hidrográfica Internacional "Normalización de las Formas de Relieve Submarino", se puede identificar entre otros: falda, banco, cuenca, caldera, cañón, abismo, escarpe, abanico, brecha, guyot, colina, hoya, loma, albardón, foso, montículo, volcán de lodo, pico, pináculo, meseta, provincia, arrecife, dorsal, rift, emersión, silla, canal submarino, cadena de montes submarinos, bajo, umbral, espolón, terraza, fosa, surco y valle (Organización Hidrográfica Internacional, 2013).

Mapa 16. Abanico del Magdalena, Carta Batimétrica CIOH 1623



Fuente: Col 1623 Carta Batimétrica Talud Caribaná, Datum wgs-84, Edición 1ra., Jul./1999, Escala 1:250.000

Un ejemplo del aporte de estas formaciones geológicas a la soberanía nacional, está dado por el abanico del Magdalena (Mapa No. 10), que contiene los cañones Magdalena y Aguja, y algunas de las geoformas enunciadas anteriormente. Estas formaciones no solo corresponden a una extensión del continente, sino que a través de los cañones submarinos se aporta constantemente sedimento hacia el fondo marino, que conlleva a que el pie de talud no sea estático, y el abanico vaya creciendo con el tiempo. Podría considerarse en este caso, la existencia de un talud activo de importante consideración al momento de determinar los límites del margen continental. Por ende, empleando las consideraciones estipuladas en el artículo 76 de la CONVEMAR, el abanico del Magdalena permitiría proveer argumentos técnicos que soporten la superficie sumergida que hace parte del margen continental. Las geoformas mencionadas anteriormente, contienen también una gran cantidad de recursos minerales en el suelo y subsuelo, que revisten gran importancia dentro de los intereses marítimos de los Estados.

4.2 Recursos contenidos en la Plataforma Continental

4.2.1 Origen de los recursos

La gran cantidad de recursos contenidos en la Plataforma Continental provendría del hecho que esta región fue alguna vez territorio emergido, debido a los cambios considerables que ha sufrido el nivel del mar en la evolución geológica de la tierra. Las actuales plataformas continentales fueron formadas en el pleistoceno, cuando el nivel del mar se encontraba entre 90 a 150 metros más bajo que en la actualidad; por lo tanto, dichas áreas correspondían entonces a las zonas costeras, formando así yacimientos de fosforita, glauconita, carbón, petróleo y sus derivados (ILCE, 2017). En consideración a que los yacimientos de hidrocarburos y de minerales sobre el territorio continental han sido explorados y explotados sistemáticamente en la historia reciente, es de suponer que se haya presentado una disminución importante de los recursos.

Los océanos por su parte, aun cuando contienen casi todos los minerales conocidos, han presentado menor explotación debido a la tecnología necesaria para ser localizados, identificados y alcanzados en altas profundidades. En consecuencia, el gran interés suscitado en ésta zona desde la proclama Truman de 1945, radicaría entonces en el potencial de existencia de hidrocarburos y otros recursos minerales, que pueden generar un alto interés para el desarrollo económico de los Estados y el cubrimiento de necesidades energéticas.

Entre los principales recursos marítimos que han sido explotados se encuentra el petróleo y el gas, cuyos yacimientos se ubican entre cientos a miles de metros por debajo de las capas de sedimento del fondo marino, con características similares a los presentes en la zona continental. Mencionados depósitos han sido explotados principalmente por los Estados Unidos, México, Venezuela, Gran Bretaña, Rusia, y algunos países árabes, en pozos a distancias de hasta 100 kilómetros de sus costas (ILCE, 2017). Conforme avanza la tecnología, el interés por la exploración de petróleo y gas costa afuera (industria *offshore*) cobra mayor relevancia, cada vez alejándose más del margen continental.

Por su parte, la minería en el fondo marino es un proceso de extracción mineral relativamente nuevo. Los yacimientos de minería oceánica se suelen hacer en torno a grandes áreas de fuentes hidrotermales activas o extintas, a unos 1.400 a 3.700 metros bajo la superficie oceánica. Las fuentes hidrotermales crean depósitos de sulfuros que contienen metales preciosos como plata, oro, cobre, manganeso, cobalto y zinc. Los depósitos son extraídos utilizando bombas hidráulicas o sistemas de cubeta que llevan el mineral a la superficie para ser procesado (Halfar & Fujita, 2007).

Los nódulos (o acumulaciones de minerales), miden desde unos cuantos milímetros hasta 30 centímetros de diámetro, con un tamaño promedio de tres

centímetros. Sin embargo, se ha determinado que existen algunos nódulos de mayor tamaño, como el que se obtuvo al este de Filipinas en 1958, y el cual pesó 850 kilogramos. Se ha estimado que la cobertura de estos nódulos en el océano cubre una superficie aproximada de unos 40 millones de km², es decir, un 10% de los fondos oceánicos (ILCE, 2017). Los nódulos están compuestos principalmente de manganeso (metal indispensable en la producción de acero), así como de hierro, níquel, cobre y cobalto (en capas concéntricas). Los depósitos más ricos podrían producir hasta un 45% de manganeso; adicionalmente, sus capas se distribuyen de tal modo que les dan una consistencia porosa y ligera (Halfar & Fujita, 2007). La principal dificultad para aprovechamiento de este tipo de minerales, es que la profundidad en que se encuentran, representa un sinnúmero de problemas para su explotación. La extracción costeable depende del diseño de técnicas eficientes de recolección y transporte a tierra (ILCE, 2017).

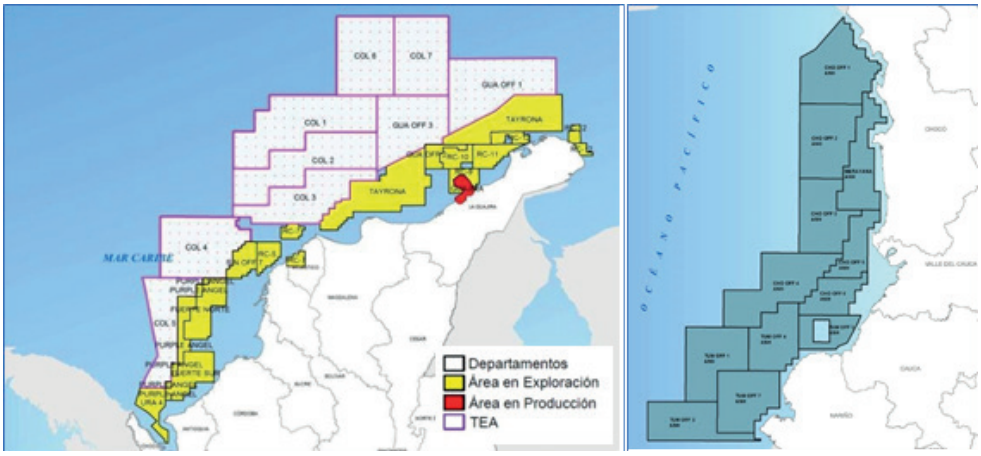
4.2.2 Recursos en la Plataforma Continental colombiana

El sector hidrocarburos representa una importante participación dentro de la economía colombiana, con un incremento progresivo en sus aportes al Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de este campo, la industria *offshore* ha crecido en relevancia, dado que el espacio marítimo colombiano ofrece posibilidades concretas para la explotación de petróleo y gas, debido a la necesidad de expandir las reservas de hidrocarburos. Muestra de este crecimiento, es que la actividad sísmica offshore, herramienta para la exploración de hidrocarburos, pasó de 4.000 km en 2011, a 26.000 km en 2015, lo cual indica un crecimiento del 550% (PNOEC, 2017).

Gracias a la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2003, quien asume la función de administración y regulación del recurso

hidrocarburífero de la nación, la inversión extranjera directa se incrementó ostensiblemente, conllevando a la participación de empresas privadas como Anadarko, Repsol, Shell, Petrobras, Statoil y ExxonMobil; con las cuales se han perforado más de 16 pozos con una inversión de US$ 1.338 millones (PNOEC, 2017).

Mapa 17. Bloques Offshore Administrados por la ANH en el Caribe y el Pacífico



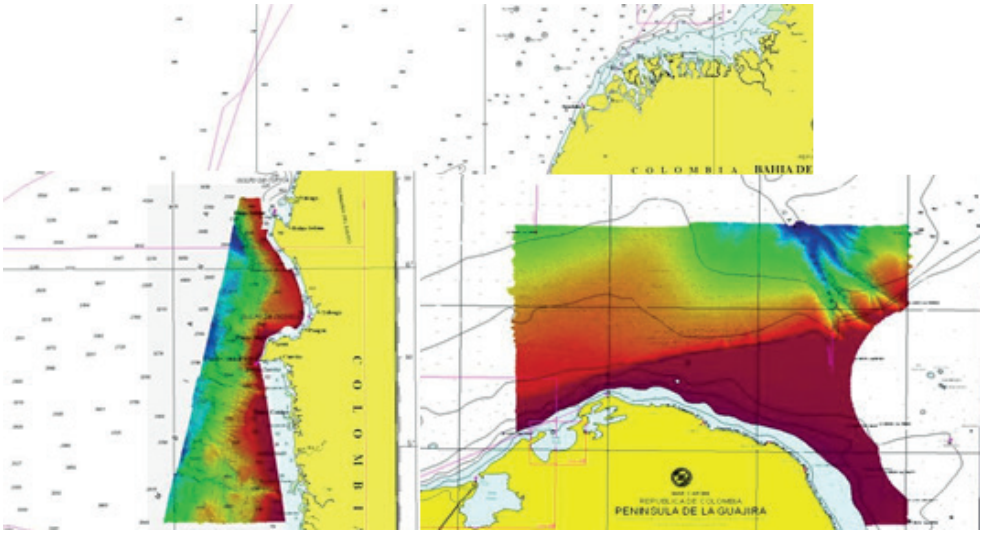
Fuente: ANH, 2015

En el Caribe, se encuentran en explotación los pozos de Chuchupa, descubiertos hace más de 40 años. Asimismo, en diciembre de 2014, la exploradora brasilera Petrobras anunció el descubrimiento de la primera acumulación de gas en aguas profundas del Caribe colombiano, en el pozo Orca-1 del bloque Tayrona (ANH, 2015). Posteriormente, en 2017, se dio el hallazgo de nuevas reservas en aguas profundas, donde los pozos Kronos-1, Gorgon-1 y Purple Angel tendrían una capacidad de al menos 500 millones de barriles. Sobre el margen Pacífico, las cuencas Tumaco y de los ríos Atrato y San Juan, tienen un gran potencial de existencia de hidrocarburos, de acuerdo a las características geológicas y químicas de su formación. Si bien estas cuencas están actualmente sub-exploradas, según el Departamento de Geología de la

Universidad EAFIT (2010), se han identificado importantes oportunidades de exploración que merecen mayor investigación (Cediel et. al, 2009).

El Estado colombiano ha adelantado campañas de investigación encaminadas a identificar áreas potenciales de hidrocarburos, en coordinación con la empresa privada. El Mapa No. 18 ilustra diferentes sectores en los cuales se ha realizado levantamiento batimétrico "multihaz" por parte de la autoridad marítima, utilizados como insumo por parte de la ANH, para identificar la posible existencia de recursos en la plataforma, como información inicial para la conformación de los bloques de exploración que salen a oferta.

Mapa 18. Levantamientos Batimétricos Multihaz realizados por DIMAR en la Costa Pacífica y Mar Caribe colombiano, en coordinación con ANH y Ecopetrol



Fuente: ANH, 2015

En relación a la explotación de nódulos polimetálicos, en Colombia existiría una inmensa riqueza de este mineral con altos contenidos de magnesio, hierro, calcio, cobalto, níquel, cobre y titanio, según informes de organismos

como el GESAM1 y el DISCOL2. La mayor concentración de este mineral en Colombia se ubicaría sobre la cuenca del Pacífico; comúnmente los nódulos polimetálicos se ubican en planicies de gran profundidad, entre los 2 mil y los 6 mil metros de profundidad, así como en las dorsales mesoceánicas activas y pasivas, y bordes continentales profundos, donde las condiciones reinantes permiten cierto nivel de decantación de sedimentos y la acción de otras fuentes de suministro de los elementos minerales, lejos de la acción eficaz de corrientes de fondo (Maksaev, 2001). Por lo anterior, la zona adyacente de la dorsal de Malpelo, bien podría reunir las condiciones para que se presente este tipo de fenómeno de génesis, como se ha demostrado en cuencas similares.

4.3 Elementos de la plataforma continental que aportan valor para la soberanía nacional

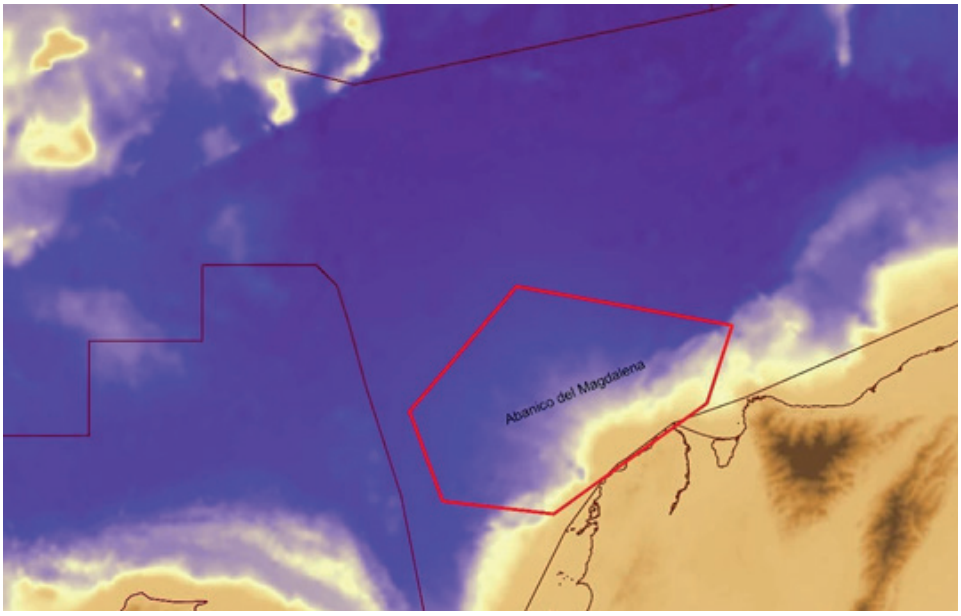
4.3.1 Dinámica de sedimentos hacia el Talud continental

Colombia presentaría una gran cantidad de rasgos morfológicos de gran importancia en su Plataforma Continental. Uno de los más destacados es el Delta del Río Magdalena, dado que el río que le da nombre, está caracterizado por un caudal medio anual de 7.236 m^3/s (IDEHA, CORMAGDALENA, 2013); el cual aporta una alta dinámica de sedimentos transportados a través de rasgos morfológicos como los cañones submarinos, para su depósito en el fondo del océano. Según Shepard (1963), la desembocadura de un sistema fluvial importante proporciona el aporte de un alto volumen de terrígenos, generalmente de tipo de grano fino, que se dispersan en un abanico selectivamente, tanto de función de la distancia de transporte y decantación (según sea el tamaño de los sedimentos), como por los efectos que produce la floculación de las arcillas en contacto entre el agua dulce y salada (Shepard, 1963).

Es precisamente por éstas características de dinamismo en el aporte de sedimentos, que la desembocadura del Río Magdalena, constituye un actor de

capital importancia en la determinación de un talud, al momento de establecer un límite del margen continental; ya que este talud no es un elemento pasivo y estático, más bien posee un carácter activo que crece permanentemente. El Mapa No. 19 permite observar una orientación del abanico hacia el noroeste, con la distribución selectiva mencionada por Shepard (1963), destacándose ampliamente su morfología en la cuenca del mar Caribe.

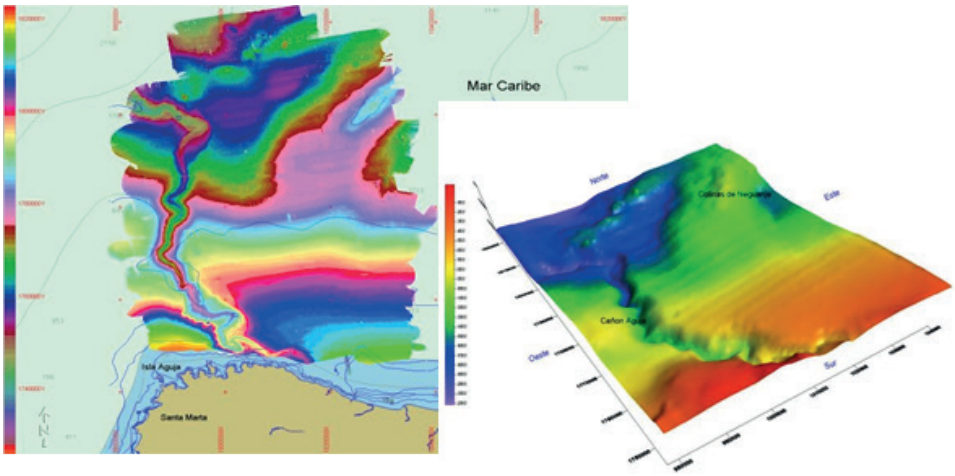
Mapa 19. Propagación de Sedimentos en el Abanico del Magdalena



Fuente: Elaboración propia con datos hipsométricos GEBCO

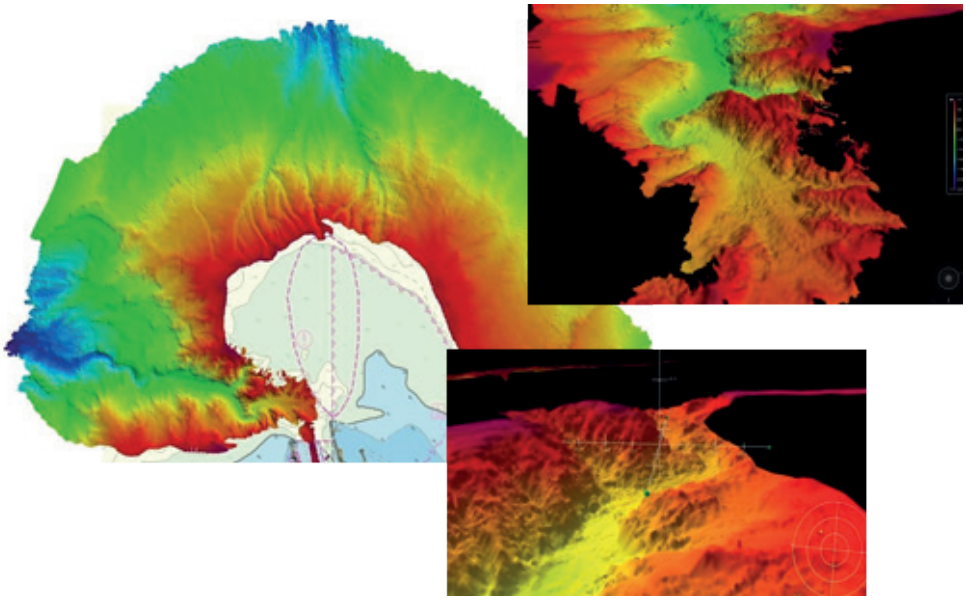
Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH, 2009), se pueden identificar en el Caribe colombiano los siguientes cañones submarinos derivados del delta del río Magdalena, así como de otros ríos de importancia por su aporte de sedimentos: Cañón Turipaná, Cañón Magdalena, Cañón Aguja, Cañón Ranchería, Cañón Riohacha y Cañón Macuira (Tabares et. al, 2009). Los Mapas No. 20 y No. 21 permiten observar aspectos de la morfología de algunos de los mencionados cañones.

Mapa 20. Geoformas Identificadas en el
Estudio Batimétrico del Cañón La Aguja (Magdalena).



Fuente: DIMAR - CIOH.

Mapa 21. Levantamiento Batimétrico Multihaz y
Generación de Imágenes 3D en la Desembocadura del Río Magdalena



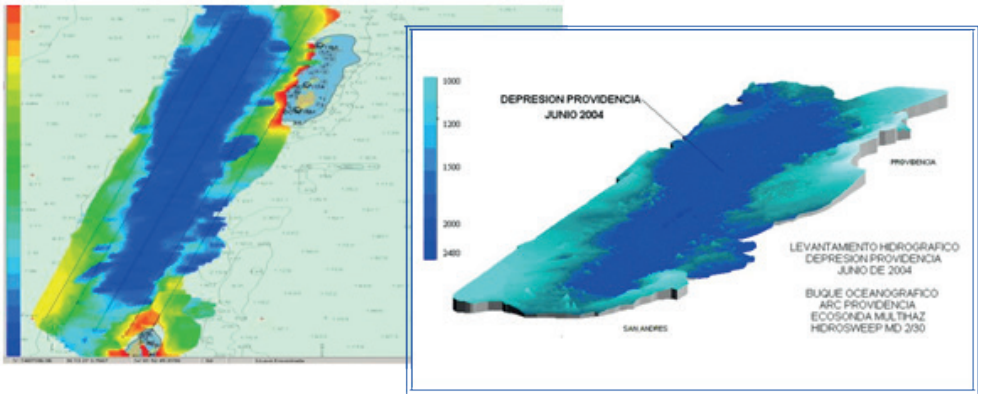
Fuente: DIMAR - CIOH.

4.3.2 Geoformas marinas

Como se expuso anteriormente, existe una diversidad de elementos morfológicos presentes en la Plataforma Continental, que representan el carácter histórico de una nación, pero también de un sentir del pueblo, con los cuales se ve representada su cultura y tradición. La autoridad marítima colombiana, a través de sus centros de investigaciones (CIOH en el Caribe y CCCP en el Pacífico), ha adelantado labores de investigación para identificar y consolidar la información existente sobre la morfología submarina.

Además de los cañones enunciados en el literal anterior, el CIOH (2009) menciona los siguientes rasgos importantes para el Caribe. Con relación a los "bajos", se encuentran Sotavento, Nuevo, Minalta, Salamanquilla, Bushnell, Comisario, Calamarí, Tortuguilla, Barú, Rosario, Barbacoa, Codego, del Tesoro, de Salmedina, Nokomis, Zamba y Palmarito; en referencia a los "bancos", están el de Turmequé, Bolívar, Roncador, Panzenú, Serrana y Quitasueño; en cuanto al "abanico", estaría el del Magdalena; con referencia a las "colinas", se identifican Gaira, Arjona, Chima, Pipinta, Sia, Neguanje, Payax, Nukak, Arawak, Guambiano, Poima, Tumaco, Aracataca y Nuquí; por su parte, los "monte submarinos" serían Coyaima, Quimbaya, Sotaquirá, Calima, Ubaté y Chía; los "valles" serían Taganga, Guajira, San Agustín, Bachué, Ambalema y Curumaní; las "cordilleras" serían Beata, Tensa y Bolívar; los espolones, Santa Marta, Wayúu, Roncador y Tunebos; las "mesetas" serían Beata, Pipintá, Katios y Tayrona; los "escarpes" serían Manaure, Panzenú, Quimbaya, Pedro y Hess; las "depresiones" serían Kogui, Nutibara, San Andrés, Providencia, Huitoto, Guambiano, Cunas, Momil y Bochica (Tabares et. al, 2009).

Mapa 22. Resultados del levantamiento Hidrográfico Realizado por el Buque Oceanográfico ARC "Providencia" en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, sector depresión Providencia.



Fuente: CIOH (Orejarena et. al, 2009)

4.4 Propuestas de aplicación de los elementos de valor de la plataforma continental para Defensa de la soberanía colombiana

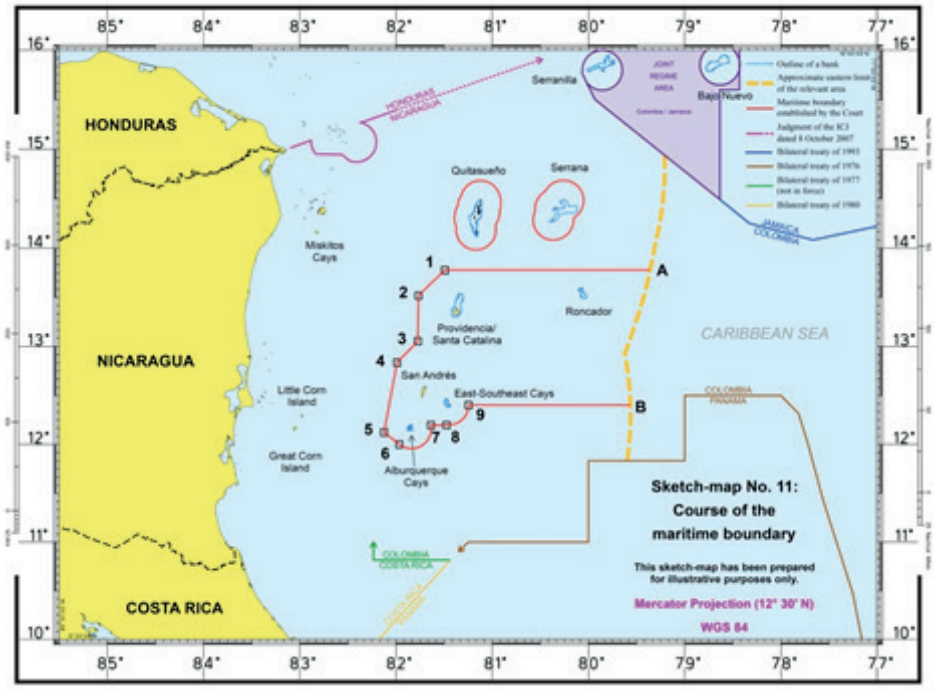
4.4.1. Caso Nicaragua

Con referencia al fallo emitido por la CIJ el pasado 19 de noviembre de 2012, sobre el diferendo marítimo y territorial con Nicaragua, Colombia debería contar con instrumentos que le permitan negociar los límites marítimos con dicho país, en condiciones más favorables a las indicadas por La Haya. De darse un cabal cumplimiento a lo dispuesto por esa Corte, Colombia perdería una gran superficie de territorio marítimo junto con la integridad del archipiélago de San Andrés y Providencia. En razón a que Colombia no podría ignorar el fallo proferido, aun cuando haya denunciado el Pacto de Bogotá, la estrategia debería contener el empleo de herramientas en el orden de manejo del poder y de la diplomacia, que le permitan obtener una posición más conveniente para conducir la negociación definitiva de los límites marítimos entre ambas naciones. Por ende, la proyección de la estrategia a plantear debería incluir el

manejo de los conceptos técnico y jurídico de la Plataforma Continental y los elementos que dan valor sobre la soberanía nacional.

Basta recordar que el fallo proferido por la CIJ sobre el diferendo marítimo y territorial entre Colombia y Nicaragua, el 19 de noviembre de 2012, si bien reconoció con unanimidad la soberanía de Colombia sobre las Islas-Cayo que hacen parte del archipiélago de San Andrés y Providencia, también le reconocería a ese país centroamericano, derechos sobre aproximadamente 75,000 km² de superficie marítima que hoy hace parte de la Zona Económica Exclusiva de Colombia. La decisión de la Corte implicaría además, la pérdida de la integridad territorial entre las islas que conforman el archipiélago, por los enclaves que aíslan las Islas de Quitasueño y Serrana. De manera similar, se produciría una desconexión de la zona de régimen común con Jamaica, donde se encuentran las Islas-Cayo de Serranilla y Bajo Nuevo.

Mapa 23. Trazado de Delimitación Marítima según fallo de la CIJ



Fuente: Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), 2012

Las principales consecuencias producto del fallo (la vasta magnitud de superficie marítima que se perdería y la disgregación del archipiélago), son ampliamente desfavorables para Colombia. Sin embargo estos dos aspectos no son la única preocupación, también es la protección de un sensible y complejo ecosistema contenido en ésta zona, ya que "una parte de las aguas que le fueron designadas a Nicaragua se encuentran dentro de Seaflower, la reserva de biosfera declarada en noviembre de 2000 por la Unesco" (El Espectador, 2012).

Una estrategia sería demostrar que si bien Nicaragua cuenta con una plataforma continental de carácter geológico muy marcada sobre el Caribe[84], esta se ve desde un carácter geológico, interrumpida por la depresión providencia, la cual presenta un talud prominente entre la cordillera Bolívar y las Islas de Andrés y Providencia (Mapa No. 24). La depresión Providencia se encuentra localizada al norte de la isla de San Andrés y se extiende hasta la parte oeste de la isla de Providencia, con una longitud de 113 km y una amplitud promedio de 13 km, enmarcada en los 12°41'41" N y 13°38'41" de latitud Norte, y los 81°25'49,5" y 81°46'07" de longitud Oeste. La depresión tiene orientación noroeste, con profundidades superiores a los 2.400 metros y separa, junto con la depresión San Andrés, el talud de la cordillera submarina en la que se encuentra el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Orejarena et. al, 2009).

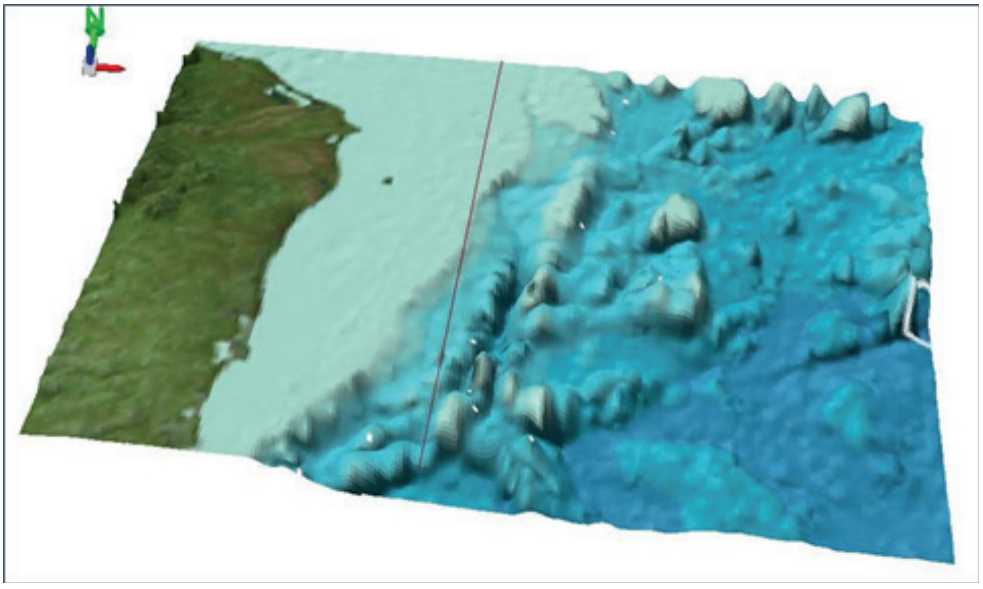
En el análisis sobre el origen, configuración e implicaciones de la depresión Providencia, se establece que:

> Esta depresión es un ambiente profundo que marca la separación entre la plataforma actual de América Central y el archipiélago, un fragmento aislado a recientes movimientos del piso oceánico

84. La cual presenta una anchura de aproximadamente 60 millas náuticas al sur del país, y de cerca de 94 millas náuticas en su parte más extensa al norte.

en probables relaciones genéticas con el movimiento de la dorsal del Pacífico, en la prolongación de la zona de fractura de Panamá. Esta es una 'cicatriz' activa abierta y profunda por mega desplazamientos rotativos y movimientos cortados (Orejarena et. al, 2009, p.36).

Mapa 24. Superficie Hipsográfica de la Costa Nicaragüense y Archipiélago de San Andrés y Providencia. La línea representa el Meridiano 82°.



Fuente: Elaboración propia con datos de GEBCO

En cuanto a la estrategia ambiental, el área conocida como *Seaflower* hace parte de la red de reservas de biósfera de la UNESCO desde el año 2000 (Coralina, 2017). En este orden de ideas, Colombia históricamente ha demostrado un gran interés en la protección de ésta área sensible, y en los últimos años, ha materializado importantes investigaciones científicas lideradas desde el gobierno central con participación de gran parte de la comunidad universitaria y de otras instituciones de investigación científica marina; lo anterior, en un marcado contraste con las intenciones que tendría Nicaragua sobre el desarrollo

del canal interoceánico y la exploración de recursos energéticos. Todas las pretensiones Nicaragüenses se basan en intereses económicos de explotación de las áreas marinas, que conllevarían un gran impacto a la zona de reserva que Colombia se ha esmerado en proteger. Por ende, por medio de acciones diplomáticas a través de la UNESCO4, con base en los visibles esfuerzos en materia de protección ambiental, Colombia puede ejercer presiones sutiles para su beneplácito con Naciones Unidas, que favorezca la imagen nacional y el apoyo de dicha entidad, sobre el resultado de las negociaciones con Nicaragua.

4.4.2 Pacífico colombiano

Los presidentes de Costa Rica y Ecuador, con el Presidente de Colombia como testigo, firmaron el día 09 de septiembre de 2016 en Puerto Ayora (Islas Galápagos), el convenio de cierre definitivo de sus fronteras marítimas. A raíz de lo anterior, tanto Costa Rica como el Ecuador han manifestado su interés de iniciar coordinadamente el trámite para solicitar la extensión de sus respectivas plataformas continentales de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la CONVEMAR. El argumento técnico para ello es la supuesta integralidad de las cordilleras submarinas de Cocos y Carnegie, las cuales parten del territorio de ambos países. Lo anterior, permitiría proyectar su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, medidas a partir de las líneas de base.

Con más de 1.300 km de línea de costa y una superficie de 339.100 km² (PNOEC, 2015), la cuenca del Pacífico Colombiano constituye una importante fuente de recursos enmarcados en los intereses marítimos nacionales. Dentro de la cuenca se encuentra la Isla de Malpelo, de gran importancia estratégica para Colombia; tanto por la diversidad biológica que posee, como por la proyección de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) hacia el oeste. La isla Malpelo es la cúspide de una única cordillera volcánica conocida como Dorsal de Malpelo, formada hace unos 17 a 20 millones de años por la interacción de

las plumas mantélicas de Galápagos y de Cocos, es decir, las placas de Nazca (Fundación Malpelo, 2017). Las formaciones geológicas de la cordillera, convierten a la Isla, en una zona de interés para la conservación de ecosistemas oceánicos marinos y terrestres, que albergan una de las formaciones coralinas más importantes del Pacífico Colombiano, y que representa un oasis de vida idóneo para especies nativas y migratorias.

Por lo tanto, en el escenario de las pretensiones de Costa Rica y Ecuador, podrían estarse desconociendo las posibilidades que tiene Colombia para acceder a dicha área, a partir de la existencia y prolongación de la dorsal de Malpelo, afectando los intereses nacionales.

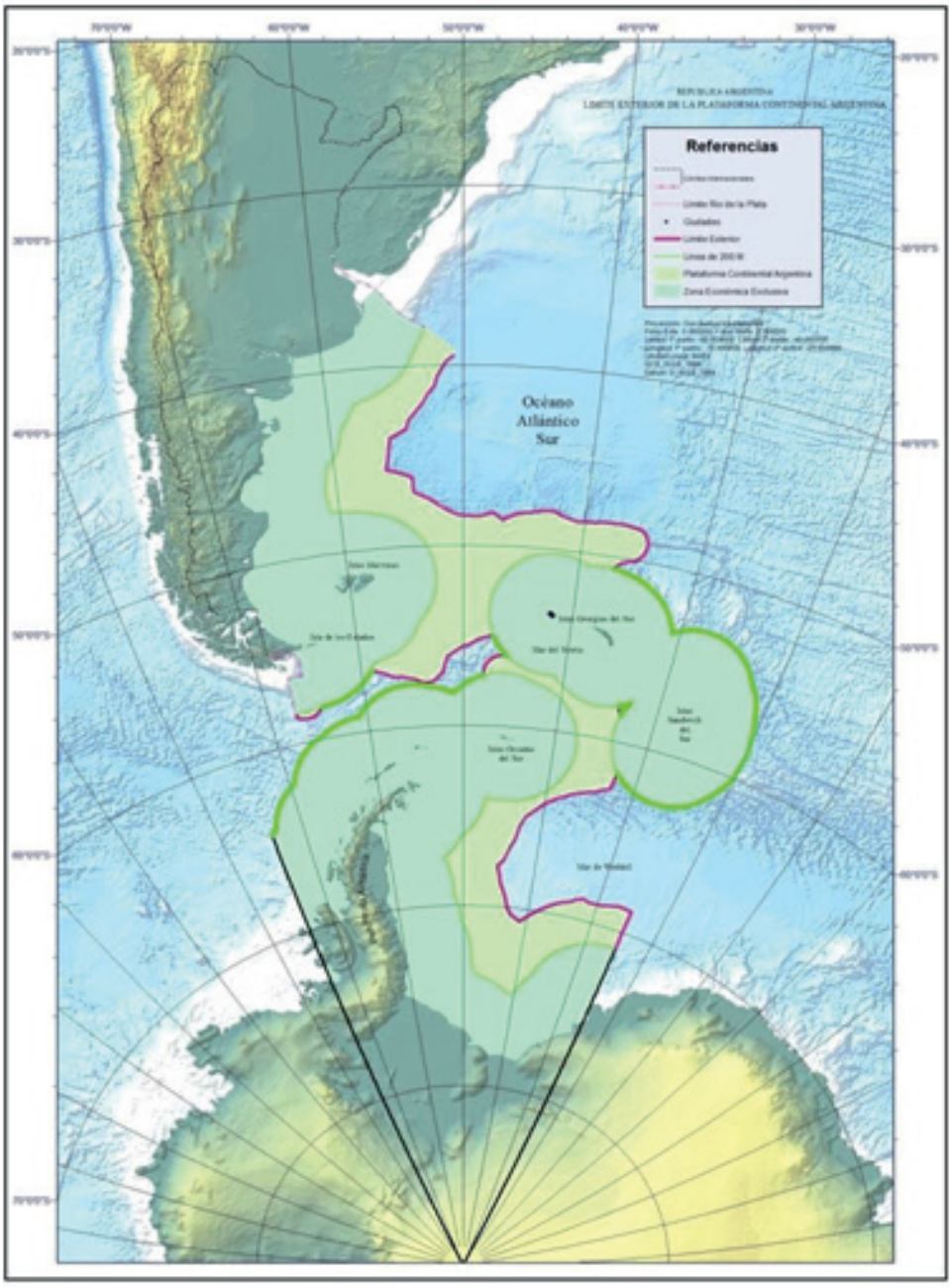
4.5 Análisis de casos de extensión de plataforma continental

4.5.1. Argentina

El gobierno argentino mediante la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), trabajó por más de 20 años en la recolección y procesamiento de datos, que permitieron recopilar suficiente información en los campos de geomorfología, geología, geofísica e hidrografía, para presentar en el año 2009, la sumisión a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de Naciones Unidas. Argentina prevé que en la zona de su Plataforma Continental que se extiende más allá de las 200 millas náuticas, se encuentra una gran riqueza en recursos de hidrocarburos (petróleo y gas), por lo cual se amerita el amplio trabajo realizado en pro de obtener el reconocimiento del suelo y subsuelo marino.

En consecuencia, le fue reconocida a Argentina en marzo de 2016, una zona de más de 1'780.000 km², más allá de las 200 millas náuticas, que incrementan su plataforma continental en un porcentaje cercano a un 35% (Clarin, 2017).

Mapa 25. Mapa del Límite Exterior de la Plataforma Continental Presentada por Argentina ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas



Fuente: (COPLA, 2016)

4.5.2. Brasil

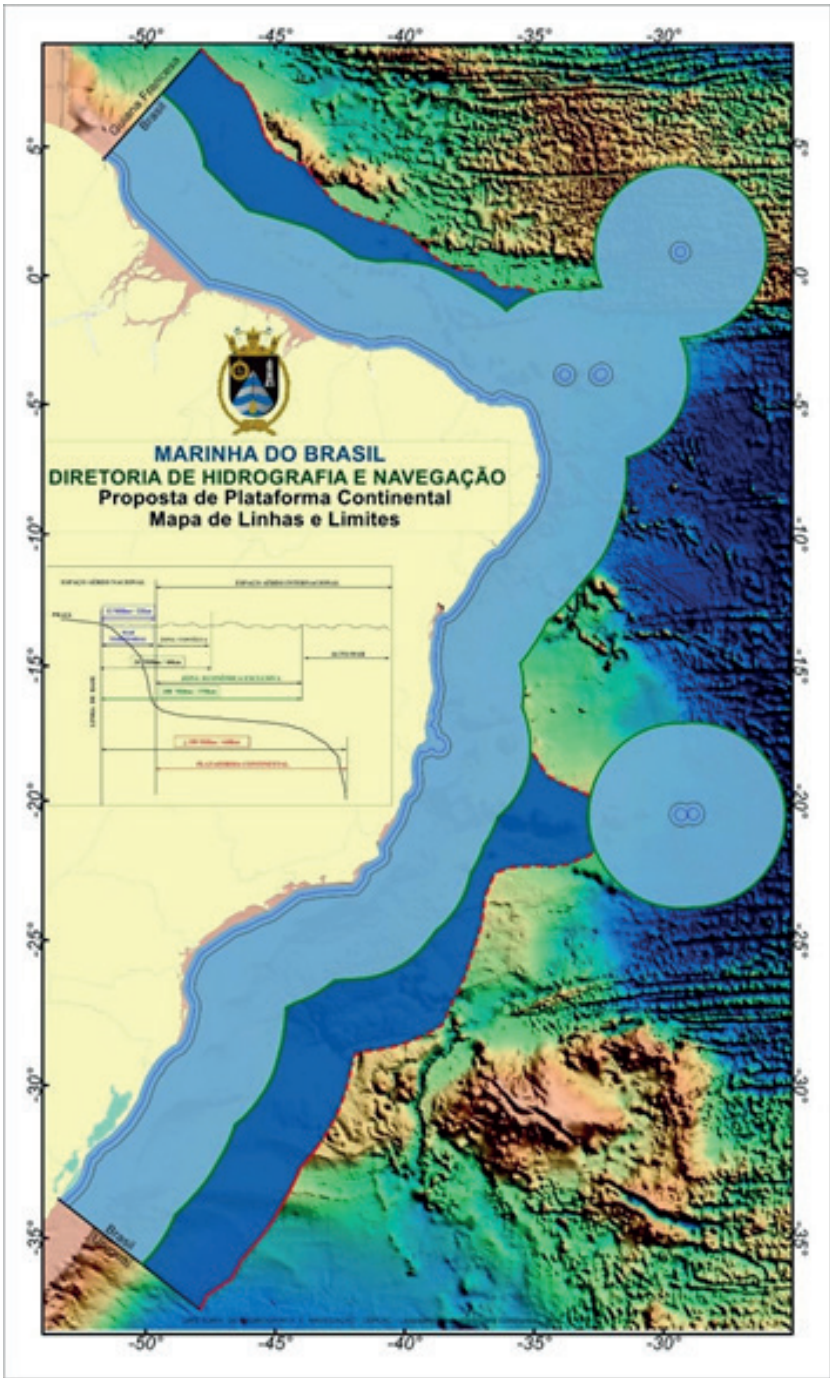
El gobierno de Brasil formuló en 1989, el proyecto Plano de Levantamiento de la Plataforma Continental Brasilera denominado LEPAC, con el objetivo establecer el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, guardando conformidad con el artículo 76 de la CONVEMAR. El proyecto recolectó durante un largo período que culminó en 1996, un amplio conjunto de datos con complejos criterios geodésicos, hidrográficos, geológicos y geofísicos, sobre una extensa área marítima con más de 8.000 km de línea de costa (DHN, 2017).

Como resultado del proyecto LEPLAC, el gobierno de Brasil efectuó su misión a la Comisión de Límites de Plataforma Continental, solicitando la extensión de su plataforma continental de un área de más de 830.000 km². Estudios posteriores culminados en el 2007, estimaron que el área de la plataforma a extender es cercana a los 960.000 km² (DHN, 2017). De esta forma el gobierno de Brasil justificó la extensión de su plataforma continental, fundamentado en argumentos técnicos de acuerdo al artículo 76 de la CONVEMAR, sobre una extensa franja marítima que contiene importantes recursos minerales de gran interés para el desarrollo marítimo de dicho país y que permite además conectar su plataforma continental con la zona insular. El conocimiento de las posibilidades que ofrece la vasta área marítima junto a su suelo y subsuelo, que abarca más de 4'000.000 de km², permiten que Brasil con una gran visión geopolítica, haya denominado a su territorio marítimo como la "Amazonía Azul", por la gran diversidad de especies vivas y recursos naturales que aportan significativamente al desarrollo nacional.

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR, ha dado hasta ahora la razón a Brasil en la incorporación a su ZEE de 771.000

km², mientras permanece pendiente la decisión sobre el resto. La reivindicación brasileña, al menos en la expansión de la plataforma concedida hasta ahora, cumple con los requisitos de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y le da al país beneficiado potestad para explotar los recursos existentes en el área ampliada y le obliga a mantener responsabilidades en su manejo. El reconocimiento a favor de Brasil, así no haya sido total, no ha dejado de levantar suspicacias entre algunos vecinos, por los inmensos intereses económicos en la plataforma continental adicional concedida (IPS, 2017).

Mapa 26. Mapa de Líneas y Límites propuesta por Brasil como resultado del Programa de Levantamiento de la Plataforma Continental



Fuente: DHN, 2017

5. Conclusiones

Colombia atraviesa por un periodo de transición a causa de los recientes acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Colombiano y las FARC. Como resultado de este proceso, se ha puesto fin a un conflicto armado de más de 50 años. Este hecho plantea un nuevo escenario de Seguridad y Defensa en América del Sur, menos preocupante por cierto, pero ello no significa la desaparición y surgimiento de algunos actores violentos que se marginaron del proceso y que mantienen diferentes tipos de actividades ilegales, que traen consigo serios desafíos tanto para el futuro del país, como para los Estados de la región, en especial aquellos con los que Colombia comparte fronteras terrestres.

El acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC podría transformar el entorno vecinal hacia aquella de condiciones de mayor estabilidad en las fronteras, que estarán condicionadas en su éxito por las estrategias conjuntas que en las zonas de frontera adelante Colombia con sus vecinos. Por ello, el papel de las Fuerzas Militares debería enfocarse hacia garantizar la seguridad en las regiones fronterizas, a través de acciones conjuntas coordinadas y unificadas a lo largo de las líneas fronterizas.

Uno de estos países limítrofes es Brasil; debido a la dimensión propia de la frontera con Colombia, esta ha sido categorizada como "frontera muerta", es decir, donde no se percibe mayor dinamismo poblacional, salvo en algunos puntos concretos de la extensa frontera. En consecuencia, es necesario analizar los nuevos escenarios que en materia de seguridad genera lo que se ha denominado posacuerdo en Colombia, a fin de determinar nuevas capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía en ambos países. La gran preocupación surge por la persistencia de algunos espacios vacíos en la frontera común, sus impactos en la región fronteriza y cómo y de qué forma deben ser llenados con la presencia estatal de ambos Estados.

Asimismo, es necesario tener en cuenta cuál es el alcance de la soberanía de los Estados sobre los espacios marinos y hasta dónde se extiende, cuando se trata de la jurisdicción marina que contempla la actual Ley del Mar consignada en la citada Convención de Jamaica de l982. El Estado ribereño, es decir, el que tiene costas sobre el mar ejerce soberanía hasta las 12 millas marinas, medidas a partir de la costa, lo que corresponde al mar territorial del Estado, y en esas 12 millas está igualmente contemplada la Plataforma Continental, a pesar de que se extiende hasta 200 millas náuticas medidas a partir de la costa en su línea de bajamar; sobre la Plataforma Continental, zona contigua y zona económica exclusiva, el Estado ribereño ejerce jurisdicción con fines específicos.

Por ende, la plataforma continental constituye para cualquier Estado costero, un espacio de alto valor dentro del territorio nacional, por su alto contenido potencial de recursos, que la convierten en un interés nacional que requiere de su defensa y protección; la explotación de recursos offshore contenidos sobre la plataforma continental, representa una industria en crecimiento constante, que con el tiempo va ganando relevancia en el mercado de satisfacción de necesidades energéticas. Además, las geoformas submarinas que constituyen la plataforma continental, hacen parte de la expresión de cultura y tradición de los pueblos, por lo que generalmente emplean nombres representativos para los pueblos, generando identidad nacional.

En este sentido, el estudio integral de la plataforma continental permite conocer si existen condiciones técnicas para su extensión más allá de las 200 millas náuticas y con ello poder acceder a recursos adicionales del suelo y subsuelo marino; el conocimiento de los criterios geológicos y elementos morfológicos de la plataforma continental, le permitiría a Colombia fortalecer sus argumentos para la defensa de la soberanía nacional tanto en el Caribe como en el Pacífico, ante pretensiones de Estados limítrofes.

En este orden de ideas, sería perentorio incorporar el argumento de una eventual extensión de la plataforma continental de Colombia, a la discusión sobre la ratificación de la CONVEMAR, aspecto necesario para poder efectuar la sumisión ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Además se requiere profundizar los estudios técnicos de la plataforma continental, especialmente sobre la cuenca del Pacífico; de tal forma que permitan identificar con plenitud todas las geoformas submarinas del territorio nacional, identificando los rasgos de acuerdo al listado normalizado publicado por la Organización Hidrográfica Internacional y estableciendo su toponimia de acuerdo a la cultura propia. Asimismo, Colombia debería hacer parte del proyecto de investigación de la plataforma continental que se encuentra adelantando conjuntamente Ecuador y Costa Rica sobre el Pacífico, a fin de identificar los posibles derechos que provea la cordillera de Malpelo.

Colombia todavía se mantiene dentro de la normatividad establecida en las Convenciones sobre Derecho del Mar adoptadas en Ginebra en 1958, sin haber suscrito la CONVEMAR, cuya delimitación no difiere en el método empleado entre la Primera Convención y la Tercera (Artículo 6 de la Primera Convención de Ginebra 1958 y Articulo 15 de la Convención de Jamaica de 1982). Conviene recordar que aprobar la CONVEMAR le implicaría al Estado colombiano aceptar los 320 artículos y 9 anexos, sin posibilidad de presentar reserva a alguno de ellos. Por esas circunstancias Venezuela quedó por fuera de la Convención, al pretender presentar reservas sobre los artículos 15, 76, 83 y 121, que sustentaban la posición de Colombia sobre sus inobjetables derechos a las aguas del golfo en proporción a la extensión de sus costas.

Parte 3

Nuevos Escenarios y Desafíos de la Seguridad y Defensa de Colombia

Capítulo VIII

Consolidación Multidimensional del Territorio; hacia un concepto de Seguridad para el Posacuerdo[85]

CR. (RA) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
Juan Carlos Bolívar Sandoval

1. Introducción

Este documento pretende analizar las Políticas de Seguridad de Colombia de los períodos de Gobierno 2006-2010 "Política de Consolidación de la Seguridad Democrática", 2010-2014 "Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad" y 2014-2018 "Política de Defensa y Seguridad, Todos por un nuevo país", buscando evidenciar la concepción estratégica de las políticas mencionadas desde el enfoque de la Seguridad Multidimensional, especialmente en el ámbito socio-político; ello con el objetivo de identificar aquellos elementos que han sido considerados para la reducción de la pobreza multidimensional en el país.

Esto se realizaría a través de dos conceptos claves: espacios de estabilización y consolidación territorial; entendiendo que estos dos conceptos ofrecen una adecuada aproximación multidimensional a las particulares condiciones de seguridad del país, sobre todo en su ámbito socio-económico, y que faculta una mejor articulación de las acciones del sector de la Seguridad y la Defensa con las demás entidades del Estado, para la reducción de la pobreza multidimensional.

85. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

Asimismo, se identifican principalmente dos acciones: la atención prioritaria de las Fuerzas Militares en el territorio y los escenarios de articulación interinstitucional con las demás entidades del Estado, puesto que son estas dos acciones las que permiten, desde la seguridad, impactar los fenómenos de pobreza multidimensional.

2. Seguridad Multidimensional

La definición de Seguridad siempre se ha construido como un ámbito en el que se ha definido una otredad, es decir, siempre ha sido la búsqueda de una protección frente a un ataque de otro externo; en este sentido, las políticas de seguridad históricamente se han planteado reactivas o tendientes a reaccionar frente a lo que se consideran riesgos y amenazas. En este orden de ideas, las concepciones sobre la seguridad varían dependiendo de las características que tenga esa otredad, por lo que el enfoque de la seguridad plantea su estrategia de acción partiendo de un análisis profundo del fenómeno amenazante que configura su contraposición constitutiva.

Esta conceptualización de la Seguridad en el Hemisferio Occidental en el periodo de Guerra Fría, estuvo construido sobre la idea de la contención de amenaza del comunismo, como elemento de otredad constitutivo de lo que sería la Doctrina de la Seguridad Nacional; este hecho terminaría dándole forma al tipo de lecturas que se harían con respecto a la Seguridad. Este concepto hacía un especial énfasis en la Seguridad del Estado frente a elementos desestabilizadores a su interior, volcando la mirada de la seguridad a una política antisubversiva, perdiendo del horizonte otro tipo de amenazas que ya cabalgaban en los escenarios nacionales, pero que no cabían aún entre los riesgos o amenazas del concepto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Adicionalmente, al concebir la Seguridad como un concepto enfocado únicamente en la seguridad del Estado, se ubica a este último como único

actor relevante, pasando por alto los demás. Sin embargo, los procesos que se desarrollaron especialmente en la década de 1980, donde otros actores toman una relevancia fundamental en el ámbito de las relaciones con los Estados, así como en el contexto internacional, ponen en discusión este elemento de la concepción de la Seguridad Nacional. Como consecuencia, la concepción de la Seguridad sufre un cambio que explota el concepto de lo estrictamente Nacional, poniendo en la escena amenazas que exceden el ámbito de un único Estado. Las amenazas como el narcotráfico, las redes de crimen organizado, la trata de personas, el lavado de activos, entre otras, son amenazas que no pueden ser abordadas desde la mirada de la Seguridad Nacional. Estos elementos que configuran amenazas a la seguridad pública, ya se venían gestando en medio de la Guerra Fría; a pesar de esto, el pesado telón de acero no permitía ver estas nuevas realidades. La caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, son los hitos que abren la posibilidad histórica de que se entre en una revaluación de las políticas de seguridad hemisférica.

Como lo señala Celi (2015), "la extensión del concepto de seguridad evolucionó en dos dimensiones: la seguridad humana y la Seguridad Multidimensional en el marco del sistema interamericano" (p.16). Si bien estas dos concepciones de Seguridad serían complementarias, poseen diferentes intensidades según el tema que se aborde. En efecto, el concepto de la Seguridad Humana nace de los postulados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el sujeto principal de la seguridad son los individuos y las comunidades; en este sentido, se daría un giro fundamental respecto de la Seguridad Nacional, al establecer como centro de gravitación "la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, militares y culturales que ofrezcan, en conjunto, a las personas los elementos necesarios para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano" (Naciones Unidas, 2014).

Además de cambiar el sujeto que es objetivo de las políticas de Seguridad, el concepto de Seguridad Humana abre los escenarios de acción en torno a la Seguridad, ampliando la concepción de la Seguridad a ámbitos muy diversos de la vida en sociedad. Este hecho puede ayudar a concebir la seguridad como un hecho complejo, y aunque en principio podría parecer un problema para la "operativización" de este concepto, llama a la necesidad de construir políticas integrales de Seguridad, que escapen al fetiche de la militarización de la Seguridad. Como adecuación regional a estas nuevas realidades y abordajes de la Seguridad, nace en la Declaración de Bridgetown en el 2002 y luego se recoge en Conferencia Especial de Seguridad de la OEA del 2003, el concepto de Seguridad Multidimensional, que se define como "una (...) nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio (es) de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio" (OEA, 2003, p.2).

La Seguridad Multidimensional amplía sustancialmente los escenarios y las amenazas que impactan la seguridad, es así como se incluyen las amenazas tradicionales, y "nuevas amenazas" como el terrorismo, el crimen organizado (transnacional), los desastres naturales, los ataques a la seguridad cibernética, y algo fundamental la pobreza extrema y la exclusión social. Esta ampliación del concepto de seguridad entiende la complejización de las sociedades contemporáneas, incluyendo la necesidad de dar soluciones integrales a los problemas de seguridad. Es decir, rebate el principio militar unidimensional en los asuntos de seguridad, entendiendo la importancia de construir escenarios que permitan la estabilización social y la construcción de espacios de convivencia pacífica.

En este sentido, el concepto de Seguridad Multidimensional se convierte en una herramienta efectiva para la coordinación institucional dentro de los

Estados, para el afrontamiento de problemas de seguridad, que por su naturaleza desbordan el escenario militar, como el único elemento de respuesta del Estado en el abordaje de las amenazas. Este nuevo escenario plantea retos en el campo de la seguridad, al evidenciar que hay amenazas que se desarrollan al margen de la relación con el Estado, convirtiendo el problema del crimen organizado y el terrorismo en fenómenos transnacionales.

Adicionalmente, los nuevos actores desarrollan capacidades de incidencia profunda en la definición de los planes de acción en la Seguridad, por un lado como actores de apoyo a la seguridad, como el caso de las empresas que prestan estos servicios; y por otro lado, como veedurías, por ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de protección a los Derechos Humanos, o movimientos sociales que reivindiquen causas ambientalistas, de género, étnicas, entre otras. Así es como el concepto de Seguridad Multidimensional entiende la necesidad de adecuarse a un escenario global multipolar y pluralista, que además es policéntrico, es decir que no permite ubicar grandes "centros de gravedad" que deriven de su control una posibilidad de estabilización.

3. Dimensión Socio-Económica de la Seguridad Multidimensional

Sería pertinente comprender qué impactos tiene la inclusión de una dimensión socio-económica dentro del concepto de Seguridad Multidimensional, y entender cuáles son las relaciones entre desarrollo, prosperidad y pobreza en el abordaje de la seguridad como fenómeno multidimensional. El punto fundamental que abre el concepto de la Seguridad Multidimensional es el reconocimiento que la acción del Estado para enfrentar los problemas de Seguridad debería ser integral; en este sentido, el ámbito socio-económico y la atención de las necesidades básicas de la población sería esencial, entendiendo que las comunidades inmersas en contextos de violencia se encuentran en una

fragilidad singular, y que por ello, la acción de confrontación de las Fuerzas Militares y Policiales debería traer consigo un acompañamiento integral del Estado.

A propósito de esto, el aspecto socio-económico introduce la necesidad de construir espacios de socialización pacífica, en un entorno de prosperidad material y pertenencia cultural; introduce además la necesidad de incluir a otros sectores en la definición de una estrategia integral en torno a la seguridad, como lo recuerda Adam Blackwell, Ex-secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA: "(...) Para mí un Ministro o un Ministerio de Educación es un(a) parte primordial de un sistema o un gabinete de seguridad, es tan importante o aún más importante que la policía, los militares, la justicia, etc". (Centro Perry, 2016). Esta declaración de Blackwell pone en el centro de la discusión el asunto de definir la política de seguridad como una política integral desde su concepción, es decir que la acción de las Fuerzas Militares, como parte de la política de Seguridad, debería estar articulada con las demás instituciones del Estado, no como una posibilidad sino como una condición para la efectividad de la búsqueda de una sociedad más segura.

No obstante, este ámbito de la Seguridad Multidimensional ha sido poco explorado, por dos razones fundamentales: la primera es que se ha visto esta ampliación conceptual como un peligro, como lo demuestran las críticas que han visto la inclusión del ámbito socio-económico como un intento de securitización de ámbitos del desarrollo: "En el contexto de la Declaración, la securitización de problemas políticos, sociales o económicos por un lado, y la militarización de las respuestas por el otro, son como dos caras de una misma moneda" (WOLA, 2009, p.11).

Esta percepción crítica del concepto nace del contexto en el que se desarrolla: eran los tiempos de las definiciones nebulosas del terrorismo que terminarían

incluyendo, casi que indiscriminadamente, a una cantidad de actores armados en la definición, por lo que el concepto en el momento de su nacimiento estaba rodeado de un ambiente geopolítico adverso para su aplicación. En el caso colombiano, esta concepción se cruza con el momento de mayor confrontación armada de las últimas décadas con la guerrilla más grande del país: las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC). La segunda crítica se cruza con la anterior, al entender que "la tendencia a adoptar un concepto de seguridad que no prima exclusivamente lo militar-policial, no suprime las diferencias acerca de su alcance y sobre las áreas que corresponden estrictamente a la seguridad y a la defensa", con los peligros a "la polifuncionalidad de roles para los cuerpos militares y policiales, con sus efectos desprofesionalizadores" (Celi, 2015, p.19).

Sin embargo, el concepto de la multidimensionalidad, desde aquí, se entenderá más como la necesidad de plantear políticas de seguridad que entiendan la necesidad de la coordinación interinstitucional no solo como un elemento conveniente, sino necesario en las definiciones estratégicas de las políticas de seguridad y defensa; es decir, que el concepto de la Seguridad Multidimensional rescata la seguridad, este ámbito de la vida social, de la visión exclusivamente militar, para situarlo como un ámbito en el que tienen que estar presentes todos los sectores de la sociedad. En concordancia, el ámbito socio-económico haría referencia a la necesidad de construir escenarios en los que las necesidades básicas de la población se encuentren cubiertas, entendiendo que la presencia de necesidades básicas insatisfechas ponen a estas comunidades en un estado de fragilidad, en el que actores armados pueden ofrecer incentivos económicos que solventen estas necesidades desde la ilegalidad.

El ámbito socio-económico se ubica en la concepción de las políticas de seguridad desde una visión multidimensional, que construyen operaciones en el ámbito del accionar propio de las Fuerzas Militares, pero que contribuyen a

solventar necesidades básicas, especialmente con atención prioritaria en salud, construcción de infraestructura de servicios básicos e incluso atención educativa básica. Sin embargo, estas acciones deben estar delimitadas precisamente en tiempos y espacios, para que la dinámica de la violencia en momentos concretos no permita o haga riesgosa la presencia de las instituciones civiles especializadas en cada uno de estos componentes y estas operaciones puedan ser una atención temporal de las necesidades inmediatas de la población.

La delimitación precisa de este tipo de operaciones es fundamental, ya que puede existir el peligro de generar un carácter polifuncional de las Fuerzas Militares, sacándolas de su rol específico de defensa territorial y confrontación armada. Sin embargo, este tipo de operaciones serían fundamentales para lograr una mejor cooperación de las comunidades, en una idea de consolidar lazos de confianza con la Fuerza Pública. Además de estas operaciones, se deben incluir en el análisis de los planes de Seguridad, los espacios que permiten la articulación interinstitucional, no solo entre Fuerzas Militares y policiales, sino con las agencias especializadas del Estado; es decir, establecer protocolos, con tiempos precisos y manuales de operación, donde la atención prioritaria realizada por la Fuerza Pública llegue a ser complementada por las demás instituciones del Estado.

Además de esta necesaria coordinación interinstitucional, se deben lograr canales de comunicación efectivos, que permitan incluir en la concepción estratégica de los Planes de Seguridad, las voces de las demás instituciones del Estado, en el ámbito socio-económico de la Seguridad Multidimensional. Esto permite que los Planes de Seguridad amplíen la concepción estratégica de la Seguridad, pero con una coherencia en lograr escenarios de convivencia pacífica, incluyendo elementos de todas las Instituciones del Estado, con una articulación conceptual clara, que gira en la atención prioritaria, y que finalice

con la construcción social del Territorio, es decir, con el goce efectivo de Derechos, en el marco de un Estado Social de Derecho. Este hecho articulador es fundamental para darle sentido de permanencia a la acción de recuperación territorial que hacen las Fuerzas Armadas, porque salta de una presencia física, a la construcción de elementos materiales de estatalidad; esto permitiría ir en la vía de construcción de legitimidad estatal en los territorios donde el Estado no ha hecho presencia, o donde solo ha tenido presencia militar.

4. Acción Interinstitucional y Consolidación Territorial en las Políticas de Seguridad

Para evaluar de qué manera la concepción estratégica de la Seguridad Multidimensional y en especial su ámbito socioeconómico, configuran una mirada que amplía el espectro estratégico e impacta otros fenómenos como el de la pobreza multidimensional, se requiere analizar cómo se han incluido en las últimas Políticas de Seguridad, los conceptos de Acción Interinstitucional y Consolidación Territorial. La inclusión de estos conceptos en las Políticas de Seguridad son fundamentales para hacer girar el enfoque de Seguridad hacia una mirada multidimensional, permitiendo así avanzar con objetivos del Desarrollo, al mismo tiempo que se construyen espacios de seguridad más amplios.

Actuar en una estrecha acción interinstitucional permite que la acción de la Fuerza Pública esté acompañada por la oferta social del Estado; esto permite la construcción de escenarios de consolidación territorial, donde la acción estatal se vuelve estable en el tiempo y avanza hacia la construcción social. En este sentido el avance de la acción interinstitucional es una condición para la consolidación en su ámbito conceptual y operativo, ya que es este tipo de acción la que permite la provisión de servicios básicos, redes de infraestructura física e informacional, entre otras, que posibilita las condiciones sociales para

que estas zonas transiten a una integración con el conjunto del Estado social, es decir, construyen los elementos materiales que permiten construir Nación. Además, la Acción Interinstitucional y la Consolidación Territorial proveen a las comunidades posibilidades materiales y de seguridad, que permitan la superación de las condiciones estructurales de la Pobreza Multidimensional.

A continuación el análisis se centrará en evidenciar cómo estos elementos conceptuales aparecen en las Políticas de Seguridad, evidenciando cuáles son los posibles impactos en la concepción estratégica de la Seguridad, así como las transformaciones institucionales y conceptuales que se han podido presentar, para luego discutir cómo la incorporación de estos elementos contribuyen a la reducción de la Pobreza Multidimensional desde un enfoque de la Seguridad Multidimensional.

4.1 Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)

La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), nace en un contexto estratégico donde la presencia del Estado a través de las Fuerzas Militares y de Policía, se había expandido significativamente en el territorio nacional, pero entiende que "(...) (hay que) pasar además, del objetivo inicial del control territorial por la Fuerza Pública al de la recuperación social del territorio mediante la acción integral del Estado" (Ministerio de Defensa, 2007, p.10). De este modo, se entiende desde la presentación general que hace el Ministro de Defensa a la Política de Seguridad, en un nuevo enfoque de Seguridad pasando de presencia a la consolidación institucional, y sobre todo social del territorio, esto anudado a los objetivos de desarrollo que deben ir aparejados con esta nueva concepción.

Esta relación entre Desarrollo y Seguridad aparece más claro en uno de los principios de Implementación, donde se debe "promover la seguridad como

generadora de crecimiento económico y rentabilidad social (...) Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado desempeño de la acción social del Estado en favor de los más necesitados" (Ministerio de Defensa, 2007, p.30). Sin embargo, es en el planteamiento de los objetivos estratégicos de la PCSD, que se puede evidenciar parcialmente la dimensión socio-económica de la Seguridad Multidimensional en toda su potencia, es así como el primer objetivo que se plantea es:

> (...) En el término de la presente administración presidencial, el Estado deberá pasar de la etapa del control territorial a una consolidación del control del territorio (...) se entenderá la consolidación del control territorial como el escenario en el que la seguridad provista por la Fuerza Pública garantiza que el Estado pueda hacer prevalecer el orden jurídico y permite que todas las instituciones funcionen de manera libre y permanente, de tal forma que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos" (Ministerio de Defensa, 2007, pp.31-32).

Se entiende en este sentido que "la estrategia de consolidación del control territorial se concentrará en alinear los esfuerzos militar y policial, con el esfuerzo de antinarcóticos y los esfuerzos del área social, de justicia, desarrollo económico y fortalecimiento institucional del Estado". (Ministerio de Defensa, 2007. Pág. 32). Es así como la Acción Interinstitucional y la Consolidación Territorial se encuentran para darle vía a una estrategia coherente; esta estrategia entiende que las diversas zonas del país tienen intensidades distintas del proceso, por esto construye un esquema de fases para la estrategia de consolidación:

Figura 1. Estrategia de Consolidación



Fuente: Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, 2007. Ministerio de Defensa Nacional

Estas fases de consolidación responden al momento en el que se encuentre el proceso; así, cuando el escenario es aún de confrontación y disputa territorial por parte de los actores, se intensifica el elemento militar de la estrategia para luego avanzar en la construcción de un orden policivo regulatorio, y posteriormente intensificar la acción de los otros componentes de la oferta estatal. Sin embargo, los instrumentos institucionales que le dan coherencia a esta estrategia de consolidación están definidos por fuera de la PCSD, y en concreto el principal instrumento es el Centro de Coordinación y Acción Integral (CCAI), que aunque venía siendo un instrumento de política desde el 2004, es la directiva 01 de 2009 la que refina el concepto y le da estructura orgánica en el marco de una nueva concepción "el salto estratégico".

El CCAI tiene como principal objetivo "garantizar la capacidad de desarrollar de manera eficiente las estrategias del Plan Nacional de Consolidación Territorial

y armonizarla con el esfuerzo militar (...) emitirá instrucciones y mantendrá coordinaciones a nivel nacional y territorial para su implementación de planes regionales estratégicos de consolidación (...)" (Presidencia, 2009, p.2). De esta forma se combinan las dos estrategias que se han definido como elementos del ámbito socio-económico de la Seguridad Multidimensional, construyéndose escenarios de consolidación territorial para el desarrollo en el marco de las políticas de seguridad, pero definiendo espacios de acción interinstitucional y creando espacios de coordinación para brindar coherencia a la política.

No obstante, esta estrategia de consolidación presenta algunos problemas. Por un lado, unas etapas que tienen inconvenientes en la implementación, ya que no define claramente cómo se pasa de un estado a otro, sin parámetros claramente establecidos. A propósito, incluso la Fundación Ideas para la Paz (2011) en su revisión de la Política de Consolidación Territorial incluye entre sus recomendaciones "elaborar un protocolo que establezca de manera muy clara cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para aplicar la metodología del Semáforo (fases de la consolidación)" (p.46). Este mismo problema se expresa en la concepción del Desarrollo supeditado a unas ciertas condiciones de Seguridad; en este sentido, se prima la consolidación militar como condición sine qua non para la intervención integral del Estado, lo que resulta problemático ya que muchas de las causas para la degradación de la seguridad se derivan de la imposibilidad para construir escenarios de desarrollo óptimos, en los cuales los actores armados encuentran facilidades de penetración.

En este orden de ideas, el principal problema de la concepción de la Consolidación Territorial y la Acción Interinstitucional en la PCSD, sería la rigidez conceptual en etapas lineales para la acción integral, puesto que si bien se implementan desde la Política de Seguridad una visión ampliada de la Seguridad, que enarbola objetivos del Desarrollo, supedita estos a la consecución

de condiciones de Seguridad, sin entender que las relaciones entre Desarrollo y Seguridad podrían llegar a ser dinámicas y complementarias.

4.2 Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP)

La política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP), nace en un contexto de "estancamiento" estratégico, donde si bien se avanza en objetivos de alto valor y desarticulación de los Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML) y las Bandas Criminales (BACRIM), las primeras se adaptan a la ofensiva de la Fuerza Pública, incluso regresando a la guerra contrainsurgente, y en el caso de las BACRIM, pasando a una organización en redes. Este nuevo escenario hace que persistan en algunas zonas del territorio espacios de desarticulación de la autoridad pública, y se consoliden en el tiempo; esto hace que se entienda que "(...) el Ministerio de Defensa Nacional (...) ha identificado el tipo de acciones que debe desarrollar para cumplir su rol de brindar seguridad y estabilidad" (Ministerio de Defensa, 2011. p.21).

Este nuevo enfoque abandona el concepto de Consolidación Territorial como eje articulador en la política de Seguridad, y no construye un nuevo concepto que permita una articulación con las demás agencias del Estado; se encuentran definiciones vagas de la consolidación en apartes distintos del plan, pero que no encuentran un elemento que permita su coherencia interna. Aunque mantiene el esquema del semáforo, pasa a definirlo como Desarticulación, Consolidación, y Seguridad Ciudadana; donde se mantienen las intensidades en el uso de la fuerza de manera similar a la PCSD, y se sigue entendiendo que hay una serie de etapas en el proceso de Consolidación. Esta última que ya no se define claramente, puesto que va desde "la consolidación de la paz" (Ministerio de Defensa, 2011, p 21), pasando por "la consolidación del camino a la prosperidad" (Ministerio de Defensa, 2011, p.25), para llegar a la

"consolidación" (Ministerio de Defensa, 2011, p.33) en abstracto, como uno de los objetivos de la política.

Sin embargo, hay que resaltar que la PISDP entiende la necesidad de crear escenarios de estabilidad para que "se abran espacios en los que todas las ramas del poder público, los organismos de control, los sectores productivos, y la comunidad en general deben asumir responsabilidades concordantes con la consolidación de la paz" (Ministerio de Defensa, 2011, p.21). A pesar de esto, el esfuerzo conjunto no tendría un concepto estratégico que ofrezca coherencia en la formulación de la política; sumado a esto, tampoco plantearía escenarios de articulación operativos para la vinculación de la Fuerza Pública en el desarrollo de las capacidades sociales necesarias para el desarrollo.

La consolidación territorial pasa a ser revisada como política con la directiva 06 de 2011, y estará a cargo del recién creado Consejo de Seguridad Nacional. La reformulación de las prioridades de seguridad que se desencadena con el cambio de gobierno y la redefinición de las dinámicas de los actores armados, terminarían por volver la PISPD en una política nebulosa en sus definiciones, y sin un eje articulador entre Seguridad y Desarrollo que posibiliten una acción interinstitucional efectiva. Pese a la situación, la PISPD introduce un elemento innovador en lo que respecta al ámbito socio-económico de la seguridad; en efecto, que el sector de Seguridad y Defensa se pueda convertir en un actor del desarrollo económico del país. En este sentido, hay un par de estrategias que se plantean en el marco del objetivo de fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del sector de Seguridad y Defensa: impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación y alcanzar un Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED)[86] competitivo (Ministerio de Defensa, 2011, pp.38-39).

86. El GSED es parte del Ministerio de Defensa y es responsable de dirigir y orientar la política corporativa de 19 compañías que están al servicio de la industria de la defensa, entre las que se destacan INDUMIL, SATENA, COTECMAR, CREMIL y la CIAC.

En conclusión, la PISPD se formula en un momento de recomposición de las prioridades de la seguridad, introduce un énfasis muy fuerte en la acción policiva (ubicando concretamente a la Seguridad Ciudadana como uno de los más grandes factores de inestabilidad), y las nuevas formas de criminalidad. En este momento de transición, en el que se pasa de un combate contra-insurgente a una ampliación de las amenazas, sobre todo en lo referido a la Seguridad Pública, la PISPD no encuentra elementos conceptuales que le den claridad frente a la relación entre Desarrollo y Seguridad. Sin embargo, introduce una innovación fundamental: pensar el sector defensa como un actor económico.

4.3 Política de Defensa y Seguridad todos por un Nuevo País (PDS)

La Política de Defensa y Seguridad todos por un Nuevo País (PDS) se formula en medio de las conversaciones de Paz con la guerrilla de las FARC, reforzando el tránsito de unas amenazas comúnmente ubicadas en torno a la insurgencia, a la ampliación y definición de las nuevas amenazas a la seguridad. El elemento más importante del contexto es que plantea un escenario de posconflicto (posacuerdo), donde se hace necesaria la reconfiguración de las fuerzas, en torno no solo a las nuevas amenazas, sino como actores de la nueva política de reconstrucción para la paz. En este Sentido, la PDS define como objetivo general: "Coadyuvar a la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico (...)" (Ministerio de Defensa, 2015, p.15). En este orden de ideas, el concepto fundante de esta nueva política es la consecución de la paz. Adicionalmente, se articula de manera directa y clara al avance en este objetivo el hecho del desarrollo socioeconómico, planteando que el sector tiene un papel trascendental en este nuevo escenario; es así como tres de los nueve objetivos estratégicos establecen una relación entre Desarrollo y Seguridad, y ponen de manifiesto el papel de la Fuerza Pública en la construcción de este "nuevo país".

El primer objetivo estratégico de esta nueva política es "contribuir con las capacidades de Fuerza Pública a la terminación del conflicto y la construcción de paz" (Ministerio de Defensa, 2015, p.15), la Fuerza Pública se convierte así en un elemento del Estado fundamental para la implementación de los acuerdos, pero además como lo recuerda la Política "es esencial para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad de la víctimas" Ministerio de Defensa, 2015, p. 16). Esta es una innovación que le presenta a la Fuerza Pública un reto enorme en la construcción de escenarios de desarrollo: la consolidación territorial de las poblaciones que han sido desplazadas producto del conflicto. Es decir que el Sector Defensa, a través del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) y los Comités Operativos Locales de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), se convierten en un apoyo fundamental en la construcción de paz.

No obstante, la concepción en donde mejor se evidencia la nueva mirada del Sector Defensa como "un instrumento del desarrollo económico y social del país" (Ministerio de Defensa, 2015, p.19), donde se hace de manera explícita una vinculación del Sector con el desarrollo del país, es decir se evidencia de manera totalmente clara cómo esta nueva concepción de la Seguridad Multidimensional en el ámbito socio-económico se implementa, es la actual política de Seguridad. Es así como la PDS, pasa de concebir la Seguridad no solo como un elemento estabilizador en los territorios que facilite las dinámicas de desarrollo, sino también como un elemento dinamizador, actor activo y fuerza logística indispensable para el desarrollo de la estructura social del Estado en un acuerdo de paz, sumados al elemento empresarial que se había incluido desde la PISPD. Incluso este nuevo elemento como dinamizador del desarrollo, lleva a que las capacidades desarrolladas por la Fuerza Pública se aplique a "la ejecución de obras de alto impacto estratégico, contribuyendo así al incremento de la presencia Estatal en aquellas zonas de consolidación donde

existan mayores necesidades y se tenga mayor accionar de grupos al margen de la ley y de crimen organizado" (Ministerio de Defensa, 2015, p.19), esto a través de los Batallones de Ingenieros.

Esta nueva concepción del papel de la capacidad instalada de la Fuerza Pública en los territorios, así como el conocimiento profundo de las diversas zonas del país, redefinen el papel que tiene el Sector de la Seguridad y Defensa frente a los nuevos retos que propone el contexto del posacuerdo y la paz; especialmente, en el papel que deben asumir como garantes de las condiciones de seguridad para el desarrollo y como dinamizadores del mismo. Dicho papel dinamizador se entrecruza con la característica de actor activo a través del GSED; este objetivo de la PDS tiene elementos que contribuyen no solo a la generación de excedentes monetarios, sino que pretenden convertir al GSED en uno de los referentes de innovación tecnológica en la industria de la Defensa, a partir de la aplicación de estas tecnologías a los campos civiles pertinentes y el apoyo a la logística del desarrollo en el posacuerdo a través de instituciones, como por ejemplo, SATENA.

5. Seguridad y Desarrollo

Como se ha venido evidenciando, el ámbito socio-económico de la Seguridad Multidimensional presenta una relación estrecha entre Desarrollo y Seguridad. La forma en que estos dos conceptos interactúan, van dando forma a una perspectiva de la Seguridad que se involucra con diversos grados de intensidad en el desarrollo nacional. Esta relación entre desarrollo y seguridad presenta dos grandes vertientes en las Políticas de Seguridad analizadas: por un lado se asumió la seguridad como condición para generar condiciones de desarrollo y por otro, se asume que el desarrollo tenía una relación dinámica con la construcción de Seguridad, es decir, que una sociedad poco desarrollada podría generar mayores escenarios de inseguridad o al menos crear ambientes

donde actores armados ilegales podrían influir de manera más efectiva en el tejido social.

De cualquier manera, las Políticas de Seguridad a partir del 2006 entienden que hay una relación importante entre las políticas de Seguridad y el desarrollo, y establecen pautas de acción que permitan consolidar espacios territoriales donde son posibles las actividades que generan las dinámicas sociales y económicas para el desarrollo.

Estas concepciones tienen matices que están determinados por las visiones de cada gobierno, sin embargo mantienen latente la preocupación del desarrollo socio-económico en las políticas de Seguridad, al punto que se desarrollan institucionalidades que acompañan los esfuerzos por parte del Sector de la Seguridad y la Defensa para alcanzar las metas de las políticas de Seguridad Multidimensional ancladas al desarrollo, permitiendo impactar diversos indicadores de bienestar social.

Uno de estos indicadores de bienestar es la pobreza; sin embargo, en torno a este concepto existe todo un debate acerca de su significado y las implicaciones que tienen estas definiciones en las acciones que el Estado realiza para superar esta condición, por lo cual el siguiente aparte de este documento discurre sobre cómo se entiende este concepto y las implicaciones que tiene para la acción del Estado, analizando cómo la inclusión del enfoque de Seguridad Multidimensional en especial el ámbito socio-económico, aporta a la reducción de la Pobreza Multidimensional de acuerdo a los indicadores.

5.1 De la pobreza monetaria a la Pobreza Multidimensional

Los abordajes teóricos de la pobreza son múltiples y por ende, el concepto no tiene un significado único; su definición e interpretación varían de acuerdo a

la posición en el debate sobre la pobreza. Spicker (2009) presenta al menos doce definiciones, que se pueden reunir en grandes grupos de acuerdo a los supuestos base que comparten: el primero, concibe la pobreza como un concepto material, en el que las necesidades básicas están en el centro de la teorización. La pobreza es la carencia o privación de bienes y servicios materiales, sumado a que dicha privación tenga un patrón temporal significativo que la perpetúe. Es decir, que la privación sea constante a lo largo del tiempo. Se concibe también la pobreza como la limitación de recursos, es decir la imposibilidad de percibir ingresos para adquirir y consumir los bienes y servicios materiales.

El segundo grupo reúne aquellas definiciones que centran el análisis de la pobreza en el tema de los ingresos y el consumo. Es decir, se es pobre si se está por debajo de un estándar determinado por el Estado y las Organizaciones Internacionales. Una persona pobre vive sin lograr satisfacer sus necesidades básicas respecto al nivel de vida de otros y por ende está en condición de desventaja; la definición se basa en la comparación entre los ingresos y el consumo de los individuos, lo cual puede resultar peligroso porque el estándar se consolida de acuerdo a la sociedad en la que se aplica. En este sentido, el estándar de pobreza para un país desarrollado y uno en vía de desarrollo no es igual, se es pobre de acuerdo a la sociedad en la que se vive. Dentro de este grupo también están las definiciones que parten de la posición económica y la existencia de clases sociales, empleando el nivel de ingresos y el consumo como indicadores. Sin embargo, los mismos podrían considerarse como indicadores de estratificación social que miden la desigualdad social, pero no cobijan en su totalidad el concepto de pobreza.

El tercer grupo de definiciones que ubica Spicker (2009), es el de las condiciones sociales. Allí sitúa las entradas a la pobreza que tienen que ver con la clase social, la dependencia, la exclusión, la vulnerabilidad ante los riesgos

sociales, entre otras. La pobreza es definida como la pertenencia a un grupo que en la pirámide social corresponde al nivel más bajo (socioeconómicamente hablando) y que además, es dependiente de los beneficios que recibe a causa de la condición de ausencia de medios para la subsistencia, lo que produce exclusión puesto que las personas no logran disfrutar ni participar de una vida social en condiciones mínimamente aceptables. Además, la pobreza implica carencia de seguridad básica que deriva en una vulnerabilidad ante los riesgos sociales, que son factores que impiden un disfrute pleno de los derechos fundamentales.

A pesar de que se amplía el concepto de necesidades básicas y se incluyen otras que desbordan la sobrevivencia, como los servicios de carácter cultural y recreativo, estos grupos de definiciones se han venido rebatiendo con la aparición de otras apuestas que entienden la pobreza como un tipo de privación relativa, sobrepasando lo material y el acceso a servicios. Al incluir nuevas variables, la pobreza no se entiende únicamente desde la privación material, sino contempla las privaciones en otras esferas de la vida, que derivan en el posicionamiento de las personas en las mismas (Crespo & Gurovitz, 2002). En resumen, las conceptualizaciones de pobreza son distintas, pero no lo suficiente para que no guarden relación unas con otras. Los conjuntos de definiciones son complejos y diversos, lo que permite entender la pobreza como un asunto multidimensional.

Amartya Sen, Nobel de economía en 1998, ha trabajado en esta última conceptualización. Para él la pobreza puede definirse como "una privación de las capacidades básicas de un individuo y no sólo como una renta inferior a un nivel preestablecido" (Crespo & Gurovitz, 2002). Se es pobre cuando no se tiene la capacidad de elegir entre una forma de vida u otra en determinadas esferas de la vida social y no únicamente cuando se tienen privaciones materiales; lo que no quiere decir, sin embargo, que no se contemple la importancia de un nivel

de renta por debajo de lo establecido, pues en últimas es uno de los principales factores de privación de capacidades de un individuo: la renta es un medio para la ampliación de las capacidades, pero no necesariamente tener un alto nivel de renta garantiza que existan más capacidades. Por el contrario, tener mayores capacidades sí incide directamente en la posibilidad de superar la pobreza de renta. La capacidad es para Sen, la libertad de hacer combinaciones de las formas de realización individual, el poder escoger un estilo de vida sin sufrir de privaciones y participar en el espectro de oportunidades en la sociedad (Vargas, 2017, p.8). Como la pobreza es la privación de dichas capacidades, este enfoque logra superar la visión economicista y material de la pobreza, sin desconocer dichas dimensiones.

Los aportes de Amartya Sen y otros académicos, demostraron la necesidad de superar el concepto de pobreza monetaria y construir mediciones de la pobreza multidimensional, con el fin de reflejar mejor la realidad social. Esta idea ha cobrado fuerza en distintos países y se han realizado importantes intentos para consolidar indicadores que permitan medir no solo la pobreza material, sino las dimensiones de lo que el autor y los académicos incluyen en la pobreza multidimensional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha consolidado diversos documentos en los que se exhorta a realizar mediciones que superen la medición convencional de la pobreza basada en los ingresos monetarios (Figura No. 2). Sin desconocer con esto, las dificultades conceptuales, metodológicas y prácticas que conllevan este enfoque.

Figura 2. Pobreza Unidimensional y Multidimensional

Unidimensional	Multidimensional
Ingreso	Educación, salud, primera infancia, empleo y servicios básicos
Línea de pobreza: Costo de la canasta básica de consumo mínimo	Línea de pobreza: Puntos de Corte sobre al acceso normativo mínimo del hogar

Fuente: DANE, 2017

Colombia no ha sido la excepción; el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han definido una metodología para la medición de la Pobreza Multidimensional que considera cinco dimensiones y quince variables (Figura No. 3), donde se considera una persona Pobre Multidimensionalmente, si tiene un 33% del total de privaciones.

Figura 3. Dimensiones y Variables Pobreza Multidimensional

Dimensión	Variable
1. Condiciones Educativas del Hogar	Logro Educativo Analfabetismo
2. Condiciones de la niñez y juventud	Asistencia Escolar Rezago Escolar Acceso a servicios para el cuidado de la Primera Infancia Trabajo Infantil
3. Trabajo	Desempleo de Larga Duración Empleo Formal
4. Salud	Aseguramiento en salud Acceso a servicio de salud dada una necesidad
5. Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la Vivienda	Acceso a fuente de agua mejorada Eliminación de excretas Material de pisos Material paredes exteriores Hacinamiento crítico

Fuente: DANE, 2017

Cada uno de estos indicadores tiene unos rangos para definir la insuficiencia: Este indicador tiene unas características especiales, frente a la medida monetaria de la pobreza, ya que por un lado no solo está anclada al ingreso de las familias, sino que evalúa la capacidad del Estado de brindar infraestructura social, de servicios básicos, y de fomentar empleos formales, es decir que es un indicador de pobreza que aunque necesariamente responde a los ciclos económicos, mide sobre todo la capacidad de una sociedad para brindar condiciones de estabilidad para el desarrollo vital. En este sentido, la medición de la pobreza multidimensional es más pertinente a la hora de poder evaluar la acción del Estado, ya que en ella se incluyen una cantidad de variables que evidencian la consolidación territorial del Estado, los avances en protección social integral y la capacidad de articular a los ciudadanos al proyecto nacional.

Según el DANE (2017), la pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente desde el 2010, al pasar de 30,4% a inicios de la década de 2010, a 17,8% en 2016; es decir, Colombia pasó de tener 13´719.000 de personas en condición de pobreza multidimensional en 2010, a 8´586.000 en 2016, lo que equivale a una reducción de 5´133.000 personas, en el periodo 2010-2016. En 2016 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 17,8%, en contraste con el 20,2% en 2015, lo cual representa una reducción de 2,4%.

En las cabeceras municipales el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 12,1% en 2016, 2,3% menos que en 2015, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 37,6%, con una reducción de 2,4%. La pobreza multidimensional en las zonas rurales ha registrado la misma tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% en 2016; por lo que el número de personas en condición

de pobreza multidimensional pasó de 5´609.000 en 2010 a 4´068.000 en 2016. Este comportamiento se explica por las reducciones en las barreras de acceso a servicios de salud y las mejoras en el aseguramiento en salud.

Con relación a la pobreza monetaria, el 28,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria en 2016, lo cual representa una variación de 0,2%, frente al 27,8% registrado en 2015. Sin embargo, la pobreza monetaria en las cabeceras municipales aumentó, de 24,1% en 2015 a 24,9% en 2016, en contraste con la reducción de la pobreza monetaria en los centros poblados y zonas rurales, el cual fue de 38,6% para 2016, frente al 40,3% en 2015. No obstante, es significativo indicar que para el DANE (2017), el 8,5% del total de la población estaba en condición de pobreza extrema en 2016; en las cabeceras municipales pasó de 7,9% en 2015 a 8,6% en 2016 y en los centros poblados pasó de 18,0% en 2015 a 18,1% en 2016.

Dichos resultados de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema se explicarían en gran parte por el comportamiento de la inflación en el año 2016. La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria en 2016 fue Bucaramanga (10,6%), seguida por Bogotá (11,6%) y Medellín (14,1%). La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2016 fue Quibdó (49,2%), seguida por Riohacha (45,5%) y Valledupar (35,5%). La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2016 fue Bucaramanga (1,2%), seguida por Pereira (1,8%) y Bogotá (2,3%). La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2016 fue Quibdó (19,5%), seguida por Riohacha (15,3%) y Valledupar (8,7%).

5.2 Seguridad Multidimensional y Pobreza Multidimensional

En este aparte se muestra cómo la adopción de un enfoque Multidimensional de la Seguridad en el ámbito socio-económico, puede haber influido en el

comportamiento de la Pobreza Multidimensional en la última década. Se muestra además cómo un nuevo enfoque de la Seguridad ayuda a consolidar ámbitos de la pobreza multidimensional como elementos del desarrollo. Adicional a esto, se muestra cómo el enfoque Multidimensional no solo se implementa a través de las Políticas de Seguridad, sino que crea y transforma dependiendo el momento estratégico la institucionalidad, respondiendo a los nuevos desafíos de seguridad y de consolidación del desarrollo como elemento de esta.

Como se mostró en la descripción sobre las transformaciones de los conceptos de Pobreza y Seguridad, la adopción de nuevos enfoques que entienden la complejidad de las sociedades contemporáneas, hacen que estos nuevos conceptos conecten con elementos que antes parecían tener un código propio. Es en este sentido que todo tiene que ver con todo, y aunque la afirmación parezca simplista, es parte del desarrollo del pensamiento complejo, y de la explosión de nuevas necesidades sociales. Es importante no perder de vista que en la acción estatal, esta complejización debe tener forma y cuerpo a través de políticas públicas que respondan a momentos coyunturales de las sociedades, así como a la superación de necesidades humanas estructurales. A propósito de lo anterior es que la Seguridad como necesidad de protección existencia y la pobreza como limitación material de la existencia, convergen en el articulador de la vida en sociedad en la Modernidad: el Estado.

La especialización como forma de construcción del conocimiento y de dirigir el Estado en el Siglo XX, produjo sin embargo, que estos ámbitos que naturalmente hacen parte de la vida en sociedad, correspondiera a agencias específicas dentro de la estructura clásica del Estado. Lo que harían los conceptos "multidimensionales" es entender que estos fenómenos pueden separarse en el análisis para intentar comprenderse, pero que en la realidad social se desarrollan sin distinciones claras. Este nuevo entendimiento de la necesidad de articulación

y de pensar políticas interinstitucionales, interdisciplinarias, no es otra cosa que la comprensión de que como en la estrategia, no hay un factor único que pueda explicar, y mucho menos solucionar, los problemas sociales. De acuerdo a esto, se debe avanzar en una articulación de todas las Instituciones del Estado sin dejar de generar tareas específicas, medibles y claras para cada uno de los organismos.

En este orden de ideas, la adopción e implementación de una mirada Multidimensional de la Seguridad, que define conceptos como el de consolidación o que tiene como objetivo la búsqueda de la paz, y que enarbolan a estas búsquedas estratégicas elementos que permiten o dinamizan el desarrollo, transforma las condiciones sociales de las comunidades.

A continuación se aborda la implementación del Plan Integral de Consolidación de La Macarena (PCIM), evidenciando los ámbitos que impactaron en esta estrategia integral de Seguridad y cómo estos corresponden a parte de los ámbitos de la Pobreza Multidimensional, analizando las variaciones de algunos indicadores. Sin embargo, más allá de los resultados, el ejercicio se construye desde la concepción de la Seguridad como un hecho Multidimensional y su impacto en la Pobreza Multidimensional.

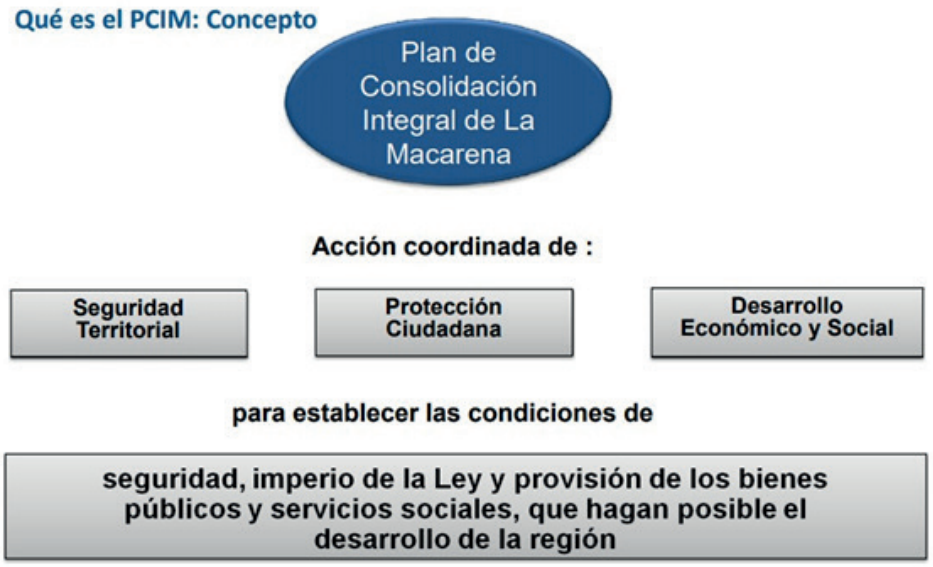
5.2.1 Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM)

Los planes de Consolidación Integral fueron definidos como espacios de intervención integral, en la estrategia de guerra contra-insurgente en el contexto de la Política de Seguridad Democrática, y se implementaron sobre todo en el marco de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Esta concepción de la intervención en los territorios combina los elementos militares del Estado, con herramientas de desarrollo integral en las comunidades. En este

sentido, el PCIM se convirtió en uno de los pilotos para la implementación de esta nueva concepción de la Seguridad.

La zona del PCIM correspondía a los Municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa, La Macarena y San Juan de Arama. Esta zona fue definida por su valor simbólico como uno de los espacios de retaguardia histórica y estratégica de las FARC-EP, además constituía uno de los principales centros de cultivo de coca, y había sido un territorio en disputa intensa teniendo en cuenta que parte de la zona del PCIM estuvo dentro de la zona de despeje en las negociaciones de paz del Caguán. Como se evidenció en la presentación sobre la PCSD, el Concepto de consolidación respondía a una mirada integral de la Seguridad donde se combinaban elementos militares, con la intervención de las Instituciones sociales del Estado, esto se recoge en el esquema general del PCIM:

Figura 4. PCIM



Fuente: Presentación general del PCIM, Centro de Fusión Regional.

Esta nueva lectura de la Seguridad tiene además una distribución de las intensidades en las que las diferentes fases del Estado entrarán a intervenir en el territorio, como se veía en la metodología del Semáforo, pero que es más claro en la gráfica de la composición del Esfuerzo del Estado: Se evidencia cómo el elemento de Seguridad Territorial que corresponde principalmente a la acción de confrontación de las Fuerzas Militares es intenso en la fase de recuperación y va decayendo sin desaparecer en las otras fases, para dar paso a la acción policial de protección al ciudadano, y sobre todo a la acción Social y de desarrollo económico.

Figura 5. Composición del Esfuerzo del Estado

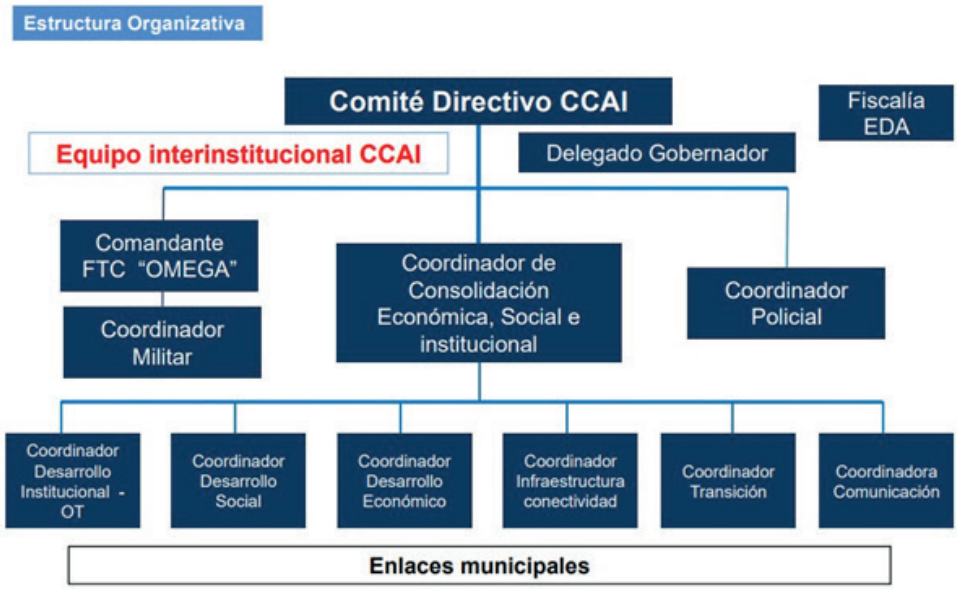


Fuente: Presentación general del PCIM, Centro de Fusión Regional.

Esta nueva concepción de la Seguridad en el PCIM, tiene una expresión en la forma como se construye la institucionalidad, que será la que dirija la implementación del Plan de acción. Se hace manifiesta la necesidad de articulación interinstitucional, y también es importante resaltar el énfasis en los espacios de coordinación como el "Equipo Interinstitucional CCAI".

Se evidencia cómo el centro de la Política es la consolidación Económica, Social e Institucional, pero la estructura muestra gráficamente el equilibrio de esta intervención: está por un lado la presencia de los cuerpos de la Fuerza Militar, en cabeza del Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y el representante de la Policía Nacional.

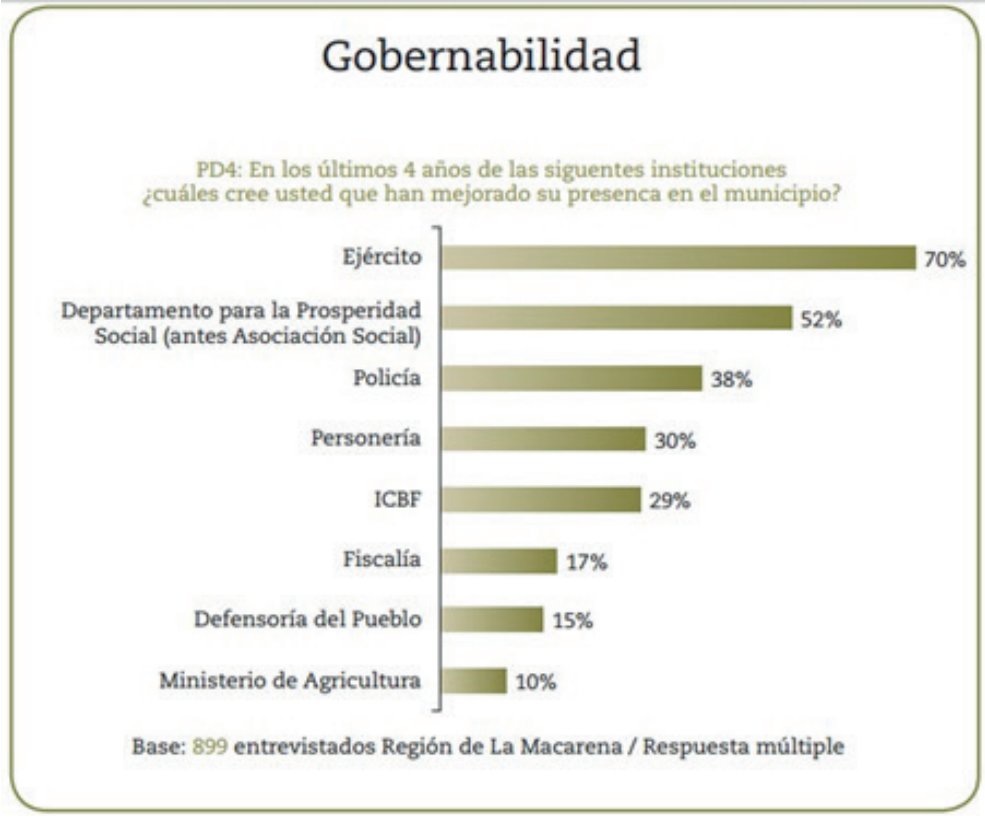
Figura 6. Estructura Organizativa Equipo Interinstitucional CCAI



Fuente: Presentación General del PCIM, Centro de Fusión Regional.

La intervención social define unas estrategias de intervención que tienen como pilar la conectividad física y comunicativa, pero que también se sostiene en la necesidad del ordenamiento territorial, el desarrollo institucional, la provisión de servicios básicos, y el desarrollo económico. Este equilibrio en la presencia de las instituciones del Estado se refleja en la percepción que tienen las comunidades acerca de la presencia de las Instituciones en el Territorio, de manera que corresponde casi a la estructura organizativa de los CCAI.

Figura 7. Percepción de Gobernabilidad



Fuente: Revista Arcanos No 18, Diciembre de 2013. Fundación Nuevo Arco Iris.

Figura 8. Acciones de Consolidación



Fuente: Presentación General del PCIM, Centro de Fusión Regional.

Estas prioridades en las áreas estratégicas se evidencian en la estructuración presupuestal, donde la consolidación de la interconexión vial y de comunicaciones, absorbe una gran parte del presupuesto para el Plan, seguido por las inversiones en desarrollo social.

Figura 9. Inversiones PCIM

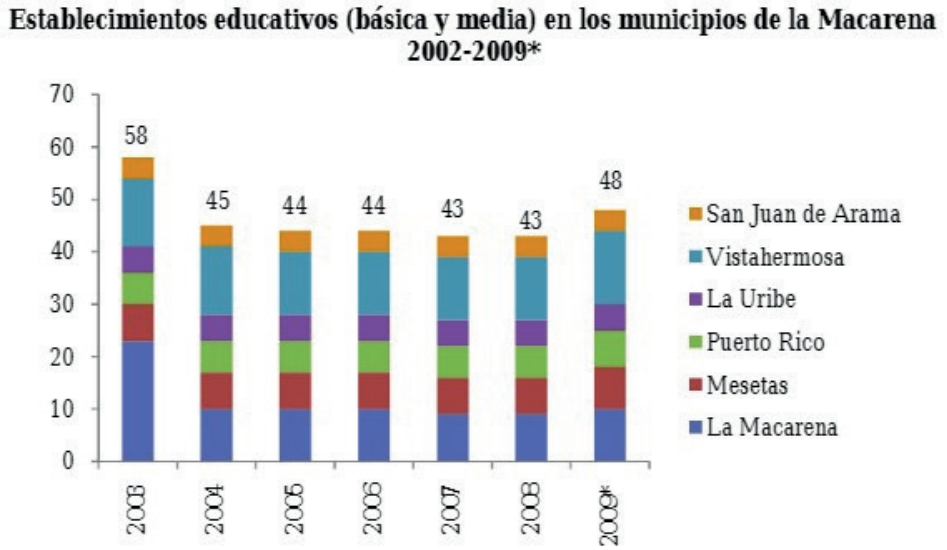
Resumen de inversiones por área estratégica en la zona del PCIM.

Área Estratégica PCIM	Millones de pesos	Millones de dólares
Acciones de Transición	4.286	2,1
Desarrollo Económico	17.112	8,6
Desarrollo Institucional	2.139	1,1
Desarrollo Social	74.848	37,4
Infraestructura y Conectividad	246.589	123,3
Ordenamiento Territorial	12.000	6,0
Protección Ciudadana	3.182	1,6
Comunicaciones	426	0,2
Total general	**360.582**	**180,3**

Fuente: Presentación General del PCIM, Centro de Fusión Regional

Por último se muestran algunas de las cifras que permiten evidenciar los impactos del PCIM en sus primeros años de implementación. Se toman las que corresponden a indicadores de la Pobreza Multidimensional. Para la lectura de las cifras, hay que tener en cuenta que en los años anteriores a la implementación del PCIM estas zonas sufrieron una fuerte confrontación armada entre el Estado y las FARC. Para la lectura de este indicador de establecimientos hay que tener en consideración, la unificación de instituciones educativas que se adelantó desde el año 2003, y que los años de implementación del PCIM, son a partir de la segunda mitad del año 2007. Se ve un impacto a partir del año 2008 de las inversiones en educación.

Figura 10. Establecimientos Educativos La Macarena



Fuente: Ministerio de Educación, 2010.
Nota: (*) la información para 2009 es preliminar.

Fuente: Documentos CEDE, 2011. Una evaluación del Plan de Consolidación Integral de La Macarena. Universidad de los Andes.

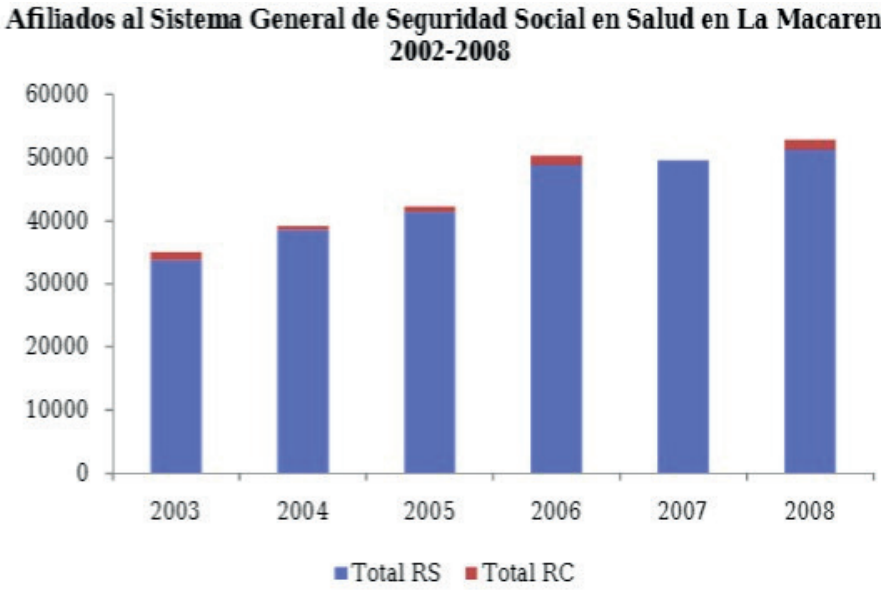
Figura 11. Establecimientos Educativos por Zona



Fuente: Documentos CEDE, 2011. Una evaluación del Plan de Consolidación Integral de La Macarena. Universidad de los Andes.

En este hecho es fundamental evidenciar la creación del Centro Regional de Educación Superior en alianza con Unillanos. Por último, la afiliación en el régimen contributivo, evidencia una leve formalización laboral que responde a una reactivación económica de alguna relevancia que permite generar empleos formales.

Figura 12. Afiliados a la Seguridad Social



Fuente: Documentos CEDE, 2011. Una evaluación del Plan de Consolidación Integral de la Macarena. Universidad de los Andes.

6. Conclusiones

Las transformaciones que impactan al mundo luego de la caída del muro de Berlín, unido a la complejización de las sociedades contemporáneas, el nacimiento de enfoques que intentan abordar con mejores instrumentos la realidad social, y el cambio de escenarios en los conflictos, han llevado a que el concepto de Seguridad tenga una transformación profunda. En el seno del Sistema Interamericano este ha asumido la forma de la Seguridad Multidimensional. Este concepto no solo es una nueva manera en que los

teóricos de la Seguridad piensan el fenómeno, sino que tiene unas profundas implicaciones en la manera en la que se formulan las políticas de Seguridad en el Continente; en este sentido, se amplían las dimensiones de la Seguridad, se transforman las amenazas y se modifican las prioridades de Seguridad.

En el caso colombiano esto ha tenido sus efectos. En este trabajo se abordó específicamente la dimensión socio-económica de ese impacto y se evidenció cómo las políticas de Seguridad desde el año 2006 han venido incluyendo conceptos ordenadores que tienen como ejes elementos del desarrollo. Estos han evolucionado empezando por una visión de la Seguridad como condición de estabilización para el desarrollo, pasando por volverlo un sector de la economía, para finalmente consolidarlo como un factor del desarrollo económico y la construcción de la paz. Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre Seguridad y Desarrollo parece un binomio inseparable en las políticas de seguridad contemporáneas, más aún, cuando se ha evidenciado que la Fuerza Pública no es solo un garante de la estabilización, sino que debe saltar a ser un actor en el proceso de reconstrucción social del territorio, particularmente en los espacios vacios. Adicional a esto, las últimas políticas han despuntado la capacidad de convertir el GSED en un actor dinámico dentro de la economía nacional, posicionando la experiencia acumulada como un recurso estratégico de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el momento actual impone unos retos trascendentales para la Fuerza Pública y es que con la posibilidad de un acuerdo con las principales insurgencias, se abre un gran escenario de redefiniciones estratégicas en torno al papel que deben cumplir en el posacuerdo. Como consecuencia, el PDS establece una serie de funciones que impone dos grandes desafíos: el primero, ser una piedra angular en el retorno de las víctimas del desplazamiento en el proceso de Restitución de tierras, y el segundo, ser un garante de la reinserción

de las fuerzas insurgentes con quien hasta hace pocos años la Fuerza Pública combatía.

Sumado a lo anterior, la nueva concepción de Seguridad enarbola al sector como un pivote de las nuevas necesidades del Estado en torno a la expansión en el territorio, que tiene como elemento principal dentro de las Fuerzas unos aprendizajes valiosos; estos son principalmente el conocimiento en el territorio, su capacidad logística y el desarrollo de capacidades técnicas y profesionales en sectores de gran impacto en el desarrollo nacional. En este sentido, las transformaciones de la Fuerza Pública deben responder a este nuevo escenario, vinculándose de manera activa a este nuevo proceso de reconstrucción nacional y de consolidación territorial de la paz; al mismo tiempo que continúa en el desarrollo de las tareas de acción militar-policial que le son propias. No obstante, al interior se debe entender que el país se encuentra en un momento nodal de definiciones históricas donde la Fuerza Pública tiene que estar a la altura de los retos que impone la historia.

Capítulo IX

Convergencia de la Seguridad en Colombia: Terrorismo y Delincuencia Organizada[87]

Felipe Barrera Herrera
MY. Ángel Riveros Cruz
MY. Javier David Ospina Rubiano

1. Introducción

La convergencia es un fenómeno criminal que en la actualidad llama especial atención de los analistas por la dificultad para identificarla (en especial en aquellas áreas remotas con escasa presencia del Estado) y por el alcance de las alianzas económicas y criminales entre grupos terroristas y organizaciones criminales (Chaya, 2012). Generalmente, este fenómeno se entiende como la alianza entre el crimen transnacional, terrorismo, insurgencia y corrupción, En este sentido, se han detectado y analizado estrechos vínculos operacionales entre grupos terroristas y el crimen organizado transnacional, que adoptaron tácticas del uno y del otro, sobre todo en las regiones de conflictos prolongados desde un enfoque multidimensional y permanente, es decir, adoptando diversas perspectivas y actividades ilícitas con una perduración constante en determinados espacios (PFPC, 2014).

Así, el contexto de seguridad internacional actual, así como el interés de los países desarrollados por estudiar las manifestaciones de la convergencia y sus impactos en los sistemas sociales, políticos y económicos, dan fe de la

87. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

importancia de este fenómeno en la agenda política a nivel mundial (Treverton et al., 2009).

Hace un par de décadas un experto en seguridad nacional distinguiría con facilidad los rasgos característicos de una organización terrorista y los de una organización criminal; sin embargo, el avance en los sistemas de información y la facilidad que ofrece el mundo globalizado para generar redes de contactos, sumado a la des-financiación de organizaciones terroristas por parte de Estados soberanos luego del final de la Guerra Fría (López, 2016), difuminó la línea divisoria entre ambos grupos (Ibáñez, 2013). En la actualidad se reconoce que el fenómeno de convergencia va en aumento y será uno de los aspectos definitorios de las políticas de seguridad en los próximos años (Makarenko, 2004).

Los grupos terroristas yihadistas y sus vínculos con traficantes de drogas y piedras preciosas, además de sus conexiones para el tráfico de dinero y armas, son un ejemplo claro y representativo del panorama de seguridad global (Chaya, 2012). Otro ejemplo se encuentra en México, donde los carteles de la droga bien conocidos por sus actividades criminales como en el robo, la extorsión y el tráfico de dinero, armas y droga, han incursionado en el mundo del terrorismo con el fin de ejercer control total sobre los territorios en los que operan (Guillermo & Rojas, 2008).

Este panorama de asociación de grupos criminales con grupos terroristas y viceversa, no es ajeno a la historia de Colombia; a lo largo del último siglo son diversos los grupos terroristas y criminales que han flagelado el país. Debido a esto, se encuentran apartados históricos donde el fenómeno de convergencia se manifestó y representó un reto para el Estado, sus Fuerzas Militares y policiales. Quizá, el ejemplo más claro se evidenció con los carteles de la droga,

en especial el cartel de Medellín, cuya modalidad en principio fue criminal y que gracias a su inmenso poder adquisitivo, (producto del imperio de la droga construido en la década de los 80's y principio de los 90's), transformó sus lógicas de clandestinidad por lógicas terroristas como método por excelencia de persecución política (Medina, 2012). Eventos similares ocurrieron con la transformación de los grupos terroristas como las FARC-EP y el ELN en grupos con tendencias criminales, utilizando el secuestro, la extorsión y tráfico de drogas como métodos de financiación (Neira, 2007).

Por ende, la situación del país, la experiencia con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y el pronto proceso de reinserción de ex combatientes de las FARC, ameritan algunas reflexiones en el analisis del desarrollo de la convergencia en Colombia para el surgimiento de las bandas criminales emergentes (BACRIM), con el fin de encontrar alternativas políticas y económicas para el pos conflicto que aseguren el control y la defensa del territorio.

2. Convergencia

La convergencia ha sido un tema de interés para diversos autores alrededor del mundo, los cuales presentan posturas o matices diferentes en su conceptualización. Entre los principales exponentes se encuentran Bovenkerk & Chakra (2004), quienes han sugerido que las conexiones entre las organizaciones criminales y redes terroristas pueden tomar forma de asociaciones, alianzas, confluencias, convergencias o simbiosis, tales como las FARC, el Sendero Luminoso en Perú, el grupo Abu Sayyaf en la Filipinas, entre otros. Por su parte, Makarenko (2004) habla de "nexos crimen- terror"; estos nexos pueden relacionarse con la formación de alianzas entre organizaciones criminales y terroristas los cuales incluyen el uso de la delincuencia como una fuente de financiación. Farad (2012) identifica y explora el papel que juegan los grupos del Crimen Organizado Transnacional (COT) en América Latina, y la

interacción de dichos grupos con las estructuras estatales criminalizadoras, las regiones "apátridas", los actores extra- regionales y las múltiples redes que la explotan. Miklaucic & Brewer (2013), profundizan en los aspectos importantes de la delincuencia transnacional y otras redes ilícitas en un mundo globalizado, describiendo el peligro y la magnitud del reto de convergencia y conexión de estas redes. Asimismo, Miklaucic & Matfess (2016) sugieren que los últimos 10 años han sido testigos de la aparición de un ecosistema alternativo altamente adaptable y parasitario, ambiente propicio para la interacción de actores ilegales de diferente naturaleza insumo fundamental de la Convergencia, basado en el comercio criminal y la violencia extrema, con poca consideración por lo que comúnmente concebimos como el interés o bien público.

Por su lado, Martynov (2014) analiza los problemas teóricos de la criminalización, sus resultados y riesgos existentes prestando una atención especial al crimen convergente, en particular al tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción; su estudio refleja los logros y desafíos en la lucha contra la criminalización de la región en su conjunto y en diferentes países, en especial en México, Venezuela y Colombia. Finalmente, Cockayne (2016) habla sobre la lógica estratégica del crimen organizado, revelando los estados y las mafias que compiten - y que colaboran - en un concurso para el poder gubernamental.

Teniendo en cuenta los anteriores postulados, podríamos sostener que el fenómeno de convergencia es un suceso de encuentros entre estructuras criminales y terroristas que utilizan actividades ilícitas como método de financiación y que cooperan entre sí para cumplir un objetivo en común. Estos encuentros se han visto favorecidos por la globalización, la cual consiste en un intercambio de información, costumbres, ideas y culturas como fenómeno inevitable en la humanidad (ONU, 2010). Es un proceso positivo e impulsador de ideas, precursor de muchos de los avances tecnológicos de la actualidad. Su

influencia es tal, que los sistemas políticos, económicos y culturales son el reflejo del flujo de información, bienes y servicios, propios de una sociedad globalizada. Sin embargo, la globalización vincula actos ilícitos que en consecuencia, traen procesos negativos y caóticos, como ocurren en la globalización desviada, en donde la economía global confluye en la demanda de bienes y servicios ilegales (Miklaucic & Brewer, 2013).

Es difícil establecer con exactitud el inicio mismo de la globalización. Varios exponentes lo ubican en diferentes puntos de la historia. Ferrer (1997) por ejemplo, sitúa la época de la conquista como uno de los principales referentes de globalización en la historia de la humanidad; otros autores ponen como punto de partida la invención del chip, la llegada del hombre a la luna o la creación del internet. Para el caso de Colombia hay diferentes hitos tecnológicos, políticos y económicos, en los cuales se ha manifestado la globalización; por ejemplo, la llegada del primer computador a la empresa Bavaria en 1957, la exportación del café en el siglo XX, Pacto Andino (CAN) en 1969, MERCOSUR en 1999, y el boom ambiental en el 2000 (Castro, 2013). Cada uno de estos sucesos representó en su momento un avance significativo en la economía nacional. Sin embargo, en el marco de la globalización desviada, los grupos criminales lograron configurar nuevas estrategias y modos de relacionarse entre sí, esto sumado al fin de la guerra fría y al fortalecimiento de las normativas internacionales antiterrorismo (Ibáñez, 2013) los cuales acelerarían el cambio de lógicas económicas criminales, obligando a los grupos a desarrollar y emplear otros medios de financiación.

Pero claro, la globalización es tan solo un factor que ha acelerado los procesos de convergencia a nivel mundial. De Lacorte (2013) explica cómo la convergencia se manifiesta en varias modalidades alternativas, las cuales no se presentan en forma explícita natural ni contra natural; esto quiere decir que

no llevan un mismo patrón o una estandarización para poderse generar, sino que se logra bajo unas dinámicas diferenciadas de confluencia, hibridación, y/o cooperación. Cada una de estas dinámicas se daría de la siguiente manera:

Confluencia: Es la forma más básica de convergencia que se presenta cuando grupos terroristas se mezclan dentro de actividades de grupos criminales organizados, mediante acciones para satisfacer sus necesidades logísticas (De Lacorte, 2013).

Hibridación: Se presenta como la trasformación del terrorismo al crimen organizado (Ibáñez, 2013). Esta genera réditos y motivaciones económicas cada vez mayores; por ejemplo, la relación estrecha entre los yihadistas y el crimen organizado propiciada en el Sahel (región eco climática y biogeográfica) comenzaría a principios de 1990. Esta relación distorsionó las relaciones sociales y políticas en dicha región debido al uso del tejido social a manera de refugio y centro de operaciones para los grupos terroristas (Cobo, 2014).

Cooperación: Se presenta cuando grupos criminales toman la decisión de apoyar a grupos terroristas que en la práctica crean asociaciones de mayor alcance o duración; un caso concreto puede ser cuando los grupos terroristas no tienen acceso a material explosivo o documentación, productos que pueden proveer otras organizaciones criminales; ejemplo de esto es Al-Qaeda al mantener contacto con organizaciones criminales rusas y de Europa del Este que intervienen en el proceso con el fin de comprar material químico, biológico y nuclear (Wannerburg, 2003).

Así pues la convergencia es un fenómeno que se puede dar de diversas formas y no requiere características específicas para producirse. Para el caso colombiano muchas de las actividades delictivas de confluencia se presentan a diario y con la presencia de grupos reconocidos en el territorio nacional.

A continuación se analizará el panorama a nivel nacional en términos de convergencia, su origen, sus causas y sus efectos a corto y largo plazo en el panorama criminal del país.

3. Convergencia en Colombia

Cómo ya se mencionó, existirían tres principales formas de convergencia: la confluencia, la hibridación y la cooperación. Si bien existen casos puntuales en Colombia donde la convergencia se originaría a partir de la confluencia y la cooperación, la mayor parte del fenómeno se da por procesos de hibridación. Aquí se hace referencia especialmente a las BACRIM, resultantes del proceso de desmovilización de las autodefensas (AUC).

Con el fin de entender el fenómeno de convergencia en Colombia y sus alcances, es necesario aclarar cuál fue el proceso de desmovilización y sus resultados a corto y mediano plazo. En Julio del año 2005 se aprueba la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, la cual busca "facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la Ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" (Art. 1°, Ley 975). Se trata de un instrumento jurídico que brinda garantías a aquellos individuos que desean dejar la clandestinidad y reincorporarse a la vida en sociedad, y se fundamenta en tres de los cuatro pilares de la justicia transicional (Valencia & Mejía, 2010):

a) Acciones judiciales: Hace referencia a un juicio, propiciado por el Estado u organizaciones internacionales, donde se condena de manera individual, aquellos actores responsables de crímenes durante su trayectoria criminal.

b) Búsqueda de la verdad: Los procesos de justicia transicional tienen como fin esclarecer el objetivo y ejecución de crímenes por parte del grupo criminal

que se somete a la justicia. Todo esto con el fin de ubicar a las víctimas como el principal actor, generando dinámicas de reconciliación y perdón.

c) Reparación: Se considera el paso final en un proceso de justicia transicional, donde las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos reciben reparaciones de carácter material e inmaterial, por parte de las organizaciones criminales y el Estado.

Según el Alto Comisionado para la Paz, entre el 2002 y el 2010 se han desmovilizado colectivamente un total de 31.810 personas pertenecientes a estructuras criminales. Esto se resume en 37 desmovilizaciones de las AUC, 3 de las FARC y 1 del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), distribuidas de la siguiente manera: 31.671 desmovilizados de las AUC, 101 de las FARC y 38 del ERG. Sin embargo, no todas estas cifras corresponden estrictamente a casos de desmovilización postulados a la Ley 975. Para este caso, en el periodo comprendido entre 2005 y 2010 se desmovilizaron 2.961 miembros de las AUC, 25 comandantes paramilitares y 352 miembros de los diversos grupos subversivos (FARC-EP, ERP, ELN y ERG). Además, se privaron de la libertad a 1.008 miembros de las AUC (Valencia & Walker, 2010).

Es evidente que la Ley de Justicia y Paz representó un cambio radical en la situación de las organizaciones criminales a nivel nacional, pero los vacíos jurídicos y la falta de garantías para los desmovilizados degradaría el proceso de reinserción y motivaron a los desmovilizados a reincidir en actos delictivos. Según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el "Sexto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia" del 2006, se registraron irregularidades en el proceso de reinserción en tres sentidos:

a) El reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; en esta área se incuban los grupos en los cuales no hay control de grupos guerrilleros y no hay presencia de la Fuerza Pública. Realizan actos delictivos en cascos urbanos donde anteriormente ejercían control las AUC; donde se puede identificar convergencia por la categoría de hibridación y confluencia con implicación de otra actividad delictiva como la extorsión. (Mapp, 2006, p.8).

b) Reductos: Miembros de las AUC que al no desmovilizarse permanecen desarrollando actividades delincuenciales en las mismas áreas de influencia (control de cultivos ilícitos y comercialización de base de coca). (Mapp, 2006, p.9).

c) Aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados: Este caso se presenta en lugares donde existen economías ilícitas consolidadas. (Mapp, 2006, p.9). En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2005 (CIDH), se evidencia que para aquellos desmovilizados que no participaron en procesos de reinserción se presentó el fenómeno de rearme o la creación de nuevas bandas delincuenciales, continuando así el ciclo de violencia (Comité Interamericano de Derechos Humanos, 2005).

Los tres tipos de formación criminal mencionadas por el Comité Interamericano de Derechos Humanos representan el surgimiento de las BACRIM. En este proceso emergente, la convergencia juega un papel fundamental en el panorama criminal colombiano y en cómo se desarrollaron las pequeñas organizaciones criminales hasta convertirse en verdaderas mafias con estructura interna y lógicas de operación. Vidal (2007) analiza la tipología de las organizaciones criminales y los clasifica en tres grandes grupos: disidentes, rearmados y emergentes. La Tabla No. 1 resume la postura del grupo

de trabajo de Desmovilización, Desarme y Reinserción y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (DDR-CNRR) para definir cada uno de los grupos según sus características principales.

Tabla 1. Clasificaciones Disidentes, Rearmadas y Emergentes.

DISIDENTES	REARMADOS	EMERGENTES
1. Grupos que pertenecieron a las AUC y que no se desmovilizaron por no entrar en el proceso de negociación	Personas y grupos desmovilizados que reincidieron en actividades relacionadas con el crimen organizado narcotráfico y delincuencia común, bien a través de grupos ya existentes o mediante la conformación de otros	1. Grupos que existían y su visibilidad era mínima por la existencia de las AUC
2.Grupos que entraron al proceso y finalmente no se desmovilizaron		2. Grupos que se han constituido luego de la desmovilización de las AUC
3. Reductos de bloques desmovilizados que no se desmovilizaron		4. En estos núcleos aprovecharon los vacíos de poder territorial dejados por las AUC luego de su desmovilización.

Fuente: Grupo de trabajo de DDR-CNRR. (2006)

Dada la anterior clasificación, es clara la influencia que tuvo la convergencia en el proceso de formación de las BACRIM. Si se hablase puntualmente de los disidentes se focalizaría la atención en ex miembros paramilitares que no se acogieron al proceso de justicia y paz. Este es un caso puntual de convergencia en la modalidad de hibridación. Los disidentes cuando se encontraban bajo la modalidad de AUC seguían lógicas anti-insurgentes; a pesar de ello las autodefensas se pueden considerar como un grupo que perpetró acciones terroristas y crímenes de lesa humanidad, lo que los ubica en cierta categoría de grupo terrorista. La hibridación se presenta cuando los miembros de las AUC aún no desmovilizados olvidan sus lógicas anti insurgentes y se dedican a actividades ilícitas, creando organizaciones que buscan el lucro por medio de acciones criminales.

Por otra parte, los grupos rearmados y emergentes se pueden entender a partir de la convergencia en la modalidad de confluencia. Este caso se origina luego de la desmovilización de las AUC, lo que se resume en un aporte de los paramilitares en la estructura de las BACRIM. La confluencia se da cuando ex miembros de las AUC participan en la creación, dirección o protección de estructuras criminales con fines lucrativos. Además de ex miembros paramilitares, estos grupos cuentan con miembros de antiguas estructuras criminales o nuevos individuos que incursionan en el mundo criminal. Cada uno de estos actores, cuenta con lógicas y discursos diferentes que confluyen en el interés de generar activos a partir de actividades ilícitas; en esencia estos tipos de estructuras se tratan de diversos actores con mando unificado y un mismo fin.

Por lo tanto, es evidente cómo la convergencia juega un papel fundamental en las dinámicas del país; sin embargo, las BACRIM ocupan una categoría especial. A pesar de que podemos distinguir entre disidentes, rearmados y emergentes, hay características que comparten todos estos grupos. En este sentido, el término BACRIM se emplea para identificar y categorizar los grupos armados resultantes del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005.

Según Castañeda (2016), una BACRIM hace referencia a grupos de personas que se dedican al tráfico de personas, drogas, combustibles o armas, así como otras actividades criminales, tales como el secuestro, el lavado de activos y el terrorismo. A pesar de la ausencia de una definición legal para las BACRIM, a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), se puede caracterizar una banda o grupo criminal bajo los siguientes criterios (Angarita et al, 2016):

1) No necesariamente armado.

2) Están estructurados en forma empresarial, militar o asociativa.

3) Cuentan con dirección o mando unificado.

4) Utilizan violencia, intimidación, soborno, corrupción u otros métodos.

5) Ejercen control permanente o transitorio sobre áreas de territorio.

6) Buscan la ampliación del territorio, poder y fuerza.

7) Asumen diferentes nombres y actividades.

8) Ocultan su capacidad financiera ilegal.

9) Buscan aumentar su influencia en los poderes públicos y en la sociedad.

Las BACRIM a pesar de ser grupos originados a partir de las AUC, no se pueden categorizar o clasificar de la misma manera. Para comprender la evolución de la BARCRIM y por qué se diferencian de los paramilitares, es necesario remontarse a su origen y estudiar ¿cómo surgen? y ¿bajo qué lógicas operan?

A partir del año 2006 con la desmovilización de los grupos paramilitares se dio prioridad al estudio de los procesos de formación y continuidad de las BACRIM en las regiones azotadas por el conflicto. Según Massé (2015) existe una estrecha relación entre las BACRIM y los grupos paramilitares. Entre los aspectos que comparten estos dos tipos de estructuras criminales, están: las rutas de narcotráfico, la ubicación geográfica y las estructuras o modus operandi, aunque la principal herencia paramilitar es el ascenso al mando de las bandas criminales de jefes o desmovilizados de las AUC (Granada et al, 2009). A pesar de las notables similitudes entre ambos, hay cuatro características distintivas que clasifican a las BACRIM en una nueva categoría de actor armado. Massé (2015) explica cuáles son los cambios de lógica y naturaleza que significaron el surgimiento de las BACRIM en el marco del periodo de post-desmovilización.

En esencia, las BACRIM ya no se reconocen ni se clasifican como grupos contrainsurgentes, mientras que los grupos paramilitares surgieron como respuesta a los grupos guerrilleros. Si bien se conoce que las principales fuentes de ingresos para las AUC eran actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión o el secuestro, estas actividades no eran su razón de ser. Dichas organizaciones mantuvieron su lógica contrainsurgente hasta su disolución en el año 2005. Por otro lado las BACRIM, a pesar de su herencia paramilitar, no obedecen a prácticas contrainsurgentes. De hecho, estas bandas sí tienen como objetivo o razón de ser el desarrollo de actividades delictivas con fines lucrativos. No obstante en la práctica, esta línea divisoria se difuminó con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y la re-movilización de los jefes paramilitares.

Las autodefensas también surgen bajo el abrigo de grandes terratenientes y personajes influyentes en diferentes regiones del país con presencia de grupos guerrilleros. Sin embargo, esta relación entre las elites de la sociedad y los grupos paramilitares se difuminó rápidamente luego del proceso de desmovilización. Esencialmente los paramilitares formaron parte de la maquinaria electoral a principios del siglo XXI en Colombia. Esto queda en evidencia luego del escándalo de la parapolítica. Por su parte las BACRIM no tienen un interés marcado con las elites del país, esta relación ya no hace parte de las lógicas de los grupos criminales, puesto que, las actividades delictivas son su principal objetivo y fuente de financiación. Por último, las BACRIM ya no buscarían la visibilidad. Los paramilitares cometían actos de terrorismo con el fin de hacer visible su influencia y poder sobre los territorios que dominaban. Siempre buscaron legitimar a través de violencia el control que ejercían sobre zonas de interés económico o político. Las BACRIM se caracterizan por la discreción. En su haber no se encuentran actos de terrorismo con el fin de visibilizar un

accionar delictivo. Las organizaciones criminales lo último que quieren es fijar el foco de la Fuerza Pública sobre sus actividades. Por esto, el desarrollo de las BACRIM se da cautelosamente enfocando sus esfuerzos en generar capital y fortalecer su estructura.

En los últimos años, debido a la presión de las Fuerzas Militares y la guerra interna por el control de las rutas del narcotráfico, las BACRIM han presentado fuertes cambios estructurales. En la actualidad las organizaciones criminales son muy diferentes a las que surgieron en el año 2006. A continuación realizaremos un recorrido histórico sobre el origen y desarrollo de las BACRIM, mencionando los sucesos decisivos, que han marcado la evolución de dichas estructuras en el país. Existen antecedes de BACRIM a la Ley de Justicia y Paz. Por ejemplo, los Rastrojos, una organización criminal fundada en 2002 por Wilber Varela alias "Jabón" y dirigida por Diego Pérez Henao alías "Diego Rastrojo", funcionó como brazo armado de Varela en la lucha contra el también narcotraficante del Cartel del Norte del Valle (CNDV), Diego Montoya alias "Don Diego" y su ejército personal "Los Machos" (Insight Crime, 2016). Sin embargo, más allá de esto, se reconoce el inicio de las BACRIM con la desmovilización de las AUC en 2005 y su proceso de reinserción a principios de 2006. La historia y evolución de las BACRIM podemos dividirla en dos capítulos, la era de los Rastrojos y la era del Clan del Golfo; si bien, hay un buen número de organizaciones criminales, fueron estas últimas quienes sobresalen en cuestión de estructura y control territorial. La era de los Rastrojos, como aquí se denomina, inicia en 2006 con el comienzo del proceso de reinserción de los miembros de las AUC y finaliza en 2012 con la captura de sus tres principales figuras: alías "Comba", alías Diego Rastrojo y Alías "El Loco" Barrera; mientras que la era del Clan del Golfo inicia en 2012 con la caída de los Rastrojos y se extiende hasta la actualidad.

El panorama en Colombia para el año 2006 era incierto. Por una parte, un gran número de paramilitares se había desmovilizado con el proceso de la Ley de Justicia y Paz, dejando grandes territorios del país con economías ilícitas sin el control de actores criminales; por otra parte, pequeños grupos de paramilitares disidentes se establecieron en regiones estratégicas para continuar con el accionar delictivo. La unión de estos factores propició la creación de bandas criminales y benefició el desarrollo de economías ilícitas. Según los primeros informes en 2006, había 3.955 integrantes distribuidos en 34 grupos criminales (Pérez & Montoya, 2013). Para este año se registra el nacimiento del Clan del Golfo, conocido antes como los Urabeños (por la región que operaban), la cual fue fundada por Vicente Castaño y operaba con cerca de 80 hombres reclutados y dirigidos por Daniel Rendón alias "Don Mario" y Ever Veloza García, alias "HH" (McDermott, 2014). A pesar del gran número de bandas presentes a lo largo del territorio nacional, fueron Los Rastrojos quienes gracias a su estructura consolidada se apoderaron de grandes extensiones de territorio en especial en la región del Valle del Cauca y las rutas de tráfico hacia el pacífico.

Para el 2007 la situación cambiaría para las bandas criminales. Debido a su crecimiento exponencial, la competencia por las rutas y los territorios se volvió feroz y las bandas iniciaron guerras que acabaron por disminuir la cantidad de integrantes a 2.300 y el número de grupos a 23 (Pérez & Montoya, 2013). Este panorama fortaleció especialmente a dos estructuras, los Rastrojos consolidándose como la principal fuerza criminal a nivel nacional y el Clan del Golfo que tras la desaparición de Vicente Castaño, asumió el control de la región noroccidental del País (McDermott, 2014). Después de la muerte de Wilber Varela en 2008, los Rastrojos dominaban la región del Pacífico y el eje cafetero, y habían incursionado en Santander, norte de Santander y la Guajira. Ese año coincide con los primeros informes de capturados y dados de baja por las

Fuerzas Militares (Pérez & Montoya, 2013); según las fuentes oficiales existían 16 bandas criminales, distribuidas en 94 municipios de 17 departamentos con alrededor de 2.000 integrantes (Indepaz, 2017).

El año 2009 representa un hito en la estructura y modus operandi del Clan del Golfo; en abril del mismo año, alias "Don Mario" es capturado y Giovanni Úsuga asume el control de la organización que toma el nombre del "Clan Úsuga". Dentro de sus principales reformas estaría la creación de un núcleo militar integrado por ex-guerrilleros del EPL y la formalización de alianzas con organizaciones criminales en la Guajira y la oficina de Envigado (McDermott, 2014). A pesar de las 2.450 capturas y bajas registradas por el Ejército y la Policía nacional, este año se identificaría por un crecimiento importante en el número de integrantes que ascendió de 2.000 a 3.749 hombres (Espitia, 2017). En 2010 el Clan del Golfo seguía afianzando su poder, tras sus nuevas alianzas criminales y el control de casi la totalidad de las rutas de narcotráfico en la costa caribe y el noroccidente del país, con presencia en 160 municipios de 17 departamentos (Espitia, 2017). Por otra parte, los Rastrojos gracias a sus alianzas con los hermanos Comba y el Loco Barrera, extendieron su control a casi la totalidad del territorio colombiano, llevando sus actividades ilícitas desde el pacífico hasta la frontera con Venezuela (InSight Crime, 2016). Según el informe de Indepaz, solo 6 estructuras desarrollaban actividades criminales a nivel nacional, con 3.749 integrantes y presencia en 159 municipios de 18 departamentos (indepaz, 2017).

Los Rastrojos, que ya para este entonces eran el grupo criminal más importante, con presencia en 23 de los 32 departamentos de Colombia y una fuerza militar rural de alrededor de 1.000 hombres, controlaban gran parte de las oficinas de cobro y rutas de narcotráfico del país. En 2011 negociaron una tregua

con el Clan del Golfo por el control del bajo Cauca y Cúcuta, propiciando un alto al fuego y disminuyendo el número de integrantes muertos por la guerra entre bandas (McDermott, 2014). Los informes hablan de integrantes distribuidos en 151 municipios, 17 departamentos y 7 bandas criminales (Indepaz, 2017).

El 2012 fue sin duda el año más difícil para las BACRIM en Colombia. Al iniciar el año se registraban 4.170 integrantes, existía un mercado ilícito consolidado y una paz ilusoria entre bandas, un panorama ideal para la criminalidad. Pero las Fuerzas Militares acertaron una serie de golpes importantes a las principales organizaciones ilegales y esto terminó por debilitar las estructuras existentes. Los Rastrojos literalmente se desplomaron luego de la entrega de los hermanos comba y la captura de Diego Rastrojo y el Loco Barrera (InSight Crime, 2016). El Clan del Golfo aunque intentó aprovechar la caída de los rastrojos, también se vio fuertemente golpeado por la muerte de Giovanni Úsuga y la detención de varios de sus líderes, como Juan Diego y Alexander Montoya Úsuga.

A pesar de la presión de las Fuerzas Militares y la captura de sus altos mandos, el Clan del Golfo logró establecerse en los territorios anteriormente dominados por los Rastrojos, y a partir del 2013, se consolida como la principal BACRIM en Colombia. Desde ese momento y hasta el año 2016, los informes de Indepaz coinciden en que operan tan solo tres bandas criminales y el número de integrantes decreció hasta los 3.610 hombres. Más allá de las cifras es importante recalcar el papel que cumple el Clan del Golfo hoy en día; en la actualidad tiene presencia en 27 de los 32 departamentos de Colombia y se distribuyen a través de 279 municipios, controlando mayoritariamente el tráfico de drogas en todo el occidente y parte del oriente del país.

3.1 Debilidades Estructurales del Estado Colombiano Frente a la Convergencia

En los últimos años, la línea que diferenciaba terrorismo y crimen organizado se ha vuelto más delgada, convirtiéndose en un tema de primer orden entre expertos. Mientras, que hace algún tiempo era claro diferenciar entre crimen y terror, como se ha descrito hasta este punto, hoy en día se ha comenzado a hablar de convergencia entre estos dos fenómenos. Makarenko (2004) cita por un lado el ocaso de la Guerra Fría y la reducción del patrocinio estatal hacia grupos terroristas, y por el otro, la globalización económica y la expansión tecnológica, como principales catalizadores de la convergencia entre el crimen transnacional y el terrorismo. Mientras que De Lacorte (2013) manifiesta que la convergencia, como fenómeno criminal, fácilmente puede ocurrir entre las trayectorias que trazan el terror y otras modalidades delictivas.

Por ende, suficiente evidencia ha demostrado como la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, le han permitido a estas organizaciones enfrentar más eficazmente a los organismos de seguridad, como fue el caso de las BACRIM descrito anteriormente. De acuerdo a la primera parte de este capítulo, en la cual se describió cómo se desarrolla el fenómeno de la convergencia en Colombia, se ha visto un incremento en las actividades ilícitas de estas nuevas organizaciones híbridas que usan métodos característicos tanto de grupos terroristas como de sociedades criminales (Matfess & Miklaucic, 2016).

Esas alianzas criminales tienen la ventaja de tres elementos fundamentales. El primero de ellos, es la gran cantidad de ganancias obtenidas por operaciones criminales trasnacionales. Segundo, la habilidad de estas organizaciones para reclutar nuevos talentos y reorganizar sus estructuras en espacios que antes estaban reservados a los organismos estatales. El tercero, es su habilidad para

operar en líneas tradicionalmente consideradas exclusivas de los Estados, entre las que se cuentan la diplomacia, el uso de la información y otros factores que tienen que ver con el poder estatal.

Actualmente, organizaciones criminales transnacionales han desarrollado fortalezas que prácticamente les dan la categoría de Estados. Tanto así, que gracias a su capacidad de desarrollo y reingeniería, ahora estas nuevas multinacionales del mal, rivalizan directamente con muchos Estados, e incluso superan a algunos (Stavridis et al., 2013). Es precisamente esa debilidad estatal, la que genera las condiciones necesarias para que estas amenazas convergentes generen desestabilización en el escenario mundial. Según lo manifestado por Shultz et al (2011), "las Fuentes de inestabilidad en el ambiente de seguridad del siglo XXI resultarán en gran parte de la proliferación en el número de Estados débiles y fallidos, así como del surgimiento de grupos armados poderosos, algunos de los cuales tienen la capacidad de afectar la seguridad fundamental causando un daño geopolítico mayor en sus propios Estados" (p. 73). Además, esta proliferación genera nuevas interacciones e interrelaciones entre protagonistas locales, regionales y mundiales. Según los autores, las organizaciones resultantes de estas interrelaciones, usan una serie de medios violentos y no violentos con el fin de ampliar su poder e influencia dentro de aquellos Estados formalmente constituidos.

En el ámbito local, se podría afirmar que Colombia, desde la experiencia descrita con las BACRIM, no es ajena a estas nuevas amenazas convergentes, más si se tiene en cuenta que el país ha estado inmerso en un conflicto armado interno durante los últimos cincuenta años. Al respecto, Matfess & Miklaucic (2016) sugieren que el costo de insurgencias perfectamente interconectadas en países como Colombia, dan cuenta de la gran cantidad de recursos globales que están siendo gastados en la lucha contra estas redes. Dichos recursos, deberían estar destinados a satisfacer las necesidades básicas y el bienestar de

los ciudadanos. Ni que hablar de los costos en vidas humanas, pues de todos es conocido los miles de muertos y heridos que ha dejado la conflagración armada en el país. Así como el fenómeno de la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo no es un asunto nuevo (a pesar de que su estudio lo sea), las fallas estructurales del Estado Colombiano para enfrentar esta amenaza, vienen de tiempo atrás. Afirma Patiño (2013), que la violencia, en sus formas diferentes, con protagonistas diversos, y con la complacencia del sector político, fue una constante durante el siglo XX; heredada del siglo XIX, tras la pérdida de poder regional en favor de la centralización con la constitución de 1886, y acentuada por el narcotráfico en los albores del siglo XXI, la violencia se enquistó en la sociedad colombiana, al punto que le privó de desarrollarse y convertirse en una potencia regional y porque no, en un actor principal en el escenario mundial.

Ese estado de violencia permanente, develó las fallas estructurales del Estado Colombiano para enfrentar la amenaza que suponían las organizaciones armadas ilegales. Desde los mismos inicios de la República y hasta la época actual, algunos políticos y funcionarios estatales han estado involucrados en luchas por la defensa de intereses particulares, dejando de lado los intereses nacionales. Hegemonías alternadas de los dos principales partidos políticos a lo largo del siglo, demuestran como algunos grupos políticos se han "feriado" el país a costa del interés general. Simultáneamente, los ciudadanos, ajenos a la realidad nacional, han buscado su propia forma de supervivencia, en donde ha imperado la ley del más fuerte.

A pesar de que las debilidades estructurales del Estado colombiano para enfrentar las amenazas a la seguridad datan del siglo pasado, actualmente esas fallas persisten. Varios investigadores, entre ellos Escobar (2000), argumentan que las fallas estructurales más resaltantes del Estado colombiano se pueden resumir de la siguiente manera:

- Ilegitimidad del Estado
- Falta de gobernabilidad
- Carencia de liderazgo político
- Incapacidad del Estado para asumir el monopolio legítimo de las armas
- Debilidad estatal para mediar y dirimir los conflictos sociales
- Corrupción, clientelismo y burocracia
- Debilidad del aparato de justicia, impunidad
- Control ineficaz sobre instituciones y servidores públicos
- Incapacidad estatal para hacer presencia a lo largo y ancho del territorio nacional
- Incapacidad reformista de los partidos tradicionales
- Complejidad geográfica del territorio, fronteras porosas, multifronteras
- Prevalencia de intereses particulares sobre los intereses nacionales
- Fragmentación de la sociedad
- Amplia cultura de la economía ilegal
- Carencia de políticas para hacer frente al crimen organizado

Estas deficiencias estatales contribuyen simultáneamente a potenciar dos tipos de amenazas: terrorismo y crimen organizado. Manifiesta Ibáñez (2013), que aunado a estas fallas, las organizaciones criminales tienen unas altas motivaciones que las inspiran, así como unas capacidades y oportunidades que hacen posible la realización de sus planes. En las siguientes líneas se discutirá

cómo cada uno de los factores mencionados afecta las capacidades del Estado para enfrentar la naciente amenaza producto de la convergencia entre crimen organizado y terrorismo.

3.2 Debilidad en la gobernabilidad

La crisis de gobernabilidad en el país, ha hecho que a través de la historia el Estado Colombiano se debata entre el serio deterioro y el colapso total. Según lo expuesto por Mason (2000), "la debilidad del Estado Colombiano es la causa permisiva de su crisis de seguridad y el agravamiento de la situación se puede atribuir al deterioro progresivo de la fortaleza del estado durante la última década" (p.82). La debilidad estatal en Colombia ha estado ligada al conflicto armado interno que por más de cinco décadas ha bañado de sangre al país, generando una reducción en la seguridad y bienestar de los habitantes. La pobre gobernanza, según lo manifiesta Stadivris et al (2013), es por sí misma una fuente de inestabilidad, inseguridad y desorden.

La debilidad en la gobernabilidad en Colombia ha generado la aparente coexistencia de dos clases de Estado. Uno formal, que por sus mismas fallas estructurales es incapaz de llevar a cabo las funciones que le corresponden; y otro, informal, que llena esos espacios vacíos dejados por el Estado legalmente constituido, llegando en muchos casos a reemplazarlo. En lugares en donde el Estado Colombiano ha dejado de satisfacer necesidades de la población como construir casas, pavimentar vías, o brindar condiciones de seguridad, han llegado grupos terroristas (FARC, ELN) quienes en connivencia con delincuentes comunes han llenado esos espacios, y en muchas ocasiones, usando sus propios métodos, han "ayudado" a los pobladores a suplir esas necesidades.

Según lo manifiestan Esparza et al (2015), "en este país, al igual que en muchos países latinoamericanos, existe una fragmentación y debilidad

del Estado que implica poca efectividad, ineficacia y poca credibilidad. Mencionados factores generan distanciamiento y desconfianza de la sociedad hacia el Estado y su estructura de funcionamiento" (Tarapuez, citado por Esparza et al., 2015, p.34). Esas fallas estructurales generaron las condiciones necesarias para que una parte de la población (elemento esencial del Estado), resentida y ajena a la realidad nacional, se organizara y se levantara en armas contra el Estado. En consecuencia, surgen grupos armados ilegales y otros actores como narcotráfico y crimen organizado quienes actuando de manera conjunta lograron desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas.

Esa falta de comunicación, de armonía y conexión entre gobierno y sociedad, genera una desarticulación entre estos dos elementos esenciales estatales, lo que conlleva a una crisis de gobernabilidad. Por un lado, se encuentran los políticos, para quienes lo más importante sería la defensa de sus intereses y el enriquecimiento propio a cuestas del erario público. Por el otro, se encuentra la población, esa inmensa minoría para quienes lo único que importaría es la supervivencia, la ley del más fuerte, en la que cada quien hala para su lado, desentendiéndose de los asuntos estatales y del bienestar común, para concentrarse en lo meramente personal. Es esa falta de entendimiento entre unos y otros, lo que hace débil a la sociedad y, por consiguiente hace al Estado aún más débil e incapaz de proveer a esa sociedad lo mínimo necesario para su bienestar y desarrollo.

3.2.1 Carencia de liderazgo político

En una reunión con estudiantes en Cali, el hoy ex ministro de minas Luis Carlos Valenzuela, manifestó: "el problema de Colombia no es un problema de guerrillas, tampoco es un problema económico. El problema de este país, es que poco a poco se quedó sin élite; se quedó sin quién lo quiera dirigir; (citado

por Ahumada et al., 1999, p.60). Un pronunciamiento muy interesante, más si se tiene en cuenta que desde el mismo gobierno se cuestiona la capacidad de liderar de la dirigencia colombiana. Si así se ven desde adentro, ¿cómo los verán los de afuera?

La carencia de liderazgo de quienes ostentan el poder en Colombia, genera unas debilidades estructurales de enormes consecuencias en la lucha contra la convergencia crimen- terror. Individuos empoderados, que han sido elegidos por el pueblo para que los represente, en muchas ocasiones no reúnen las condiciones éticas ni las capacidades profesionales para desempeñar sus funciones. Una vez en el poder, se olvidan de las promesas hechas a sus electores, dedicándose en cambio a favorecer intereses propios y de terceros. Mientras tanto, la gran masa poblacional, carente de lo mínimo necesario para su bienestar, busca la manera de sobrevivir a como dé lugar.

3.2.2 Burocracia estatal: corrupción y clientelismo

La burocracia se refiere a la serie de trámites necesarios para resolver un tema de carácter administrativo. Sin embargo, no siempre funciona de manera ideal, debido principalmente a la corrupción. La corrupción es una práctica que consiste en aprovecharse de una situación para sacar provecho en beneficio propio o de otros; tiene matices sociales y económicos. Sociales, por el mero hecho de ser una actividad que involucra seres humanos; económicos, en cuanto a que está motivada por la obtención de beneficios que finalmente van a estar representados en dinero.

Por otro lado, el clientelismo es aquella tendencia al favorecimiento de personas u organizaciones con el fin de obtener su apoyo incondicional. Podría decirse que es otra forma de corrupción. En Colombia, la precariedad

del Estado y la debilidad institucional han sido catalizadores del fenómeno de la corrupción. Como lo anota Nieto (1996), "la sociedad colombiana no ha logrado construir claras fronteras entre lo público y lo privado, ni desarrollar una ética de lo público. Desde sus orígenes el Estado fue «privatizado», al ser colocado al servicio de los intereses particulares de una pequeña élite" (p. 23). Esos intereses particulares de unos pocos, han reemplazado a los intereses nacionales, al punto de llevar al país al borde de una crisis moral que se alimenta de factores tan diversos como la cultura del narcotráfico, la inequidad, la débil gobernabilidad, y por supuesto, la corrupción.

Según estadísticas de Transparency International Colombia, entidad que mide el índice de percepción de la corrupción, para el 2015 el país obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), ocupando el deshonroso puesto 83 entre 168 países evaluados. A nivel regional, ocupa el puesto 12 de la tabla, ubicándose incluso por debajo del promedio latinoamericano (Dinero, 2016). Estas cifras no dejan de ser alarmantes, pues a pesar de los múltiples controles tanto en el nivel nacional como regional, el país no avanza en temas de lucha anticorrupción.

Argumentan Matfess & Miklaucic (2016) que "el Estado en Latinoamérica ha sido bastante efectivo en proveer cobertura, seguridad y acceso a los recursos para unos pocos, mientras ignora las necesidades de la mayoría" (p. 27). En el caso particular de Colombia, la creciente preocupación por la corrupción e inequidad y olvido estatal de los más necesitados, motivó la conformación de grupos insurgentes de tendencia izquierdista cuyo discurso se basó en la búsqueda de la igualdad y la justicia social. Años después, estos grupos terminaron por involucrarse con el narcotráfico y asociarse con otro tipo de organizaciones criminales para continuar robusteciendo sus ambiciones económicas y políticas.

Así las cosas, la corrupción estatal presente en Colombia a mediados del siglo XX, impulsó el surgimiento de grupos criminales. Setenta años después, esa misma corrupción se convierte en una debilidad estructural del Estado para combatir a los grupos que ayudó a crear y que hoy en día se encuentran más fortalecidos gracias a sus alianzas con nuevas organizaciones criminales. La defensa de intereses económicos particulares ha privado a la sociedad colombiana de obtener lo necesario para su bienestar y desarrollo, es decir para su seguridad. De acuerdo a Drumhiller (2014), "el componente criminal no es autosuficiente para lograr sus objetivos, razón por la cual se apoya en la corrupción estatal para asegurar el cumplimiento de sus pretensiones" (p.120). Respecto a los nexos entre los actores ilegales y el Estado, Garay et al (2008), manifiestan que:

> Cuando se agudiza la participación de la mafia en la dinámica de corrupción pública en un Estado, el soborno deja de ser el único mecanismo de persuasión y el beneficio económico el único objetivo perseguido. En estos casos, pueden surgir escenarios de corrupción más complejos que aquellos caracterizados únicamente en el ámbito económico de baja escala; pueden surgir escenarios complejos de Captura del Estado y, eventualmente, de Reconfiguración Cooptada del Estado (p.10).

La corrupción sirve como facilitador del crimen transnacional, enquistándose profundamente en la sociedad, y privándola del sagrado derecho de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos (Stadivris, 2013). En Colombia, fuentes oficiales confirman que en los últimos siete años, más de 19.000 personas fueron investigadas por casos de corrupción. Además, se asegura que el país anualmente pierde 50 billones de pesos debido a este flagelo (El Tiempo,

2016). Una buena parte de este dinero, fácilmente podría invertirse en mejorar las condiciones de seguridad a través de la lucha frontal contra las amenazas que suponen las alianzas entre el crimen organizado y el terrorismo en el país. De lo anterior, se puede concluir que la corrupción es un fenómeno que debilita al Estado cuando de combatir las amenazas contra la seguridad se trata. Dineros ilícitos, corrompen funcionarios oficiales a tal punto que estos en muchos casos, omiten el cumplimiento de sus deberes constitucionales, ya que previamente han sido "comprados" con dineros de procedencia dudosa. Al respecto, el 6 de Abril de 2017, en conversatorio promovido por la casa editorial El Tiempo, el fiscal general, el procurador y el contralor afirmaron categóricamente que "la corrupción permeó todos los sectores de la vida nacional y si se la deja seguir avanzando, puede atentar contra la democracia misma" (El Tiempo, 2017). Débiles funcionarios, hacen débil a un Estado que cada vez es más impotente para hacer frente a las amenazas contra la seguridad, pilar fundamental de la sociedad.

3.3 Complejidad geográfica del territorio: fronteras porosas y multi-fronteras.

Colombia, país bioceánico, está localizado en la parte más noroccidental de Suramérica, sirviéndole de conexión con América Central. Su área terrestre de 1'141'748 km cuadrados, se localiza en la zona tórrida. Las montañas andinas, atraviesan el territorio de sur a norte dividiendo al país en dos escenarios socio-económicos diferentes. El 33% del territorio nacional se ubica al oeste de la cordillera oriental, en donde vive el 95% de la población. Hacia el este de la cordillera, no hay más que sabanas y selvas habitadas por pequeños nichos de población, en su mayoría indígenas y campesinos, quienes siempre han manifestado su inconformismo al gobierno central, por el olvido en que han permanecido (Moyar et al, 2014).

En la época de la conquista, los europeos se asentaron en aquellas partes del territorio más aptas para la extracción de minerales y producción agrícola, dejando de lado aquellas zonas altas cordilleranas, sabanas orientales y áreas selváticas de poca valía para sus intereses. Siglos después, fue en estos lugares de escasa producción, que el Estado dejó de hacer presencia y que fue aprovechado por grupos de bandidos e insurgentes para escapar de la justicia estatal. Posteriormente estos precarios grupos ilegales dieron nacimiento a las insurgencias izquierdistas, quienes ante la falta de presencia estatal se ganaron la simpatía de los pobladores. La compleja geografía nacional fue aprovechada por los nacientes grupos criminales para guarecerse de la persecución estatal.

Actualmente, la nación cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres. La fijación de los límites fronterizos ha sido uno de los problemas principales que han tenido que atender los gobiernos desde el momento mismo de la creación de la república. El país tiene definidas en su totalidad las fronteras, gracias a las gestiones diplomáticas y tratados con sus vecinos. En cuanto a fronteras terrestres, Colombia limita con Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur, y Panamá por el noroeste (Banco de la República, 2015). Las fronteras en su mayoría son selváticas, en partes delimitadas por caudalosos ríos, presentan condiciones geográficas inhóspitas y son escasamente habitadas (a excepción de pequeñas áreas fronterizas con Ecuador y Venezuela). Esta multiplicidad de fronteras de difícil acceso hace que la presencia del Estado sea escasa y que los controles fronterizos no cumplan con los estándares requeridos para mantener la seguridad y evitar que las organizaciones criminales gocen de cierto grado de libertad para cometer sus ilícitos. Sobre la realidad fronteriza, Fuentes (2008) afirma que:

> Es bien sabido que en los últimos 30 años, se ha producido una progresiva apertura económica, política, social y cultural en el

> hemisferio. La apertura es visible en el incremento moderado, aunque constante, del intercambio de bienes y servicios entre los países de la región y desde la región hacia el resto del mundo, en el explosivo aumento de las migraciones y de las inversiones intrarregionales, en la significativa variación en los niveles de tránsito de las personas y en el surgimiento de una serie de acuerdos bilaterales y multilaterales de carácter económico y político entre los países de la región. Esta creciente interdependencia "positiva" ha venido acompañada de procesos similares de interdependencia "negativa", incluido el aumento del tráfico de armas livianas, el tráfico ilícito de droga, las actividades vinculadas al crimen organizado trasnacional, el lavado de dinero, el tráfico de personas, y el contrabando, entre otros (p.2)

En cuanto a los límites marítimos, el gobierno colombiano también reconoce oficialmente como países limítrofes a aquellos con los que tiene tratados de delimitación marítima y submarina, a saber Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Estados Unidos y Jamaica. El país tiene un área marítima total de 928.660 km2, lo que equivale al 44.8% de la extensión total del territorio. La línea costera sobre el mar Caribe tiene una longitud de 1.600 Km; sobre esta, se encuentran 6 bases permanentes de la Armada Nacional ubicadas en San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Puerto Bolívar, Tolú y Turbo. Por el oeste, se encuentra la línea costera sobre el océano Pacífico, con una longitud de 1.300 Km; tres bases de la Armada Nacional se encuentran apostadas sobre esta área: Bahía Málaga, Buenaventura y Tumaco. (Comisión Colombiana del Océano, 2015).

A pesar de los avances que se han presentado en los últimos años en materia de seguridad marítima, aún hay falencias en el control de la amenaza que

diariamente aprovecha la complejidad de las fronteras oceánicas en beneficio de su empresa criminal. Delitos como la piratería, contrabando, tráfico de armas, migración ilegal, narcotráfico y terrorismo, son parte del diario acontecer criminal en las costas y mares colombianos. Es por esto que la Armada Nacional, tiene como una de sus tareas más exigentes, "la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, a través de la cual se busca derrotar las estructuras de delincuencia transnacional que utiliza nuestros mares para financiar el terrorismo, el crimen y la violencia que afecta la seguridad y tranquilidad de los colombianos" (Armada Nacional, 2015).

De lo anterior, claramente se puede deducir como la inmensidad y a la vez complejidad geográfica del territorio colombiano (terrestre y marítimo), han marcado una debilidad estructural del Estado para contener las amenazas contra su seguridad. Fronteras inhóspitas, escasamente pobladas, y de difícil acceso, han servido de caldo de cultivo a organizaciones tanto criminales como terroristas para llevar a cabo su accionar delictivo. En el peor de los casos, estas organizaciones del mal han establecido alianzas con dos propósitos fundamentales. Primero, combinar actividades con el fin de enfrentar más eficazmente a los organismos de seguridad del Estado. Segundo, a través de alianzas económicas, potencializar sus ganancias producto de las actividades ilícitas que realizan en los "espacios vacíos" localizados en áreas fronterizas.

3.4 Amplia cultura de la economía ilegal

El ser humano actúa de acuerdo a los impulsos que recibe del exterior, por lo que evitará aquellos que le resulten desagradables a cambio de conseguir todos los agradables posibles. Sin embargo, el problema surge cuando esas fuentes de placer se comparten con los demás, o cuando otros interfieren con sus deseos. Como consecuencia, los individuos están en constante guerra

con sus semejantes. De ahí la famosa frase "el hombre es un lobo para el hombre" (Hobbes, 1651). En ese orden de ideas, el sentido de colectividad o bienestar común, pierde relevancia. Simplemente, cada quien se preocupará exclusivamente por su bienestar individual, para lo cual hará todo lo que sea necesario, sin importar si sus acciones son legales o ilegales.

La cultura de la ilegalidad en la que por años ha estado sumido el país, es una manifestación social dañina que afecta la conciencia y hace a la sociedad cómplice de los delincuentes. ¿Qué diferencia puede haber entre un miembro de un grupo armado ilegal y alguien que altera el contador de la luz para que "no le llegue tan caro" el recibo? ¿O que tal el estudiante que hace fraude en el examen, quien compra libros y CD's piratas, repuestos robados o se cola en transmilenio? Ni que hablar de la persona que no respeta el turno en el banco o el que "cuadra" para que en la declaración de renta no tenga que pagar lo que le ordena la Ley. Estos son solo unos pocos casos (pero muy comunes), que a pesar de que generan reproche social, están fuertemente enquistados en la sociedad colombiana, contribuyendo a sumir al país en el subdesarrollo en que actualmente se encuentra.

Con respecto a lo que aquí se postula, cabe citar al escritor Garay (2002), quien con respecto al país, afirma lo siguiente:

> Se trata de una sociedad excluyente y fragmentada que no ha logrado cohesionar al conjunto de los ciudadanos en torno de un proyecto colectivo, de un modelo de desarrollo que no ha incorporado productivamente a gran parte de la población en la vida social y económica de la nación, de la crisis de lo político como instrumento colectivo de construcción de un orden social a partir de su función de representación y expresión de los intereses,

> problemas y tensiones de la sociedad, y de un Estado ineficaz para el cumplimiento de sus responsabilidades básicas y en ocasiones suplantado por intereses privados poderosos. Además, otra de las dimensiones cruciales de la crisis de la sociedad colombiana reside en sus graves "disfuncionalidades" en relación con el proceso de globalización y los condicionamientos que esto puede entrañar para la transformación social, entre ellos, la gravedad de la violación de los Derechos Humanos, la importancia de la producción y la exportación de drogas ilícitas y de sus organizaciones, la profundidad de comportamientos ilegales y de la corrupción pública-privada, la precariedad de la democracia y de la legitimidad del Estado, la debilidad del sistema de justicia y de la aplicación de la ley, la depredación del medio ambiente y la transgresión de la frontera agrícola y el fortalecimiento de la actividad de organizaciones alzadas en armas cada vez más consideradas como terroristas internacionales (pp.27-28).

Importante resaltar la mención que hace el autor acerca de la profundización de comportamientos ilegales y la importancia que se le da en nuestra sociedad a la producción y exportación de drogas ilícitas. La injusticia social, inequidad e incapacidad del Estado para solucionarlas, ha llevado a que la sociedad colombiana una vez victimizada, busque la manera de sobrevivir a como dé lugar. A falta de un proyecto colectivo, de una identidad nacional, los colombianos se han preocupado por su propia supervivencia, sin la menor consideración por el otro, sin pensar que con sus acciones quizás le estén causando daño al otro. Y es que la cultura de la ilegalidad está tan arraigada en nuestra sociedad, que las acciones ilegales referidas (y muchas otras) se han vuelto parte del diario vivir de los ciudadanos.

En Colombia, como en muchos otros lugares del mundo, especialmente en países en vías de desarrollo, la mayoría cree que el gobierno es corrupto, incompetente e incapaz de mejorar sus vidas o de al menos proveerles seguridad. Es por eso que para sobrevivir, las personas se desvían hacia la economía ilegal, siendo susceptibles de caer en los tentáculos de bandas delincuenciales y otros tipos de organizaciones criminales (Shultz et al., 2011). En Colombia, la alternancia en el poder de los dos principales grupos políticos, con sus nefastas consecuencias para el desarrollo de la nación, ha generado gran descontento en la sociedad, al punto de que la mayoría de colombianos desconfía de los políticos del país. Consecuentemente, no hay un interés común, sino que cada quien busca la forma de sobrevivir individualmente aplicando la ley del más fuerte.

Ospina (2008) manifiesta que como la gente en Colombia quiere ser rica, busca el camino de la ilegalidad porque no hay posibilidades de hacerlo de manera legal. En virtud del abandono estatal, esta es una sociedad individualista donde cada uno crece solo, sin oportunidades, en el completo desamparo, arreglándoselas como pueda para salir adelante. Eso hace que la gente viva del "rebusque" y que vea al otro no como el prójimo sino como el rival, como el enemigo. En consecuencia, el colombiano es egoísta e individualista lo que lo lleva a ser muy recursivo y en extremo trabajador. De manera pues, que la sociedad colombiana se sostiene exclusivamente por la capacidad de su gente de trabajar incansablemente y no porque sean las instituciones las que la sostengan (Ospina, 2008). Pero desafortunadamente, en esa incansable y pocas veces recompensada laboriosidad, el colombiano busca salir adelante "a como dé lugar", y es ahí donde se topa con lo ilegal.

Al no haber oportunidades, la población se ve forzada a subsistir de cualquier forma porque hay una familia que atender, porque hay unas necesidades básicas

por satisfacer, porque hay otros que sí pueden o que hacen cosas ilegales, porque si los políticos roban porque los demás no lo pueden hacer; una serie de razones, tanto racionales como irracionales que terminan por degradar aún más a la sociedad. No se trata de justificar los comportamientos ilegales de una buena mayoría de colombianos, pero si el Estado fuera capaz de proveer lo mínimo necesario para el bienestar y desarrollo de la sociedad, la gente actuaría de una manera más racional, responsable, culta y sociable.

La cultura de lo ilegal presente en la sociedad colombiana, se convierte en una debilidad estructural del Estado para enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad. Como se mencionó anteriormente, la gente se ve forzada a buscar la manera de sobrevivir a costa de lo que sea, o de quien sea. Individuos altamente insatisfechos y carentes de oportunidades, se ven obligados a ofrecer sus servicios a organizaciones ilegales a cambio de asistencia económica. Hacer parte de redes de narcotráfico, delincuencia común, terrorismo, contrabando, tráfico de inmigrantes, personas, órganos, armas, lavado de activos y un sinnúmero de delitos, le garantiza la subsistencia a miles de habitantes en Colombia. Y a otros, no solo la subsistencia, sino una nueva forma de vida llena de lujos y placeres en la que los principios morales pasan a un segundo plano. Nuevamente, es la sociedad como un todo la que pierde; y si pierde la sociedad, pierde el Estado, mientras las organizaciones criminales siguen fortaleciéndose política y económicamente.

3.5 Debilidad Estatal para hacer presencia en todo el territorio nacional

Las leyes en Colombia, como en cualquier otro país del mundo, existen para garantizar el orden y el Estado social de derecho. Sin legislación, sería imposible la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad. En cuanto a la organización política y los fines esenciales del Estado, dice la Constitución Política de Colombia en su título I "De los principios fundamentales":

> Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
>
> Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" (Constitución Política, 1991).

Sin embargo, y a pesar de que la misma Carta Magna lo estipula, el Estado colombiano se ha quedado corto en muchos de los principios que profesa, en especial lo que tiene que ver con "la prevalencia del interés general, el mantenimiento de la integridad territorial, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Y es que durante muchos años, el estamento político creyó que la presencia estatal se reducía al despliegue de las Fuerzas Militares a lo largo y ancho del territorio nacional: ¿Dónde quedaba entonces el sector educativo, la cobertura en telecomunicaciones, servicios básicos de salud, la infraestructura e inversión social en general?; ¿Acaso no son estos sectores también parte integral del Estado colombiano?

La tradicional debilidad de las instituciones en Colombia, ha hecho de este un país difícil de gobernar. Consecuentemente, "en algunas regiones del país

se ha ido pasando a una situación de captura institucional por parte de actores armados ilegales, aliados con aquellas élites locales y tolerados por las élites centrales" En Colombia, hay instituciones que funcionan más o menos bien pero solo en las grandes ciudades. En el resto del país, las mafias influencian la institucionalidad, si es que la hay. Es allí, en ese 60% del territorio, en donde vive solo el 20% de la población, que hay muy poco de infraestructura, de economía legal, de institucionalidad, en resumen de presencia estatal. "La falta de sintonía entre territorio, economía e institucionalidad da lugar a una presencia diferenciada no solo del Estado sino de los actores sociales que actúan en cada zona con estrategias y comportamientos distintos" (Rebelo & Rebolledo 2010, p.18).

Por muchos años, las mafias, grupos terroristas (FARC, ELN, EPL, etc.), contrabandistas, traficantes y demás organizaciones criminales, han ejercido plenos controles y autoridad en regiones apartadas a donde aún no llega el Estado de manera integral. Comunidades con grandes necesidades básicas insatisfechas, han quedado a merced de grupos criminales que los obligan a hacer parte de sus redes ilícitas a cambio de muy poco. De no acceder a sus intereses, los pobladores son desterrados, despojados de sus pertenencias o en el peor de los casos asesinados. Han sido las Fuerzas Militares, los únicos agentes estatales que han hecho presencia en estas áreas, hasta donde sus capacidades se los han permitido. Mientras tanto, el resto del Estado ha permanecido incólume, creyendo como siempre que el problema de la presencia institucional en regiones apartadas, es solamente de los militares.

Y es que esa poca presencia estatal especialmente en regiones apartadas, le propicia a las organizaciones armadas ilegales las condiciones ideales para su accionar delictivo. En regiones como Arauca, el Catatumbo, Caquetá y Chocó, organizaciones narcoterroristas han implementado sistemas particulares de

"justicia", que finalmente son aceptados por los habitantes, ya sea por simpatía o porque no hay otra opción. Adicionalmente, han construido carreteras, financiado escuelas, prestado servicios de salud y otra serie de funciones que son responsabilidad exclusiva del Estado. Mientras no haya una capacidad estatal para hacer presencia en toda la geografía nacional, los actores armados ilegales seguirán suplantándolo y por ende seguirán fortaleciéndose.

Sin embargo, no todo es negativo. En el país, ha habido intentos por parte del Estado para controlar territorios que alguna vez estuvieron en manos de actores ilegales. Durante la primera década del siglo XXI, bajo la Política de Defensa y Seguridad Democrática, el Estado colombiano fue eficaz en restaurar la Ley y el orden en todo el territorio nacional. Esto fue posible, gracias en primera medida al aumento de las capacidades y equipamiento de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, a la presencia policial en todo el territorio nacional junto a jueces, fiscales y todo el poder jurídico de la nación. Por último, vino la asistencia social, el desarrollo económico, la inversión y el desarrollo en infraestructura que posibilitó la conexión entre las regiones apartadas y los centros de poder (Matfess & Miklaucic, 2016).

Hubo un intento de gobierno decidido a copar integralmente todos los espacios territoriales de la nación. Desafortunadamente, fue una política de un gobierno de turno, mas no del Estado. Con los cambios de gobierno llegan siempre nuevas políticas, lo que resulta en que las buenas acciones se queden a mitad de camino. Factores mencionados anteriormente como la corrupción estatal, la prevalencia de los intereses particulares sobre los nacionales, la falta de gobernabilidad y la complejidad geográfica del territorio, contribuyen a debilitar la presencia del Estado en gran parte del territorio nacional. Como consecuencia, las organizaciones del mal aumentan su poderío regional, lo que en el largo plazo les permite poner en aprietos al establecimiento central.

3.6 Carencia de políticas legales para hacer frente al crimen organizado

Sin una acción completa y decidida del Estado, es imposible hacer frente a las organizaciones ilegales. Puede que haya muchas leyes, decretos y reglamentos pero mientras estos sigan presentando vacíos, o mientras no se apliquen de manera adecuada, las criminales seguirán teniendo libre el camino para cumplir sus cometidos. Juega aquí un rol fundamental el sistema judicial, el cual es considerado como una pieza fundamental para el mantenimiento del Estado de derecho. Según Rebelo et al (2010), hoy más que nunca "es evidente que para enfrentar eficazmente a la delincuencia organizada se necesita más justicia que Fuerza Pública" (p.107). Caso típico de Colombia, en donde el sistema jurídico es inoperante ante la efectiva y acertada acción de los agentes de seguridad estatales.

En cuanto a legislación, en Colombia no se cuenta con una definición oficial del crimen organizado, por lo que cuando se comete un delito, es complejo enmarcarlo dentro de una modalidad delictiva. Adicionalmente, la ausencia de una política coherente hace que no se distinga entre las diferentes organizaciones criminales. En consecuencia, los agentes de seguridad, orientan sus esfuerzos hacia la persecución de todas las actividades criminales, sin detenerse a pensar en la amplia gama de modalidades delictivas. La dificultad en la caracterización del crimen organizado ha hecho que los procesos sean contra los individuos y no contra las organizaciones. Se prioriza la prueba contra el individuo, quedando el delito de concierto para delinquir como un delito secundario de poca importancia (Benavides, 2015).

Manifiesta el ex ministro Rafael Pardo (citado por Mason, 2000), que "el sistema legal colombiano no suministra justicia sistemáticamente ni ha logrado contener la reciente explosión de ilegalidad" (p.10). Esta inoperancia puede darse por diferentes razones; primero, porque el sistema judicial está altamente

politizado y sirve a los intereses de los gobernantes de turno. Segundo, porque el sistema es corrupto y la justicia se termina aplicando solo hacia aquellos que carecen de recursos económicos suficientes. Tercero, muchas decisiones judiciales u omisiones se derivan del miedo, producto de amenazas hacia jueces y fiscales por parte de actores armados ilegales. Como se manifestó anteriormente, puede que haya leyes y políticas claras, pero estas no se aplican en la debida forma.

Todas estas manifestaciones referentes a la ley generan una debilidad estructural del Estado para hacer frente a las amenazas contra la seguridad. Legislaciones débiles, poco claras o inexistentes facilitan el camino a organizaciones dedicadas al terrorismo y los negocios ilícitos. Factores mencionados como la corrupción estatal, el clientelismo y la cultura de la ilegalidad, contribuyen a la carencia de políticas serias para enfrentar la nueva amenaza. Factores que se entremezclan para por un lado beneficiar a unos pocos funcionarios estatales o miembros de la sociedad que trabajan en connivencia con las organizaciones criminales. Por otro lado, dejar expedito el camino a quienes han hecho del crimen, el terror y delitos conexos, una forma de vida, una forma de cumplir sus objetivos políticos y económicos a costa del bienestar de toda una sociedad.

4. Últimas Reflexiones

La sociedad occidental y en particular la colombiana se caracterizan por su optimismo y un saludable estado de ánimo. Prueba de ello es que a pesar de los duros períodos que ha tenido que enfrentar el país, la fe sobre los tiempos venideros no se ha perdido. Según Carrizosa (2014), en el año 2011 las estadísticas mostraban a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Refiere el autor, que casi la tercera parte de la población nace y muere pobre, pero que hay un 5% que asciende en una generación al 20% más rico.

"A pesar de experiencias recientes, como la guerra de más de sesenta años, la pobreza, el hambre, la poca educación, muchos colombianos se caracterizan por adoptar el entusiasmo como estrategia para enfrentarse a la complejidad. El entusiasmo es una característica de la cultura occidental" (Carrizosa, 2014, p. 224).

¿Es la felicidad confesada una estrategia para afrontar la complejidad de nuestra tierra? En numerosas encuestas, más de un 70 % de los colombianos afirma que son felices. En la encuesta Win Gallup del 2013 y el 2014, Colombia figuró como el país más feliz del planeta (Carrizosa, 2014). Sin embargo, a pesar de estas optimistas estadísticas, la realidad muestra que muchos colombianos están lejos de ser felices. Las causas son variadas, pero finalmente conducen a lo mismo: desigualdad en los ingresos, falta de oportunidades, inseguridad, necesidades básicas insatisfechas, disparidad en la distribución de la riqueza y por supuesto corrupción, la cual se convierte en una de las principales debilidades estatales para enfrentar las amenazas. Luego, el hecho de que la sociedad se sienta y viva feliz y optimista, no es suficiente para solucionar los problemas que la aquejan.

¿Cuál sería entonces la solución para las debilidades que privan al Estado de enfrentar las amenazas acertadamente? Habiendo descrito los problemas que aquejan al Estado colombiano para atender las nuevas amenazas, el presente escrito presenta algunas propuestas para hacer frente al problema de la convergencia entre crimen y terror, esa amenaza híbrida que indudablemente se fortalece una vez firmados los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Manifiesta Shultz et al (2011) que "las fuentes de inestabilidad en el ambiente de seguridad del siglo XXI, resultarán en gran parte de la proliferación de estados débiles y del surgimiento de grupos armados poderosos" (p.73); dos elementos a tener en cuenta a la hora de hacer frente a las nuevas amenazas.

Señala Tesillo (2016), que en lo referente a la prospectiva encontramos que "una vasta experiencia internacional enseña cómo el anticiparse a los temas de los que una sociedad tendrá que ocuparse en el post-conflicto, presiona y precipita el fin del mismo y sienta las bases para una paz estable y duradera" (p.132). Se demuestra así, la necesidad de ahondar en las consecuencias que en los tiempos de paz pueden generar factores de inestabilidad y la necesidad de estructurar un análisis que permita contenerlos anticipadamente. Lo anterior es reafirmado por la politóloga Marcela Prieto (citada por Molano, 2014), directora del Instituto de Ciencias Políticas quien manifiesta que "si la firma de la paz concierne básicamente a las partes sentadas en la mesa, la construcción de la paz es tarea de la sociedad colombiana en su conjunto" (p.9).

El acuerdo de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno de Colombia se centró en diseñar líneas para la inclusión de todos los sectores sociales y actores del conflicto. El énfasis se hizo en la reconciliación y la no repetición de los hechos que tanto dolor causaron al país en más de cinco décadas. El optimismo generalizado de la sociedad colombiana frente al posacuerdo es una clara señal de que el futuro es promisorio, a pesar de las dificultades. En consecuencia, la participación de las Fuerzas Militares en la implementación de los acuerdos que finalmente van a llevar a la consecución de una paz estable y duradera, se convierte en pieza fundamental de la estrategia.

4.1 El Plan Victoria como pilar esencial de la estrategia

Con base en la necesidad de adaptar la estrategia a los escenarios del posacuerdo, en el año 2016 se desarrolla el CREI-5 cuyo producto final es el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación "Victoria", cuya primera fase debe desarrollarse entre el 1 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2018. El mismo plan describe el fin del conflicto con las FARC, como "la

continuación del desarrollo de estrategias interinstitucionales que permitan mitigar un conjunto de factores que generan inestabilidad e inseguridad en el territorio" (Plan Victoria, 2016, p. 8). Dicha estrategia integral se debe materializar en un control institucional del territorio, al cual se llegará mediante la acción unificada del Estado y el afianzamiento de la gobernabilidad.

Señalan Matfess & Miklaucic, (2016), que "el siglo XXI será consumido por el épico reto de crear y sostener viables, efectivos Estados" (p.297). Solo con un Estado efectivo y capaz se cumplirá cabalmente la función de brindar lo necesario para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Contrariamente, Estados fallidos y débiles, se amenazan no solo a ellos mismos sino a los Estados vecinos y en general a muchas gentes alrededor del mundo. Por eso, la importancia de la acción unificada como punta de lanza del plan "Victoria", para la puesta en ejecución de los acuerdos de paz de La Habana. A través de un trabajo conjunto, coordinado e interagencial, se logrará fortalecer al Estado, controlar la totalidad del territorio nacional y garantizar la construcción de una paz estable y duradera.

Con la puesta en marcha del Plan Victoria se da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND) "Todos por un nuevo país". La labor de las Fuerzas Militares, contribuirá al alcance del primer Objetivo General del PND "Fortalecer el proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación" (PND, 2015, p. 41). Adicionalmente, el punto 8 del PND hace referencia a la seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz. Se describen aquí los retos en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho para garantizar los derechos de todos los colombianos. Importante el reconocimiento que hace el PND al trabajo de la Fuerza Pública para lograr llevar al más violento grupo insurgente del país a firmar los acuerdos de paz, como se cita a continuación:

Durante los últimos quince años, la situación general de seguridad y defensa nacional ha evolucionado favorablemente como resultado del trabajo sostenido de la Fuerza Pública y el apoyo permanente de los ciudadanos. Los grupos armados al margen de la ley (GAML) y las bandas criminales (BACRIM) vienen siendo desarticulados de manera decisiva, y los factores que potencian su capacidad de daño han sido golpeados sistemáticamente. En el cuatrienio 2010-2014, la Política Integral de Seguridad para la Prosperidad y los Planes Espada de Honor y Corazón Verde, permitieron el debilitamiento de las principales estructuras de comando y control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Bandas Criminales (BACRIM).

Sin embargo, las Fuerzas Militares son las primeras en aceptar que a pesar del gran esfuerzo y sacrificio realizados para conseguir la victoria armada sobre el enemigo, la tarea en el posacuerdo exige aún mayor responsabilidad. Como parte esencial del Estado, es a las Fuerzas Militares a quienes compete la exigente tarea de liderar el proceso de cohesión interinstitucional a fin de lograr las metas trazadas por el gobierno nacional en el PND.

Algunos de los factores de inestabilidad mencionados con anterioridad en el presente documento, se encuentran de hecho plasmados en el Plan Victoria. Amenazas como la corrupción, las fronteras inestables, la carencia de una infraestructura básica, la proliferación de grupos armados ilegales debido a la falta de políticas claras para hacerles frente a la ingobernabilidad, han sido tenidas en cuenta como factores que requieren atención inmediata dentro de la estrategia planeada. Para lo anterior, el Plan Victoria ha determinado 17 áreas de atención prioritaria en todo el territorio nacional, en las cuales se han referenciado 160 municipios con niveles de prioridad Muy alta, Alta Media y

Baja. Es hacia estas áreas críticas especiales, que se focalizarán los esfuerzos interinstitucionales propuestos en el Plan Victoria (Plan Victoria, 2016).

La diversidad de actores con sus modos diferentes de actuación, requiere de unas Fuerzas Militares preparadas para enfrentarlos en medio de un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA). La complejidad del nuevo contexto, hace que converjan diversos factores conformando una "amenaza híbrida" con características impredecibles. Es indispensable para el país, contar con esta fuerza profesional que lidere la estrategia multipolar en el contexto tanto nacional como internacional a fin de garantizar la paz estable y duradera. Consecuentemente, es fundamental la acción integral del Estado y la articulación de sus capacidades nacionales, regionales y locales "que permitan proveer la seguridad, protección, justicia y servicios básicos para el desarrollo económico y social de la población" (Plan Victoria, 2016, pg. 27).

4.2 La importancia de la cultura ciudadana

Aunado a las propuestas anteriores, es importante generar conciencia ciudadana acerca de la necesidad de ahondar en temas tan cotidianos como los principios y los valores que rigen a una sociedad. Mientras la población, parte fundamental del Estado, no se comprometa con un comportamiento responsable, la supervivencia del mismo estará en entredicho. Lo señala Garay (2002):

> La conformación de una civilidad moderna regida por la solidaridad, la tolerancia y la observancia de valores sociales propios de una sociedad multicultural, bajo un Estado Social de Derecho, constituye la base para la transformación del ordenamiento social, político y económico y la potenciación de los recursos disponibles en el país (p. 43).

El ser un buen ciudadano implica no solo cumplirse a sí mismo o a su comunidad sino que se debe ser responsable con el Estado. Hay una normatividad que hay que seguir, como única forma de garantizar el Estado Social de Derecho. Así como hay derechos, también hay unos deberes por cumplir; y tanto los unos como los otros están estipulados en la Constitución Nacional. Preciso citar nuevamente a Luis Jorge Garay, quien propone unos sencillos principios centrales de formación ciudadana:

Desarrollo de un nuevo ethos cultural: orientado a la superación de la raíz de los problemas esenciales de la sociedad colombiana y la potenciación máxima de las capacidades intelectuales y organizativas.

Valoración del reconocimiento moral del individuo y el deber de la civilidad: la responsabilidad del individuo consigo mismo y con los otros en pie de igualdad, como requisito para la formación de una ciudadanía deliberante, autorreflexiva y protagonista del desarrollo de la sociedad.

Legitimación de la prevalencia de principios y valores civilistas con sustento en el aporte comprometido de la ciudadanía: no sólo con un comportamiento propio que haga valer sus derechos, sino además asumiendo la obligación de contribuir para velar y por hacer valer los derechos y deberes de sus conciudadanos (Garay, 2002, p.44).

Bastaría con mirar sociedades consideradas desarrolladas, que han sabido potenciar el desarrollo socioeconómico de su población. Países como Canadá, Suecia, Japón o Australia, se han adelantado a los demás porque simplemente han sabido explotar sus recursos naturales y, esencialmente su recurso humano. Sus ciudadanos son comunes y corrientes, con el mismo coeficiente intelectual que los de países subdesarrollados, pero su formación en valores ha sido tan estricta, que solo tienen en mente luchar por el bien de la sociedad para

sacar adelante sus naciones. Es su civilidad, su nacionalismo, su honestidad y responsabilidad social lo que los ha catapultado en la esfera global, logrando altos estándares en sus niveles de vida.

Normas básicas de cultura ciudadana, que más que aprenderse en los planteles educativos hacen parte de la cotidianidad. Normas que se convierten en factores dominantes que cualquier sociedad debe poner en práctica cuando desea progresar. Previamente, se citaba el Plan Victoria como un modelo para potencializar el desarrollo económico y social de la nación. Pero como complemento de la estrategia, son definitivamente los valores sociales los que constituyen la base para la transformación de la sociedad. En consecuencia, la articulación de estos dos elementos permitirá consolidar los objetivos propuestos por el gobierno nacional en el PND 2014- 2018 "Todos por un nuevo país".

4.3 La política anticorrupción

Uno de los factores de inestabilidad definidos en el Plan Victoria para el posacuerdo en Colombia, es la corrupción. Incluso Shultz et al (2011), se refieren a los "Estados débiles con altos niveles de corrupción lo cual los conlleva a la pérdida de legitimidad" (pp.76-77). Desafortunadamente en Colombia, la corrupción es vista como una forma de vida; y cuando la gente quiere ser rica, hace cualquier cosa por conseguirlo (Ospina, 2008). Es claro, que para el Estado, el recurso más preciado es el talento humano, y que para administrarlo de forma correcta se hace imperativo que este recurso sea íntegro y transparente. Por tal motivo, para frenar el grave problema de la corrupción en Colombia, se requiere de una política seria y responsable.

En primer lugar, es fundamental educar en valores y principios a la gente, en especial a la generación que está surgiendo, desde la misma educación pre-

escolar y primaria hasta la secundaria y profesional. Estos nuevos líderes, quienes en el futuro cercano van a ser los dirigentes, educadores, empleados públicos, militares y gerentes, tendrán el gran reto de desarrollar la nación. Señala Mahbubani (2015) refiriéndose a las razones de éxito por las que Singapur es hoy en día uno de los países mejor posicionado en desarrollo global, "Singapur tuvo la fortuna de que sus primeros líderes fueron brutalmente honestos". Colombia está sedienta de líderes con esta condición, que aunque no son la primera, si representan la generación venidera; o dicho de otra forma, la generación que va a rehacer el país. En segundo lugar y enlazado con el punto anterior, la educación se debe enfocar en el comportamiento de todas las acciones humanas, en la que la ética y la conducta sean los pilares para generar el cambio cultural necesario.

El Estado como un todo, debe impactar en la conducta individual, basando su modelo en tres dimensiones: la primera es la realización de la tarea conjunta de actividades para conseguir los resultados deseados generando la motivación de los individuos y equipos para aumentar la eficiencia y eficacia; la segunda es la actuación ética: garantizar que las actividades cumplan con los estándares de legalidad de acuerdo con los valores sociales; la tercera es la actuación contextual: actividades que contribuyen a la efectividad del equipo de trabajo; representa inversión a largo plazo importante en el entorno organizativo y cultural tanto en las tareas, como en la toma de decisiones éticas (Tagarev, 2010).

En tercer lugar, y también como factor de inestabilidad reconocido en el Plan Victoria, está la lucha contra el narcotráfico. "Si la corrupción tiene en Colombia un significado mayor que en otros países, es porque la gobernabilidad está afectada por la presencia del narcotráfico con su capacidad generadora de corrupción y violencia" (Zuluaga, 1996, p.13). Las Fuerzas Militares como

punta de lanza de la lucha estatal contra este flagelo, deben articular esfuerzos con otras entidades estatales para erradicar este mal que tanto daño le ha causado a la sociedad colombiana. Obviamente que primero se requiere de un autoexamen que permita mirar cómo está el tema de la corrupción dentro de la Institución Castrense, tomar las medidas requeridas, para luego liderar una cruzada anticorrupción a las demás entidades estatales.

Como cuarto punto, la legislación anticorrupción debería ser creíble y ajustada a la realidad. Refiriéndose a Colombia, Mason (2000) manifiesta que "las instituciones gubernamentales son corruptas, ineficientes y excluyentes. El sistema político democrático no funciona en muchas jurisdicciones debido a amenazas y el terrorismo de insurgentes y paramilitares es entorpecido por el clientelismo, la corrupción y la precaria responsabilidad pública" (p. 90). Suficientes razones para que se apliquen penas ejemplares que no contemplen rebajas a los corruptos y que se elimine entre otros, el beneficio de casa por cárcel. De lo contrario, los funcionarios públicos en el país seguirán pensando que vale la pena ser corrupto, pues la "justicia" los favorece.

Por último, hay una serie de medidas que se deben incluir y que como lo señala el Plan Victoria, requieren de la acción unificada del Estado para su implementación. En cabeza de todas ellas, está la conformación de un gran compromiso nacional contra la corrupción, seguida de reducción del aparato estatal, modificación de la ley de contratación, reducción de la brecha social, oportunidades en empleo, salud, educación, infraestructura a todos los colombianos por igual, inversión en las regiones apartadas del país, reducción de la economía informal, respaldo jurídico a la acción de seguridad, incremento de jueces y recursos judiciales contra la corrupción, reducción de la tramitología, la burocracia y el clientelismo, reconocimiento a las buenas prácticas de administración pública, el mérito como requisito indiscutible

para la contratación de funcionarios públicos, rendición pública de cuentas y cooperación internacional, por nombrar algunos.

4.4 Consolidación del territorio

La vastedad del territorio colombiano, con aguas jurisdiccionales en los dos principales océanos y cinco largas fronteras terrestres, hace que la tarea de control territorial sea bastante compleja. Los 6.342 kilómetros de fronteras terrestres sumados a los 2.900 kilómetros de zonas costeras, conforman en su mayoría zonas deprimidas, de geografía agreste y difícil acceso y con muy bajos niveles de calidad de vida. Se trata de espacios vacíos que en su mayoría han estado abandonadas por el Estado y en donde han confluido por muchos años todos los fenómenos criminales imaginables. Se requiere del fortalecimiento de las Fuerzas Militares de Colombia para asegurar la presencia efectiva a lo largo y ancho de las extensas fronteras nacionales. Pero más que eso, es la acción unificada del Estado la que debe asegurar a los colombianos residentes en estas zonas, lo necesario para su desarrollo y bienestar.

Adicionalmente, la "privilegiada posición geográfica" facilita no solo el flujo de la economía legal sino también de la ilegal, o lo que se conoce como globalización desviada. Colombia, al estar situada en el cruce entre Suramérica y Norteamérica, sirve de conducto vital del comercio ilegal mundial. Por su condición particular, la globalización desviada, que se da gracias a la posición geográfica del país, requiere de la acción unificada del Estado para poder enfrentarla. El país debe entender que la tarea es de todos; no se puede dejar en manos de la Fuerza Pública un problema de índole social. Uno de los pilares centrales del Plan Victoria, hace referencia a la recuperación y control militar del territorio, seguido de la estabilización y posterior consolidación. Para esto se requiere de una acción unificada mediante el control institucional del territorio, definido como "la presencia integral de todos los sectores e instituciones del

Estado en los territorios, para restringir espacios a los factores de inestabilidad, solucionar las necesidades insatisfechas, superar los indicadores sociales críticos de las comunidades y proyectar programas de desarrollo autosostenibles en un ambiente de gobernabilidad" (Plan Victoria, 2016, pg. 42). Para lo anterior se han establecido unas zonas terrestres y marítimas de atención prioritaria, lo que permitirá una efectiva cobertura en la extensa superficie colombiana.

Dentro de las tareas de control territorial para las Fuerzas Militares, en contribución al control institucional del territorio se deben desarrollar las siguientes tareas:

1. Intensificar el control territorial en las antiguas zonas de influencia de las FARC
2. Proteger la infraestructura estratégica
3. Proteger el sector minero energético
4. Contribuir a la restitución de tierras
5. Combatir los Grupos Armados Organizados y los Sistemas de Amenaza Persistentes (GAO, SAP).
6. Proteger las minorías étnicas
7. Combatir los fenómenos de criminalidad
8. Proteger las fronteras
9. Combatir las finanzas ilícitas

Las tareas mencionadas se deben lograr a través de un enfoque sistémico, diferencial e integrado en donde la inteligencia, el desarrollo de las operaciones

y especialmente la acción integral desempeñarán un rol fundamental (Plan Victoria, 2016).

El Plan Victoria es en realidad una aproximación a lo que podría ser la solución a los múltiples problemas que enfrenta el país. Luego de la firma de los acuerdos, el turbulento escenario que se presenta, requiere de unas Fuerzas Militares en su máximo de capacidades. Sin embargo, el énfasis, como el mismo plan lo estipula, debe hacerse en la acción unificada del Estado para garantizar a los ciudadanos su bienestar y desarrollo. Mientras el Estado no asegure el monopolio del poder, los promulgados valores de justicia, paz, libertad, convivencia y equidad, seguirán adornando la gran cantidad de libros, decretos y leyes que sobre ellos se ha escrito. Como lo afirma Moisés Naim "la degradación del poder es una de las razones fundamentales por las cuales los gobiernos son cada vez menos capaces de tomar las decisiones necesarias para afrontar los problemas de sus países" (Naim, 2013, p. 323).

Capítulo X
FARC y Al Qaeda: Los Elementos de Convergencia entre el Terrorismo y Narcotráfico[88]

Andrés Felipe Cardona Orozco
MY Carlos Andrés Camargo
MY Jaime Correa Jaramillo

1. Introducción

Los fenómenos de seguridad en la actualidad han demostrado que la comprensión analítica de los temas de seguridad tienen que estar relacionados indiscutiblemente con una serie de nuevos elementos y actores dentro del entorno internacional.

Bien se podría decir que la evolución del concepto de seguridad ha logrado transformarse y comprender los fenómenos más allá de la visión estatal, a una visión más holística y compleja, en la cual interactúan los Estados, las ONG, la sociedad y diversas organizaciones legales e ilegales, frente a un panorama en donde las amenazas también se han diversificado y adquirido dinámicas que sobrepasan la capacidad del Estado.

En la actualidad, el mundo se encuentra en un contexto en el cual las amenazas a la seguridad[89] no radicarían exclusivamente en la conflictividad

88. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

89. La seguridad puede entenderse como una situación en donde un sujeto considera que no está amenazado por ningún peligro o que está en la capacidad de hacerle frente si se hace realidad (DAVID, D. 2000 citada por (DAVID, 2008, pág. 65). Por otra parte y muy en sintonía con lo anterior, CHARLES- PHILLIPS DAVID (2008) entenderá o definirá la seguridad como "la ausencia de amenazas militares y no militares que pueden cuestionar los valores centrales que quiere promover o preservar una persona o una comunidad y que conllevan un riesgo de utilización de la fuerza" (David, 2008). Por otra parte el término seguridad en contexto colombiano, entendido desde la concepción de las Fuerzas Militares (en adelante FF.MM.) se

entre Estados, sino que por el contrario, superan en muchos sentidos la visión estatal y se enfocarían en una visión regional, hemisférica o incluso global. Amenazas como el cambio climático, la pobreza, terrorismo, crimen/ delincuencia transnacional organizada (y todas sus ramificaciones), entre otras, son elementos que generan una presión sobre la sociedad y Estados de manera directa. Ello implica entonces que la respuesta ante dichas amenazas dependerá en principio de los Estados, pero también en un trabajo mancomunado entre Estados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y la sociedad. De esta forma y siguiendo las definiciones planteadas, la seguridad se entenderá dentro de este documento como el escenario en el cual el Estado y sus intereses se encuentren salvaguardados de amenazas, perturbaciones o interferencias de carácter militar o no militar[90].

Con base en lo anterior, la evolución del concepto de seguridad terminaría evidenciando, en primera medida, que el Estado ya no es el único actor o el central de la seguridad, sino que por el contrario incorpora nuevos actores para su comprensión. En esa evolución, la seguridad es definida desde muchos ámbitos; sin embargo, para efectos de este escrito se partirá del concepto establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Seguridad Multidimensional.[91]

entiende como aquella situación en la cual los intereses del Estado se encuentran libres de perturbaciones y de interferencias (COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, 1996, pág. 20).

90. Definición elaborada teniendo en cuenta los elementos centrales propuestos por CHARLES-PHILLIPE DAVID y la definición contenida en el Manual de Seguridad y Defensa de las FF.MM de Colombia.

91. La Seguridad Multidimensional es un concepto elaborado por la OEA y contemplado en la Declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad desarrollada en la Ciudad de México en 2003. En dicha declaración se resalta las nuevas dimensiones y amenazas a la seguridad dentro de la cuales se contemplan el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas y la relación entre ellos, la pobreza y exclusión social, los desastres naturales y de origen humano, la trata de personas, ataques a la seguridad cibernética, la posibilidad de un accidente durante el transporte marítimo de materiales peligrosos y el acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva (Organización de los Estados Americanos 2003).

Si bien es cierto que la concepción de la Seguridad Multidimensional surge desde el Hemisferio Americano, lo cierto es que a través de este concepto se pueden analizar una diversidad de factores que atentan contra el entorno seguro y adicionalmente tiene un rango mayor de aplicabilidad en el contexto internacional.

De esta forma la Seguridad Multidimensional se establecería como un concepto a través del cual se pueda contribuir al análisis de como diversos factores pueden llegar a ser relevantes en la comprensión de la seguridad en pleno siglo XXI. El hecho que se hable de terrorismo, delincuencia transnacional organizada y otros actos dentro de la declaración de Ciudad México de 2003, es un insumo que busca establecer no solo la relevancia de estos factores por sí solos, sino de cómo las diferentes relaciones que existen entre ellos, podrían convertirse en una real amenaza para los Estados y el conjunto del sistema internacional.

Frente a esta interacción de elementos criminales se podría afirmar que hoy en día la situación de la seguridad está directamente relacionada con un fenómeno de convergencia. La convergencia entonces se define como la situación en la cual organizaciones criminales y delictivas se entrelazan en una compleja red de relaciones que usarán como elemento central para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos[92].

De esta forma grupos terroristas, delincuencia transnacional organizada y otros actores se valdrían de diferentes redes para lograr sus objetivos y apoyarse unas a otras, contribuyendo a elevar y complejizar las amenazas que se ciernen sobre los Estados.

92. Definición propia desarrollada a partir de los elementos esbozados por MICHAEL MIKLAUCIC Y JAQUELINE BREWER (2013) cuando se refieren al entorno complejo de la seguridad y la estrecha vinculación entre terrorismo y delincuencia transnacional organizada.

El fenómeno de convergencia tiene como base el proceso de globalización, en la medida en que con el acelerado crecimiento y uso de medios de comunicación, la deslocalización de la producción, nuevas formas de producción y una interacción fluida de diversos actores estatales y no estatales, también se han proliferado redes y actores criminales que buscan usar medios legales para el logro de sus objetivos, sean estos de carácter político o económico. A este fenómeno del uso criminal o con fines delictivos de los medios legales establecidos a partir de la globalización se le ha denominado "globalización desviada". Esta desviación de la globalización se define con mayor claridad de la siguiente forma:

> [..] describe las redes trasfronterizas que producen, mueven y consumen cosas tan variadas como narcóticos y animales exóticos, antigüedades y bienes falsificados, dinero sucio y desechos tóxicos, así como seres humanos en búsqueda de trabajo sin documentos o actividades sexuales […] describe la forma como empresarios usan la infraestructura técnica de la globalización para explotar brechas y diferencias en regulaciones y el cumplimiento de la ley de mercados de bienes y servicios repugnantes (Gilman, Goldhammer, & Weber, 2013).

Luego de conceptualizar las variables anteriores, es hace necesario enfatizar que dentro de los fenómenos de terrorismo y narcotráfico existe una dinámica en la cual dichos fenómenos se entremezclan y sacan provecho de sus estructuras, redes y procesos de articulación, para generar una dinámica mayor de carácter convergente. Esta situación se convierte entonces en una situación que genera una presión sobre los Estados en términos de seguridad, no solo desde la perspectiva clásica, sino desde una visión más ampliada.

Dentro de esa dinámica de carácter convergente, surge entonces una diversidad de actores a nivel nacional e internacional que bien valdría la pena estudiar y revisar. Para efectos de este capítulo se tendrán como actores centrales de análisis a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, haciendo la salvedad de que se toma a este grupo antes del inicio de las conversaciones de Paz en La Habana en 2014, en razón a que la dinámica frente a este grupo podría llegar a tener unas características diferentes en la actualidad. Ahora bien, como elemento comparativo frente a las FARC, se toma como referente a Al Qaeda, un grupo terrorista y con un fuerte arraigo en Afganistán, en donde también actúan redes de tráfico de narcóticos, especialmente aquellos derivados del opio.

De esta forma, el propósito de este capítulo estaría dirigido a identificar los elementos que permitan hacer un comparativo del fenómeno de convergencia entre Narcotráfico y Terrorismo, con base en dos actores señalados por desarrollar dichas actividades: las FARC y Al Qaeda. En el desarrollo del capítulo se buscará hacer una caracterización de cada una de las organizaciones mencionadas, con el objetivo de identificar en dicho proceso, elementos que permitan hacer un paralelo entre ambos para lograr detallar elementos de similitud frente al fenómeno convergente. Se iniciará desde el contexto nacional, analizando el desarrollo histórico de las FARC y el proceso a través del cual dicho grupo, pasaría de ser una organización armada de carácter revolucionario, a convertirse en una organización delictiva involucrada directamente en el negocio del narcotráfico y las actividades terroristas. Posteriormente, se realizará una descripción y contextualización de Al Qaeda como actor internacional, en la cual se tendrá en cuenta el desarrollo y formación de la organización como un grupo yihadista anti occidental, bajo el liderazgo de Osama Bin Laden, y como grupo que financia buena parte de sus actividades terroristas, a partir del cultivo y comercialización de opio desde Afganistán. Los dos apartados mencionados

serán el insumo necesario para realizar el paralelo entre ambas organizaciones, y así identificar elementos similares y divergentes que permitan extraer algunas conclusiones sobre el fenómeno estudiado.

2. El escenario Colombiano

En la comprensión del caso colombiano se hace necesario iniciar con breve recuento histórico sobre la particular situación que le ha tocado enfrentar al gobierno colombiano contra el grupo armado FARC. Si bien es cierto que con la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el gobierno de Juan Manual Santos ha buscado el camino hacia un estado de paz y de cese de hostilidades con este grupo, no debe dejarse de estudiar elementos y hechos importantes que generaron que este grupo armado ilegal lograse tener un poder amplio en varias regiones del país.

Ahora bien, hacer un breve recuento histórico es una herramienta útil y necesaria que permitirá identificar a grandes rasgos la evolución de las FARC desde sus inicios como grupo insurgente, hasta su accionar como grupo involucrado con el negocio ilícito de drogas y como grupo terrorista. En este orden de ideas, se busca resaltar los elementos que han generado las transformaciones de este grupo armado, sin llegar a exaltar en ningún momento su ideario político, sino por el contrario, enfatizar que los elementos criminales desplegados por dicha organización, han logrado hacer de este infame grupo un actor relevante en la historia del país.

2.1 Los Inicios de las FARC

Las FARC iniciarían sus actividades en el país siguiendo las directrices de la internacional comunista, en 1966. Para la época, la intencionalidad de la internacional socialista buscaba convertir en revolucionarios a estos bandoleros,

adoctrinándolos bajo la tutela del ideólogo Jacobo Arenas. Con la dirección de Arenas, las FARC fueron incrementando el reclutamiento en las zonas donde concentraban sus actividades, logrando crecer progresivamente en varias zonas del país. Su crecimiento y lucha sostenida lograron evidenciar una tendencia de esta organización, basada en la búsqueda de negociaciones de paz con muchos de los gobiernos de la última mitad del siglo XX y principio del Siglo XXI, que terminaron por convertirse en escenarios de ventaja para dicha organización armada. (Pataquiva, 2009).

De manera más detallada, se podría indicar que en el proceso de creación y consolidación de las FARC, se evidenciarían por lo menos tres fases claras y determinantes, según lo indica el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013):

> La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años setenta. La segunda, a principios de los años ochenta, cuando se propusieron acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y la toma del poder. La tercera tuvo lugar en los siguientes veinte años. Las guerrillas abandonaron los espacios políticos y buscaron el colapso del Estado y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales a través de las armas, es decir, por vía exclusivamente violenta. (p.39).

Si bien en cierto que las FARC tienen sus orígenes como una organización de carácter popular y bajo la consigna de la reivindicación social del campo, lo cierto es que con el tiempo esta organización en aras de mantener su estructura armada de lucha contra el Estado colombiano, se vio cada vez más involucrada con el narcotráfico en sus diferentes eslabones. El narcotráfico ocuparía un lugar importante en la evolución de las FARC, ya que generaría

un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco, generando unos recursos económicos formidables de los cuales gozarían hasta fechas recientes; de acuerdo a Pataquiva (2009), "según un informe reciente enviado por la Policía Nacional de Colombia a INTERPOL, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) manejan cada año un presupuesto de 2.000 millones de dólares, provenientes de actividades ilícitas, especialmente del tráfico de droga y secuestros" (p.2).

Con respecto a la práctica del secuestro, este delito en particular les generó un fuerte rechazo por parte de la población colombiana debido a los vejámenes y al trato inhumano con el que sometían a sus víctimas. El caso particular del ciudadano japonés Chikao Maramatzu, secuestrado en Bogotá en el año 2001 y asesinado en el departamento del Meta en 2003, develó a nivel internacional esta criminal práctica por parte de las guerrillas, dejando sin fundamento el argumento de que sus actividades obedecían a la defensa de los ciudadanos ante un Estado opresor. Adicionalmente al secuestro mencionado, se pueden contar innumerables casos en los cuales empresarios tanto nacionales como internacionales (vinculados principalmente a empresas multinacionales), fueron víctimas de este flagelo. Según datos recopilados por Montero (2012), luego del anuncio de las FARC de renunciar al secuestro extorsivo como medio para financiar su estructura y lucha armada, esta organización al margen de la ley recaudaba por temas relacionados con el secuestro unos mil millones de dólares8[93], lo cual hacía de esta práctica una de sus principales fuentes de financiación, pero a la vez uno de los elementos que más les generó críticas y rechazo a nivel nacional e internacional.

Pese a lo anterior, tanto el narcotráfico como el secuestro no fueron las únicas formas de financiación de las FARC, las cuales también incurrieron

93. Los datos referenciados hacen parte del Informe presentado por Paul Collier en 2003 cuando se desempeñaba como jefe del Grupo de Investigaciones del Banco Mundial y que fue citado por DORA MONTERO (2012).

en acciones criminales como extorsiones a empresarios colombianos, campesinos, empresas multinacionales; así como también lograron incurrir en temas como la minería criminal, la cual se convierte hacia 2012 en una de las fuentes principales para financiar su actividad hostil en contra del estado (Montero, 2012). Todo lo anterior termina por definir a las FARC como una verdadera organización criminal de grandes proporciones, organizada en diferentes frentes y con una diversidad de actividades criminales/delictivas combinadas con actividades legales manejadas por terceros.

2.2 Las FARC y El Narcotráfico

La relación de las FARC con el negocio del narcotráfico nunca fue accidental. Se podría decir que el interés de las FARC en el narcotráfico tendría una estrecha correspondencia con el crecimiento de este negocio ilícito en el país durante los años 80. En sus inicios, el interés radicó principalmente en ser la estructura armada que protegía los cultivos y los incipientes laboratorios que comenzaron a funcionar en el sur del país, transformándose luego en una fuente de recursos importantes gracias al cobro por gramaje, y luego siendo parte central de la cadena de siembra y producción hasta convertirse en uno de los principales actores que controlan el negocio en el país.

Con base en lo anterior, la idea de la existencia de acuerdos entre grupos narcotraficantes y las FARC fue solo el inicio de lo que sería una relación fructífera y de mutuo beneficio para unos y otros. Parte de ese entramado de los acuerdos entre narcotraficantes y FARC lo clarifica Reyes (1990) al hacer referencia del crecimiento de los cultivos de coca en varias regiones del país y de cómo se relacionaron ambos actores.

> La expansión de los cultivos de coca entre 1980 y 1986 fue posible gracias a la temprana resolución del conflicto entre traficantes

> y guerrillas, y al acuerdo de la distribución de competencias y funciones entre unos y otros. Los traficantes estimularon el cultivo y trasfirieron la tecnología del procesamiento y refinamiento de la coca. Las guerrillas garantizaron el orden interno y establecieron el gramaje. Gracias al acuerdo entre unos y otros, y a la tregua firmada entre las FARC y el Gobierno, en marzo de 1984, la expansión de la coca fue simultáneamente un proceso de enriquecimiento de cultivadores y traficantes, y de fortalecimiento y expansión territorial de las guerrillas. El crecimiento guerrillero fue una respuesta al incremento de actividades de vigilancia en las comunidades de cultivadores y fue posible gracias a los nuevos recursos provenientes del impuesto a la coca. Las FARC-EP presionaron a los cultivadores, en esta ocasión, para que la bonanza fuera aprovechada para desarrollar otros cultivos y para capitalizar las fincas (Reyes, 1990, pp.136-137).

En su cada vez más estrecha relación con el narcotráfico, las FARC comprenderían que este negocio podía llegar a representarles una importante fuente de ingresos para sostener el esfuerzo armado contra el Estado. De esta forma, terminarían por aceptar el "impuesto de gramaje" luego de la VIII Conferencia Guerrillera; este gramaje se justificaba como un cobro al cultivo de coca, con el propósito de proteger a los agricultores frente a la llegada de grupos paramilitares, evitando con ello, el despojo de tierras (Arcila, 1998). Adicionalmente, el impuesto al gramaje servía no solo como un elemento a través del cual ejercían control sobre lo producido, sino que también funcionaba como herramienta de control poblacional a través del cual buscaban crear estructuras de apoyo en el marco de su lucha ideológica en contra del Estado.

Dentro de los primeros elementos que relacionan a las FARC con el narcotráfico y con otros grupos delincuenciales ligados a este delito, se encuentra

la construcción de uno de los más grandes complejos de producción de cocaína en el país, y que recibió el nombre de "Tranquilandia". Para autores como Bagley (1989), la relación era evidente en el sentido que las FARC participaron en este contexto como el componente de seguridad del complejo ubicado en las riberas del Río Yarí en el Caquetá, y a la cual destinaron unos 100 hombres (Reyes, 1990). Esta relación demuestra que las FARC y otras organizaciones dedicas al narcotráfico prefirieron llegar a acuerdos y distribuir funciones dentro del negocio, en una relación de mutuo beneficio que terminó representando para esta guerrilla su fortalecimiento y expansión en el territorio nacional en la década de 1980 (Reyes, 1990).

Ahora bien, la situación durante la década de 1990 para las FARC, fue un escenario de cambios derivados de la desarticulación de las estructuras del narcotráfico encabezadas por el Cartel de Medellín y por el Cartel de Cali. Ante esta desarticulación, el espacio vacío que quedaría dentro de la estructura del negocio del narcotráfico, sería paulatinamente controlado por esta guerrilla. De esta forma, la construcción de redes por parte de estructuras guerrilleras y pequeños grupos narcotraficantes, permitirían la participación de las FARC dentro del negocio ilícito de drogas, no sólo como proveedores de seguridad y fiscalizadores del gramaje, sino también como agentes en la distribución (Mackenzie, 2010).

La década mencionada anteriormente traería consigo varios elementos a considerar: 1. La expansión de la producción de hoja de coca en el país; 2. El crecimiento de la base social ligada a las zonas cocaleras del país; 3. El incremento en la capacidad de ataque de las FARC sobre las Fuerzas Militares y de Policía en varias regiones del país. En el primero de los casos, el incremento en las zonas de cultivo de hoja de coca fue importante, resultando en una mayor producción de pasta básica de cocaína, tal y como lo muestran los datos

de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (En adelante UNODC), en su informe anual del año 2004.

Cuadro 1: Cifras del Cultivo Ilícito de Coca y Producción de Hoja de Coca y Cocaína, 1990-2003

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
CULTIVO[1] DE ARBUSTO DE COCA EN HECTÁREAS														
Bolivia [2]	50.300	47.900	45.300	47.200	48.100	48.600	48.100	45.800	38.000	21.800	14.600	19.900	24.400	23.600
Colombia [3]	40.100	37.500	37.100	39.700	44.700	50.900	67.200	79.400	101.800	160.100	163.300	144.800	102.000	86.000
Perú [4]	121.300	120.800	129.100	108.800	108.600	115.300	94.400	68.800	51.000	38.700	43.400	46.200	46.700	44.200
Total	211.700	206.200	211.500	195.700	201.400	214.800	209.700	194.000	190.800	220.600	221.300	210.900	173.100	153.800
PRODUCCIÓN POTENCIAL DE HOJA SECA DE COCA EN TONELADAS MÉTRICAS														
Bolivia	77.000	78.000	80.300	84.400	89.800	85.000	75.100	70.100	52.900	22.800	13.400	20.200	19.800	17.100
Colombia	45.300	45.000	44.900	45.300	67.500	80.900	108.900	129.500	165.900	261.000	266.200	236.000	222.100	168.000
Perú	196.900	222.700	223.900	155.500	165.300	183.600	174.700	130.600	95.600	69.200	46.200	49.300	52.500	50.790
Total	319.200	345.700	349.100	285.200	322.600	349.500	358.700	330.200	314.400	353.000	325.800	305.500	294.400	235.890

Fuente: Oficina contra la Droga y el Delito, Naciones Unidas, 2004, pág. 249

En el segundo de los casos, el crecimiento de la base social tiene una estrecha relación con el crecimiento de las zonas cultivadas. De esta forma, las FARC afianzaron sus intereses de hacer parte del negocio de la cocaína a partir de la VII Conferencia, en donde adicionalmente al cobro del impuesto del gramaje, se establecieron los mecanismos para ejercer un control sobre la población y para buscar generar acciones sociales y marchas en contra de la acción estatal representada en las fumigaciones, erradicaciones manuales y la acción directa sobre este grupo (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014).

En el tercero de los escenarios comentados, el crecimiento de las FARC tuvo también un efecto importante en el crecimiento de su estructura militar, logrando con ello impactar de manera directa a las Fuerzas Militares y de Policía, y acometiendo acciones de gran importancia en diferentes ciudades de la geografía colombiana. Gracias a los recursos provenientes del negocio del narcotráfico y otros delitos, las FARC lograron crecer en su estructura militar,

permitiendo por ejemplo, la creación de la Columna Móvil Teófilo Forero, célebre por sus diferentes acciones en los departamentos del Huila y del Caquetá (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014).

Dentro del negocio del narcotráfico, las FARC evolucionarían de prestar servicios de seguridad, a participar activamente dentro de los diferentes eslabones de producción y distribución de cocaína; para tales efectos, las estructuras de esta organización se valieron de la conformación de redes especializadas en las cuales participaban grupos de delincuencia, así como otros grupos armados, en una relación de negocios de mutuo beneficio para cada una de las partes. De esta forma, las FARC participarían en todo el proceso del narcotráfico, apoyadas en redes que facilitaban el ingreso de precursores químicos y de armas, y la exportación de la cocaína producida (Mackenzie, 2010).

2.3 Las FARC: De narcoguerilla a grupo narcoterrorista

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el incremento en la participación de las FARC en el negocio ilícito de la cocaína, es el principal elemento que permite señalar a este grupo como una "narcoguerrilla". Por ende, el negocio de la droga le otorgó entre otras cuestiones, una capacidad militar de gran importancia, la cual se vio reflejada en el incremento de hombres y el surgimiento de nuevos frentes de guerra.

Este interés de las FARC en incrementar su accionar armado en contra del Estado, obedeció principalmente al interés de controlar diferentes zonas del país, especialmente el sur y sur oriente del territorio colombiano. Bajo esta premisa, el control del sur estaba relacionado con las zonas de cultivo de cocaína y con la consolidación de rutas hacia el andén del pacífico (especialmente Tumaco), pero también bajo la estrategia de hacer frente al Estado y buscar la toma del poder por las armas.

El narcotráfico fue también un elemento crucial a través del cual esta organización armada logró adquirir material de combate de gran importancia, dentro del cual se encontraban fusiles, granadas, lanzagranadas, ametralladoras, misiles entre otros, muchos de los cuales fueron incautados por autoridades colombianas (Mackenzie, 2010). Dicho material bélico fue determinante para que esta guerrilla realizara ataques indiscriminados contra la población civil, bases militares, infraestructura petrolera, y tomara la iniciativa militar en contra del Estado. Los años 90, década en la cual las FARC se involucrarían cada vez más en el negocio de la cocaína, se convertirían también en uno de los periodos más violentos del conflicto con actos que comenzaron a denominarse como "terroristas".

En efecto, acciones armadas como la toma del Billar (1998), Mitú (1998), el asesinato de Consuelo Araujo (2001), la masacre de Bojayá, Chocó (2002), el atentado en la Casa de Nariño (2002), el atentado al Club el Nogal en Bogotá (2003), el asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri (2003), el asesinato de 11 Diputados del Valle del Cauca (1999), entre otras acciones como los secuestros masivos, lograron convertir a las FARC en un grupo de índole terrorista. En consecuencia, y luego del rompimiento de los diálogos de Paz desarrollados en El Caguán durante la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), las FARC serían oficialmente catalogadas como un grupo terrorista, cuestión que se enfatiza luego de los atentados en Nueva York y Washington el 11 de Septiembre de 2001.

La transición de las FARC hacia la consideración de grupo terrorista responde al fenómeno de convergencia de elementos terroristas y de crimen organizado, en donde las redes construidas por uno terminan siendo de beneficio para el otro en la consecución de sus objetivos. En el caso de las FARC, la convergencia entre estos dos elementos se convierte en una herramienta para

conseguir los objetivos políticos y económicos de la organización, a través de la cual lograron crear redes con grupos en México, el IRA en Irlanda del Norte y ETA en España (de Souza Pinheiro, 2006). Este tipo de redes no sólo fue útil para el comercio ilegal de armas y municiones, sino que también fue ventajoso para el entrenamiento de hombres en armas en técnicas de terrorismo urbano, que se hicieron evidentes en muchos de los actos terroristas cometidos por esa organización, como el del Club El Nogal en Bogotá.

Por otra parte, el nexo entre narcotráfico y terrorismo también tendría una visión explicativa a través de la cual las FARC se aprovecharía de la crisis institucional por la que atravesaba Colombia a finales del siglo XX, representada por la crisis del Gobierno de Ernesto Samper (1994–1998), luego del episodio de la financiación de la campaña presidencial por parte del Cartel de Cali. A esto se le suma el crecimiento acelerado en el uso de redes de comunicación, la posibilidad de establecer conexiones y vigilancia gracias al proceso de globalización, entre otros factores (Sanderson, 2004).

Sumado a lo anterior y retomando los atentados del 11S en Estados Unidos, las FARC logran se catalogadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América (U.S. Department of State) y por la Unión Europea (The Council of the European Union, 2013) como un grupo terrorista. Esto sería un hito de gran importancia, en la medida que dentro de la lucha global contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos, recursos que fueron inicialmente destinados para el combate al narcotráfico en Colombia, pudieron ser usados para el combate de las FARC entre otras organizaciones (Rocha, 2011). Dicho cambio se considera central en cuanto a que los recursos del Plan Colombia, junto con una renovada visión de las Fuerzas Armadas y una inversión del gobierno nacional, se construirían en el camino hacia un combate frontal en contra de esta organización armada en diferentes frentes.

En sumatoria, la transición de las FARC hacia una "narcoguerrilla" le permitió ampliar su actividad en el país en la búsqueda de la toma del poder por las armas. En la búsqueda de la toma del poder a través de las armas, las FARC recurrieron a acciones terroristas que generaron zozobra a nivel nacional y un rechazo generalizado, con lo cual este grupo pasa a ser denominado como "narcoterrorista", en la medida en que combina ambas actividades criminales para la consecución de sus objetivos.

3. Al Qaeda: entre la Yihad y el Tráfico de Derivados del Opio.

Al Qaeda tiene sus orígenes en el contexto de la invasión a Afganistán por parte de la Unión Soviética (en adelante UR.SS.), en la década de 1980. Tomar como referente a Al Qaeda, obedece principalmente al desarrollo de las actividades terroristas desarrolladas por ese grupo en varias partes del mundo, y por su estrecha relación con los Talibanes en Afganistán y el control sobre la producción y distribución de derivados del opio. Esto permitirá establecer algunos elementos comparativos con las FARC, frente a los elementos de convergencia de factores criminales. Y también obedece a que dentro de la bibliografía revisada se señala con claridad el nexo entre terrorismo y narcotráfico para el caso de esta organización.

Cabe señalar que Al Qaeda es una organización de relevancia internacional por efecto de los actos perpetrados por miembros de esta organización; en donde se pueden resaltar los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, así como los atentados del 11 de Marzo en Madrid en 2004, el 7 julio en Londres en 2005, el atentado contra el USS Cole en Yemen en 2003, entre otros.

3.1 Al Qaeda: Orígenes.

Los inicios de Al Qaeda guardan una relación directa con los hechos acontecidos en Afganistán durante los años 80 tras la invasión de tropas de la UR.SS. en medio de la Guerra Fría. En este contexto, el inicio de esta organización tendría como elemento clave la relación con los Talibanes, bajo el interés compartido de la expulsión de las tropas rusas de territorio afgano. En este sentido, el inicio de la lucha estaba enfocado en una guerra de guerrillas o insurgente, en contra de una potencia invasora, y no como un grupo terrorista per se. La propósito político de Al Qaeda en medio del conflicto con la UR.SS., era difundir el wahabismo sunita apoyado por los saudíes, para la yihad (Brieger, 2011). En esencia lo que se buscaba era la expulsión de tropas soviéticas de territorios sagrados en Afganistán y posteriormente la expulsión de occidentales (encabezados por Estados Unidos), y sionistas de tierras sagradas del Islam (Brieger, 2011).

Adicionalmente, para comprender a Al Qaeda, se hace necesario reconocer que gran parte de su ideología tiene una fuerte influencia de la Revolución Iraní encabezada por el Ayatolá Jomeini en 1979, en la cual se perpetraría una revolución de masas, con base en el Islam como bandera política. Irán, de mayoría Chií, se convirtió sin embargo en un foro para todos los países islamistas y para sus comunidades, tanto suníes como chiíes, en la cual el interés de la repolitización del Islam, obedecía a la crisis de identidad que tenía como base la influencia de Estados Unidos y otros países de occidente. En muchos sentidos, esa influencia de Jomeini como líder de masas, con un discurso antiimperialista en el cual daba importancia a los temas culturales del Islam, así como al nacionalismo y las ideas políticas, lograrían hacer de Teherán un centro de formación revolucionaria que tendría efectos en todo el mundo musulmán. (Brieger, 2011).

Bajo la influencia iraní, surgen en el caso de Afganistán y otros países de la región, líderes visibles que impulsaban esa visión antiimperialista y de identidad musulmana, dentro de los cuales surge la imagen de Osama Bin Laden. Bin Laden, se convertiría en el referente más visible de Al Qaeda bajo la influencia de Abdullah Azzam;[94] a partir de esos dos elementos, se crearía toda la estructura inicial de la organización hacia finales de los años 80. (Post, 2007)

Los inicios de Al Qaeda pueden trazarse hasta 1984, con el grupo Maktab al Khimidat lil Mujahidin al–Arab, y la visión de Abdullah Azzam, quien en ese año proponía la actuación Al Qaeda como movimiento de vanguardia, inspirador de la yihad contra occidente. La visión de Azzam radicaba en convertir al movimiento en una punta de lanza capaz de movilizar a todo el mundo musulmán desde el punto de vista ideológico, armado y religioso, con miras a recuperar la época de esplendor del a Islam (Merlos, 2006). Sin embargo y a pesar de este punto de partida, Al Qaeda como organización terrorista tiene su hito fundacional en 1989, luego de la elaboración de su texto fundacional en 1988, en donde se declaraba así mismo como la vanguardia de todos los musulmanes en contra de occidente, partiendo del significado epistemológico de su nombre, el cual indica o hace referencia a infraestructura, base, asentamiento, moral y conducta, y que adicionalmente hace referencia a la primera base de entrenamiento para jóvenes contra el régimen soviético, que tenía por nombre Abu Ubaidach al - Benshuri o "La Base" (Brieger, 2011).

Apartir de 1989, la estructura de Al Qaeda tendría una jerarquía piramidal en la cual existía un reparto de funciones claramente establecido y que se sostuvo hasta los atentados del 11S. Dicha organización estuvo encabezada por Bin Laden; su

94. Ph.D. En Jurisprudencia de la Universidad de Al – Azhar, quien a su vez fue influenciado por Sayyed Qutb, que hacía parte de los Hermanos Musulmanes; fue quien estableció los primeros contactos entre Bin Laden y otros renombrados terroristas como Ayman Al - Zawahiri y al Sheik Omar Abdel Rahman, el autor de la bomba en el World Trade Center en 1993 (POST, 2007).

sucesor inmediato era Ayman Al-Zawahiri, fundador de la Yihad Islámica Egipcia y su facción Talaal al Fateh, quienes fueron los responsables por el atentado contra Hosni Mubarak y la muerte del presidente Sadat. Al- Zawahiri fue el encargado de emitir documentos doctrinarios de la organización, así como diversos Fatwas[95] que regirían los destinos de todos los miembros del grupo terrorista.

La estructura piramidal de la primera fase de Al Qaeda se sostuvo gracias a su organización en diversos comités bajo los cuales se aseguraba su funcionamiento. Los principales comités eran los siguientes, señalados por Merlos (2006):

> 1. mité político/Religioso: Encargado de emitir Fatwas, dentro de las cuales se destacan el documento de 1996, en el cual declaraban la guerra contra los americanos que ocupaban tierra sagrada musulmana y que contenía varios principios rectores, dentro de los cuales se destacan la unidad de la Umma para la expulsión de potencias occidentales, la reafirmación de la guerra de guerrillas como forma de lucha que permite reducir el desequilibrio con las fuerzas de occidente, y que la naturaleza de la yihad debía ser de carácter global, ilimitada en espacio, tiempo y métodos. Adicionalmente, existe otro documento de fecha del 23 de febrero de 1998, en el cual se consolida la formación del Frente Islámico Mundial, firmado por Bin Laden, Ayman Al- Zawahiri, Abu Yasir Rafir Taha, Shaykh Mir Hamza y Fazlur Rhaman, todos ellos líderes de movimientos yihadistas en Egipto, Pakistán y Bangladesh. En dicho documento se habla nuevamente de la ocupación de Estados

95. Hace referencia a un pronunciamiento legal, desarrollado y publicado por un experto en ley islámica o muftí, en la cual se hace referencia a un hecho o tema específico, con el objetivo de resolver alguna instancia sin claridad la jurisprudencia islámica o fiqh (Hisham Kabbani). Para el caso de Al Qaeda los Fatwas son proclamas elaboradas al interior de la organización con la intensión de dirigir las acciones grupales enfocadas a la defensa de tierras musulmanas de invasores occidentales (POST, 2007).

Unidos (en adelante EUA), de la península arábiga, la coalición de cruzados y sionistas (occidente e Israel) como causantes de la muerte de más de un millón de iraquíes y el interés de EUA en saciar sus intereses económicos, servir a los intereses de Israel y dividir a los pueblos musulmanes (Merlos, 2006, págs. 71 - 73).

2. Comité Militar: Encargado de proponer objetivos, diseño de planes, dar apoyo a operaciones y gestionar campamentos de entrenamiento en Afganistán. Adicionalmente, este comité estaba a cargo de la compra de material bélico y vigilar el sistema de reclutamiento.

Uno de sus principales líderes fue Mohamed Atef, conocido como "Abu Hafs Al Masri", quien jugó un rol central en Somalia en 1993 y aprobó el ataque al USS Cole en Yemen en 2000 (Merlos, 2006, pág. 74).

2. Comité de Finanzas: Encargado de los fondos económicos y asignación de presupuestos para mantenimiento de campos de entrenamiento, costear viajes y facilitar el desarrollo de operaciones (Merlos, 2006, pág. 75).

3. Comité exterior: Encargado de la compra de armas, explosivos y equipos técnicos, coordinación con otros grupos terroristas como Hezbollah y estados patrocinadores como Iraq e Irán (Merlos, 2006, pág. 76).

4. Comité de seguridad: A cargo de la seguridad, protección, operaciones de inteligencia y contrainteligencia para proteger el núcleo de la organización (Merlos, 2006, pág. 77).

5. Comités de información y propaganda: Encargado de la difusión ideológica de mensajes cargados de odio contra occidente, enfocado hacia la población musulmana (Merlos, 2006, págs. 77 - 78).

Luego de los atentados del 11S y tras la declaración inicial de guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y luego de otros países, con el apoyo adicional de Naciones Unidas, se da paso a la lucha global contra el terrorismo. Este hecho no solo significó un cambio en la política internacional, sino que también gracias a esta política internacional, se logró avanzar hacia un concepto de lucha contra el fenómeno, dentro del cual uno de los objetivos principales era precisamente Al Qaeda. Con base en lo anterior, Estados Unidos encuentra la razón y fundamento para generar acciones y desplegar fuerzas militares en Afganistán desde 2003, con la intensión de acabar con la estructura central de Al Qaeda. Si bien es cierto que los efectos de las acciones militares fueron variados en cuanto a capturar o dar muerte a varios de los líderes de esta organización, lo cierto es que la habilidad de Osama Bin Laden, sus colaboradores y su red internacional, fueron lo suficientemente eficientes en modificar su estructura y mantener su actividad terrorista en varias partes del mundo.

3.2 La Red Al Qaeda. Desde lo Regional a lo Global.

La importancia de Al Qaeda no radicaría solamente por la importancia de la figura de Osama Bin Laden y los diversos atentados perpetrados en diferentes partes del mundo; también residiría en la construcción de una red de agrupaciones en diferentes partes de mundo, a través de las cuales se lograrían llevar a cabo diferentes actos terroristas. La construcción de las redes por parte de esta agrupación tiene en gran medida una razón organizacional clara que permitiría generar, a través de su estructura descentralizada, mayores efectos a nivel local, regional y global.

Dicha construcción de las redes de Al Qaeda, tuvo al menos dos evoluciones: 1. Construcción de red a partir de una estructura de tipo piramidal; 2. Luego de los atentados del 11S, una construcción de red de carácter horizontal, en la cual se reconoce el liderazgo o mando de una pequeña estructura, en la cual las estructuras de red asociadas tienen autonomía en el manejo de decisiones y sostenimiento de su actividad, obedeciendo a requerimientos de la estructura central de Al Qaeda.

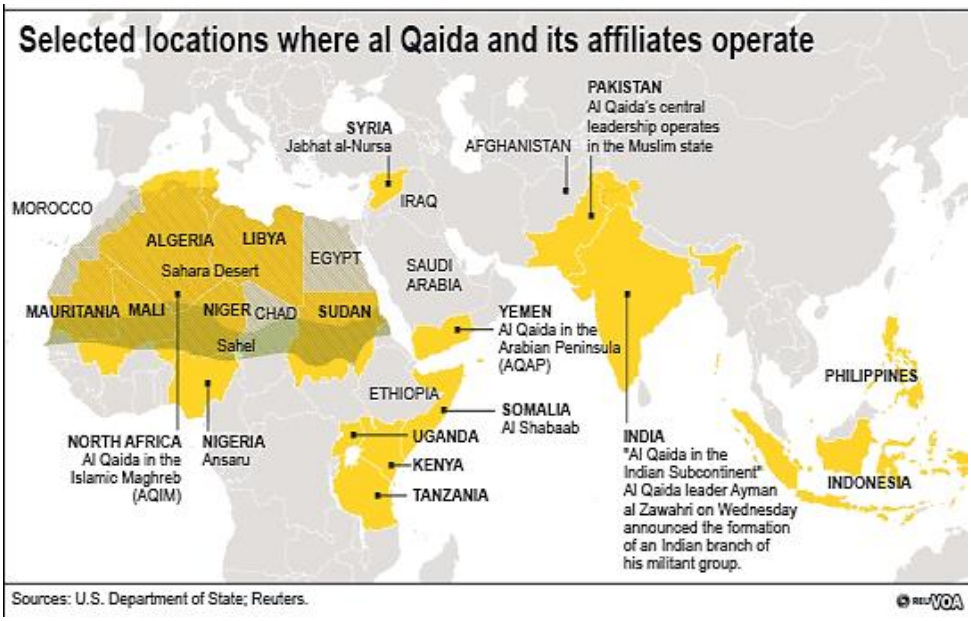
La primera fase en la construcción de las redes de Al Qaeda, partiría de la idea de propagar la idea de una guerra santa en contra de los invasores occidentales (en cabeza de Estados Unidos). De esta forma la construcción de la red tiene un alto componente regional, enfocado en la consolidación de la organización en Afganistán y Pakistán, pero adicionalmente un componente transnacional, en el cual se conforman células permanentes o semi-permanentes afiliadas a la estructura central. De esta forma, Al Qaeda lograría crear una red global con influencia en por lo menos 76 países alrededor del mundo, a la cual se le suman la participación de gobiernos y políticos islamistas. Bajo esta dinámica, la red de Al Qaeda pudo proyectar su influencia más allá del Medio Oriente, hacia países como Sudán, Yemen, Kenia, Tanzania, Somalia, Indonesia, Malasia, Chechenia, Tayikistán, y hacia organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamas y los Tigres Tamiles de Sri Lanka (Post, 2007).

Posterior a los atentados del 11S, la respuesta militar encabezada por Estados Unidos, a la cual se sumarian las del Reino Unido, España, Alemania, Francia, entre otros países, solo consiguieron la reorganización y adaptación de Al Qaeda, evolucionando de una estructura piramidal, a una organización dispersa que mantenía su eje central en Al Qaeda central, el cual continuó promoviendo inspiración al movimiento global salafista. La reorganización de Al Qaeda desde 2002, buscó entre muchos otros objetivos, establecer

comandos regionales cuya organización y financiación ya no dependía de la estructura central, sino que por el contrario, dependía de manera más o menos autónoma en la consecución de recursos y la planificación de operaciones militares. Por otra parte, la reconfiguración de Al Qaeda central en Afganistán, tuvo como elemento central la participación de una nueva generación de líderes que ocuparon rangos de líderes capturados o muertos, y los cuales enfocaron sus actividades al reclutamiento a gran escala, reforzando campos de entrenamiento, el manejo financiero, y de medios de comunicación como forma de propaganda en la búsqueda de nuevos adeptos. Esta nueva generación de líderes tendría mucho que ver con la influencia sobre segundas generaciones de migrantes a Europa, algunos de los cuales formarían eventualmente parte de la organización, y a la cual se le atribuyen atentados como los del 11M en España en 2004 y los del 7J en Londres en 2007. (Post, 2007).

La reorganización de Al Qaeda posterior a 2002, no dejó de lado la red construida durante la década de 1990, sino que a partir de su reorganización buscó afianzar su red internacional a través del uso de medios masivos e internet. De esta forma, Al Qaeda logró consolidar lo que se ha denominado el "Frente Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados", en el cual tienen participación cerca de 30 grupos y organizaciones en varias partes del mundo (Reinares, 2008).

Mapa 1 La Red Global de Al Qaeda.



Fuente: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/al-qaida.htm

3.3 Al Qaeda: Narcotráfico y redes ilícitas.

El análisis de la red construida desde Al Qaeda central (con origen en Pakistán y Afganistán), es fundamental para comprender muchos de los elementos a través de los cuales, esta organización y sus filiales buscan financiarse para poder llevar a cabo su accionar terrorista. Luego de la reorganización de Al Qaeda posterior a los atentados del 11S y de la intervención militar de Estados Unidos y otros países en Afganistán, el funcionamiento de esta organización pasó de ser una organización de tipo jerárquico, a una red horizontal en donde los nexos con otras organizaciones y grupos terroristas fue esencial para la supervivencia y resiliencia de la organización terrorista (Post, 2007). En este orden de ideas, la red de Al Qaeda se convierte en un elemento crucial no solo para llevar a cabo acciones terroristas, sino también en parte esencial para la consecución de financiación de dichas actividades, a través de la participación

en crímenes transnacionales que van desde narcotráfico, pasando por tráfico de armas, hasta extorsiones y trata de personas.

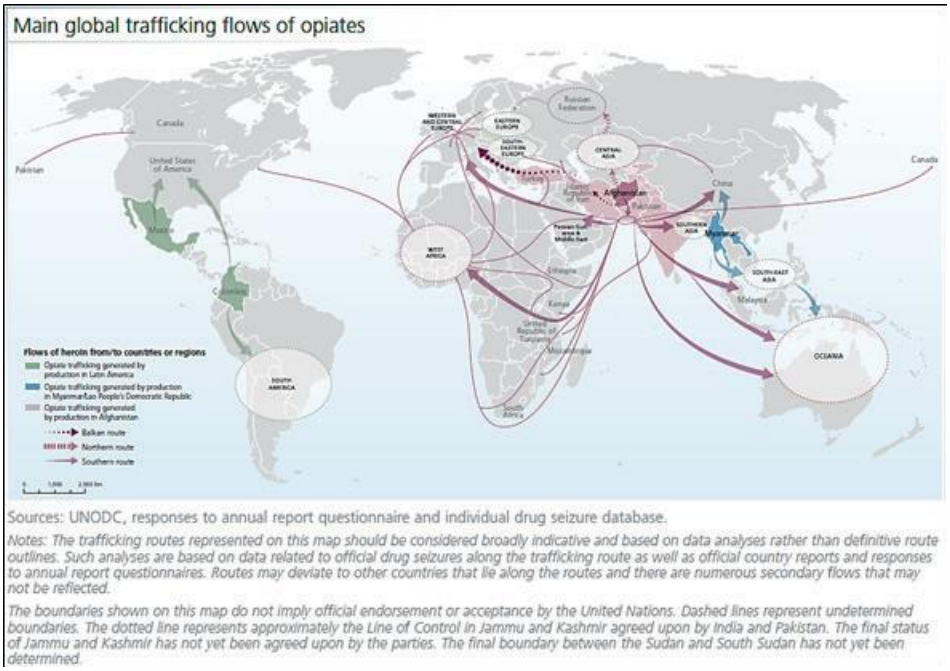
Dentro de los escenarios en los cuales se desarrollan estas actividades ilegales se encuentran Afganistán, Argelia, Mali, Mauritania, entre otros, en donde Al Qaeda ha recibido financiación para el desarrollo de su actividad principal (del Cid Gómez, 2005). Si bien es cierto que se relacionan actividades criminales como el contrabando, trata de personas, entre otras, es indudable que una de las actividades delictivas claves en la nueva fase de Al Qaeda ha sido el narcotráfico, relacionado en dos aspectos: 1. Las rutas del Opio en Asia Central y Afganistán; 2. Rutas de Cocaína desde América Latina hacia Europa.

En cuanto al narcotráfico, la relación de Al Qaeda Central con dicha actividad pareciera no ser del todo directa, debido a que son los demás nodos de la red, los que se encargan del negocio. En el caso de Afganistán, Al Qaeda ha desarrollado una estrecha colaboración con los Talibanes, relación que data desde la invasión de tropas soviéticas. Lo cierto es que en algún momento, Al Qaeda financió directamente la actividad de los Talibanes en la lucha por tomar el poder en Afganistán, situación que se vería parcialmente afectada por la intervención de Estados Unidos en dicho país, luego del 11S. Si bien Afganistán ha sido un punto central de entrenamiento para nuevos militantes, es también el escenario central en el cual los Talibanes cobrarían impuestos a diversos actores que participan en la cadena de producción de heroína, tanto cultivadores, laboratorios, como comercializadores. (del Cid Gómez, 2005).

Es importante resaltar que Afganistán es el mayor centro de producción de Opio en Asia Central, y es un país desde el cual parten las diferentes rutas para distribuir dicho producto hacia Europa y el resto de Asia, tal y como lo demuestran los estudios del "Informe Mundial de Drogas de 2015" de la UNODC (Mapa No. 2). La producción de opio en dicho país se ha concentrado

hacia el sur, particularmente en la provincia de Helmand, la cual produce cerca de la mitad de dicho narcótico en este país; se estima que el tráfico ilegal de opio genera rentas para grupos como los Talibán, cercanos a los $4.000 millones de dólares anuales (Echeverría, 2009), que bien podría ser el resultado de la combinación de la influencia Talibán, no solo en Afganistán sino en algunas zonas de Pakistán.

Mapa 2. Rutas Internacionales del Tráfico de Opiáceos.



Sources: UNODC, responses to annual report questionnaire and individual drug seizure database.

Notes: The trafficking routes represented on this map should be considered broadly indicative and based on data analyses rather than definitive route outlines. Such analyses are based on data related to official drug seizures along the trafficking route as well as official country reports and responses to annual report questionnaires. Routes may deviate to other countries that lie along the routes and there are numerous secondary flows that may not be reflected.

The boundaries shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries. The dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. The final boundary between the Sudan and South Sudan has not yet been determined.

Fuente: World Drug Report 2015, UNODC.

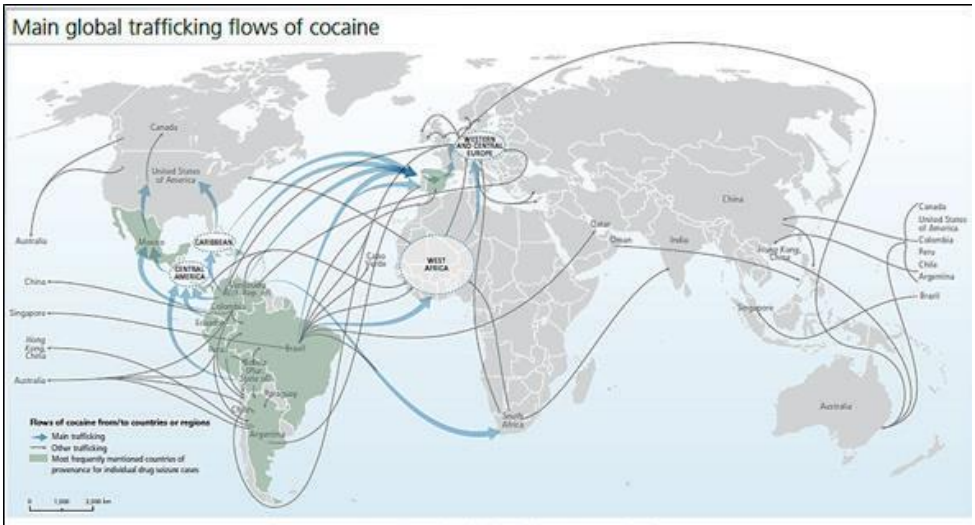
Otro de los elementos que se deben tener en cuenta en la relación de Al Qaeda con el narcotráfico, es que a través de su red global para promover la yihad contra occidente, algunos de los grupos que hacen parte de dicha red, están altamente vinculados con el negocio del narcotráfico; tal es el caso de Al Qaeda en el Magreb Islámico (en adelante AQMI), que tiene su zona de influencia en países como Malí, Mauritania y Argelia. En estos países se ha

llegado a establecer que su participación en el negocio de drogas estaría además relacionado con traficantes de droga de América Latina en la construcción de rutas para llegar al mercado europeo (del Cid Gómez, 2005).

Asimismo, en la relación de AQMI con traficantes de droga en América Latina, se ha llegado a asociar a esta facción con el grupo narcoterrorista FARC, en el transporte de cocaína desde África Occidental hasta el Norte de África, en donde AQMI ejercía una labor de protección para los cargamentos de cocaína que atravesaban países como Argelia, Libia y Marruecos. A partir de este hecho, AQMI lograba percibir de su relación con el narcotráfico hasta 30.000 dólares, por el paso de una caravana.

Adicionalmente, y frente a este hecho, se logró identificar por autoridades colombianas en 2007, que al menos un 35% de la cocaína producida en Colombia, y transportada a través de Venezuela, Guyana y Brasil, llegaba por vía marítima a costas africanas en su camino a diferentes mercados europeos (Mesa, 2014), cuestión que se ejemplifica y se corrobora por UNODC, en el mapeo de rutas de Cocaína en el "Informe Mundial de Drogas de 2015" (Mapa No. 3).

Mapa 3 Rutas de Tráfico de Cocaína en el Mundo.



Source: UNODC, responses to annual report questionnaire and individual drug seizure database.

Notes: The trafficking routes represented on this map should be considered broadly indicative and based on data analyses rather than definitive route outlines. Such analyses are based on data related to official drug seizures along the trafficking routes as well as official country reports and responses to annual report questionnaires. Routes may deviate to other countries that lie along the routes and there are numerous secondary flows that may not be reflected.

The boundaries shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Dashed lines represent undetermined boundaries. The dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. The final boundary between the Sudan and South Sudan has not yet been determined.

Fuente: World Drug Report 2015. UNODC.

Con lo anterior, la relación de Al Qaeda y parte de su red con redes del narcotráfico se constituye en un complejo entramado, en el cual se combinan diferentes mecanismos enfocados hacia el objetivo central continuar con la yihad global propuesta por Bin Laden.

4. Algunos puntos de análisis para tener en cuanta.

Hasta este momento se ha hablado de las FARC y Al Qaeda desde los escenarios de acción y convergencia entre terrorismo y narcotráfico, pero vale la pena en esta parte profundizar un poco más en el significado de la denominación de "terrorista" y "narcotraficante". Para tales efectos habría que enmarcar el terrorismo bajo la premisa que no existe en la actualidad una definición aceptada generalmente. Para efectos de este escrito el terrorismo se entendería como:

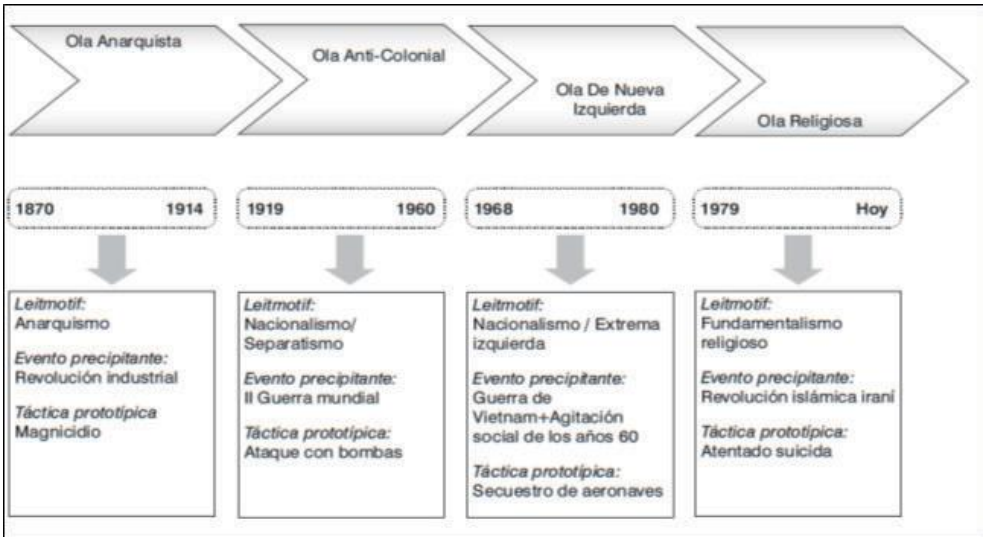
> Método para inspirar ansiedad basada en acciones violentas repetidas empleadas por individuos, grupos, o actores estatales (semi-) clandestina, por razones idiosincráticas, criminales o políticas, donde – en contraste a asesinatos – los objetivos directos de la acción violenta no son los objetivos principales. Las víctimas humanas de la violencia son escogidas al azar (objetivos de oportunidad) o de manera selectiva (objetivos representativos o simbólicos) de una población objetivo y sirven como generadores de mensaje. Los procesos de comunicación basado en la amenaza y la violencia entre terroristas (organización), victimas y objetivos centrales son usados para manipular los objetivos centrales (audiencias), convirtiéndolo en un objetivo de terror, objetivo por demandas u objetivos por atención que dependen de intimidación, coerción o propaganda (Schmid & Jongman, 2005, pp.28, citado por European Comission, 2008, p.17).

Bajo los parámetros mencionados con anterioridad, tanto Al Qaeda como las FARC podrían ser catalogados como terroristas, en razón a los diversos actos llevados a cabo, y en el cual civiles inocentes murieron como consecuencia directa de dichas acciones; sin duda, estas consideraciones fueron claves en la incorporación de estas organizaciones en las listas de grupos terroristas tanto de la Unión Europea y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ahora bien, si bien se entiende que dichas organizaciones son terroristas, lo cierto es que el origen de su naturaleza terrorista, dista una de la otra, tanto en niveles de violencia y objetivos. En el caso de las FARC, su inicio como movimiento insurgente basado en ideologías de izquierda (Marxista, Leninista), y su transformación a grupo narcoterrorista, nunca dejó de lado sus objetivos políticos enmarcados en la toma del poder y la transformación del Estado

colombiano. Por su parte, Al Qaeda puede que haya tenido sus inicios dentro de la lucha insurgente en Afganistán contra la invasión Soviética, pero luego se convirtió en un movimiento de inspiración político religiosa, cuyo objetivo es la expulsión de occidentales de tierras sagradas del Islam, a través de la consolidación de un movimiento yihadista global, que adicionalmente estaría enfocado en la consolidación de un territorio unido islamista. Por otra parte, se podría catalogar a ambos grupos dentro de dos formas de terrorismo, señaladas por Rapoport (1999) como Olas del terrorismo, es decir, la Ola de Nueva Izquierda y la Ola Religiosa (Gráfico No. 1).

Gráfico 1: Olas del Terrorismo



Fuente: Molano, 2012, pág. 48

El segundo elemento a analizar es el tema de narcotráfico y su relación con las FARC y AL Qaeda. De esta forma, el narcotráfico se puede definir o comprender como los procesos de cultivo, manufacturación, distribución y venta de sustancias declaradas como de uso ilegal dentro de las cuales se encuentran cocaína, cannabis, derivados del opio (opiáceos) y drogas sintéticas; y que generalmente está relacionada con redes ilegales, criminalidad, tráfico ilegal de armas y terrorismo (OpenDemocracy, 2016).

Con base en lo anterior, las actividades llevadas a cabo por las FARC en relación con el negocio de cocaína, y las acciones desarrolladas por Al Qaeda y grupos asociados con el negocio del opio y sus derivados, se enmarcan dentro de las características de la definición de narcotráfico. Adicionalmente a esto, llama la atención que dichos negocios están relacionados con otros como terrorismo y tráfico ilegal de armas, que también son usados por los grupos en mención, y que corroboran la interacción de estos grupos con diferentes acciones criminales, en lo que se podría denominar un verdadero factor de convergencia.

5. Conclusiones.

Este documento estuvo enfocado en analizar los puntos de convergencia entre terrorismo y narcotráfico, teniendo como variables de estudio las organizaciones FARC y Al Qaeda, en la medida que su accionar ha estado enmarcado en las dos actividades mencionadas. El estudio de estas dos organizaciones es solo un punto de referencia que puede ser clave para comprender algunos de los entramados que unen las actividades ligadas al narcotráfico con el terrorismo y viceversa, terminando por evidenciar el estrecho vínculo que se crea entre ambas actividades.

En cuanto a los elementos que hacen posible esta convergencia de factores, se hace necesario enfatizar que ésta convergencia solo se pudo y se puede llevar a cabo a través de lo que se denomina la "globalización desviada", a través de la cual estas organizaciones son capaces de crear redes locales y transnacionales que les permiten sostener sus actividades y buscar lograr sus objetivos. De esta manera, este tipo de globalización se convierte en un elemento central para comprender cómo se establecen relaciones entre diferentes actores, y como éstas se logran mantener gracias a ideologías bien estructuradas y reforzadas por diferentes medios.

En el caso de las FARC en Colombia, los elementos desarrollados en este escrito buscaron demostrar que en la evolución de este grupo, se debería tener en cuenta los factores ideológicos, políticos y económicos que lograron ser relevantes en el camino de un grupo insurgente, que eventualmente llegaría a transformarse en una organización narcoterrorista. En esta evolución, en la cual el objetivo político de la toma del poder no se modificó, las FARC si lograrían dejar tras de sí en largo rastro de sangre de civiles y militares; así como el establecimiento de nexos más allá de las fronteras nacionales, con organizaciones con las cuales no necesariamente compartían los mismos objetivos, ni los mismos ideales, pero que eran necesarias para sostener la actividad criminal en donde no solo las drogas (especialmente cocaína), sino también el tráfico ilegal de armas entre otras, fueron cruciales.

En el caso de Al Qaeda, a pesar de revestir orígenes y una evolución diferente al caso de las FARC, si comparte con la organización narcoterrorista colombiana, la distinción en la convergencia de factores. En este sentido, vale la pena resaltar que el origen de esta organización puede trazarse hasta la guerra insurgente en Afganistán en contra de tropas soviéticas y la Primera Guerra del Golfo en 1991, lo cual en la década de 1990, se convertiría en la lucha a partir de interpretaciones radicales en el Islam que terminaron por crear la yihad global contra Estados Unidos, Israel y sus aliados. Sin embargo, a pesar de la clara influencia de la interpretación radical del Corán y la Ley Islámica, Al Qaeda también recurrió a otras acciones criminales como el narcotráfico (especialmente de opio y sus derivados), en estrecha colaboración con los Talibán en Afganistán (o por lo menos parte de esta organización), y la red creada en el Magreb con AQMI, quien establecería una red con grupos narcotraficantes como las FARC en América Latina.

En ambos casos, la conformación de redes es un elemento central que permite el funcionamiento y sostenimiento de las actividades criminales de dichas organizaciones. La red o redes construidas por ambas organizaciones tenían como función principal la consecución de recursos financieros, logísticos y armamento; la promoción de su ideología y la conexión con otras redes para facilitar el tránsito de armas, drogas, personas, entre otros elementos. Si bien es cierto que este documento estuvo enfocado a analizar la convergencia entre narcotráfico y terrorismo por ser dos elementos centrales a nivel internacional, lo cierto es que adicionalmente a estas dos actividades criminales existe también una convergencia entre el tráfico de armas, explosivos, migrantes y precursores químicos, la trata de personas entre otras y terrorismo, lo cual hace que el rango de análisis sea amplio y pueda llegar dificultar las verdaderas dimensiones del problema.

Por último, los elementos señalados son parte del problema señalado por la OEA en 2003 como Seguridad Multidimensional, la cual pese a tener un principio de aplicación a nivel hemisférico, puede ser útil para comprender los desafios a la seguridad de los Estados a nivel global. Como muestra de ello, se introdujo el tema de Al Qaeda como un elemento clave que permite comprender que la Seguridad Multidimensional también puede ser entendida en otras latitudes.

Declaración de divulgación: Este capítulo contiene apartes del libro **"FARC y Al Qaeda: Convergencia entre terrorismo y narcotráfico: Elementos de convergencia entre terrorismo y narcotráfico en un mundo globalizado"** de Andrés Felipe Cardona Orozco, Carlos Andrés Camargo y Jaime Correa Jaramillo, en proceso de publicación por parte de Editorial Académica Española.

Capítulo XI

Del Terrorismo al Ciberterrorismo[96]

Pedro Aníbal Buitrago Rincón
MY. Iván Sánchez Lozano
MY. José Antonio Mojica Amaya

1. Introducción

El presente documento se enfoca en el fenómeno del ciberterrorismo, iniciando por su conceptualización y el análisis de la política pública internacional y local respecto al tema, para luego continuar con la identificación de los aspectos generales que los identifican y determinan si son fines o medios de una y más amplia estrategia de actores del terrorismo internacional.

El ciberterrorismo como fenómeno se ha puesto de manifiesto en las Guerras de Quinta Generación, caracterizadas por su declaración no formal, usando recursos de múltiple naturaleza incluyendo las nuevas tecnologías, pudiéndose entender más fácilmente al estudiar los casos de ataques a infraestructuras criticas cibernéticas, como el caso del virus Stuxnet[97] y más recientemente el *malware* WannaCry, este último descrito por Kaspersky (2017) como:

96. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

97. Ataque cibernético contra las centrales nucleares de Irán, descubierto en junio de 2010, se trató de un gusano o virus informático creado por los Gobiernos de Estados Unidos e Israel, que se propagaba o trasmitía a través de memorias USB. (Gutiérrez del Moral, 2014)

> El ataque mundial de ransomware[98] que ocupó los titulares de todo el mundo, infectando más de 200.000 sistemas en 150 países. Hoy en día están surgiendo informes de una nueva cepa del ataque tipo gusano que Europol ha descrito como "a un nivel sin precedentes".

En Colombia, aunque se advierte que el vertiginoso crecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su correspondiente aporte a la globalización, ha servido de plataforma a las amenazas contra la seguridad a través del ciberespacio, no se reconocen los efectos catastróficos que podrían causar los ataques generados por esta clase de amenazas sobre la infraestructura crítica cibernética pública y privada, ya que "estas amenazas se materializan principalmente en conductas delictivas dirigidas a afectar el patrimonio económico y la intimidad de las personas" (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). El concepto anterior minimiza el impacto de estas acciones ya que el objetivo que se distingue hasta el momento no sobrepasa de la mera afectación personal, lo cual se podría comparar con delitos como el hurto y la violación a la intimidad definidos en el Código Penal colombiano.

En consecuencia, será tarea del documento presentado analizar los aspectos que han llevado a concebir el ciberterrorismo como la principal herramienta de actores que buscan mitigar su inferioridad o capacidad limitada para afectar los intereses nacionales de los Estados a través de los ataques contra la infraestructura crítica, razón por la cual en un primer momento serán analizados los hitos que determinaron su alcance e impacto. Luego, en un segundo bloque se abordarán los principales desarrollos teóricos en el contexto internacional y nacional, los principales desarrollos legislativos en el ámbito nacional y la manera de operación respecto de sus tipologías, como mecanismo

98. El *ransomware* (también conocido como *rogueware* o *scareware*) restringe el acceso a su sistema y exige el pago de un rescate para eliminar la restricción.

para establecer la forma en como los Estados han establecido las estrategias respectivas para su mitigación. Y finalmente, se establecerán algunas pautas que puedan considerarse como instrumentos para la elaboración de herramientas que garanticen las condiciones de ciberdefensa frente a la nueva modalidad de las amenazas terroristas.

2. Génesis y propagación

La proliferación de computadoras conectadas a módems telefónicos a principios de los años 80, aumentó la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, dando origen a los *hackers*; dicha vulnerabilidad alertó a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos con el temor que algún grupo terrorista pudiera realizar ataques o sabotajes por las redes sin necesidad de encontrarse en territorio americano, acuñando el término ciberterrorismo.

El Ciberterrorismo como término tomó fuerza en los años 90, cuando surgió el internet y su masiva penetración en la sociedad aumentando la existencia de módems, el desarrollo de las redes privadas y empresariales incrementándose el rango de exposición a la vulnerabilidad que traía consigo dicho avance tecnológico; tanto así que al finalizar el milenio, sin poder probarlo como un acto terrorista o una coincidencia surgió el denominado *"milenium bug"* o la falla del milenio, también conocido como el Y2K, el cual consistía en la incapacidad de muchas computadoras para registrar fechas posteriores a 1999, generando un temor conocido como el "apocalipsis informático" en la transición al año 2000, el cual finalmente se produjo debido a la masiva prevención y adecuación de los sistemas a nivel comercial y privado. (Massana, 2002).

Con posterioridad, el nuevo milenio trajo consigo el aumento de los trabajos empíricos que exploran cómo las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) permitieron la aparición de formas de comunicación que

están transformando los movimientos sociales del siglo XXI, el mundo de las finanzas y la economía, y hasta las operaciones militares alrededor del mundo. Las transformaciones de dichos movimientos en el contexto de las NTIC se intensificaron, especialmente a partir de la segunda década del siglo XXI, con la influencia de factores como la evolución del nuevo entorno comunicativo de la era de *Internet* y de la *Web* social. (Galindo, 2016).

La igualdad, la libertad, el anonimato o también el derecho a la intimidad son valores prevalecientes en cualquier sociedad que la internet hoy día permite al pie de la letra hasta el punto de evitar la intervención estatal en la red; la red no es de ningún gobierno, es de la sociedad, su uso asegura la igualdad de los usuarios, por lo tanto los límites para su acceso son dados por el conocimiento para el manejo de la red, el conocimiento de programas informáticos y la calidad de la maquina con que se opere. (Amado, 2007).

Todos estos fenómenos hicieron que la Internet pasara de ser un medio seguro a un espacio libre, permitiendo la comisión de delitos, accediendo sin autorización a sistemas de tratamiento de la información, para obtener una satisfacción de carácter intelectual por el desciframiento de los códigos de acceso sin causar daños inmediatos y tangibles en la víctima; no obstante, una de las consecuencias más palpables, pero menos advertidas, radica en la posibilidad que se le confirió a grupos extremistas de distinta índole, que en un primer momento o bien no contaban con la real intención de desplegar vías de hecho para la acometida de sus objetivos, pero encontraron en el marco de la internet, los medios ideales para efectuar ataques que en un primer momento podían llegar a concebirse como "carentes de víctimas" y que no requerían grandes esfuerzos logísticos o financieros, pero que contaban con el potencial de afectar gravemente los intereses de Estados o actores terceros.

Por otra parte, de tantas discusiones sobre las acciones jurídicas con respecto a los delitos en la red, se encontró que el ciberterrorismo y los demás delitos informáticos, atentan y lesionan bienes jurídicos protegidos como el patrimonio, la intimidad, la información y hasta la vida; por ello se consideran como pluriofensivos, ya que atacan más de un bien jurídico protegido a la vez.

El ciberterrorismo genera situaciones diferentes. Por una parte, se encuentra el uso que hacen los grupos terroristas de estas herramientas telemáticas y los medios de comunicación en las redes, tanto para estrategia, interconexión, propaganda, como adiestramiento y hechos que siembran el terror y la muerte; por otra parte están los usuarios y organizaciones con ideas terroristas, que permiten la difusión de su ideal a través de páginas web, blogs, etc., y en general todo tipo de plataformas que facilitan los procesos de comunicación entre las células o entre estas y las personas a quienes se busca radicalizar.

Al otro extremo están los gobiernos que intentan contrarrestar los hechos terroristas creado sitios electrónicos con información sobre estos grupos, sitios de localización de personas, medidas legales sobre acceso a la información y tratamiento de datos para evitar que se repitan hechos como los del 26 de noviembre de 2008, cuando extremistas islámicos atacaron Mumbai, capital de la India, donde diez hombres armados consiguieron paralizar la ciudad dejando 164 muertos y más de 300 heridos, y en donde solo uno de los terroristas fue capturado con vida; al ser interrogado, explicó que pertenecía al grupo terrorista islámico Lashkar-e-Taiba, con base en Pakistán. Pudo revelar que se habían familiarizado con la zona objetivo gracias a información pública disponible en Internet y que durante el ataque habían permanecido en contacto con un controlador quien por teléfono móvil, proporcionaba información en tiempo real mientras veía las noticias simultáneamente y les daba instrucciones sobre qué estrategia seguir, (Massana, 2002).

Es difícil establecer una definición de terrorismo que sea aceptada universalmente, teniendo en cuenta que muchos grupos aluden los actos violentos a la demostración de sus ideales creando una dificultad para los Estados de establecer los límites entre lo que es legítimo y lo que no, lo que puede ser una forma correcta de lucha o una forma incorrecta en mostrar sus ideales. Hablar de terrorismo implica abordar una de las temáticas que más tiempo ha permanecido en boga forzosa en la agenda internacional, habida cuenta de su carácter anacrónico y ubicuo, esta última característica entendida como la posibilidad de aparecer en cualquier lugar o momento con el potencial suficiente para interrumpir los flujos normales de cualquier organización político-administrativa o social.

> En términos teóricos, definimos una amenaza ubicua como aquella que se presenta simultáneamente en varios sitios, con diversos intereses y objetivos, bajo distintas metodologías, y con rasgos de identidad ciertamente difusos, pero en todo caso, inspiradores de un cierto sentido de comunidad. (Torrijos, 2012, p.3).

En lo que concierne a su sentido más abstracto, el terrorismo es una de las actividades más aborrecidas por las sociedades, sin que importen cuáles son las motivaciones subyacentes a su accionar, pues en este punto tiene muy poca relevancia determinar si existe algún grado de justificación para sus perpetradores, ya que, "jamás debe permitirse a los terroristas crear un pretexto para sus actos. Cualesquiera sean las causas que pretendan defender, cualesquiera sean las injusticias a las que afirmen responder, el terrorismo no puede justificarse", (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006, p.3).

Más aún, cuando lo que queda en la mente y sentir de los ciudadanos es un profundo sentimiento de vulnerabilidad, impotencia y angustia, fundamentados en la indeterminación de los blancos, ya que, todos los ciudadanos sin distinción

de su género, profesión, edad, religión, preferencias o cualquier otro tipo de características, pueden ser blancos de las actividades terroristas en cualquier momento o lugar, y este en consecuencia, es el principal objetivo perseguido por los actores terroristas, pues no puede perderse de vista que su finalidad es aprovechar la naturaleza viral del miedo.

Las muertes o daños ocasionados en las personas o la infraestructura, son las herramientas predilectas empleadas por las Organizaciones de Terrorismo Internacional, por las células terroristas y los terroristas de único acto, a quienes la prensa occidental ha categorizado como lobos solitarios (circunstancia que en la mayoría de situaciones lo único que ha generado es una mayor atención y curiosidad, considerando de lo atractivo de su título). "Los grupos que recurren a tácticas terroristas lo hacen porque creen que esas tácticas son eficaces y contarán con la aprobación de muchos, o por lo menos de aquellos en cuyo nombre pretendan actuar" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006, p.3). En cambio, cada ocasión en la que se registra una víctima de un acto terrorista, lo único que se logra es la reafirmación de una conducta egoísta y destructiva que exclusivamente busca la instrumentalización de la persona humana, negando su identidad y su capacidad como sujeto del derecho más fundamental, a saber; la vida e integridad personal.

Sin embargo, la instrumentalización se genera en múltiples niveles, ya que no solo se usa el sufrimiento de las víctimas directas, sino que también son aprovechados los mecanismos de difusión secundarios o accidentales de la ciudadanía en general, elemento central del accionar de los actores terroristas. Tradicionalmente se piensa que los "terroristas quieren a un montón de gente viendo, no a un montón de gente muerta. Ellos [los terroristas] están limitados no solo por el acceso a armas, también por la restricción propia" (Jenkins, 1975, p.14), no obstante, este punto ha empezado a desvirtuarse de cara a los actos

cometidos por grupos emergentes como el Estado Islámico, que no solo se ha concentrado en tener a muchos espectadores al tanto de sus operaciones, sino que también ha mostrado interés en tener a muchas personas muertas, razón por la cual se acrecienta la necesidad de desarrollar herramientas que permitan la represión de su accionar, o bien su manejo integral con la finalidad de llevarlo a niveles que resulten irrelevantes.

Dicho lo anterior, el sujeto pasivo del terrorismo no es necesariamente la persona o personas que sufren las consecuencias directas de las actividades terroristas; el sujeto pasivo indirecto a quien están dirigidas las acciones de los actores terroristas es el conglomerado social del grupo focal elegido, y su finalidad es utilizarlo como agente de propagación de pánico y angustia para alcanzar sus objetivos. En dicho sentido, no constituye otra cosa que un mecanismo de presión para alcanzar por vías violentas sus pretensiones, situación que encajaría de manera menos problemática con las acepciones más tradicionales del término terrorismo.

Hecha esta consideración, se encuentran los elementos constitutivos de las nociones tradicionales del vocablo terrorismo; en primer lugar, el desarrollo de conductas tendientes a la proliferación de un estado de miedo o pánico en la población (o en un sector de ella), sumado al carácter teleológico que se predica de dicha manifestación, considerada como la presión ejercida sobre un gobierno u organización con la finalidad de obtener ventajas en la materialización de sus objetivos. Acorde con lo anterior, numerosos académicos han seguido esta misma línea definicional, de la cual se resaltan como elementos coincidentes la violencia, la política, la sociología y la psicología.

De ahí que existan elementos comunes en las definiciones de académicos como Walter Lequeaur, para quien el terrorismo no es otra cosa que “el uso

ilegítimo de la fuerza para lograr un objetivo político, mediante el ataque de personas inocentes" (Laqueur, 1977, p.12). O bien, en palabras de Tore Bjorgo, el "terrorismo es un conjunto de métodos de combate más que una ideología identificable o movimiento, y envuelve el uso premeditado de la violencia contra (principalmente) no-combatientes, en orden a alcanzar un efecto psicológico de miedo en otros más allá de los blancos inmediatos" (Bjorgo, 2005, p.7). Se puede observar como cada una de estas definiciones avanza en el sentido de incluir nuevos componentes, no obstante, la estructura base siempre resulta ser la misma, el uso ilegítimo de la fuerza tendiente a la producción de miedo como herramienta para alcanzar fines políticos. De allí resulta que cada vez que se emprenda una empresa por la identificación de los rasgos definitorio, se llegue siempre a la misma triada.

Grafico 1. Los Rasgos Definitorios del Terrorismo.



Fuente: Elaboración Propia

Los principales cambios que se advierten, tienden a la graduación de las conductas o bien de los efectos que las mismas tienen en las personas que

fungen como blanco, como puede confrontarse en la definición de Fernando Reinares, quien establece tres categorías distintas para definir el terrorismo.

En primer lugar, es un acto de violencia que produce desproporcionadas reacciones generalizadas tales como el miedo y ansiedad las cuales probablemente influencien las actitudes y el comportamiento. En segundo lugar, la violencia es sistemática y adicionalmente impredecible y es usualmente dirigida contra blancos simbólicos. En tercer lugar, la violencia transmite mensajes y amenazas en orden a comunicar y ganar control social. (Bruce, 2013, p.27)

Ahora bien, puede que en la dimensión académica se encuentran ciertos consensos que permiten una relativa integración conceptual, lo cierto es que el problema definicional radica en su aplicación en las esferas estatales o supranacionales. En este punto hay que mencionar que a lo largo de la historia han sido múltiples los intentos por encasillar conceptualmente el terrorismo con la finalidad de asignar efectos jurídicos supranacionales a las conductas de determinados agentes que bajo contextos concretos son acusados de poner en riesgo la estabilidad de los Estados, sus intereses nacionales o sus activos estratégicos. A este respecto podría hablarse de una dimensión institucional, con claras divisiones y diferencias de cara a la naturaleza del ente que regula. En primer lugar se pueden advertir algunos de los esfuerzos desarrollados por entidades encargadas de la seguridad, como es el caso del FBI[99], quien para el adecuado cumplimiento de sus funciones misionales se apoya en la definición y divisiones proporcionadas por el Código de los Estados Unidos (US CODE), conforme al cual, por terrorismo se entienden las actividades que reúnen tres características.

99. Federal Bureau of Investigation

> a) Envuelven actos violentos o peligrosos hacia la vida humana que violan la ley federal o estatal.
>
> b) Parecen estar dirigidos a i. intimidar u obligar a la población civil; ii. Influenciar la política de un documento mediante obligación o coerción o; iii. Afectar la conducta de un gobierno mediante destrucción masiva, asesinatos o secuestros.
>
> c) Tienen su ocurrencia primordialmente en el territorio jurisdiccional de los Estados Unidos (Office of the Law Revision Counsel, S.F. Art. 2331).

En consecuencia, podría determinarse que los rasgos definitorios corresponden a la naturaleza de la acción, el público al que está dirigido y la finalidad perseguida, no obstante en medio de cada uno de estos componentes existen rasgos de indeterminación o vacíos, que son plenamente aprovechados tanto por los Estados, como por las mismas organizaciones terroristas, pues en dicho sentido parece operar a cabalidad una suerte de In dubio pro terroristis[100], conforme al cual cualquier duda que llegue a presentarse ofrecería ventajas a los perpetradores, ampliando los vacíos de respuesta y competencia de los organismos de seguridad de los Estados. En consecuencia, la comunidad internacional ha llevado a cabo esfuerzos por esbozar nociones con aspiraciones de estandarización con el objetivo de trazar los lineamientos para que los ordenamientos jurídicos internos puedan armonizar sus políticas en la lucha contra el terrorismo, sin embargo, dado el alto impacto político cualquier decisión que se tome en esta materia, no se han logrado los consensos requeridos, situación que solo ha contribuido en ampliar la brecha definicional que persiste.

100. Aplicando analógicamente el principio in dubio pro reo, conforme al cual en desarrollo de una acción penal, cualquier tipo de duda debe resolverse favorablemente al procesado, como mecanismo para garantizar sus derechos fundamentales.

3. Desarrollos normativos internacionales en la lucha contra el terrorismo

Desde épocas tempranas la comunidad internacional advirtió la necesidad de dotar de contenido el concepto de terrorismo, con el objetivo de combatir de una manera más certera cada una de sus caracterizaciones, para lo cual se desarrollaron importantes colaboraciones en el periodo de entreguerras.

> Los intentos de definir el "terrorismo" en aquel momento tuvieron lugar en dos frentes: por un lado de la mano de la Sociedad de Naciones partiendo de la petición de diversos Estados para negociar un Tratado que castigara este delito a nivel internacional y, por otro, a partir de una serie de conferencias internacionales para la unificación del derecho penal que tuvieron lugar entre los años 1930 y 1935. (Fakhouri, 2014, p.46).

Las conferencias de unificación del derecho penal tuvieron como resultado las primeras manifestaciones definicionales frente a un fenómeno que aún no revelaba todos sus matices, de ahí que atendiendo a nociones tradicionales del rol de los Estados frente a la seguridad, la cual depende de la concesión de poder que se haga en cabeza del Estado (como puede apreciarse en Hobbes), como mecanismo para "defenderlos de la invasión de los extranjeros y las heridas de unos a otros" (Hobbes, 1966, p.157). De ahí que se piense exclusivamente en amenazas convencionales que cuenten con la capacidad de poner en riesgo la seguridad y existencia de los Estados, representada en la integridad de sus gobernantes, como puede confrontarse en la definición del artículo 1.2 de la Convención de 1937, según la cual serían actos terroristas "todos los actos criminales dirigidos contra un Estado y pensados o calculados para crear un estado de terror en la mente de las personas públicas, grupos de personas o el público en general" (Sociedad de Naciones, 1937, Art. 1.2).

Ahora bien, como se desprende de la misma convención, se tenian como conducta criminosa aquellos

> Actos intencionales dirigidos contra la vida, integridad física, salud o libertad de Jefes de Estado, sus familiares, personas que gocen de sus prerrogativas y, en general, aquellas personas investidas de responsabilidad u ocupando cargos públicos, siempre que tales actos se cometan precisamente en conexión con esos cargos o responsabilidades. (Sociedad de Naciones, 1937, Art. 2).

En consonancia con dichas formulaciones, y soportadas en las caracterizaciones tempranas de los ciclos del terrorismo como fue planteado por David Rapoport, el resultado que se obtiene es que en la formulación positivizada de la conducta se obtienen tipos de sujeto pasivo especial, pues dependen: Primero, de la naturaleza del cargo que ostenten; o bien, Segundo, de la relación de consanguinidad o afinidad con figuras públicas. Situación que limitaría ostenciblemente la capacidad de respuesta juridico-penal atendiendo a las exigencias del principio de estricta legalidad.

Gráfico 2. Las Cuatro Olas del Terrorismo Moderno según Rapoport.



Fuente: (Molano, 2012, pág. 46)

Las definiciones legales obtenidas en este periodo pueden encuadrarse como una respuesta ante los eventos desarrollados en las dos primeras olas del terrorismo moderno, atendiendo a la fenomenología que las caracterizó, la cual se desarrolló principalmente a través de asesinatos de prominentes figuras políticas y el empleo de algunas tácticas de guerra de guerrillas.

La primera ola del terrorismo moderno, caracterizada por el surgimiento de movimientos anarquistas o revolucionarios, tuvo su origen en dos factores, el primero de los cuales consistió en la transformación de las comunicaciones y el transporte (Rapoport, 1979), lo que permitió que cualquier acción gozara de amplio conocimiento público, situación que favoreció la propagación de ideologías revolucionarias y sus tácticas. El segundo factor que contribuyó en este escenario fue la doctrina y la cultura.

> Los escritores rusos crearon una estrategia para el terror, la cual se convirtió en una herencia para que los sucesores usaran, mejoraran y transmitieran. Sergei Nechaev fue la figura líder de este esfuerzo; Nicholas Mozorov, Peter Kropotkin, Serge Stepniak y otros también hicieron contribuciones. Sus esfuerzos perpetuarían esta ola. (Rapoport, 1979, p.49)

Las tácticas empleadas por los grupos que surgieron en este periodo se caracterizaron por enfocarse en blancos de alto valor estratégico de las esferas estatales y políticas, razón por la cual podría pensarse que el terrorismo desarrollado en este periodo cumpliría parcialmente con los componentes definicionales: Primero, el uso ilegítimo de la fuerza; y Segundo, los mecanismos de presión política.

En consecuencia, se puede advertir que la operación de estos grupos constituyó per se actos de resultado automático. Como ejemplo de lo anterior pueden confrontarse los asesinatos del presidente norteamericano William McKinley en 1901 y "el asesinato del rey Alejandro de Yugoslavia y de Louis Barthou, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia en octubre de 1934" (Fakhouri, 2014, p.47).

Hecha esta consideración, pueden advertirse algunas de las condiciones que influirían en el proceso de construcción del terrorismo como concepto, pues

como se mencionaba previamente, la comunidad internacional se encontraba ante un tipo penal de sujeto pasivo calificado, es decir, no cualquier víctima podría predicarse afectada a título de un acto terrorista, pues dicha condición dependía de la naturaleza y/o cargo desempeñado o bien de su influencia en un determinado Estado.

Como resultado, este proceso de vaguedad conceptual y jurídica, así como de carencia de delimitación de los bienes jurídicamente tutelados, determinó que la convención nunca fuera aplicable y en consecuencia fue adoptada por un único Estado; la India británica, lo que generó que prevaleciera un constante estado de incertidumbre y falta de competencia para juzgar las acciones de algunas organizaciones.

Este mismo proceso se surtió en numerosas ocasiones a lo largo del tiempo, teniendo los mismos inconvenientes a la hora de encerrarlo en un único cuerpo normativo que le confiriera a la comunidad internacional la posibilidad de atacar eficazmente el accionar de organizaciones terroristas anarquistas y/o anticolonialistas, como puede verse a continuación:

Gráfico 3. Principales Proyectos de Codificación Internacional en la Lucha contra el Terrorismo.

FECHA	INSTRUMENTO	RESULTADO
1954	Código de Crímenes contra la Paz y la Humanidad	Art. 2.6 El ejercicio o la incitación por parte de las autoridades de un Estado a llevar a cabo actividades terroristas en otro Estado, o la tolerancia por parte de las autoridades de un Estado respecto de actividades realizadas para llevar a cabo actos terroristas en otro Estado.
1985	Resolución – Asamblea General de la ONU	Se instó a los Estados a tomar medidas hacia una eliminación rápida y definitiva del terrorismo internacional. Un rasgo definitivo de esta resolución fue que se asoció el termino criminal con el terrorismo.
1991	Proyecto de Código – Comisión de Derecho Internacional	Art. 24. Se define como terrorista internacional, aquel que en su condición de agente o representante del Estado, cometa u ordene la comisión de alguno de los siguientes actos: ejecutar, organizar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actos contra otros Estados dirigidos contra las personas o la propiedad que sean susceptibles de crear un estado de terror en las mentes de personas públicas, grupos de personas o el público en general.
1995	Proyecto de código – Comisión de Derecho internacional	Se añade la posibilidad de que, junto al agente o representante estatal, el sujeto activo pueda ser también un sujeto individual que actúa al margen del Estado y se exige, así mismo, que la actividad tenga por finalidad "obligar al Estado en cuestión o garantizar un trato de favor o actuar de determinada manera.
1996	Proyecto de código – Comisión de Derecho Internacional	Atendiendo a las dificultades a la hora de definir el terrorismo, éste desaparece como categoría, pasando a configurar un subtipo de crimen de guerra.

Fuente: Elaboración propia con fundamento en: (Fakhouri Gómez, 2014.)

Este panorama ofrece una clara perspectiva de la manera en la que los Estados percibían las amenazas provenientes del terrorismo durante el siglo XX, principalmente considerándolas como manifestaciones de los factores de riesgo convencionales, con origen bien en organizaciones nihilistas o anticolonialistas, en lo que denomina Rapoport (1979) como la segunda ola del terrorismo moderno. El desarrollo de este periodo

> Puede distinguirse como la lucha por la autodeterminación, por la independencia para liberar ciertas partes del mundo de sus ocupadores, con el fin de emanciparlas del gobierno francés o inglés. Las tácticas usadas por dichos grupos fueron diferentes de aquellas empleadas en la ola anterior. Estos grupos se caracterizaron por el empleo de tácticas de guerrilla, que resultaban problemáticas para los grandes poderes, como el Imperio británico o el francés, para

> quien resultaba complicado lidiar con tácticas de golpear y huir. (Baker, 2014)

Las manifestaciones normativas hasta aquí contempladas atienden la naturaleza de las amenazas y a la fenomenología que subyacía a la conjunción entre la primera y segunda ola del terrorismo contemporáneo; sin embargo, fueron desarrolladas como respuesta a las tácticas empleadas por los grupos terroristas para la obtención de sus objetivos. De conformidad con lo anterior, las regulaciones jurídico-penales y/o anticipaciones de las barreras normativas, corresponden a la prohibición de conductas que tengan el potencial de poner en riesgo a los Estados, sus dirigentes o sus intereses, no así a la protección de la sociedad frente a la propagación del terror.

Como se puede advertir en lo precedente, en los proyectos de codificación quedaron reveladas las dificultades que debían sortearse a la hora de unificar los criterios como mecanismo para establecer parámetros jurídico-penales claros, que les permitieran a los operadores judiciales la aplicación taxativa de controles al accionar de los grupos terroristas, no obstante, ante la imposibilidad de alcanzar los consensos normativos, fueron promulgados otros instrumentos que buscaron rodear los aspectos definicionales y regular los mecanismos de operación preferidos por los grupos terroristas, teniendo como resultado:

Gráfico 4. Convenios Internacionales Antiterroristas.



Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en el plano normativo, aun pese a las convenciones internacionales existentes, persiste un problema definicional que no ha podido solucionarse, razón por la cual la comunidad internacional ha aportado herramientas que atacan algunas de las manifestaciones del fenómeno en desarrollo de lo que podría denominarse intervención indirecta, pero no el fenómeno en estricto sentido, circunstancia que ha obligado a que regionalmente se tomen algunas decisiones que permitan el tratamiento judicial de las organizaciones y/o actores terroristas, como se vería a continuación.

3.1 Desarrollos Regionales Para La Supresión Del Terrorismo

3.1.1 Convención europea para la supresión del terrorismo – 1977.

La Convención Europea constituye el principal tratado en materia de terrorismo, no obstante, el mismo no cuenta con una definición exacta, en su lugar, está organizado como un tipo penal de naturaleza abierta, conforme al cual se establecen remisiones a una lista de delitos que cuentan con la capacidad de asimilar los contextos al accionar del terrorismo.

> Estos delitos son aquellos referentes al "terrorismo" aéreo, como se señaló en la Convención de La Haya de 1970 y la Convención de Montreal (1971); los dirigidos contra personas protegidas internacionalmente; la toma de rehenes y el empleo de explosivos (arts. 1 [1-5]). Los intentos de cometer alguno de ellos no podrían contemplarse en ningún caso como delitos políticos (art. 1.6). (Fakhouri, 2014, p.66)

La Convención Europea sigue la misma línea empleada por la ONU, al omitir la tarea de aventurarse a conceptualizar sobre una determinación fenomenológica de terrorismo, sin embargo, esta labor fue abordada más adelante a través de la Decisión Marco (2002/475/JAI), conforme a la cual se estableció que:

> Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se consideren delitos de terrorismo los actos intencionados que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de: a. Intimidar gravemente a una población; b. Obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; c. o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional. (Consejo de la Unión Europea, 2002).

Podría advertirse en este punto que a través de la DM (2002/475/JAI), fueron establecidos unos linderos bastante incompletos, como intento para encasillar las conductas típicas y antijurídicas de las organizaciones terroristas, sin embargo, lo que no puede perderse de vista es que la misma respondía a las amenazas aceptadas y generalizadas en dicho marco temporal, situación

que permite entender por qué desde los organismos regionales, y en orden descendente en las codificaciones penales de cada país, se priorizó el tratamiento del terrorismo como un tipo penal de resultado, persiguiendo principalmente a los perpetradores de actos terroristas específicos, dejando (aparentemente) de lado las redes construidas en torno a dichos eventos y que contribuían de manera importante en la concreción de sus resultados.

En relación con este punto, tuvo que pasar algún tiempo para que las autoridades descubrieran las nuevas dimensiones de las redes tejidas en torno a las organizaciones terroristas, ya que cada vez resultaba más evidente que "ellos [los grupos terroristas] necesitan una base de soporte que los provea del material requerido, dinero, casas seguras y reclutas" (Jones & Martín, 2008, p.13), elementos imprescindibles para garantizar su permanencia en el tiempo. Situación que implicaba necesariamente la participación de facilitadores civiles que apoyarán sus actividades.

Establecer esta conexión, así como reconocer la necesidad de alternar las modalidades de lucha contra el terrorismo (dejando atrás el uso exclusivo del poder militar «Hard Approach»), resulta un cambio de paradigma que permea la manera en como es concebida la creación de instrumentos normativos concebidos para la eliminación de amenazas terroristas, situación que puede apreciarse de una mejor manera en las consideraciones de la Decisión Marco 2008/919/JAI, conforme a la cual se establece que

> La amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado rápidamente durante estos últimos años, con cambios en el modus operandi de los terroristas y sus partidarios, incluida la sustitución de grupos estructurados y jerárquicos por grupúsculos semiautónomos ligados entre ellos con flexibilidad. Tales grupúsculos forman redes

> internacionales y recurren cada vez más a las nuevas tecnologías, en especial Internet. (Consejo de la Unión Europea, 2008)

Conviene subrayar que resultan palmarios los cambios frente a la concepción empleada en uno y otro escenario, por lo menos en lo que se refiere a su ámbito de aplicación, aspecto que atendería a la realidad empírica frente a las modalidades de lucha contra el terrorismo, ponderando las acciones disponibles versus las formas en la que los grupos terroristas inician o desactivan su operación.

Los cambios en las Decisiones Marco, dan buena cuenta de los cambios graduales en la gestión de las amenazas, incluyendo medidas poco convencionales para el manejo de amenazas poco convencionales. Un buen ejemplo de lo anterior lo constituirían las estrategias desarrolladas para contrarrestar la capacidad de radicalización y reclutamiento de organizaciones terroristas de orientación religiosa a través de internet, pues fueron precisamente estos grupos quienes descubrieron prematuramente las posibilidades de expansión de audiencia concedidas por la masificación de las redes sociales y otros medios de comunicación.

3.1.2 Convención Interamericana contra el terrorismo – 2002

El 3 de junio de 2002 fue aprobada mediante sesión plenaria la «Convención Interamericana contra el Terrorismo», al reconocer "la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos y para la paz y seguridad internacionales" (Organización de Estados Americanos, 2002), lo que llevó a que fueran adoptados una serie de instrumentos que fortaleciera a los Estados Americanos en su lucha contra las amenazas y organizaciones terroristas. La convención tuvo como objetivo ofrecer los Estados las herramientas para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, sin querer conceptualizar o

caracterizarlo de manera taxativa, en su lugar estableció una serie de remisiones a otros instrumentos internacionales que regulaban subsidiariamente algunas de las principales manifestaciones, como puede confrontarse a continuación:

Gráfico 5. Remisiones de la Convención Interamericana contra el Terrorismo



Fuente: Elaboración propia

La modalidad empleada por la OEA implicó la consagración ampliada de un tipo penal en blanco que abarcara de manera suficiente toda la convención, situación que dogmáticamente lo separaría de las definiciones tradicionales del derecho penal y la jurisprudencia nacional, conforme al cual en un tipo penal en blanco

> El hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. Los tipos penales en blanco corresponden a una clasificación reconocida por la doctrina y aceptada por la jurisprudencia constitucional colombiana ante la incapacidad práctica de abordar temas especializados y en permanente evolución, siempre que la remisión normativa permita al intérprete determinar

> inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y la sanción correspondiente. (Corte Constitucional, 2012).

Cabe señalar que tradicionalmente las consagraciones penales en blanco se predican de elementos típicos de carácter individual, esto es, conductas típicamente antijurídicas de naturaleza específica; no obstante, la decisión político-jurídica de las organizaciones internacionales regionales, fue la de ampliar dicha categoría a través de la adopción de codificaciones normativas de textura abierta, tal y como es el caso de la Convención Interamericana contra el terrorismo y las remisiones correspondientes que efectúa a otros cuerpos normativos de naturaleza especial, como quedó evidenciado en desarrollo del artículo 2.

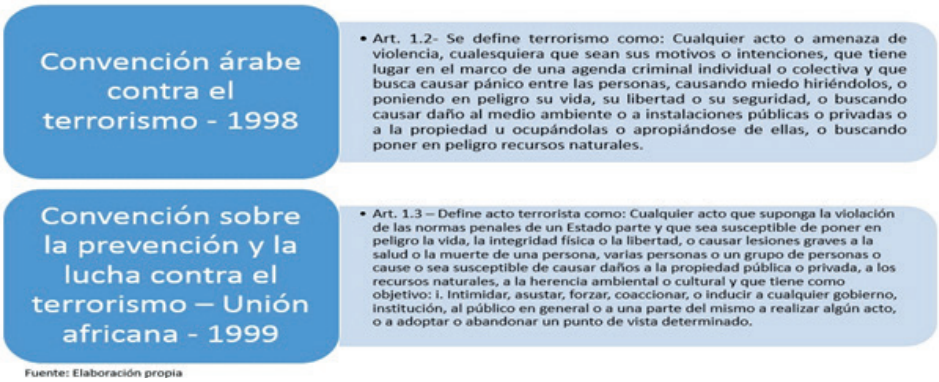
3.1.3 Convención Regional para la Supresión del Terrorismo - 1987

Una situación similar puede observarse en la experiencia asiática, en la cual a través de la Convención Regional para la Supresión del Terrorismo desarrollada por la Asociación De Asia Del Sur Para La Cooperación Regional (SAARC), mediante su art. 1 "recoge un listado de tratados internacionales y delitos que reciben la consideración de terroristas" (Fakhouri, 2014, p.68), abarcando tres de los principales instrumentos internacionales creados para garantizar la seguridad de aeronaves y de las personas internacionalmente protegidas [Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 1970 – Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil 1971 – Convenio sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas 1973]. Nuevamente es empleada la tipología de codificación de textura abierta, que fue empleada tanto en el escenario europeo como en el americano, evitando las complicaciones relacionadas con la delimitación normativa derivadas de la conceptualización del terrorismo.

3.1.4 Otras regulaciones regionales para la supresión del terrorismo

Aun cuando la modalidad más empleada consiste en la creación de codificaciones de textura abierta, no todas las experiencias regionales abordan la lucha antiterrorista de la misma forma, ya que, como se ha mencionado previamente, el ejercicio de caracterización normativa constituye una oportunidad para la supresión de otras conductas que cuentan con el potencial de afectar o atacar los intereses de los Estados, aun cuando estos no necesariamente estén inmersos en la ilegalidad, en este punto puede manifestarse que con fundamento en la lucha contra el terrorismo son criminalizadas expresiones propias de las disidencias políticas o fuerzas de oposición, como herramientas empleadas por los gobiernos para suprimir fuerzas políticas o sociales democráticas contrarias a sus proyectos.

Gráfico 6. Codificaciones Antiterroristas, Caso Árabe y Africano



Fuente: Elaboración propia

Conviene subrayar, tal como se ha podido advertir en las modalidades empleadas por cada una de las organizaciones de carácter regional en la formulación de las normativas generadas para facilitar la lucha contra el terrorismo, que el principal mecanismo es la adopción de instrumentos de textura abierta, considerando que resulta más sencillo la remisión a codificaciones extrapenales, de las cuales se busca extraer tanto la descripción típica como las

consecuencias jurídicas de la conducta, sin que deban ser abordados de manera estructural los debates que resulten en la delimitación puntual de que constituye o no una manifestación del terrorismo y en sentido contrario, que constituiría una manifestación inequívoca de disidencia y/u oposición política.

> Una visión crítica revela, no obstante, la tendencia a la expansión en las mismas, lo que conduce a la consideración como actos terroristas de un vasto número de conductas. Los Estados se guardan un amplio margen para frenar a la oposición política y disidente, aspecto éste, por otra parte evidente en las convenciones de la OAU [Unión Africana] y de la Liga Árabe. (Fakhouri, 2014, p.69)

En consecuencia, podría manifestarse que la falta de voluntad política que se predica al momento de definir el terrorismo, atiende a la necesidad de mantener cierto margen de discrecionalidad frente a las amenazas internas, aspecto que habilitaría a los Estados para actuar sin atención a ningún tipo de limitante o restricción, equiparando a los grupos de disidencia política con organizaciones terroristas, de donde resultaría el empleo de todo el poder militar y policial de un Estado para la represión de los factores de inestabilidad.

Dicho lo anterior, resulta válido resaltar que esto es problemático en contextos como el de las naciones árabes o africanas, considerando que el nivel de indeterminación o arbitrariedad en la delimitación de los blancos, podría asemejarse al de las organizaciones terroristas, con la diferencia de que no estarían siendo instrumentalizadas víctimas inocentes con la finalidad de alcanzar un objetivo político, sino que por el contrario, se aprovecharía la condición de terrorista, que podría predicarse de cualquier persona, para perseguirlo y aplicarle toda la fuerza estatal con la finalidad de proceder a su neutralización.

4. La Persistencia Del Problema Definicional

Como puede confrontarse en el recorrido conceptual abordado, existe un espectro suficientemente amplio empleado por colectivos o individuos para respaldar sus objetivos y/o intereses en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere, queriendo encasillarlo a la medida de sus perspectivas o necesidades.

> Esto incluye organizaciones y alianzas entre naciones, académicos e investigadores, al sector legal, el sector de la salud, agencias antiterroristas y de policías, gobierno que quieren proteger a sus ciudadanos, o gobiernos que desean reprimir a sus ciudadanos, grupos terroristas y a los medios. Ellos tienen diferentes agendas, incluso al interior de sus propios grupos, razón por la cual es poco probable que exista una definición generalizada del terrorismo. Esto tendría consecuencias políticas y sociales. (Bruce, 2013, p.29)

Con todo y los constantes esfuerzos de Organizaciones Internacionales, Estados y otros sectores interesados, más allá de la academia no ha sido posible superar las limitaciones dadas por la carencia de un criterio unificado y este es precisamente el primer elemento, en lo que atañe a las dificultades en la generación de políticas que ataquen al terrorismo en su centro de gravedad, aun cuando deba manifestarse que las caracterizaciones actuales de las organizaciones terroristas dificultan este tipo de abordaje, habida cuenta de su conformación como redes o clústeres terroristas, aspecto que dificulta la identificación de un centro de gravedad en estricto sentido, pues este margen de indeterminación usualmente es llenado a través de la implementación de medidas de corte militar o exclusivamente represivas o coercitivas *(Hard Approach)*, que como puede constatarse en la mayoría de Estados, resultan insuficientes para la supresión de los grupos terroristas. Si no se tiene una definición clara sobre el término terrorismo resulta altamente complejo pensar en un qué se puede esperar del

término ciberterrorismo, que alude a la aplicación del terrorismo por medio del uso del ciberespacio, es decir haciendo uso de las redes dentro de las cuales el campo de acción es casi que infinito, haciendo más difícil la identificación de los actores. (Massana, 2002).

El objetivo de un ataque ciber-terrorista no es sólo impactar sobre la economía de una región o país, sino amplificar los efectos de un ataque terrorista físico tradicional, provocando confusión, los efectos tienen mayor alcance, genera pánico en la población en general, es por esto que un ataque ciber-terrorista debe analizarse en términos por el objetivo que persigue y su impacto, por el modo de ataque porque este será siempre por alguna red. (Reyes, 2014).

Dorothy Denning define ciberterrorismo como la convergencia entre ciberespacio y terrorismo. Se refiere a los ataques ilegales y amenazas de ataques en contra de computadores, redes y la información almacenada en ellos cuando son realizados para intimidar o coaccionar un gobierno o su población en la persecución de objetivos políticos o sociales. También, para calificarlo como ciberterrorismo, un ataque debe resultar en violencia en contra de personas o propiedad, o al menos causar un daño suficiente para generar miedo en la población, como por ejemplo, los ataques que llevan a la muerte o lesiones corporales, explosiones o una severa pérdida económica. Adicionalmente, pueden ser actos de ciberterrorismo graves ataques en contra de infraestructura fundamental de un Estado, dependiendo de su impacto. En cambio, no lo serían aquellos ataques que interrumpen servicios no esenciales o que involucran mayormente una costosa molestia.

Algunos de los medios o plataformas utilizadas por medio del ciber dentro del continente americano con fines terroristas pueden ser mencionados a continuación:

4.1 Wikileaks

Organización sin fines de lucro creada en el 2007, su principal objetivo es publicar información y noticias importantes para la comunidad. Wikileaks ha desarrollado un moderno sistema, para proteger la identidad de sus informantes anónimos, quienes filtran todo tipo de documentos confidenciales, tanto del gobierno, como de conocidas empresas multinacionales.

Los archivos publicados a través de Wikileaks tienen información de gastos militares millonarios de Estados Unidos, revelaciones impactantes sobre las cifras de soldados fallecidos durante la guerra en Afganistán diferentes a las publicadas en medios oficiales, comunicaciones secretas entre las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo que muestran la inconsistencia entre su discurso público en materia de relaciones exteriores y sus verdaderas prácticas, se han publicado las condiciones reales en que se mantiene a los prisioneros en Guantánamo y demás filtraciones que corresponden a información clasificada del gobierno de Estados Unidos, por lo cual se inició una investigación desde el año 2012 para encontrar las fuentes informáticas de dicha red.

Bradley Manning, un analista de sistemas del ejército norteamericano, resultó ser el principal sospechoso de filtrar más de 250.000 cables entre las embajadas de Estados unidos alrededor del mundo y sus archivos confidenciales. Durante ese mismo año, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, fue acusado por delitos sexuales cometidos en Suecia y logró conseguir asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Assange aún continúa viviendo en su lugar de asilo e insiste en que estas acusaciones obedecen a una persecución política en su contra por parte de los Estado Unidos en repercusión las reveladoras informaciones filtradas en WikiLeaks durante los últimos años, lo cual no ha sido comprobado.

4.2 Los virus informáticos

Una de las herramientas utilizadas por los *hackers* para ejecutar sus instrucciones sin autorización en los sistemas, son los virus informáticos. Los virus informáticos son los más temidos y frecuentes procedimientos informáticos de destrucción de elementos lógicos, su función es saltar o reproducirse de un sistema a otro y situarse en los computadores de forma que puedan destruir o modificar programas, bases de datos, enviar determinados mensajes, provocar fallos en el sistema operativo o interferir los procesos normales del sistema operativo. Entre los virus más comunes tenemos los "troyanos" y los "gusanos". Los virus troyanos se presentan enmascarados dentro de un programa aparentemente útil o con una apariencia inocente, Los gusanos, en cambio, se transmiten generalmente a través del correo electrónico y se auto-ejecutan sin necesidad de que el receptor realice acción alguna para ello. La combinación de estos dos puede intervenir el funcionamiento normal de un computador en particular o de numerosos computadores en general.

Uno de los gusanos de mayor impacto alrededor del mundo es el *"I Love You Worm"* o *"Love Bug Worm"*, que infectó a millones de computadores en el año 2000. Se envió masivamente a los e-mails de contacto de su creador y estaba diseñado para reenviarse a su vez a cada contacto de los receptores del correo de manera que se expandió exponencialmente colapsando los servidores de e-mail en todo el mundo y forzando a grandes compañías a cerrar sus correos por un día. Otro caso que impactó a la opinión pública fue el del virus *"Stuxnet"* que en el 2010 fue utilizado para atacar una central nuclear en Irán mediante la manipulación del sistema operativo que controlaba las turbinas que mantenían funcionando el generador de energía. Este caso es el primer intento conocido del diseño y uso de un virus informático para dañar infraestructura del "mundo real".

El problema que se genera con los virus informáticos, es que existen antivirus y *firewalls* para combatir la intrusión de éstos en nuestros computadores, pero cada vez que se crea un nuevo virus el antivirus queda obsoleto y el mundo de la red vuelve a su estado vulnerable hasta que se desarrolle un nuevo antivirus convirtiéndose en un ciclo vicioso que se moderniza a diario. (Reyes, 2014).

5. Conceptualización De Ciberterrorismo

Para abordar la conceptualización del ciberterrorismo es conveniente dar un vistazo también en forma paralela a las concepciones de terrorismo más comúnmente reconocidas.

En el contexto internacional encontramos entonces, que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el terrorismo es cualquier acto que por su naturaleza o contexto tenga por finalidad intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar, o abstenerse de realizar, cualquier acto; y que tenga por objeto causar la muerte o lesiones corporales, riesgos graves para la salud o la seguridad de la población o daños a bienes de propiedad pública o privada, e "[…] interferencia o disrupción graves de un servicio, instalación o sistema esenciales, ya sean públicos o privados […]" (Naciones Unidas, 2003); se resalta la concepción general que hace la organización ante un ataque que podría hacerse desde o hacia un sistema cibernético, sin necesidad de violencia o destrucción; por otra parte, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), considera como "actos terroristas" a los actos cometidos en tiempo de paz, que están también prohibidos durante los conflictos armados (CICR, 2015).

En el contexto nacional, el Código Penal (CP) tipifica el terrorismo como un "[…] estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella,

mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación [...]" (CP, 2017), denotándose el alcance del concepto en el ámbito cibernético, cuando se refiere a medios de comunicación, precepto que fue posteriormente reforzado en la ley 1273 de 2009, que protege la información, los datos y los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones (Congreso de Colombia, 2009). Por otra parte, en el objetivo estratégico No. 4 de la Política Sectorial de Seguridad y Defensa que señala combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, se hace una mejor (aunque insuficiente) aproximación, ya que se consigna allí que el Sector Defensa concentrará sus acciones en el terrorismo, los delitos informáticos y los ataques cibernéticos (Seguridad digital) (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

El ciberterrorismo, por consiguiente, tomando como base los conceptos anteriores y concordando con otros estudiosos del tema, se debería aproximar a la siguiente definición: la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para alcanzar un fin, o como medio para el cumplimiento de los objetivos tradicionales del terrorismo (Giménez et al, 2016).

Ejemplo del ciberterrorismo como un fin, fue el caso *Stuxnet,* ataque cibernético contra las centrales nucleares de Irán, descubierto en junio de 2010, que ha sido el más conocido a nivel internacional; se trató de un gusano o virus informático creado por los Gobiernos de Estados Unidos e Israel, que se propagaba o trasmitía a través de memorias USB, ya que las centrales nucleares estaban aisladas de internet, y cuyo objetivo era acabar con el programa nuclear (enriquecimiento de uranio) Iraní, para lo cual una vez infectado uno de los equipos, el virus manipulaba los valores en los sensores que alimentaban el

sistema SCADA[101], haciendo creer a los ingenieros que algo iba mal en la central, lo que finalmente obligó a adoptar las medidas de protección y detener el funcionamiento de las centrales, retrasando así por varios años el programa nuclear. (Gutiérrez del Moral, 2014)

Ejemplo del Ciberterrorismo como un medio, y en el cual se refleja que lo comenzó como un ataque corporativo que afectaba a la reputación de estrellas y ejecutivos de Hollywood, si bien sin precedentes por su escala y maliciosidad, pasó a tener consecuencias internacionales imprevisibles, y que incluso provocó la alocución el presidente Barack Obama, reafirmando que las amenazas cibernéticas suponían uno de los peligros más graves para la seguridad de Estados Unidos, ocurrió cuando un grupo de hackers autodenominados Guardianes de la paz, atacó los servidores de Sony el 24 de noviembre de 2014, bloqueó sistemas críticos y borró información, posteriormente, empezó a volcar toda esa información en Internet, haciendo un daño incalculable a la reputación y las finanzas de la multinacional (Ximenes de Sandoval, 2014).

Es evidente entonces que los Estados deben modernizar y actualizar continuamente su legislación y demás regulaciones en materia de ciberterrorismo, para lo cual debe acudir en primer lugar al contexto internacional y la revisión y adaptación de normas transnacionales ya aplicables que les permitan equiparse de herramientas para la contención transnacional de este fenómeno que generalmente se asienta en países lejanos con diversos actores muchos de los cuales no son identificables. También se debe buscar, incrementar y mantener la cooperación interinstitucional para lograr de forma armonizada y articulada la identificación, tipificación, judicialización y demás procedimientos de individuos y conductas delictivas del ámbito ciber, en especial el ciberterrorismo.

101. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Es un sistema compuesto de software y hardware que permite a las organizaciones controlar los procesos industriales locales o remotos, y supervisar, recopilar y procesar datos en tiempo real.

Y finalmente se debe considerar el ciberterrorismo como amenaza emergente transnacional que afecta la seguridad nacional de los Estados y que puede ser en sí mismo un fin, o que puede ser medio para el logro de otros objetivos tradicionales del terrorismo.

5.1 Ciberguerra-Conflictos Armados Cibernéticos

> La guerra, entendida como un estado de conflicto colectivo, organizado, violento e ilimitado, de carácter y motivación predominantemente cultural, con causas estructurales, coyunturales y/u ocasionales puede transformar las estructuras política, económica, social, tecnológica, etc., modificando los equilibrios o desequilibrios previos a los inicios bélicos (Cano, 2014). En una definición más moderna y corta, pero a su vez más compleja, para Clausewitz la guerra es la continuación de la relación política, con la intrusión de otros medios, lo cual según el autor implica la existencia de Estados como actores principales (La Guerra en la Historia de la Humanidad, s.f.).

Las Guerras de Quinta Generación, caracterizadas por su no declaración formal y las cuales involucran la combinación de varios recursos de múltiple naturaleza incluyendo el uso de las nuevas tecnologías, además, han cambiado totalmente el balance y la perspectiva del combate conocidos hasta ahora, tal es el caso de la guerra cibernética, que según Clarke & Knake (2010), se refiere a las acciones de un Estado-nación para penetrar las computadoras o redes de otra nación con el propósito de causar daño o interrupción.

La ciberguerra incluye operaciones ofensivas y defensivas, puede tener su propio fin o ser medio para alcanzar otros fines y se puede desarrollar o no en el ámbito internacional; el DIH la conceptualiza como "guerra informática" resaltando en particular, "el potencial de ese tipo de guerra de amenazar y causar

daños a la población civil y a sus medios de subsistencia durante los conflictos armados" (CICR, 2010), deja claro también, que aunque mencionados ataques se realicen por redes informáticas durante un conflicto armado nacional o internacional y así no sean cinéticos, físicos o violentos, no los deja fuera del ámbito del DIH.

Lo cierto es, que los Estados ya se están preparando y el desarrollo de la doctrina de guerra cibernética no es nuevo; ya desde el 2003, China había anunciado la creación de unidades de guerra cibernética, cuyas responsabilidades en la ofensiva y la defensa del ciberespacio incluían el diseño y aplicación de armas cibernéticas como, las minas de información, el reconocimiento y lanzamiento de bombas de información, la difusión de propaganda y mensajes de engaño, la organización de la ciber defensa y el espionaje en la red (Clarke & Knake, 2010). Para el 2009, Estados Unidos estableció el Comando Cibernético, añadiéndose a otras 20 naciones que ya habían creado unidades de ciberguerra debido a los múltiples intentos diarios de intrusiones desde Rusia, China, Corea del Norte, Irán y Siria (Kaplan, 2016). A la fecha de hoy numerosos Estados continúan implementando unidades de operaciones especiales cibernéticas, conscientes de que la ciberguerra es real y que ya ha empezado, además que se desarrolla a la velocidad de la luz, es global y no tiene campos de batalla definidos o limitados.

5.2 Los Ciberataques Y Las Operaciones Cibernéticas

Los ataques cibernéticos con fines bélicos aumentan exponencialmente y se expanden a los mismos entornos donde incursiona la tecnología, se evidencia que las actividades gubernamentales encabezan la lista de blancos, seguido de otras organizaciones públicas como las de atención médica, industrial y de servicios públicos, en los cuales las consecuencias ya no solo

afectan a una determinada persona u organización en particular sino a toda la comunidad (CISCO, 2016), Así mismo, los informes de ciber-riesgos y amenazas presentados por las principales organizaciones dedicadas al ejercicio de la ciberdefensa y ciberseguridad, apuntan a que las amenazas más antiguas y conocidas aún mantienen su presencia junto con nuevas metodologías de ataque; ya no se trata de preguntarse "si", sino "cuándo" atacarán mi organización, por lo tanto se debe propender por responder de forma asimétrica a las amenazas a través del análisis automatizado, soluciones de amplio alcance y una defensa unificada (Hewlett Packard Enterprise, 2016).

Las operaciones cibernéticas se refieren al empleo de capacidades cibernéticas con el propósito principal de lograr objetivos en o mediante el uso del ciberespacio (OTAN, 2017), estas capacidades incluyen la realización de operaciones de ciberseguridad persuasivas y/o disuasivas, el espionaje cibernético y la guerra cibernética con operaciones ofensivas como los ciberataques y defensivas como la ciberdefensa. Para Stel (2014), un ciberataque es un ataque ejecutado en el ciberespacio, declarado o no, dirigido contra una organización estatal, organizaciones y empresas privadas o individuos en particular, para producir un efecto calculado, aunque en algunos casos puede tener resultados impredecibles e imponderables. Para la OTAN un ciberataque es una operación cibernética, ya sea ofensiva o defensiva en la que razonablemente se espera cause lesiones o muerte a personas o daños o destrucción de cosas (OTAN, 2017).

Los ciberataques pueden tener un fin en sí mismos, pero también pueden formar parte de una maniobra militar de mayor escala dentro de un conflicto armado y pueden llevarse a cabo a través o hacia mecanismos físicos *(Hardware*: computadoras, módems o cables) y componentes cibernéticos *(Software:* programas, aplicaciones, o virus) (Llorens, 2017). La ciberdefensa es transversal

a los cuatro dominios de operación de las Fuerzas Militares: tierra, mar, aire y espacio (Álvarez, s.f.), hecha a través de la gestión y protección del espectro electromagnético y los activos informáticos; a este respecto, Colombia ha hecho algunos avances en el desarrollo de mecanismos y la creación de instancias adecuadas que permitan ejercer una labor de ciberseguridad y ciberdefensa frente a cualquier amenaza o incidente informático (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2011).

También se ha tenido en cuenta el creciente uso del entorno digital para desarrollar actividades económicas, sociales y gubernamentales entre otras, lo cual acarrea incertidumbres y riesgos inherentes de seguridad digital que de no combatirlos, puede resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2016).

6. Tipologías

Aunque se reconoce por parte del Estado colombiano que el vertiginoso crecimiento de las TIC y su correspondiente aporte a la globalización, ha servido de plataforma a las amenazas contra la seguridad a través del ciberespacio "[…] estas amenazas se materializan principalmente en conductas delictivas dirigidas a afectar el patrimonio económico y la intimidad de las personas." (Ministerio de Defensa Nacional, 2015); no se reconocen los efectos catastróficos que podrían causar los ataques generados por esta clase de amenazas sobre la infraestructura crítica cibernética y los activos informáticos, tanto en el ámbito público y privado. Como vemos el concepto expresado por el Ministerio de Defensa en la Política de Defensa y Seguridad 2015-2018, minimiza el impacto de estas acciones ya que el objetivo que se distingue hasta el momento no sobrepasa de la mera afectación personal, lo cual se podría comparar con el hurto[102] y la violación a la intimidad definido en el Código Penal colombiano.

102. Ley 599, Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa, mueble, ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro […].

Por otra parte, en el objetivo estratégico No. 4 de la política sectorial de seguridad y defensa que señala combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, se hace una mejor, aunque insuficiente aproximación, ya que se consigna allí que el Sector Defensa concentrará sus acciones en el terrorismo, los delitos informáticos y los ataques cibernéticos (Seguridad digital) (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). De lo anterior se puede evidenciar la inexistencia de la correlación existente entre el terrorismo y los ataques cibernéticos, para lo cual a continuación se conceptualizarán los dos fenómenos y se mostrará su correlación en la exposición de dos de los casos más conocidos a nivel mundial y regional.

El caso *Stuxnet*, ataque cibernético contra las centrales nucleares de Irán, descubierto en junio de 2010, ha sido el más conocido a nivel internacional; se trató de un gusano o virus informático creado por los Gobiernos de Estados Unidos e Israel, que se propagaba o trasmitía a través de memorias USB, ya que las centrales nucleares estaban aisladas de internet, y cuyo objetivo era acabar con el programa nuclear (enriquecimiento de uranio) Iraní, para lo cual una vez infectado uno de los equipos, el virus manipulaba los valores en los sensores que alimentaban el sistema SCADA[103], haciendo creer a los ingenieros que algo iba mal en la central, lo que finalmente obligó a adoptar las medidas de protección y detener el funcionamiento de las centrales, retrasando así por varios años el programa nuclear. (Gutiérrez del Moral, 2014)

El otro caso, en el cual se refleja que lo comenzó como un ataque corporativo que afectaba a la reputación de estrellas y ejecutivos de Hollywood, si bien sin precedentes por su escala y maliciosidad, pasó a tener consecuencias internacionales imprevisibles, y que incluso provocó la alocución el presidente

103. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un sistema compuesto de software y hardware que permite a las organizaciones controlar los procesos industriales locales o remotos, y supervisar, recopilar y procesar datos en tiempo real.

Barack Obama, reafirmando que las amenazas cibernéticas suponían uno de los peligros más graves para la seguridad de Estados Unidos, lo anterior cuando un grupo de hackers autodenominados "guardianes de la paz" atacó los servidores de Sony el 24 de noviembre de 2014, bloqueó sistemas críticos y borró información, posteriormente, empezó a volcar toda esa información en Internet, haciendo un daño incalculable a la reputación y las finanzas de una multinacional (Ximenes de Sandoval, 2014).

Pero los casos mencionados son apenas dos de las constantes manifestaciones del alcance del ciberterrorismo, pues no se puede olvidar que hace pocos meses el mundo se despertaba con la incertidumbre de la expansión del virus *"Wanna Cry"*, o uno similar, el aumento incontrolable del mundo cibernético nos expone cada día más a nuevas amenazas que pueden afectar a miles de computadores en todo el mundo en un ataque simultáneo de grandes proporciones.

Wanna Cry es un *ransomware.* (Nombre de virus para secuestro de información). El término hace alusión a un tipo de ataque en el que los perpetradores se apropian de los archivos de una red o un computador individual y luego los encriptan para que no puedan ser abiertos con ningún programa. La parte criminal es que para liberar la información se debe hacer una consignación en Bitcoins, la moneda de internet. Para comprender de una mejor manera el contenido de este texto, es importante hacer énfasis en algunos conceptos expuestos a continuación.

6.1 *Ransomware*

Originalmente, la palabra *ransomware* hacía referencia a una licencia de distribución de *software*, donde su autor requería un monto determinado de dinero para liberar el código fuente del programa. En otras palabras, si se lograban las condiciones que el autor requería (por ejemplo, llegar a un determinado

monto de dinero), el código del programa se liberaba. Esto permitía que los desarrolladores pudieran lograr el dinero suficiente como retribución al trabajo que les insumía hacer un programa. Actualmente el término se utiliza también para hacer referencia a aquellos *malware* que "secuestran" archivos y piden "rescate" en dinero por ellos. Por lo general estos programas malignos encriptan la información de algunos archivos considerados importantes para el usuario, y no entregan la clave para lograr desencriptarlos (Innovación).

6.2 *Bitcoin*

Es una de las principales criptomonedas virtuales, quiere decir que es una moneda digital que emplea técnicas de cifrado para reglamentar la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, y opera de forma independiente de un banco central. Ha tenido éxito en la actualidad, es efectivo electrónico, puede considerarse una divisa como puede ser el dólar y el euro, pero su característica principal consiste en ser utilizada a través de internet, sin realizar ninguna transacción física, es decir, sus transacciones se llevan a cabo a través de los llamados monederos virtuales, y lejos del sistema financiero tradicional, las tarjetas de crédito y cuentas bancarias no actúan como intermediarios, es básicamente un sistema donde no existe ninguna autoridad central que ejerza el control, no depende ni de un gobierno por lo que su código es completamente abierto.

A diferencia de la mayoría de otras monedas, el funcionamiento de Bitcoin se desarrolla bajo un *software* que emplea la criptografía con funciones de seguridad básicas, tales como la garantía y seguridad que sólo puedan ser gastados por su propietario, y nunca pueden ser utilizados más de una vez, a diferencia de un billete o moneda física, no contiene número de serie o cualquier otra referencia que sirva para poder rastrear e identificar a un comprador o vendedor, haciendo

que sea un mercado bastante atractivo para realizar intercambios de bienes o servicios en el mercado negro. (Morales, 2015).

Habiendo leído los anteriores conceptos puede continuarse con la tasación de los efectos generados por el virus, considerando que se encontró que pasadas 24 horas después del ataque, más de 70 países registraron ataques informáticos, la compañía de seguridad Kaspersky, emitió una alerta de seguridad global anunciando que serían algo más de 45 mil ataques detectados a nivel mundial (KienyKe, 2017). Pasados cuatro días, ya había afectado más de 100 naciones, en Colombia el Centro de Control Cibernético de la Policía Nacional informó que en el país se habían recibido 7.400 reportes por posibles afectaciones del *ransomware* llamado *'Wanna Cry'*, afectando las versiones de Windows más recientes, desde la XP en adelante, que no se encontraban debidamente actualizadas.

Las cifras entregadas por el Director del Centro Cibernético Policial de la DIJÍN en Colombia, confirmaron que once empresas del sector privado, de las que no se reveló el nombre por motivos de reputación, han reportado alguna afectación por el ataque de *Wanna Cry*. Entre ellas, el Instituto Nacional de Salud por lo que el Ministerio de Tecnologías explicó que se identificó que el programa malicioso penetró cuatro equipos que fueron atendidos inmediatamente, además la entidad suspendió los servicios de su página web para prevenir cualquier situación. Asimismo, la Contraloría General de la República determinó suspender todos los servicios que presta a través de su portal *web*, como medida de prevención por los ataques cibernéticos manteniendo inhabilitada la página y demás trámites.

Según una nueva encuesta de seguridad realizada por la consultora Accenture, se encontró que en los últimos doce meses uno de cada tres ataques

tenía su origen en las falencias en los sistemas de seguridad digital en las empresas, lo cual equivale a entre dos y tres ataques efectivos al mes, a pesar de esto, la mayoría de los ejecutivos encuestados confía en su habilidad para proteger a sus compañías de potenciales ciberataques. Está confirmado que el tiempo que les toma a las compañías en detectar estas violaciones de seguridad agrava el problema, ya que más de la mitad de los ejecutivos consultados, afirman que les toma meses detectar ataques sofisticados de seguridad cuando así se detectan y sin tener en cuenta que más de un tercio de los ataques exitosos de seguridad no son detectados, poniendo en duda si aún todos los ataques del *Wanna Cry* han sido detectados a la fecha.

Entre las recomendaciones para estar a la vanguardia de la ciberseguridad la policía recomienda dejar de lado lo antiguo y adoptar lo nuevo, el problema es que el mundo digital se actualiza a diario, como consejo importante cuando se trata de adoptar nuevas tecnologías y herramientas de defensa de ciberataques. Dos días después del ataque a nivel mundial más de 300.000 computadoras en 150 países resultaron infectadas, 3 días después del ciberataque global, el monto inicial del soborno que se cobraba por liberar la información era de 300 dólares; si cada uno de esos países hubiera pagado la cantidad que exigían como monto inicial, los hackers habrían ganado unos 90 millones de dólares, aunque en las cuentas del gobierno de Estados Unidos son distintas, se recaudaron menos de 70.000 dólares y quienes hicieron esos pagos no lograron recuperar ninguno de sus datos, según lo asegurado por Tom Bossert, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Aunque los Estados Unidos resultó menos afectado que otros países, el virus llegó a algunas compañías como la empresa de envíos FedEx, sin resaltar que FedEx es la empresa encargada de realizar los envíos logísticos de la Fuerza Aérea norteamericana, habría que profundizar qué traumatismos pudo haber ocasionado este bloqueo atacando a la logística

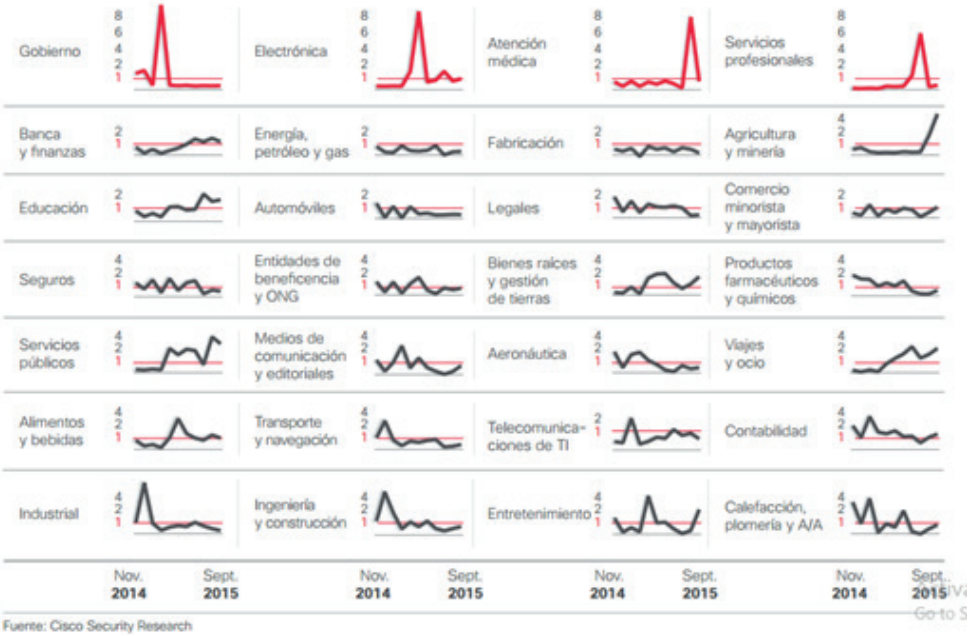
militar internamente, también complicó las actividades estadounidenses del gigante español de telecomunicaciones Telefónica (Blanco, 2017).

El ataque no discriminó objetivos, fue una muestra clara de poder, una manifestación del *Smart Power* que se difunde por la red, entre las empresas españolas afectadas está el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, que confirmó que estaba lidiando con un "incidente de seguridad cibernética", pero aseguró que sus clientes no se veían afectados., igualmente las compañías energéticas Iberdola y Gas Natural también registraron problemas en sus sistemas (SEMANA, 2017).

7. Conclusiones

Los ataques cibernéticos con fines terroristas aumentan exponencialmente y se expanden a los mismos entornos donde incursiona la tecnología, en el último informe disponible presentado por CISCO (2016), se observan los campos del mercado, industria y organizaciones que han sido blanco de ciberataques en el año 2015, y la actividad de bloqueo (ataques al tráfico de información) que se considera superior al esperado cuando sobrepasa de 1.

Gráfico 7. Cibertataques en el 2015



Fuente: Cisco Security Research

Como vemos, las actividades gubernamentales encabezan la lista de blanco de los ciberataques, seguido de otras organizaciones públicas como las de atención médica, industrial y de servicios públicos, en los cuales las consecuencias ya no solo afectan a una determinada persona u organización en particular sino a toda la comunidad.

Colombia ha hecho grandes avances en el desarrollo de mecanismos y la creación de instancias adecuadas que permitan ejercer una labor de ciberseguridad y ciberdefensa frente a cualquier amenaza o incidente informático (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2011), también se ha tenido en cuenta el creciente uso del entorno digital para desarrollar actividades económicas, sociales y gubernamentales entre otras, lo cual acarrea incertidumbres y riesgos inherentes de seguridad digital que de no combatirlos, puede resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2016).

Sin embargo, el vacío allí se encuentra en la regulación y determinación del espectro para la realización de operaciones cibernéticas en el marco de la Seguridad Multidimensional; en este aspecto la OTAN ya las considera y las analiza transversalmente a la legislación internacional existente "el derecho internacional anterior a la era cibernética se aplica a las operaciones cibernéticas, conducidas y dirigidas contra Estados. Esto significa que los eventos cibernéticos no ocurren en un vacío legal y, por lo tanto, los Estados tienen tanto derechos y obligaciones bajo el derecho internacional" (OTAN, 2017).

Sin embargo, Colombia debe pasar a la determinación del espectro para la realización de operaciones cibernéticas en el marco de la Seguridad Multidimensional, operaciones que la OTAN ya considera y analiza transversalmente a la legislación internacional existente "el derecho internacional anterior a la era cibernética se aplica a las operaciones cibernéticas, conducidas y dirigidas contra Estados. Esto significa que los eventos cibernéticos no ocurren en un vacío legal y, por lo tanto, los Estados tienen tanto derechos y obligaciones bajo el derecho internacional" (OTAN, 2017).

Capítulo XII

Seguridad Ciudadana y Código de Policía en Colombia[104]

Gustavo Andrés Cañas Peña
Carlos Andrés Rodríguez Beltrán

1. Evolución hacia el concepto de seguridad ciudadana

A lo largo de la historia han sido muchas las amenazas que ha tenido que enfrentar el ser humano, teniendo que sobrevivir, entre otras, a todo tipo de desastres naturales y enfermedades. No obstante, de todas las amenazas, pocas han sido tan constantes y tan arraigadas en el imaginario de los seres humanos como los enfrentamientos armados[105]. La constante lucha entre tribus, imperios o dinastías rivales por territorio, comida, riquezas y agua, ha llevado al desencadenamiento de numerosos conflictos a lo largo de la humanidad; representando por tanto un obstáculo en la consecución de una vida pacífica de los pueblos.

Al tener en cuenta lo anterior, el ser humano y en ultimas, el Estado, ha velado por el mantenimiento y protección de sus intereses. A causa de su necesidad de proteger lo propio y de las constantes amenazas de carácter bélico, la piedra angular y punto de partida para la construcción del concepto de

104. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada "Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el Decenio 2015-2025", el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976.

105. Esta afirmación en ninguno momento va dirigida a establecer el enfrentamiento bélico como la mayor amenaza que han enfrentado los seres humanos en distintas épocas.

seguridad partió desde la misma noción del poderío militar como sinónimo de seguridad.

Así pues, ha sido el aspecto militar el cual ha influido en la definición y posterior conceptualización de seguridad; puesto que el concepto se ha ligado en repetidas ocasiones con la noción de bienestar y estabilidad del ser humano y de los Estados. Lo anterior, no debe ser tomado como un hecho fortuito, puesto que la noción se ha construido por siglos mediante el ejemplo de grandes imperios como el de la dinastía Qing en China, hasta el imperio Romano en Europa y Asia o el Imperio Británico. Todos los anteriores imperios siendo grandes exponentes de gran destreza militar, tanto ofensiva como defensivamente; lo que les permitió proteger y expandir sus vastos territorios y brindar estabilidad a su población y sus intereses (Arzabal, 2017).

Siguiendo la misma línea, el poderío militar fue símbolo de seguridad para aquellos Estados en momentos de gran incertidumbre. Ejemplo de ello es cuando durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos demostraron las ventajas que tenía el contar con armamento y una superioridad militar[106]. Para complementar lo previamente expuesto, Misra (2017) afirma que:

> Hasta hace algunas décadas, el concepto de seguridad se orientaba a límites estrechos; era casi un hábito de la mente pensar en los problemas de seguridad de una nación exclusivamente en términos de hardware militar. Este tipo de pensamiento solo promovía las guerras y los conflictos armados y ponía en peligro la seguridad de grandes partes del mundo. Se libraron dos guerras mundiales en el lapso de una sola generación, y numerosos conflictos locales

106. El ejemplo más simbólico siendo la creación y posterior detonación de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón.

> estallaron de vez en cuando. También se hizo evidente que durante una guerra los recursos industriales y la fuerza económica de las naciones fueron los factores decisivos en su capacidad para defenderse. (p.86)

Pese a la importancia arraigada que se le daba a lo militar como símbolo de seguridad, el autor reconoce la importancia de otros factores que se fueron constituyendo como vitales para la seguridad de un Estado[107]. Lo que en consecuencia, pavimentó el camino para que el concepto de seguridad se fuese expandiendo a aspectos que no eran estrictamente militares[108], sino que ahora el concepto iba más allá de la figura de la guerra (Misra, 2017). Con relación a lo anterior, otros autores sostienen que existen otro tipo de amenazas que podían colocar en jaque la supervivencia tanto de los individuos como del Estado mismo. Ejemplo de ello, sería la pobreza, las enfermedades, peligros ambientales, abusos de drogas, y otros similares (Walt, 2017).

Por lo tanto se evidencia una situación en específico que causó gran cuestionamiento sobre el concepto de seguridad y lo que el mismo implicaba, el conflicto Árabe-Israelí en 1973. El impacto del conflicto, además de ser de grandes proporciones militares, también lo fue en el ámbito económico. La crisis económica se dio en un momento y contexto en que se estaba dando un escenario de Guerra Fría, en donde la seguridad nacional tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, dependía, al menos en primera instancia, de la capacidad de despliegue militar de cada uno de los Estados en cuestión.

107. Algunos autores sostienen que el vínculo entre el concepto de seguridad y la noción de Estado nace en el siglo XVII con el nacimiento del Estado Nación; teniendo en cuenta que la seguridad nacional constituía uno de los ejes centrales de preocupación, debido a la prominente necesidad de sobrevivir ante las amenazas externas de otros Estados (Hafterdorn, 2017).

108. Abarcando temas que en la agenda los Estados parecían de segundo orden (económicos, sociales, políticos, diplomáticos, etc.)

Vale recordar que fue el escenario de Guerra Fría donde el concepto de seguridad pareciese verse más preocupado por la capacidad militar de los Estados y, no de las consecuencias económicas que estos pudiesen generar en el sistema internacional. Prueba de lo anterior fueron las repercusiones que tuvo la crisis petrolera de 1973, las cuales fueron lo suficientemente devastadoras como para hacer entrever que la estabilidad y seguridad de los Estados no dependía única y exclusivamente del plano militar, como muestra también el incremento en el precio del barril de petróleo en más de 300% en tan solo seis meses que, a su vez, generó menores niveles de productividad en la fuerza laboral en países como Reino Unido y una posterior alza de tasas de interés de los bancos centrales, causando un bajo crecimiento económico y un incremento en los niveles de desempleo en países de occidente (Barbosa, 2016).

Teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis y, resaltando la situación que hasta aquel momento se vivía, en donde las agendas nacionales de los Estados se fijaban en torno a su supervivencia a la guerra[109], situaciones como las de la crisis petrolera de 1973 colocaron en tela de juicio el reducido panorama con el cual se contaba a la hora de definir seguridad. Es necesario decir que tras la crisis, sería entonces necesario que el tema de la seguridad fuese abordado desde un plano que considerase aspectos socio-económicos, político-culturales, étnicos e ideológicos (Misra, 2017).

A sabiendas de la creciente necesidad de expandir el término de seguridad, diferentes propuestas empezaron a surgir alrededor de los años 60 y 70. Entre ellas, se encontraba la propuesta del Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviétiva, Leonid Brezhnev, en donde se afirmaba que: "El desarrollo extensivo de cooperación económica y de otro tipo permitirá (...) proporcionar la base material necesaria para la seguridad

109. Garantizándola mediante la adquisición, modernización y uso de mejor y mayor cantidad de armamento militar

asiática"[110] (Misra, 2017, p.88). Aunque lo anterior puede estar sujeto a interpretaciones de distinto tipo, el hecho que se reconozca la importancia del campo económico como aspecto importante en la consecución de la seguridad de una región, haría que la evolución del concepto fuese puesta en la práctica.

Paralelo a lo anterior, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron trabajando poco a poco en el desarrollo del concepto de paz y seguridad para las naciones. Fue entonces cuando en 1970 el primer comité de la ONU se encaminó en una serie de discusiones que llevarían a la conformación y posterior aprobación de la resolución No. 2734 (xxv)[111]; la cual posteriormente fue adoptada bajo el número A/8096 por la Asamblea General de la ONU (Misra, 2017).

La resolución en cuestión, no solamente reconocía la importancia de llevar a cabo acciones globales que conllevaran a reducir la brecha económica entre países desarrollados y no desarrollados, sino que entendía la importancia y la cercanía que existía entre la economía y la posibilidad de mantener una paz duradera tanto al interior de las naciones como en el sistema internacional (Misra, 2017). Como resultado de lo anterior, la ONU reconocía y ayudaba a construir el camino del reconocimiento de otros ámbitos como partes importantes en la contribución tanto de la seguridad como del desarrollo de los Estados.

Habiendo sentado un precedente a nivel internacional, en el cual quedaba claro que los peligros del mundo requerían diferentes aproximamientos al militar, diferentes autores empezaron también a hacer su aporte desde el ámbito académico, en donde se reconocía la importancia de conseguir la seguridad por otros medios. Al respecto, Robert McNamara señala que:

110. La cita original se encuentra en el texto de Vladimir Pavlosky en su texto: Collective Security for Asia (Moscow, 1973, p.52).

111. Esta resolución, dado el carácter estrictamente recomendatorio del comité, fue una sugerencia y borrador para la posterior adopción por parte de la Asamblea General de la ONU

> En una sociedad en modernización, seguridad significa desarrollo. La seguridad no es una fuerza militar aunque pueda involucrarla, la seguridad no es una actividad militar tradicional aunque pueda abarcarla. La seguridad es desarrollo, y sin desarrollo no puede haber seguridad. Una nación en desarrollo que, de hecho, no se desarrolla simplemente no puede permanecer segura por la razón inextricable de que su propio centro de cómputo no puede despojarse de su naturaleza humana (Citado por Misra, 2017, p.87)

Habida cuenta de la importancia que señalan autores como McNamara de la relación que existe entre seguridad y desarrollo, es factible ver que la búsqueda de la seguridad es la base para el desarrollo de las sociedades; y que, por tanto, al ser una base para contribuir en el desarrollo de un Estado, la seguridad de un Estado, parte de la condición de encontrarse protegido o no expuesto al peligro que amenace dicha posibilidad de desarrollo (Misra, 2017).

> Wolfers, sin embargo, presenta una visión diferente de la seguridad. Él sostiene que los estados varían ampliamente en el valor que le dan a la seguridad y que algunos estados pueden estar tan insatisfechos con el status quo que están más interesados en adquirir nuevos valores que en asegurar los valores que tienen. Desde esta perspectiva, decir que un estado tiene más seguridad que otro no implica que un estado sea mejor que otro, más que decir que un Estado tiene más personas o un área terrestre implica que un Estado es mejor que otro. Para Wolfers, la política internacional no es un "juego" en el que todos los estados jueguen con las mismas "reglas" y compitan por el mismo "campeonato". (Baldwin, 2017, p.11)

Desde la perspectiva de Wolfers, los intereses y, por tanto, las nociones de seguridad del Estado, también pueden variar. Esto conlleva a la creación de una múltiple variedad de opciones sobre los tipos de seguridad que ya se desarrollarían posteriormente. Igualmente, los cambios frente a las concepciones de la seguridad no solamente fueron dándose al interior de los círculos académicos y organismos internacionales, sino también en el plano político interno de los Estados. Por ello, con el fin de la Guerra Fría y la posterior caída del muro de Berlín, los Estados ya no solamente centraban sus miradas al interior de sus propios territorios, sino que reconocían la necesidad de reconsiderar sus agendas políticas de un plano militar a uno más diverso. Sirva de ejemplo de lo anterior, cuando en 1997 el primer ministro italiano, Romano Podri, citado por Lucía Zedner (2017), declaró: "El problema de la seguridad del país parece no ser más una seguridad externa, sino interna: la seguridad de los ciudadanos en su vida cotidiana" (p. 153).

Las palabras del entonces primer ministro, Romano Podri, se atrevía a expandir el concepto de seguridad a un plano que por años durante la guerra fría causó que ya no se concibiese el peligro primordialmente como una externalidad y que por lo tanto se debía tener en cuenta otros aspectos a nivel interno que podían amenazar al Estado y también a sus individuos.

2. La Seguridad Más Allá del Estado

Como resultado de la nueva visión en el mundo político, la agenda tanto académica como global se dispuso a la tarea de considerar nuevos parámetros que permitiesen garantizar la seguridad ya no solamente del Estado, sino de un aspecto muy importante que los componía, el individuo.

La ampliación de las opciones en seguridad, no solamente llevó a que se consideraran nuevas amenazas distintas a aquellas que eran representadas por el

poder de las armas y el número de hombres capaz de usarlas, sino también, dio paso a una reconsideración sobre a quién se debía proporcionar seguridad. En dicho sentido, Barry Buzan, citado por Baldwin (2017), dice que un concepto de seguridad que falle en especificar un "objeto referente" tiene poco sentido. Por tanto, para el autor se tiene que evitar limitar las nociones de Estado e individuo, sin dejar de lado el hecho que ambos son interdependientes. Con lo anterior, Buzan busca que la noción y en consecuencia, la protección de un potencial peligro se brinde según la situación. Por ejemplo: una situación cotidiana que es una situación potencialmente peligrosa para un ciudadano no necesariamente lo es para el Estado. De esta forma, aun cuando Buzan expande la noción sobre seguridad a un marco que reconoce tanto al Estado como al individuo como sujeto de protección, también reconoce que las situaciones pueden variar y se tiene que evaluar en qué momento la seguridad del ciudadano compromete también a la del Estado (Baldwin, 2017).

Aun cuando Buzan reconoce la existencia del individuo como sujeto al cual se le debe brindar seguridad, otros autores profundizan en qué aparte de considerar al individuo, también se debe llevar la seguridad al diario vivir de las personas. Con esto se quiere decir que, aunque la clasificación de Buzan es válida, los nuevos ámbitos deben considerar el día a día de los individuos como un escenario en el cual se debe brindar seguridad constante; en donde el proporcionar seguridad no sea solamente una cuestión de hechos fortuitos. Respecto a lo anterior, Medina (2017) sostiene que:

> Las preocupaciones por las enfermedades, la pérdida del empleo, la agresión callejera, la discriminación, la violencia del Estado o de particulares por expresar las ideas, y aspectos similares empezaron a verse cada vez más, convirtiéndose en un problema universal y

> que afecta directamente a las personas sin importar la condición de su país en cuanto a la situación económica. (p.7).

Lo dicho por Medina trae a colación lo imperante que significaba extender tanto qué como quién se incluyen y son acogidos por el concepto de seguridad. Pero también, revela una caudal creciente de situaciones que en Estados con falta de institucionalidad, desborda la capacidad estatal que permite brindar protección a todos los individuos. El reconocimiento de dichas situaciones de necesidad de seguridad no sólo permitió el desarrollo de nuevos tipos de seguridad enfocadas más al individuo que al Estado, (Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana), sino también permitió entrever la necesidad de nuevos aproximamientos que, en la práctica, serían necesarios para abordar y solucionar las problemáticas de los individuos.

3. Seguridad Ciudadana

La evolución del concepto de seguridad ha permitido consecuentemente reconocer nuevas amenazas y nuevos individuos a quienes proteger. Sin embargo, ante nacientes retos y exigencias también surgen nuevas posibilidades de brindar soluciones, entre ellas la seguridad ciudadana. Esta surge ante situaciones como las que se evidencian en América Latina y el Caribe en donde a diario se viven los peligros y vejámenes producto de la violencia y la inseguridad. No por nada la región presenta en la actualidad altos índices de homicidios, (convirtiéndose en una de las regiones más peligrosas del planeta[112]), sumado a una percepción alta de inseguridad entre sus habitantes. La región no solamente presenta problemáticas que la sitúan entre las ciudades donde más gente es asesinada, sino donde distintos enfoques han sido adoptados para combatir los altos índices de criminalidad y violencia presentes (Muggah, 2017).

112. Según datos oficiales, 9 de los 10 países más violentos del planeta, que no se encuentran en conflicto, están en América Latina y el Caribe (Muggah,2017).

De conformidad con lo anterior, los gobiernos latinoamericanos y caribeños han adoptado políticas que han sido pensadas y hechas para contrarrestar, entre otras cosas, el accionar de bandas criminales y el tráfico de narcóticos a lo largo y ancho de la región. Adicional a ello, los gobiernos adoptaron medidas que estaban en pro de aumentar el cumplimiento de la Ley y la creación y modificación113 de las penas privativas de la libertad para que fuesen más severas con los criminales.

A pesar de las acciones tomadas en materia de lucha en contra del delito y la violencia, las prácticas fueron ineficientes y no lograron los resultados esperados. Lo anterior no sólo fue resultado de sistemas de justicia pobres, obsoletos y mal manejados, sino de sistemas penales que no respondían pronta y efectivamente a las necesidades planteadas; sumado a los constantes enfrentamientos entre bandas criminales y la policía que solamente generaban más inseguridad. Factores como la impunidad y la corrupción, contribuyeron a que las soluciones se convirtiesen en problemas que resultaban en estigmatización social y amplia criminalización de extensos sectores de la población, en especial los jóvenes.

Dicho esto, las medidas no solamente fracasaban en su tarea de acabar con la violencia y la delincuencia, sino que además fortalecía a las bandas criminales por el pobre aproximamiento que tenía hacia sectores vulnerables. Pese a lo anterior, líderes sociales entendieron que se necesitaba algo que fuese más allá de la mera aplicación de la Ley y de la privación de la libertad, y que, por ende, era necesario aplicar lo que en palabras de Mockus, citado por R. Muggah (2017), sería una: "relación entre identidad cívica, coexistencia social, cohesión y eficacia" (p.292).

En consecuencia, los líderes sociales propendieron por establecer alternativas que fuesen más allá de la lucha en contra del crimen y que acogiera

113. Se incluyó entre las diferentes estrategias el alargar las penas privativas de la libertad (Muggah, 2017)

medidas donde se creara, de manera colectiva, ambientes que fuesen propicios para la convivencia sana de las personas. Esto, no solamente expandía la responsabilidad de la seguridad más allá de la figura del Estado[114], sino que incluía a los ciudadanos en la creación de ambientes propicios para la mutua convivencia de manera sana y pacífica.

Dicha serie de actividades encaminadas a generar y propiciar la convivencia de las personas se llamó seguridad ciudadana. Este tipo de seguridad propende por aunar diferentes tipos de ideas y actividades que se encuentran específicamente dirigidas a prevenir y reducir la violencia, promover el acceso a la justicia, reforzar la cohesión social, reforzar los derechos y obligaciones tanto de ciudadanos como de los Estados, garantizar la seguridad pública, entre otros aspectos (Muggah, 2017).

Todas estas observaciones parten desde lo que algunos autores llaman la reconciliación entre la figura del Estado responsable y la ciudadanía activa (Muggah, 2017). En primer lugar, el Estado Responsable[115] debe propender por no verse en ningún instante exento de su responsabilidad de proteger a las personas ante las amenazas de las cuales son susceptibles. El concepto de seguridad ciudadana aborda este tipo de problemáticas, desde una óptica en la cual las limitaciones y fallas en la protección de los Derechos Humanos no son solamente abordadas por el Estado y unos cuantos actores que hacen las veces de garantes, plantea que es también el papel de los ciudadanos reevaluar los porqués de la falta de efectividad en la protección por parte del Estado (Muggah, 2017).

La figura del Estado Responsable es sin duda alguna uno de los puntos álgidos en la constitución de la seguridad ciudadana, porque nace a partir de

114. Representada también por medio de sus instituciones, Policía, Ejército, entre otras.
115. Lo que Muggah se encarga de llamar como constructo fundacional (Muggah, 2017).

una percepción generalizada de los ciudadanos en donde se considera que existe aparente negativa o falta de capacidad de algunos Estados para responder a las necesidades de seguridad al interior de sus territorios (Muggah, 2017). Por tanto, al presentarse la ausencia de las instituciones es importante reformular el papel y la relación que estas tienen con la ciudadanía. Es necesario aclarar que aunque no en todos los casos se presenta ausencia institucional, sí hay una disfunción entre los niveles de efectividad que presentan las instituciones. Como resultado de lo anterior, instituciones como la Policía o incluso aquellos encargados de hacer cumplir la ley ejercen un trabajo ineficaz e inapropiado; conllevando a exacerbar la violencia y socavar el desarrollo (Muggah, 2017).

En segunda instancia, para Muggah se encuentra otro punto importante para la seguridad ciudadana: la ciudadanía activa. El autor no sólo atribuye un papel de responsabilidad al ciudadano en donde, en conjunto con el Estado, vela por el cumplimiento de aquellos que deben proveer seguridad y además, contribuye por sí mismo en la garantía de esta. Dicho de otra manera, se busca que el ciudadano en su papel de garante, vele porque las instituciones estatales encargadas de la seguridad cumplan con su papel y en dado caso, sean responsables tanto por sus errores como aciertos en el ejercicio de su deber (Muggah, 2017). Es importante también que la ciudadanía establezca relaciones estrechas de trabajo cooperativo con la policía, para así formar lazos de comunicación que permitan el diseño y aplicación de políticas policiales efectivas.

La seguridad ciudadana es entonces, un medio para incorporar al ciudadano en la formulación y ejecución de las políticas de seguridad, en aras de combatir el fenómeno de la inseguridad desde todos los planos posibles. Hay que hacer hincapié en que uno de ejes de la seguridad ciudadana parte de su aspecto preventivo, en el cual: “se busca generar las condiciones personales, “objetivas y

subjetivas", de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia" (Bezerra, 2017, p.618). Lo anterior, permite que la seguridad se vuelva un tarea que es compartida, (sociedad[116] y Estado), y además, genera que: "la gente se encuentre interesada en la seguridad, como un "bien público" (Arzate & Velázquez, 2017).

> Es requisito indispensable la participación social para mejorar las condiciones de sociabilidad y por tanto de seguridad. De acuerdo con García y Zambrano, "el concepto de participación se tiende a usar en dos sentidos; uno el ser partícipe de, es decir recibir prestaciones y disponer de servicios, y la otra tomar parte en ello, es la capacidad de desarrollar iniciativas, tomar decisiones, ser parte activa de un proceso. La primera acepción entiende la participación como un elemento legitimador de poder, un mecanismo de integración; la segunda en cambio entiende la participación como un elemento de transformación en el que todo el mundo tiene un papel protagonista." (García y Zambrano, 2005: 71).

Teniendo en cuenta la relevancia que constituye la contribución de las personas como punto central de la seguridad ciudadana, se promueve que los ciudadanos tomen participación activa y responsabilidad tanto de ellos mismos como de otros. Valga aclarar que ello no significa la constitución de prácticas sociales que lleven a la conformación de milicias ni bandas paramilitares, ni tampoco, al ejercicio de prácticas que hagan uso de la justicia por mano propia (Muggah, 2017).

La seguridad ciudadana es consistente con, aunque no reemplaza, una amplia variedad de prácticas policiales exitosas utilizadas en todo el mundo, incluida la vigilancia orientada a problemas, la policía orientada hacia la proximidad y

116. Teniendo en cuenta las distintas representaciones sociales que existen de la misma: ONGs, clubes, ligas, asociaciones civiles, etc.

la comunidad, y la vigilancia policial basada en inteligencia. Tales enfoques se introducen cada vez más en el contexto de Reforma policial y modernización en América Latina y el Caribe.11 Además de estrategias y tácticas policiales específicas, las políticas de seguridad ciudadana también abarcan un rayo de actividades que buscan mejorar la seguridad general, prevenir la violencia y reducir el crimen. Estos pueden incluir, entre otros, el rediseño, renovación y actualización de espacios urbanos, creación de empleos específicos, programas de aprendizaje y colocación laboral, medidas educativas e intervenciones escolares para jóvenes en riesgo, la primera infancia y actividades de apoyo para padres, y la mediación formal e informal para reducir las tensiones entre grupos en situaciones altamente volátiles (Muggah, 2017).

Lo dicho por Muggah, supone que el ejercicio de la seguridad ciudadana requiere del interés, responsabilidad y de la participación activa de los ciudadanos para que sea efectiva. Sin embargo, cabe aclarar que el ejercicio del ciudadano en este tipo de escenarios en ningún momento es de carácter sustitutivo a la labor del Estado. Por el contrario, la misma participación del ciudadano se hace con el fin de ser complementaria a las labores y obligaciones del Estado con sus ciudadanos.

De igual manera, aunque la participación de ciudadanos no es sustitutiva, sí emplea tácticas similares a las del Estado para cumplir con las funciones de seguridad[117]. De similar manera debe actuar el Estado, quien, siendo parte igualmente importante en la contribución de la seguridad ciudadana, debe procurar por enfoques que sean tanto preventivos como colaborativos entre ciudadanos y el Estado.

117. Las funciones se desarrollan más adelante en la explicación del tipo de enfoques usados por la seguridad ciudadana

4. La Teoría de la Ventana Rota y los Criterios Transversales de la Seguridad Ciudadana

Cuando en 1969 el profesor Phillip Zimbardo llevó a cabo el experimento que daría pie a la teoría de la ventana rota, se dio un paso importante en conectar la efectividad de una política pública con la anticipación que esta tuviese a los acontecimientos. El experimento básicamente consistía en dejar dos autos, exactamente iguales, abandonados en dos sectores: el primero se estacionó en El Bronx en Nueva York; un barrio pobre y de carácter conflictivo. El segundo auto se ubicaría en Palo Alto en California, que a diferencia de la primera zona era una zona rica y sin ningún tipo de problemática asociada, aparentemente, a la violencia callejera (Eskibel, 2017).

A los pocos días el auto que se encontraba en El Bronx fue vandalizado y posteriormente desbalijado en su totalidad. Sin embargo, el auto que se encontraba en Palo Alto seguía intacto. Los investigadores decidieron entonces romper una ventana del auto que aún seguía intacto para ver si podían conseguir algún resultado. Efectivamente así fue. El auto también fue reducido a las mismas condiciones de deterioro que mostró el auto del Bronx (Eskibel, 2017).

La teoría de la ventana rota muestra que si un objeto o una comunidad exhibe marcas de deterioro y no se toma ninguna acción al respecto, entonces este objeto o comunidad serán foco de delito. Lo anterior a causa del mensaje que trasmite la ventana rota del auto ubicado en Palo Alto. Dicho mensaje implica una idea de deterioro, desinterés, despreocupación que dan paso a una serie de eventos violentos que destruyen los códigos de convivencia, el cumplimiento de la Ley y las normas. Dicho resultado es una importante contribución al enfoque integral de la seguridad ciudadana porque sirve para tener en cuenta que la delincuencia no es causa exclusiva de la pobreza y que,

además, los enfoques integrales de la seguridad ciudadana deben actuar rápida y efectivamente para evitar desencadenar una serie de actos que desemboquen en la violencia irracional de las personas.

La teoría de la ventana rota contribuye a construir alternativas que van más allá de los enfoques convencionales que se basan en una perspectiva diferente de seguridad que busca es reprimir al delincuente sin conocer su entorno familiar y social. Por ello, la teoría sirve de sustento para afianzar prácticas que al interior de la seguridad ciudadana buscan lograr un cambio respecto al entorno que viven las personas. Dichas iniciativas, deben estar encaminadas a:

> (…) el rediseño, renovación y mejoramiento de espacios públicos, la generación de empleos específicos, creación de programas de aprendizaje y colocación laboral, medidas educativas e intervenciones escolares para jóvenes en riesgo, actividades para la primera infancia y el apoyo de los padres, y mediación formal e informal para reducir las tensiones entre los grupos en situaciones altamente volátiles. (Muggah, 2017, p.296)

A modo de complemento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sugiere el reexaminar fenómenos como los de violencia y delincuencia. Teniendo como sustento pruebas que respaldan y sugieren que ambos fenómenos son aprendidos. Al respecto, Arriagada & Godoy (2017) establecen que las situaciones por las cuales tanto la violencia como la delincuencia se aprenden son: “el abuso físico, exposición continua a lo largo de la niñez, por la influencia directa a través de medios de comunicación, de escenarios de posguerra y de valores culturales que aceptan o promueven la resolución violenta de conflictos” (p.119).

Hay que mencionar además que también es importante desde el enfoque integral que posee la seguridad ciudadana, el tratar de abordar la problemática de la violencia desde un enfoque multidimensional (Arrigada & Godoy, 2017). Dicho enfoque debe buscar abordar la problemática desde un ámbito tanto personal como comunitario; tomando en cuenta tanto situaciones personales como sociales, culturales y familiares.

De forma similar, la aplicación de la seguridad ciudadana debe estar guiada y marcada por criterios transversales que son necesarios para abordar el tema. Entre ellos, se encuentra, en primer lugar, lo que la CEPAL denomina programas de doble orientación; los cuales son medidas que combinan mecanismos de control y de prevención de forma simultánea (Arrigada & Godoy, 2017). Entre dichos criterios se encuentra el de coordinación interinstitucional, el mismo, busca que haya una aplicación en todos los niveles institucionales, para que así exista una coordinación transversal de medidas para reducir los delitos y aumentar las sanciones, de forma que en ningún momento se entorpezcan las unas con las otras. Dicho criterio debería ser aplicado en distintos niveles que incluye a: "comunidad, gobiernos locales, organismos privados y organismos gubernamentales, organismos policiales, judiciales y penitenciarios organismos educacionales, y laborales, entre otros" (Arriagada & Godoy, 2017, p.119).

En segundo lugar, se encuentra como criterio transversal la participación ciudadana. Actúa bajo el entendido que: aquellos que mejor conocen el problema son aquellos que pueden solucionar de manera más pronta la situación[118]. Por tanto, al ser la ciudadanía quienes viven a diario la problemática, son ellos quienes quizás entienden mejor el problema, y por tanto, pueden ser los mismos ciudadanos quienes puedan atender y contribuir de manera pronta en la búsqueda de una solución para dicha problemática. Para ello, se prevé que para

118. Esto no es la regla general, pero se podría decir que sí aplica para la mayoría de casos.

que la participación ciudadana sea rápida y efectiva, se disponga de mecanismos que faciliten la creación de redes de contactos y la organización misma de la sociedad. De tal manera, se promueve la prevención como un pilar al interior de la comunidad y la denuncia de las irregularidades como un mecanismo que logra ejercer control de forma pronta (Arrigada & Godoy, 2017).

Igualmente es importante fomentar las relaciones entre la comunidad y la policía. El criterio plantea que relación policía- comunidad, que en muchas ocasiones es inexistente, genere en la comunidad mayor confianza con los cuerpos policiales y de seguridad, para que así se pueda establecer un progreso en los canales de comunicación que lleven a generar una mejora en la percepción que tiene la ciudadanía de la policía. Asimismo, se busca con el fomento de las relaciones que se dé cierto nivel de legitimidad sobre "(…) el sistema político, judicial, policial en el combate en contra de la criminalidad" (Arriagada & Godoy, 2017, p.119).

Es importante recalcar que la búsqueda de la participación de la ciudadanía no se debe restringir por criterios de pobreza o de marginalidad. Es decir, cuando se implementen políticas de seguridad ciudadana, no se debe buscar que única y estrictamente sea la gente de escasos recursos o barrios marginales la que participe en la denuncia activa del delito y la violencia, ni que tampoco sean únicamente dichos sectores poblaciones los que tengan buenas relaciones de comunicación con las fuerzas policiales y de seguridad. Es necesario recalcar que, así como la teoría de la ventana rota muestra que la criminalidad se puede desatar en distintos sectores tanto ricos como pobres, las políticas de seguridad ciudadana deben estar encaminadas a todo tipo de población.

El último criterio transversal para los programas de seguridad ciudadana es el de establecer programas educativos para la población. Ya se había dicho

previamente que en muchas ocasiones la exposición continua a la resolución violenta de conflictos puede llevar a conductas agresivas que den paso o perpetúen la violencia y el crimen. Por ende, los programas de educación deben estar dirigidos a la resolución pacífica de controversias de forma tal que se fomente el diálogo, conductas de entendimiento y de colaboración para que se generen buenas relaciones al interior de la comunidad y que, como resultado, forjen conductas no violentas al interior de la comunidad (Arrigada & Godoy, 2017).

5. Medidas Preventivas y de Control para la Seguridad Ciudadana

En la exploración de medidas efectivas para prevenir el crimen y la violencia, es importante tener en cuenta que, para concebir soluciones a problemas que han estado por generaciones se debe también dirigir los esfuerzos del Estado y de sus instituciones en entender las dinámicas de las comunidades a las cuales se quiere ayudar. Por consiguiente, las medidas preventivas no pueden estar desconectadas de las realidades de la comunidad y por tanto, dichas medidas deben ser construidas en el vórtice de problemáticas que aquejan a la comunidad.

Así pues, entre la serie de medidas preventivas que se pueden adoptar, se encuentran los programas educativos que tengan como primer objetivo, disminuir los índices de deserción escolar y que además, tengan en cuenta las causas de la deserción escolar en dicha zona o comunidad. De esta forma, se puede encaminar políticas que apunten al aumento de los niveles educativos de las personas[119]. Igualmente, dichos programas educativos deben estar enfocados en enseñar la resolución pacífica de conflictos para así disminuir las probabilidades de que los individuos actúen con violencia.

119. Al respecto el Bando Interamericano de Desarrollo, según un estudio realizado en Perú, encontró que los niveles educativos bajos de los hombres eran causal clave en la generación de violencia doméstica.

Otro punto importante en el enfoque preventivo es el generar una organización de la comunidad. Dicha organización es lo que permite establecer canales de intercomunicación en el interior de la comunidad y con las fuerzas policiales. De esta manera se forman redes de contacto que actúan preventivamente, y que además estimulan la denuncia de todo tipo de conductas irregulares. Para lograr dicha organización de la comunidad, se puede optar por figuras que incluyen desde los consejos comunitarios hasta los patrullajes policiales[120] (Arrigada & Godoy, 2017).

La organización comunitaria también debe estar enfocada a la denuncia por parte de grupos especialmente vulnerables: mujeres, niños, ancianos y personas con algún tipo de discapacidad. Esto, de forma que se prevengan diferentes tipos de violencia intrafamiliar mediante la realización de leyes que atiendan dicha problemática y de programas que busquen solucionar directamente las causas y consecuencias de este tipo de violencia.

Un punto que también es esencial a tener en cuenta para que sea objeto de medida preventiva, es el control en el consumo de alcohol, drogas, y el porte de armas. En vista de que cada vez se presenta de manera más consecutiva situaciones en donde se asocia las drogas y el alcohol con hechos de violencia y criminalidad, y que estas también son medio para el reclutamiento de menores en bandas criminales que se asocian continuamente con otro tipo de crímenes, se hace prioritario dar un trato que sea acorde a la situación y que busque ejecutar acciones tanto preventivas como correctivas. Por ello, se debe superar simplemente el accionar policial donde la imposición de una pena no genera rehabilitación ni atiende a las causas por las cuales se da el consumo y porte de alcohol, drogas y armas.

120. Los patrullajes están diseñados para que se informe a la población sobre la delincuencia y se fomenten las acciones preventivas a nivel comunitario.

Otro aspecto básico y esencial a tratar en el enfoque de la prevención es el combate en contra de la pobreza y de la desigualdad. Al respecto, organismos internacionales como la ONU han comunicado de manera reiterada la necesidad de construir soluciones que permitan crear las condiciones necesarias para que no se perpetúe las desigualdades (Medina, 2017). Ante este tipo de situaciones, la adopción de medidas que busquen mejorar la calidad de la gente es necesario, entre dichas medidas en encuentra: la urbanización de barrios en condiciones infrahumanas; la regularización de los títulos de propiedad; la mejora de la calidad de la educación; la construcción de hospitales y centros que ofrezcan acceso a salud de calidad; recuperación de menores en abandono; y la generación de empleo son algunas de las opciones que ayudan a reducir los niveles de pobreza y desigualdad, así mismo, contribuyen en disminuir las posibilidades de que las personas se encuentren o generen situaciones de violencia o delito (Arrigada & Godoy, 2017).

Es importante también recalcar que un aspecto fundamental en el ejercicio de la seguridad ciudadana es el mejoramiento continuo de los mecanismos institucionales existentes de control. Para ello, se tiene que tener en cuenta acciones que acojan reformas al sistema policial de los países, de forma que se logre implementar efectivamente medidas de transparencia como los planes estratégicos para combatir la criminalidad. Asimismo, se debe considerar aspectos que conlleven a mejor dotación del personal policial; mejores salarios; organismos de control al interior de la misma estructura policial y; la profesionalización de la policía (Arrigada & Godoy, 2017).

Un aspecto que debe ser igualmente tenido en cuenta, son las reformas al sistema judicial. Es importante que los sistemas judiciales de los países garanticen un acceso a sus mecanismos y que estos sean ágiles y efectivos (sin violar el debido proceso) con las sanciones de los delitos. De esta forma, es

factible generar mayor tranquilidad y seguridad en la población para que se sientan plenamente respaldadas e incentivadas a hacer uso de los mecanismos de justicia.

Finalmente, es importante que las políticas que busquen apoyar la seguridad ciudadana, consideren las reformas de los sistemas penitenciarios. Dichos recintos deben operar como centros de rehabilitación y de castigo proporcional para las personas. Por ello es importante que se asigne de forma efectiva recursos a los centros de reclusión para que se eviten situaciones de hacinamiento. Es igualmente relevante que se cumpla con la normatividad internacional en materia de privación de la libertad y que se trabaje en eliminar las preferencias que en ocasiones se aplican a algunos presos (entre ellas se encuentra el trato privilegiado a jefes de narcotráfico) (Arrigada & Godoy, 2017).

6. El Caso Colombiano

En el caso Colombia, el instrumento creado por las autoridades que articula medidas preventivas, de persuasión y que adicionalmente intenta articular todas las políticas en materia de Seguridad Ciudadana, es el Código de Policía. Como se evidencia, el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia indica claramente el rol de la Policía Nacional, al ser una institución que mantenga y salvaguarde un entorno apropiado para el desarrollo del individuo.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

No obstante, los hechos violentos de las últimas décadas del siglo XX permitirían, no solo hacer diversos cuestionamientos referentes al cumplimiento

de la misionalidad de la Policía Nacional, sino de las demás instituciones del Estado colombiano, a partir de los altos niveles de violencia perpetrados por estructuras dedicadas al narcotráfico y grupos armados ilegales (FARC, ELN, AUC). Recordándose aquellos actos violentos como el uso de carros bombas, secuestros masivos, masacres, afectación a la infraestructura eléctrica, etc.

Un factor que acrecentaría aún más la violencia a nivel nacional fue aquella mezcla criminal volátil que se configuró entre el narcotráfico y los distintos grupos armados ilegales, en razón a que producían, elaboraban y distribuían[121] grandes cargamentos de droga, convirtiéndose de este modo el narcotráfico en la principal fuente de financiamiento para los grupos ilegales que proliferaban en el país. De esta manera, las organizaciones criminales lograron durante los años ochenta y principios de los noventa dar cumplimiento a los principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, ampliar presencia territorial y aumentar su influencia (Echandía, 2001) criminal, principalmente en regiones donde la presencia institucional del Estado era exigua.

En ese escenario, en el que abundaban todo tipo de amenazas al desarrollo y convivencia pacífica de los colombianos, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tuvieron que replantear continuamente sus estrategias operacionales, permitiendo contrarrestar el accionar criminal que afectaba directamente al individuo. Sin embargo, las medidas coyunturales adoptadas e implementadas por la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) conducirían al desarrollo de roles que no eran precisamente los establecidos en la Constitución Política para cada una de las fuerzas.

Sumado a lo anterior, la extensión territorial, la multiplicidad de costumbres o culturas, y sobre todo, la falta de oportunidades, conducían a que la actividad

121. Etapas del narcotráfico. Tomado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-948277

delincuencial se convierta en el camino más 'óptimo' para la consecución de intereses particulares, considerándose un estilo de vida. De esta forma, exhibía que la solución a la causa raíz de la violencia no era solamente de tipo militar, comprometía factores sociales, educativos, laborales y demás que contribuyen al desarrollo integral del ser humano.

La implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, se reorientaría el accionar por parte de la institucionalidad colombiana, generándose una corresponsabilidad por parte de la Fuerza Pública, todos los ministerios y demás entidades del gobierno (Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003) la misma buscaba canalizar los esfuerzos del gobierno hacia un propósito común. Por tal motivo, uno de los principales lineamientos de la política era retomar aquellas zonas o regiones del país donde imperaba la ley criminal, la cual se enfocaba en acrecentar los ingresos a la organización ilícita que ejerciera 'soberanía territorial' a través una depredación en gran escala de las actividades económicas productivas (Collier, 2001).

En ese sentido, la mezcla criminal volátil conduciría a un cambio en el desenvolvimiento de los diversos grupos armados ilegales, en razón a que dejarían en segundo plano la motivación política e ideológica, para enfocarse hacia el sostenimiento financiero de la organización, como lo señala Collier (2001), en su teoría económica del conflicto. A partir de ese nuevo interés, no político ni ideológico sino lucrativo, traería consigo el surgimiento de nuevos actores ilegales, considerados Bandas Criminales (BACRIM) o crimen organizado, añadiéndose un nuevo factor de inestabilidad a la seguridad.

Los hechos violentos en las regiones apartadas del espectro gubernamental responderían a una racionalidad de tipo económico, llamado por Max Weber como el "individualismo metodológico" relacionado con la codicia de las personas (González. 1993), lo que puede responder de cierta forma, al comportamiento

de los grandes cabecillas de las guerrillas o líderes de las BACRIM, los cuales atienden solo a sus intereses económicos. Esa postura la sustenta de igual forma Gary Becker (1968), quien explicó que el comportamiento criminal de un individuo es el resultado de la decisión racional de comparar las ganancias que se pueden adquirir al quebrantar la ley y su costo al ser sancionado, esa racionalidad de costo - beneficio en el contexto evidencia explícitamente en el cambio de actividades ilícitas (Cañas & Enciso, 2014).

En ese contexto difuso, donde proliferaban cada vez más estructuras criminales sustentadas por el narcotráfico, se debía adoptar medidas concretas, una fue los planes de campaña o de guerra[122] que establecieron las Fuerzas Militares, donde llevarían a cabo operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales e interagenciales, para combatir las amenazas tradicionales como lo eran las guerrillas y las autodefensas, redundando en la desmovilización de las Autodefensa Unidas de Colombia, a través del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, comprometiéndose este grupo armado ilegal a "desmovilizar la totalidad de sus miembros" (Presidencia de la República, 2006, p. 6) y posteriormente con la puesta en marcha de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC - EP y ELN, conduciendo al cambio de la dinámica de la violencia.

Por su parte, la Policía Nacional se enfocaría principalmente hacia la desarticulación y neutralización de BACRIM y sus cabecillas, pues estos grupos operan como una red criminal, utilizando la subcontratación criminal para operar en zonas urbanas; la violencia selectiva y ejemplarizante como mecanismos de represión (Ávila, 2016), y es frente a estos aspectos que se enfocaría las estrategias operacionales de la institución policial. Una de sus principales estrategias se ha denominado Agamenón[123], la cual ha logrado desmantelar el

122. Contiene las instrucciones necesarias para la preparación y conducción del Frente Militar respecto a la confrontación de los grupos armados ilegales.

123. En el año 2015 el gobierno de Juan Manuel Santos lanzó la Operación Agamenón para desmantelar esta organización, conocida antes como Clan Úsuga o Los Urabeños.

50% de la organización mafiosa Clan del Golfo, según lo manifestado por el Director de la Policía Nacional, General Jorge Hernando Nieto Rojas (2017).

Ahora bien, como se indicaba anteriormente, la Policía Nacional debe velar por salvaguardar y garantizar un ambiente donde los habitantes de Colombia convivan en paz, frente a ese imperante deber constitucional, no solo las BACRIM o ya denominadas Grupos Armados Organizados - GAO[124] representan un factor desestabilizador de la seguridad, sino que existen otros fenómenos o amenazas que influyen en aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales (OEA, 2003), catalogándose como los nuevos desafíos en el marco de la Seguridad Multidimensional.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la Policía Nacional ha tenido que diversificar sus esfuerzos. Por una parte ha mantenido la lucha contra carteles o estructuras dedicadas al narcotráfico, grupos guerrilleros, grupos de autodefensas y bandas criminales, capaces de desestabilizar la seguridad nacional. Por otro lado, ha tenido que propender por un entorno libre de perturbaciones a la convivencia ciudadana. Para este último propósito, la institución ha tenido que adelantar un esfuerzo mayor, no por el tipo de amenaza que debe contrarrestar sino en razón a que ha venido actuando bajo los parámetros legales de un Código de Policía que no es apropiado para las circunstancias socioculturales actuales.

Colombia tenía un Código Nacional de Policía (Decreto- Ley No. 1355) obsoleto que fue expedido en el año 1970 y que estaba pensado para las realidades sociales de esa época, que sin duda son muy distintas a las del presente, por lo que fue necesario que las normas de policía se adecuaran a la

124. Directiva Permanente 0015, emanada por el Ministerio de Defensa Nacional el 22 de abril de 2016, en la cual se expiden los lineamientos para caracterizar y enfrentar a los grupos armados organizados.

Constitución Política de 1991 y a las dinámicas y cambios sociales (Presidencia de la República. 2016).

En ese sentido, era evidente que los problemas o situaciones de convivencia a nivel nacional eran totalmente diferentes a los de 1970. No hubo quién regulara los comportamientos ni controlara los excesos de consumo de drogas y de alcohol en la vía pública, así como el alto volumen de la música en el espacio público (Pareja, 2017). Por tal motivo, era necesario la implementación de una normatividad que respondiera a las circunstancias vigentes.

A partir del 01 de enero de 2017, entraría en vigor el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, luego de una serie de críticas a su marco legislativo. Durante los primeros seis meses se impusieron 181.522 comparendos pedagógicos, es decir 1.003 diarios. Entre los casos más sancionados fueron el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes en vía pública, porte de armas cortopunzantes y las riñas (Semana, 2017). El 01 de agosto de 2017 se llevó a cabo la implementación del Código a nivel nacional, donde se impondrán sanciones económicas a quienes infrinjan algún artículo de los 243 contemplados.

De acuerdo a datos suministrados por la Policía Nacional, el número de riñas disminuyó comparado con el año 2016, salvando 344 vidas; se han registrado 10.003 casos menos de lesiones a personas originadas en riñas; el 53% de la comunidad considera que la convivencia en su barrio ha mejorado (2017), exaltando los logros o aciertos alcanzados a partir de la entrada en vigor del nuevo Código.

A pesar que el Código Nacional de Policía y Convivencia lleva menos de un año de su implementación, se han registrado posturas a favor y en contra

respecto a su ejecución. Se destaca el señalamiento por parte de Gil (2017), quien aseguró que el país necesitaba una actualización de la norma porque hay un problema de violencia originada en prácticas que no facilitan la convivencia, como la disposición de basuras y el alto volumen de la música en el espacio público.

Si bien la promulgación del nuevo Código de Policía y Convivencia era necesario para regular y garantizar un entorno apropiado para avenencia de los ciudadanos, se ha denotado que el Estado colombiano tiene un gran desafío para llevar a cabo su implementación eficazmente, pues no se tuvieron en cuenta algunos factores presupuestales y logísticos para la óptima aplicación del Código.

Uno de ellos es el de disponer que cada uno de los 1.098 municipios de Colombia destine los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la capacitación y contratación de los Inspectores de Policía, quienes son los encargados de ratificar o derrocar la sanción impuesta. En el caso de Bogotá, D.C., la Secretaría de Gobierno aumentó de 45 a 63 el número de inspectores, dado que el código establece más de 100 comportamientos contrarios a la convivencia (Semana, 2017). Por ser el Distrito Capital y tener un presupuesto mayor al de otros municipios, se logró llevar a cabo este aumento.

En este sentido, señala Gil que el código tiene un problema, opera donde las autoridades tienen permanencia, eso se reduce a sectores muy específicos, pero en las periferias de la ciudad las autoridades no cumplen esa función reguladora lo cual se podría deducir que la aplicación del Código está sujeta principalmente a aquellos municipios capitales de departamento que cuentan con una mayor población, disponibilidad de presupuesto y recursos necesarios para su aplicabilidad (Gil, 2017).

No obstante, municipios categorizados en el primer nivel, menores a 50.000 mil habitantes (Federación Nacional de Municipios, 2013), difícilmente no tendrán los recursos necesarios para brindar la capacitación y contratación de Inspectores de Policía, nombrando a personas que no poseen la preparación profesional para ejercer este cargo o quizás la experiencia.

Otro desafío es que se ejecute la sanción impuesta. Para este caso, se ha evidenciado de igual forma una mala planeación o coordinación institucional. El Código de Policía y Convivencia contempla computársele a los sancionados con una multa de tipo 1 y 2, participar en actividades comunitarias, es decir, jornadas de ornato y embellecimiento o de pedagogía de convivencia; sin embargo, estas labores requieren de la compra de los elementos para la realización del mismo, lo cual no se tiene presupuestado, induciendo a la no materialización de la sanción.

7. Conclusiones

En resumen la evolución del concepto de seguridad sin duda alguna ha tenido diferentes matices que han considerado y que se han ido adaptando a las necesidades de hoy en día. Ello implica el considerar que ya no son exclusivamente los Estados quienes necesitan de la protección constante, sino que también son las personas las que son susceptibles de amenazas que a diario colocan en peligro su vida. Por ello, opciones presentadas como la seguridad ciudadana son importantes de analizar porque permiten brindar soluciones a situaciones y lugares en donde el Estado no hace presencia o simplemente no es efectivo.

Pese a lo anterior, es importante recordar que aun cuando la seguridad ciudadana surge como una opción frente a la ausencia de Estado, esta no lo sustituye en ningún momento. Por el contrario, es una medida que busca ser

complementaria y que por tanto buscar asistir al Estado en afrontar situaciones que en ocasiones no son objeto de control. Es por eso que el enfoque preventivo de la seguridad ciudadana, junto con el conjunto de sistemas estatales tanto de justicia, como policial y penitenciario, deben de trabajar conjuntamente para que su enfoque preventivo y correctivo sea efectivo.

En el caso colombiano la evolución del concepto de Seguridad Ciudadana ha estado marcado por otras manifestaciones de violencia, alimentada por fenómenos como el narcotráfico, secuestro, minería ilegal y otros, que han impactado directamente en la cultura de los ciudadanos; es así, como han aumentado considerablemente hechos que impactan directamente en la Seguridad Ciudadana. El instrumento de las autoridades colombianas, ha sido por excelencia el Código Nacional de Policía; como quedó evidenciado a lo largo del documento, el Código tiene grandes limitaciones en su aplicación, entre otras razones, porque culturalmente tiene severas limitaciones.

En el escenario que actualmente atraviesa Colombia es necesaria la implementación de una serie de políticas de Seguridad Ciudadana que por medio del Código Nacional de Policía, promuevan la seguridad en las ciudades y en el campo, reconociendo las diferencias idiosincráticas del país, quizá una posible solución para dar cierto grado de legitimidad ante los ciudadanos, sería necesario implementación de políticas no nacionales, sino regionales, que no busquen la homogeneidad de la población, sino por el contrario, reconozcan la heterogeneidad del pueblo colombiano.

Bibliografía

Capítulo I
Seguridad y Defensa: Conceptos en Constante Transformación

Referencias

Aguilar, L. (2010). Introducción: Estado del Arte de la Ciberseguridad, en Cuadernos de Estrategia, Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la Seguridad Nacional en el Ciberespacio, No. 149, diciembre, pp. 13-49.

Ayala, J. (2014). Interdependencia compleja: Cuatro Enfoques Teóricos de la Cooperación Internacional de los Gobiernos Subnacionales, en Revista de El Colegio de San Luis, Vol. 7, pp. 256-287.

Ayoob, M. (1995). The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System, London: Lynne Rienner Publishers.

Barbe, E. (2007). Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos Editorial

Benítez, R. (2005). Seguridad Hemisférica Debates y Desafíos. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Blackwell, A. (2015). 10 Years of Multidimensional Security, Washington: Wilson Center.

Bonett, M. (2008). Seguridad en Construcción en América Latina . Bogotá: Universidad del Rosario.

Bonett, M. (2009). Seguridad en Construcción en América latina Tomo II. Bogota: CEPI.

Bravo, G. (2015). Las Migraciones Internacionales y la Seguridad Multidimensional en Tiempos de la Globalizacion, en Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, No. 48, pp.139-149.

Buzán, B. (1983). People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Brighton: Wheatsheaf Books Ltd.

Buzán, B. & Waever, O. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security, NewYork: Cambridge University Press.

Cancelado, H. (2010). Poder y Sistema Internacional: Un Aporte Apócrifo a las Relaciones Internacionales, en Revista de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad, Vol. 5, No. 1, pp. 33-50.

Celi, P. (2014), Dilemas y Perspectivas de la Autonomía Estratégica Suramericana en Seguridad y Defensa Regional, en Niño, C. (ed.), Anuario 2014 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe, Bogotá: FESCOL

Coleman, K. (2008). Cyber Warfare Doctrine: Addressing the Most Significant Threat of the 21st Century, Public Version Sensitive Security Information Removed.

Comando General de las Fuerzas Militares. (Septiembre de 2015). Modernas, flexibles y adaptables frente a cualquier amenaza. Las Fuerzas Militares y de Policía se preparan para nuevos escenarios del 2030(36), págs. 2-4.

Crisóstomo, C. (2014). UNASUR y la Proyección del Consejo de Seguridad Sudamericano, en UNISCI Discussion Papers, No. 21, pp. 62-78.

Crooston, M. (2012). Virtual Patriots and a New American Cyber Strategy: Changing the Zero-Sum Game, en Strategic Studies Quarterly, Winter.

Chillier, G. & Freeman, L. (2005). Potential Threat: The New OAS Concept of Hemispheric Security, Washington Office in Latin America: WOLA.

Faciolince, L. (2017). Cooperación Policial entre Colombia y Centroamérica y el Caribe: El Crimen Organizado y el Accionar de Ameripol bajo el Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica, en Memorias Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, No.23, pp.1-24.

Flemmes, D. (2005). Creating a Regional Security Community in Southern Latin America: The Institutionalisation of the Regional Defense and Security Policies, en Working Papers Global an Area Studies, No. 13.

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, (2015). La Seguridad Humana en las Naciones Unidas, Nueva York: Naciones Unidas.

Font, T. & Ortega, P. (2012). Seguridad Nacional, Seguridad Multidimensional, Seguridad Humana, en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, No. 11, pp. 161-172.

Gaitán, A. (2011). Computadores e Internet en la Guerra Interestatal: ¿La Consolidación de un Nuevo Poder Militar en el Siglo XXI?, Madrid: Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, CEESEDEN.

García, V. (2014). Reformas al Sector Seguridad en Contextos de Post-Conflicto Armado:Experiencias en Centroamérica y consideraciones sobre el Caso

Colombiano. CONFERENCIA FLACSO-ISA: "Poderes Regionales y Globales en un Mundo Cambiante", Buenos. Buenos Aires: FLACSO.

Gómez, A. & Correa, M. (2014). Transformacion Estructural del Ejército Colombiano: Construcción de Escenarios Futuros, en Revista Científica General José María Córdova, pp.20-85.

Griffiths, J. (2011). Teoría de la Seguridad y Defensa en el Continente Americano, Santiago de Chile: Ril Editores.

Guzmán, V. (2013). La Seguridad Hemisférica y su Futuro Carácter Multidimensional, en Estudios de Seguridad y Defensa, Santiago de Chile: Departamento de Investigación. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, pp.39-66.

Hobbes, T. (1985). Leviathan, London: Pinguin.

KAS (2008). Dialogo Político: Seguridad en América Latina, Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Kegley, C. & Wittkopf, E. (2002). World Politics. Trend and Transformations. New York. ISBN.

Keohane, R. & Nye, J. (2011). Power and Interdependence, New York: Longman.

Krasner, S. (1993). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. En S. Krasner, International regimes (1 edition ed.). Ithaca: Cornell University Press.

Machiavelli, N. (1995). The Prince, Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Mattelart, A. (2000). Como nació el mito del internet. Le Monde Diplomatique Edición Cono sur, Numero 14- agosto.

Medina, F. E. (julio-diciembre de 2014). La teoría constructivista en las relaciones internacionales y la Escuela de Copenhague: la ampliación del concepto de seguridad en las Américas. RAI Revista de Análisis Internacional, 5(2), 77-85.

Merke, F. (s.f.). Identidad y Política Exterior en la Teoría de las Relaciones Internacionales. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales.

Møller, B. (octubre-diciembre de 1996). Conceptos sobre seguridad: nuevos riesgos y desafíos. Desarrollo Económico, 36(143), 769-792. Obtenido de http://www.jstor.org.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/stable/pdf/3467294.pdf

Moravcsik, A. (s.f.). Liralism and International Realtons Theory (Vol. 6). Haarward University; University of Chicago.

Morgenthau, H. (1956). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Nueva Yorkk: Knopf.

Obrador, F. (1992), Análisis del Concepto de Seguridad, en Cuadernos de Estrategia, Nº. 49, pp.25-49.

OEA (1947). Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, Río de Janeiro: Organización de Estados Americanos.

OEA. (2003). Declaración sobre Seguridad en las Américas. Ciudad de México: Organización de Estados Americanos.

Otálvaro, A. (2004). "La seguridad internacional a la luz de las estructuras y las dinámicas regionales: Una propuesta teórica de complejos de seguridad regional". Desafíos, Vol. 11. Bogotá, Colombia. 222-242.

Orozco, G. (2016). Desafios. Comunidades epistémicas en los estudios de seguridad y la interpretación del orden mundial., 28, 337-371.

Orozco, G. (2005). El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales. (72), 161-180. Obtenido de http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28455/28289.

Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security Studies, 26 (2), 87-102.

Pauselli, G. (2013). Teorías de relaciones Internacionales y la explicación de la ayuda externa. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 2(1), 72-92.

PNUD (2009). Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Rivera, F. (2008). Seguridad Multidimensional en América Latina, Quito: FLACSO.

Saint-Piere, H. (2008). Defensa y Seguridad, en Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, Santiago: RESDAL, pp.59-62.

Sánchez, G. (2009). "Internet: Una herramienta para las guerras en el siglo XXI". Revista Política y Estratégica No. 114.

Sánchez de Rojas, E. (2015). El Retorno de la Geopolítica en América Latina: Los Problemas Fronterizos Colombia-Venezuela y otros Temas, en Documento de Análisis, No. 44, Instituto Español de Estudios Estratégicos, pp. 1-17

Sánchez, D. (2015). Dificultades en la integración y cooperación de los cuerpos policiales de América Latina en la lucha contra el narcotráfico. Estudio de caso: AMERIPOL. Universidad del Rosario. Bogotá.

Santos, M. (2010). Apuntes de Estrategia sobre Seguridad y Defensa Nacional. Bogotá, D.C. : Universidad Militar Nueva Granada.

Serrano, L. (2015). Plan de intervención en seguridad humana 75-cien, un análisis desde la implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en Bogotá. Estudio de caso UPZ las Cruces. Universidad del Rosario. Bogotá.

Stein, A. (2009). El concepto de Seguridad Multidimensional, en Bien Común, No. 15, pp. 31-37.

Tomassini, L. (s.f.). Teoría de las Relaciones Internaccionales.

Palma, H. (2015). Retos e implicaciones de la adopción de un concepto multidimensional en la regióm. En La multidimensionalidad de la seguridad nacional: retos y desafíos de la región para su implementación (págs. 233-252). Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrrez Mellado.

Pardo, R., & Tokatlian , J. G. (2010). Segundo Centenario y Política exterior: Una reflexión en torno a Colombia. En M. T. Calderón, & I. Restrepo, Colombia 1910-2010 (pp. 199-274). Bogotá: Taurus.

UNASUR. (2009). Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) . Declaración de Santiago de Chile, (pág. 5). Santiago de Chile.

Ullman, R. (1983). Redefining Security, en International Security, Volume 8, No. 1, pp. 129-153.

Vargas, F. (2013). Importancia de las relaciones bilaterales en las estrategias de desarrollo. En E. d. Defensa, La seguridad hemisférica y su futuro carácter multidimensional (págs. 117-138). Santiago de Chile.: Departamento de Investigación. Academia Nacional de Estudios.

Vásquez, M. (2000). La propaganda de Guerra en Internet: el caso chechenio. Historia y comunicación social, Número 5, pp. 53-74.

Vela, M. (2002). Informe final de investigación Sociedad, Estado y fuerzas armadas en Centroamérica. Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. Ciudad de Guatemala: PNUD- FLACSO Guatemala.

Vélez, F. (S.F). Estudio Introductorio, Santiago: FLACSO.

Vieira, E. (2008). La formación de espacios regionales en la integración de América Latina. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Waltz, K. (1979), Teoría de la Política Internacional, Buenos Aires: GEL.

Wilson, W. (1917). Segundo Discurso Inagural.

Williams, P., (2008). Security Studies: An Introduction, New York: Routledge.

Capítulo II

Rupturas y Continuidades de la Seguridad y Defensa en Colombia: De la Seguridad Nacional a la Seguridad Multidimensional

Referencias

Acuña, O. (2013). Censura de Prensa en Colombia: 1949-1957, en Revista Historia Caribe, Volumen 8, No. 23, pp. 241-267.

Andrade, O. (2012). Relaciones Cívico-Militares en Colombia: Apuntes para un Estado del Arte, en Revista Análisis Internacional, No. 6.

Arango, R. (2002). La construcción de la nacionalidad. En R. Sierra, (Ed.), Miguel Antonio Caro y la cultura de su época. Universidad Nacional, pp. 125-163. Bogotá.

Atehortúa, A. (2010). El Golpe de Rojas y el Poder de los Militares, en Folios, Segunda Época, No. 31, pp. 33-48.

Atehortúa, A. (2014). Las Fuerzas Militares en Colombia: De sus Orígenes al Frente Nacional, en Revista Historia y Espacio, No. 17.

Bagley, B. (1998). Hablando Duro: La Política Internacional Antinarcóticos de los Estados Unidos en los Años Noventa, en J. G. (compilador), Colombia y Estados Unidos: Problemas y Perspectivas, Bogotá: Tercer Mundo Editores, pp.103-118.

Banco Mundial. (2016). Datos. Banco Mundial. Obtenido de http://datos.bancomundial.org/

Bonett, M. (2009). Seguridad en Construcción en América Latina, Bogotá: Universidad del Rosario.

Bushnell, D. (2007). Colombia Una Nación a Pesar de Sí Misma: Nuestra Historia desde los Tiempos Precolombinos hasta Hoy, Bogotá: Planeta.

Cabrera, F. (2005). Relaciones Civiles y Militares Durante el Periodo Comprendido entre 1994-2002 y su Incidencia en la Seguridad Nacional, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Cámara de Representantes Estados Unidos de Colombia. (1863). Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, Bogotá: Congreso de la República

Carreño, M. (2015). Relatos y Discursos de la Guerra y de la Paz en la Prensa Escrita Bogotana Durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902), Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Casillas, P. (2012). El Monopolio de la Violencia del Estado sobre los Movimientos Sociales en México, en Contextualizaciones Latinoamericas, pp.1-16.

Comando General de las Fuerzas Militares. (2015a). Las Fuerzas Militares y de Policía se Preparan para Nuevos Escenarios hacia el 2030, en Las Fuerzas, pp. 2-8.

Comando General de las Fuerzas Militares. (2015b). Plan Estratégico Militar 2030, Bogotá: Ministerio de Defensa.

Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991). Segunda Edición LEGIS.

Chernick, M. (1999). Negotiating Peace amid Multiple Forms of Violence: The Protracted Search for a Settlement to the Armed Conflicts in Colombia, en Arnson, C. (ed) Comparative peace processes in Latin America, Washington: Woodrow Wilson Center Press and Stanford University Press.

Chomsky, N. (2000). Plan Colombia, en INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. No. 16.

Di Marco, D. (2015). Moralistas: de Ciencia, Religión y Filosofía Nietzscheana en la Regeneración y la Hegemonía Conservadora (1886-1930), Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Duque, F. (2010). Diario del Coronel: Presencia Antioqueña en la Guerra de los Mil Días, Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.

Ejército Nacional. (2012). Operaciones Militares que han Marcado la Historia del Ejército Nacional. Recuperado de: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=252473.

Fischer, T. (1998). Antes de la Separación de Panamá: La Guerra de los Mil Días, el Contexto Internacional y el Canal, en Revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 25.

Flórez, A. (2012). La Doctrina Conjunta en Colombia: Análisis de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI.

García, V. (2014). Reformas al Sector Seguridad en Contextos de Post-Conflicto Armado: Experiencias en Centroamérica y Consideraciones sobre el Caso Colombiano, en Conferencia FLACSO-ISA: "Poderes Regionales y Globales en un Mundo Cambiante", Buenos Aires: FLACSO.

González, C. (2014). Plebiscito, Frente Nacional y Guerra Antinsurgente, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Grupo de Memoria Histórica. (2013) ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá: Imprenta Nacional.

Herrera, M. (1993). Historia de la Educación en Colombia la República Liberal y la Modernización de la Educación: 1930-1946, en Revista Colombiana de Educación, Volumen 26, No. 97.

Hinestrosa, F. (2004). A Panamá no nos la quitaron, la perdió el Abandono de Colombia, en Revista de Economía Institucional, Volumen 6, No. 10.

Hurtado, M. (2006). Proceso de Reforma Constitucional y Resolución de Conflictos en Colombia: el Frente Nacional de 1957 y la Constituyente de 1991, en Revista de Estudios Sociales, No. 23.

IEGAP. (2010). EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD, 2002-2010. Bogotá D.C: Instituto de estudios geoestratégicos y asuntos políticos.

Jaime, O. & Blanco, J. (2014). Aproximación a la Seguridad Nacional, en De la Corte Ibáñez, L. & Blanco, J. (ediciones), Seguridad Nacional, Amenazas y Respuestas, Madrid: LID Editorial Empresarial, pp. 1-17.

Jiménez, C. (2009). Aplicación e Instrumentalización de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia (1978-1982): Efectos en Materia de Derechos Humanos, Colección No. 20, pp. 75-105.

Leal, F. (2011). Una Visión de la Seguridad en Colombia, en Revista Análisis Político, Volumen 24, No. 73, pp. 3-36.

Martínez, L. (1970). Historia Extensa de Colombia, Bogotá: Lerner.

Martínez, O. (2013). Colombia el Paradigma de la Trasformación Política de 1930 1946: La Política Inconclusa de la Revolución en Marcha en la República Liberal, en Revista Colombiana de Ciencias Sociales, Volumen 4, No. 2, pp. 336-347.

Mejía, A. T. (1978). Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo, en Melo, J. (ed.), Colombia Hoy, Bogotá: Presidencia de la República, pp. 102-185.

Melgarejo, M. (2010). El Lenguaje Político de la Regeneración en Colombia y en México, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Melo, J. (1996). La República Conservadora, en Melo, J. (ed.), Colombia Hoy, Bogotá: Presidencia de la República.

Mesa, E. (2009). El Frente Nacional y su Naturaleza Antidemocrática, en Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Volumen 39, No. 110, Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 157-184.

Ministerio de Defensa. (1965). Decreto Legislativo 3398, Capítulo IV: Artículo 16.

Ministerio de Defensa. (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá: Presidencia de la República.

Ministerio de Defensa Nacional. (2015). Política de Defensa y Seguridad 2015 – 2018, Bogotá: Presidencia de la República.

Ministerio de Defensa Nacional. (2011). Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, Bogotá: Presidencia de la República.

Molano, A. (2009). Aportes para una Fenomenología del Terrorismo, en Revista Desafíos, Volumen 22, No.1, pp. 225-249.

Moncayo, V. (S.f). Hacia la verdad del Conflicto: Insurgencia Guerrillera y Orden Social Vigente. Recuperado de: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/hacia-la-verdad-del-conflicto-insurgencia-guerrillera-y-orden-social-vigente-1447179178-1460343050.pdf

Monroy, C. (2012). Del Federalismo a Regeneración, El Paso de Estados Soberanos a Departamento Político-Administrativos: Boyacá, 1886-1903, en Historelo, Volumen 4, No. 7, pp. 218-239.

Múnera, L. (2011). El Estado en la Regeneración: ¿La Modernidad Política Paradójica o las Paradojas de la Modernidad Política?, en Ruiz, L. (ed.), La Regeneración Revisitada: Pluriverso y Hegemonía en la Construcción del Estado-nación en Colombia, Medellín: La Carreta, pp. 13-75.

Murgueitio, M. (2005). Los Gobiernos Militares de Marcos Pérez Jiménez y Gustavo Rojas Pinilla: Nacionalismo, Anticomunismo y sus Relaciones con los Estados Unidos (1953–1957), en Revista Historia y Espacio, Volumen 1, No. 25, Cali: Universidad del Valle.

Nieto, P. (2004). ¿Subordinación o Autonomía?, El Ejército Colombiano, su Relación Política con el Gobierno Civil y su Configuración en la Violencia

1953-1990, en Informe Final del Concurso: El papel de las Fuerzas Armadas en América Latina y el Caribe, Programa Regional de Becas CLACSO.

Olave, G. (2013). El Proceso de Paz en Colombia según el Estado y las FARC-EP, en Discurso & Sociedad, Volumen 7, No. 2, pp. 338-363.

Páez, P. (2009). Incidencias de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe en las Relaciones Bilaterales con Venezuela 2002-2008, Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Palma, H. (2015). Retos e Implicaciones de la Adopción de un Concepto Multidimensional en la Región, en La Multidimensionalidad de la Seguridad Nacional: Retos y Desafíos de la Región para su Implementación, Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrrez Mellado, pp. 233-252.

Pardo, R. & Tokatlian, J. (2010). Segundo Centenario y Política Exterior: Una reflexión en torno a Colombia, en Calderón, M. & Restrepo, I. (eds.), Colombia 1910-2010, Bogotá: Taurus, pp. 199-274.

Paredes, Z. & Díaz, N. (2007). Los Orígenes del Frente Nacional en Colombia: Presente y Pasado, en Revista de Historia, Año 12, No. 23, pp. 179-190.

Parra, E. Guevara, E. (2008). Régimen y Sistema Político Colombiano, Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública.

Pastrana, A. (1998). Una Paz sin Vencedores ni Vencidos, SE.

Pastrana, A. (1999). Palabras del señor Presidente de la República Andrés Pastrana Arango, Obtenido de: http://www.ideaspaz.org/tools/download/51346

Pécaut, D. (2001). Orden y Violencia: Evolución Socio-Política de Colombia entre 1930-1953, Bogotá: Editorial Norma.

Piella, G. C. (2014). La Seguridad y Defensa Estadounidenses tras la Guerra contra el Terror, en Colombia Internacional, pp. 267-290.

Pinzón, J. C. (s.f.). Colombia Back from the Brink From Failed State to Exporter of security, en PRISM, Volume 5, No. 4.

Pizarro, E. (1987). La Profesionalización Militar en Colombia II: El período de la Violencia, en Análisis Político, No. 2.

Pizarro, E. (2017). Cambiar el Futuro: Historia de los Procesos de Paz en Colombia (1981-2016), Bogotá: Penguimn Random House

Ramírez, C. (2012). El Conflicto Colombiano: Génesis de Decisiones Políticas de Colón a Juan Manuel Santos Calderón, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Ramsey III, R. (2009). El Billar to Operations Fenix and Jaque: The Colombian Security Force Experience, Fort Leavenworth: Combat Studies.

Rey, M. (2007). La Educación Militar en Colombia entre 1886 y 1907, en Revista Historia Crítica, No. 35, pp. 150-175.

Rodríguez, D. (2014). Counterinsurgency Lessons from Colombia: An Assessment of the Colombian Army Transformation from 1998 to 2010, Washington: Naval Postgraduate School.

Rodríguez, F. (2011). Marcos Pérez Jiménez y Gustavo Rojas Pinilla: Dos modelos de Dictaduras Desarrollistas en América Latina, en Revista Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Volumen 16, Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.

Romero, J. (2013). De la República Liberal a la Transacción Liberal-Conservadora: Disonancias y Consonancias, en Pensamiento Jurídico, No. 36, pp. 35-60.

Trejos, L. (2011). Colombia y los Estados Unidos en los Inicios de la Guerra Fría (1950-1966): Raíces Históricas del Conflicto Armado Colombiano, en Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, No. 15.

Trinquier, R. (1981). La Guerra Moderna, Buenos Aires: Ediciones Cuatro Espadas.

Valencia, H. (2012). Perspectivas del Gasto en Seguridad y Defensa Frente a Cambios en el Conflicto Armado Colombiano, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Vega, R. (2015). La Dimensión Internacional del Conflicto Social y Armado en Colombia: Injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado, Bogotá: Centro de Memoria Histórica.

Veillette, C. (2005). CRS Report for Congress, Plan Colombia: A Progress Report, Washington: Congressional Research Service.

Vela, M. (2002). Sociedad, Estado y Fuerzas Armadas en Centroamérica, Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, Ciudad de Guatemala: PNUD- FLACSO.

Villamizar, D. (2017). Las Guerrillas en Colombia: Una Historia desde los Orígenes hasta los Cofines, Bogotá: Penguin Random House.

Weber, M. (2008). Economía y Sociedad, México: Fondo de Cultura Economica.

Capítulo III
Metamorphosis Bellum: ¿Mutando a Guerras de Quinta Generación?

Referencias

Álvarez, C. (2017a). Guerra Corp., ¿Prohibición o Regularización de las Compañías Militares y de Seguridad Privada?: Un Desafío para el Derecho Internacional Humanitario, en Vélez, L. (Ed.), Sociedad y Fuerza Pública Ante los Retos de la Paz: Nuevas Amenazas, Derechos Humanos y Relaciones Cívico-Militares en el Contexto Colombiano, Bogotá: Ibáñez, pp. 55-85.

Álvarez, C. (2017b). Geopolítica Vertical y la Urbanización del Conflicto, en Revista Ensayos sobre Defensa y Seguridad, Volumen 11, pp. 11-48.

Álvarez, C. (2017c). El Sistema Internacional en el siglo XXI; ¿Crisis del Estado-Nacional?, en Estudios en Seguridad y Defensa, Volúmen 11, No. 22, pp. 167 - 185.

Arquilla, J. & Ronfeldt, D. (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, Santa Monica: RAND Corporation.

Arreguin, I. (2005). How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. Singapore: Editorial Board.

Artelli, M. & Deckro, F. (2008). Fourth Generation Operations: Principles for the 'Long War', en Small Wars & Insurgencies, Volume 19, No.2, pp. 221-237

Beer, F. (1974). How Much War in History: Definitions, Estimates, Extrapolations and Trends. Beverly Hills: Sage.

Berger, M. & Borer, D. (2007). The Long War: insurgency, counterinsurgency and collapsing states, en Third World Quarterly, Volume 28, No.2, pp. 197-215.

Benavides, A. (2010). "Mercenarios, Mercenarismo y Privatización de la Seguridad en América Latina", en Perret, A. (ed), Mercenarios y Compañías Militares y de Seguridad Privadas: Dinámicas y Retos para América Latina, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 101-137.

Betz, D. & Stevens, T. (2012). Cyberspace and the State, New York: Routledge.

Boot, M. (2006), War Made New: Weapons, Warriors, and the Making of the Modern World, New York: Gotham Books.

Boot, M. (2013). Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present, New York: Liveright.

Bunker, R. (1999). Unconventional Warfare Philosophers, en Small Wars & Insurgencies, Volume 10, No. 3, pp. 136-149

Chaliand, G. (2007). Guerras y Civilizaciones, Barcelona: Paidos.

Chandler, D.G. (1966). The Campaigns of Napoleon, New York: Macmillan.

Charap, S. (2015). The Ghost of Hybrid War, en Survival, Volume 57, No. 6, pp. 51-58.

Clark, W. (2003). Winning Modern Wars, New York: Public Affairs.

Clausewitz, K. V. (2003). De la Guerra, Córdoba: El Cid Editor.

Cortes, D. y Garzón, T. (2017). El Ciberactivismo en las Revoluciones Posmodernas, en Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 3, No. 1, pp. 103-125.

Cotton, S. (2010). Hired Guns: Views about Armed Contractors in Operation Iraqi Freedom, Santa Monica: RAND Corporation.

Crew, A (1952). Must Man Wage Ear?, London: Pinguin.

Delbrück, H. (1985). History of the Art of War within the Framework of Political History: The Modern Era, London: Praeger.

Dimarco, L. (2012). Concrete Hell: Urbane Warfare from Stalingrad to Iraq, Oxford: Osprey.

Dupuy, T.N. (1984). A Genius for War: The German Army and General Staff: 1807–1945, Fairfax: Hero Books.

Echevarria II, A. (2005). Deconstructing the Theory of Fourth-Generation War, en Contemporary Security Policy, Volume 26, Issue 2, pp. 233-241.

Farwell, J (2014). The Media Strategy of ISIS, en Survival, Volume 56, Issue 6, pp. 49-55.

Fleming, C. (2009). New or Old Wars?: Debating a Clausewitzian Future, en Journal of Strategic Studies, Volume 32, No.2, pp. 213-241

Gautam, P. (2009) Trends in Thinking about Warfare, en Strategic Analysis, Volume 33, Issue 6, pp. 849-860.

Gómez del Prado, J. (2006). Las Empresas Privadas de Seguridad: ¿Mercenarios o Corsarios del Siglo XXI?, SE.

Giap, V.N. (1970). Military Art of People's War, Boston: Monthly Review Press.

Gray, C. (1997). Post-Modern War: The New Politics of Conflicts, London: Routledge.

Grupo de Memoria Histórica (2013). Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá: Centro de Memoria Histórica.

Hammes, T. (2005). War Evolves into the Fourth Generation, en Contemporary Security Policy, Volume 26, No.2, pp. 189-221

Hammes, T. (2006). The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, New York: Zenith Books.

Hammes, T. (2007). Fourth Generation Warfare Evolves Fifth Emerges, en Military Review, May-June, pp. 14-23.

Henderson, E & Singer, J. (2002). New Wars and Rumors of New Wars, en International Interactions, No. 28, Issue 2, pp. 165-190.

Hodges, D. (1986). Intellectual Foundations of the Nicaraguan Revolution, Austin: Texas University Press.

Hoffman, B. (2006). Inside Terrorism, New York: Columbia University Press.

Hoffman, F. & Mattis, J. (2005). Future Warfare: The Rise of Hybrid Warfare, en U.S. Naval Institute Proceedings, November, pp. 30–42.

Hoffman, F. (2009). Hybrid Warfare and Challenges, en Small Wars Journal, Issue 52, 1st Quarter, pp. 34-39.

Holsti, K. (1996). The State, War and the State of War, Cambridge: Cambridge University Press.

Hughes, G. (2014). Syria and the Perils of Proxy Warfare, en Small Wars & Insurgencies, Volume 25, No.3, pp. 522-538.

Huntington, S. (1993). The Clash of Civilizations, en Foreign Affairs, No. 72, pp. 56–73

Johnson, A. (1935). War, en Encyclopedia on Social Sciences, Volume 15, New York: Macmillan.

Junio, T. (2009). Military History and Fourth Generation Warfare, en Journal of Strategic Studies, Volume 32, No. 2, pp. 243-269,

Kagan, D. (1995). Sobre las Causas de la Guerra y la Preservación de la Paz, Madrid: Turner.

Kaldor, M. (1999). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Stanford: Stanford University Press.

Kallen, H (1939). Of War and Peace, en Social Research, September.

Kilcullen, D. (2013). Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla, New York: Oxford University Press.

Kinzer, S. (2007). Blood of Brothers: Life and War in Nicaragua, Harvard: Harvard University Press.

Leonhard, R. (1991). The Art of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and Air Land Battle, Novata: Presidio.

Liang, Q. & Xiangsui, W. (2002). Unrestricted Warfare: China's Master Plan to Destroy America, Panama City: Pan American Publishing Company.

Lind, W.; Nightengale, K.; Schmitt, J.; Sutton, J.; Wilson, G. (1989). The Changing Face of War: Into the Fourth Generation Warfare, en Marine Corps Gazette, Volume 73, No. 10, pp. 22-26.

Lind, W. (2004). Understanding Fourth Generation War, en Military Review, September-October, pp. 12-16.

Lyall, J. & Wilson, I (2006). The American Way of War and Peace in Comparative Perspective, Philadelphia: Annual Political Science Association.

Mandelbaum, M. (1998). Is Major War Obsolete? en Survival, Volume 40, Issue 4, pp. 20-38

Minh, H.C. (1984). On Revolution: Selected Writings: 1920-66, Boulder: Westview Press. Montesquieu

Nissen, T. (2015). The Weaponization Of Social Media, Copenhagen: Royal Danish Defence College.

Oregan, S. (2016). Daesh: la Guerra en las Redes Sociales, en Revista Española de Defensa, pp. 52-53.

Ottis, R. & Lorents, P. (2009) Cyber Society and Cooperative Cyber Defence, en Internationalization, Design and Global Development, Lecture Notes in Computer Science, vol. 56, No.23, pp.180-186.

Parker, G. (2010). Historia de la Guerra, Madrid: Akal.

Reed, D. (2006). On Killing al-Zarqawi: Does United States Policy Know Its Tools in the War on Terror?, en Homeland Security Affairs Journal, Article 2, July.

Reed, D. (2008). Beyond the War on Terror: Into the Fifth Generation of War and Conflict, en Studies in Conflict & Terrorism, Volume 31, No.8, pp. 684-722.

Rice, E. (1988). Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries, Berkeley: University of California Press.

Richardson, L (1960). Statistics and Deadly Quarrels, Pittsburgh: Boxwood.

Rosenzweig, P. (2013). Cyber Warfare: How Conflicts in Cyberspace Are Challenging America and Changing the World, Oxford: Praeger

Sarkees, M. & Wayman, F. (2010). Resort to War: A Data Guide to Inter-state, Extra-state, Intra-state, and Non-state wars 1816-2007, Washington, D.C.: Sage.

Schneider, J. (1995). Cybershock: Cybernetic Paralysis as a New Form of Warfare, en Military Theory Readings, pp. 2-9.

Scott, G., Mokleiv, H., Strand, H. & Urdal, H. (2016). Trends in Armed Conflict: 1946-2014, en Conflict Trends, Oslo: PRIO.

Seward, D. (1978). The Hundred Years War, New York: Athenaeum.

Singer, D. & Small, M. (1989). International War: An Anthology, New York: Harcourt College Publishing.

Sipri (2017). SIPRI Yearbook 2017: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford: Oxford University Press.

Smith, R. (2006). The Utility of Force: The Art of War in the Modern World, London: Penguin.

Sorel, G (1912). Réflections Sur La Violence. Paris: Rivière.

Stevens, T. (2012). A Cyberwar of Ideas? Deterrence and Norms in Cyberspace, en Contemporary Security Policy, Volume 33, No. 1, pp. 148-170.

Szentkereszty, I. (2016). Fuerzas Militares y Esfuerzo Conjunto, en Revista Ensayos sobre Defensa y Seguridad, Volumen 9, pp. 63-82.

Szymanczyk, O. (2013). Historia de las Telecomunicaciones Mundiales, Buenos Aires: Dunken.

Thornton, R. (2005) Fourth Generation: A 'New' Form of Warfare?, en Contemporary Security Policy, Volume 26, Issue 2, pp. 270-278

Tse-tung, M. (1954). On Protracted War, Peking: People's Publishing House.

Tzu, S. (2012). El Arte de la Guerra, Barcelona: Shambhala.

Van Creveld, M. (1991). The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict since Clausewitz, London: Free Press.

Van Creveld, M. (2002). The Transformation of War Revisited, en Small Wars & Insurgencies, Volume 13, No. 2, pp. 3-15.

Wallace, M. (1957). Paths to Peace: a Study of War, its Causes and Prevention. New York: Orion.

Wass de Czege, H. (1984). Army Doctrinal Reform, en Clark, A. (ed.)., The Defense Reform Debate, London: John Hopkins Press (1984).

Williams, P. & Selle, W. (2016). Military Contingencies in Megacities and Submegacities, Carlisle Barracks, PA: S Studies Institute

Wright, A (1960). Study of War, Pittsburgh: Boxwood.

Zimmermann, M. (2001), Sandinista: Carlos Fonseca and the Nicaraguan Revolution, Durham: Duke University Press.

Capítulo IV
Globalización Desviada: Plataforma de Convergencia Criminal

Referencias

Ablon, L.; Libicki, M. & Golay, A. (2014). Markets for Cybercrime: Tools and Stolen Data, Santa Mónica: RAND Corporation.

Álvarez, C. (2017). El Sistema Internacional en el Siglo XXI: ¿Crisis del Estado-Nación?, en Estudios en Seguridad y Defensa, Volumen 11, No. 22, pp.167-185.

Andreas, P. (2005). Crimen Transnacional y Globalización Económica, en Berdal, M. & Serrano, M. (eds.), Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional, Cambio y Continuidad, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 62-82.

Arquilla, J. & Ronfeldt, D. (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, Santa Mónica: RAND Corporation.

Ashkenas, R.; Ulrich, D.; Jick, T. & Kerr, S. (2002). The Boundaryless Organization: Breaking the Chains of Organizational Structure, San Francisco: Jossey-Bass.

Bartlett, J. (2014). The Dark Net, New York: Random House.

Begley, V. & De Puma, R. (1991). Rome and India: The Ancient Sea Trade, Madison: University of Wisconsin Press.

Bergeron, J. (2013) Transnational Organised Crime and International Security, en RUSI Journal, Volume 158, Issue 2, pp. 6-9.

Björnehed, E. (2004). Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror, en Global Crime, Volume 6, No.3, pp.305-324.

Borcuch, A. (2012). The Influence of the Internet on Globalization Process, en Journal of Economics And Business Research, Volume 18, No. 1, pp.118-129.

Brenner, S. (2010). Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace, Santa Barbara: Praeger.

Casson, L. (1994). Ships and Seafaring in Ancient Times, Austin: University of Texas Press.

Castells, M. (2000). The Rise of a Network Society, Malden: Blackwell Publishers.

Chaudhuri, K. (2006). The Trading World of Asia and the English East India Company, Cambridge: Cambridge University Press.

Chase-Dunn, C. & Anderson, E. (2004). The Historical Evolution of World Systems, New York: Palgrave Macmillan.

Chesnoy, J. (2015). Undersea Fiber Communication Systems, London: Academic Press.

Clausewitz, C. (1999). De la Guerra, Madrid: Ministerio de Defensa.

Cohen, S. (2009). Geopolitics: The Geography of International Relations, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Curtin, P. (1984). Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge: Cambridge University Press.

Dempsey, M. (2015). The National Military Strategy of the United States of America, Washington: US Department of Defense.

Deville, D. (2013). The Illicit Supply Chain, en Miklaucic, M. & Brewer, J. (eds), Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, Washington: NDU Press, pp.304-336.

Disman, C. (2005). The Leaderless Nexus: When Crime and Terror Converge, en Studies in Conflict & Terrorism, Volume 28, No. 3, pp.237-252

Ellis, L. & Kidner, F. (2004). Travel, Communication and Geography in Late Antiquity, Burlington: Ashgate.

El Tiempo (2017). Colombia También es Víctima del Ataque Global Informático, Obtenido de http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/ataque-cibernetico-afecta-redes-de-74-paises-87390

Fletcher, M. (1958). The Suez Canal and World Shipping, 1869–1914, en The Journal of Economic History, Volume 18, No. 4, pp. 556–573.

FBI (2016). 2016 Internet Crime Report, Washington: Federal Bureau of Investigations.

Finklea, K. M. (2017). Dark Web, Washington: Congressional Research Service.

Ghernaouti, S. (2013). Cyber Power: Crime, Conflict and Security in Cyberspace, Boca Raton: Taylor & Francis Group.

Gilman, N.; Goldhammer, J. & Weber, S. (2011). Deviant Globalization: Black Market Economy in the 21st Century, New York: The Continuum International Publishing Group.

Gilman, N.; Goldhammer, J. & Weber, S. (2013). Deviant Globalization, en Miklaucic, M. & Brewer, J. (eds), Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, Washington: NDU Press, pp.

Gills, B. & Thompson, W. (2006). Globalization and Global History, New York: Routledge.

Gunn, G. (2003). First Globalization: The Eurasian Exchange 1500–1800, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Friedman, T. (2000). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, New York: Farrar, Straus and Giroux.

Hopkins, A. (2002). Globalization in World History, New York: W.W. Norton and Company.

Hudson, R. (2003). Terrorist and organized crime groups in the tri-border area of South America, Washington: United States Library of Congress.

Hughes, M. & Miklaucic, M. (2016). Impunity: Countering Illicit Power in War and Transition, Washington: National Defense University.

IATA (2016). World Air Transport Statistics 2016, Montreal: International Air Transport Association.

Irwin, D. (1996). Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade, Princeton: Princeton University Press.

ITU (2017). Measuring the Information Society Report 2017, Volume 1, Geneva: International Communication Union.

James, H. (2016). Nuevo Concepto Vieja Realidad, en Revista Finanzas y Desarrollo, Diciembre, pp. 18-21.

Kaspersky (2017). Kaspersky Lab Registra Más de 1,000 Ataques de Malware en Puntos de Venta Durante los Primeros 8 meses del Año en América Latina, Obtenido de: https://latam.kaspersky.com/blog/kaspersky-lab-registra-mas-de-1000-ataques-de-malware-en-puntos-de-venta-durante-los-primeros-8-meses-del-ano-en-america-latina/11276/

Kenwood, A. & Lougheed, A. (1999). The Growth of the International Economy 1820–2000, London: Routledge.

LaBianca, O. & Schum, S. (2004). Connectivity in Antiquity: Globalization as Long-Term Historical Process, New York: Continuum.

Lambert, N. (2012), Planning Armageddon: British Economic Warfare and the First World War, Cambridge: Harvard University Press.

Liu, X. (1988). Ancient India and Ancient China: Trade and Cultural Exchanges, AD 1–600, Delhi: Oxford University Press.

Luna, D. (2013). Fighting Networks with Networks. En M. Miklaucic, & J. Brewer, Convergence. Washington, D.C.: National Defense University Press.

Makarenko, T. (2002). Terrorism and Transnational Organized Crime: The Emerging Nexus, White Paper, Center for the Study of Terrorism and Political Violence, University of St. Andrews, pp. 1–10.

Mallaby, S (2016). Replantear la Globalización, en Revista Finanzas y Desarrollo, Diciembre, pp. 6-10.

Manning, P. (2005). Migration in World History, New York: Routledge.

Mark, S. (1997). From Egypt to Mesopotamia: A Study of Predynastic Trade Routes, College Station, TX: Texas A & M University Press.

Mazlish, B. (2006). The New Global History, New York: Routledge.

Medina, C. (2012). Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado. En A. Vargas Velásquez, El prisma de las seguridades en América Latina (págs. 139-170). Buenos Aires: CLACSO.

Melo, J. (1998). Drug Trade, Politics and the Economy: The Colombian Experience, en Joyce, E. & Malamud C. (eds), Latin America and the Multinational Drug Trade, New York: St. Martin's Press, pp. 63-96.

Miklaucic, M. & Brewer, J. (2013). Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, Washington: NDU Press.

Miller, J. (1998). The Spice Trade of the Roman Empire, Oxford: The Clarendon Press.

Naím, M. (2013). The End of Power, New York: Basic Books.

Nester, W. (2010). Globalization: A Short History of the Modern World, New York: Palgrave Macmillan

Nye, J. (2017). Will the Liberal Order Survive?, en Foreign Affairs, No. 96. Obtenido de https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-12-12/will-liberal-order-survive.

Obama, B. (2009). Securing Our Nation's Cyber Infrastructure, Washington: The White House.

OEA (2003). Declaración Sobre Seguridad en las Américas, México: Organización de Estados Americanos.

Oehme III, C. (2008) Terrorists, Insurgents, and Criminals: Growing Nexus?, en Studies in Conflict & Terrorism, Volume 31, No. 1, pp.80-93

O'Rourke, K. & Williamson, J. (1999), Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy, Cambridge: MIT Press.

Ospina, C. (2016). Colombia and the FARC: From Military Victory to Ambivalent Political Reintegration?, en Hughes, M. & Miklaucic, M. (eds). Impunity: Countering Illicit Power in War and Transition, Washington: National Defense University, pp.150-169.

Osterhammel, J.; Petersson, N. & Geyer, D. (2005). Globalization: A Short History, Princeton: Princeton University Press.

Picarelli, J. (2006). The Turbulent Nexus Of Transnational Organised Crime And Terrorism: A Theory of Malevolent International Relations, en Global Crime, Volume 7, No.1, pp.1-24.

Rabasa, A.; Schnaubelt, C.; Chalk, P.; Farah, D.; Midgette, G. & Shatz, H. (2017). Counter Network: Countering the Expansion of Transnational Criminal Networks, Santa Monica: RAND Corporation.

Rachman, G. (2011). Zero-Sum Future: American Power in an Age of Anxiety, New York: Simon & Schuster.

Radden, P. (2013). The Geography of Badness: Mapping the Hubs of the Illicit Global Economy, en Miclaucic, M. & Brewer, J. (eds). Convergence: Illicit

Networks and National Security in the Age of Globalization, Washington: NDU Press, pp. 97-111.

RAE. (2017). Obtenido de http://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z.

Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Structures, Newbury Park: Sage Publications.

Robertson, R. (2003). The Three Waves of Globalization: A History of a Developing

Global Consciousness, London: Zed Books.

Schäfer, W. (2007). Global History, en Robertson, P. & Aar, J. (eds.), Encyclopedia of Globalization, Vol. 2, New York: Routledge, pp.516–521.

Serrano, M. (2005). Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional: Cambio y Continuidad, en Berdal, M. & Serrano, M., Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional, México: Fondo de Cultura Económica, pp.27-61.

Serrano, M. & Toro, M. (2005). Del Narcotráfico al Crimen Transnacional Organizado en América Latina, en Berdal, M. & Serrano, M., Crimen Transnacional Organizado y Seguridad Internacional, México: Fondo de Cultura Económica, pp.233-273.

Sherratt, A. (2003). Trade Routes: The Growth of Global Trade, Oxford: Institute of Archaeology.

Stearns, P. (2007). The Industrial Revolution in World History, Boulder: Westview Press.

Stearns, P. (2010). Globalization in World History, London: Routledge.

Stravridis, J. (2013). Foreword, en M. Miklaucic, & J. Brewer, Convergence Illicit Networks and National Security (págs. vii - x). Washington, D.C.: NDU Press.

Sullivan, J. (2002). Terrorism, Crime and Private Armies, en Low Intensity Conflict & Law Enforcement, pp.239-253.

Sullivan, J. (2011). Future Conflict: Criminal Insurgencies, Gangs and Intelligence, en Gilman, N.; Goldhammer, J. & Weber, S. (eds), Deviant Globalization: Black Market Economy in the 21st Century, New York: The Continuum International Publishing Group, pp. 248-260.

Torrijos, V. (2005). Parámetros Colombianos de Seguridad y Defensa: Evolución y perspectivas, en Locarno, G. (ed), Seguridad en Construcción en América latina Tomo II Bogotá: Universidad del Rosario, pp. 393-445.

Torrijos, V. (2012). ¿Castillo de Naipes? Las Organizaciones Terroristas, Su Perdurabilidad y Resiliencia Estratégica: El Caso de las FARC, en Security and Defense Studies Review, Volume 13, pp.63-84

Torrijos, V. & Otálora, J. (2013). Estructuras en Acción: Las FARC-EP como Red de Redes, en Perspectivas Internacionales, Volumen 9, No. 2, pp. 84-119

Torres-Vásquez, H. (2013). La Delincuencia Organizada Transnacional en Colombia, en Dikkaion, Volumen 22, No. 1, pp. 109-130.

UN Consejo de Seguridad. (2012). Informe del Secretario General sobre el Tráfico y los Movimientos Transfronterizos Ilícitos, Nueva York: Organización de las Naciones Unidas.

UNCTAD (2016). Review of Maritime Transport 2016, New York: United Nations Conference on Trade and Development.

UNODC (2010). The Globalization of Crime: A transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna: United Nations Publication.

UNODC (2012). Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, Vienna: United Nations publication.

UNODC (2017). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Vienna: United Nations Publication.

Wallerstein, I. (1980). The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, St. Louis: Academic Press.

Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World- Economy, 1600–1750, Berkeley: University of California Press.

Weimann, G. (2006). Terror on the Internet, Washington: United States Institute of Peace.

Weimann, G. (2016). Going Dark: Terrorism on the Dark Web, en Studies in Conflict & Terrorism, Volume 39, No. 3, pp.195-206.

Weinstein, J.; Porter, E. & Eizenstat, S. (2004). On the Brink: Weak States and US National Security. Washington: A Report of the Commission for Weak States and US National Security.

Williams, P. (2001). Transnational Criminal Networks, en Arquilla, J. (ed.), Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, Santa Monica: Rand Corporation.

Wood, F. (2004). The Silk Road: Two Thousand Years in the Heart of Asia, Berkeley: University of California Press.

Yingshi, Y. (1967). Trade and Expansion in Han China: A Study in the Structure of Sino-Barbarian Relations, Berkeley: University of California Press.

Zeiler, T. (2003). Globalization and the American Century, New York: Cambridge University Press.

Capítulo V

Ocupación de Espacios Vacíos: Una Condición *Sine Qua Non* de la Seguridad Multidimensional en Colombia

Referencias

Álvarez, C. (2017a). Colombia y sus Dos Frentes Marítimos: ¿Una Condición Suficiente para ser Considerado un País Bioceánico?, en Ensayos en Estrategia Marítima, Volumen 3, pp. 23-40

Álvarez, C. (2017b). Geopolítica Vertical y la Urbanización de los Conflictos, en Ensayos en Defensa y Seguridad, Volumen 11, pp. 12-76.

Bahamón, A. (2012). Colombia Geografía y Destino: Visión Geopolítica de sus Regiones Naturales, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada

Bell, G. (2010). Colombia en el Gran Caribe, en Coyuntura Económica, Vol. XL, No. 1, pp. 69-88

Bonet, J. (2008). ¿Por Qué es Pobre el Chocó?, en Viloria, J. (ed.), Economías del Pacífico Colombiano, Bogotá: Banco de la República

Clunan, A. & Trinkunas, H. (2010). Ungoverned Spaces: An Alternative to State Authority in an Era of Softened Sovereignty. Stanford: Stanford University Press.

Cohen, S. (2009). Geopolitics: The Geography of International Relations, Lanham: Rowman & Littlefield.

Collier, P. & Hoeffler, A. (2004). Greed and Grievance in Civil War, en Oxford Economic Papers, No. 56, pp. 563-595.

Delgado, J. (2015). Counterinsurgency and the Limits of State-Building: An Analysis of Colombia's Policy of Territorial Consolidation, 2006–2012, en Small Wars & Insurgencies, Vol. 26, No.3, pp. 408-428

Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", Bogotá: Presidencia de la República.

Echandía, C. (2004). La Guerra por el Control Estratégico en el Suroccidente Colombiano, en Revista Sociedad y Economía, Número 7, pp. 65-89.

Gallo, N. (2015). Fronteras en Colombia: ¿Estratégicas, Amenaza u Oportunidad para la Seguridad y Defensa?, Perry Paper Series No. 2, Washington: Center for Hemispheric Defense Studies.

Gamarra, J. (2007). Economía del Departamento del Cauca: Concentración de Tierras y Pobreza, en Viloria, J. (ed.), Economías del Pacífico Colombiano, Bogotá: Banco de la República

Hazen, J. (2010). War Transitions and Armed Groups, Adelphi Series, Volume 50, N. 412-413, pp. 157-170

Kingsley, M. (2014). Ungoverned Space? Examining the FARC's Interactions with Local Populations in Northern Ecuador, en Small Wars & Insurgencies, Volume 25, No. 5-6, pp. 1017-1038

López, O. (2017). De las Operaciones Sicológicas a la Acción Integral para la Contribución y Apoyo al Desarrollo del Estado, S.E.

Maldonado, A. (2004). Los Municipios de la "Otra Colombia" en la Política de Descentralización, en Revista Opera, Volumen 4, No. 4, pp. 231-284

Meisel, A., Bonilla, L., & Sánchez, A. (2013). Geografía Económica de la Amazonia Colombiana, Cartagena de Indias: Banco de la República.

Menkhaus, K. (2010) State Failure and Ungoverned Space, en Ending Wars, Consolidating Peace, Adelphi Series, 50:412-413, pp. 171-188

Migdal, J. (1988). Strong States and Weak Societies: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton: Princeton University Press

Ostos, M.P. (2011). Aplicación de Modelos Geopolíticos en América Latina: los casos de Brasil y Colombia, en Revista Latinoamérica, México 2011/2, pp. 147-167.

Pardo, D. & Álvarez, E. (2017). Entornos y Riesgos de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización, Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Pérez, G. (2008). Historia, Geografía y Puerto como Determinantes de la Situación Social de Buenaventura, en Viloria, J. (ed.), Economías del Pacífico Colombiano, Bogotá: Banco de la República

Presidencia de la República (2014). Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, Bogotá: Presidencia de la República

Rabasa, A., Boraz, S., Chalk, P., Cragin, K., Karasik, T., Moroney, P., O'Brien, K. & Peters, J. (2007). Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks, Santa Mónica: RAND Corporation.

Romero, J. (2009). Geografía Económica del Pacífico Colombiano, Cartagena de Indias: Banco de la República

Rosales, G. (2012). El Espacio y el Poder, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada

Sachs, J. (2006). El Fin de la Pobreza, Bogotá: Random House

Salas, G. (2010). Corredores y Territorios Estratégicos del Conflicto Armado Colombiano: una Prioridad por Territorializar en la Geopolítica de los Actores Armados, en Perspectiva Geográfica, Volumen 15, pp. 9-36.

Safford, F. & Palacios, M. (2002). Colombia: Fragmented Land Divided Society, Oxford: Oxford University Press.

Serje, M. (2011). El Revés de la Nación: Territorios Salvajes, Fronteras y Tierras de Nadie, Bogotá: Uniandes

Viloria, J. (2009). Geografía Económica de la Orinoquia, Cartagena de Indias: Banco de la República.

Viloria, J. (2013). Comerciantes en Economías de Frontera: El Caso de la Guajira Colombiana, Cartagena de Indias: Banco de la República.

Zartman, W. (1995). Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, Boulder: Lynne Rienner.

Capítulo VI
Respice Aqua Vitae: Hacia una Hidropolítica Nacional

Referencias

AQUASTAT. 2016. Water Withdrawal by Sector, circa 2010. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Alcamo, J., Flörke, M. & Marker, M. (2007). Future Long-Term Changes in Global Water Resources Driven by Socio-Economic and Climatic Changes, en Hydrological Sciences Journal, Volume 52, pp. 247-275.

Allan, J (1999). Avoiding War Over Natural Resources, en Fleming, S (ed), War and Water, Geneva: ICRC, pp.86.

Allan, J. (2001). Virtual Water Economically invisible and politically silent: A Way to Solve Strategic Water Problems, en International Water and Irrigation, November, pp. 39–41.

Allen, L., Cohen, M.,. Abelson, D. y Miller, B. (2011). Fossils Fuels and Water Quality. En The World's Water. Vol. 7, pp 73-96

Álvarez, C. (2016). Colombia y sus dos frentes marítimos: ¿una condición suficiente para ser considerarado un país bioceánico? Ensayos sobre Estrategia Maritima, Departamento Armada. Vol. 3.

Álvarez, C. (2017). Geopolítica Vertical y la Urbanización del Conflicto, en Revista Ensayos sobre Defensa y Seguridad, Volumen 11, pp. 11-48.

Amery, H. (1997). Water security as a Factor in Arab-Israeli Wars and Emerging Peace, en Studies in Conflict and Terrorism, Volume 20, Issue 1, pp.95-104.

Amodio, M. (1999). Los Caníbales Mutantes: Etapas de la Transformación Étnica de los Caribes durante la Época Colonial, en Boletín Americanista, Volumen 49, pp.9-29.

Anderson, E (1988). Water: The next strategic resource, en Starr, J. & Stoll, D. (eds), The Politics of Scarcity: Water in the Middle East, London: Westview.

Andrews, P; Bleischwitz, R; Boersma, T; Johnson, C; Kemp, G. & VanDeveer, S. (2012). The Global Resource Nexus: The Struggles for Land, Energy, Food, Water, and Minerals, Washington: Transatlantic Academy.

Annan, K. (1997). Discurso en Cedar Crest College, Allentown, Pennsylvannia.

Ashton, P. (2000). Southern African Water Conflicts: Are they Inevitable or Preventable?, en Solomon, H. & Turton, A. (eds), Water Wars: Enduring Myth or Impending Reality?, Durban: ACCORD.

Bächler, G. (1994). Desertification and Conflict: The Marginalization of Poverty and of Environmental Conflicts, Berne: Swiss Peace Foundation.

Bahamon, A. (1989). Colombia, geografía y destino: visión geopolítica de sus regiones naturales. Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares.

Barlow, M. y Clarke, T. (2004). Oro azul: las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo. Barcelona: Paidós Ibérica.

Bennet, J. (1974). Water Resources: Anthropological Contributions to the Cultural Ecology, en James, L. (ed), Man and Water, Lexington: University of Kentucky Press.

Boronkay, C. & Abbott, W. (1997). Water Conflicts in the Western United States, en Studies in Conflict and Terrorism, Volume 20, Issue 2, pp.137-66.

Brooks, D. (1994). Watershed: The Role of Fresh Water in the Israeli-Palestinian Conflict, Ottawa: International Development Research Centre.

Candeas, A. (2012). Brasil y Colombia: Vecinos Otrora Distantes Descubren el Potencial de su Relación, en Pastrana, E. (ed), Colombia y Brasil: ¿Socios

Estratégicos en la Construcción de Suramérica?, Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, pp. 283-308.

Cardozo, E. (2015). Fondos y Trasfondos de la Petrodiplomacia, en Economía, Política y Sociedad, Caracas: KAS.

Carvajal, L & De Francesco, H. (2012). Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Calentamiento Global: Significados y Alcances en la Politica Exterior Colombiana, en Jost, S. & Pastrana, E. (eds), Colombia ¿Una Potencia en Desarrollo? Escenarios y desafíos para su Política Exterior, Bogota: Fundacion Konrad Adenauer, pp. 469-518.

Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. (2015). Estudio Prospectivo Suramérica 2025, Buenos Aires: Consejo de Defensa Suramericano.

Central Intelligence Agency. (2012). Global Water Security. Intelligence Community Assessment. Recuperado de https://fas.org/irp/nic/water.pdf

Chapagain, A.; Hoekstra, A. & Savenije, H. (2006). Water Saving Through International Trade of Agricultural Products, en Hydrology and Earth System Sciences, Volume 10, No. 3, pp. 455–468.

Chaturvedi, S. & Doyle, T. (2015). Climate Terror: A Critical Geopolitics of Climate Change, Chennai: Palgrave Macmillan.

Chávez, L. (2016). Conceptos Generales sobre Hidroestrategia, en Uribe, S. (ed.), Estrategia Marítima, Evolución y Prospectiva, Bogotá: Escuela Superior de Guerra, pp.327-352

Clark, W. & Page, J. (1981). Energy, Vulnerability and War: Alternatives for America, New York: Norton.

Clarke, R. (1991). Water: The International Crisis, London: Earthscan.

Cámara Colombiana de la Infraestructura (2015). Plan Maestro de Transporte Intermodal, Bogotá: Ministerio de Transporte.

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. (2011). Estrategia Andina para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Vigésima tercera reunión ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Recuperado de http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201238181959recursos_hidricos.pdf

Consejo Nacional de Políticas y Economía Social (2013). CONPES 3758 Plan para Restablecer la Navegabilidad del Río Magdalena, Bogotá: Imprenta Oficial.

Constitución política colombiana (1991). Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá: República de Colombia.

Contraloría General de la República. (2012). Cerca del 80% de la Minería en Colombia es Ilegal, Obtenido de: http://www.lafm.com.co/noticias/colombia/05-11-12/cerca-del-80-de-la-mineria-en--12

Correa, H., Ruiz, L. y Arévalo, M. (2005). Plan de Acción en Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco 2005-2015, Corporinoaquía, Colombia. Recuperado de https://www.cbd.int/doc/world/co/co-nbsap-oth-es.pdf

DANE (2015). Encuesta Nacional Agropecuaria, Bogotá: Departamento Nacional de Estadistica.

Darwin, J. (2012). El sueño del imperio: Auge y caída de las potencias globales 1400-2000. Santillana Ediciones Generales S. L.

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2014). La Situación Demográfica en el Mundo, Nueva York: Naciones Unidas.

Delage, F. (2011). China y los Países BRIC, en Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Brasil, Rusia, India y China (BRIC): una Realidad Geopolítica, Madrid: Ministerio de Defensa, pp. 81-98.

De Stefano, L.; Edwards, P.; De Silva, L. & Wolf, A. (2010). Tracking Cooperation and Conflict in International Basins: Historic and Recent Trends, en Water Policy, Volume 12, pp. 871–884

DNP (2005). Documento CONPES 3334, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

Díaz, F. (2014). Mercurio en la Minería del Oro: Impacto en las Fuentes Hídricas destinadas para Consumo Humano, en Revista Salud Pública, pp. 947 – 957.

Diehl, P. & Gleditsch, N. (2001). Environmental Conflict, Boulder: Westview Press.

Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life, New York: John Wiley.

Escuela Superior de Guerra. (2016). Estrategia Marítima, Evolución y Prospectiva, Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra.

Elhance, A. (1999). Hydropolitics in the Third World: Conflict and Co-operation in International River Basins, Washington: United States of America Institute of Peace Press.

Falkenmark, M. & Lindh, G. (1993). Water and Economic Development, en Gleick, P. (ed), Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources, New York: Oxford University Press.

FAO (2011). El Estado de los Recursos de Tierras y Aguas del Mundo para la Alimentación y la Agricultura: Cómo Gestionar los Sistemas en Peligro, Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO (2014). Walking the Nexus Talk: assessing the Water-Energy-Food Nexus in the Context of the Sustainable Energy for all Initiative Climate, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Ferguson, N. (2012). Civilización, Occidente y el Resto, London: Random House.

Flemes, D. (2012). Actores Estatales y Regionalismo Estratégico: Brasil y Colombia en el Orden Multipolar, en Pastrana, E. (ed.), Colombia y Brasil ¿Socios Estratégicos en la Construcción de Suramérica? Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, pp. 25-50.

Fornillo, B. (2014). ¿A qué llamamos recursos Naturales Estratégicos? El caso de las Baterías de Litio en Argentina, en Revista Estado y Políticas Públicas. No. 3, pp. 79-89.

Forti, A. (2014). La Defensa y los Recursos Naturales en Suramérica: Aportes para una Estrategia Regional, Buenos Aires: Centro de Estudios Estratégicos de Defensa.

Freeman, K. (2001). Water Wars? Inequalities in the Tigris Euphrates River Basin, en Geopolitics, Volume 6, No. 2, pp. 127-140.

García, M.; Sánchez, F.; Marín R.; Guzmán, H.; Verdugo, N.; Domínguez, E.; Vargas, O., Pannizo, L.; Sánchez, N.; Gómez, J. & Cortes, G. (2001). El Agua, en Leyva, P. (ed.), El Medio Ambiente en Colombia, Bogotá: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, pp. 114 -189.

Gilmartin, D. (2015). Blood and Water: The Indus River Basin in Modern History, Oakland: University of California Press.

Gleick, P. (1998). The World's Water: The Biennial Report on Freshwater Resources 1998-1999, Washington: Island Press.

Gleick, P. (2008). The World's Water: The Biennial Report on Freshwater Resources 2008-2009, Washington: Island Press.

Haddadin, M. (2003). Exogenous Water: A Conduit to Globalization of Water Resources, en Value of Water Research Report Series, No. 12, UNESCO-IHE, pp. 159–169.

Haushofer, K. (2012). Los Fundamentos Geográficos de la Política Exterior, en Clásicos Geopolíticos, Volumen 3, No. 2, pp. 329-336

Hoekstra, A. & Chapagain, A. (2007). Water Footprints of Nations: Water Use by People as a Function of their Consumption Pattern, en Water Resources Management, Volume 21, No. 1, pp. 35–48.

Hoekstra, A. (2009). Water Security of nations: How International Trade Affects Water Scarcity and Dependency, en Threats to Global Water Security, Volume 27, pp. 27-36.

Homer-Dixon, T. (1993). Environmental Scarcity and Global Security, New York: Foreign Policy Association.

Homer-Dixon, T. (1994). Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases, en International Security, Volume 9, pp.5-40.

Homer-Dixon, T. (1999). The Myth of Global Water Wars, en Fleming, S. (ed.), Water and War, Geneva: International Committee of the Red Cross, pp. 10-13.

Homer-Dixon, T. (2000). The Ingenuity Gap, London: Jonathan Cape.

IGRAC (2014). Aplicación Perspectiva Global. Delft: International Groundwater Resources Assessment Center.

Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos. (2010). Doctrina Obama: Percepción Geopolítica y su Aplicación Geoestratégica, en Cuaderno de Análisis, No. 1/10.

IGAC (2015). Diccionario Geográfico de Colombia, Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

IGAC (2016). Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia 2015, Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

IDEAM (2008). Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia, Bogotá: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

IDEAM (2010). Estudio Nacional del Agua 2010, Bogotá: Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales.

IDEAM (2013). Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia. Bogotá: Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales.

IDEAM (2014). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá: Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales.

IDEAM (2015). Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100. Bogotá: Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales.

Kaplan, R. (2013). The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate, New York: Random House.

Klare, M. (2003). Guerras por los Recursos: el Futuro Escenario del Conflicto Global, Barcelona: Ediciones Urano.

Kolars, J. (1993). The Middle East's Growing Water Crisis, en Research and Exploration: Water, Special Issue, No. 9, November, pp.39-49.

Konar, M.; Suweis, S.; Dalin, C.; Hanasaki, N.; Rinaldo, A. & Rodrigues, I. (2011). Structure and Controls of the Virtual Water Trade Network, en Geophysical Research Letters, pp. 1-5.

La República. (2015). La mayor parte de la tierra que es cultivable a nivel mundial está en América Latina. Recuperado de https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-mayor-parte-de-la-tierra-que-es-cultivable-a-nivel-mundial-esta-en-america-latina-2217671

Laverde, E. (1988). La Conquista del Cacicazgo de Bogotá, en Boletín Cultural y Bibliográfico, Volumen 25, No. 16, pp.23-33.

Le Billon, P. (2005). The Geopolitics of Resource Wars, Abingdon: Frank Cass.

Laclette, J. & Zúñiga, P. (2012). Diagnóstico del Agua en las Américas, México D.F.: Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

León, G. (2005). La Cuenca del Río Orinoco: Visión Hidrográfica y Balance Hídrico, en Revista Geográfica Venezolana, Volumen 46, No. 1, pp. 75-108.

Longo, R., y Agosto, P. (2005). Geopolítica de la Triple Frontera, en Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Recuperado de

http://www.geopolitica.ws/article/geopolitica-de-la-triple-frontera/

Mackinder, H. (2010). El Pivote Geográfico de la Historia, en Clásicos Geopolíticos, Volumen 1, No. 2, pp. 301-319.

Maclean, J.; Dawe, D.; Hardy, B. & Hettel, G. (2002). Rice Almanac: Source Book for the Most Important Economic Activity on Earth, Los Baños: International Rice Research Institute.

Marín, R. (2003). Colombia Potencia Hídrica, Bogotá: Sociedad Geográfica de Colombia.

Melendo, J. (2015). El Ártico: un Espacio Frágil entre la Cooperación y la Hegemonía, Documento de Opinión No. 23, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Meisel, A.; Bonilla, L. & Sánchez, A. (2013). Geografía Económica de la Amazonía Colombiana, Cartagena: Banco de la República.

Meissner, R. (1999). Water as a Source of Political Conflict and Cooperation: A Comparative Analysis of the Situation in the Middle East and Southern Africa, Pretoria: Rand Afrikaans University Press.

Ministerio de Defensa Nacional (2015). Política de Seguridad y Defensa Todos por un Nuevo País, Bogotá: Imprenta Oficial.

Ministerio de Transporte Colombia (2015). Plan Maestro Fluvial, Bogotá: Imprenta Oficial.

Moreno, H. (1953). Estudio sobre la Definicion de Algunos Términos Geográficos: Lago y Laguna, en Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia, Volumen XI, pp. 1-14.

Morris, M. (1997). Water and Conflict in the Middle East: Threats and opportunities, Studies of Conflict and Terrorism, Volume 20, Issue 1, pp.1-14.

Novak-Namihas, J. (2011). Las Relaciones entre Perú y Colombia, Lima: Konrad Adenauer.

Ohlsson, L. (1999). Environment, Scarcity and Conflict: A Study of Malthusian Concerns, Göteborg: University of Göteborg.

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. (2010). Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica, X reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica.

Ospina, M. (2008). La Integracion Fluvial de Sur América como parte de la I.I.R.S.A. [Diapositiva]. Recuperado de https://www.oas.org/cip/docs/areas_tecnicas

Pacheco, Y. (2012a). Colombia y su Pretensión de Liderazgo Regional en la Política Ambiental, en Jost, S. & Pastrana, E. (eds), Colombia ¿Una Potencia en Desarrollo? Escenarios y desafíos para su Política Exterior, Bogotá: Fundacion Konrad Adenauer, pp. 543-562.

Pacheco, Y. (2012b). Colombia y Brasil y su Proyección como Potencias Ambientales, en Pastrana, E. (ed), Colombia y Brasil ¿Socios Estratégicos en la Construcción de Suramerica?, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, pp. 473-489.

Pardo, R. (1965). Sebastián de Belalcázar: Al Final las Cadenas y el Oprobio, en Boletín Cultural y Bibliográfico, Volumen 8, No. 12, pp.1810-1813.

Porter, G. (1990). Post-Cold War Global Environment and Security, en Fletcher Forum of World Affairs, Volume 14, No. 2, pp.332-344.

Redclift, M. (1994). Development and the Environmental Crisis: Red or Green Alternatives?, London: Methuen.

Rosales, G. (2005). Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

SAC (2016). Balance de Producción Agrícola, Boletín Informativo, Sociedad de Agricultores de Colombia.

Salman, M. & De Chazournes, L. (1998). International Watercourses: Enhancing Cooperation and Managing Conflict, World Bank Technical Paper 414, Washington: World Bank.

Santos, M. (2010) Apuntes de Estrategia sobre Seguridad y Defensa Nacional, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Schneider, C.; Laize, C.; Acreman, M. & Flörke, M. (2013). How Will Climate Change Modify River Flow Regimes in Europe?, en Hydrology and Earth System Sciences, Volume 17, pp. 325-339.

Shapland, G. (1997). Rivers of Discord: International Water Disputes in the Middle East, New York: St Martin's Press.

Shiklomanov, I. (1999). International Hydrological Programme Database, St. Petersburg: State Hydrological Institute.

Torres, H. (2013). Las Farc y la Guerra de Movimientos 1991-2001: el Caso de las Tomas Guerrilleras a las Bases Militares, Bogotá: Universidad Javeriana.

Turton, A. (1999). Water and Politics in an Africa Context, en Conflict Trends, Volume 5, pp. 24-7.

Turton, A. (2000). Precipitation, People, Pipelines and Power: Towards a Political Ecology Discourse of Water in Southern Africa, en Stott, P. & Sullivan, S. (eds), Political Ecology: Science, Myth and Power, London: Edward Arnold.

Turton, A. & Henwood, R. (2002). Hydropolitics in the Developing World: A Southern African Perspective, Pretoria: African Water Issues Research Unit.

Ulrich, B. (2002). La Sociedad del Riesgo Global, Madrid: Siglo XXI Editores.

UNEP (2012). Global Environment Outlook 5: Environment for the Future We Want, Malta: United Nations Environment Programme.

UNESCO (2003). Agua para Todos Agua para la Vida, París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UNDESA (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision, New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

UN-Habitat (2013). State of the World's Cities 2012/2013: Prosperity of Cities, Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

UN-Water (2014). Water and Energy, New York: The United Nations World Water Assessment Programme.

UN-Water (2015). Water for a Sustainable World, New York: The United Nations World Water Assessment Programme.

UN-Water (2016). Agua y Empleo, New York: The United Nations World Water Assessment Programme.

UN-Water (2017). Aguas Residuales: El Recurso Desaprovechado, New York: The United Nations World Water Assessment Programme.

Uribe, J. (1964). La Población Indígena de Colombia en el Momento de la Conquista y sus Transformaciones Posteriores, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 2.

US Army Corps of Engineers (2005). An Overview of the U.S. Inland Water System, Alexandria: US Army Corps of Engineers.

Van Dijck, P. y Mons, S. (2015). El Gran Canal de Nicaragua, en Un recorrido por Líneas Locales: Aportes para Políticas Públicas en el Sector Rural de Centroamérica, el Caribe y la región Andina, San José: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, pp. 161-178.

Vélez, R. & Simmonds, Ó. (2013). OTCA: el Amazonas en el Horizonte de la Política Exterior Colombiana, en Papel Político, Volumen 18, pp. 343-365.

Vélez, R. (2014). ¿El Ocaso de la Doctrina Monroe? Colombia y Brasil, entre le Norte de Siempre y el Sur Renovado, en Papel Político, Volumen 19, pp. 691-719.

Widstrand, C (1978). Water and Society: Conflicts in Development, Oxford: Pergamon Press.

Willcocks, W. (1917). The Irrigation ot Mesopotamia, London: Spon.

Wolf, A. (1998). Conflict and Cooperation Along International Waterways, en Water Policy, No. 1, pp. 251-65.

Wolf, A (2007). Shared Waters: Conflict and Cooperation, en Annual Review of Environment and Resources, No. 32, Section 3.1–3.29.

WWAP (2014). The United Nations World Water Development Report 2014: Water and Energy, Paris: UNESCO

Yamskov, A. (1994). The Aral Ecological Crisis and its Social Consequences, Moscow: Russian Academy of Sciences.

Capítulo VII
Seguridad y Defensa de las Fronteras: Dos Casos de Estudio

Referencias

Agnew, J. (2005). Hegemony: the New Shape of Global Power, Philadelphia: Temple University Press.

Anderson, M. (1996). Frontiers: Territory and State Formation in the Modern World, Cambridge: Polity Press.

Anderson, B. (1991). Imagined Community, London: Verso.

ANH. (2015). Agencia Nacional de Hidrocarburos. Obtenido de Indicadores y Estrategias de Crecimiento del Sector de Hidrocarburos Colombiano

Appadurai, A. (1996). Sovereignty without Territoriality: Notes for a Postnational Geography, en Yager, P. (ed), The Geography of Identity, Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp. 40–58.

Bierstaker, T. & Weber, C. (1996). State Sovereignty as Social Construct, Cambridge: Cambridge University Press.

Bodin, A. & Scherma M. (2012). As Fronteiras nas Relações Internacionais, en Revista Monções, Volumen 1, No.1, p.5.

Boggs, W. (1940). International Boundaries: A Study of Boundary Functions and Problems, New York: Columbia University Press.

Brasil (1998). Casa Civil da Presidência da República. Constitución Federal de 1988.

Brasil (2004), Superior Tribunal Militar. Decreto presidencial nº 5.144/2004.

Brasil (2012). Política Nacional de Defesa, Brasilia: Ministério da Defesa.

Brasil (2012a). Estratégia Nacional de Defesa, Brasilia: Ministério da Defesa.

Brasil (2012b). Livro Branco de Defesa Nacional, Brasilia: Ministério da Defesa.

Brasil (2017), Casa Civil da Presidência da República. Ley complementaria n°97, de 9 de junho de 1999.

Brasil (2017a). Escritório de Projetos do Exército. SISFRON.

Brunet, E. (2005). Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective, en Geopolitics, Volume 10, No. 4, pp. 633-649.

Cadena, J. (2014). Geopolítica del Caribe: Pérdida de Mar Territorial Colombiano por Acción de la Corte Internacional de Justica, Bogotá: Sociedad Geográfica de Colombia.

Carreras, A. (2002). El Derecho del Mar en tiempos de paz, en Prudentia Iuris, pp.257-290.

Cediel, F.; Restrepo, I.; Marín, M.; Duque, H.; Cuartas, C.; Mora, C. & Muñoz, G. (2009). Geology and Hydrocarbon Potential, Atrato and San Juan Basins, Chocó (Panamá) Arc. Tumaco Basin (Pacific Realm), Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Clarin (2017). La ONU aprobó la ampliación de la plataforma continental argentina, Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/onu-aprobo-ampliacion-plataforma-continental-argentina_0_Hk7E1Ul3l.html

CIJ (2017). Corte Internacional de Justicia, Obtenido de Corte Internacional de Justicia: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/

Colombia (1996). Comando General de las Fuerzas Militares, Manual de Seguridad y Defensa Nacional 1ª. Ed.1996.

Colombia (2016). Comando General de las Fuerzas Militares. MFE 03 – 7. Estabilidad 1ª. Ed.2016

Colombia (2017a). Cancillería. Recuperado el 14 de marzo de 2017 de http://www.cancilleria.gov.co/content/frontera-terrestre-colombia-brasil

Colombia (2017b). Comando General. Plan Estratégico Militar 2030 (PEM-2030)

Colombia (2017c). Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo.

CONVEMAR. (1982). Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, Montego Bay: Naciones Unidas.

COPLA. (2016). Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina. Obtenido de Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_rev/ARG_PR_Resumen_ Ejecutivo_SP .pdf

Coralina (2017). Reserva de Biosfera Seaflower. Obtenido de Coralina: http://www.coralina.gov.co/coralina/ordenacionterritorial/areas/seaflower

Côrtes, M. (2006). As Violações 'Invisíveis' das Fronteiras, en Revista Idéias em Destaque.

David, C. (2008). La Guerra y la Paz: Enfoque Contemporáneo sobre la Seguridad y la Estrategia, Barcelona: Icaria Antrazyt.

De Souza, A. (2005). Guerrilla en la Amazonia: una Experiencia en el Pasado, Presente y el Futuro: La Experiencia del Río Traíra, en Revista DefesaNet, Noviembre.

DHN (2017). Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Brasil. Obtenido de Asuntos Internacionales LEPLAC: https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/ass_leplac.html

El Espectador (2012). ¿Qué pasará con la reserva marina Seaflower? Obtenido de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/pasara-reserva-marina-seaflower-articulo-388216

Fundación Malpelo (2017). Fundación Malpelo Colombia. Obtenido de www.malpelocolombia.org

Gallo, N. (2015). Fronteras en Colombia: ¿Estratégicas, Amenaza u Oportunidad para la Seguridad y Defensa?, Perry Paper Series, No. 2, Washington: William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies.

Gaviria, E. (2000). El Archipiélago de Los Monjes y las Relaciones Diplomáticas con Venezuela: Historia de una Cesión Territorial cuyas Consecuencias siguen Vigentes, en Revista Credencial Historia, Abril, No. 124.

Giddens, A. (1987). The Nation-State and Violence, Cambridge: Polity Press.

Halfar, J. & Fujita, R. (2007). Danger of Deep-Sea Mining, en Science, Volume 316, No. 5827, pp. 934-987.

Holdich, T. (1916). Political Frontiers and Boundary Making, London: MacMillan.

IBGE (2017). Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

IEEE (2011). La Evolución del Concepto de Seguridad, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

IEEE (2014). La Nueva Guerra Híbrida, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

IPS. (2017). Amazonia Azul, la Nueva Frontera de Recursos Naturales en Brasil. Recuperado de: http://www.ipsnoticias.net/2015/04/amazonia-azul-la-nueva-frontera-de-recursos- naturales-en-brasil/

Jones, S. (1959). Boundary Concepts in the Setting of Place and Time, en Annals of the Association of American Geographers, Volume 49, pp. 241–255.

Kahler, M. & Walter, B. (2006). Territoriality and Conflict in an Era of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Kristoff, L. (1959). The Nature of Frontiers and Boundaries, en Annals of the Association of American Geographers, No. 49, pp. 269-82.

Lemon, A. (2001). South Africa's Internal Boundaries: the Spatial Engineering of Land and Power in the Twentieth Century, en Schofield, C. et al. (eds.), The Razors Edge: International Boundaries and Political Geography, London: Kluwer Law Academic, pp. 303-22.

Lyde, W. (1915). Some Frontiers of Tomorrow: An Aspiration for Europe, London: A&C Black.

Macmillan, M. (2003). Paris 1919, New York: Random House.

Maksaev, V. (2001). Depósitos Sedimentarios Autóctonos, Obtenido de Universidad de Chile: http://www.cec.uchile.cl/~vmaksaev/Dep%F3sitos%20autoctonos%20BIF.pdf

MINDEFENSA (2011). Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional

Minghi, J. (1963). Boundary Studies in Political Geography, en Annals of the Association of American Geographers, Volume 53, No. 3, pp. 407–428.

Miranda, N. (2004). Globalização, Soberania Nacional e Direito Internacional. Brasília: R. CEJ.

Miyamoto, S. (2002). Geopolítica do Brasil: algumas considerações. Universidad Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, SE.

Morales, E., Restrepo, J., & Acosta, J. (2009). El Relieve Submarino como Expresión del Control Geológico y Tectónico, en CIOH, Geografía Submarina del Caribe Colombiano, pp. 11- 47.

Newman, D. (2003). Boundaries, en Agnew, J.; Mitchell, K. & Toal, G. (eds.), A Companion to Political Geography, London: Blackwell Publishers, pp.123-138

Nobre, F. (2013). O Processo de Securitização No Subcomplexo Amazônico de Segurança: Explicando as Reações do Brasil frente à Militarização da Colômbia, SE.

OEA. (1956). Conferencia Especializada Interamericana sobre Preservación de los Recursos Naturales. Plataforma Submarina y Agua de Mar. Ciudad Trujillo, República Dominicana: OEA.

OEA (2003). Declaración sobre Seguridad en las Américas, México: Organización de Estados Americanos.

Ohmae, K. (1995). The End of the Nation-State, New York: Free Press.

Orejarena, J., Acosta, J., & Landazábal, E. (2009). Investigaciones recientes, en Dimar-CIOH, Geografía Submarina del Caribe colombiano (págs. 135-143). Cartagena: DIMAR.

Organización Hidrográfica Internacional (2013). Normalización de las Formas de Relieve Submarino (Vols. Publicación B-6). Mónaco: BHI. Obtenido de Publicación Batimétrica No. 6.

Paasi, A. (1996). Territories, Boundaries and Consciousness, Chichester: Wiley.

Paasi, A. (1999). The Political Geography of Boundaries at the End of the Millennium: Challenges of the De-territorializing World, en Esklinen, H. (ed.), Curtain of Iron and Gold: Reconstructing Borders and Scales of Interaction, Aldershot: Ashgate, pp. 9–24.

Patiño, C. (2010), Guerra y Construcción del Estado en Colombia 1810-2010, Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Peattie, R. (1944). Look to the Frontiers: A Geography of the Peace Table, New York: Harper.

Perry, I. (1919). Principles in the Determination of Boundaries, en Geographical Review, No. 7, pp. 201–219.

Pimenta, J. (2009). Povos indígenas, fronteiras amazônicas e soberania nacional: algumas reflexões a partir dos Ashaninka do Acre, en Proceedings from the 61st Annual Meeting of the Brazilian Society for Scientific Progress: Amazon Science and Culture. Round Table: Indigenous Groups in Amazonia. Manaus, Brazil.

PNOEC, Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (Comisión Colombiana del Océano 2017).

Ramutsindela, M. (1999). African Boundaries and their Interpreters, en Geopolitics, Volume 4, No. 2, pp. 180-98.

Rosenau, J. (1997). Along the Domestic-foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World, Cambridge: Cambridge University Press.

Ruiz, D. (2002). Serie "Geopolítica". Análisis 6. La tercera convención de las Naciones Unidas sobre derecho del mar y los límites marítimos de Colombia. Obtenido de Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada: http://www.umng.edu.co/documents/10162/3dcc3ee5-a050-40dc-adda-1e30d6fc9a61

Shepard, F. (1963). Submarine Geology, New York: Harper & Row publishers.

Spykman, N. (1942). Frontiers, Security and International Organization, en Geographical Review, No. 32, pp. 430-445.

Spykman, N. (2008). America's Strategy in World Politics, New Jersey: Harcourt, Brace and Company.

Strange, S. (1996). The Retreat of the State, Cambridge: Cambridge University Press.

Tabares, N.; Soltau, J.; Díaz, J.; David, D. & Landazabal, E. (2009). Características Geomorfológicas del Relieve Submarino en el Caribe Colombiano, en CIOH, Geografía Submarina del Caribe Colombiano, pp. 61-116.

Tarapues, D. (2012). Colombia y Brasil en la Lucha contra el Crimen Transnacional: una Revisión a sus Posturas, Acciones y Estrategias de Seguridad, en Pastrana, E.; Jost, S.; Flemes, D. (eds.), Colombia y Brasil: ¿Socios Estratégicos en la Construcción de Suramérica?, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, pp. 423-453.

Taylor, P. (1993). Political Geography, London: Longman.

Taylor, P. (1994). The State as Container: Territoriality in the Modern World-System, en Progress in Human Geography, Volume18, No. 2, pp.151–162.

Truman, H. (1945). Política de los Estados Unidos Respecto de los Recursos Naturales del Subsuelo y el Lecho Marino de la Plataforma Continental, Washington: Casa Blanca.

Veneziano, M. (Septiembre de 2004). Encuentro Humboldt. Obtenido de http://www.elistas.net/lista/encuentrohumboldt/archivo/indice/973/msg/1015/

Vaughan-Williams, N. (2008). Borders, Territory, Law, en International Political Sociology, Volumen 2, pp. 322-338.

Werdan, L. (2016). El Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras de Brasil (SISFRON): Contribuciones para la Integración Brasil-Colombia, Monografía de Grado, Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, Bogotá: Escuela Superior de Guerra. Colombia.

Wood, D. (1993). The Power of Maps, Routledge: London.

Capítulo VIII
Consolidación Multidimensional del Territorio; hacia un concepto de Seguridad para el Posacuerdo

Referencias

Celi, P. 2015. La Seguridad Multidimensional ante los Actuales Retos de Seguridad: La Seguridad Multidimensional en la Región. En Alda, Sonia & De Sousa, Susana (eds.) La Multidimensionalidad de la Seguridad Nacional: retos y desafíos de la región para su implementación (pp.13-30). Madrid, España. Recuperado en https://issuu.com/s.sofia/docs/la_multidimensionalidad_de_la_segur_700d028bf3e998.

Centro Perry. 2016. Seguridad Multidimensional: Retos Presentes y Futuros en las Américas. Entrevista a Bitencourt, Luís & Blackwell, Adam. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=swAR5qJNPWM.

Crespo, A. & Gurovitz, E. La pobreza como un fenómeno multidimensional. RAE. 2002, vol.1, n.2, pp.02-12. ISSN 1676-5648. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1590/S1676-56482002000200003.

DANE (2017). Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016, Boletín Técnico, Bogotá: Departamento Nacional de Estadística.

Directiva Presidencial 6 de 2011. Diario Oficial de la República de Colombia No. 47.971 de 2 de febrero de 2011. Recuperado de http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2011/47971/dir_presidencia_0006_2011.html

Directiva Presidencial 1 de 2009. Coordinación del Gobierno Nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial. 20 de marzo de 2009. Recuperado de http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Documents/Directiva_presidencial%20_salto_estrategico.pdf.

Fundación Ideas para la Paz. 2011. Balance de la Política Nacional de Consolidación Territorial. Informes FIP. Recuperado de http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/111018fip.pdf.

Mejía, D. & Uribe, M. & Ibañez, A. 2011. Una evaluación del Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM). Colombia: Universidad de los Andes. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/254399528_Una_evaluacion_del_Plan_de_Consolidacion_Integral_de_la_Macarena_PCIM.

Ministerio de Defensa Nacional. 2007. Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD). Colombia: Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/dsp/documentos/politicas_publicas/colombia%202.pdf

Ministerio de Defensa Nacional. 2009. Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM): Concepto y Avances. Colombia: Centro de Coordinación de Acción Integral. Recuperado de http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/200911balc.pdf.

Ministerio de Defensa Nacional. 2011. Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad Social (PISDP). Colombia: Fuerza Aérea Colombiana. Recuperado de https://www.fac.mil.co/recursos_user/documentos/Politica.pdf

Ministerio de Defensa Nacional. 2015. Política de Defensa y Seguridad Todos por un Nuevo País (PDS). Colombia: Dirección General Marítima. Recuperado de https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/atach/politica_de_defensa_y_seguridad_2015-2018_diagramada_feb_17_16.pdf.

Naciones Unidas. El Concepto de Seguridad Humana. Naciones Unidas. Recuperado de http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-humana.

Olguín Ardila, J.I. 2013. En La Macarena. Una cosa será la consolidación territorial en clave de guerra y otra distinta en clave de paz. Revista Arcanos,, volumen 18, pp. 6-19. Recuperado de http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2014/02/000-Revista-Arcanos-18-baja.pdf.

Organización de Estados Americanos (OEA). 2003. .Stein, Abraham. La Secretaría de Seguridad Multidimensional: "Una visión actual de la Seguridad en las Américas". [diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFnvbM2M7XAhWGPN8KHas6Ay4QFgg-MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fsap%2Fpeacefund%2Fworkshops%2FAbrahamStein.ppt&usg=AOvVaw2fuukoHPxOKiRNqZXbasCY.

Spicker, P. 2009. Definiciones de pobreza: doce grupos de significados. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/06spicker.pdf.

WOLA. 2005. El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una Amenaza en Potencia. Un Informe Especial de WOLA. Recuperado de https://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Regional%20Security/past/El%20nuevo%20concepto%20de%20seguridad_lowres.pdf.

Capítulo IX
Convergencia de la Seguridad en Colombia: Terrorismo y Delincuencia Organizada

Referencias

Ahumada, C.; Caballero, A.; Castillo, C.; Ghul, E.; Molano, A. & Posada, E. (2000). Qué Está Pasando en Colombia?: Anatomía de un País en Crisis, Bogotá: El Ancora Editores.

Castro, L. T. (2013). Evolución de la Globalización en Colombia, SE.

Chaya, G. (2012). La Yihad Global, Terrorismo del Siglo XXI, Buenos Aires: Dunken.

Cockayne, J. (2016). Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime, Boston: Oxford University Press.

Comité Interamericano de Derechos Humanos. (2005). Informe Anual Comité Interamericano de Derechos Humanos. Bogotá: OEA.

Orjuela, L. (2000). La Debilidad del Estado Colombiano en Tiempos del Neoliberalismo y el Conflicto Armado, en Revista de Colombia Internacional. Volumen 49, No. 50.

Esparza, N.; Caicedo, K. & Mantilla, A. (2015). Fragmentación y Debilidad del Estado Social de Derecho en Colombia, en Revista Temas, Volumen 3, No. 9, pp. 151-166.

Espitia Cueca, C. (2017). Narcoparamilitares: Sobre Definiciones, Denominaciones, Cifras Oficiales y el Clan del Golfo, Bogotá: Indepaz

Granada, S., Restrepo, J., & Tobón, A. (2009). Neoparamilitarismo en Colombia: una Herramienta Conceptual para la Interpretación de Dinámicas Recientes del Conflicto Armado Colombiano, en Aponte, J. & Restrepo, D. (eds), Guerra y Violencias en Colombia: Herramientas e Interpretaciones, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Guillermo, L. & Rojas, F. (2008). Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile: FLASCO.

Human Rights Watch. (2010). Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, New York: Human Rights Watch.

De La Corte Ibáñez, L. (2013). ¿Hasta qué Punto Convergen el Terrorismo y la Delincuencia Organizada?, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

López, J. (2016). Criminalidad y Terrorismo, Elementos de Confluencia Estratégica, Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Makarenko, T. (2004). The Crime–Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism., en Global Crime, pp. 129-145.

Mason, A. (2000). La Crisis de Seguridad en Colombia: Causas y Consecuencias Internacionales de un Estado en Vía de Fracaso, en Colombia Internacional, Volumen 49, No. 50, pp. 82-102.

Massé, F. (2015). Transformaciones Recientes y Perspectivas de las BACRIM, en Velásquez, A. & García, V. (eds), Seguridad y Defensa en la Transición de la Guerra a la Paz: Reflexiones y Perspectivas, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 17-31.

McDermott, J. (2014). La Evolución de los Urabeños, en InSight Crime. Obtenido de http://es.insightcrime.org/investigaciones/la-evolucion-de-los-urabenos/

Medina, C. (2012). Mafia y Narcotráfico en Colombia: En El prisma de las Seguridades en América Latina, Escenarios regionales y locales, Buenos Aires: CLACSO.

Miklaucic, M. (2013). Convergence Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization, Washington: NDU Press.

Miklaucic, M., & Matfess, H. (2017). Beyond Convergence: World Without Order, Washington: NDU Press.

Neira Fernández, E. (2007). Colombia 40 años 1966-2007, Mérida: Observatorio de Política Internacional.

Patiño, C. (2013). Guerra y Construcción del Estado en Colombia 1810-2010, Bogotá: Debate.

Pérez, B., & Montoya, C. (2013). Las BACRIM después de 2013. ¿Pronóstico Reservado? Informe de Investigación a diciembre de 2013. Recuperado de https://www.scribd.com/fullscreen/264650146?access_key=key-UlkmRfBAft1bTzHyDN0r&allow_share=false&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll

Shultz, R., Godson, R., Hanlon, Q., & Ravich, S. (2011). The Sources of Instability in the Twenty-First Century: Weak States, Armed Groups, and Irregular Conflict. Washington: Air University, pp. 73-94.

Treverton, G.; Matthies, C.; Cunn, K.: Goulka, J.; Ridgeway, G. & Wong, A. (2009). Film Piracy, Organized Crime and Terrorism, Santa Mónica: RAND Corporation

Valencia, G. & Mejía, C. (2010). Ley de Justicia y Paz, un Balance de su Primer Lustro, en Revista Perfil de Coyuntura Económica, No. 15, pp. 59-77.

Wannerburg, G. (2003). Links Between Organised Crime and Al- Qaeda, en South African Journal of International Affairs, Volume 10, No. 2, pp. 77-90.

Capítulo X

FARC y Al Qaeda: Los Elementos de Convergencia entre el Terrorismo y Narcotráfico

Referencias

Arcila, H. (1998). Coca, Guerrilla, Colonización y Narcotráfico en La Macarena, en Revista de la Univerisidad Nacional, pp. 75 - 80.

Bagley, B. M. (1989). Colombia y la Guerra contra la Droga (Vol. 3), Centro de Estudios de Política Exterior.

Brieger, P. (2011). ¿Qué es Al Qaeda? Terrorismo y Violencia Política, Madrid: Capital Intelectual.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad. Resumen. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Pro-Off Set.

Comando General de las Fuerzas Militares. (1996). Manual de Seguridad y Defensa (Primera Edición ed.). Bogotá, D.C, Colombia.

David, C. (2008). La Guerra y la Paz: Enfoque Contemporáneo sobre la Seguridad y la Estrategia (primera edición ed.), Barcelona: Icaria Editorial.

De Jorge, C. A. (2017). Diccionario 2017 - 2018 sobre Terrorismo Islámico (Especial No.1 ed., Vol. 1). (D. Hernández, Ed.) Medellín, Colombia.

De Souza Pinheiro, A. (2006). Narcoterrorism in Latin America: A Brazilian Perspective, Joint Special Operations Univesity, Hurlburt Field: The JSOU Press.

Del Cid Gómez, J. M. (2005). En Busca de un Perfil Financiero del Terrorismo de Al Qaeda y sus Grupos Afines. Obtenido de http://www.ugr.es/~jmdelcid/Financiacion%20Al%20Qaeda.pdf

Echeverría Jesús, C. (2009). La Estrategia Yihadista en Afganistán, UNISCI Discussion Papers, pp. 74 - 85.

European Comission. (2008). Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Obtenido de www.transnationalterrorism.eu

Gilman, N., Goldhammer, J., & Weber, S. (2013). Deviant Globalization, en Miklaucic, M. & Brewer, J. (eds), Convergence: Illicit Networks and National Security in the Age of Globalization,Washington: NDU Press, pp. 3-15.

Hisham Kabbani, S. M. (s.f.). The Islamic Supreme Council of America. Recuperado el 1 de Agosto de 2017, de What is a Fatwa?: http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/44-what-is-a-fatwa.html

Jordán Enamorado, J. (2011). El terrorismo global una década después del 11 – S, en Actores Armados No Estatales: Retos a la Seguriad Global, pp. 131 - 173.

Mackenzie, E. (2010). FARC y Bacrim: Un Frente Común, en Análisis No. 7814, Grupo de Estudios Estratégicos.

Merlos, A. (2006). Al Qaeda. Raíces y Metas del Terror Global, Madrid: Biblioteca Nueva.

Mesa, B. (2014). La Transformación del Yihadismo en el Norte de Mali: De causa Política a Economía Criminal, en UNISCI Discussion Papers, No. 34, pp. 103 - 118.

Migaux, P. (2007). Al Qaeda, en Chaliand, G. & Blin, A. (eds), The History of Terrorism. Fron Antiquity to Al Qaeda, Los Angeles: University of California Press, pp. 314-348.

Molano Rojas, A. (2012). Los Ciclos Globales de Terrorismo, en Molano A. (ed), Terrorismo: Concepto y Fenomenología, Bogotá: Debate, pp. 39 - 70.

Montero, D. (2012). La Silla Vacía. Recuperado el 27 de Junio de 2017, de lo que viven las FARC sin el Secuestro: http://lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683

Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. (2014). Atlas del Impacto Regional del Conflicto Armado en Colombia "Dinámicas locales y regionales en el período 1990-2013" (Vol. Volumen I). Bogotá, D.C., Colombia: Imprenta Nacional.

Observatorio Universidad Jorge Tadeo Lozano. (s.f.). Recuperado el Julio de 2017, de Acciones terroristas de grupos guerrileros y paramilitares en Colombia 1998 - 2010: titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/imagenes/stories/observatorio/acciones%terroristas.pdf

Oficina contra la Droga y el Delito, Naciones Unidas. (2004). Informe Mundial sobre Drogas [Tabla] (Vol. 2: Estadísticas), Publicación de las Naciones Unidas. Recuperado el 19 de junio de 2017, de http://www.unodc.org/pdf/WDR_2004/wdr2004_vol2_spanish.pdf

OpenDemocracy. (2016). La Naturaleza Multidimensional del Problema de las Drogas en América Latina, OpenDemocracy, Recuperado el 22 de Mayo de 2017, de https://search.proquest.com/docview/1781922969?accountid=143348

Organización de los Estados Americanos (2003). Organizacion de los Estados Americanos, Obtenido de Conferencia Especial sobre Seguridad.

Pataquiva, G. (2009). Las FARC, Su Origen y Evolución. UNISCI DIscussion Papers, 154 - 184. Obtenido de https://search.proquest.com/docview/22066415?accountid=143348

Post, J. M. (2007). The Mind of the Terrorist: Psychology of Terrorism form Al Qaeda to IRA, New York: Palgrave MacMillan.

Reinares, F. (2008). El Terrorismo Global: Un Fenómeno Polimorfo, ARI No. 84, Madrid: Real Instituto Elcano, pp. 1-7.

Reyes, A. (1990). La violencia y la expansión territorial del narcotráfico.

Rocha, G. R. (2011). Las Nuevas Dimensiones del Narcotráfico en Colombia (Primera ed.). Bogotá: Oficina de Naciones Unidas Contra las drogras y el delito UNODC. Recuperado el 19 de junio de 2017, de http://www.ispionline.it/it/documents/T.R.Mafie.Rocha.19.11.pdf

Sanderson, T. M. (2004). Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the lines, en SAIS Review, Volume XXIV, No. 1, pp. 49-61.

The Council of the European Union. (27 de Julio de 2013). Council Decision 2013/395/CFSP. Official Journal of the European Union, págs. 57 - 59.

U.S. Department of State. (s.f.). U.S Department of State. Recuperado el Julio de 2017, de Foreign Terrorist Organizations: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). World Drug Report 2015, New York: United Nations Publication.

Capítulo XI
Del Terrorismo al Ciberterrorismo
Referencias

Álvarez, S. (s.f.). Ciberguerra, la Próxima Confrontación, 2do. Foro de Ciberdefensa y Ciberseguridad, Bogotá: Foros ISIS No. 6.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006). Unidos contra el Terrorismo: Recomendaciones para una Estrategia Mundial de Lucha contra el Terrorismo, New York: Naciones Unidas.

Baker, K. (2014). The Waves on Terrorism, SE

Bjorgo, T. (2005). Root Causes of Terrorism, Den Hague: ICTT.

Bruce, G. (2013). Definition of Terrorism Social and Political Effects, en Journal of Military and Veterans Health, pp. 27-30.

CICR, C. (2010). Guerra Informática, CICR. Recuperado el 05 de julio de 2017, de https://www.icrc.org/spa/war-and-law/conduct-hostilities/information-warfare/overview-information-warfare.htm

CICR, C. I. (2015). Terrorismo, CICR. Recuperado el 07 de julio de 2017, de https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/desafios-contemporaneos-del-dih/terrorismo

CISCO. (2016). Informe Anual de Seguridad, San José: Cisco Systems, Inc. Recuperado el 23 de febrero de 2017, de http://www.cisco.com/c/dam/r/es/la/internet-of-everything-ioe/assets/pdfs/annual_security_report_2016_es-xl.pdf

Clarke, R., & Knake, R. (2010). Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It, New York, NY: HarperCollins Publishers

COMPES. (2011). Documento COMPES 3701, Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa, Bogotá: Imprenta Nacional.

Congreso de Colombia. (05 de enero de 2009). Ley No. 1273 de 2009, Bogotá.

CONPES. (2016). Documento CONPES 3854, Política nacional de seguridad digital. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional.

Consejo de la Unión Europea. (2002). Decisión Marco 2002/245/JAI. Luxemburgo.

Consejo de la Unión Europea. (2008). Decisión Marco 2008/919/JAI. Bruselas.

Corte Constitucional. (2012). Sentencia C - 121. Bogotá.

CP, C. (2017). Artículo 343. Bogotá: Imprenta Nacional. Obtenido de http://leyes.co/codigo_penal/343.htm

Daniel Blanco, Reuters y AP. (14 de MAYO de 2017). 200 mil computadoras afectadas y Contando en Histórico Ciberataque. EL FINANCIERO.

Fakhouri, Y. (2014). ¿Qué es el Terrorismo? Un Intento de Ponerle Sábana al Fantasma, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.

Giménez, A.; Salinas, F., & González , J. (2016). Investigación Criminal: Principios, Técnicas y Aplicaciones, Madrid: LID Editorial.

Gutiérrez del Moral, L. (2014). Curso de Ciberseguridad y Hacking Ético, Sevilla: Punto Rojo libros S.L.

Hewlett Packard Enterprise. (2016). Informe de Ciberriesgo 2016. Hewlett Packard Enterprise Development LP. Recuperado el 26 de febrero de 2017, de https://ssl.www8.hp.com/ww/en/secure/pdf/4aa6-4178ese.pdf

Hobbes, T. (1966). El Leviatán, Madrid: Losada.

Jenkins, B. (1975). International terrorism: a New Mode of Conflict, en Carlton, D. & Schaerf, C. (eds), International Terrorism and World Security, London: Croom Helm, pp. 13-49.

Jones, S. & Martin, L. (2008). How terrorist Groups End: Lessons for Countering Al Qaeda, Santa Mónica: RAND Corporation.

Kaplan, F. (2016). Dark Territory: The Secret History of Cyber War. Washington: Simon & Schuster.

Kaspersky. (2017). DON'T GET HELD TO RANSOM! Recuperado el 23 de 05 de 2017, de Kaspersky lab: https://go.kaspersky.com/Anti-ransomware-tool.html

KienyKe. (12 de MAYO de 2017). "Wanna Cry" el virus informático que ataca en todo el mundo. KIENYKE.

La Guerra en la Historia de la humanidad. (s.f.). Material de consulta, Escuela Superior de Guerra. Recuperado el 27 de mayo de 2017, de https://avafp.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_50496_1&content_id=_1450260_1

Laqueur, W. (1977). Terrorism, London: Weinfeld & Nicholson.

Llorens, M. P. (2017). Los Desafíos del Uso de la Fuerza en el Ciberespacio, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen XVII, pp. 785-816.

Ministerio de Defensa Nacional. (2015). Política de defensa y seguridad, Todos por un nuevo país. Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional.

Naciones Unidas. (2003). www.unodc.org. Recuperado el 25 de febrero de 2017, de Guía legislativa de las convenciones, los convenios y los protocolos

universales contra el terrorismo: http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Legislative_Guide_Spanish.pdf

Organización de Estados Americanos. (2002). Convención Interamericana contra el Terrorismo, Washington: OEA

OTAN. (2017). Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. Obtenido de https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=n9wcDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR12&dq=Tallinn+Manual+2.0+on+the+International+Law+Applicable+to+Cyber+Operations&ots=MFSZzwii7R&sig=ocb_xauFTzSjzXCqxQtToEz8iv4#v=onepage&q=Tallinn%20Manual%202.0%20on%20the%20Interna

Rapoport, D. (1979). The Four Waves of Modern Terrorism, pp. 46-73.

SEMANA. (2017). Instituciones y empresas de 100 países afectadas por el ciberataque sin precedentes de escala mundial. REVISTA SEMANA.

Stel, E. (2014). Seguridad y Defensa del Ciberespacio, Buenos Aires: Dunken.

Torrijos, V. (2012). Prólogo: Dimensiones y Tendencias, en Molano, A. (ed), Terrorismo: Concepto y fenomenología, Bogotá: Escuela Superior de Guerra, pp. 3-8.

Ximenes de Sandoval, P. (2014). El FBI acusa a Corea del Norte formalmente del ciberataque a Sony. Recuperado el 6 de Abril de 2017, de El País Internacional: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/19/actualidad/1419009199_719868.html.

Capítulo XII
Seguridad Ciudadana y Código de Policía en Colombia

Referencias

Arriagada, I., & Godoy, L. (2017) . Prevenir o reprimir: falso dilema de la seguridad ciudadana. Repositorio.cepal. Recuperado de Repositorio Digital: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/12203

Arzabal, M. (2017). Los 5 imperios más grandes de la historia según su territorio VIX. Recuperado de VIX: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/56578/los-5-imperios-mas-grandes-de-la-historia-segun-su-territorio

Arzate, J & Velázquez, J. (2017). Seguridad Ciudadana: Visiones compartidas uaemex. Recuperado de uaemex: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/49803

Ávila, A. (2016). Bandas criminales, el riesgo del posconflicto. Fundación Paz & Reconciliación. Disponible en: http://www.pares.com.co/sin-categoria/bandas-criminales-la-amenaza-para-la-paz-2/

Baldwin, D. (2017). The concept of security. Cambridge. Recuperado de Cambridge University Press:https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies/article/the-concept-of-security/67188B6038200A97C0B0A370FDC9D6B8

Barbosa, C. (2016). La primera crisis del petróleo. El Espectador. Recuperado de El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/economia/primera-crisis-del-petroleo-articulo-612415

Bezerra, M. (2017). Desmitificar la violencia: crítica al discurso (técnico) de la seguridad ciudadana. JSTOR. Recuperado de JSTOR: http://www.jstor.org/stable/23075421

Cañas, G. & Enciso, M. (2014). Incidencia criminal de 'los rastrojos' en la actividad minera en el nordeste antioqueño. Universidad Militar Nueva Granada Disponible en: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12982/1/incidencia%20criminal%20de%20%c2%b4los%20rastrojos%c2%b4%20en%20la%20actividad%20minera%20en%20el%20nordeste%20antioque%c3%91O.pdf

Collier, P. (2001). Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones en el diseño político de política. Recuperado de http://www.porticoluna.org/static/archivado6aad.html?archivo=collier4001.

Impresión
Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares
Bogotá - Colombia - 2017

EDICIONES

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
COLOMBIA

esdeguecol

@esdegue

Escuela Superior de Guerra

Escuela Superior de Guerra

Escuela Superior de Guerra

issuu
esdeguecol

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
#Esdegue
Carrera 11 No. 102-50
Conmutador: 620 4066
Bogotá, Colombia
www.esdegue.edu.co

ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009
BUREAU VERITAS
Certification